CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

LA ORALIDAD Y LA INMEDIACIÓN EN EL PROCESO MARÍTIMO PANAMEÑO

Por: Álvaro Cabal D.
Juez Marítimo

A través de este breve ensayo, paso a recoger, lo que en mi experiencia como Juez del Tribunal Marítimo de Panamá y en atención a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Marítimo, he visto como el espíritu de éste en cuanto a la oralidad y la inmediación.

El profesor **Manuel Ossorio y Florit** en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, con prólogo del Dr. Guillermo Cabanellas (Editorial Heliasta S. R. L. Buenos Aires, Argentina 1982) define la "**Inmediación**", como el "... principio de Derecho Procesal encaminado a la relación directa de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. Constituye el medio de que el magistrado conozca personalmente a las partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, ya que todas ellas han de realizarse en su presencia. El tema de la **inmediación** se encuentra íntimamente ligado a la **oralidad** del procedimiento; ya que, cuando es escrito, las diligencias, inclusive la recepción de las declaraciones (testimonios, absolución de posiciones, informes periciales) se suelen practicar ante el secretario judicial, y más corrientemente ante el oficial o ante un escribiente del juzgado."

La definición ofrecida por el eminente jurista Ossorio y Florit, español de origen y argentino por adopción, recopilador de la monumental obra **Enciclopedia Jurídica Omeba**, es oportuna para nuestro ensayo, por cuanto que la misma refiere la inmediación a la prueba y su intimidad con la oralidad, pero también la enlaza -y ello lo resaltamos-, a la "... **relación directa de los litigantes con el juez** ..." y esto es fundamental en nuestra reflexión como veremos más adelante.

La oralidad y la inmediación del juzgador son principios que caracterizan a la jurisdicción marítima panameña, inspirada, como se sabe, en el procedimiento marítimo y del almirantazgo estadounidense, fusionado en el proceso civil federal de ese país, el cual no obstante, preservó su particularidad y autonomía.

El artículo 25 del Código Procesal Marítimo (en adelante CPM), establece que "... el juicio marítimo será fundamentalmente oral, salvo los casos que la Ley disponga expresamente lo contrario"; y el artículo 26 de la misma excerta legal, establece que "... la oralidad del juicio no excluye que las partes o el Tribunal puedan dejar constancia escrita de lo actuado".

La primera parte del artículo 25 del CPM, expresa con claridad, que el juicio marítimo -refiriéndose al proceso en general y a las audiencias en particular- será "**fundamentalmente**" oral, lo que nos indica que esa oralidad, íntimamente ligada con la inmediación, es una nota o característica básica que refleja su espíritu; de allí que esa oralidad e inmediación "**fundamental**", debe acogerse también como una pauta orientadora en la aplicación de las normas procesales dirigidas al objeto teleológico del proceso que, entre nosotros, conforme la norma constitucional, es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial (art. 212 de la Constitución Nacional).

Es así, como la oralidad y la inmediación se constituyen asimismo, en efectivos vehículos para implementar en buena medida, esos otros principios consagrados también en la Constitución panameña (art. 212) de simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos en las leyes procesales, tendientes a procurar llegar de manera expedita a una verdad material más que a un acertamiento meramente formal.

La norma programática del proceso marítimo panameño contenida en el artículo 25 que venimos citando, establece que el proceso será también escrito en aquellos casos en que la Ley así lo disponga expresamente. Este precepto se está refiriendo evidentemente a ciertas actuaciones en el proceso, tales como peticiones, incidentes, excepciones, recursos, etc., en relación a los cuales la

Ley exige expresamente o de ellos se desprende, que deben ser formulados por escrito. Tales son los casos del libelo de demanda y la petición de secuestro; la contestación de la demanda y la reconvención; las excepciones y las nulidades que se aduzcan como cuestiones de previo y especial pronunciamiento, y, fundamentalmente, el recurso de apelación.

Ahora bien, en cuanto al término "oralidad" o la palabra "oral" (que utiliza la norma citada de la ley procesal marítima) en sentido estricto y para propósitos de ubicar el proceso marítimo en si el mismo es un proceso realmente "oral", debe advertirse que en este contexto, del vocablo, desde una concepción más restringida, sería más propio para referirse a los procedimientos sumarísimos, en los cuales, luego de la actuación, prácticamente, lo único que quedará registrado, será la decisión; tales son los casos de procedimientos ante jueces de tránsito en nuestro país, o ante corregidores o jueces nocturnos, en donde se da esa oralidad pura, es decir, son procedimientos "orales" en ese sentido estricto de la palabra.

En su concepción amplia, la oralidad o el juicio oral, como bien señala **OSSORIO** en la obra citada, es: "Aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el juez o tribunal que entiende en el litigio ..." Como quiera que la oralidad del juicio es esencial para la inmediación, nos sigue indicando el connotado autor, "... las pruebas y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador ... y, según muchos autores (criterio al que nos sumamos), la oralidad y la inmediación "... representa una forma esencial para la recta administración de justicia ..."

Si bien la oralidad se destaca como uno de los principios básicos del proceso marítimo panameño referido a la Audiencia Ordinaria, habida cuenta que allí las partes y el juzgador verterán en forma verbal sus argumentos, alegatos y la correspondiente decisión (en muchos casos) respectivamente, será más preciso describir el proceso marítimo como uno basado en audiencias, las que quedan registradas mediante grabaciones magnetofónicas, que luego serán "desgrabadas" en una transcripción, es decir, serán trancritas para ser agregadas a los autos sujetos al escrutinio del superior. Esta ha sido la práctica tribunalicia marítima panameña, sin embargo, no vemos que de la ley expresamente se desprenda que exista la obligación de transcribir todo lo acontecido en las audiencias, aunque sí consideramos que será necesario, por lo menos grabar y que el Tribunal custodie con celo y orden dichas grabaciones, a fin de que puedan obrar en todo momento a disposición de las partes y del juzgador, particularmente, las declaraciones testimoniales y periciales. En este sentido, se reitera el contenido del artículo 26 del CPM en lo de que: "... la oralidad del juicio no excluye que las partes o el Tribunal puedan dejar constancia escrita de lo actuado".

Lo anterior se viene a confirmar, pese a ciertas variaciones de interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia aplicando nociones propias de la Casación Civil que han tendido a escrutar la prueba y los hechos, pese que la Ley procesal marítima establece en su artículo 483 que en el recurso de apelación ante la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (único tribunal de apelaciones marítimas), sólo podrán discutirse cuestiones de derecho no de hecho. Esto es así, a nuestro juicio -me refiero a la norma del artículo 483 del CPM-, porque el a-quo es el que inmedia, no así la Sala Civil como Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, la Corte Suprema, en ciertos casos (muy pocos por cierto), ha seguido una tesis de que si una cuestión de hecho o probatoria incide o se confunde con aspectos sustantivos de fondo, es decir con la cuestiones de derecho medulares en el debate de apelación, podrá revisar los hechos, lo que parece contradecir la norma. Consideramos, no obstante, que en todo caso, tal posibilidad, esto es, de que la Corte revise los hechos, requiere, a nuestro juicio, una reforma legislativa en el sentido de consagrar expresamente tal prerrogativa de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de instancia, únicamente, eso si, cuando exista un claro e inequívoco error en la apreciación de los hechos que haya incidido en lo substancial del fallo apelado, no así un error inocuo o lo que los estadounidenses denominan "harmless error".

Volviendo al aspecto de la oralidad en el proceso marítimo panameño, en la práctica, se dá una forma de esa oralidad -pura-, si se quiere, en los casos de demandas para la ejecución de créditos marítimos privilegiados (o demandas **in rem)**, o bien, cuando se trata de demandas ordinarias (o **in personam**) para prorrogar la competencia del Tribunal a causas de su competencia que surgen fuera del territorio de la República de Panamá (o demandas **tipo quasi in rem**), las que requieren que el bien, objeto de la pretensión (**in rem**) o propiedad del demandado (**quasi in rem**), respectivamente, sea secuestrado, para lo cual la Ley exige, indefectiblemente, la aprehensión física de la cosa objeto del secuestro dentro del territorio de la República de Panamá (doctrina del forum arresti). En estos casos, la Ley exigirá como presupuesto previo para que el juzgador pueda decretar el secuestro, la presentación de **pruebas indiciarias** o **prima facie** que comprueben la legitimidad del derecho pretendido por el demandante/secuestrante, y, la apreciación de dicha prueba **prima facie** (también denominada por la ley "indiciaria") que hace el juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica, será fundamentalmente oral. Sin embargo, en el evento de que el secuestrante/demandante, al ser la prueba prima-facie o indiciaria (con el libelo de demanda y la prueba en manos del Juez) negada o rechazada oralmente por el juzgador, a raíz de tal negativa, el secuestrante pide al Tribunal que deje constancia de la misma, ello se hará a través de una resolución de no admisión del secuestro y de la demanda, porque se ha estimado que hay una carencia de las pruebas prima facie o indiciarias necesarias, o por estimar que las presentadas son insuficientes para decretar la medida.

Esto último, sin embargo, es poco común, dado que cuando el juzgador, ejerciendo la oralidad y la inmediación, advierte al secuestrante/demandante verbalmente, de la insuficiencia o inidoneidad de la prueba indiciaria o **prima facie**, éste, literalmente, se apresura a depurarla o completarla (si ello le es posible), porque de lo contrario, con toda seguridad, la cosa objeto del secuestro, por lo general un buque (o carga o combustible a bordo), zarpará dejando atrás el territorio de la República de Panamá, desapareciendo con ello, uno de los presupuestos indispensables para que proceda la demanda en estos casos, cual es, como hemos visto, el secuestro con la aprehensión física del buque o del bien objeto de la medida cautelar y que daría la competencia del Tribunal en la causa.

La exigencia de la prueba **indiciaria** o **prima facie** en los casos apuntados es importante, por cuanto que no permitirá la interposición de demandas (con secuestros, previa una caución reducida) carentes de sustento o fundamento de cierta consistencia o suficiencia para iniciar la causa ("a right to begin"), sino en base a hechos concretos, conforme el correspondiente derecho, indiciariamente establecidos, para legitimar la acción incoada y el secuestro pedido, es decir, con fundamento sustancial o de fondo acreditados prima facie. Esto permitirá al juzgador, en un estado incipiente del proceso, ir definiendo la controversia, y, el requerimiento de la presentación de la prueba indiciaria o prima facie, en gran medida será un mecanismo tendiente a evitar que el demandante se reserve totalmente, evidencia inicial pertinente al fondo de la causa y así, el juzgador, podrá definir a primera vista la verosimilitud de la acción intentada y la legitimidad o no del derecho reclamado con base a los hechos aducidos.

Por otra parte, la oralidad aplicada en el proceso marítimo a través de las audiencias propias de éste, hace patente, facilita y destaca la inmediación del juzgador; inmediación que se constituye en uno de los pilares de este innovador proceso. Así, esta inmediación, tendrá una connotación amplia, ya que se extenderá más allá de la recepción directa de la prueba por el juzgador, pues el juez, no sólo inmediará al recibir personalmente la prueba, sino que, percibirá, también, personalmente, los alegatos y los argumentos de los litigantes e intercambiará con ellos en las audiencias, para una mejor inteligibilidad del caso en relación con las respectivas posturas de las partes.

Así pues, la inmediación en el contexto apuntado, sin perjuicio de que se puede dar en cuestiones incidentales e interlocutorias, e incluso al momento de presentarse, como hemos visto, los secuestros que requieren de prueba indiciaria, se dará con mayor intensidad, primero, en la audiencia preliminar, en la que,

entre otras cosas, las partes y el Juez, además de simplificar y centralizar la controversia, discutirán y concertarán en cuanto a ciertas situaciones especiales del caso, o se tratarán cuestiones sobre pruebas presentadas o ha ser presentadas en el mismo; se atenderán admisiones que hagan innecesaria la práctica de pruebas que pudieran resultar superfluas en una etapa posterior del proceso y también, se podrá resolver, facilitar o programar, en relación con otros elementos probatorios, tales como las pruebas que se acopiarán o se hayan solicitado mediante el aseguramiento de pruebas ("discovery"). De igual forma, en este acto, las partes limitarán el número de peritos que presentarán en la Audiencia Ordinaria y los temas sobre los cuales éstos dictaminarán, como también otras posibilidades de simplificación de trámites y de economía procesal.

La inmediación, posteriormente, se dará en su máxima expresión, en el acto del proceso marítimo panameño de más relevancia y de mayor representatividad jurisdiccional: la Audiencia Ordinaria -el juicio por excelencia-; un acto concentrado, en donde los litigantes (incluyendo terceros y otros integrantes de procesos acumulados, si los hubiere), volcarán personalmente ante el juez, en audiencia pública, no sólo todo el acervo probatorio que pueda obrar válidadamente en el proceso, sino los argumentos de todos ellos en cuanto a los hechos en relación con la prueba y el derecho, permitiendo al juzgador confrontar a los litigantes con sus posturas en cuantos a los hechos y el derecho, teniendo a mano la prueba recibida directamente, la que proporcionará al juzgador una verdad procesal que lo aproximará con bastante eficiencia a la verdad material del caso.

El juzgador en el acto de audiencia ordinaria, escuchará, de viva voz, no sólo a los testigos y a los peritos aducidos, sino también los alegatos en cuanto a las circunstancias fácticas que giran en torno al caso, en relación con el derecho invocado por las representaciones técnicas de los litigantes. Así, primero, con la audiencia preliminar, el juzgador, en este importantísimo acto preparatorio de la audiencia ordinaria, a través de un método de sentido común, puede lograr, conjuntamente con las partes, simplificar y centralizar el caso, puntualizando los temas o aspectos fácticos y jurídicos medulares en los cuales existan realmente honestas disputas o controversias que incidan en lo sustancial de la litis a desatar, sin que ello implique una renuncia a que se puedan aducir y probar hechos o argumentar cuestiones de naturaleza substantiva (materialidad) en la audiencia ordinaria, conforme el proceso y de acuerdo al derecho objetivo y substantivo aplicable al caso.

En la Audiencia Ordinaria el juzgador recibirá personalmente la prueba y podrá fallar oralmente desde los estrados del Tribunal al concluir los alegatos (también orales) de las partes.

Por las consideraciones anteriores, la oralidad y la inmediación, conforme el espíritu del proceso marítimo panameño, se ha llevado en la práctica al punto de confrontar a los litigantes con las constancias probatorias del proceso (con una verdad procesal o formal, que en el proceso marítimo es más depurada) y que en ocasiones es ignorada por ciertos litigantes o se intenta trastrocar en forma retórica con propósitos de perturbar un correcto razonamiento, pero ello, precisamente por esa inmediación del juzgador, difícilmente pasará desapercibido ni señalado por éste; pues el juez marítimo es un verdadero director del proceso, quien, en la búsqueda de la verdad material -sin prejuzgar- y conforme al procedimiento, puede poner ante tales litigantes los hechos y el derecho y no les permitirá introducir argucias o confusión en el correcto entendimiento de las cuestiones fácticas, o bien, ello le permitirá comprender con claridad los hechos y los argumentos expuestos e incluso rectificar, en un momento dado, cualquier confusión o falta de claridad en la correcta apreciación de la prueba o en relación con la inteligencia del derecho aplicable. La intervención inmediadora del juzgador a través de la oralidad, hará posible que el juzgador se familiarice íntimamente con las cuestiones fácticas y jurídicas controvertidas y medulares, permitiéndole incluso discutir, con fines aclaratorios, como hemos explicado, en un franco intercambio judicial, las tesis y conclusiones en derecho, que exponen las respectivas representaciones técnicas de las partes, sin olvidar y teniendo siempre presente, ese sagrado principio de la neutralidad e imparcialidad.

Lo que venimos exponiendo, es precisamente lo que eficazmente no permitirá al juzgador incurrir en errores de hecho y así, con responsabilidad y diligencia, dar sentido a la norma del artículo 483 del CPM en el sentido de que en la apelación se discutirán únicamente cuestiones de derecho y no de hecho.

Los principios de la oralidad y la inmediación en el proceso marítimo panameño, como hemos venido exponiendo, han logrado introducir en este ámbito jurisdiccional, una positiva innovación y una mayor confianza de los litigantes, que le ven la cara al juzgador, y ven, no sólo su rostro, sino su actividad inmediadora al recibir y apreciar personalmente la prueba ofrecida y los argumentos y alegatos de las partes; y ven también al juzgador indagar y disipar dudas, dándole una faz viva a la administración de justicia, la que los litigantes pueden casi literalmente palpar; robusteciéndose así, como hemos dicho, esos venerables y fundamentales principios de la imparcialidad y la neutralidad del juzgador, facilitándole ejercer la jurisdicción en forma objetiva con miras al reconocimiento de los derechos consignados en el derecho substancial.

Con la anotada ingente labor inmediadora del juzgador marítimo, éste, al culminar los alegatos orales de las partes, conforme el artículo 504 del CPM, puede fallar al concluir los mismos. No obstante, la redacción de esta norma y luego el contenido del artículo 505 del CPM, puede traer confusión, pues la misma no es la más feliz; sin embargo, precisamente con fundamento en los principios de la oralidad y la inmediación enfatizada en el artículo 504 del CPM, podemos dilucidar una correcta inteligencia de la normativa, que permite al Juez Marítimo dictar sentencia al finalizar los alegatos orales, si así lo estima conveniente; es decir, tendrá esa prerrogativa discrecional. Para explicar lo que venimos advirtiendo, es preciso transcribir el contenido de los citados artículos 504 y 505 del CPM, resaltando las frases de las normas que pueden prestarse a confusión; amén del contenido integral de las disposiciones, de donde, a nuestro juicio, hemos aclarado y sentado una diáfana y correcta interpretación que ha venido aplicándose. Veamos:

El artículo 504 es del tenor siguiente:

> "**ARTÍCULO 504:** Al concluir la recepción de pruebas y contrapruebas, el Juez solicitará al demandante o al demandado y a los terceros integrados al proceso que procedan, en su orden, a la presentación de los alegatos orales, **a los cuales pueden renunciar cualesquiera de las partes**. Finalizados éstos, las partes anunciarán al tribunal si desean formular un resumen escrito de los mismos; y deben hacerlo, si el Juez así lo exige. En tales casos, dicho resumen deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a los alegatos orales." (Resaltado nuestro)

El artículo 505 establece:

> "**ARTÍCULO 505:** El juez puede fallar al terminar la presentación de los alegatos orales y notificar la sentencia si las partes renuncian a la presentación de un resumen escrito de sus alegatos orales y si no estimare conveniente hacerlo, así lo declarará.
>
> El Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del resumen escrito de los alegatos orales, o al concluir éstos cuando no proceda dicho resumen por haber renunciado a ellos las partes o no exigirlo el juez y éste no estimare conveniente dictar su fallo de inmediato."

El comentario inicial que podemos hacer a la primera norma transcrita (art. 504) es, que la misma, permite a cualesquiera de las partes (lo que pudiera incluir a todas si así lo manifiestan) renunciar a la presentación de **los alegatos orales**. Nótese que se está refiriendo a los alegatos orales (no a los resúmenes de éstos). Luego la norma dice: "**Finalizados éstos, ...**" (obviamente la norma se está refiriendo a los alegatos orales), "**... las partes anunciarán al tribunal si desean formular un resumen escrito de los mismos**; (es decir, un

resumen escrito de los alegatos orales), refiriéndose, evidentemente, a aquellas partes que no hayan renunciado a los alegatos orales, pues aquellas que lo hayan hecho, mal pudieran presentar un resumen escrito de un alegato que no han expuesto o formulado oralmente (que no han presentado). Luego, la norma continua diciendo: **"... y deben hacerlo, si el Juez así lo exige."** Esta parte de la disposición se está refiriendo al resumen escrito de los alegatos orales, el cual debe hacerse, **"si el Juez así lo exige."** Sin embargo, esto último ("si el Juez así lo exige"), permite -contrario sensus-, que el Juez, a su discreción, no exija tales resúmenes escritos, lo que le permitirá (al Juez) fallar el caso oralmente en la audiencia, pues el artículo siguiente, el 505 del CPM, establece que: **"El Juez puede fallar al terminar la presentación de los alegatos orales y notificar la sentencia ...** (y aquí salta la confusión) **... si las partes renuncian a la presentación de un resumen escrito de sus alegatos orales"** (esta redacción se presta a confusión, pues se está refiriendo al artículo anterior, al 504, y en dicho artículo, a lo que se renuncia, no es al resumen escrito de los alegatos orales, sino a los alegatos orales mismos (como se a visto), **"y ...** (continua y finaliza el primer inciso o párrafo del artículo 505) **... si no estimare conveniente hacerlo** (esto se refiere a dictar la sentencia) **... así lo declarará** (así lo declarará el Juez: declarará que no estima conveniente dictar la sentencia).

No obstante lo anterior, y al ver la confusión que puede crear la redacción del artículo 505, en el sentido de que el Juez únicamente podrá fallar si las partes renuncian a la presentación de un resumen escrito de los alegatos orales (conforme lo antes explicado en relación con el artículo 504), consideramos, no obstante, que el Juez tendrá (como lo establece la norma) la prerrogativa de no exigir resúmenes escritos de los alegatos orales, pues mal puede, reiteramos, resumirse por escrito un alegato (oral) al que se ha renunciado y por tanto no ha sido presentado. En consecuencia, si el juez **no exige** (como preceptúa contrario sensus el artículo 504) un resumen escrito de los alegatos orales, ya las partes no tendrán la prerrogativa para renunciar a los mismos conforme el artículo siguiente: (el 505 del CPM), lo cual permitirá al juzgador dictar sentencia oral de inmediato.

En este orden de ideas y conclusiones, desde el momento en que el Juez, conforme el artículo 504 del CPM, **exige la presentación de resúmenes escritos de los alegatos orales**, se está sometiendo a que éstos se presenten dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a los alegatos orales (parte final del artículo 504 del CPM) y a dictar la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de tal o tales resúmenes escritos de los alegatos orales (inciso segundo del artículo 505 del CPM, siempre y cuando, evidentemente, no se haya renunciado a los alegatos orales). Sin embargo, este segundo y final inciso del artículo 505 del CPM, puede traer cierta confusión adicional, pues se dice nuevamente en esta norma, que el juez puede dictar sentencia al concluir los alegatos orales cuando no proceda dicho resumen por haber renunciado a ellos (a los alegatos orales) las partes, **"o no exigirlo el juez"** (pero agrega la conjunción copulativa (**"y"**) **"... éste** (el Juez) **... no estimare conveniente dictar su fallo de inmediato."** Es decir, pareciera indicar la parte final del artículo 505 del CPM, que el juez puede o no, exigir el resumen escrito de los alegatos **"y"** no estimar conveniente dictar su fallo de inmediato. Sin embargo surge la siguiente interrogante:

¿Qué, si el Juez dentro del supuesto contenido en la parte final del artículo 505 del CPM, contrario sensus, estimare conveniente dictar su fallo de inmediato?

A criterio nuestro, conforme el artículo 504 del CPM, no hay nada que se lo impida, siempre y cuando no haya exigido a las partes la presentación de resúmenes escritos de alegatos orales y huelga reiterar, si se ha renunciado a la presentación o a la formulación de un alegato oral, mal se podría presentar un resumen escrito de algo que no se ha presentado o formulado.

Por lo anterior, es nuestra opinión, que la parte final del artículo 505 del CPM permitirá al Juez -aún en el evento de renuncia de alegatos orales y que

por ello no proceda un resumen escrito de algo a lo que se ha renunciado y aunque no lo exija el Juez-, discrecionalmente, abstenerse de dictar su fallo de inmediato; o bien, podrá dictar la sentencia por sentirse lo suficientemente ilustrado; y si ello fuere así, siempre y cuando no haya solicitado a las partes la presentación de resúmenes escritos de los alegatos orales.

Así pues, conforme los principios de la oralidad y la inmediación, no debe restringirse, limitarse o impedirse al juzgador dictar sentencia oralmente al culminar los alegatos orales de las partes que los hayan tenido a bien formular, si está lo suficientemente ilustrado para ello.

La anterior interpretación de las normas contenidas en los artículos 504 y 505 del CPM prevalece, por cuanto se compadece con los principios fundamentales de la oralidad y la inmediación predicándolos. Además, los alegatos orales de las partes y el fallo oral del juzgador serán transcritos en su totalidad, y la Sentencia, en todo momento, se dictará de conformidad con el artículo 388 del CPM, es decir, constará de una parte motiva indicando los nombres de las partes, expresándose sucintamente la acción intentada y los puntos materia de la controversia (los que se deducirán no solo de los alegatos de las partes que también se transcribirán, sino de la transcripción de la Audiencia Preliminar); se hará una relación de los hechos que han sido comprobados que hubieren sido alegados oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse, haciendo referencia a las pruebas que constan en el expediente y que hayan servido de base al Juez para estimar probados tales hechos, y, en seguida, se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, citándose las disposiciones legales o doctrinales que se consideren aplicables al caso, para concluir con una parte resolutiva indicando la decisión que se adopte con expresión de que ésta se dicta administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

En conclusión, el proceso marítimo panameño será fundamentalmente oral; oralidad que está íntimamente ligada a la inmediación del juzgador, el que, precisamente, por esa inmediación, al recibir personalmente la prueba, los alegatos, argumentos, aclaraciones y explicaciones de las partes, en los términos que hemos expuesto, irá depurando el objeto del proceso, acrisolando la prueba, los hechos y el derecho para llegar a la decisión.

La decantación a la que nos estamos refiriendo, en muchos casos se iniciará con la presentación de la demanda y la prueba prima-facie o indiciaria requerida para decretar el secuestro; luego a través de la audiencia preliminar y fundamentalmente en la audiencia ordinaria y el intercambio que se da en ésta, incluyendo las objeciones que se plantean y resuelven; las preguntas y repreguntas de las partes y del juez a los testigos y los peritos, y, finalmente en atención a las conclusiones jurídicas correspondientes, referidas a los hechos, la prueba y el derechos sustantivo aplicable en ese franco intercambio oral de las partes y el juez. Ello logrará un marco fáctico preciso en el proceso marítimo panameño, que difícilmente permitirá al juzgador errar en cuanto a los hechos, los que, por regla general, quedarán expuestos ante él con claridad y si no, es decir, a falta de prueba que exponga en forma diáfana los hechos, el juzgador podrá optar por aplicar la regla de juicio del proceso marítimo panameño, de que incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas (sustantivas u objetivas) que le son favorables (art. 206 del CPM), lo cual, de la misma manera, quedará reflejado en el proceso y plasmado por el juzgador en el fallo correspondiente.

En base a lo anterior, dada esa inmediación del Juez Marítimo, se justifica la norma contenida en el artículo 483 del CPM, la que establece que en el recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia **"... sólo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia."**

Finalmente, recomendamos que la oralidad y la inmediación en cuestiones de derecho y en cuestiones de hecho (cuando hay un **claro** error de hecho que no sea uno inocuo y que haya incidido en lo sustancial del fallo), sean aplicadas en la sustentación y resolución de la apelación ante la Sala Primera de lo Civil de la

Corte Suprema de Justicia, o por lo menos, sea una opción de la Corte ejerciendo funciones de Tribunal de Apelaciones Marítimas, de manera que pueda resolver el recurso también en forma oral, inmediando en lo pertinente de la apelación.

Así, a petición de parte o incluso a opción exclusiva de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de haber una negativa de cualquiera de ellas al efecto y dependiendo de la complejidad del caso, debe ostentar expresamente la prerrogativa de resolver cualquier petición de alzada en audiencia oral pública y que los Magistrados que integran la Sala, o la mayoría de ellos, si lo estiman conveniente, puedan dictar sentencia en dicho acto o después de un receso. Tal posibilidad, si bien requeriría una reforma legislativa, podría expeditar aún más la efectiva resolución definitiva de muchas disputas marítimas en Panamá.

ÍNDICE

LA ORALIDAD Y LA INMEDIACIÓN EN EL PROCESO MARÍTIMO PANAMEÑO i

PLENO 1

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PEREIRA & PEREIRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PROPACO, S. A., CUYO PRESIDENTE LO ES CELSO A. CABONELL V. CONTRA LA ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LAS NOTAS N° 006-DMS-AL-95, DE 2 DE ENERO DE 1996, N° 19-DMS/DGS/DIS, DE 3 DE ENERO 1996 Y N° 03-DGS-DIS-96 DE 5 DE ENERO DE 1995 (SIC) EXPEDIDAS LAS DOS PRIMERAS POR LA MINISTRA DE SALUD, DRA. AIDA L. MORENO DE RIVERA Y LA TERCERA, POR EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, ING. JORGE E. VILLALAZ P. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS SHIRLEY & DÍAZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE C. FERNIE & CO., S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 3 CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-3 N° 89-95 DE 18 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 3

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSUÉ LEVY LEVY, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 11

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NILKA TOVAR ORTIZ CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 13 DE OCTUBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 12

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. LUIS GUILLERMO CASCO ARIAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CARLOS E. CASTILLO, CONTRA LA ORDEN DE HACER EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS, Y CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 7 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 13

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MAYRA LEZCANO DE RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGAPITO SOLÍS GODOY CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 97 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1994, DICTADA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 14

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE RANGEL FEDERICKSON, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 16

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR BERRÍOS & BERRÍOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE

2 DE ENERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 19

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SANSON, TORRIJOS & ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA DAMARIS MEDINA DE ALVEO Y DEL SEÑOR MELQUIADES ALVEO MONTILLA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO RICARDO NAVARRO JURADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 19

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS CARRILLO, BRUX Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ORO CENTER-GOLD CENTER, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-9 DE 31 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CONCRETOS PANAMEÑOS, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 16 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, ENCARGADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 21

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PATTON, MORENO & ASVAT, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 24

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. IVÁN A. GANTES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ERNEST W. PESCHL CLINTON, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 3 G. C. E. R. DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 28

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS GUERRA, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 24-D. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 30

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO G. EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO FERNÁNDEZ CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N CALENDADA EL 9 DE OCTUBRE DE 1995 DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE COLÓN, SAN BLAS Y DARIÉN. CONTRAPROYECTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 32

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE E. MORA VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO DE BIASE ÁLVAREZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE YAKIMA INTERNACIONAL, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ,

VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. RICARDO VILLARREAL ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENE CHARLES MCGRATH RENAULD, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 30 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

MAGISTRADO PONENTE (ANTERIOR): FABIÁN A. ECHEVERS. EL ORGANO EJECUTIVO CONSULTA LA INEXEQUIBILIDAD DEL PROYECTO DE LEY "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y DEUDA PÚBLICA". CONTRAPROYECTO: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 38

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO COSME IDRYS MORENO EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ SALVADOR RODRÍGUEZ MUÑOZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL DECRETO N° 564 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 48

RECURSO DE HABEAS CORPUS 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELVIRA PRADO CONCEPCIÓN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL RELACIONADO CON DELITOS DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ARTURO CERA RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABELARDO MIRANDA ACOSTA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO EN FAVOR DE RAFAEL AROSEMENA ALVARADO CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENT PORTE, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MARÍA VILLANUEVA TORRES CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 60

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ CONTRA EL FISCAL DÉCIMO DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAR FRANCISCO CASÍS MELO CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AGUSTÍN SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO

SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 69

DEMANDA DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO ÁNGEL MURILLO ARMUELLES CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 71

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIONISIO ÁBREGO CLIABU CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 73

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JENNIFER SINGH MORENO Y CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 75

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 77

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN HORACIO CEDEÑO EN NOMBRE DE BINDO FRÍAS ARCIA, CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE DE LEÓN, CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE FAMILIA Y EL MENOR. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO BÁRCENAS PÉREZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO ENRIQUE ACEVEDO Y ALEXANDER ALMILLÁTEGUI CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 88

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY J. FAARUP M. CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 89

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUCRECIO VARGAS GONZÁLEZ CONTRA DEL FISCAL DE CIRCUITO DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIN WEI CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 97

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS A FAVOR DE NIVALDO MADRIÑÁN APONTE Y CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 98

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO EUCLIDES SORIANO CONTRA EL LIC. HUMBERTO COLLADO CASTILLO DE LA SECRETARÍA DE DROGAS, AGENCIA DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 99

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BALDOMIR KRIZAJ Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 100

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WILSON CÁCERES MOSQUERA, CONTRA EL SUBCOMISIONADO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL (D. I. I. P.), DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 103

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO VÍCTOR CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 103

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELISEO ANTONIO MÁRQUEZ C. CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE MATSEL ANEL MORALES CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 107

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR MAXIMINO MEJÍA ORTEGA A FAVOR DE JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ADAMES CONTRA EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 109

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OLEGARIO DÍAZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 114

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO OMAR RIVAS QUIJADA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 115

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 1996). 116

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CONTRERAS MURCIA CONTRA EL SUBCOMISIONADO DEL DIIP, DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 119

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 120

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA EL ARTÍCULO 762 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN QUE INTERPUSIERA CONTRA EL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 120

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FISCAL SÉPTIMA DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO 469 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994, CORREGIDO POR EL DECRETO EJECUTIVO N° 310 DE 3 DE JULIO DE 1995, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ÁNGEL SANTOS BUITRAGO POR LOS DELITOS DE CONCUSIÓN Y EXACCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 121

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON PARA QUE SE DECLARE INCONSTITUCIONAL LAS FRASES "O CON MUJERES", "LAS MUJERES" Y "Y LOS SIRVIENTES DOMÉSTICOS", CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1246, 1552 Y 1557, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PRESENTADA POR EL LCDO. JORGE COSTARANGOS EN REPRESENTACIÓN DE H. TZANETATOS INC., DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 7 DE 30 DE MARZO DE 1993 DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOUSA, DE SOUSA Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 126

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR DIÓGENES SAGEL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 35 DE 16 DE FEBRERO DE 1989 DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA LA POSTULACIÓN DE GUILLERMO ENDARA GALIMANIY (SIC) PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR LA ALIANZA LLAMADO (SIC) ADO-CIVILISTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 127

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON CONTRA LOS ARTÍCULOS 1007 Y 1008 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 129

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD,INTERPUESTA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE 27 DE AGOSTO DE 1992, DICTADO POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 130

TRIBUNAL DE INSTANCIA 135

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO SUPLENTE CARLOS MUÑOZ POPE DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE E. MORA VALDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO DE BIASE ÁLVAREZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 136

DENUNCIA CRIMINAL CONTRA OSWALDO FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y MARISELA OSORIO, DIRECTORA DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE LESIONES PERSONALES Y DE ENCUBRIMIENTO EN PERJUICIO DE JOSÉ LUIS ARANDA CABALLERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 0SEIS (1996). 137

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ISABEL CORRO RODRÍGUEZ, EN CONTRA DE LOS SEÑORES JUAN B. CHEVALIER, MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y EL LICDO. OSWALDO FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. (ABUSO DE AUTORIDAD, LESIONES PERSONALES Y EXCESIVO USO DE LA FUERZA). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA QUEJA POR DESACATO INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS DOCTORES ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR Y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 138

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 1996, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE MOISÉS DAVID MIZRACHI E IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTILLERO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 139

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL DOCTOR CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN GERMÁN KAHN KATTENBURG, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DENOMINADA AUTOS VARIOS N° 506 DE 16 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DÉCIMO SEGUNDA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 141

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 143

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 144

HUGO ARJONA ARJONA Y REBECA BERAHA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE HUGO ARJONA ARJONA LE SIGUE A REBECA BERAHA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 144

IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MALLOL TAMAYO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA PROPUESTO POR EL BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA L ATELIER, S. A., IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MAYOL TAMAYO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 145

OSVALDO HERAZO DE LOS RÍOS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE

SIGUE TEÓFILA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 146

LA NACIÓN Y HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE URYL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 147

JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANTONIO ESPINO VELÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 148

K. R. M. G., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE DISTINTA JURISDICCIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR K. R. M. G., S. A. CONTRA LA NACIÓN Y EL LICENCIADO GUILLERMO ENDARA GALIMANY (M. P.). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

BRINK S PANAMÁ, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FERRARI INTERNACIONAL (SOCIEDAD EXTRANJERA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 150

PEDRO BONILLA AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A MÁXIMO AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

MARISA GONZÁLEZ REVILLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A CORPORACIÓN DE DESARROLLO HOTELERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 152

JOSÉ AGRIPINO BATISTA GONZÁLEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ELIZABETH BARRÍAS RODRÍGUEZ A FAVOR DEL MENOR JONATHAN ABDIEL BARRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

ERNESTO I. FERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR ELLA I. BORDEN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 156

IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INCOADO POR PATRICO ANTONIO MERELO GONZÁLEZ E IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

FIELDCREST CANNON INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MAY'S ZONA LIBRE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 160

MACANO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A NORA PARRA MIRANDA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 161

FRANCISCO MAYA CAMARENA, AUGUSTO GUERRA Y JUAN DEMÓSTENES GUERRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A ASENTAMIENTO CAMPESINO TODO POR LA PATRIA DE FARFAN O RÍO GRANDE DE SONÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 162

BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK) RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA COADYUVANTE QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR BANCO GENERAL, S. A. CONTRA JOSÉ HERNÁNDEZ ARAÚZ Y BRENDA DELGADO DE HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 166

INVERSIONES JACQUELINE, S. A. Y/O EL CHIC, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE GERMÁN ADOLFO ARROCHA, AMPARO RUIZ DE ARROCHA, JEANINE P. DE WEIL, CARLOS WEIL, ESPERANZA DE MARTÍNEZ, SANDRA M. SANTOS Y ROLANDO SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 167

FINANCIERA LAS TABLAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE A EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 169

PEDRO MORALES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRANKLIN MORALES MORALES. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 170

PEDRO PABLO CABALLERO MORENO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A ISIDRO AGUILAR BARROSO O JOSÉ ISIDORO AGUILAR BARROSO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 173

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE NICOLÁS MADRID CAMPINES A DOMINGO CORTES ESCOBAR Y/O EXPRESO PACÍFICO, S. A., ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 174

EUGENE MC GRATH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MICHAEL ERHART A., HERMAN ERHART Y MILDRED R. JOYCE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 181

BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 182

ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA ORTEGA DE CORRO, FRANKLIN CORRO ARJONA Y CÉSAR CORRO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 203

BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIO QUE INTERPUSO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., (EN ESPAÑOL) INDUSTRIAS INTERNACIONALES DE PESQUERÍA, S. A. Y PHILLIP ALEXANDER ASYN Y SAMUEL ANTHONY ASYN CONTRA BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996. 204

LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA PRECAUTORIA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR LUIS ALBERTO GONZÁLEZ PELLITERO CONTRA AUROPUSCH INTERNACIONAL, S. A., ALFREDO PRIETO BOUZAS, PEDRO ERASMO ORTEGA, HÉCTOR PÉREZ Y NICOLÁS RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 205

RECURSO DE REVISIÓN 206

ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1993, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) CONTRA TIERRAS E INVERSIONES, S. A., ARCITEC, S. A. Y ARCILLAS DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 206

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 209

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 210

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A LUIS ÁNGEL DOMÍNGUEZ BLOISE, SINDICADO POR DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE DAVID ENRIQUE ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 210

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ ANTONIO PÉREZ POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE HÉCTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ. MAGISTRADA. PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 211

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE BERRÍOS & BERRÍOS, APODERADOS DE BANQUE ANVAL, S. A., EN EL SUMARIO SEGUIDO A ESTE ENTE FINANCIERO POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE YAKIMA INTERNACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 215

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICDA. ANA I. BELFON VEJAS, DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MANUEL SIEIRO MURGAS POR EL DELITO DE TORTURA COMETIDO EN PERJUICIO DE NELSON CEDEÑO FRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 217

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JESÚS BARRERA GONZÁLEZ SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE EVA MARÍA HERNÁNDEZ CASTRO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 218

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE CARLOS LUIS BAULE DEAGO, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN Y VENTA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 220

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 221

APELACIÓN DE AUTO DE PROCEDER, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARCO ODERICO BULTRÓN NIETO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JORGE ELÍAS VEGA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 221

PROCESO SEGUIDO A ANTOLÍN CASTILLO RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE SALOMÓN ALMANZA GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. CARLOS HERRERA MORAN CONTRA EL AUTO DE PROCEDER DICTADO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 225

SUMARIAS SEGUIDAS A JOSÉ MANUEL SANTAMARÍA ZORRILLA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN ALBERTO HERRERA JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 228

DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ A., CONTRA EL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO PROFERIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR EN CONTRA DE TEÓDULO PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 231

PROCESO SEGUIDO A TEÓDULO PIMENTEL ROMERO, POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ANDRÉS JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 231

JUICIO SEGUIDO A JULIO QUINTERO MELGAR (A) GUINEO Y ÁNGEL SANTOS ARJONA MENDOZA POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SANTIAGO MARCIAGA QUINTERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 242

AUTO CONSULTADO 247

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL REVERTE OLMOS CONTRA JUAN FRANCISCO CASTILLO, JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DE LA PROVINCIA DE HERRERA, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 247

CONFLICTO DE COMPETENCIA 248

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE JUAN MENDOZA CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DEL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN DEL VEHÍCULO A MOTOR DE PROPIEDAD DE MIGUEL DÍAZ PATERNINA, EN LAS SUMARIAS SEGUIDAS A NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 251

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE LA APREHENSIÓN DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR GILBERTO FLORES, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 253

SENTENCIA APELADA 255

JUICIO SEGUIDO A JOSÉ ANSELMO GABRIEL PADILLA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CECILIO SMITH BROWN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 255

PROCESO SEGUIDO A MIGUEL CÁRDENAS FRÍAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERASTO JULIO FRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 258

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EN PROCESO SEGUIDO A GUILLERMO ANTONIO LINDLEY LAUDEN (A) RONALD PROCESADO POR HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CARLOS

ALBERTO BATISTA LÓPEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (1996). 260

PROCESO SEGUIDO A EFRAÍN RIVERA MACÍAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ASTERIO MURILLO GIRÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 262

JUICIO SEGUIDO A ANACLETO TROYA RIVAS Y AMBROSIO SÁNCHEZ RIVAS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES) EN PERJUICIO DE JUAN GÓMEZ CHIRÚ (OCCISO) Y ANTONIO GÓMEZ (LESIONADO). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 264

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 267

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN QUE SE LE SIGUE AL SEÑOR ALBERT LAILA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 267

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE EXTRADICIÓN DE ALFREDO LÓPEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 267

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE RICAURTER IVÁN VALDÉS SANTAMARÍA, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EUSTAQUIO VILLARREAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 268

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN FORMULADA POR EL LICENCIADO MOISÉS ESPINO BRAVO A FAVOR DE EMILIO FIGUEROA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE BRAULIO BARRÍA ROSARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 270

AUTO APELADO 271

PROCESO SEGUIDO A HORACIO PINEDA AMADOR, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEJANDRO ZURDO ZURDO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 271

APELACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR EL LICENCIADO LUIS H. ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS HERIBERTO ARAGÓN, Y CONTRA DE GUSTAVO ARAÚZ RODRÍGUEZ POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 275

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL 277

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHENG QUINTANA POR EL SUPUESTO HOMICIDIO DE ANTONIO PONZADA LÓPEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 277

RECURSO DE REVISIÓN 281

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAÚL ALFREDO MORENO MELENDE, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE FLORENCIA LAFFO DE ALEGRÍA Y NIMIA OSORIO DE GUAYLUPO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL

FAÚNDES. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 281

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE ENERO DE 1995, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL QUE CONDENA A RAÚL IGNACIO SOSA ABADÍA A LA PENA DE 8 MESES Y 50 DÍAS-MULTA, COMO RESPONSABLE DEL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE FELIPE N. SAAVEDRA V. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 282

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE ALBERTO SÁNCHEZ DELGADO, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

INCIDENTE DE CONTROVERSIA 284

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR EL LCDO. EDUARDO D. CABALLERO APARICIO EN REPRESENTACIÓN DE BÁRBARA ATENCIO Y EN CONTRA DE JOSÉ DANIEL FUENTES VALDÉS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE GENEROSO SANTAMARÍA ATENCIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO DE SUMARIAS SEGUIDAS A PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ, SINDICADO POR HOMICIDIO DE ZAK HERNÁNDEZ Y LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE RONALD TARREL MARSHALL Y OTRO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 290

INVESTIGACIÓN ORDENADA POR EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (ARTÍCULOS 33 DE LA C. N. Y 202 DEL CÓDIGO JUDICIAL). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 290

INCIDENTE 292

INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL MAGISTRADO SUPLENTE DR. CARLOS H. CUESTAS DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR AIDELENA PEREIRA CONTRA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 292

QUEJA 294

QUEJA PRESENTADA POR EL LCDO. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA EN REPRESENTACIÓN DE JOSUÉ LEVY LEVY CONTRA LA JUEZ OCTAVA DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LCDA. MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 294

IMPEDIMENTO 295

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR LA LICDA. AIDELENA PERERIRA, CONTRA EDUARDO BERBEY POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 295

IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LA MAGISTRADA AURA G. DE VILLALAZ EN EL INCIDENTE DE OBJECIONES PROPUESTO EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ

ARIAS SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 296

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, DENTRO DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN QUE SE LE SIGUE A FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 297

TRIBUNAL DE INSTANCIA 297

DENUNCIA INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SEÑORA CLOTILDE ESTHER VERGARA DE AROSEMENA, CONTRA LA LICENCIADA NELLY CEDEÑO DE PAREDES, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 297

QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ EN CONTRA DE JUAN RAMÓN PORRAS, GERENTE GENERAL DEL INTEL, POR DELITO CONTRA EL HONOR, EN PERJUICIO DE GILBERTO PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA G., EN REPRESENTACIÓN DE RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERIO, CONTRA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, MEDIANTE LA CUAL SE NIEGA PETICIÓN DE DESERCIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 300

QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GILBERTO PÉREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AMERICAN TELEPHONE & FAX (AT&F), EN CONTRA DEL DR. JUAN RAMÓN PORRAS, GERENTE GENERAL DEL INTEL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 300

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE LIBERTAD A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHENG QUINTANA SINDICADO POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, SECUESTRO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BOLÍVAR ECHEVERRÍA Y MARCOS RESTREPO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 302

DENUNCIA PRESENTADA POR EDUARDO SILVESTRE LUGO CONTRA CHIRSTIAN V. ARHEINTER POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS; ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PÚBLICO; VIOLACIÓN DE SELLOS, Y SUSTRACCIÓN EN OFICINAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 303

PENALIZACIÓN IMPUESTA AL LICENCIADO RODRIGO MIRANDA MORALES, POR INCURRIR EN ULTRAJE Y GRAVE FALTA CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 305

QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, A FAVOR DE GATEWAY COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION, EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL DEL INTEL, DR. JUAN RAMÓN PORRAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 306

DILIGENCIA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO ENTRE EL LCDO. JOSÉ AGUSTÍN DELGADO PÉREZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA Y EL SEÑOR ALDO GABRIEL

WHITEHEAD BAZÁN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 308

QUERELLA PRESENTADA POR EL LCDO. LUIS A. VÁSQUEZ, EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL DEL INTEL, DR. JUAN RAMÓN PORRAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 310

QUERELLA INTERPUESTA POR JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS ROJAS, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, FORTUNATO MANGRAVITA, RICARDO BLAS MANGRAVITARA, ULISES PITTÍ Y OTROS POR LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE QUE FUERA VÍCTIMA POR MÁS DE 48 HORAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 312

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO ENTRE EL FISCAL SUPERIOR, CRISTÓBAL ARBOLEDA Y LOS SEÑORES IGNACIO CARRERA Y LEONARDO LEMUZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 314

DENUNCIA PRESENTADA POR LUIS ANTONIO CÁRDENAS MEDINA CONTRA DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 713 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA MINISTRA DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE GIANELLA DEL CARMEN CARREIRO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 24-95-F. DE C DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 1, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ENITH ESTHER ARAÚZ ALMENGOR, EN REPRESENTACIÓN DE GERARDO VILLAGRA MORA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, RESULELTO N° 0081 DE 3 DE MARZO DE 1995, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MARINOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 322

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° GG-26-95 DE 16 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 323

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA DE GASES

INDUSTRIALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4550 DE 9 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR EL TESORO MUNICIPAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 326

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TAPIA, LINARES Y ALFARO, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA VIOPAG, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 8549-93 JD DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 329

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. ADEMIR MONTENEGRO EN REPRESENTACIÓN DE ADELIA C. DE CARDOZE, PARA QUE SE DECLARE NULA LA RES. N° 4/95 DE 17 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BOLOS DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA SEIS (1996). 335

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. TOMÁS TRISTÁN BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CRISTINO CORRALES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 026 DE 7 DE MARZO DE 1994, EXPEDIDA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 337

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE COTTER & COMPANY PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 261 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1990, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 338

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA NURCY PERALTA NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN CASTRO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO N° 552 DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 344

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MAXIMINO ALEJANDRO HIDALGO ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME ALBERTO MITROTI QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 60 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1994, PROFERIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 346

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL RODRÍGUEZ C., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 124 DE 29 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 351

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTEBLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N°

204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 353

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS MANUEL MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELECTRÓNICA STANDARD, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, EL RESUELTO N° 408-93 DE 9 DE DICIEMBRE DE 1993, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 354

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERIC E. PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO JAVIER CHIU, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° DRH-539 DE 14 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 358

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS J. GEORGE B., EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA AGUIRRE DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3575 DE 19 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 359

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA MARTIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 95-06-0008 DE 23 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 360

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ANALIDA ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 361

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LUSVI HIDIS NIETO TROYA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 363

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA TERESA ESCOBAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL OFICIO N° 1062-94 DE 21 JULIO DE 1994, EMITIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL OFICIO N° 95-253 DE 27 DE ENERO DE 1995, SUSCRITA POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 365

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARELLANO, CHALHOUB & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JESÚS PIZARRO

MIRONES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 48-95 DE 24 DE ABRIL DE 1995, DICTADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 368

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EUFROSINIO TROYA TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE FRANKLIN JURADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 024-95 DE 14 DE MARZO DE 1995, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LOS CASINOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 370

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARSENIO GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE ALFONSO BÓSQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20 DE 7 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 371

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. EDUARDO LOMBANA ACHURRA, EN REPRESENTACIÓN DE FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES PARTE DEL ARTÍCULO 5° Y EL ARTÍCULO 6° DEL DECRETO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 372

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE HOMAB, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 052 DE 26 DE ABRIL DE 1994 Y LA RESOLUCIÓN N° 107 DE 28 DE JULIO DE 1994, EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 373

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. DEMÓSTENES VERGARA ROSANÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN PANAMEÑA DE AJEDREZ (FEPA) Ó FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FENAP), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 59-94 D. G. DE 11 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 376

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS LEOTEAU RUIZ PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 378

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE OLGA MARTÍNEZ, Y PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 1061-94 DE 21 DE JULIO DE 1994, SUSCRITA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y LA NOTA N° 95-230 DE 25 DE ENERO DE 1995, EMITIDA POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 379

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO CARLOS ALBERTO JAIME DE FREITAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MANUEL SÁNCHEZ VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 43 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1994 Y N° DG-017 DEL 2 DE FEBRERO DE 1995, EXPEDIDAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 382

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ZAMBRANO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 24 DE 14 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 384

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ, AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD PRESENTADA EL 27 DE JUNIO DE 1994 (TÍTULOS PRESTACIONALES), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE MIRATEX, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 214-04-0187 DE 16 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN, ACTOS CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 387

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, EN REPRESENTACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-060 DE 7 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 388

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALCIBIADES GOVEA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 27 DEL MES OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE HERRERA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 389

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARDS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 76-95 DE 17 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR EL COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 390

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. GIOVANI A. FLETCHER, EN REPRESENTACIÓN DE GILMA Y. REYES N. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE SALUD DE PARQUE LEFEVRE DE 1995-1996, EMITIDO POR

EL DIRECTOR MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD DE PARQUE LEFEVRE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO N° 232-94 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE EXPRESO VERAGÜENSE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 45 DE 9 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 406

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 203 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 408

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE GUSTAVO ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE OFICIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 1993, POR MEDIO DE LA CUAL SE ELIGIÓ COMO COMANDANTE PRIMER JEFE, A CHRISTIAN ARNHEITER. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 409

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO N° 232-94 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 410

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL QUIRÓZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AGUSTÍN R. PÉREZ SILVA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° 108, DE 31 DE MARZO DE 1995, EMITIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 411

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARAR QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 14 DE 3 DE MARZO DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 413

JURISDICCIÓN COACTIVA 415

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME DELGADO ANGUIZOLA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ZONA DE CHIRIQUÍ, A FRUTAS PANAMEÑAS, S. A.(FRUPASA) E INGEMAR LUNDBERG. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 415

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA GALVÁN Y GALVÁN EN REPRESENTACIÓN DE LA FUENTE DEL CHASE, S. A. CONTRA EL AUTO N° 317-94 DE 11 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDO POR EL JUZGADO EJECUTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO ENTABLADO POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A LA SOCIEDAD LA FUENTE DEL CHASE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 416

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. RODOLFO AGUILERA FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE LIBRERÍA RUBYL, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL-CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 420

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, DEL DOCUMENTO (LETRA DE CAMBIO) Y DE ILEGALIDAD DEL TÍTULO (LETRA DE CAMBIO), INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOAQUÍN ANTONIO GÓMEZ ARANDA, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE ALBERTO AGRAZAL VALDERRAMA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS (I. F. A. R. H. U.). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 423

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA LOLA BLAISDELL NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA EL FARO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, A INVERSIONES EL FARO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 425

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 426

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, INCOADA POR EL LCDO. GONZALO LAGUNA POLO, DENTRO DEL RECURSO LABORAL INTERPUESTO EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS VALDIÉS HAWKINS, CONTRA LA SENTENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO EN EL PROCESO LABORAL: MARCOS VALDIÉZ HAWKINS -VS- OSCAR GRANALD Y/O ROSA DE GRENALD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 426

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ÁLVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE CLEMENTE GUTIÉRREZ Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE ENERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CLEMENTE GUTIÉRREZ Y OTROS -VS- TIPER, S. A., CONSTRUCCIONES ALFA Y CANTERA EL PUENTE S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 427

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. GASPARINO FUENTES TROESCHT, EN REPRESENTACIÓN DE SANTA ELENA (ANDY ELENA, S. A.) CONTRA LA SENTENCIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BANANERA SANTA ELENA (ANDY ELENA, S. A.) -VS- JOSÉ MARÍA OLMOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 431

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ARISTIDES YANIS, CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE ENERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARISTIDES YANIS -VS- SINDICATO DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO (SICOTRAC). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 435

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS 436

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE ROBERTO MEDINA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ORDEN DADA 30 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR INSTITUCIONAL DE PANAMÁ ESTE DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 436

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RIGOBERTO VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA GISELA MONTENEGRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 104 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 439

IMPEDIMENTO 439

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE CEMENTO PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° A. C. R. P. 587-92 S/F, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 439

TRIBUNAL DE INSTANCIA 441

PETICIÓN DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD Y VALOR LEGAL DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (PAGO DE VACACIONES A TODOS LOS LEGISLADORES DEL PERÍODO 1989-1994). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 441

DEMANDA DE PERJUICIOS, INTERPUESTA POR EL LCDO. SAMUEL E. MARÍN, CONTRA EL MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, LCDO. NELSON RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 451

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 454

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 455

NILKA BERTILDA CASTILLO GONZÁLEZ, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DECRETADA POR LA CORTE SUPERIOR, SECCIÓN DE DIVORCIO, DE LA CIUDAD DE MONTREAL, PROVINCIA DE QUEBEC, CANADÁ, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A NILKA CASTILLO GONZÁLEZ Y EUSTIQUIO BARRIOS ZAMBRANO DE FECHA 22 DE MAYO DE 1980. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 455

ZOILA EDILMA TAPIA DE PUTNAM, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE ALASKA, TERCER DISTRITO JUDICIAL EN ANCHORAGE, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA A RAYMOND D: PUTNAM. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 456

REYNALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DE FECHA 24 DE MAYO DE 1993 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, CIUDAD DE LA HABANA

CUBA, DONDE SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE EL SEÑOR REYNALDO RODRÍGUEZ Y LA SEÑORA DIGNA ANDREA MONTESINO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 458

EXHORTOS 460

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL COMERCIAL DEL CANTÓN, DE ZURICH, SUIZA DENTRO DE LA DEMANDA CIVIL DE NOTIFICACIÓN CONTRA LA COMPAÑÍA OUT OF ITALY, S. A. C/O QUIJANO Y ASOCIADOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 460

TRIBUNAL DE INSTANCIA 462

VÍCTOR MC FERNAN Y PEDRO NOLASCO JARAMILLO, INTERPONE DENUNCIA EN CONTRA DEL LICENCIADO MAXIMINO MEJÍA POR FALTA A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 462

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR CRISTINA CINIGLIO DE VICENTI CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 201-95 DE FECHA DE 5 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO DE LO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 468

ACUERDO N° 51 473

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

FEBRERO 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PEREIRA & PEREIRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PROPACO, S. A., CUYO PRESIDENTE LO ES CELSO A. CABONELL V. CONTRA LA ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LAS NOTAS N° 006-DMS-AL-95, DE 2 DE ENERO DE 1996, N° 19-DMS/DGS/DIS, DE 3 DE ENERO 1996 Y N° 03-DGS-DIS-96 DE 5 DE ENERO DE 1995 (SIC) EXPEDIDAS LAS DOS PRIMERAS POR LA MINISTRA DE SALUD, DRA. AIDA L. MORENO DE RIVERA Y LA TERCERA, POR EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, ING. JORGE E. VILLALAZ P. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Pereira & Pereira, actuando en nombre y representación de PROPACO, S. A., ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra las órdenes de hacer emitidas por la Ministra de Salud y por el Jefe de la División de Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Salud.

En la demanda se solicita que se revoquen las órdenes contenidas en las Notas N° 006-DMS-AL-95, de 2 de enero de 1996, N° 19-DMS-DGS-DIS, de 3 de enero de 1996, y N° 3-DGS-DIS-96 de 5 de enero de 1996, expedidas las dos primeras por la Ministra de Salud, Doctora Aida L. Moreno de Rivera, y la tercera, por el Jefe de la División de Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Salud, Ing. Jorge E. Villalaz P.

El Pleno de esta Corporación observa que la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible. En primer lugar, se aprecia que la parte demandante, de fojas 33 a 39 del expediente, aporta escrito mediante el cual la firma forense Pereira & Pereira, actuando en representación de Celso A. Carbonell V., Presidente de PROPACO, S. A., presenta recurso de reconsideración (el cual no ha sido resuelto), contra la Nota 060/95-AL de 13 de diciembre de 1995, emitida por el Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Inversión de los Ministerios de Salud y Educación, por medio de la cual se le "comunica al contratista **PROPACO, S. A.**, que, en su lugar el Ministerio de Salud, beneficiario y dueño, `**asumirá la inspección de la obra** , lo cual significa, explícitamente, la resolución administrativa del Contrato N° 1-1-14-93" para la Inspección y Supervisión de la Construcción del Hospital San Miguel Arcángel, ubicado en el Distrito de San Miguelito.

De lo anterior se colige que existe un recurso pendiente sobre el tema que se debate en la demanda, por lo que estima la Corte que no se han agotado los presupuestos ordinarios necesarios para que pueda ser admitida una demanda de amparo de garantías constitucionales contra una resolución judicial, según lo que dispone el artículo 2606 del Código Judicial.

En segundo lugar, se observa que estamos ante un típico acto administrativo que debe ser impugnado primero dentro de la vía gubernativa y, una vez agotada ésta, ante la jurisdicción contencioso administrativa que se encuentra radicada en la Sala Tercera de esta Corte Suprema de Justicia. Ha dicho el Pleno en múltiples ocasiones que los actos administrativos deben impugnarse, en la vía gubernativa en la cual existen remedios procesales eficaces y luego ante la citada jurisdicción contencioso administrativa, ya que ésta es la justicia especializada para el juzgamiento de estos actos. El proceso de amparo no es el medio para la impugnación de los actos administrativos.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por la firma forense Pereira & Pereira, actuando en nombre y representación de PROPACO, S. A., contra las órdenes de hacer emitidas por la Ministra de Salud y por el Jefe de la División de Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Salud.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA

Por considerar que la presente acción de amparo debió ser admitida, expreso mi inconformidad con la decisión de mis colegas.

Se aprecia claramente que el amparo fue interpuesto en razón de que a pesar de que la resolución administrativa del Contrato no estaba ejecutoriada, ya que contra dicha resolución administrativa se interpuso un recurso de reconsideración, se ejecutó la mencionada resolución administrativa del contrato, en abierta violación del artículo 68 A) numerales 4 y 6 del Código Fiscal.

> "Artículo 68 A): La resolución administrativa del contrato se ajustará al procedimiento establecido en este artículo, con sujeción a las siguientes reglas:
> ...
> 4. Contra la decisión que impone la resolución del contrato, se admite el recurso de reconsideración, el cual agotaría la vía gubernativa.
> ...
> 6. La decisión que ordena la resolución administrativa del contrato sólo podrá ejecutarse cuando se encuentre ejecutoriada. ..."

El administrado tampoco podía recurrir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, porque la decisión del recurso estaba pendiente, como lo reconoce la decisión de la Corte que no admite la acción de Amparo. Por tanto no se había agotado la vía administrativa.

Por las razones expuestas, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS SHIRLEY & DÍAZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE C. FERNIE & CO., S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 3 CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-3 N° 89-95 DE 18 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense **SHIRLEY & DÍAZ**, actuando en su calidad de apoderada judicial de **ROY WILLIAM NEWALL** quien ostenta la representación legal de la sociedad **C. FERNIE & CO., S. A.**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra de la orden de hacer contenida en la sentencia de 18 de octubre de 1995 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 3.

En la referida sentencia se declaró injustificado el despido sufrido por el señor **JOAQUÍN RUIZ** y se condenó a la empresa antes mencionada al pago de la indemnización señalada en el artículo 225 del Código de Trabajo, salarios caídos, costas, gastos y recargos legales. El Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección de Panamá, procedió a ejecutar la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión, decretando formal embargo contra la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.** hasta la concurrencia de diecisiete mil novecientos veinticuatro balboas con setenta y dos centésimos.

Las razones invocadas por el amparista para fundamentar la supuesta conculcación de las garantías constitucionales a la empresa **C. FERNIE CO., S. A.**, se centraron de manera medular en el argumento de que el representante legal de la empresa no fue notificado personalmente de la demanda presentada y de la fecha de Audiencia respectiva, sino a través de un **edicto emplazatorio** sin cumplir con los rigores de la **notificación personal**, y la sentencia proferida fue notificada a un defensor de ausente, lo que ha impedido a la empresa **C. FERNIE CO., S. A.** poder ejercer plenamente su derecho de defensa en este proceso, vulnerándose la garantía constitucional del debido proceso legal, así como los artículos 17, 18, 44, y 73 de la Constitución Nacional.

Acogida la demanda, se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado, quien mediante Oficio N° 11-96 calendado 17 de enero de 1996, informó a esta Superioridad la imposibilidad de rendir un informe de conducta en este caso, toda vez que el expediente laboral **JOAQUÍN RUIZ** contra **C. FERNIE & CO., S. A.**, había sido remitido al Juez Cuarto Seccional de Trabajo para la ejecución de la sentencia.

Posteriormente, mediante Oficio N° 15-96, y siguiendo instrucciones del Magistrado Sustanciador del negocio, fue remitido a esta Superioridad el expediente en comento, en fecha de 22 de enero de 1996.

Ante la ausencia de un informe de conducta que permita al Tribunal examinar el fundamento de la actuación de la Junta de Conciliación y Decisión en este caso, procedemos a repasar íntegramente los hechos que dieron origen a la controversia constitucional planteada.

ANTECEDENTES

El día 12 de agosto de 1993, el señor **JOAQUÍN RUIZ** presentó ante las Juntas de Conciliación y Decisión, una demanda por despido injustificado contra la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.** La demanda en comento quedó posteriormente radicada en la Junta de Conciliación y Decisión N° 3.

El 15 de abril de 1994 la demanda fue admitida, corriéndosele traslado a la empresa demandada y en el mismo acto se señalaba fecha de audiencia para el día 22 de junio de 1994.

A foja 11 del expediente laboral reposa certificación del intento de notificación al representante legal de la empresa demandada el día 16 de junio de 1994, sobre la demanda interpuesta en su contra. Tal intento resultó infructuoso, toda vez que la secretaria del señor **RODOLFO ALFONSO WRIGHT** comunicó al notificador que el prenombrado se encontraba fuera de la oficina por una semana.

El apoderado legal de la parte actora solicitó en consecuencia, la fijación de una nueva fecha de audiencia, a lo cual se accedió, asignándose para el día 2 de septiembre de 1994 la celebración de la misma.

Según se desprende de las constancias que reposan en autos y de las certificaciones signadas por el notificador de la Junta de Conciliación visibles a foja 16-17 del expediente, sólo se intentó en dos oportunidades (20 de agosto y 21 de agosto de 1994) notificar al señor **WRIGHT** de la nueva fecha para la audiencia, que había sido pospuesta en principio porque no había podido notificársele de la misma.

La notificación personal no fue posible en estos dos intentos, en vista de que la secretaria del prenombrado informó que el señor **WRIGHT** no se encontraba en su oficina.

Posteriormente, y habida cuenta que tampoco se había logrado concretar la notificación de la nueva fecha de audiencia a la parte actora, la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 fija por tercera vez, una nueva fecha de audiencia, para el día 14 de junio de 1995 (cfr. foja 21 del expediente laboral).

A foja 25 del expediente laboral reposa un informe signado por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N° 3, indicando que la notificación de la fecha de audiencia a las partes no había sido posible, por lo que se fija una cuarta fecha de audiencia, para el día 11 de octubre de 1995. En idéntico escrito, visible a folio 30 del expediente, la Presidenta de la Junta de Conciliación reitera, el día 4 de octubre de 1995, la imposibilidad de notificar a las partes de la fecha de audiencia, razón por la cual se fija el día 18 de octubre de 1995 como nueva fecha para la celebración de la audiencia.

En este punto resulta mandatorio subrayar que en el expediente laboral sólo reposan (cfr. fojas 19-26) los intentos por notificar a la parte demandante del cambio de fecha para las audiencias, más no así gestión alguna destinada a poner en conocimiento de la parte demandada la nueva fecha para la celebración de las mismas.

Según consta a foja 31 del expediente laboral, de la fijación de fecha para la audiencia sólo se notificó a la parte actora, misma que invocando el artículo 562 del Código de Trabajo, solicita a la Junta de Conciliación y Decisión la notificación a la parte demandada por vía de edicto, a lo cual se accede mediante providencia de 28 de septiembre de 1995.

En esa misma fecha, la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 emplazó a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.** para que compareciera a través de sus representantes legales o apoderados respectivos para hacer valer sus derechos en el juicio laboral, pues en su defecto se nombraría a un defensor de ausente. Se aportan las publicaciones de periódico de los días 7 y 8 de octubre de 1995 contentivas del edicto emplazatorio y se solicita el nombramiento de un defensor de ausente, tal como obra a folio 32 del expediente.

Expirado el término impuesto por Ley, se designó al defensor de ausente, quien tomó posesión el 16 de octubre de 1995. En la fecha de audiencia fijada, compareció la parte demandante, así como el defensor de ausente de la parte demandada.

El acta de audiencia celebrada consta a fojas 39-47 del expediente, y de la misma se desprende que una vez analizados los argumentos y examinadas las pruebas aportadas, en fallo oral inmediato, que se reproduce en la sentencia objeto de la acción de amparo, se decidió declarar no probado el despido, siendo éste en consecuencia injustificado y condenándose a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.**

GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

Considera el recurrente que el acto acusado resulta violatorio de los artículos 32, 17, 18, 44 y 73 de la Constitución Nacional.

Este Tribunal debe subrayar en primer término, el contenido programático de dos de las normas constitucionales cuya conculcación acusa el amparista, a saber: los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Tal carácter ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en numerosas oportunidades (v. g. sentencias de 22 de septiembre de 1992 y de 22 de noviembre de 1994) resaltando su **generalidad** y el **valor jurídico declarativo** que encierran, sin que precisen un derecho de inmediata exigencia cuyo incumplimiento pueda sancionarse jurídicamente de manera personal o subjetiva, por lo que mal podría alegarse su vulneración por un acto concreto, excepto que la supuesta conculcación se presente asociada con otras disposiciones constitucionales que sí contengan

derechos susceptibles de ser vulnerados, circunstancia ésta que no ha sido planteada por el amparista.

En lo atinente a la supuesta vulneración del artículo 44 de la Constitución Nacional, que garantiza el goce y disfrute de la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley, el amparista es del criterio que el texto constitucional resulta transgredido, toda vez que se ha condenado de manera injusta a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.**, afectándose su patrimonio.

Este Tribunal debe advertir en relación con lo planteado, que la condena a la empresa del pago de prestaciones resulta consecuencia directa de la actividad jurisdiccional de la instancia juzgadora que ventiló la causa laboral.

En el ejercicio jurisdiccional, los tribunales son libres de interpretar los hechos y aplicar el derecho, con ajuste a los límites establecidos por la Constitución y la Ley. Cuando los particulares someten a una jurisdicción una controversia determinada, lógicamente ponen en manos del juzgador la facultad de decidir sobre la misma y al hacerlo es claro que se afectan intereses, muchas veces de índole económico para las partes. Esta "afectación", repetimos, es consecuencia directa del ejercicio jurisdiccional, y por ende, un proceso seguido con arreglo a la ley puede tener como consecuencia una condena pecuniaria a una de las partes, sin que por esa razón se infrinja el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional.

Tal es la situación que se presenta en el negocio sub-júdice, razón por la cual descartamos el cargo propuesto.

El amparista aduce igualmente vulnerado el texto del artículo 73 de la Constitución Nacional. Esta norma establece un principio de competencia privativa a la jurisdicción especial del trabajo sobre todas las controversias que originan las relaciones entre capital y el trabajo, expresando la norma que tal jurisdicción se ejercerá conforme a la Ley.

En el negocio bajo examen, la controversia ha sido efectivamente ventilada ante la Jurisdicción especializada, profiriendo la Junta de Conciliación y Decisión una decisión conforme a su criterio interpretativo y de apreciación de los elementos del proceso por despido injustificado, tal como la propia ley laboral la facultaba. No se desprende en consecuencia, una vulneración o afectación del texto constitucional en perjuicio del amparista.

Sin embargo, conecta la violación de esta norma constitucional con la vulneración del debido proceso legal, al indicar que el procedimiento seguido para la expedición de la sentencia de 18 de octubre de 1995 no se ajusta a lo contemplado en la Ley.

Como no corresponde a esta Superioridad examinar el juicio de valor utilizado por la Junta de Conciliación para decidir el fondo de la controversia laboral, deberá el Tribunal concretarse a determinar si en este caso nos encontramos ante una violación al debido proceso legal por parte de la Junta de Conciliación y Decisión N° 3, tal como afirma al amparista en perjuicio de la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.**

El artículo 32 de la Constitución Nacional, se reproduce a continuación para mayor ilustración:

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Estima el amparista que se ha violado el debido proceso legal en este caso, con fundamento en los siguientes hechos:

1. Que a la empresa amparista no le fue notificada la admisión de la demanda ni la fecha de audiencia de manera personal, tal como establece la ley. Según el actor no existe plena certeza de que efectivamente se gestionara

diligentemente la notificación personal.

2. Ante la supuesta imposibilidad de notificar de manera personal al representante legal de la parte demandada, se procedió a notificar a la misma a través de edicto emplazatorio, lo que no brindaba efectivas garantías de defensa a la parte demandada.

3. Se procedió a la designación de un defensor de ausente, quien no defendió ni representó de manera efectiva los intereses de su patrocinado.

4. La sentencia de 18 de octubre de 1995 tampoco fue notificada a la empresa demandada, sino al defensor de ausente quien no apeló de la misma, por lo que la afectada no pudo impugnar el acto jurisdiccional, pasando éste a su fase ejecutiva, y decretándose embargo contra la empresa.

En consecuencia, continúa expresando el actor, el proceso seguido adolece de un vicio grave que deviene por la falta de notificación **en debida forma legal** a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.**, de la admisión de la demanda y demás actos dentro del proceso, lo que amerita la revocatoria de la sentencia proferida.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad, al examinar los cargos presentados por el amparista y confrontarlos con el texto constitucional que se aduce infringido, debe externar lo siguiente:

El examen de esta Corporación Judicial debe circunscribirse a determinar si en el proceso laboral seguido se pretermitió el cumplimiento de la debida notificación legal a la parte demandada, puesto que en su defecto, la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.** se ha visto seriamente afectada por la sentencia expedida, haciéndose nugatoria la defensa de la parte demandada, y consecuentemente vulnerándose la garantía fundamental del debido proceso.

Las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. De acuerdo al principio de estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley, lo que implica el **acatamiento de las formalidades esenciales que rigen la actividad jurisdiccional**, entre las que se encuentra el **asegurar la comunicación del libelo al demandado** conforme a lo establecido en la Ley, las garantías de incorporación de los medios probatorios lícitos, y la utilización de los medios impugnativos legalmente autorizados, de tal manera que puedan ser defendidos efectivamente sus derechos.

Uno de los puntos denunciados por el recurrente es la imperatividad de que se surtiese notificación personal del traslado de la demanda y de las fechas de audiencia, y no a través de edicto emplazatorio.

Si bien el artículo 11 de la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, que creó dentro de la jurisdicción especial de trabajo las Juntas de Conciliación y Decisión establece que debe notificarse **personalmente** el traslado de la reclamación que contiene la fecha de audiencia, nada contempla tal reglamentación como medida alternativa para subsanar los casos en que la notificación personal no es posible. Sin embargo, el artículo 16 de la referida Ley 7 de 1975, es del tenor siguiente:

> "Artículo 16. Para los efectos de esta Ley **las Juntas de Conciliación y Decisión tendrán todas las facultades que en el Código de Trabajo y disposiciones complementarias se atribuyen a los Jueces Seccionales de Trabajo** y sus miembros gozarán de todas las prerrogativas y privilegios reconocidos a los mismos." (El resaltado es de la Corte).

Por tanto, ya la Corte ha expresado en estos casos que de la norma transcrita se infiere que las disposiciones del Código Trabajo son supletorias a los procedimientos que se siguen en las Juntas de Conciliación y Decisión, en

lo que no resulten contrarios a lo dispuesto en la normativa especial, lo que incluye la posibilidad de notificación por vía de edicto emplazatorio, siempre y cuando se cumplan ciertos condicionamientos.

En sentencia de Amparo de garantías Constitucionales de 29 de junio de 1995, la Corte Suprema indicó:

> "En este orden de ideas observa el Tribunal, que si bien el traslado de la demanda debe ser notificado personalmente, ante la imposibilidad de notificación personal y directa al representante legal de la empresa demandada, la Junta de Conciliación y Decisión puede auxiliarse, ante el vacío legal de la Ley 7 de 1975 sobre la materia, en lo previsto por el artículo 562 del Código Trabajo, mismo que establece que cuando se ignore el paradero de quien deba ser notificado personalmente, y tal circunstancia sea recogida en escrito presentado por persona interesada que solicite el emplazamiento del demandado, se emplazará mediante edicto que permanecerá fijado en lugar visible de la Secretaría del Tribunal por el término de cinco días. ...
>
> Pero entendiéndose que para los fines de agotar los medios de notificación personal, debían realizarse **tres intentos de notificación, y no dos**, como se verificó en este caso." (El subrayado es nuestro).

La parte final de la sentencia pretranscrita resulta fundamental en este negocio, puesto que plantea de manera clara que si bien la notificación por vía de edicto emplazatorio es un mecanismo auxiliar para las Juntas de Conciliación en el evento de que no se logre la notificación personal del demandado, se requiere un esfuerzo diligente y comprobado de que previo al emplazamiento, se agotaron y reiteraron al menos en tres oportunidades como ejemplariza la sentencia comentada, los intentos de notificación personal.

De lo contrario, se vulnera el debido proceso, al no garantizarse al demandado la oportunidad razonable, conforme lo prevé la ley, de acceder al conocimiento de acciones instauradas en su contra. Correlativamente se desprende, que para que se considerase cumplido el procedimiento de ley, tenían que agotarse los intentos de notificación personal antes de proceder a la notificación por vía de emplazamiento a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.**, de la demanda instaurada por el señor **JOAQUÍN RUIZ**, y de la fecha de audiencia fijada.

El expediente laboral remitido presenta en este sentido una evidente disparidad entre los intentos de notificación realizados (ocho en total) para comunicar a la parte demandante los cambios en la fecha de audiencia, frente a los intentos de notificación de la demanda y de la fecha de audiencia programadas (sólo dos) para la empresa demandada. Recordemos que en este negocio se programaron cinco fechas de audiencia.

Sobre el particular, el amparista ha señalado:

> "Además de lo anterior, puede observarse la negligencia en que incurrió la Junta de Conciliación y Decisión al no notificar personalmente a la empleadora, cuando anteriormente había señalado el 14 de junio de 1995, a las 8:00 a. m. como fecha para la celebración de la audiencia, con informes de notificación al apoderado del trabajador, Lic. Carvalho pero sin informe de notificación a la empresa; luego señaló como fecha de audiencia para el 11 de octubre de 1995 dejándose constancia de notificación al Lic. Carvalho, representante del trabajador, sin que exista informe de notificación a la empresa. Lo mismo sucedió con la fecha de audiencia del 18 de octubre de 1995."

Del caudal probatorio se desprende, que de las cinco fechas de audiencia programadas, sólo en dos ocasiones se dio traslado a la empresa demandada, y en ningún caso se agotaron los tres intentos de notificación respectiva para

comunicarle a la empresa sobre la existencia de la demanda y la fecha de audiencia.

Contrastan con esta situación, las certificaciones visibles a fojas 19, 20, 22, 23, 24, 26 contentiva todos los intentos de notificación que se verificaron con el fin de poner en conocimiento del apoderado legal del trabajador demandante las nuevas fechas de audiencia para asegurar su comparecencia.

Cuando finalmente se ubica al apoderado del trabajador para notificarle de la fecha de audiencia del día 18 de octubre de 1995, habían transcurrido exactamente 16 meses después del primer intento de notificación a la empresa demandada, y un año y dos meses desde el último intento de notificación a la misma, gestión realizada el día 21 de agosto de 1994, lo cual constituye un período razonablemente amplio para que se hubiese intentado algún tipo de comunicación con el demandado, máxime cuando era conocido por la Junta el domicilio de la empresa, lo que facilitaba el proceso de notificación personal o al menos, el intento de procurar tal notificación.

Acotamos que aún en el caso de que se hubiese aceptado como legalmente realizada la notificación por vía de edicto emplazatorio, las constancias que reposan en el expediente también evidencian la falta de agotamiento de los medios necesarios para garantizarle al demandado el ser oído en audiencia y conocer del fundamento de las pretensiones en su contra. Esta situación se presenta, toda vez que el segundo párrafo del artículo 562 del Código de Trabajo dispone lo siguiente:

> "Desde que se fije el edicto, se publicará copia de él en un periódico de la localidad, si lo hubiere, o de otro lugar siempre que circule regularmente en la sede del Tribunal, durante dos días distintos. Si el demandante suministrare al Tribunal la dirección postal del demandado, **o el Secretario del Tribunal advierta que su nombre aparece en el directorio telefónico o por cualquier otro medio conociere su dirección, se le remitirá a éste copia de la demanda y de los documentos presentados, por correo recomendado.**" (El resaltado es nuestro).

De lo transcrito se colige, que otro medio de comunicar al demandado el contenido de la demanda, es allegándose por correo, copia del libelo y demás documentos presentados por el demandante. En el negocio sub-júdice, pese a que se tenía pleno conocimiento de la dirección de la empresa demandada, no se acredita el envío de tales documentos.

Así, aunque el emplazamiento se realice y se designe un defensor de ausente, esta diligencia permite a la empresa, una vez en conocimiento de que se sigue un proceso en su contra y de las pretensiones de la parte actora, **comparecer a la audiencia y ejercer su derecho de defensa.** Son estos los procedimientos contemplados en la Ley para este tipo de negocio, lo cual según consta en autos, no se ha cumplido fielmente.

Como agravante de esta situación, esta Superioridad advierte que la actuación del defensor de ausente en este caso fue bastante limitada, puesto que aunque compareció a la audiencia, posteriormente se allana a una resolución contraria a los intereses de la parte que representaba, al no apelar de la misma, pese a que conforme a lo previsto en la Ley 1 de 1986 estaba facultado para ello, haciendo aún más nugatoria la defensa de la empresa, pues ejecutoriada la sentencia, se procede a ejecutar de inmediato.

En vista de toda la actuación anterior, la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 profirió la sentencia de 18 de octubre de 1995, notificando de la misma al defensor de ausente, y que al quedar ejecutoriada la misma, se llevó a la fase de ejecución, por lo que la empresa demandada en ningún momento tuvo oportunidad de comparecer al proceso ni ejercitar defensa alguna.

Este Tribunal debe señalar en conclusión, que aunque la admisión y traslado de la demanda debe hacerse **personalmente**, en determinados casos, siempre y cuando

se cumplan y se agoten todos los requisitos contemplados en la Ley, el emplazamiento es permisible.

Sin embargo, en el negocio sub-júdice, una vez examinado el legajo contentivo del proceso laboral, se constata que no se cumplieron todos los trámites necesarios antes de proceder a la notificación por vía de edicto emplazatorio, y posteriores para que la empresa conociera de las pretensiones de la parte demandante y pudiese oponerse a las mismas.

La empresa demandada, consecuentemente, sufrió los perjuicios de la falta de notificación en debida forma, mismos que se pueden subsumir en un punto medular: se negó a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A., el debido proceso legal, garantía constitucional en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido, la oportunidad razonable de ser oídas** por un tribunal competente, **de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales**, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Esta Corporación Judicial conceptúa que la empresa amparista se vio privada del ejercicio efectivo de esta garantía, dado que al no serle notificada en debida forma la admisión de la demanda, no comparecieron al proceso, no tuvieron la oportunidad de aportar pruebas para contradecir las pretensiones del demandante, y tampoco de impugnar la sentencia proferida ante el Tribunal Superior de Trabajo, por lo que la acción extraordinaria de Amparo de Garantías es el único medio procesal capaz de reparar los derechos conculcados a la empresa.

En atención a todo lo expuesto, esta Superioridad estima que le asiste razón al actor, y que su pretensión debe ser reconocida, al constatarse el vicio en la actuación del Junta de Conciliación y Decisión a partir del momento en que se emplazó a la empresa **C. FERNIE & CO., S. A.**, ya que las consecuencias de este acto de notificación que se verificó sin agotar los procedimientos encaminados a lograr la notificación personal ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso a la empresa amparista.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense SHIRLEY & DÍAZ, en representación de la empresa C. FERNIE & CO., S. A. y REVOCA la sentencia de 18 de octubre de 1995 proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 3, mediante la cual se declaró injustificado el despido del trabajador JOAQUÍN RUIZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSUÉ LEVY LEVY, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales formulada por el Licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en nombre y representación del señor **JOSUÉ LEVY LEVY**, contra la orden de hacer contenida en la resolución proferida por la Juez Octava de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el 27 de diciembre de 1995.

El Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución fechada 16 de enero de 1996, decidió no acoger el presente amparo. Como fundamento de esa decisión, el Tribunal Superior señaló que en vista de que la resolución que se pretende impugnar por esta vía concedió un recurso de apelación, ella no constituye una orden de hacer o de no hacer, sino una providencia de mero trámite. Consecuentemente, consideró que la demanda no debía admitirse, por ser manifiestamente improcedente, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2611 del Código Judicial.

Por su parte, el recurrente al sustentar la presente apelación solicita lo siguiente:

> "1) Que la orden de hacer proferida por la Jueza Octava Penal, Primer Circuito Judicial de Panamá puede ser objeto del Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales, tal y como está previsto en el artículo 50 de nuestra Constitución Nacional.
>
> 2) Que tal y como ha sido previamente definido por el Tribunal A-Quo, la demanda presentada cumple con todos los requisitos formales y es obligada su admisión para estudio.
>
> 3) Que se revoque en todas sus partes el auto del 16 de enero de 1996, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia y se ordene la ADMISIÓN de la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por JOSUÉ LEVY LEVY contra la orden de hacer contenida en la resolución del 27 de diciembre de 1995, por la que la Juez Octava del Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá: "concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación anunciado contra el auto fechado 14 de septiembre de 1995." (Foja 21).

Luego del análisis de la presente acción constitucional, la Corte concluye que la decisión del Tribunal Superior se ajusta a derecho. Ello es así por razón de que como bien señaló la mencionada corporación judicial, la resolución que se pretende impugnar no contiene ninguna orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y las garantías que la Constitución consagra.

El acto acusado concede recurso de apelación contra un auto expedido por el Juzgado Octavo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. Las alegaciones de que dicha apelación fue concedida sin las formalidades legales, no es materia que deba dilucidarse mediante una acción de amparo de garantías constitucionales.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 16 de enero de 1996, que no admitió el amparo de garantías constitucionales propuesto a favor del señor JOSUÉ LEVY LEVY contra la Juez Octava Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NILKA TOVAR ORTIZ CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 13 DE OCTUBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, actuando en representación de **NILKA TOVAR ORTIZ**, ha presentado escrito mediante el cual se solicita la aclaración de la resolución de veintiséis (26) de enero de 1996 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la cual no se admite la demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la Sentencia de 13 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

En el escrito mediante el cual se solicita la aclaración de sentencia, el apoderado judicial de la parte actora formula una serie de consideraciones sobre la parte motiva de la sentencia de la Corte, lo cual es ajeno a la solicitud de aclaración y corrección de las resoluciones reguladas por el artículo 986 del Código Judicial.

El Pleno de esta Corporación considera que no es pertinente aclaración alguna del fallo de 26 de enero de 1996, por cuanto no hay declaración respecto a frutos, intereses, daños, perjuicios o costas, ni frases obscuras o de doble sentido en la parte resolutiva, que son los aspectos que el artículo 986 de nuestro Código Judicial permite corregir.

En vista que la sentencia antes aludida no presenta frases obscuras en su parte resolutiva, el Pleno considera improcedente la presente solicitud de aclaración de sentencia.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de sentencia interpuesta por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar en representación de NILKA TOVAR ORTIZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. LUIS GUILLERMO CASCO ARIAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CARLOS E. CASTILLO, CONTRA LA ORDEN DE HACER EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS, Y CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 7 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor **LUIS GUILLERMO CASCO ARIAS** presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución de segunda instancia de 28 de diciembre de 1995, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, dentro del proceso sumario de guarda y crianza y régimen de comunicación y de visita, de la menor **VIANCA CASTILLO DE ICAZA**, mediante la cual se confirmó la resolución de primera instancia del Juzgado Segundo Seccional de Menores de 9 de junio de 1995, por la cual se le confirió a su abuela materna **BELINDA CHANG** la guarda y crianza de la menor, en lugar del padre de la niña señor **CARLOS CASTILLO**.

Considera el amparista que la resolución impugnada viola los artículos 52, 55, 56 y 59 de la Constitución Nacional en el concepto de "violación directa, por omisión o falta de aplicación" de las normas señaladas.

Lo primero que observa la Corte es que estamos ante un proceso sumario de guarda y crianza y régimen de comunicación y de visita regulado en el Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección Tercera del Código de la Familia. Que el amparista no alega la violación del principio del debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución, sino que en su lugar estima que se han violado directamente normas de la Constitución por parte del Tribunal de Segunda Instancia.

La Corte ha dicho en reiteradas jurisprudencias que el amparo de garantías constitucionales no es una tercera instancia en donde se pueda tratar de remediar los vicios o errores del proceso, ya que para ello existen los recursos de apelación y de casación en nuestra legislación nacional. En el presente caso la ley permite impugnar la resolución que ahora se recurre en amparo, mediante el recurso de apelación, el cual fue utilizado por el amparista y fallado en su contra.

Aún en el caso de que la Corte revocara la resolución, como pretende el amparista con esta acción de amparo, nunca podría concederle la guarda y crianza que solicita, que es propia del proceso sumario instaurado. Por regla general el amparo contra resoluciones judiciales son basados en las violaciones del debido proceso y solamente cuando éste principio ha sido conculcado es que procede el amparo en estos casos, para restituir los vicios o errores cometidos en el proceso, que como se observa se limitan a la forma del mismo o a retrotraer las actuaciones de acuerdo al vicio demostrado y nunca al contenido de su decisión, que sólo puede ser afectado en el ejercicio del recurso de apelación o de casación. Ya sostuvimos que en ningún momento el amparista alega la violación del principio del debido proceso del artículo 32 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con el artículo 331 del Código de la Familia "las resoluciones dictadas por la autoridad competente sobre la guarda y crianza y el régimen de comunicación y de visita, podrán ser modificadas en cualquier tiempo, cuando resulte procedente, por haber variado las circunstancias de hecho que determinaron su pronunciamiento, conforme al artículo anterior".

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales contra la resolución de 28 de diciembre de 1995 proferida por el Tribunal Superior de Menores en el proceso sumario de guarda y crianza de la menor VIANCA CASTILLO DE ICAZA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MAYRA LEZCANO DE RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGAPITO SOLÍS GODOY CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 97 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1994, DICTADA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce esta Superioridad, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la licenciada **MAYRA LEZCANO DE RODRÍGUEZ** actuando en su calidad de apoderada judicial del señor **AGAPITO SOLÍS GODOY**, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 97 de 8 de noviembre de 1994 expedida por el Gobernador de la Provincia de Colón.

La alzada en estudio ha sido dirigida a enervar la resolución fechada de 17 de enero de 1996 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se **negó la admisión** de la acción de amparo presentada por la licenciada **LEZCANO**, aduciéndose como motivación fundamental, el no haberse comprobado la gravedad e inminencia del supuesto daño causado con la expedición de la resolución del Gobernador de la Provincia de Colón, dado la dilación en la presentación de la Acción de Amparo.

En efecto, el Tribunal a-quo, al momento de decidir sobre la admisibilidad de la acción presentada, en la parte pertinente de la resolución de 17 de enero de 1996 destacó:

> "En esa dirección se observa que el amparista, en su demanda, no cumple con el requisito consignado en el tercer párrafo del artículo 2606 del Código Judicial, pues, la orden de hacer atacada por el presente amparo no reviste las características de "gravedad e inminencia del daño", si se toma en cuenta, que la orden atacada por esta acción fue dictada mediante Resolución N° 97 del 8 de noviembre de 1994 y no fue sino hasta el día 11 de enero de 1996 -cuando habían transcurrido 14 meses-, que el señor AGAPITO SOLÍS GODOY presentó el amparo en contra de dicha resolución administrativa, por lo que procede no admitir el mismo."

Por su parte, la licenciada **LEZCANO** al sustentar la alzada, ha insistido en la procedencia de la admisibilidad de la acción, puesto que la resolución expedida por el Gobernador de Colón obliga a su mandante a compartir ciertos bienes patrimoniales que le pertenecen con su antigua concubina, lo que causa graves trastornos a su núcleo familiar, y ello evidencia la gravedad de los hechos.

Esta Máxima Corporación de Justicia al avocarse al análisis de la resolución apelada y de los argumentos esbozados por la parte actora, debe expresar lo siguiente:

Han sido constantes y reiterados los pronunciamientos que este Tribunal ha vertido, en el sentido de que una de las condiciones de admisibilidad de las Acciones de Amparo de Garantías Constitucionales es que la orden de hacer expedida de manera supuestamente arbitraria, represente una afectación grave e inminente para el presunto afectado.

Esta exigencia no obedece a un designio caprichoso del Tribunal; descansa en las razones que esta Corporación de Justicia ha venido expresando en reiteradas ocasiones, y que se reproducen de seguido:

Es sabido que el tercer párrafo del artículo 2606 consagra uno de los presupuestos procesales que marcan la característica más propia del amparo de garantías constitucionales a los efectos de su admisibilidad: **que las órdenes atacadas representen un daño de tal gravedad e inminencia, que requieran de una**

revocación inmediata. De allí que la Corte, y los Tribunales que conocen de estas acciones, siempre deben examinar este extremo con particular interés.

El concepto de inminencia dice relación con un suceso que amenaza o está para suceder prontamente. La gravedad supone una importancia extrema. Vistos tales conceptos en el contexto del artículo 2606, ambos evidencian que solamente son susceptibles de amparo aquellas órdenes que representan un daño cercano, sobreviviente, no un daño remoto o que ya hubiese tenido sus efectos.

En resolución de 15 de abril de 1994, la Corte amplió aún más este punto al indicar:

> "La Corte observa prima facie, que la orden atacada fueron expedidas hace tres años y ocho meses, por lo que se desnaturaliza el fin de la acción presentada, toda vez que el Amparo de Garantías Constitucionales es una institución que persigue que sean revocadas aquellas órdenes que violen derechos fundamentales, por la gravedad e inminencia del daño que representan. En concordancia con este principio, es inadmisible una acción de Amparo contra actos dictados en un margen de tiempo tan excesivo, como el que nos ocupa.
>
> Este ha sido el criterio sostenido por este Tribunal en reiteradas ocasiones, entre las cuales podemos citar la sentencia de 30 de julio de 1992, en la cual se declara no admisible el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma **Vásquez y Vásquez** en representación de **JORGE ELIÉCER BERNAL**, y en el cual en su parte pertinente se señaló lo siguiente:
>
> "Otro aspecto que la Corte no puede soslayar es que la acción de amparo pretendía enervar un auto dictado hace un año, tres meses y cuatro días. La acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Como se aprecia, es elemento fundamental del amparo la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado un ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata."

Esta ha sido la postura mantenida en un número plural de ocasiones, y habida cuenta de que nos encontramos frente a una acción que solicita la revocatoria de una resolución expedida y notificada hace más de un año, palmariamente se evidencia la falta del elemento de urgencia en la revocatoria de la orden expedida, tal como acertadamente señalara el Tribunal A-quo, en seguimiento al criterio jurisprudencial sentado en estos casos, en aplicación del artículo 2606 del Código Judicial.

El Tribunal Ad-quem considera por ende que no existe vicio en la resolución recurrida, por lo cual es procedente su confirmación.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la resolución de 17 de enero de 1996 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE RANGEL FEDERICKSON, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Felipe Rangel Frederickson, en su propio nombre y representación, ha interpuesto acción de amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 13.004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.

Considera el apoderado judicial del demandante que dicha orden viola los artículos 17, 18, 19, 60, 70, 75, 105 y 109 de la Constitución Política.

El amparista solicita la revocación de una orden contenida en una resolución dictada el 1° de octubre de 1986, mediante la cual la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social resolvió suspenderle, a partir del 16 de noviembre de 1986, la pensión por riesgo de invalidez por la suma de B/.208.57 al mes.

El Pleno ha señalado reiteradamente que el amparo de garantías es un recurso extraordinario, que tiene como finalidad revocar órdenes de hacer o de no hacer expedidas o ejecutadas por funcionarios públicos, que violen derechos y garantías consagradas en la Constitución, cuando por la **gravedad e inminencia del daño que representan, requieren una revocación inmediata,** presupuestos que no reúne la orden impugnada mediante el presente recurso de amparo, pues la misma fue dictada hace más de nueve años, careciéndo, tanto de actualidad como de inminencia la reparación del daño que se alega haber sufrido.

El Pleno expresó en sentencia de 30 de julio de 1992, en la acción de amparo interpuesta por Rosa Chitrit de Bernal contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, lo siguiente:

> "Otro aspecto que la Corte no puede soslayar es que la acción de amparo pretendía enervar un auto dictado hace un año, tres meses y cuatro días. La acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Como se aprecia, es elemento fundamental del amparo la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata."

Además de lo expresado, el Pleno observa que la resolución acusada es un acto administrativo, y en virtud de que el amparo de garantías constitucionales es una institución de naturaleza extraordinaria, no es procedente si existen otros remedios jurídicos consagrados en el ordenamiento legal para tutelar el derecho que el justiciable considera que se le ha conculcado (Cfr. Resolución

dictada por el Pleno de la Corte Suprema el 31 de agosto de 1995, en la acción de amparo interpuesta por Jesús L. Rosas Ábrego en contra de la orden de hacer contenida en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 413 de 1° de agosto de 1995).

Siendo esta la situación, la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

Por consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado FELIPE RANGEL FREDERICKSON, en su propio nombre y representación, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 13.004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIMEÓN EMILIO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARCOS SALINAS Y FÉLIX VILLARREAL, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° CJ-17-95 DE 1° DE DICIEMBRE DE 1995 DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor Simeón Emilio González, en representación de MARCOS SALINAS y FÉLIX VILLARREAL, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° CJ-17-95 de 1 de diciembre de 1995, por medio de la cual el señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ sancionó con expulsión de 2 y 1 año respectivamente, a los estudiantes Marcos Salinas y Félix Villarreal, a partir del primer semestre del año académico de 1996.

El apoderado judicial de los demandantes señala en la demanda que dicha orden viola los artículo 17 y 32 de la Constitución Política en relación con la Ley 11 de 1981, Orgánica de la Universidad.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, se observa que la orden de hacer es un acto administrativo, y al respecto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha expresado que una vez agotados los recursos ordinarios contra el mismo, procede la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y no el recurso extraordinario de amparo de garantías constitucionales, puesto que el mismo es una institución de naturaleza extraordinaria que no es procedente si existen otros remedios jurídicos consagrados en el ordenamiento legal para tutelar el derecho que el justiciable considera que se le ha conculcado.

El apoderado judicial de los actores considera que la orden impugnada viola el artículo 17, precepto de carácter doctrinario y preambular que no confiere ningún derecho subjetivo, y el artículo 32, ambos de la Constitución Política, pero al explicar el concepto de la violación de éste último, invoca normas legales y señala que la orden viola "el procedimiento establecido en los

artículos 281, 282, 283, 284 del Estatuto Universitario" y que la sanción contenida en la orden de hacer "no existe ni en la Ley 11 de 1981, Orgánica de la Universidad, ni en el Estatuto de la Universidad, y ni siquiera en el Decreto 144 de 1969 derogado y que facultaba al Sr. Rector a imponer sanciones provisionales tan sólo por un año." (Fs. 15), por lo que en la presente acción de amparo de garantías se está planteando un asunto de legalidad que tal como ya se ha expresado, debe ventilarse por la vía contencioso administrativa, una vez agotada la vía gubernativa.

Por tanto, la presente demanda de amparo es manifiestamente improcedente y no debe admitirse en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2611 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el doctor Simeón Emilio González, en nombre y representación de MARCOS SALINAS y FÉLIX VILLARREAL, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° CJ-17-95 de 1 de diciembre de 1995, dictada por el señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR BERRÍOS & BERRÍOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 2 DE ENERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Berríos & Berríos en representación de la persona jurídica **CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.** contra el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, quien emitió la resolución del 24 de enero de 1996.

Esta decisión negó el amparo presentado contra la orden de hacer contenida en el auto del 2 de enero de 1996, emitida por el Juez Primero de Circuito, Ramo Civil, de Colón.

La misma, removió al administrador judicial del juicio ejecutivo hipotecario interpuesto por la Corporación Financiera Nacional C. O. F. I. N. A. contra el **CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.**, y nombró a la Sra. **DALYS RODRÍGUEZ MARRERO** como nueva administradora, violando con ello -a juicio del amparista- el principio del debido proceso.

Mientras se resuelve el negocio, el representante del amparista, Dr. Julio E. Berríos, presentó un escrito desistiendo de la presente apelación, aduciendo arreglo extra judicial entre las partes.

Observa el Pleno que el Licdo. Berríos está debidamente facultado para desistir, en virtud del poder que se encuentra en el expediente; además, dicha acción es permitida por los artículos 623, 1073 y 1076 del Código Judicial, razón

por la que esta Corporación de Justicia no ve ningún obstáculo para admitir el presente desistimiento.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de apelación presentado por la firma forense Berríos & Berríos, contra el fallo del 24 de enero de 1996 proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que decidió el amparo de garantías constitucionales propuesto por dicha firma contra la resolución dictada el 2 de enero de 1996 por el Juez Primer de Circuito, Ramo Civil, del Circuito Judicial de Colón.

Cúmplase, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SANSON, TORRIJOS & ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA DAMARIS MEDINA DE ALVEO Y DEL SEÑOR MELQUIADES ALVEO MONTILLA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO RICARDO NAVARRO JURADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Por reunir los requisitos legales reglados en la legislación procesal vigente, **SE ADMITE** la acción de amparo de garantías constitucionales promovida ante esta Corporación de Justicia por la firma forense Sanson, Torrijos & Asociados, en nombre y representación de la señora **DAMARIS MEDINA DE ALVEO** y del señor **MELQUIADES ALVEO MONTILLA**, contra la orden de hacer contenida en la resolución de 5 de febrero de 1996, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, bajo la ponencia del Magistrado **RICARDO NAVARRO JURADO**.

Por tanto, se requiere de la autoridad demandada dentro del término perentorio de la ley, el envío de la actuación correspondiente del caso o en su defecto un informe escrito de los hechos materia de esta acción.

Se tiene a la firma forense Sanson, Torrijos & Asociados, como apoderados legales de los accionantes.

BASE LEGAL: Artículos 2609, 2610 y 2611 del Código Judicial.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS CARRILLO, BRUX Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ORO CENTER-GOLD CENTER, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-9 DE 31 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

TERESA VALLECILLA DE HERRERO, en su condición de representante legal de la sociedad anónima denominada **ORO CENTER-GOLD CENTER, S. A.**, a través de la firma forense Carrillo Brux y Asociados, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia PJ-9 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de Colón, calendada en 31 de mayo de 1995.

Dada la naturaleza jurídica de esta acción de tutela de los derechos y garantías fundamentales, el Libro IV del Código Judicial, sobre instituciones de garantía, ha establecido un procedimiento propio que obliga a un examen formal para la admisibilidad o rechazo in limine de la acción, sujeto al cotejo del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y de fundamentación de la pretensión, así como la verificación de la legitimación activa y pasiva, al igual que los presupuestos procesales de la acción.

Con miras a determinar la admisibilidad aludida, se puede apreciar que en este caso se impugna una orden de hacer contenida en una sentencia, dictada en materia laboral por una Junta de Conciliación y Decisión, que al tenor del artículo 12 de la ley 7 de 1975, en casos de despido injustificado cuya cuantía no excede de B/.2,000.00 no admite recurso alguno y produce el efecto de cosa juzgada. Por otra faz, las Juntas de Conciliación y Decisión en asuntos laborales, tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, lo que confirma la legitimación pasiva de la autoridad que funge como presunta autora del agravio que se dice inferido a la accionante.

Respecto a la legitimación activa, consta en autos certificado del Registro Público sobre la existencia jurídica de la sociedad anónima que promueve la acción, al igual que el nombre de su representante legal y el poder otorgado a una firma forense idónea y debidamente registrada. En cuanto al momento o plazo de presentación de la acción, llama la atención el hecho de que la resolución contentiva de la orden de hacer censurada, data del 31 de mayo de 1995 y al tenor de la documentación que se adjunta al libelo, la decisión de la Junta ya fue objeto de ejecución mediante la diligencia de reintegro llevada a cabo el 18 de enero de 1996, en las oficinas de la empresa demandada (fs. 52-55).

En relación con la pretensión, a folios 83 se lee que "... se demanda la revocatoria de la orden de hacer contenida en la parte resolutiva de la sentencia PJ-9 de 31 de mayo de 1995 de la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de Colón del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social". Al explicar en qué consiste la orden, expresa "se trata de una orden de hacer, la cual declara injustificado el despido del trabajador ROBERTO WEIR SMITH y le ordena a la empresa ORO CENTER-GOLD CENTER, S. A. que lo reintegre a sus labores habituales y le pague los salarios caídos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento de la orden de reintegro".

Si bien es cierto que desde la fecha de presentación de la demanda, en noviembre de 1992, hasta la expedición de la sentencia, en mayo de 1995, transcurrió un lapso excesivo para resolver una reclamación por despido de un obrero, no menos cierto es que la parte demandada estuvo ausente en el proceso y hasta se le emplazó por edicto sin que advirtiera la inminencia de la lesión a las garantías y derechos que ahora menciona.

Por esta vía procesal, que no es una institución ordinaria, no es posible revisar cada uno de los trámites que se realizaron u omitieron, ni entrar a un proceso valorativo de las pruebas ni de las normas de jerarquía legal que pudieron haber sido infringidas, como son el articulado del Código de Trabajo, pues hay una limitación que debe acatar el Tribunal de amparo y que se contrae al examen exclusivo de las disposiciones constitucionales que con el rango de garantías fundamentales, pudieron haber sido violadas por la orden que se impugna.

Por las razones apuntadas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de

amparo de garantías constitucionales presentada por la Sociedad ORO CENTER-GOLD CENTER, S. A. contra la orden de hacer contenida en la sentencia PJ-9 de 31 de mayo de 1995, dictada por la Junta de Conciliación y decisión N° 9.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CONCRETOS PANAMEÑOS, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 16 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, ENCARGADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, actuando como apoderado especial de la empresa **CONCRETOS PANAMEÑOS, S. A.** ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Nota de fecha 16 de octubre de 1995, expedida por el Director General de Trabajo -Encargado- del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Previo al examen de los requisitos formales exigidos por el artículo 2610 del Código Judicial para el libelo de la acción de amparo, la Corte procede al examen de ciertas condiciones y la naturaleza del acto impugnado, a fin de verificar la viabilidad de este remedio constitucional en el caso que nos ocupa.

La orden objeto de esta acción está contenida en la Nota de fecha 16 de octubre de 1995, suscrita por el Director General de Trabajo, cuyo tenor es el siguiente:

"...
Cumpliendo con disposiciones legales contenidas en el artículo 435 del Código de Trabajo, se hace entrega personal a las Empresas CONCRETO PANAMÁ, S. A. de un ejemplar del pliego de peticiones presentado en debida forma el día dieciséis (16) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) por el SINDICATO: ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS).

Se advierte a la empresa, que de acuerdo con lo que establece el Artículo 436 del Código de Trabajo, tiene cinco (5) días hábiles para dar contestación al Pliego de Peticiones, los que comenzarán a contarse al día siguiente de haber recibido notificación y la misma debe cumplir con las exigencias del Artículo 436 del Código de Trabajo. ..."

La Corte comparte lo expresado por el amparista al describir el acto acusado como la "notificación que pone en conocimiento de la empresa la existencia e inicio de tramitación del pliego de peticiones", contra el cual no existen medios de impugnación en el Código de Trabajo.

En ese sentido, además de resaltar la inexistencia de la vía procesal que debía agotar previa a la interposición de esta acción constitucional, el recurrente fundamenta la procedencia del amparo en el hecho de que el acto suscrito por el Director General de Trabajo obliga a la empresa a someterse al

trámite o procedimiento de negociación que consagra el Código de Trabajo (art. 426 y sig.) relativo al pliego de peticiones de negociación de Convención Colectiva que presentó el SUNTRACS.

Evidentemente se trata del tipo de acto administrativo contra el cual el afectado no tiene a su alcance recursos en la vía gubernativa, en consecuencia, la exigencia establecida por el artículo 2606 ibídem. (aplicable a los actos administrativos por mandato jurisprudencial) referente al agotamiento de la vía o de los medios de impugnación procedentes, antes de acudir al amparo, no es aplicable.

Sin embargo, el aludido artículo 2606 define, en primer lugar, el concepto de esta institución de garantía casi en los mismos términos en que lo consagra el artículo 50 de la Constitución, pero a su vez la norma legal destaca ciertos elementos esenciales de dicho concepto que otorgan más precisión para determinar la procedencia de este mecanismo protector. Sobre esto último, el aludido precepto del Código Judicial (Libro Cuarto) establece:

> "...
> Esta Acción de Amparo de Garantías constitucionales **puede ejercerse** contra toda clase de acto que **vulnere o lesione derechos o garantías fundamentales** que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando la gravedad o inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata. ..." (Énfasis de la Corte).

De lo antes transcrito se pueden extraer diversos presupuestos para el ejercicio del amparo, sin embargo, la norma es clara al establecer el origen constitucional y no legal de los derechos protegidos por este instituto, es decir, que su finalidad es la tutela de los derechos fundamentales de rango constitucional.

En este caso en particular, se puede decir, en principio, que el acto impugnado no incide propiamente en la materia constitucional, ni ha generado violación en contra de garantías o derechos fundamentales, circunstancia que constituye el principio básico para justificar el ejercicio del amparo.

Es cierto que la jurisprudencia de la Corte ha tenido que ampliar el radio de acción del amparo en cuanto a su materia (actos contra los cuales procede), bajo circunstancias muy especiales que generan en forma notoria la conculcación de derechos fundamentales, admitiendo recursos interpuestos contra actos administrativos como el que examinamos (sobre pliego de peticiones), a fin de salvaguardar dichos derechos.

Cabe agregar que es el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, quien tiene facultad de otorgar personería jurídica y reconocer la existencia de las organizaciones sociales o sindicatos. Por lo tanto, es en dicha dependencia donde consta la inscripción del sindicato. De modo que el Pleno de la Corte no tiene los medios de (ni es a quien normalmente le correspondería, cuando actúa como tribunal constitucional) verificar si determinados trabajadores son o no son parte de un sindicato (Libro Tercero, Título I, Capítulos II y III del Código de Trabajo).

Observa el Pleno que con bastante frecuencia la Corte ha tenido que pronunciarse en torno al problema que se suscita cuando las empresas, a las que la Dirección General de Trabajo les corre traslado de los pliegos de peticiones presentados por los trabajadores o sus organizaciones sociales, basándose en lo dispuesto por el artículo 435 del Código de Trabajo, señalan, como en el presente caso, que no hay razón que justifique el acto, aduciendo la completa inexistencia de vínculos legales que las obliguen a recibir y/o contestar dicho traslado. Aparentemente no hay ningún remedio legal para corregir o subsanar esas situaciones que algunas veces pudiesen ser fuente de injusticia o de ilegalidades. Tenemos que, en situaciones como esta, a la autoridad administrativa no le está permitido actuar al margen ni en contra de lo que establece la norma legal, por una parte. En consecuencia, la Dirección General de Trabajo no puede inhibirse de proceder al traslado que la disposición legal

le ordena y obliga realizar y; por otra parte, pareciera surgir, en ocasiones, el riesgo de que se violen las garantías constitucionales en los términos expuestos por el amparista.

La Corte, sin que sea su potestad pronunciarse en esta oportunidad acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma legal vigente en el Código de Trabajo, tiene que advertir que el ámbito en el cual se le podría encontrar una solución final a los problemas que con cierta frecuencia ha creado la vigencia del artículo 435 del Código de Trabajo, no es ubicable siempre en la institución del amparo.

Por tanto, debido a que en este caso no se observa la circunstancia antes anotada sobre el origen constitucional (no legal) de los derechos que se pretenden tutelar y considerando que es a nivel del propio Ministerio de Trabajo y Bienestar Social donde se debe dilucidar si los trabajadores de una empresa pertenecen o no a un determinado sindicato, la Corte estima que, resulta imposible la admisión de la demanda por su **manifiesta improcedencia**, de acuerdo a lo expresado por el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por CONCRETOS PANAMEÑOS, S. A. contra la Nota de 16 de octubre de 1995 expedida por el Director General de Trabajo Encargado, del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PATTON, MORENO & ASVAT, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Patton, Moreno & Asvat, actuando en su propio nombre, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales contra orden de hacer contenida en resolución de 7 de noviembre de 1995, proferida por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, por considerar que la orden atacada infringe los artículos 29 y 40 de la Constitución Nacional.

La demanda fue admitida por cumplir con los requisitos previstos en los artículos 654 y 2610 del Código Judicial, por lo que se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación y el informe correspondiente a los hechos materia de esta iniciativa procesal (a. 2611 C. J.).

Mediante oficio N° 3134 de 29 de diciembre de 1995, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial remitió el informe requerido. En él se comunica que la resolución atacada fue proferida en virtud de comisión asignada por la Procuraduría General de la Nación, en relación con solicitud de asistencia judicial internacional hecha por la Corte de Casación de Bélgica. Según el

informe de mérito:

> "La referida solicitud de asistencia judicial guarda relación con el pago de comisiones indebidas hecho por la Sociedad Italiana Augusta en favor de Sociedades Panameñas (sic), dentro de una venta de helicópteros hecha al ejército Belga ... En este ilícito se utilizó a sociedades panameñas para encubrir a los verdaderos beneficiarios del mismo.
>
> En el caso que nos ocupa, y siendo que la beneficiaria de las comisiones ilícitas fue la sociedad panameña MANNU BUSINESS CORPORATION cuyo agente residente es la firma PATTON, MORENO & ASVAT, se hacía indispensable determinar las personas naturales que solicitaron la Constitución (sic) de dicha sociedad a fin de que las mismas expliquen su participación en el ilícito investigado.
>
> Lo que se busca, es rasgar el velo corporativo, para impedir que sociedades anónimas panameñas sean utilizadas como escudo para encubrir la responsabilidad de personas naturales en la comisión de ilícitos a nivel internacional" (fs. 21 y 22).
>
> En su parte medular, la resolución atacada expresa:
>
> "Considerando que se hace necesaria la obtención de documentos de la sociedad MANNU BUSINESS CORPORATION, relacionados al pago de comisiones por parte de la empresa AUGUSTA INTERNATIONAL o de alguna forma vinculadas a los hechos, sociedades y personas investigadas en la presente comisión; El Suscrito Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, DISPONE: Practicar diligencia de allanamiento y registro en las oficinas de la firma forense PATTON, MORENO & ASVAT ...
>
> Se ordena para tal efecto la práctica de diligencia de auditoría, cuyo objeto será la verificación de los libros de registro contable y documentaciones pertinentes y así determinar el recibo de ingresos, pagos y/o realización de transacciones entre AUGUSTA S. P. A., las personas naturales y jurídicas involucradas, en especial, MANNU BUSINESS CORPORATION y la firma forense PATTON, MORENO & ASVAT en calidad de comisiones, servicios profesionales u otros" (f. 3).

La demandante persigue de modo concreto: a) la revocatoria de la resolución atacada, por considerar que vulnera los artículos 29 y 40 de la Carta Política, consagratorios del derecho de inviolabilidad de correspondencia y demás documentos privados, y la libertad de ejercicio de cualquier profesión u oficio, respectivamente, y b) que se ordene "al referido Fiscal que se abstenga de divulgar la información obtenida a cualquier tercera persona" (f. 6).

Por las características que reviste el caso, es necesario considerar en primer término lo atinente al concepto de la oportunidad de esta acción constitucional, considerando si es material y jurídicamente viable la reparación del daño que se dice inferido. Sobre el particular, es preciso tener presente que tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran generalmente acordes en afirmar que el amparo procede contra órdenes dictadas o ejecutadas por cualquier servidor público, que impliquen amenaza o violación efectiva de derechos subjetivos que la Carta Fundamental reconoce. En cuanto a las primeras, es decir, a las órdenes expedidas pero que aun no han sido ejecutadas, se estaría en el caso de una acción de amparo de carácter preventivo, mecanismo procesal constitucional idóneo para conjurar la posible concreción un daño de naturaleza grave y que se presenta como **inminente**, mediante la revocación del acto que lo inflige.

El problema se torna complejo cuando la orden ya ha sido ejecutada, toda vez que en este supuesto se trata de un amparo con fines eminentemente reparadores, lo que hace necesario un examen sobre la posibilidad, real y concreta, de alcanzar **la eficacia de la tutela jurisdiccional**. La exigencia legal

(a. 2606) concerniente a la inminencia del daño apunta a que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido mucho tiempo atrás (Sentencia de Pleno de 30 de julio de 1992, criterio mantenido en sentencias de 26 de noviembre de 1992, 15 de marzo de 1993, 12 de mayo de 1993, 25 de junio de 1993, 14 de julio de 1993, 27 de agosto de 1993, 30 de septiembre de 1993, 15 de abril de 1994 y 13 de enero de 1994). De allí que, frente a un daño que ha pasado de la categoría de inminente a la de **hecho cumplido**, corresponda examinar, caso por caso, la posibilidad fáctica de restituir al afectado en el disfrute de los derechos constitucionales que estima le han sido conculcados.

En el caso que nos ocupa, la orden que se ataca ya ha sido ejecutada. La diligencia de allanamiento y la inspección de documentos en las oficinas de la demandante fue realizada por el funcionario de instrucción, según se desprende tanto del libelo del amparista como del informe que rindiera la autoridad demandada, lo que le resta eficacia práctica al primer objeto de la pretensión anunciada, relativo a la revocación del auto acusado, así como a la posibilidad de restituir el derecho violado o de restablecer las cosas a su estado original, efectos inmediatos que la ley atribuye a la sentencia estimatoria de la acción de amparo. El demandante reconoce en el libelo de la demanda la realidad anteriormente apuntada sobre los posibles efectos de la acción, cuando expresa que "el derecho constitucional ya ha sido violado y no se puede resarcir" (f. 8). Se puede, entonces, afirmar que la acción de tutela de las garantías constitucionales no ofrece el remedio que en este aspecto particular de la pretensión se reclama, lo que hace que la iniciativa constitucional devenga no viable en cuanto a su objeto principal.

La Corte Suprema, mediante sentencia de 11 de junio de 1992, ya se pronunció en sentido análogo, expresando lo siguiente:

> "De lo que se trata entonces es del reclamo contra un hecho consumado, cuando el amparo constitucional está instituido con carácter preventivo y no reparador. A estas alturas de la actuación acusada, la intervención de la autoridad jurisdiccional carecería de eficacia, vista la imposibilidad de satisfacer la pretensión del accionante dirigida a evitar la práctica de la diligencia."

Sin embargo, considera la Corte oportuno pronunciarse sobre el segundo punto de la pretensión de la demandante, concerniente a la facultad de los funcionarios de instrucción de inspeccionar documentación privada y al destino de la información recabada, luego de la diligencia de allanamiento y registro.

El artículo 29 de la Ley Suprema consagra la inviolabilidad de la correspondencia y cualesquiera otros documentos privados, en los siguientes términos:

> **"ARTÍCULO 29.** La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades legales. En todo caso se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o examen.
>
> Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas. El registro de papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar."

La disposición transcrita consagra como regla general la inviolabilidad de documentos privados y establece al respecto una excepción: el examen de tales documentos puede tener lugar con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que lo realice autoridad competente; b) que el examen tenga fines específicos; c) que se respeten las formalidades que establece la ley.

Aunado a lo anterior, la citada norma constitucional establece la obligación de guardar reserva sobre los asuntos que no guarden relación con el examen u ocupación.

En cuanto al primer requisito, se advierte que el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, como agente de instrucción, se encuentra facultado para llevar a cabo diligencias de allanamiento y registro, según lo preceptúa el artículo 2185 del Código Judicial. Su intervención en este caso ocurre en virtud de comisión ordenada por el Procurador General de la Nación, con fundamento en el artículo 383 del Código Judicial.

El allanamiento y registro de las oficinas de la actora tuvo por objeto la obtención de documentos de la sociedad Mannu Business Corporation, cuyo agente residente es la firma demandante. Con tal fin, el agente del Ministerio Público, mediante la resolución atacada por esta vía extraordinaria, dispuso la práctica de una diligencia de auditoría para la verificación de "libros de registro contable y documentaciones pertinentes y así determinar el recibo de ingresos, pagos y/o realización de transacciones entre AUGUSTA S. P. A., las personas naturales y jurídicas involucradas, en especial, MANNU BUSINESS CORPORATION y la firma forense PATTON, MORENO & ASVAT en calidad de comisiones, servicios profesionales u otros" (f. 3).

Si bien es cierto que la actuación del agente de instrucción respondió a una finalidad concreta, la cita anterior da cuenta de que el objeto de la diligencia era demasiado amplio o comprensivo. Dado el carácter abarcador de la diligencia, surge entonces una colisión con lo normado por el artículo 29 de la Carta Fundamental.

En ocasión anterior el Pleno de esta Corporación, mediante sentencia de 13 de marzo de 1990, se pronunció en similar sentido, manifestando:

> "Esta Corte no ve qué interés legítimo podía tener la funcionaria demandada al ordenar al banco demandante que le suministrara una lista con el nombre de todas las personas que tuvieran cuentas cifradas en el banco. Una orden tan comprensiva como esta es arbitraria, y entra en colisión con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional".

Como viene dicho, la resolución atacada fue dictada en el cumplimiento de comisión ordenada por el Procurador General de la Nación, atendiendo solicitud de asistencia judicial proveniente de la Corte de Casación del Reino de Bélgica. A este respecto es conveniente llamar la atención sobre el hecho de que la vía procesal idónea para la tramitación de este tipo de solicitudes internacionales lo es la carta rogatoria, cuyo conocimiento le compete privativamente a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, según lo dispone el numeral tercero del artículo 101 del Código Judicial y no a la Procuraduría General de la Nación, por lo que la actuación del Ministerio Público en este caso no se ajusta a las formalidades legales, tal como lo exige el artículo 29 de la Ley Suprema.

Los agentes residentes o registrados de sociedades anónimas, como cualquier otra persona, tienen un deber de cooperación con los funcionarios de instrucción, de conformidad con el artículo 384 del Código Judicial. En este sentido, deben prestar su colaboración a las autoridades competentes del Ministerio Público, para los fines de la persecución de los delitos, todo ello enmarcado dentro de la legalidad y el respeto a las normas fundamentales.

Tanto la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, como la Procuraduría General de la Nación, así como cualquier otra autoridad que haya tenido relación con el presente caso, en virtud de la solicitud de asistencia judicial formulada por las autoridades belgas, tienen el deber de guardar reserva de la información así obtenida y, por consiguiente, no deben revelar a terceras personas, por ningún motivo, los datos obtenidos mediante la diligencia de allanamiento y registro que se ataca en esta vía constitucional.

Por otra parte, estima la Corte necesario reiterar que el levantamiento del velo corporativo es una medida provisional y, por regla general, de carácter excepcional. La sociedad anónima se considerará como una persona jurídica independiente de sus socios (a. 251 Código de Comercio), mientras no sobrevengan

razones poderosas que autoricen el desconocimiento de ese principio. Los tribunales y agentes de instrucción deben proceder, caso por caso, con suma prudencia en las situaciones en que se plantea la posibilidad, como última ratio, de desestimación de la personalidad jurídica de una sociedad anónima.

La jurisprudencia de la Corte Suprema tiene señalados los criterios a seguir en la aplicación de la técnica de rasgamiento del velo corporativo. En efecto, mediante sentencia de 29 de enero de 1991, se expresó así:

> "Es evidente que la sociedad Inversiones Diberor, S. A., en razón de la estructura de sus directores y dignatarios, aparece controlada por el señor Francisco Rodríguez Poveda y personas de su inmediato círculo familiar ... el funcionario de instrucción penal se encuentra facultado, en la instrucción del proceso, para penetrar detrás de la fachada de una sociedad anónima y averiguar si ésta se encuentra efectivamente controlada por la persona natural a quien se le imputa un delito cometido en Panamá, en cuyo caso puede ordenar la práctica de medidas cautelares contra bienes que formalmente aparezcan como de propiedad de la sociedad anónima que realmente es controlada por el imputado penal ...
> La desestimación de la personalidad jurídica sólo puede adoptarse en circunstancias excepcionales como las previstas en este caso, es decir cuando a través de la simulación, consistente en la interposición de una sociedad anónima, se pretenda ocultar bienes que pueden ser producto de un delito. Aún en esta hipótesis, la desestimación de la personalidad jurídica sólo procede para los efectos de las medidas cautelares patrimoniales y, eventualmente, de la responsabilidad civil o patrimonial que pueda surgir en conexión con un delito cometido en la República de Panamá".

Se desprende del precedente citado, que el levantamiento del velo corporativo únicamente puede tener lugar, como medida de carácter provisional y excepcional, a los efectos de la práctica de medidas cautelares patrimoniales, relacionadas con un ilícito cometido en Panamá, situación que no es la de este caso.

Luego de las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el amparo de derechos fundamentales interpuesto por la firma forense Patton, Moreno & Asvat, actuando en su propio nombre, contra resolución de 7 de noviembre de 1995 proferida por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. IVÁN A. GANTES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ERNEST W. PESCHL CLINTON, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 3 G. C. E. R. DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licdo. Iván A. Gantes interpuso amparo de garantías constitucionales en representación del Sr. **ERNEST W. PESCHL CLINTON**, contra los Magistrados del Tribunal Superior de Menores, que profirieron la orden de hacer contenida en la resolución N° 3 G. C. E. R. del 31 de octubre de 1995, que revoca la resolución N° 122-S-F del 20 de marzo de 1995, dictada por Juez Primero de Menores; la resolución demandada le concedió la guarda y crianza del menor **ERNEST W. PESCHL ERINNA** a su madre, **MICHELLI ERINNA DEL CID**.

El amparista fundamenta su actuación, principalmente, en los siguientes hechos:

Que el a-quo cumplió con todos los requerimientos que este tipo de proceso amerita -estudios científico y sociales-;

Que su representado fue quien interpuso la demanda en primera instancia, y fue puntual a todos los compromisos con el tribunal, presentado todas las pruebas necesarias para probar su causa;

Que el amparista tuvo que enfrentar el desinterés que la madre del niño demostró en el juicio de Guarda y Crianza, al igual que ante la orden del Juez del anterior Tribunal Tutelar de Menores, que le concedió al Sr. **PESCHL** la reglamentación de visitas; razón por la que el amparista tuvo que interponer varios incidentes de desacato.

Que ambas partes tuvieron las mismas oportunidades para defender sus pretensiones.

Que en los estudios psicológicos, sociales y económicos realizados en el decurso del proceso "siempre resaltaba la figura del padre, como mejor opción para la formación del niño."

Que los testigos presentados por el Sr. **PESCHL** declararon bajo gravedad de juramento, que cuando ambos -señor y señora **PESCHL**- convivían, la conducta del padre era siempre más responsable que la de la madre.

No justifica el actor, el cambio de actitud que tuvo la madre del menor **ERNEST W. PESCHL** a lo largo del proceso, es decir, de una actitud inmadura e irresponsable a una sensata y fiable.

Aduce el Licdo. Gantes que el fallo de segunda instancia se basa en que el padre sólo cuenta con recursos económicos y estabilidad, y aunque señala que eso no es lo fundamental para otorgarle la Guarda y Crianza, no advirtió que ese es uno de los tantos requisitos que el padre tiene a su favor; también que los informes psicológicos y sociales establecieron que el Sr. **PESCHL** cumplía todos los demás requisitos para tener a su hijo en su compañía, y ninguno demostró lo contrario.

Que el Tribunal Superior de Menores se presenta como "defensor y justificador de la conducta de la madre. Pareciera no mantener el grado de ecuanimidad exigido por la ley, porque exime de responsabilidad a la madre, por incumplir las leyes y órdenes (sic) del Tribunal y hasta llega al extremo de justificar por `inmadurez su abandono del hogar, ...".

Considera el amparista que se infringieron los artículos 17 -referente a la obligatoriedad de las autoridades de la República para proteger la vida, honra y bienes a nacionales y extranjeros que estén en el país, así como asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales- y 19 -atinente a que no hay fueros ni privilegios personales por razón de raza, nacimiento clase social, sexo, religión o ideas políticas- de la Constitución Nacional.

La Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que el artículo 17 es de índole programática, toda vez que no contiene derechos subjetivos susceptibles de ser violados; por lo tanto, esta Superioridad no entrará a analizar la confrontación que hace el amparista de los hechos, para demostrar la violación de dicha norma.

En lo que atañe al artículo 19, afirma el amparista que fue violado porque se denotó "un alto grado de feminismo" en las consideraciones que fundamentaron la resolución impugnada, así como la búsqueda de justificación de las actuaciones negativas de la beneficiada con el fallo demandado; también se enalteció los intentos desesperados para impedir que el niño estuviese con su padre; a contrario sensu, el padre fue plasmado como "un simple hombre con buenos ingresos, sin tomarle en cuenta que tenía y tiene las condiciones optimas (sic), morales y familiares, afectivas, habitaciones" para dar una crianza saludable, feliz y correcta.

Considera esta Corporación de Justicia que no le asiste la razón al amparista, toda vez que de lo actuado no se deduce ninguna clase de discriminación.

Ello es así, porque el mismo actor señaló en los hechos con los que fundamentó su amparo, que se le dio a ambas partes igualdad de oportunidades para defender su pretensión, en ambas instancias, con la salvedad de que la Sra. **MICHELLI ERINNA DEL CID** no aprovechó dichas oportunidades para defender su demanda, y su representado sí.

El juzgador de segunda instancia fundamentó su decisión en el principio de la sana crítica, principio que se basa en la lógica y la experiencia, y que lo llevó al criterio vertido.

Considera el Pleno, que la experiencia ha demostrado que un niño pequeño, si bien necesita a ambos padres para formar correctamente su personalidad, necesita más de la madre -sobre todo en los primeros años de vida-, y eso estaba plasmado en el artículo 120 del Código Civil, así como en el 320 del Código de la Familia y el Menor.

Esa situación, aunada a los informes de la trabajadora social, que señaló que el lugar donde vive la Sra. **MICHELLE ERINNA DEL CID**, es adecuado para la crianza del menor **ERNEST**, así como que su conducta es adecuada, sentaron las bases para que el Tribunal Superior de Menores llegara a la decisión impugnada; la misma es compartida por esta Corporación de Justicia.

Por ello, considera la Corte que no ha sido violada la garantía consagrada en el artículo 19 de la Carta Magna.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Sr. ERNEST W. PESCHL CLINTON contra el Tribunal Superior de Menores, que expidió la resolución N° 3 G. C. E. R. del 31 de octubre de 1995.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS GUERRA, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 24-D. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, quien representa los intereses de la UNIÓN DE TRABAJADORES DE CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN, ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, aclaración de la sentencia de 26 de enero de 1996, dictada por esta Corporación de Justicia, mediante la cual se DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta contra el Ministro de Trabajo y Bienestar Social.

En el fundamento de la solicitud, el recurrente expresa criterios subjetivos, irrespetando la decisión de esta Superioridad. En términos generales, nuestro ordenamiento jurídico faculta a toda persona, natural o jurídica, a ejercer los derechos que le asisten y, a su vez, los tribunales competentes tienen la obligación de acogerlos y darles el trámite correspondiente, pero, es necesario advertir al recurrente que el artículo 480 del Código Judicial señala claramente la conducta que se debe mostrar. Veamos:

> "ARTÍCULO 480. En los escritos y memoriales que se presenten al Tribunal no se podrán usar expresiones indecorosas u ofensivas.
>
> El Juez, en cualquier etapa del proceso, puede disponer que se tachen las expresiones ostensiblemente indecorosas u ofensivas, sin perjuicio de las sanciones correccionales o penales que ameriten. La respectiva resolución, en cuanto ordene la tacha o cancelación, es de mero obedecimiento".

Por otra parte, el recurrente ha utilizado la figura de "aclaración de sentencia", como un mecanismo para anunciar disconformidad con el resultado del proceso constitucional y con las motivaciones del fallo, tal como si se tratara de un recurso de apelación. Por tal motivo, el peticionario pierde de vista que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia tienen carácter final y definitivo.

El Pleno observa también que el escrito de aclaración solicitada, no se ciñe a los presupuestos contemplados en el artículo 986 del Código Judicial, ya que no se señala "las frases oscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva", que amérite la modificación o aclaración de la sentencia, tal como preceptúa el mencionado artículo que nos permitimos transcribir para una mejor ilustración:

> "ARTÍCULO 986. La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término.
>
> También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo.
>
> Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo pero sólo en cuanto al error cometido".

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de sentencia que formula el Licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR.

No se impone sanción al accionante, por ser la primera vez.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO G. EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO FERNÁNDEZ CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N CALENDADA EL 9 DE OCTUBRE DE 1995 DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE COLÓN, SAN BLAS Y DARIÉN. CONTRAPROYECTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rafael Solano G. interpuso, en nombre y representación del Sr. Ricardo Fernández, representante legal de **SERVICENTRO FERNÁNDEZ, S. A.** Y **TIENDA DE LICORES**, amparo de garantías constitucionales contra la presente orden de hacer contenida en la resolución s/n del 9 de octubre de 1995, emitida por el Director Regional de Trabajo de Colón, San Blas y Darién, mediante la cual la Dirección dio traslado del pliego de peticiones del **SINDICATO DE TRABAJADORES DE DISTRIBUIDORAS DE GASOLINA Y SIMILARES DE COLON (S. I. N. T. D. I. G. A. S.)** presentado el viernes 6 de octubre de 1995; en la misma resolución advirtió a la empresa demandada que tenía cinco (5) días disponibles para contestar dicho pliego -según lo establece el artículo 436 del Código de Trabajo-.

Luego de admitido el amparo, se ordenó inmediatamente al Director Regional de Trabajo de Colón, Darién y San Blas, Lcdo. Virgilio Cerrud Andrade, que enviara la actuación a esta Superioridad, o en su defecto un informe acerca de los hechos, dentro de las dos (2) horas a partir del recibo de la nota.

El Director remitió el expediente de la actuación en que se dictó la resolución impugnada en este amparo.

El amparista fundamenta su demanda en una multiplicidad de hechos, de los que sobresalen los siguientes:

Que el pliego de peticiones no contiene las quejas concretas que exige el numeral 4° del artículo 427 del Código de Trabajo; hace mención general al supuesto incumplimiento del Código de Trabajo, señalando que no se hicieron peticiones concretas, sino que de forma "imprecisa e impropia" solicitó que el demandado se acogiera a la Convención Colectiva, violando la precitada norma, porque la misma -numeral cuarto- dispone la "celebración" de la Convención Colectiva, y no que se "acoja" o adhiera a la misma.

Que el sindicato declara falsamente que entre ambas empresas -**SERVICENTRO FERNÁNDEZ** Y **TIENDA DE LICORES**- hay treinta y dos (32) trabajadores, cuatro (4) de ellos de confianza, cuando en realidad la empresa tiene sesenta (60) trabajadores, cuatro (4) de confianza y nueve (9) apoyaron el pliego de peticiones.

Que el **SINDICATO DE TRABAJADORES DE DISTRIBUIDORAS DE GASOLINA Y SIMILARES DE COLON (S. I. N. T. D. I. G. A. S.)** aportó certificación de los afiliados a ese sindicato que laboran en la empresa negociante del pliego de peticiones, que contiene una lista de cuarenta y siete (47), de los cuales veintiséis (26) no trabajaban en la empresa al 6 de octubre del año que decurre, fecha en que se presentó a la demandada Dirección Regional de Trabajo de Colón, Darién y San

Blas, el pliego de peticiones que motiva este negocio; diez (10) habían renunciado y a uno se le atribuye una firma y un número de cédula de identidad personal que no le corresponde, por lo que la certificación aportada -el 25 de mayo- no está actualizada.

Que la resolución supuestamente aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 18 de septiembre de 1995 no está autenticada, hecho que infringe el numeral 1° del artículo 428 del Código de Trabajo, que la exige, ya que se lee "2. Lic. Hernando J. Franco M." y en lugar de su firma, aparece la de "María Félix Mc Kenzie".

Que la Resolución N° 1 de la Asamblea General Extraordinaria no está autenticada. La misma no confiere a las personas contenidas en la cláusula segunda para negociar una convención colectiva, sino cualquier otro arreglo. Además, alguien firmó "por" el director Luis Santos sin estar facultado para ello.

Que en un listado de trabajadores de la empresa, se incluyen los nombres de algunos que no laboran allí, a otros se les engañó para usar sus nombres, produciéndose vicio de consentimiento de ellos. Según las normas vigentes, la decisión de los trabajadores no se puede tomar con recolección parcial de firmas.

Que el pliego de peticiones es del 6 de octubre de 1995, por lo que se encuentra bajo la vigencia del Decreto de Gabinete N° 252 del 30 de diciembre de 1971 y la Ley N° 44 del 12 de agosto de 1995, que exige nombres y domicilios de las partes, las cuales no están descritas en el anteproyecto de convención colectiva, ni la empresa contra la cual se propone.

Además, el proyecto de convención colectiva carece de estipulaciones sobre movilidad laboral, fondo de cesantía, productividad, etc., incluidos en la recién aprobada Ley N° 44 ya mencionada, y por ser integrativa, se convierte en cláusula esencial y obligatoria.

Que las cláusulas 6 y 20 de la Convención Colectiva violan la ley, porque la Corte ha manifestado que las Convenciones Colectivas no pueden tener estipulaciones que contengan procesos especiales, las cuales si existen en la presente Convención.

Que la Dirección Regional de Trabajo de Colón, Darién y San Blas dictó la resolución S/N del 9 de octubre de 1995, basado en el pliego de peticiones que nos ocupa, en la que declaró que el pliego fue entregado en "debida forma". No señaló los defectos del pliego ni levantó el acta donde constaban esos defectos, obligación que establece el artículo 433 del Código de Trabajo.

Que los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 y 4 del artículo 403 del Código de Trabajo, reformados por la Ley N° 44 de 1995 son esenciales y obligatorios, sin los cuales no pueden producirse los efectos de una Convención Colectiva.

Como se puede observar a primera vista, la situación que se somete a la consideración del PLENO no constituye materia que se deba discutir como cuestión constitucional. Su misma presentación denota el carácter legal de la misma, ajena al amparo de garantías constitucionales.

El amparista invoca como violados los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Nacional.

Los artículos 17 como el 18 de nuestra Carta Magna han sido declarados como normas programáticas, toda vez que no conllevan derechos subjetivos susceptibles de ser violados.

En cuanto al artículo 32 de la Constitución, el amparista hace una serie de señalamientos que no son hechos o circunstancias violatorios del principio de ser juzgados conforme a los trámites legales. El juzgamiento conforme a los trámites legales se refiere a la observancia de principios fundamentales en la

actuación, aún tratándose de actuaciones de las que no se puede afirmar en sentido estricto que se esté juzgando a los que en ellas intervienen, como es el caso en donde se dictó la resolución impugnada mediante el presente amparo, sobre negociación de convenciones colectivas de trabajo, de que tratan los artículos 398 y 416 del Código de Trabajo.

No es, pues, cualquier contravención la que puede ser objeto de amparo, para que en virtud del ejercicio de la jurisdicción constitucional se enderecen criterios o se subsanen errores en asuntos que deber ser decididos por otras autoridades; pues no se trata de otra instancia.

De lo que se trata es de la defensa de derechos fundamentales garantizados por la Constitución que constituyen requisitos esenciales del debido proceso; expresión ésta equivalente a la de mediante los trámites legales.

Sirva para precisar, aludir a lo expresado por el Doctor Arturo Hoyos:

> "Un aspecto preliminar de gran importancia que me interesa destacar es que el TC ha señalado que solo le compete garantizar el contenido esencial del art. 24 y que "no está establecido para velar y en su caso corregir todos los vicios in procedendo. Solo aquellos que incidan en lo que es esencial en el derecho de jurisdicción y al debido proceso" (sent. 50 de 15 de julio de 1982). Esto es relevante porque, con frecuencia, los litigantes pretenden corregir cualquier irregularidad procesal, por pequeña que sea, acudiendo al amparo, que no está diseñado para ese propósito, sino solo para enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso". (El subrayado es nuestro). (Arturo Hoyos, La Interpretación Constitucional, Editorial Temis, Bogotá, 1993, Pág. 51).

El artículo 24 de la Constitución española contiene la garantía de "cumplimiento de los trámites legales", expresión que emplea nuestra Constitución. Ellos emplean la de "derecho de defensa" (ibídem, Pág. 51); para referirse al mismo concepto contenido en el giro de "debido proceso".

Los derechos fundamentales constitucionales garantizados con el debido proceso, o con el lleno de los trámites legales, son los de (1) oportunidad razonable de ser oído; (2) independencia e imparcialidad del tribunal; (3) oportunidad de aportar pruebas; (4) oportunidad de hacer uso de los medios de impugnación. Se trata de garantizar la oportunidad real de defenderse; de que efectivamente tenga lugar esa oportunidad.

Ha de plantearse, pues, que se trata de la violación de un derecho fundamental de esta naturaleza; cualquiera sea la situación de hecho que constituya el caso real concreto de que en un momento determinado se conozca.

En el amparo de garantías constitucionales que nos ocupa en esta oportunidad, ocurre lo que el Pleno expresó en reciente fallo:

> "El Pleno advierte la importancia que reviste, para la debida consideración del recurso de amparo, al analizar el concepto en que la violación a una norma constitucional, tal como lo estima el recurrente, se ha violado, para determinar que estamos frente a materia constitucional y no legal. No obstante, aprecia el Pleno que en análisis lógico racional del concepto de la infracción constitucional, no se ha detenido a analizar en qué consisten las violaciones al debido proceso, cuyo contenido ha precisado en innumerables sentencias este Pleno, sino a alegar como violadas disposiciones de rango legal" (Sentencia de 26 de enero de 1996, Amparo del Lic. Eduardo Ríos Molinar, en nombre de Luis Guerra).

No se expresa la violación de un derecho fundamental comprendido bajo la garantía constitucional del cumplimiento de los trámites legales.

Antes de concluir, se advierte que en la actuación ante el Director

Regional de Trabajo de Colón, intervenía como parte SERVICENTRO FERNÁNDEZ, S. A.; en cambio, el amparo de garantías constitucionales es solicitado por RICARDO FERNÁNDEZ, personas distintas. La Corte ha expresado que es la persona afectada con el acto impugnado -orden de hacer o de no hacer- quien debe ejercitar la acción.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el Licenciado Rafael Solano G. en nombre de RICARDO FERNÁNDEZ.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE E. MORA VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO DE BIASE ÁLVAREZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE YAKIMA INTERNACIONAL, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 29 de diciembre de 1995, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no admitió el amparo de garantías constitucionales interpuesto por YAKIMA INTERNACIONAL, S. A. contra la resolución judicial dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 13 de junio de 1995,

Dentro del término de ejecutoria, la licenciada IRENE E. MORA VALDÉS, ha presentado escrito en el que solicita la "reconsideración por irregularidad en este proceso de Amparo".

Observa la Corte que la apoderada judicial de YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., persigue que esta Corporación de Justicia reconsidere su pronunciamiento. Ello se deduce del extenso alegato, entre otras cosas, los siguientes argumentos:

> "...
> Pero, para los efectos de este recurso de reconsideración, lo más saliente es que, no habiéndose admitido la demanda de amparo promovida en su propio nombre por el abogado GUILLERMO A. COCHEZ a favor de YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., dicha demanda se tiene por no puesta; y no era YAKIMA INTERNACIONAL, S. A. la demandante sino la beneficiaria de la acción. ...".

No cabe la menor duda que la pretensión de la licenciada IRENE E. MORA VALDÉS, no encuentra asidero en norma jurídica alguna, pues es sabido que contra las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y de sus Salas no cabe ningún recurso.

Esta Corporación de Justicia ya se ha pronunciado en relación con la materia objeto de este recurso. Ello es así, en sentencia de 13 de septiembre de

1994, bajo la ponencia del Magistrado RAFAEL GONZÁLEZ, se mantuvo el criterio, de idéntico contenido de la sentencia de 28 de mayo de 1992 que señala lo siguiente:

> "...
> Es evidente que las sentencias que emite la Corte en materia de amparo de garantías constitucionales hacen tránsito a cosa juzgada, tanto formal como material, de conformidad con lo previsto en el artículo 2621 del Código Judicial. Por esta razón debe rechazarse de plano el mencionado recurso." (Amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma de abogados CAJIGAS & CONSOCIOS, en representación de la señora DESIREÉ ACOCA DE MOSSACK, contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución N° 229 S. C. de 21 de marzo de 1991, dictada por el Tribunal Tutelar de Menores)". (Registro Judicial. Septiembre de 1994. Pág. 2).

Por otra parte, esta Corporación de Justicia ha reiterado la improcedencia del recurso de reconsideración en las demandas de amparo de garantías constitucionales por lo que nos permitimos citar fallo proferido por esta Superioridad, el 14 de noviembre del 1991, que señala:

> "El único recurso que el Código Judicial establece que en contra del fallo que concede o deniega el amparo es el recurso de apelación. No hay norma legal que establezca que el recurso de reconsideración procede. De lo anterior se colige que sólo cabe el recurso de apelación el cual, a la luz del párrafo final del artículo anteriormente transcrito, deberá ser enviado por el Tribunal inferior al superior para que decida la alzada. En consecuencia, el amparo sólo admite apelación en el caso de que exista un superior jerárquico, que no es el caso de la Corte Suprema de Justicia. Lo procedente es, pues, rechazar este recurso de reconsideración". (Registro Judicial, Noviembre de 1991, pág. 20).

En el caso que nos ocupa al Pleno, se reitera el criterio expresado en las sentencias antes mencionadas, por tanto, procede el rechazo de plano del presente recurso de reconsideración.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de reconsideración propuesto por la Licenciada IRENE ESTHER MORA VALDÉS, en su condición de apoderada especial de YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. RICARDO VILLARREAL ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENE CHARLES MCGRATH RENAULD, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 30 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Villarreal Alvarado, actuando en representación de

EUGENE McGRATH RENAULD, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales, contra de la Resolución de 30 de enero de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual se "DENIEGA el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por EUGENE McGRATH RENAULD en contra de la Honorable Juez Segunda del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil."

La Corte procede en primer lugar a examinar si la demanda reúne las condiciones de admisibilidad, para determinar si procede acoger o no la acción interpuesta.

El Pleno de esta Corporación de Justicia, ha manifestado en reiteradas ocasiones, así como lo señaló en Sentencia reciente de 18 de marzo de 1993 que:

> "La sentencia que decide una acción de amparo no es una orden de hacer o no hacer. Dicha sentencia decide sobre la conformidad o no de la orden impugnada como violatoria de los derechos y garantías constitucionales, concediendo o denegando, según la decisión del Tribunal de Amparo. Por ello no cabe amparo, que es una acción constitucional, contra un (sic) sentencia que decide un proceso constitucional de amparo. Es como si se presentara una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia que decide una acción de inconstitucionalidad." (Subraya la Corte).

De lo anterior, se colige que, no puede admitirse la presente demanda, pues lo que se impugna es una sentencia emitida en un proceso de amparo de garantías constitucionales, en la que se resolvió la constitucionalidad de la orden impugnada, y tal como lo señaló el Pleno en Sentencia de 5 de julio de 1994, "se produciría un doble examen sobre la constitucionalidad del mismo asunto, y en esta materia los fallos son finales y definitivos aún cuando los dicte la justicia ordinaria."

Por otra parte, cabe señalar que el demandante debió proponer un recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y no un recurso de amparo de garantías constitucionales.

Por todo lo anteriormente expuesto, no le es posible a la Corte Suprema de Justicia, pronunciarse sobre la constitucionalidad de una sentencia que decide un proceso constitucional de amparo de garantías constitucionales y sólo, cabe señalar, que la demanda debe declararse inadmisible, por ser manifiestamente improcedente.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales, contra la Resolución de 30 de enero de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MAGISTRADO PONENTE (ANTERIOR): FABIÁN A. ECHEVERS. EL ORGANO EJECUTIVO CONSULTA LA INEXEQUIBILIDAD DEL PROYECTO DE LEY "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y DEUDA PÚBLICA". CONTRAPROYECTO: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GUILLERMO ENDARA GALIMANY, actuando en las funciones de Presidente de la República, remitió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante nota, el proyecto de ley "Por la cual se dictan normas en materia de negociación y contratación de empréstitos y deuda pública", con el objeto de que el Pleno de esta Corporación "decida definitivamente la exequibilidad de dicho proyecto de Ley".

La nota remisoria hace un breve recuento de los antecedentes de esta causa constitucional, y entre los documentos que con ella se envían figuran copias de dos notas dirigidas por el presidente Endara al presidente de la Asamblea Legislativa, formulando objeciones a dos versiones del proyecto de ley en cuestión.

Tras haber sido acogida la demanda por iniciativa presidencial, fue corrida en traslado al Procurador de la Administración para que emitiera concepto, trámite que diera lugar a la Vista consultable de folios 39 a 52 del cuaderno.

LOS ANTECEDENTES DE LA CAUSA

El proyecto de ley que se objeta fue enviado por primera vez al Presidente de la República el 21 de junio de 1990, para su sanción y promulgación en la Gaceta Oficial (f. 12), quien lo devolvió a la Asamblea, sin su aprobación, "por varias razones", mediante nota de 30 de julio de 1990 (f. 13). El 27 de diciembre de 1990 el Secretario General de la Asamblea Legislativa se dirigió otra vez al Jefe del Órgano Ejecutivo, remitiéndole el proyecto de ley para su sanción y promulgación en la Gaceta Oficial por segunda vez, con nota en la que le comunica que las objeciones presidenciales "fueron reconsideradas en segundo debate el día 26 de noviembre de 1990 y aprobada (la ley) en tercer debate el día 26 de diciembre de 1990" (f. 17).

El 4 de febrero de 1991 el Presidente de la República vetó nuevamente el proyecto de ley, objetándolo en esta oportunidad "en su conjunto", **por manifiestamente inconveniente y por inexequible**.

LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES

En la primera de las dos oportunidades en que el Presidente de la República devolvió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley sin sancionarlo (f. 17), dijo hacerlo "por varias razones", sin precisar si alguna de ellas tenía rango constitucional. Las "razones" esgrimidas para esta primera devolución fueron enunciadas de la siguiente manera:

> "... El proyecto de Ley exigirá que todo empréstito reciba la opinión favorable del Procurador General de la Administración sobre su legalidad y efecto vinculante. Este requisito, que va más allá de las propias exigencias de las entidades financieras públicas y privadas, representa un trámite adicional previo a la firma del contrato de préstamo. No dudamos de la importancia de la opinión legal solicitada pero establecerla como un requisito previo a la suscripción del contrato y no, en todo caso, al desembolso de la suma prestada, puede dar al traste con la culminación oportuna del trámite de negociación de empréstitos. Esto es así porque, en la práctica, las entidades de financiamiento establecen fechas límites o términos dentro de los cuales deba finalizarse el proceso de negociación, ya sea para llevar un contrato de préstamo a consideración de sus organismos directivos (como sucede con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional) o porque se venza el término de una oferta de financiamiento otorgada por un tiempo específico. Estas práctica, que son comunes y normales en este tipo de financiamiento, podrían determinar el fracaso de una negociación conveniente para el país en

razón de que no se llene oportunamente el requisito previo de contar con una opinión legal favorable, que hoy día es un requisito por lo general a posteriori en los casos en que se exige.

Por otro lado, el límite establecido en el Artículo 15 del Proyecto de Ley, que requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa para la contratación de empréstitos superiores a B/.5 millones, hace virtualmente inmanejable este tipo de empréstitos en la práctica. Ello es así porque se añaden pasos administrativos a un trámite ya, de por sí, considerablemente largo; esto puede llevar igualmente a la pérdida de oportunidades de financiamiento ventajosos, ofrecidos por un término dado, o a incumplir plazos requeridos por organismos internacionales.

...

En tercer lugar, debo confesar que me resulta incongruente el contenido del Artículo 12 del Proyecto de Ley pues no se compadece en su filosofía con el resto del articulado del Proyecto. En efecto, mientras el Proyecto de Ley tiende a establecer rígidos controles y trámites para la contratación de empréstitos --tantos, que los estimo inmanejables, como he mencionado-- el Artículo 12 excluye totalmente la contratación de empréstitos por el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario Nacional. Sin embargo, ambos bancos obtienen sus fondos de las mismas fuentes de financiamiento que el resto del sector público y el endeudamiento de ambos bancos es también endeudamiento público que se suma a las obligaciones totales de la República. El hecho de ser endeudamiento del sector financiero no lo hace menos endeudamiento que el del sector no financiero del Estado. Por ello no me parece juicioso que el Banco Hipotecario Nacional o el Banco de Desarrollo Agropecuario, pueda legalmente endeudarse libremente, aun sin control del Ministerio de Planificación y Política Económica, en un monto igual o mayor que todo el resto del sector público sujeto a control. Esa posibilidad legal se la brinda el Artículo 12 del Proyecto de Ley, tal cual viene redactado, y no veo la diferencia conceptual que amerite la excepción ..." (Fs. 14-15).

El segundo veto recaído en el mismo proyecto, que diera lugar a su segunda devolución a la Asamblea Nacional, se formuló indicando que el Presidente de la República "objeta en su conjunto el Proyecto de Ley. Por otra parte, el veto se hace por dos razones fundamentales: la primera, porque es manifiestamente inconveniente; y la segunda, porque el proyecto es inexequible" (f. 18).

INEXEQUIBILIDAD

La **objeción por inexequibilidad** se presenta "analizando dos argumentos distintos":

"**PRIMER ARGUMENTO**: El Proyecto de Ley objetado no siguió el procedimiento constitucional para la formación de leyes, lo que se demuestra con las siguientes consideraciones:

1. El Proyecto de Ley en referencia tuvo su origen en el (sic) Asamblea Legislativa como anteproyecto propuesto ante el Pleno de la Cámara por un Legislador, en la sesión del día 8 de marzo de 1990.

2. La Legislatura comprendida entre el 1° de marzo y el 30 de junio de cada año está descrita como la segunda de las legislaturas ordinarias en el lapso de un año, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 143 de la Constitución Política.

3. Por su parte, el Artículo 169 de la Constitución Política establece taxativamente que "Los Proyectos de Ley que queden pendientes en un período de sesiones sólo podrán ser considerados como Proyectos nuevos".

El período de sesiones es el que comprende dos legislaturas de cuatro meses cada una en el lapso de un año; del 1° de septiembre al 31 de diciembre y del 1° de marzo al 30 de junio, según lo establece el precitado Artículo 143 de la Constitución Política.

Es lógico deducir, que el mencionado Proyecto de Ley objetado en julio, debió ser considerado como proyecto nuevo en la legislatura que se inició el 1° de septiembre, por ser esta parte del nuevo período, al tenor de lo preceptuado en el Artículo 169 en concordancia con el Artículo 143 de la Constitución Política.

4. Por otra parte, dicho Proyecto de Ley, objetado en su conjunto, debía volver a la Asamblea Legislativa a tercer debate, tal como lo dispone el Artículo 164 de la Constitución, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 164: El Proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo fuere sólo en parte, volverá a segundo, con el único fin de considerar las objeciones formuladas.

Si consideradas por la Asamblea Legislativa las objeciones, el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Legisladores que componen la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuvieren la aprobación de este número de Legisladores, el proyecto quedará rechazado".

No obstante, el Proyecto objetado en su conjunto fue llevado a segundo debate, en detrimento del Artículo 164 de la Constitución Nacional supracitado.

Adicionalmente, la Asamblea Legislativa le introdujo una modificación al Artículo 15, violando en esta forma lo dispuesto en el Artículo 164 que en su primera parte dispone que "el Proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Legislativa a tercer debate ...". Según las Normas Constitucionales citadas la Asamblea Legislativa sólo puede considerar las objeciones al Proyecto y proceder a la votación para aceptarlas o rechazarlas, sin introducir cambios en el texto.

SEGUNDO ARGUMENTO: Este se refiere fundamentalmente al Artículo 15 del Proyecto de Ley, según el cual:

"La contratación de empréstitos por sumas superiores a los diez millones de balboas (B/.10,000,000.00), requerirá para su validez y perfeccionamiento la autorización mediante Resolución de la Asamblea Legislativa, previo concepto de la Comisión de Hacienda y Tesoro y Planificación y Política Económica".

Según la doctrina del "bloque de constitucionalidad", plenamente establecida por nuestra Corte Suprema de Justicia, cuando a la Asamblea Legislativa le corresponde reglamentar una actividad gubernamental, no puede renovarse para sí la aprobación o improbación de tal medida gubernamental.

En efecto, la doctrina del bloque de constitucionalidad tiene su origen en el Consejo Constitucional francés que mantiene la expresión "bloc constitucionalité" (sic), para emplearla en la identificación del conjunto de normas que dicho Consejo Constitucional aplica en el control previo de las leyes y los reglamentos parlamentarios. De Francia pasó a España, Italia y Costa Rica entre otros países. El propulsor de esta doctrina en nuestro sistema constitucional ha sido el Magistrado Arturo Hoyos, en artículo publicado en el Panamá América del 2 de mayo de 1990, página 4A, y se encuentra consagrada en la sentencia del 30 de julio

de 1990.

Según esta doctrina, existen normas fuera de la Constitución formal que, junto con ésta, forman un "bloque de constitucionalidad" al cual deben ajustarse las leyes para que sean consideradas constitucionales. La infracción de este bloque de constitucionalidad determinaría la inconstitucionalidad de la ley impugnada.

Ahora bien, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de noviembre de 1988 se establece como doctrina y como parte precisamente del bloque de constitucionalidad, que el Órgano Legislativo no puede so pretexto de usar una función de reglamentar una actividad gubernamental, otorgarse a sí misma la facultad de aprobar o improbar dichas actividades gubernamentales.

A la luz de lo anterior, veamos el caso que nos ocupa. El numeral 11 del Artículo 153 de la Constitución Nacional dispone lo siguiente:

Numeral 11. Dictar las normas generales o específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a éstas últimas, el Estado tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar o contratar empréstitos, organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de la aduana.

Así, pues, la Constitución faculta al Legislativo para reglamentar la actividad estatal consistente en "negociar o contratar empréstitos". La Asamblea Legislativa no puede, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia que forma parte del bloque de constitucionalidad, otorgarse a sí misma la facultad de aprobar o improbar dichos empréstitos, so pretexto de que está reglamentando dicha actividad de acuerdo con el numeral 11 del Artículo 154 de la Constitución Nacional".

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Al evacuar el traslado que le fuera corrido de la demanda, el entonces Procurador de la Administración, licenciado Donatilo Ballesteros, emitió la Vista consultable del folio 39 a 52 del cuaderno, en la que solicita "declarar no viable las objeciones de inexequibilidad formuladas por el Ejecutivo, ... o en su defecto declarar inexequible solamente el artículo 13 del mismo".

En lo que concierne al primer aspecto de su solicitud, o sea la no viabilidad de las objeciones de inexequibilidad, el Procurador consultado la sustenta de la siguiente manera:

"I- CUESTIÓN PREVIA.

Se observa, en primer lugar, que habiendo sido remitido para su sanción y consiguiente promulgación, el proyecto de ley "Por la cual se dictan normas en materia de negociación y contratación de empréstitos y deuda pública", el Excelentísimo Señor Presidente de la República lo devolvió a la Asamblea Legislativa con objeciones, "por varias razones" detalladas en la Nota N° DP-332-90 del 30 de julio de 1990, ninguna de las cuales dice relación con la inexequibilidad del citado Proyecto de Ley. Tales objeciones formuladas por el señor Presidente fueron consideradas por la Asamblea Legislativa en segundo debate el día 26 de noviembre de 1990, y aprobado el proyecto en tercer debate el 26 de diciembre de 1990, luego de lo cual fue remitido nuevamente dicho proyecto de Ley al Ejecutivo, mediante nota N° AL/SG-356 fechada 27 de diciembre de 1990, para su sanción y promulgación en la Gaceta Oficial, como lo

dispone el Artículo 164 de la Constitución Nacional, del siguiente tenor literal:

"ARTÍCULO 164: El Proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo fuere sólo en parte, volverá a segundo, con el único fin de considerar las objeciones formuladas.

Si consideradas por la Asamblea Legislativa las objeciones, el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Legisladores que componen la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviere la aprobación de este número de legisladores, el proyecto quedará rechazado.

De acuerdo con este precepto constitucional, el Ejecutivo no podrá hacer nuevas objeciones a un proyecto de ley que hubiese sido vetado con anterioridad y que fuere aprobado por insistencia, por una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores que componen la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el caso bajo estudio el Ejecutivo devolvió nuevamente con objeciones el Proyecto de Ley "Por el cual se dictan normas en materia de negociación y contratación de empréstitos y deuda pública", aduciendo textualmente que:

"el veto se hace por dos razones fundamentales: la primera, porque es manifiestamente inconveniente; y la segunda, porque el proyecto es inexequible ... El presente proyecto es similar a otro de igual título que vetó el 30 de julio de 1990, mediante nota N° 332-90. Al nuevo proyecto que hoy se veta, se le introdujo una modificación en el artículo 15, aumentando a **diez millones de balboas (B/.10,000.000.00)** lo que antes era **CINCO MILLONES DE BALBOAS (B/.5,000,000.00)** ... Se trata por lo tanto de un nuevo Proyecto de Ley, el cual veto (en conjunto -lo mismo que la vez anterior- y que además de su inconveniencia, esta vez objeto por su inexequibilidad." (Cfr. fs. 18-19).

Habida cuenta de lo anterior, consideramos que resulta improcedente la tramitación de las objeciones de Inexequibilidad en referencia, ya que fueron formuladas conjuntamente con "nuevas objeciones de inconveniencia", las cuales prohíbe (sic) expresamente el artículo 164 constitucional.

No obstante y para el evento de que vuestra corporación decida analizar en el fondo, las objeciones de inexequibilidad propuestas por el señor Presidente al Proyecto de Ley en mención, consignamos a continuación nuestro criterio sobre las mismas." (F. 41).

La objeción de inexequibilidad introducida con ocasión del segundo veto presidencial dio lugar a una solicitud subsidiaria de la Procuraduría de la Administración en la contestación del traslado, consistente en que se declare "inexequible solamente el artículo 13 del mismo" proyecto. En su comentario sobre este aspecto particular de las objeciones, la Vista Fiscal recurre a extensas consideraciones, sustentadas en la interpretación de las normativas constitucional y legal, así como en abundante cita doctrinal y jurisprudencial, todo ello consultable de folio 41 a 52 del cuaderno. El comentario de las objeciones de inexequibilidad lo realiza refiriéndose separadamente a sus componentes más salientes, **siguiendo el orden de las tres razones invocadas en el veto**, a saber:

1. "**Porque fue aprobado en segundo y tercer debate**, como si se tratara de un Proyecto de Ley objetado parcialmente, a pesar de que fue objetado en su conjunto". Aduce como violado por el Artículo 164 de la Constitución Nacional, que en su primera parte dispone: "El Proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo volverá a la Asamblea Legislativa a tercer debate ...". Sobre este particular la Vista Fiscal expresa la opinión de que:

"A este respecto, observamos que en la Nota N° DP-332-90 de 30 de julio de 1990 legible a fojas 13-16, que el Excelentísimo señor Presidente de la República le dirigió al Doctor Carlos Arellano Lenox, a la sazón Presidente de la Asamblea Legislativa, no se señala expresamente que se objeta el Proyecto de Ley, "en su conjunto", si no que se hace un recuento de la situación fiscal en que se encontraba el país a esa fecha y de las circunstancias imperativas en la comunidad financiera nacional e internacional, que hacían el Proyecto de Ley aludido "... tan delicado para el ordenamiento de las finanzas públicas y la recuperación económica del país" ... A renglón seguido se exponen objeciones a artículos específicos, que se consideran inoportunos o injustificados.

Siendo ello así, no nos parece que la Asamblea Legislativa al considerar tales objeciones en segundo y tercer debate, haya desconocido o infringido el procedimiento de formación de leyes prevista en el Artículo 164 de la Constitución Nacional, máxime que en este caso en particular el Ejecutivo devolvió nuevamente el citado proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, con objeciones de inconveniencia similares a las antes expuestas en la Nota N° PD-332-90, además de las objeciones de inexequibilidad, las cuales fueron consideradas "infundadas e improcedentes por el Pleno de la Asamblea el 16 de abril de 1991, según consta en la Nota AL/SG-58 de 21 de marzo de 1994, suscrita por el Licenciado **Arturo Vallarino**, **Presidente de la Asamblea Legislativa**, dirigida a su Excelencia Licenciada **IVONNE YOUNG**, Ministra de la Presidencia ...". (Fs. 42-43).

"2- Porque al ser vetado en julio el Proyecto de Ley, debió ser considerado como proyecto nuevo en la legislatura que se inició el 1° de septiembre; al tenor de lo dispuesto en el artículo 169 en concordancia con el Artículo 143 de la Constitución Nacional". Este argumento también es desestimado por el Procurador de la Administración, por las siguientes razones:

"Explica el señor Presidente que el Proyecto de Ley en referencia fue propuesto el 8 de marzo de 1990, y aprobado por la Asamblea Legislativa durante la segunda Legislatura comprendida entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 1990, y que el Artículo 169 de la Constitución Nacional establece taxativamente que: `Los Proyectos de Ley que queden pendientes en un período de sesiones sólo podrán ser considerados como proyectos nuevos."

Sobre este particular se ha pronunciado esa alta Corporación Judicial, por lo menos en tres ocasiones, a saber: mediante fallos de 30 de julio y de 17 de diciembre de 1992 y de 21 de abril de 1993, en el sentido que las normas constitucionales aludidas por el señor Presidente, no son aplicadas al caso de un Proyecto de Ley que hubiese sido objeto por inconveniencia o inexequibilidad, sino "a aquellos Proyectos de Ley que han permanecido en las Comisiones de la Asamblea Legislativa sin haber sido considerados, o habiéndolo sido no superaron los tres debates en el Pleno de la misma" (V. Sentencia de 17 de diciembre de 1992).

En el último fallo en mención la Corte Suprema aclaró que:

"... no es correcta la afirmación plural que se hace en el sentido de que la falta de sanción y, por ende, el hecho de la no promulgación hacen que el referido proyecto deba considerarse como nuevo y por tanto deba ser sometido a la consideración de la Legislatura siguiente.. Precisamente en estos casos, la apuntada omisión no puede atribuirse al Órgano Legislativo que, de acuerdo con la Constitución, ha cumplido con las normas que rigen el proceso de formación de la Ley. La falta de agotamiento del procedimiento de formación de la Ley sería imputable en todo caso, por simple lógica,

al poder que tiene la obligación constitucional de realizar los actos de sanción y promulgación: el Órgano Ejecutivo". (Las subrayas son de la Corte)" (fs. 43-44).

"3- Porque el artículo 15 del Proyecto de Ley es contrario a la doctrina del "bloque de constitucionalidad" establecida por nuestra Corte Suprema de Justicia, según la cual "cuando a la Asamblea Legislativa le corresponde reglamentar una actividad gubernamental, no puede reservarse para sí la aprobación o improbación de tal medida gubernamental." Agrega el señor Presidente que: "... en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de noviembre de 1988 se establece como doctrina y como parte precisamente del bloque de constitucionalidad, que el Órgano Legislativo no puede so pretexto de usar una función de reglamentar una actividad gubernamental, otorgarse así (sic) misma la facultad de aprobar o improbar dichas actividades gubernamentales." (Cfr. fj. 26-28)". A esta argumentación la Vista Fiscal opone las siguientes consideraciones:

"No compartimos la opinión del señor Presidente, ya que tal como lo ha señalado el Magistrado **Arturo Hoyos** en su ensayo intitulado **"El Control Judicial y el Bloque de Constitucionalidad en Panamá**,"... sólo las sentencias constitucionales de la Corte Suprema que sean compatibles con el Estado de Derecho pueden integrar el bloque constitucional. De esa forma, aquellas sentencias expedidas durante el régimen militar que legitimaron violaciones a los derechos fundamentales; disminuyeron o hicieron ineficaz el control judicial de legalidad o de constitucionalidad, o justificaron la violación al principio de separación de poderes, no pueden formar parte del bloque de constitucionalidad". (Ob. citada, pág. 32).

En este sentido, destacamos que a la Asamblea Legislativa le corresponde de acuerdo con el Artículo 153 de la Constitución Nacional, entre otras cosas:

"11. Dictar las normas generales o específicas a las cuales debe sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a éstas últimas, el Estado tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes aspectos: Negociar y contratar empréstitos; Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio ...".

14. Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas.

15. Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere reglamentada previamente conforme al numeral catorce o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieren ajustadas a la respectiva Ley de autorizaciones".

De manera que al sujetarse en el Proyecto de Ley bajo censura, la contratación de empréstitos por sumas mayores a los **DIEZ MILLONES DE BALBOAS (B/.10,000,000.00)** a la aprobación de la Asamblea Legislativa, antes que infringirse disposiciones constitucionales, se les está dando cumplimiento a aquellas que se han dejado transcritas.

Cabe señalar que, durante la mayor parte del tránsito constitucional panameño, le ha correspondido a la Asamblea Legislativa autorizar y/o aprobar la contratación de los empréstitos que celebre el Ejecutivo. En efecto, ello se colige sin mayor esfuerzo de los Artículos 65 (Numerales 5 y 6) de la Constitución de 1904, 88

(Numerales 4 y 5) de la Constitución de 1941, 118, (Numerales 6 y 7) de la Constitución de 1946, 153 (Numerales 11, 14 y 15) de la Constitución de 1983 ..."

LA ETAPA DE LOS ALEGATOS

Dentro del período fijado para que el demandante y cualquier persona interesada presentaran argumentos por escrito en esta causa, compareció el licenciado Salvador Sánchez González y anunció su oposición a la objeción de inexequibilidad en trámite. El libelo con tal objeto presentado recoge fundamentalmente las opiniones que tanto el compareciente como otros integrantes del Departamento de Asesoría Jurídica del Órgano Legislativo rindieran con relación a las objeciones presidenciales, durante el proceso de formación de la ley (fs. 118 a 125 y 126 a 133).

Luego de ofrecer una relación de los hechos más salientes de este proceso constitucional y de considerar los argumentos que sustentan el veto ejecutivo, el licenciado Sánchez se refiere a lo que denomina "La segunda objeción presidencial **y su inconstitucionalidad**". (subraya la Corte). A este respecto manifiesta que:

"Del mismo modo abría (sic) que advertir que el Artículo 164 de la Constitución Política ha sido infringido de forma directa, por comisión, al lesionarse el expreso mandato de nuestro más importante texto jurídico.

Dicha norma es tajante al señalar la obligación del Ejecutivo de sancionar y hacer promulgar el proyecto de Ley objetado, cuando consideradas las objeciones presidenciales la Asamblea Legislativa hubiera insistido en su aprobación. Tal y como se desprende de los hechos que sustentan este alegato, la Asamblea Legislativa consideró en segundo y tercer debates (sic) las objeciones presentadas por el presidente de la República, habiendo remitido con posterioridad a la Presidencia el proyecto de ley para su debida sanción y promulgación. Sin embargo, el Presidente de la República volvió a objetar el Proyecto de Ley N° 5, mediante la nota DP-038-91 del 4 de febrero de 1991, violando el expreso mandato de la Constitución".

...

El trámite dado por la Asamblea Legislativa a la primera Objeción Presidencial al proyecto de ley N° 5 fué (sic) como vemos constitucional y doctrinalmente correcto. Por el contrario, la segunda objeción presidencial, con fecha 4 de febrero de 1991, atenta contra lo establecido en nuestra Carta Fundamental.

Es oportuno señalar aquí que si el Presidente de la República consideraba que el Proyecto de Ley N° 5 adolecía, aún después de consideradas sus objeciones por el Pleno de la Asamblea legislativa, de algún vicio jurídico de carácter constitucional, correspondía que él actuara según el mandato constitucional contenido en el Artículo 164, sancionado y promulgado dicho Proyecto de Ley, para luego demandarlo ante la Corte Suprema de Justicia en uso del Recurso de Inconstitucionalidad. La forma seleccionada por el Presidente de la República para impugnar el proyecto de ley N° 5 es equivocada y a nuestro criterio, viola el mandato de la Constitución Política" (fs. 164-166).

DECISIÓN DE LA CORTE

La extensa relación hecha hasta ahora sobre los antecedentes y demás particularidades de esta causa da cuenta de que el proyecto de ley fue devuelto sin sancionar por primera vez el 30 de julio de 1990, por haber sido objetado, **no en su conjunto**, sino "por varias razones" (f. 14), consistentes en la censura directa de **3 de sus artículos**, concretamente los artículos 12, 13 y 15, **sólo por razones de inconveniencia**. Esta modalidad de la censura presidencial trajo como consecuencia que el proyecto fuera devuelto a segundo debate, en cumplimiento de

lo que preceptúa el artículo 164 de la Carta Magna: "... Si lo fuere (objetado) sólo en parte, volverá a segundo debate, con el único fin de considerar las objeciones formuladas". La Asamblea consideró las objeciones del Ejecutivo, ratificando en segundo debate los artículos 12 y 13 y modificando el artículo 15, para aumentar de cinco a diez millones el monto de los empréstitos que requieren la autorización de la Asamblea Legislativa, luego de lo cual aprobó en tercer debate, por insistencia, el proyecto modificado, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los legisladores, tal como lo exige el inciso segundo del mismo precepto.

La Corte advierte que es, precisamente, esta labor aditiva de la Comisión respectiva la que encuentra esta Superioridad que contraría la norma constitucional que se refiere a las consideraciones que deben hacérsele a un proyecto de ley que ha recibido objeciones del señor Presidente de la República, actividad que se debe contraer a considerar las objeciones del Órgano Ejecutivo y no dictar otras en su reemplazo, cuando éstas desatienden las sugerencias del Jefe del Ejecutivo, dictando otras normas en su reemplazo. Esta actividad, en esta fase del procedimiento parlamentario, se lo veda a la Asamblea el artículo 164, al permitirle a éstas limitarse a considerar (o no) las objeciones del Jefe del Ejecutivo. Veamos la norma:

> "ARTÍCULO 164. El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo fuera solo en parte, volverá a segundo, con el único fin de considerar las objeciones formuladas.
>
> Si consideradas por la Asamblea Legislativa las objeciones el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Legisladores que componen la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviere la aprobación de este número de legisladores, el proyecto quedará rechazado". (Subraya el Pleno).

Aún cuando la objeción presidencial, que afecta todo el proceso parlamentario de la Ley en cuestión, bastaría para concluir que el proyecto de ley así aprobado es violatorio de la Constitución y, concretamente, del artículo 164, no considera ocioso el Pleno externar algunas consideraciones sobre el régimen de las leyes cuadro, adoptado con cambios, de la Reforma Constitucional a la anterior Constitución Colombiana en 1968, institución ésta que ha sido incluida en la Constitución de 1991, por cuanto dicho sistema es aplicable a los empréstitos, que, en ocasiones anteriores, requería de autorización legislativa, lo que no ocurre con nuestra Constitución.

En las actas de la Comisión de Reformas que elaboró el pliego de reformas a la Constitución vigente en 1993, y que, dado el profundo alcance de su contenido, algún distinguido expositor la ha denominado "la Constitutición de 1983" se debe buscar la motivación del cambio al sistema que tradicionalmente imperaba desde la Constitución de 1904 hasta la Constitución de 1946. En el acta N° 21 podemos leer en el tercer párrafo lo que se transcribe:

> "...
> También es oportuno tomar nota de que la subcomisión le propone al pleno una norma especial, ya que de cara a la posible inercia legislativa o sea el peligro de que el Órgano Legislativo no promulgue oportunamente las normas generales que se recogen en la Ley Cuadro. Podría, a juicio de la comisión en este caso, crearse un problema de marca mayor de cara al financiamiento o refinanciamiento de la deuda pública. Entonces, para ese caso la subcomisión ha previsto lo que en otros países se denomina "reglamento autónomo" o "reglamento constitucional". Quedará ese precepto recogido en la frase que voy a leer del precepto pertinente. Dice así: "Mientras el Órgano Legislativo no haya dictado ley o leyes que contengan las normas generales correspondientes, el Órgano Ejecutivo podrá ejercer estas atribuciones ... y enviará al Órgano Legislativo copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad". ...".

Finalmente, el Pleno discurre con respecto a la posición o marco de competencia de la Asamblea con respecto a las leyes cuadro. El licenciado ROGELIO A. FÁBREGA Z., en un trabajo dedicado al tema, "El régimen arancelario y las leyes cuadro", abordó el tema en los conceptos que la Corte hace suyos:

"...

La redacción del ordinal 7° del artículo 195 de la Constitución no puede ofrecer, a mi juicio, duda en el sentido de que es una competencia que el ordenamiento en forma expresa le asigna al Consejo de Gabinete, fijándole límites, condiciones o restricciones en su ejercicio, que operan como auténtica conditio iuris para la validez del acto, contenidas precisamente en las leyes cuadro, dentro de cuyas normas legislativas, debe preceptivamente el Consejo de Gabinete ejercer la atribución que le asigna el ordenamiento constitucional.

El núcleo de la cuestión se encuentra, en mi opinión, en el alcance que se le asigna al vocablo "norma", derivada del hecho de que nuestras Constituciones frecuentemente utilizan la forma de Ley para la adopción de medidas que, en sustancia, no son normas en sentido material, esto es, reglas de derecho, aunque sí sean Leyes en sentido formal. Así ocurre, por ejemplo, en la aprobación de los contratos a los que se refiere el ordinal 15° del artículo 153. El acto de aprobación es, esencialmente, un típico acto administrativo y no un acto legislativo.

En el caso de las leyes cuadro, no obstante, no estamos frente a la expedición de actos administrativos en forma de Ley por parte de la Asamblea Legislativa, sino que ésta, con su expedición, establece auténticas normas a las que debe ceñirse necesariamente el Consejo de Gabinete cuando ejercita la potestad constitucional de "fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas". ...".

De la lectura del artículo 153, numeral 11 de la Constitución Política de la República se desprende el carácter relativo al contenido de la misma: ésta siempre debe contener normas, es decir, reglas de conducta. Estas pueden ser normas que regulan relaciones intersubjetivas o por el contrario, normas encaminadas a la forma y manera en que una determinada entidad pública debe ejercer los cometidos que la Constitución Política le asigna. A la distinción entre ambos tipos de normas se ha referido el expositor NORBERTO BOBBIO, en la obra traducida al español bajo el nombre "Teoría General del Derecho" (pág. 151), en los siguientes términos:

"...

Hasta aquí, al hablar de las normas que componen un ordenamiento, hemos hecho referencia a normas de conducta. En todo ordenamiento, junto a una norma de conducta, existen otros tipos de normas, que se suelen llamar normas de estructura o de competencia. Son aquellas normas que no prescriben la conducta que se debe o no observar, sino que prescriben las condiciones y los procedimientos mediante los cuales se dictan normas de conducta válidas. Una norma que ordena conducir por la derecha es una norma de conducta; una norma que establece que dos personas están autorizadas para regular sus propios intereses en un cierto ámbito mediante una norma vinculante y coactiva, es una norma de estructura, en cuanto no determina una conducta, sino que fija las condiciones y los procedimientos para producir normas válidas de conducta".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INEXEQUIBLE el proyecto de ley "por la cual se dictan normas en materia de negociación y contratación de empréstitos y deuda pública".

Notifíquese, y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO COSME IDRYS MORENO EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ SALVADOR RODRÍGUEZ MUÑOZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL DECRETO N° 564 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Cosme Idrys Moreno, en representación de José Salvador Rodríguez Muñoz, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Decreto N° 564 de 2 de noviembre de 1994, emitido por el señor Ministro de Gobierno y Justicia.

La demanda fue admitida y se requirió a la autoridad demandada el envío a esta Superioridad de la actuación o en su defecto un informe acerca de los hechos materia de este recurso.

El funcionario requerido remitió un informe acerca de los hechos que motivaron la acción de amparo de garantías constitucionales, en los siguientes términos:

> "...
> QUINTO: El 20 de julio de 1994, mediante Oficio DRH-755-94 el Comisionado Benigno Batista, Director de Recursos Humanos, se dirigió al Director General de la Policía Nacional, Lic. Oswaldo M. Fernández, solicitándole aprobación para destituir al Sargento JOSÉ S. RODRÍGUEZ, de servicio en la Zona de Policía de Colón "Por reincidencia en notables faltas graves y prestarse al soborno o a la dádiva, menoscabando en esta forma el prestigio de la institución, violando el artículo 118, acápite 1 y 15 del Reglamento Disciplinario". ...
>
> SÉPTIMO: Estas son las causas y los antecedentes relacionados con la destitución del Sargento Segundo **JOSÉ S. RODRÍGUEZ, o SALVADOR MUÑOZ**, identificado con la Placa 3076 de la Policía Nacional, formalizada en el DECRETO DE PERSONAL N° 564, de 2 de noviembre de 1994, suscrito por el Señor Presidente de la República y el Señor Ministro de Gobierno y Justicia (acompaño copia autenticada)."

El funcionario demandado también señaló en su informe de conducta lo siguiente:

> "... debo advertir que la vía apta prevista en la Ley para reparar lesiones a los derechos individuales o personales con motivo del acto de destitución de un cargo público, resulta ser la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la acción de ilegalidad de orden subjetiva o de plena jurisdicción, y no esta Institución de Garantía.
>
> Estimo que, habiendo transcurrido más de 15 meses desde que se produjo el acto impugnado y prescrito el derecho que concede la Ley 135 de 1943 para reclamar el restablecimiento de sus derechos, ahora el demandante, en acción desesperada, ha echado mano del Amparo de Garantías, como fuente de milagros, lo cual es improcedente y

repugna a las decisiones tradicionales de la Honorable Corte Suprema de Justicia." (Fs. 15-17).

El apoderado judicial del actor considera que la orden impugnada viola el artículo 17 de la Constitución Política, precepto de carácter doctrinario y preambular que no confiere ningún derecho subjetivo, y el artículo 32 ibídem, porque la Junta Disciplinaria de la Segunda Zona Militar no le brindó al amparista la oportunidad de presentar pruebas ni hacer descargos a su favor y porque tampoco era la autoridad competente para investigar el hecho, ya que el soborno es un delito tipificado en el Código Penal que corresponde investigar al Ministerio Público, quien debe remitirlo al Órgano Judicial para que determine la responsabilidad del acusado.

El amparista solicita la revocación de una orden de hacer contenida en un Decreto de Personal dictado el 2 de noviembre de 1994, mediante el señor Ministro de Gobierno y Justicia le destituyó como miembro de la Policía Nacional.

Es jurisprudencia constante del Pleno de esta Corporación que no proceden los amparos de garantías constitucionales en los casos de actos administrativos que constituyen acciones de personal mediante las cuales se destituye a un funcionario del sector público, excepto en aquellos casos de funcionarias amparadas por fuero de maternidad (sentencias de 25 de junio de 1993, 1° de febrero de 1991 y de 18 de julio de 1990).

Al respecto, es ilustrativo lo expresado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 25 de junio de 1993:

> "Examinada la acción propuesta, la Corte considera que no puede ser admitida, ya que por tratarse de un despido en el sector público, la vía correspondiente es la acción de plena jurisdicción, que es el proceso en que las partes cuentan con todos los medios de defensa, lo que no ocurre en la acción de amparo, en que no se pueden practicar pruebas y que la parte demandada sólo puede ser escuchada mediante un informe de conducta que debe responder en el término de dos horas. La jurisprudencia de la Corte en este sentido es abundante y sólo se ha admitido la impugnación, por amparo, en los despidos de mujeres en estado de gravidez, en que se haya violado el fuero de maternidad."

Los actos de carácter administrativo, son impugnables en la vía gubernativa con los recursos de reconsideración ante el funcionario que expidió el acto y cuando sea procedente, con el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Una vez agotada esta vía, los actos administrativos son acusables, **excepto en los casos expresamente prohibidos por la ley**, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Pleno también ha señalado reiteradamente que el amparo de garantías es un recurso extraordinario que tiene como finalidad revocar órdenes de hacer o de no hacer expedidas o ejecutadas por funcionarios públicos, que violen derechos y garantías consagradas en la Constitución, cuando por la **gravedad e inminencia del daño que representan, requieren de una revocación inmediata**, presupuestos que no reúne la orden impugnada mediante el presente amparo, pues la misma fue dictada hace más de un año, careciendo de actualidad e inminencia. (Sentencia de 9 de febrero de 1996).

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Cosme Idrys Moreno en representación de José Salvador Rodríguez Muñoz contra la orden de hacer contenida en el Decreto N° 564 de 2 de noviembre de 1994, dictada por el señor Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELVIRA PRADO CONCEPCIÓN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL RELACIONADO CON DELITOS DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Lcda. **ROSARIO GRANDA DE BRANDAO** en su condición de defensora de oficio de ELVIRA PRADO CONCEPCIÓN, procesada por el delito contra la Salud Pública, ha interpuesto Recurso de Habeas Corpus contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, contestó mediante oficio 994-96, recibido en la Secretaría de esta Corporación el 29 de enero de 1996, en que informa lo siguiente:

A. Que la orden de detención fue decretada por dicha agencia del Ministerio Público en resolución de 15 de septiembre de 1995. (Fs. 10-11).

B. Que dicha orden de detención se fundamentó en el hecho de que unidades de la Policía Nacional capturaron a la ciudadana ELVIRA PRADO por no portar documentos de identificación, el día 13 de septiembre de 1995, en los alrededores del Barrio Chino. Procedieron a trasladarla al puesto de control, en donde fue revisada, y se le encontró en el bolsillo delantero un sobresito contentivo de polvo blanco, presumiblemente droga (cocaína) (Fs. 2).

Al rendir declaración indagatoria, la joven detenida negó que la sustancia que poseía fuera de su propiedad, señalando que otra persona se la dio a guardar, sin expresar mayores detalles al respecto (Fs. 24-26).

Como fundamento de derecho se invocan los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

El resultado del análisis de la sustancia incautada fue POSITIVO, para la determinación de COCAÍNA, con peso de 0.25 gramos (Fs. 15).

C. Que ELVIRA PRADO CONCEPCIÓN se encuentra recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación.

Con el informe se remitió copia del expediente contentivo de las sumarias que se instruyen a la sindicada (37 fojas útiles).

Para resolver, la Corte considera:

De acuerdo a lo expresado en el informe por el funcionario de instrucción, en los antecedentes adjuntos constan las piezas procesales aludidas como, el informe de novedad de los agentes captores, la diligencia de Prueba de Campo, la declaración indagatoria, y la resolución que ordena la detención preventiva de la ciudadana.

Sin embargo, después de haber emitido la orden, (15 de sep. de 1995) el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas obtuvo el dictamen pericial del Departamento de Criminalística de la P. T. J., fechado 21 de septiembre de

1995, en que se describía la evidencia como polvo blanco denominado COCAÍNA y, su peso total que correspondía a la cantidad de 0.25 gramos.

Otra circunstancia que no se desprende del informe, pero que se ha podido observar en las sumarias, es la solicitud que hace el funcionario demandado al Director Médico Forense del Ministerio Público para que certifique cuál es la medida posológica limitada a una dosis en la COCAÍNA, y así determinar si la cantidad es escasa, acreditando por ello su destino para uso personal (Fs. 16).

El médico forense respondió, mediante oficio 51-2031 de "26 de enero de 1995(sic)", visible a fojas 17 del cuaderno antecedente, informando:

> **"La dosis vía oral que produce efectos es de 0.2 a 0.4 gramos.**
> **La dosis media que produce efectos de cocaína es de 0.2 a 0.3 gramos.**
> **La dosis por inhalación que produce efectos es de 0.03 a 0.05 gramos.**
> **En adictos la dosis por ingestión es de 1 a 1.5 gramos".**

A pesar que el Fiscal Especial solicitó al Director del Instituto de Medicina Legal un examen médico psiquiátrico de la detenida, que determine si la misma depende física o psíquicamente del consumo de drogas, aún no consta dicha certificación en el expediente; como tampoco algún documento en que figure el historial policivo de la sindicada.

De lo que se deja expuesto, se concluye que, contra la favorecida con esta acción de habeas corpus, hasta el momento, únicamente figura la cocaína que tenía en su poder al ser detenida, cuya cantidad es escasa, por lo que podría considerarse que era para su uso personal, aunque no resulta acreditado su dependencia, según el artículo 263F del Código Penal (agregado por el artículo 16 de la Ley 23 de 1986, reglamentado y adicionado por la Ley 13 de 1994).

Aunado a lo anterior, la sindicada en su declaración negó que la droga fuese de su propiedad o para su consumo, sino que un amigo conocido al salir de un zaguán se la dio a guardar, lo que supone que hizo cuando vio a la policía cerca.

En consecuencia, por la poca cantidad de droga y al no habérsele encontrado a la imputada otras evidencias (como altas sumas de dinero, envoltorios u otros instrumentos) que hagan presumir que la droga que poseía estaba destinada a la venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, se evidencia una posesión simple según la tipifica el artículo 260 del Código Penal, que conlleva prisión de uno (1) a tres (3) años y de cincuenta (50) a doscientos cincuenta (250) días-multa, sin perjuicio de que posteriormente se demuestre otra situación.

La orden de detención preventiva dictada en este caso contra ELVIRA PRADO CONCEPCIÓN resulta ilegal, pues el delito imputado conlleva pena mínima de prisión menor de dos años, por lo que no se ajusta a lo normado por el artículo 2148 del Código Judicial en cuanto a la procedencia de esa medida cautelar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de ELVIRA PRADO CONCEPCIÓN y, ORDENA su inmediata libertad si no existe otra causa penal pendiente en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ARTURO CERA RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS ENRIQUE SUMOSA MARENGO, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de CARLOS ARTURO CERA RODRÍGUEZ, quien se encuentra detenido en las oficinas de la Policía Metropolitana, Departamento de Operaciones del D. I. P.

Consta a foja 6 del presente cuaderno, que el Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, mediante Auto AV-23 de 23 de enero de 1996, "Se inhibe del conocimiento del presente Recurso, y lo envía a la Corte Suprema de Justicia". La decisión inhibitoria se fundamenta en el informe rendido por el Capitán Diego de León, Encargado de la Sección de Operaciones de la Dirección de Información e Investigación Policial (foja 4), en donde señala que el señor CARLOS ARTURO CERA RODRÍGUEZ fue transferido a la Fiscalía Auxiliar de la República, para su debida investigación, toda vez que fue detenido por participar en una riña tumultuaria y poseer una arma de fuego, siendo señalada la misma, como la que se utilizó para hacer las detonaciones.

Cumplido el trámite señalado, la Corte Suprema de Justicia acogió la presente acción y, en consecuencia, este Despacho Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Mediante Oficio N° 1669-FAR, de 26 de enero de 1996. el funcionario acusado rindió el siguiente informe:

"Señor Magistrado:

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 2582 del Código Judicial, damos respuesta al mandamiento de Habeas Corpus librado a favor del señor CARLOS ARTURO CERA RODRÍGUEZ, en contra del suscrito Fiscal Auxiliar de la República y para lo cual le informo lo siguiente:

a) No es cierto que este despacho ordenara la detención del señor CARLOS ARTURO CERA RODRÍGUEZ;

b) En razón de lo anterior no existen motivos de hecho o de derecho; y

c) No está bajo nuestra custodia, ya que el mismo fue transferido y puesto a ordenes del Corregidor de Juan Díaz mediante Oficio N° 1225-FAR, calendado el 23 del mes y año en curso y la causa de esto obedeció a que al prenombrado CERA RODRÍGUEZ, se le señalaba como la persona que para la fecha del 21 del mes y año que decurre, estando en las instalaciones del Coliseo ROMER FERNÁNDEZ, ubicado en Juan Díaz, realizara detonaciones con arma de fuego, mientras se realizaba en el citado centro deportivo, un partido de balompié entre los equipos del Plaza Amador y San Francisco de la Chorrera, así como también es acusado por agredir físicamente a miembros de la Policía Nacional.

Por los hechos antes vertidos, este despacho, mediante prividencia (sic) dispuso remitir las actuaciones realizadas, ante la autoridad arriba mencionada, por considerarlas de esa competencia.

De esta manera contestamos el traslado con el mayor de los respetos.

(fdo.) LIC. CARLOS AUGUSTO HERRERA
Fiscal Auxiliar de la República".

Del informe transcrito queda claro que esta Superioridad carece de competencia para conocer el presente negocio, y, de conformidad con el artículo 2602, numeral 4 del Código Judicial, los Jueces Municipales en el ramo de lo penal, son los juzgadores naturales del proceso constitucional de habeas corpus, "por actos que procedan de autoridad o funcionario con mando y jurisdicción en parte de un distrito municipal".

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA LA COMPETENCIA del presente negocio al Juez Municipal en el Ramo de lo Penal, EN TURNO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABELARDO MIRANDA ACOSTA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **SAMUEL QUINTERO** ha presentado ante esta Superioridad, vía telegráfica, Acción de habeas Corpus a favor del señor **ABELARDO MIRANDA ACOSTA** contra del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 10 de enero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal Superior, primero vía fax, y posteriormente mediante memorial calendado 19 de enero de 1996 recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador el día 23 de enero de los corrientes, en los siguientes términos:

> "No es cierto que ordené la detención del recurrente, la ordenó la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante providencia fechada 19 de agosto de 1995.
>
> El expediente original se encuentra en la Corte Suprema de Justicia desde el día 22 de diciembre de 1995, para resolver Habeas Corpus interpuesto a favor de la señora MARIXENIA VILLARREAL DE MIRANDA, sindicada por el delito contra la Vida y la Integridad Personal (en grado de cómplice)".

Con el referido escrito, el señor Fiscal Segundo Superior adjunta copia de un cuadernillo con 35 fojas, que adicionado al expediente original, guardan relación con las sumarias que se adelantan contra el señor **MIRANDA ACOSTA**, sindicado por delito contra la vida y la integridad personal.

Según consta en autos, la detención preventiva del señor **ABELARDO MIRANDA**, ordenada en principio por el Fiscal Primero Superior mediante resolución de 19 de agosto de 1995 (fs. 67-68), surge a raíz de su presunta vinculación con la comisión de un hecho punible contra la Vida y la Integridad personal en perjuicio de FRANCISCO IGLESIAS, quien perdiera la vida en una riña tumultuaria suscitada

en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

Según el agente instructor, la medida cautelar personal se justifica, en la medida de que la investigación sumarial contiene una serie de declaraciones rendidas por personas que describen el desarrollo de la riña tumultuaria que se escenificó en un lugar de diversión conocido como Jardín Tres Estrellas de Dolega, el 19 de agosto de 1995, que arrojó como consecuencia un número plural de heridos, así como la muerte por arma blanca, del señor FRANCISCO JAVIER IGLESIAS RIVERA.

Continua expresando el Fiscal Superior, que los testigos de cargo han indicado que fue el señor **ABELARDO MIRANDA ACOSTA** quien agredió con arma blanca al hoy occiso, y en este punto coinciden la mayoría de los que al presente, han rendido declaraciones.

Esta Superioridad advierte que a la fecha en que se instaura la acción de habeas corpus que nos ocupa, el expediente que se adelanta tiene 2 tomos, 788 páginas útiles, y un tercer cuadernillo, en las que aparecen diferentes diligencias, unas por iniciativa del Ministerio Público y otras aportadas por los defensores de los sindicados y la acusación particular.

Al rendir declaración indagatoria (f. 126 ss.), el imputado ha negado su vinculación con el hecho punible, señalando que aunque estaba presente en el lugar de los hechos, él no agredió a nadie, siendo más bien víctima de agresión por diferentes personas que participaban en la riña.

La disconformidad del recurrente con la medida de privación de libertad radica en la supuesta inexistencia de pruebas que vinculen directamente al señor **MIRANDA ACOSTA** con la comisión del hecho punible investigado. Así, el letrado estima que los indicios de presencia y oportunidad no pueden ser concluyentes en este caso, puesto que los hechos se suscitaron en un lugar público con la presencia y participación de varias personas; que los testigos de cargo en la reconstrucción de los hechos no han sido concluyentes, y que existen contradicciones en la mayoría de las deposiciones.

En estas circunstancias, se procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **MIRANDA** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, y si efectivamente existen, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2159 del Código Judicial, elementos probatorios que vinculen al detenido con el hecho investigado.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Al examinar el primer punto esgrimido por el actor en lo atinente a que, por las circunstancias en que se produce la muerte de FRANCISCO IGLESIAS los indicios de presencia y oportunidad no constituyen elemento de probanza sólido contra **ABELARDO MIRANDA ACOSTA**, esta Corporación Judicial no puede soslayar que efectivamente se produjo una riña con la participación de muchas personas, tal como se desprende de la narrativa de los hechos, de manera tal que las imputaciones hechas a un individuo en particular, con base exclusiva en los indicios de presencia y oportunidad no tienen fuerza probatoria incriminadora concluyente.

Sin embargo, contrario a lo expresado por el letrado defensor, sí reposan en el legajo sumarial declaraciones juradas de un **número plural de testigos de cargo**, presentes en el lugar de los hechos, coincidentes en cuanto a la participación directa del imputado en la riña y como autor de la agresión que con arma blanca, le causara la muerte a FRANCISCO IGLESIAS.

Si bien el imputado niega haber participado en la riña tumultuaria, o haber agredido a persona alguna con arma cortante o de otra forma, en contraste con lo manifestado por el señor **MIRANDA** este Tribunal se percata de la existencia de numerosas declaraciones en el legajo sumarial que lo señalan como una de las

personas que más activamente participó en el intercambio de golpes, lanzamiento de botellas, sillas y el uso de arma blanca, en perjuicio, entre otros, de FRANCISCO IGLESIAS.

Del extenso expediente sumarial pueden extraerse, entre los elementos más importantes que apuntan hacia la participación del detenido en el hecho punible, las siguientes:

La declaración y ratificación de GILBERTO OLDEMAR PALMA (f. 32-39), quien ha señalado que en los días que antecedieron al 19 de agosto de 1995, **ABELARDO MIRANDA** había tenido diferencias con el hoy occiso, profiriendo graves amenazas contra el mismo. En la reconstrucción de los hechos, narra de manera detallada la manera como se inició la riña, y cómo **ABELARDO MIRANDA** participó en la misma.

Los hermanos CHARLES WILLIAMS ESPINOZA y RICARDO JOSÉ DE GRACIA MORALES (cfr. fojas 54 y 595), sostienen que durante la riña tumultuaria que se escenificó, pudieron observar al señor **ABELARDO MIRANDA** forcejando con el hoy occiso, encontrándose el señor **MIRANDA** posicionado sobre el señor IGLESIAS agrediéndolo hasta abandonarlo en el suelo, momento en que el joven DE GRACIA se acercó rápidamente con la disposición de auxiliarlo, y pudo observar la herida que con arma cortante que se le había causado.

Reposan en las sumarias las deposiciones de ERICK ENRIQUE CIANCA VALDÉS (f. 111 y 440) y CARLOS IGLESIAS (f. 115 y 621), quienes señalan al imputado como la persona que portaba un cuchillo durante la riña, arma punzante con la que les produjo a ellos una serie de heridas. También reposan en autos las declaraciones de MINERVA DEL CARMEN (f. 63 y 611) y NELSON MAXIEL CIANCA MORENO, quienes señalan a **ABELARDO MIRANDA** como la persona que vieron portando un cuchillo en la mano, durante la riña.

LUZ MARÍA IGLESIAS (f. 58-61) ha testimoniado que **presenció el momento en que ABELARDO MIRANDA agredió con el puñal** a FRANCISCO IGLESIAS, y haber retenido por unos momentos a MIRANDA ACOSTA mientras éste sostenía el cuchillo ensangrentado en su mano luego de agredir a FRANCISCO IGLESIAS, hasta que el agresor abandonó el lugar.

En declaración rendida por ERICK ENRIQUE CIANCA VALDÉS, este también indicó haber presenciado el momento en que una mujer presente en el lugar, le sumistraba el cuchillo **ABELARDO MIRANDA** con el que se hirió de muerte a FRANCISCO IGLESIAS, además de haber sido él mismo víctima de agresión con cuchillo por parte de **ABELARDO MIRANDA** (f. 516 ss.), acotando que de los presentes, el único que agredía con arma punzo cortante era el imputado. Es importante reiterar que la causa de muerte de FRANCISCO JAVIER IGLESIAS, según examen forense, fue shock hemorrágico y herida por arma blanca penetrante a abdomen.

Estos elementos constituyen sólo parte del caudal probatorio que reposa en autos, y que definitivamente contradicen por una parte la versión ofrecida por el imputado en su indagatoria, a la vez que ofrecen indicios de la vinculación por parte de éste, con la muerte de FRANCISCO IGLESIAS.

La Corte no pierde de vista la naturaleza jurídica del hecho que se examina, especialmente por tratarse de una riña tumultuaria, y considera que en el transcurso de la investigación sumarial podrán aportarse nuevas pruebas que constituyan, o nuevos indicios contra el imputado, o que constribuyan con su defensa, haciendo variar su situación procesal, evaluación que corresponderá al instructor o al Tribunal que ventile la causa penal.

En esta etapa sin embargo, esta Superioridad, una vez examinado el expediente de manera minuciosa, es del criterio de que las diligencias sumariales han sido recabadas y examinadas por el Fiscal instructor con objetividad, tomando en consideración todos los factores objetivos y subjetivos, incluyendo las enemistades que existían entre algunos de los participantes y los propósitos de venganza por hechos anteriores, que se describen en distintas declaraciones que recoge el expediente. Tales declaraciones definitivamente vinculan al detenido con el hecho punible.

Todo lo expuesto permite concluir que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en lo atinente a que la detención preventiva, contrario a lo esbozado por el proponente de la acción de habeas corpus, se sustenta con la existencia de elementos probatorios que apuntan hacia la comisión del hecho punible por parte de la persona cuya detención se ordena.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ABELARDO MIRANDA ACOSTA, y ordena que sea nuevamente puesto a órdenes del Fiscal Segundo Superior del Tercera Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO EN FAVOR DE RAFAEL AROSEMENA ALVARADO CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor Renato Pereira interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus preventivo contra el Procurador General de la Nación y a favor de RAFAEL AROSEMENA ALVARADO, "asilado en México, quien es coacusado dentro del proceso penal que se sigue a **EZRA HOMSANY**, **MARCELA HOMSANY**, y otros, radicado en el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá" (f. 24).

Por admitida la iniciativa constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo, el que fue contestado por la máxima autoridad del Ministerio Público mediante nota DGP-052-96 de 15 de enero del año en curso. El Procurador manifiesta en su informe de conducta que no ha ordenado la detención de Arosemena, pero que tiene conocimiento de que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 27 de octubre de 1995, abrió causa criminal en su contra, mantuvo la orden de detención preventiva dictada en su contra y ordenó el cumplimiento de la tramitación necesaria para lograr su extradición.

Con vista de ese informe, se libró un nuevo mandamiento de habeas corpus a cargo de la autoridad jurisdiccional indicada, el cual fue contestado mediante oficio N° 12-SF de 17 de enero de 1996. En el informe se confirma que el Segundo Tribunal Superior abrió causa criminal contra Arosemena, se dispuso mantener la medida cautelar restrictiva de su libertad y se reiteran "los trámites diplomáticos necesarios, a través de la Cancillería Panameña, para lograr la extradición del señor AROSEMENA ALVARADO" (f. 30). Se acompaña al informe copia debidamente autenticada del mencionado auto de llamamiento a juicio, calendado 27 de octubre de 1995 (fs. 32-56).

El recurrente demanda que "se resuelva que no es fundada la pretensión de detenerlo manifestada públicamente por el Señor Procurador General de la Nación" (f. 24) y enervar "gestiones personales" (f. 25) del Procurador en México, tendientes a privar de su libertad a Arosemena, puesto que las mismas

"constituyen violación del debido proceso penal" (f. 25).

A Juicio de la Corte, se trata de una pretensión novedosa, extraña al instituto de habeas corpus.

En su modalidad preventiva, el habeas corpus se concede con el fin de proteger a los ciudadanos contra **amenazas comprobadas** que pesan sobre la libertad corporal, violatorias de las garantías que a este respecto instrumentan la Constitución Nacional y las leyes de la República. En el proceso penal que se sigue a Rafael Arosemena, al que alude el recurrente, tanto la orden de detención como la solicitud de extradición decretadas son anteriores a la iniciativa del funcionario acusado, dirigida a coadyuvar en el cumplimiento las medidas que en ambos sentidos fueron decretadas por el juez natural de la causa, que no por el Procurador General de la Nación.

Como "motivo de este recurso" se invoca la falta de competencia del Procurador General, tanto en el proceso penal como en materia de extradición. La Corte considera oportuno aclarar que mediante el mecanismo procesal constitucional de habeas corpus no se discuten supuestas violaciones al debido proceso, haz de derechos cuya tutela se encuentra reservada a las acciones extraordinarias de amparo de derechos fundamentales y de inconstitucionalidad.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de Rafael Arosemena Alvarado, por ser manifiestamente improcedente, de conformidad con el mandato del artículo 2611 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENT PORTE, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **ANA CRISTINA REYNA** ha interpuesto demanda de habeas corpus a favor del señor **VINCENT PORTE** y contra el Fiscal Auxiliar de la República, para que se decrete la ilegalidad de la detención preventiva que sufre su sobrino con motivo del sumario que se tramita en la Fiscalía Auxiliar.

Librado el correspondiente mandamiento de habeas corpus el Fiscal Auxiliar contestó que no había decretado tal detención, pero que la persona se encontraba involucrada en la investigación que está bajo cargo de un funcionario de instrucción delegado de dicha Fiscalía en la División de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas de la Policía Técnica Judicial.

Dirigido el mandamiento contra el instructor delegado de la Fiscalía Auxiliar de la referida división de la Policía Técnica Judicial, el funcionario demandado contestó el informe correspondiente en los siguientes términos:

> "1. Es cierto que esta Agencia de Instrucción Ordenó la Detención Preventiva de VINCENT ELLIOT PORTE JANNIERE, mediante Providencia

calendada 8 de enero del año en curso.

2. La desición (sic) anterior está fundamentada en los serios y graves indicios que vinculan a VINCENT PORTE como partícipe en el delito de Homicidio en perjuicio de ELÍAS MANUEL ANNRIA (sic), hecho ocurrido el día 21 de diciembre de 1995, en el sector cercano al Mercado del Marisco; los cuales surgen del Informe Entrevista rendido por el imputado ante Unidades dela (sic) Dirección de Información e Investigación Policial (D. I. I. P.) y en presencia de los detectives de la División de Delitos contra La Vida y La Integridad Personal de la Policía Técnica Judicial, del cual se ratificaron a través de declaraciones juradas, en donde el mismo se hace confeso del ilícito bajo investigación, añadiendo que se trataba de un auto-robo que había planeado con el occiso, porque éste último le debía dinero y era una forma de compensarle la deuda; razón por la cual el Suscrito en base a lo normado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, dispuso la Detención Preventiva del prenombrado PORTE.

3. Actualmente está a órdenes de la Fiscalía Segunda Superior, mediante el Oficio N° 267 del 18 de enero del año que decurre. Adjunto en el presente escrito copia debidamente autenticada del Sumario en referencia".

Junto al informe antes mencionado se recibió copia de algunas piezas de la actuación correspondiente y en ella se observa que VINCENT PORTE está vinculado al homicidio del señor ELÍAS MANUEL ANRIA, hecho ocurrido el 21 de diciembre pasado en las inmediaciones de la empresa PETROHIELO, S. A. ubicadas en la avenida Eloy Alfaro en el área contigua al nuevo Mercado del Marisco.

En principio, la Corte no debería conocer de esta demanda por razón de la competencia del funcionario demandado, pero en su Informe la autoridad acusada señala que el señor PORTE fue puesto a órdenes del Fiscal Segundo Superior, desde el 18 de enero pasado, lo que justifica mantener el conocimiento de este asunto en razón de una saludable economía procesal.

Las constancias procesales que figuran como antecedentes en esta acción de habeas corpus ponen en evidencia que el señor ANRIA fue muerto de un disparo por una persona que lo esperaba a la salida de la empresa cuando el occiso debía salir para efectuar un depósito bancario.

De las diversas declaraciones allegadas al sumario y que aparecen en las piezas remitidas por la Fiscalía Auxiliar no se observa ninguna declaración de testigo que diga que VINCENT PORTE es el autor del homicidio que se investiga en la Fiscalía Auxiliar, pero aparecen varias declaraciones que vinculan a una persona con el fallecido antes del incidente fatal.

Las declaraciones de Franklin Samaniego (fs. 29-30) y Carlos Moulanier (f. 31) permiten concluir que una persona que luego fue identificada en la Policía Técnica Judicial como VINCENT PORTE esperaba al fallecido antes de su muerte, que dicha persona abandonó el lugar de los hechos y abordó un vehículo para evitar ser detenido luego de los hechos.

También aparece en las piezas procesales remitidas por el funcionario Instructor Delegado informes de los oficiales Jorge Espinosa y Alejandro Vergara (fs. 93-97) de la Fuerza Pública, quienes señalan que en entrevistas concedidas por el señor PORTE a miembros de la Dirección de Investigación e Información Policial DIIP, esta persona, es decir PORTE, reconoció ante ellos haber sido el responsable de la muerte del señor ANRIA.

Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública implican una forma muy sui generis de introducir al proceso la versión del imputado, situación inaceptable ya que ello es contrario al ordenamiento procesal patrio. La única forma válida de introducir la versión del imputado al proceso impone la declaración del mismo ante una autoridad jurisdiccional, sea agente del

Ministerio Público en el sumario o Tribunal de la Causa en el plenario, por lo que carecen de valor probatorio tal informe y declaraciones.

Lo antes expuesto, sin embargo, no es óbice para declarar legal la detención que se impugna en esta acción de habeas corpus, toda vez que la declaración del señor Franklin Samaniego y el reconocimiento (fs. 103-106) efectuado en la Policía Técnica Judicial vinculan provisionalmente a PORTE con la muerte que justifica el sumario que tramita la Fiscalía Auxiliar de la República, pues existen indicios de oportunidad y presencia que lo vinculan en el ilícito, lo que conduce necesariamente a declarar la legalidad de la detención demandada.

Por todo lo expuesto la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor VINCENT PORTE.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MARÍA VILLANUEVA TORRES CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Omar A. Samaniego a favor de JOSÉ MARÍA VILLANUEVA TORRES, quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogida la presente iniciativa procesal constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada. El agente de instrucción contestó mediante oficio N° 1171-96 de 30 de enero de 1996. En su informe de conducta, el Fiscal acepta que ordenó la detención de Villanueva Torres, mediante resolución de 27 de noviembre de 1995 y, a renglón seguido, explica las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la medida.

La detención de Villanueva, decretada mediante resolución de 27 de noviembre de 1995, guarda relación con el cargo de que el sindicado colaboró, como custodio de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, a la **evasión** de los ciudadanos colombianos José Guillermo López Gómez y Eduardo Alberto Jaramillo Torres, quienes están sindicados por la comisión de delitos relacionados con drogas.

Como fundamento de derecho, el funcionario de instrucción señala en su informe de conducta el artículo 263-G del Código Penal, que preceptúa lo siguiente:

> "ARTÍCULO 263 G. El servidor público que tenga a su cargo la investigación, juzgamiento o custodia de las personas vinculadas con los delitos tipificados en esta Ley y que oculte, altere, sustraiga o destruya rastros, pruebas o instrumentos del delito, o procure la evasión de la persona capturada, detenida o condenada, será sancionado de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar

cargos públicos hasta por 20 años" (cursivas de la Corte).

Corresponde en este momento procesal determinar si la medida cautelar de carácter personal decretada contra Villanueva cumple con los requisitos que establecen tanto en la Carta Fundamental como la ley.

Una detenida lectura de la resolución que ordena la detención permite comprobar que no cumple con el requisito establecido en el numeral tercero del artículo 2159 del Código Judicial, que exige se indiquen los elementos de prueba que figuran en la investigación contra el imputado.

De las sumarias se desprende que fue durante el turno de custodios que corre de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. del día 11 de noviembre de 1995 cuando ocurrió la evasión de Jaramillo Torres y López Gómez, lo que tuvo lugar durante el turno del custodio **Luis Paz**, quien los dejó en libertad.

Ello es corroborado por el inspector Arnolfo Landero Alvarado, quien afirma en su declaración indagatoria lo siguiente:

> "no me encontraba en el lugar de los hechos cuando mi compañero de turno LUIS PAZ, ledió (sic) la libertad a estos ciudadanos" (f. 164, sumarias).

Agrega Landero en la ampliación de su declaración indagatoria (fs. 170-180) lo siguiente:

> "**PREGUNTADO:** Diga el declarante en que turno se dio la libertad y quiénes estaban loborando (sic) en el turno. **CONTESTÓ:** Señor Fiscal, en el turno de tres a once (3.00 p. m. a 11:00.p. m.), y laboraban mi persona, y el señor Luis Paz. ... aquí fue que me di cuenta lo sucedido (sic) a eso de las tres (3) de la tarde del día domingo y la libertad la dio el señor LUIS PAZ, sin una autorización escrita de nadie ... **PREGUNTADO:** Diga el indagado, si el señor Chacón participo (sic) en la libertad de los ciudadanos Colombianos (sic), explique **CONTESTO:** Señor Fiscal yo no me atrevería aseverar (sic) que el señor Chacón o Villanueva ya que los dos (2) estaban entrando después (sic) de mi turno" (fs. 174, 175 y 179 sumarias, subraya la Corte).

En efecto, el día de los hechos Villanueva Torres tenía asignado el turno del Grupo A, de 11:00 p. m. a 7:00 a. m., según se desprende de la hoja de asignación de turnos consultable a foja 115 de las sumarias.

Reposan en el expediente las declaraciones rendidas por los compañeros de turno de Villanueva, inspectores Luis Alberto Chacón (fs. 230-236) y Edwin Ranger Weeks (fs. 274-278), quienes dan cuenta de que la evasión se produjo durante el turno anterior y se refieren a las circunstancias de la anotación que debió practicarse en el cierre del turno correspondiente a la evasión.

En ampliación de su declaración indagatoria (fs. 303-307), el inspector Chacón manifestó:

> "yo llegue (sic) entre las nueve (9:00 p. m.) a nueve y media (9:30 p. m.), mi hora de entrada era las once de la noche (11:00 p. m.), en el lugar se encontraban los inspectores LANDERO y LUIS PAZ.
> ...
> Estando en esa conversación llegó mi compañero VILLANUEVA y le comuniqué lo sucedido" (fs. 303 y 304 sumarias, subraya la Corte).

El inspector Ranger corrobora la desaparición de López Gómez y Jaramillo Torres durante el turno anterior al suyo:

> "al verificar el libro de novedades me percate (sic) de que el señor CAHACON (sic) no había recibido el turno, por tal razón Yo le pregunte (sic) porque el no había recibido el turno, respondiendome

(sic) que en la celda faltaban dos (2) detenidos.

... le pregunte (sic) al señor CHACÓN, porque el turno del señor PAZ estaba cerrado y esa anomalía no se había puesto, el señor CHACÓN me informó que el (sic) no recibiría el turno hasta que el señor PAZ no pusiera esa anomalía en el turno de este" (f. 275, subraya la Corte).

Sumado a lo anterior, consta en el expediente declaración jurada de Dilcia del Socorro Soto Tejada, que corre a folios 239 y siguientes, quien también se encontraba detenida en las instalaciones de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización el día en que ocurrió el hecho, declaración en la que se compromete directamente al inspector Luis Paz como responsable de la evasión. Afirma la declarante:

"... el día sábado once (11), estos sujetos mantenían una conversación con el señor PAZ, quien trabaja en Migración, acerca de un permiso de dos (2) horas, para que fuesen a hacer una diligencia en la calle. Recuerdo que al lugar llegó su abogado y cuando faltaban pocos minutos para las ocho (8:00) de la noche, se les concedió el permiso" (f. 239, subraya la Corte).

Todo lo anterior concuerda con la versión del imputado, quien expresó que cuando llegó a trabajar los ciudadanos colombianos no se encontraban y que cuestionó al inspector LUIS PAZ, que estaba de turno, por los dos (2) detenidos que faltaban, quien contestó que **ORDONEL HERNÁNDEZ**, jefe de la Sección, le comunicó "que si se presentaba alguién (sic) a buscarlos **que podía entregarlos**" (f. 223).

Estos elementos permiten colegir que Villanueva Torres no se encontraba de turno ni en el lugar de los hechos cuando se produjo la evasión, con la que no parece estar relacionado, por lo que procede la revocatoria de la medida cautelar atacada.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la orden de detención decretada contra José María Villanueva Torres y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ CONTRA EL FISCAL DÉCIMO DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **Boris E. Barrios G.**, contra la **FISCAL DÉCIMA DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO**, a favor de **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, detenido en la Cárcel Modelo, por delito contra el pudor y la libertad sexual.

Acogida la acción de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra la **FISCAL DÉCIMA DE CIRCUITO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ**, Licenciada **ANNY I. BIRMINGHAM DE ROMÁN**, quien mediante Oficio N° 4578 de 14 de diciembre de 1995, rinde su informe de conducta, cuyo contenido se transcribe a continuación:

> "1. Este Despacho de Instrucción, no ordenó la detención preventiva de ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ; la misma fue ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante providencia de 23 de noviembre del año en curso.
>
> 2. Las razones de hecho, lo constituyeron el señalamiento directo que le hace el menor ofendido y la diligencia de reconocimiento Fotográfico, efectuada el día 27 de septiembre de 1995.
>
> 3. El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva del señor **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, se encuentran consagrados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en virtud del señalamiento directo que le hace el menor ofendido **ALFONSO ENRIQUE VÁSQUEZ RODRÍGUEZ**, como uno de los sujetos que lo violó carnalmente; aunado a que el hecho punible se encuentra debidamente probado con el exámen (sic) Médico legal practicado al menor ofendido. ..." (F. 8).

Adjunto al informe consta copia autenticada del expediente.

El recurrente en el escrito de apelación reitera el hecho de que "el reconocimiento fotográfico se realizó en violación de las formalidades procesales que el artículo 2135-A establece para esta diligencia probatoria, por lo que se trata de una prueba ilícita, consecuencialmente, la detención resulta ilegal, ..." (Fs. 18-19).

En tal sentido, el Segundo Tribunal Superior al declarar legal la detención ordenada contra **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, sostuvo lo siguiente:

> "...
> El reconocimiento fotográfico realizado por el menor ofendido en los libros de persona reseñadas de la Policía Técnica Judicial en el cual identifica a Abdiel Pabilo Pérez detenta relevancia, pues desde un inicio la querellante acotó que su hijo estaba en condiciones de reconocer a sus atacantes a quienes ya los había visto antes cerca de la casa de su tía (fs. 2 y 19 del expediente principal).
>
> Al realizarse la diligencia de reconocimiento fotográfico, se desconoce si la persona acusada se encuentra reseñada en dichos archivos, por tanto, la notificación debe ser posterior a dicha diligencia (artículo 2135 A) del Código Judicial). Ello pues, el Defensor tacha de ilegal tal acto judicial, pero a criterio de la sinergia se cumplió con lo normado en el artículo 2135 de Código Judicial (último párrafo), ya que el mismo lleva la firma de quiénes (sic) comparecieron al mismo y se adjuntó al expediente la fotografía del inculpado. ...". (Fs. 10-11).

Por otro lado, el recurrente plantea que:

> "... el reconocimiento fotográfico que acusamos de haber sido hecho en violación a la ley proceal (sic) está rodeado de circunstancias que no se han hecho constanr (sic) en el expediente, como es el caso de que el menor y la madre vieron a mi representado en una parada de autobus (sic) antes de realizar el reconocimiento fotográfico en las oficinas de la P. T. J., aparte de que mi cliente es conocido por los denunciantes desde antes del reconocimiento fotográfico." (F. 17).

ANTECEDENTES:

La presente investigación se inicia en virtud de querella interpuesta por la señora MATILDE ELIZABETH RODRÍGUEZ GARCÍA (fs. 1-2 del expediente), sobre la comisión de delito de violación carnal (contra natura), en perjuicio de su hijo de 5 años edad ALFONSO ENRIQUE VÁSQUEZ, hecho ocurrido el 14 de noviembre de 1994, a las once de la mañana (11:00 a. m.), aproximadamente, en Santa Librada, por dos sujetos desconocidos.

Por la calidad de menor de edad del agraviado ALFONSO VÁSQUEZ, se le solicita autorización a la curadora para entrevistarlo (f. 8 del expediente), y para la realización de las diligencias de inspección ocular y recorrido del área perímetra al lugar de los hechos (f. 9 del expediente).

A fojas 10-11 del expediente, consta el informe social preliminar de 15 de noviembre de 1994, contentivo de la entrevista realizada al menor por la trabajadora social, en la cual el menor corrobora la versión dada por su madre en la mencionada querella. Además el menor en dicha entrevista afirmó que anteriormente había visto a dichos sujetos cerca de la escuela, y hasta los describe e identifica a uno con el apodo de "GORDIN" ó "GORDITIN".

Consta en autos, informe de la Caja de Seguro Social de 14 de noviembre de 1994 (f. 4 del expediente), en cuya parte pertinente al examen físico realizado al menor ALFONSO VÁSQUEZ se observaba un aumento de perímetro de esfínter anal externo y una herida punzante en el brazo izquierdo.

En las partes del informe social correspondientes a la impresión del caso y el diagnóstico preliminar, la licenciada en trabajo social de la División de delitos contra el pudor y la libertad sexual, Detective I HERLINDA SÁNCHEZ, expresa que:

> "IMPRESIÓN DEL CASO:
> ...
> Según lo manifestado por el menor en su entrevista se ajusta al resultado del médico forense, de que el menor ha sido victima (sic) del (sic) un abuso sexual. El menor se presentó muy firme en lo manifestado.
>
> DIAGNÓSTICO PRELIMINAR:
>
> Menor víctima de un supuesto ilícito CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL, que su característica de (sic) enmarca en el supuesto ilícito de INTENTO DE VIOLACIÓN CONTRA NATURA, por parte de dos sujetos desconocidos." (F. 11 del expediente).

Entre las pruebas que acreditan la comisión del hecho punible, está el Oficio N° 411-19294 contentivo del examen médico legal de 15 de noviembre de 1994, realizado por el médico forense patólogo del Instituto de Medicina Legal, Dr. ERIC S. AGUIRRE S. (f. 6 del expediente), del cual se desprende que la lesión fue producida con objeto contundente, causando una incapacidad definitiva de "DOS (2) DÍAS A PARTIR DEL DÍA DEL INCIDENTE. SALVO COMPLICACIONES.", y cuyo texto transcribimos a continuación:

> "Menor de edad de 5 años, del sexo masculino. Acude en compañía de su madre.
>
> Al examen de la región ano-rectal se aprecia laceración mínima de mucosa de región ano-rectal `a la hora 12 de la esfera del reloj . Hay material excrementicio en región peri-anal.
>
> No muestra signos en el esfinter (sic) anal que indique que practique la Pederastia Pasiva." (F. 6 del sumario).

De la certificación anterior, se desprende que no se dieron atentados pederásticos, es decir, la penetración del pene por el recto; sin embargo, se dieron tocamientos impúdicos con la utilización de un objeto, que causó una ruptura en el esfínter de la víctima.

La Fiscalía Auxiliar de la República, mediante Providencia de 22 de noviembre de 1995 (fs. 28 a 30 del expediente) dispone ordenar la declaración indagatoria del señor **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, quien al ser indagado manifiesta que le apodan "YIYO" y que el día de los hechos manejaba el bus de la ruta Cerro Batea/Torrijos-Carter/Tumba Muerto, y que el bus se llama "JUNIER ERNESTO". Además, al preguntársele si sabía quién era el autor del delito, contestó en los términos siguientes:

> "... tengo entendido que fue un sujeto que lo apodan `MONO GORDO , y el mismo reside en Santa Librada, Quinta etapa, detrás de la Abarrotería Chu, el es un sujeto gordo, moreno, estatura aproximada de 1.70 mts, cabello crespo, tiene un tatuaje en el hombro (no se en que (sic) hombro), la casa es un chalet grande, color crema, la madre trabaja de auxiliar, tiene unos hermanos de nombre CHCHITO (SIC), CELIDED ... ." (F. 33 del expediente).

En informe secretarial suscrito por la Detective I SARA DE LEÓN (f. 13 del expediente), informa que el día 23 de agosto de 1995, realizó llamada telefónica a la señora MATILDE ELIZABETH RODRÍGUEZ GARCÍA, y la misma le dijo que a uno de los dos sujetos que agredieron a su hijo le apodan `JUNIER y que vive por el sector de Santa Marta, lo cual coincide con el nombre del bus del imputado, y el hecho de que los rasgos de la persona descrita por éste como el autor del hecho, coincidan sustancialmente con la descripción hecha por el menor en la entrevista antes citada, y que la residencia del imputado sindicado esté ubicada en el mismo sector que la del ofendido, vinculan a ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ con el delito investigado. Aunado a lo anterior, y contrario a lo alegado por el recurrente, la Diligencia de reconocimiento positivo (fs. 19-20 del sumario), atendida por el Detective IV Leonel Rodríguez -donde se certifica que ALFONSO ENRIQUE VÁSQUEZ ha identificado en los álbumes fotográficos de las personas reseñadas de frente y perfil a **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, residente en Santa Librada, 5ª Etapa, N° C-300; Álbum N° A. C. MP-1, hoja 13, como la persona que cometió el delito de violación carnal en su contra-, constituye una prueba fundamental para la vinculación del imputado.

Mediante Oficio N° 412-21542 de 20 de diciembre de 1994 (f. 12 del expediente), el Director Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, Dr. HUMBERTO L. MAS C., informa que la prueba del frotis por espermatozoides realizado al menor ALFONSO ENRIQUE VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, resultó negativo.

Finalmente, el recurrente sostiene que no se han realizado pruebas a favor del imputado (Art. 2133 del Código Judicial), que debe hacerse el reconocimiento de rueda de detenidos y que la declaración del menor el ilegal ya que debió ser ante el Juez de Menores (Art. 754 del Código de Familia).

Sobre estos puntos, a juicio de la Corte, cabe destacar el hecho de que el sumario no se encuentra perfeccionado aún, y que durante la etapa de instruccción del mismo se practicarán todas las pruebas pertinentes; sin embargo, hasta el momento de la instrucción sumarial se han dado elementos suficientes que vinculan al imputado con el delito investigado. Además, la declaración del menor no puede tacharse de ilegal ya que el artículo 754 del Código de Familia aludido, se refiere a los menores infractores y no a los casos en que el menor resulta ser la parte ofendida.

El señalamiento directo realizado por el menor VÁSQUEZ, contra el imputado, configura la flagrancia definida en el artículo 2149 del Código Judicial y que, en relación con el artículo 2148 del Código Judicial, justifica la detención preventiva de **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ.**

En este caso en particular, a juicio de la Corte, a **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ** se le sindica por el delito de abusos deshonestos, tipificado en el artículo 220 del Código Penal, toda vez que se realizaron actos libidinosos en la persona del menor, entendiéndose como tales acciones obscenas que ofenden el pudor de la víctima y que son diferentes al coito normal, tales como tocamientos impúdicos de los órganos sexuales de las personas con la utilización en este caso de una tijera.

Para concluir este análisis, cabe señalar que el Artículo 2223 del Código Judicial establece que:

> "En los delitos contra el pudor o la libertad sexual, comprobado el hecho punible será prueba suficiente para el enjuiciamiento del imputado la declaración de la persona ofendida".

En base a lo anteriormente señalado, los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la orden de detención preventiva contra **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, y los elementos probatorios que hasta el momento se encuentran acreditados en la investigación: Testimonios, peritajes, documentos y otras pruebas de los hechos fundamentales que constan en el expediente, son de tal naturaleza que hay base suficiente para establecer el carácter del delito como de aquellos que atentan contra el pudor y la libertad sexual, contemplados en el Título VI, Capítulo I, Libro Segundo del Código Penal; fundándolo en estas razones.

Estos hechos son suficientes para ordenar la detención preventiva de **ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ**, de conformidad a los artículos 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución apelada de 21 de diciembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra ABDIEL ANTONIO PABILO PÉREZ; y, en consecuencia, ORDENA que sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes de la Fiscalía Décima de Circuito del Segundo Circuito Judicial, con sede en San Miguelito.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAR FRANCISCO CASÍS MELO CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Telma Silvera de De León, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor Omar Francisco Casís Melo en contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, dicho funcionario dio respuesta al mismo mediante el Oficio N° 957-96 de 23 de enero de 1996, en los siguientes términos:

> "A) Sí, es cierto que esta Agencia de Instrucción ordenó la detención preventiva de OMAR CASÍS MELO, y la misma se decretó por escrito, mediante resolución de fecha veintinueve 829) de junio de 1995.
>
> B) FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE MOTIVARON LA DETENCIÓN:
>
> En cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la

detención del señor OMAR FRANCISCO CASÍS MELO, le podemos informar que los hechos que motivaron su detención, obedecen a que el día 25 de junio del año en curso fue retenido en Paso Canoas, frontera con Costa Rica, el ciudadano de origen guatemalteco NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, a quien funcionarios de la Dirección General de Aduanas, le incautan cinco (5) kilos de cocaína.

La rendir declaración indagatoria el prenombrado MORENO ÁLVAREZ, manifiesta que fue contactado en su país de origen, por un ciudadano panameño, al cual solo conoce por OMAR, quien le entregó un pick-up e instrucciones para que llegara hasta Coronado.

En este lugar, manifiesta MORENO ÁLVAREZ que el señor de nombre OMAR, llevó el vehículo hasta una residencia, cuya cerca es de verjas de hierro de color lila, de donde salió la sustancia ilícita. Esta declaración fue debidamente ratificada bajo juramento por el prenombrado, en la que detalla el lugar exacto en que está ubicado el inmueble.

Con esta información no es remitido el sumario por el despacho de la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí, conjuntamente con el sindicado MORENO ÁLVAREZ, y asumiendo el despacho el conocimiento de dicha investigación, se ordena diligencia de allanamiento, diligencia que se practica en compañía del sindicado, al practicarse la diligencia es retenido el señor JACINTO RODRÍGUEZ RIVERA quien labora como cuidador de la finca descrita en líneas anteriores, quien informa en declaración jurada, que la propietaria de la misma es la señora ASTREA TRINIDAD ARANGO DE DÍAZ y el señor ANDRÉS DANIEL DÍAZ, cuyo nombre correcto es DANIEL ANTONIO DÍAZ MADRID, quien purga condena en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, por tráfico internacional de drogas, cabe destacar que es la segunda condena del prenombrado por este tipo de ilícito en el país del norte. De igual manera manifiesta que el fin de semana último, es decir, el sábado 24 de junio se había presentado la prenombrada ARANGO DE DÍAZ, en compañía de sus hijas y un acompañante de nombre Gilberto, en una camioneta Cherokee de color azul y que el domingo en la mañana llegó el señor OMAR CASÍS, en una camioneta Land Cruiser de color gris, de igual manera señala que en la parte frontal de la casa pudo observar un pick-up, Nissan Negro, en el cual estaba un sujeto delgado, a quien identificó en el momento de efectuarse la diligencia de allanamiento.

Cabe destacar que estos, es decir OMAR CASÍS, han sido señalados como las personas que en compañía del sindicado MORENO ÁLVAREZ y de GILBERTO FLORES, se encargaron de embalar la sustancia ilícita en el vehículo pick-up que fuera incautada en Paso Canoas, ello se desprende de la deposición que hace MORENO ÁLVAREZ, al igual que es señalado por la sindicada ARANGO DE DÍAZ, y el día de autos en el teatro de los acontecimientos. Es de importancia destacar, que la sustancia incautada el día 24 de junio de 1995 y que fuera embalada, conforme obra en autos, en la casa N° 42 de Coronado, distrito de Chame, dio positivo para la determinación de Cocaína, conforme se desprende de la Certificación del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, que se aprecia a foja 320 del sumario.

Para decretar la detención preventiva del sindicado, OMAR FRANCISCO CASÍS MELO, se tuvo como fundamento de derecho lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, y los artículos 2115, 2148, 2159 del Código Judicial."

Por su parte, la licenciada Telma Silvera de De León sostiene que al señor Omar Casís Melo al momento de ser detenido "no se le encontró sustancia ilícita alguna, ni dinero, ni implementos utilizados para procesar, empacar, distribuir sustancias ilícitas", por lo que considera que la orden de detención preventiva decretada por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, fue

prematura y está carente de elementos esenciales como lo es la relación directa o indicios graves contra un sujeto activo tal como lo dispone el artículo 2159 del Código Judicial. En cuanto a las declaraciones vertidas por el señor Néstor Roderico Moreno Álvarez, que vincula directamente a su representado, estima la Lcda. Silvera que son malintencionadas y contradictorias.

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto al señor OMAR FRANCISCO CASÍS MELO se le imputa delito contra la salud pública relacionado con drogas. Visible de fojas 57 a 61 de las sumarias, consta la resolución de 29 de junio de 1995 expedida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la que se decreta orden de detención preventiva contra OMAR CASÍS MELO entre otros.

Una vez estudiado el expediente, el Pleno estima que existen indicios suficientes que vinculan al señor Casís con los hechos que se le imputan. Lo anterior se colige de las declaraciones y las ampliaciones rendidas por el ciudadano guatemalteco NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ vinculado en este caso, que lo señala directamente como la persona de quien recibía instrucciones directas para efectuar el trasiego de la droga y financiaba todos lo gastos de operación.

Por último, dada la cantidad de sustancia ilícita encontrada (4,760.0 gramos), y dado que el delito de tráfico ilícito de drogas tiene fijada pena mínima de prisión superior a dos años según la Ley 23 de 1986, el Pleno considera que en la orden de detención preventiva del señor OMAR CASÍS MELO no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en la leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, razón por la cual lo procedente es, pues, declarar legal dicha orden de detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor OMAR FRANCISCO CASÍS MELO y, por lo tanto dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del señor Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Como lo expresé en la lectura, mantengo mi criterio de que el detenido **OMAR FRANCISCO CASÍS MELO** no tiene ninguna vinculación con tráfico posesión u otro ilícito respecto a drogas.

En persona, al momento de su detención no se le encontró droga alguna; tampoco en su residencia, nada que implique elemento para procesar o empacar droga la declaración del imputado **NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVARES**, único testigo que quiso implicar a CASÍS MELO en el ilícito de drogas, se contradice si analizamos su indagatoria sosteniendo en una segunda, que el vehículo entregado en Guatemala a una persona señala como la misma a "un tal Allan, sustentando a la vez que fue este quien colocó la droga en dicho vehículo.

Reitero por último, que mantener la detención por una sola declaración contradictoria no constituye plena prueba para este efecto, privación de libertad.

Fecha ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AGUSTÍN SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Agustín Sánchez Racero, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor **AGUSTÍN SÁNCHEZ** y en contra de la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial mediante providencia de 6 de enero de 1996, dicha funcionaria dio respuesta al mismo mediante Oficio N° 63 de 18 de enero de 1996, en los siguientes términos:

"A) Esta Agencia del Ministerio Público no ordenó la detención preventiva de AGUSTÍN SÁNCHEZ, la misma fue ordenada mediante providencia fechada 30 de agosto de 1995, dictada por el señor Personero Municipal del distrito de colón, visible a fojas 27-28 del sumario.

B) Los motivos de hecho y de derecho que consideró el funcionario de instrucción para ordenar la detención preventiva de AGUSTÍN SÁNCHEZ, aparecen consignados en la mencionada providencia y son éstos: La declaración de la señora ELSA MARÍA WILLIAMS TROTTMAN, quien al rendir declaración jurada ante la Policía Técnica Judicial de aquella jurisdicción y en la Personería Primera Municipal, visible a fojas 35-38, señaló que el día 22 de agosto de 1995, se encontraba sola dentro de su cuarto lavando una ropa y como a eso de las ocho de la noche llegó el señor FRANCISCO, quien le pidió permiso para entrar procediendo de Inmediato a sacar una pipa y se puso a fumar piedra, dejándolo solo en el cuarto, ya que ella continuó lavando su ropa. Pasados unos cinco minutos se abrió la puerta del cuarto y observó que se fue directo a donde se encontraba FRANCISCO de espaldas y le hizo una llave como de "chino" en el cuello y empezaron a forcejar, logrando FRANKLIN quitarle el arma que tenía FRANCISCO y con ella misma le disparó.

El sujeto apoderado NEGRO, resultó ser AGUSTÍN SÁNCHEZ ÁVILA, quien al rendir informativo a fojas 19 a 21 del sumario se rehusó seguir declarando y firma la diligencia. Posteriormente amplía su informativo, y niega toda participación en el ilícito que se investiga, sin embargo al momento de rendir declaración indagatoria a fojas 73-79 se ratifica de sus declaraciones y del manuscrito redactado por él y enviado al señor Personero Primero Municipal, en donde se observa que relata los hechos distintos a los manifestados por él en sus primeras declaraciones, notándose una gran contradicción en sus dichos.

C) En la actualidad el señor AGUSTÍN SÁNCHEZ ÁVILA se encuentra a órdenes de la suscrita, quien mantuvo la detención preventiva en providencia fechada 5 de enero del presente año, visible a fojas 91-92 del expediente, por considerar que en efecto, los elementos probatorios recogidos en el sumario dan lugar a ello, y a la fecha la situación jurídica no ha variado, por tratarse de un delito grave

que amerita detención preventiva, y no se ha probado causa de justificación alguna, ni de otra naturaleza que amerite otra medida cautelar que no sea la detención preventiva."

Por su parte, el señor Agustín Sánchez Racero, estima que la detención preventiva de la cual es objeto el señor AGUSTÍN SÁNCHEZ es ilegal por cuanto no es conforme a lo dispuesto en el artículo 1967 del Código Judicial, dado que el cargo que se le atribuye es el de complicidad del homicidio del señor FRANCISCO JAVIER CORONADO, y a su juicio, éste no se subsume dentro del tipo penal, pues no se ha establecido el grado de participación o acto en la perpetración del crimen.

Una vez leído el informe de la fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, y estudiado las sumarias seguidas al señor Agustín Sánchez y otros por el delito de homicidio en perjuicio del señor Francisco Javier Coronado Navarro, la corte estima que, efectivamente, existen fuertes indicios que vinculan al señor Agustín Sánchez con los hechos a él imputados. Lo anterior lo corrobora la declaración jurada de la señora Elsa María Williams Trottman visible de fojas 35 a 38 de las sumarias quien lo identifica plenamente, aunado al hecho que en las declaraciones vertidas por el propio sindicado ante la Policía Técnica Judicial visible de fojas 19 a 21 de las sumarias, que posteriormente fueron desmentidas en ampliación efectuada, y, las declaraciones ante la Personería Primera Municipal del Distrito de Colón visibles de fojas 73 a 79 de las sumarias que confirman las primeras, existen claras contradicciones.

Por otra parte, consta a foja 27 del informe sumarial, que el Personero Municipal del Distrito de Colón ordenó la detención preventiva del señor AGUSTÍN SÁNCHEZ ÁVILA (a) NEGRO, pues, a su criterio "existen en autos suficientes elementos incriminatorios que lo vinculan en la ejecución del acto criminoso". Dicha orden de detención se mantuvo mediante providencia fechada el 5 de enero de 1996, suscrita por la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, visible de fojas 91 a 92 de las sumarias por lo que se cumple de este forma con lo previsto en el artículo 2148 del Código Judicial.

Dado que el delito de homicidio por el cual es sindicado el señor Agustín Sánchez tiene fijada pena de prisión mínima superior de 2 años, considera la Corte que en la detención preventiva del señor Agustín Sánchez no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es, pues, declarar legal la detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor AGUSTÍN SÁNCHEZ ÁVILA (a) NEGRO y por lo tanto DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes de la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO ÁNGEL MURILLO ARMUELLES CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Humberto Mosquera Bethancourt, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Habeas Corpus a favor del señor Roberto Ángel Murillo Argüelles y en contra de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, la misma dio respuesta mediante el Oficio N° 10484 de 14 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

> "**PRIMERO**: Sí es cierto que ordenamos la detención del señor **ROBERTO ÁNGEL MURILLO ARGüELLES**. Dicha decisión fue emitida mediante **Resolución de fecha veintinueve (29) de noviembre de 1995**, la cual se encuentra acopiada a fojas 13 y 134 del Sumario.
>
> **SEGUNDO**: Los fundamentos de Hecho y de Derecho que motivaron la actuación atacada, lo exponemos a continuación:
>
> A. FUNDAMENTO DE HECHO:
>
> Los hechos se dieron el día 27 de Noviembre del año en curso, cuando Agentes Custodios del Centro Penitenciario La Joya, encontrándose éstos de requizas (sic) a todo el personal entrante, utilizando el personal de la Policía Canina. Después los perros olfatearon las pertenencias de todo el personal entrante, se pudo detectar a dos (2) custodios que se le notó una actitud nerviosa y rezagados al momento de colocar sus maletines en el área de la requiza (sic). Cuando le efectuaron las requisas a estos ciudadanos, al señor ROBERTO MURILLO, se observó que extrajo un envoltorio de su maletín. Al momento de realizarse la requisa personal a dicho ciudadano se le pudo detectar en el bolsillo derecho de la parte trasera de su pantalón un envoltorio de papel periódico que en su interior contenía cierta cantidad de hierba seca que se presume sea Droga conocida como **MARIHUANA**. ...
>
> B. FUNDAMENTO DE DERECHO:
>
> ...
> **PRIMERO**: **La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas**, procedió a (sic) enviar al **Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.)** las sustancias ilícitas encontrada en poder del sindicado, para su análisis y peso, EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA MISMA.
>
> **SEGUNDO**: Al rendir Declaración Indagatoria, el ciudadano **ROBERTO MURILLO ARGüELLES**, **Acepto** (sic) **la tenencia y procedencia de dichas sustancias ilícitas y dijo que era para su consumo ..."**

Por su parte, el licenciado Humberto Mosquera Bethancourt, considera que como se trata en este caso, de una "cantidad escasa," se hace imposible pretender que ésta tenga como propósito la "venta, traspaso u otra finalidad, máxime que no existen en el expediente pruebas o elementos que nos induzcan a pensar sobre esto." Adicionalmente, señala que su "representado, en declaración a manifestado de manera categórica que la sustancia, encontrada era para su consumo," por lo que, solicita que se decrete ilegal la detención y se ordene su inmediata libertad.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada, cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva del señor Roberto Murillo, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente el tráfico de drogas.

En las sumarias consta como elemento que comprueba la existencia del hecho punible, el Informe del Centro Penitenciario La Joya de fecha 27 de noviembre de 1995, en el que se señala que "luego de revisar las pertenencias del señor **ROBERTO MURILLO ARGüELLES** ..., se efectúo la requisa personal encontrándosele un envoltorio de papel periódico, enrrollado (sic) con tape, el cual contenía hierba seca la que se presume sea marihuana." Sometida la evidencia a la prueba de campo, ésta, resultó positiva para la determinación de MARIHUANA, con un peso de 15.0 gramos.

Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, ordena la detención preventiva del señor ROBERTO ÁNGEL MURILLO ARGüELLES, por considerar que existían suficientes pruebas que lo involucraban en delitos relacionados con drogas.

El Pleno de esta Corporación estima que, el informe emitido por el Director del Centro Penitenciario La Joya, así como la diligencia de prueba de campo, constituyen hechos suficientes para vincular al señor Roberto Murillo Argüelles, con los hechos a él imputados. Lo anterior, aunado al hecho que, el mismo fue sorprendido in fraganti, pues la droga fue encontrada en el bolsillo derecho de la parte trasera de su pantalón, justifica la aplicación de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial, es claro al señalar que la misma, sólo procede por delitos que tengan señalados pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que, en la detención preventiva del señor ROBERTO ÁNGEL MURILLO ARGüELLES, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ROBERTO ÁNGEL MURILLO ARGüELLES, y por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIONISIO ÁBREGO CLIABU CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ingresa al Pleno de la Corte Suprema la acción de habeas corpus presentada por el señor **DIONISIO ÁBREGO**, contra el Fiscal de Circuito de Bocas del Toro, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Cabe indicar que el referido Tribunal Superior se inhibió del conocimiento de la acción, toda vez que el expediente sumarial se encontraba en ese Tribunal

para la calificación de sumario, y el detenido estaba por tanto, a órdenes de esa Corporación Judicial.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 1° de febrero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior mediante memorial de esa misma fecha, en los siguientes términos:

> "Este Tribunal no ha ordenado la detención preventiva de **DIONISIO ÁBREGO CLIABU**, por razón del delito de homicidio cometido en perjuicio de Abelardo Morales, la misma fue proferida por el Fiscal de Circuito de Bocas del Toro.
>
> Los motivos de hecho y de derecho se aprecian en la diligencia fechada 1° de septiembre de 1995, visible a fojas 134 a 137 del expediente, emitida por el Fiscal de Circuito de Bocas del Toro."

Con el referido escrito, el Tribunal Superior adjunta cuadernillo con 235 fojas útiles, que guarda relación con las sumarias que se adelantan contra el señor **ÁBREGO CLIABU**, sindicado por delito contra la vida y la integridad personal.

Según consta en autos, la detención preventiva del señor **ÁBREGO**, ordenada por el Fiscal de Circuito de Bocas del Toro (atendiendo comisión especial) mediante resolución de 1° de septiembre de 1995 (fs. 134-137), surge a raíz de su presunta vinculación con la comisión de un hecho punible contra la Vida y la Integridad personal en perjuicio de ABELARDO MORALES GARAY, quien perdiera la vida poco después de suscitada una riña en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, entre el hoy occiso, y el señor **ÁBREGO**.

Según el agente instructor, la medida cautelar personal se justifica, en la medida de que la investigación sumarial contiene una serie de declaraciones rendidas por personas que describen el desarrollo de la riña que se escenificó en horas de la madrugada del día 8 de septiembre de 1995 en la Bodega Mac-Mac, entre dos personas de raza indígena, identificados como Abelardo Morales y DIONISIO ÁBREGO, luego de la cual se produce el fallecimiento del primero.

Los testigos de cargo han indicado que el señor **DIONISIO ÁBREGO** agredió a golpes al hoy occiso, que se encontraba en estado de ebriedad, "**golpeándole rostro y cuerpo, y apretándole el cuello, para luego arrojarlo al suelo y golpear su cabeza contra las piedras**" y en este punto coinciden los que al presente, han rendido declaraciones.

Al rendir indagatoria (f. 125 ss.), el imputado ha negado su vinculación con el hecho punible, señalando que aunque efectivamente sostuvo una riña con el señor MORALES GARAY, éste nunca cayó al suelo, y se encontraba en buen estado al término de la pelea, por lo que no pudo haber fallecido a consecuencia de la misma. Insiste en que al final de la riña el hoy occiso se encontraba bien y sin rastros de sangre, y que fue encontrado después de la riña en otro lugar, sugiriendo que la causa de la muerte era distinta a la pelea sostenida. La disconformidad del recurrente con la medida de privación de libertad radica pues, en la supuesta inexistencia de pruebas que lo vinculen directamente con la comisión del hecho punible investigado.

En esta circunstancias, se procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **ÁBREGO** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, y si efectivamente existen, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2159 del Código Judicial, elementos probatorios que vinculen al detenido con el hecho investigado.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Al examinar el legajo sumarial, y contrario a lo expresado por el imputado,

sí reposan en el expediente declaraciones juradas de un **número plural de testigos de cargo**, presentes en el lugar de los hechos, coincidentes en cuanto a la forma en que agredió el señor **ÁBREGO** a ABELARDO MORALES.

En efecto, este Tribunal se percata de la existencia de declaraciones que describen cómo se desarrolló la riña entre ambos indígenas, resaltando que el señor MORALES se encontraba en estado de embriaguez por lo que fue poco lo que pudo realmente defenderse, mientras que el señor **ÁBREGO** le agredía de forma tal que muchas personas querían intervenir con el fin de detener la pelea.

Del extenso expediente sumarial pueden extraerse, entre los elementos más importantes que apuntan hacia la participación del detenido en el hecho punible, las siguientes:

La declaración de la señora SANTA BICIA TIBIDO MODOBO (f. 21-24), quien estaba presente en el lugar, narra de manera detallada cómo se desenvolvió la riña, señalando: "**y con una mano le apretó el cuello y con la otra le pegó varias veces en la cara, pero como el otro estaba muy borracho y Dionisio no estaba, no se podía defender, Dionisio seguía intentando agarrarlo por la garganta ... seguía apretándole el cuello y pegándole en el suelo y yo le dije al de gorra negra que se lo quitara porque le estaba pegando mucho y lo iba a matar.**"

MARIO ÁBREGO (cfr. fojas 43-48; 60-62, 93-95), sostiene que se encontraba en compañía de **DIONISIO ÁBREGO** cuando se suscitó la riña, y narra lo siguiente: "**y yo le dije deja de pelear ya, que ese hombre está borracho, y él no quiso hacerme caso, continuó pegándole al que estaba en el suelo, como él no me hizo caso yo me aparté enseguida ... Sí miré que le pegó estando ABELARDO MORALES en el suelo, y lo agarraba por el cuello y lo sacudía sobre la piedra ... se presentaron dos unidades de la Policía Nacional y como los Policía le dijeron a DIONISIO ÁBREGO, que levantara al otro que estaba caído en el suelo, pero como él solo no podía, yo le ayudé a levantarlo, que en ese momento el golpeado o sea ABELARDO GARAY, sangraba por la nariz ... que al momento de alzarlo o levantarlo del suelo no podía caminar y entre los dos lo llevamos como pudimos levantarlo logrando dejarlo acostado en una de las casetas de buhoneros que se encuentra al lado de la línea férrea ... lo que sí pude ver es que ese hombre no se movía y su cuerpo estaba completamente flojo ...**"

Cabe agregar que fue precisamente en el sitio descrito por el testigo MARIO ÁBREGO en que poco después la Policía Nacional encontró y auxilió a ABELARDO MORALES GARAY, intentando trasladarlo a la provincia de Chiriquí, dado su estado grave, falleciendo en el trayecto.

Reposa en las sumarias la deposición del Dr. JOSÉ AUGUSTO ANDERSON (f. 151-153), Médico Forense quien después de evaluado el expediente así como el Protocolo de Necropsia de ABELARDO MORALES GARAY certificó que las lesiones presentadas en la cara son **compatibles** con riña y la causada en la región occipital de la cabeza por un objeto contuso duro, compatible con piedra o cemento. Ello coincide con la versión de los declarantes, que refieren la riña del occiso con posterior caída sobre objeto contuso duro, piedra cemento. El doctor certifica además que la causa principal de la muerte es un hematoma subdural del hemisferio cerebral izquierdo causado por traumatismo cráneo encefálico, indicando que el occiso recibió un trauma severo en la cabeza que le ocasionó una hemorragia interna produciéndole la muerte.

Estos elementos constituyen parte del caudal probatorio que reposa en autos, y que definitivamente contradicen por una parte la versión ofrecida por el imputado en su indagatoria, a la vez que ofrecen serios indicios de la vinculación por parte de éste, con la muerte de ABELARDO MORALES.

Cabe acotar que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ya había resuelto acción de habeas corpus en favor de **DIONISIO ÁBREGO** tal como consta a folios 179-183 del sumario, pronunciándose mediante sentencia de 19 de octubre de 1995, en el sentido de que la detención preventiva ordenada en principio por el Fiscal de Circuito de Bocas del Toro era legal, en vista de que la instrucción

contenía elementos objetivos y subjetivos que vinculaban a **DIONISIO ÁBREGO** con el delito investigado, mismo que admite la aplicación de detención preventiva.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad, una vez examinado el expediente de manera minuciosa, es del criterio de que las diligencias sumariales han sido recabadas y examinadas con objetividad, tomando en consideración todos los factores objetivos y subjetivos que rodean el ilícito, arribando a la conclusión de que reposan en la instrucción, elementos indiciarios que vinculan al imputado **DIONISIO ÁBREGO** con el hecho punible en perjuicio de ABELARDO MORALES GARAY, puesto que así se desprende de las versiones ofrecidas por testigos coincidentes en modo, tiempo y lugar.

Por ello, en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en lo atinente a que la detención preventiva, contrario a lo esbozado por el proponente de la acción de habeas corpus, se sustenta con la existencia de elementos probatorios que apuntan hacia la comisión del hecho punible por parte de la persona cuya detención se ordena.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor DIONISIO ÁBREGO CLIABU, y ordena que el mismo sea nuevamente puesto a órdenes del Tribunal Superior del Tercera Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JENNIFER SINGH MORENO Y CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Reyes Martínez N. interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas Corpus contra el Director de la Policía Nacional, con el objeto de obtener la libertad de Jennifer Singh Moreno. Por librado el mandamiento correspondiente, la autoridad demanda informó que la detenida se encontraba a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República, funcionario contra quien se enderezó el procedimiento.

Con el informe de conducta solicitado se recibió el expediente que guarda relación con denuncia que presentara Rafael Antonio Jiménez Corrales, quien señala a la detenida y a Maribel Enid Anaya Miranda como autoras del hurto cometido en su perjuicio, con la sustracción de su reloj de pulso, valorado en B/.28,500.00, y la suma de B/.700.00 en efectivo.

Las investigaciones realizadas hasta el presente evidencian la falta de sustento de lo expresado en el libelo del habeas corpus, en el sentido de que el denunciante, "en forma de agradecimiento para con éstas jóvenes le obsequió cierta cantidad de dinero y una prenda consistente en un reloj, por lo que ellas procedieron a retirarse a sus hogares". De igual manera permiten conocer que el día de los hechos estas tres personas estuvieron ingiriendo licor en un

restaurante de la localidad, desde donde salieron hacia la residencia del denunciante, cuando éste ya se encontraba en estado de embriaguez; que en este último lugar el denunciante estuvo tomando champagñe hasta quedarse dormido.

Ambas denunciadas admiten que Jiménez Corrales llevaba puesto un costoso reloj mientras estuvieron libando con él en el restaurante, y coinciden en afirmar que al llegar a la casa de éste la prenda se le cayó dentro del automóvil (fs. 21 y 38). Según la versión de la detenida Singh Moreno, al caerse el reloj "él me lo entregó; luego lo coloqué en mi bolso o cartera" (f. 38).

Singh Moreno le atribuye a su compañera Anaya Miranda la autoría de la sustracción de la suma de doscientos cincuenta balboas de una de las gavetas de la cómoda del denunciante, de los cuales admite haber recibido B/.125.00 (f. 38). Este hecho es corroborado por Anaya Miranda, quien reconoce que "ese dinero lo tomé de la gaveta del cuarto del señor Rafael Jiménez", para luego repartirlo con su compañera (fs. 43-44).

Todo lo anterior indica que contra la detenida Singh Moreno existen graves indicios de responsabilidad, no sólo derivados de las circunstancias de presencia y oportunidad para la comisión del hecho delictivo, sino también la confesión parcial de su perpetración.

A los efectos del conocimiento de esta acción de habeas corpus, estas comprobaciones no guardan relación inmediata con lo que sostienen ambas detenidas, en el sentido de que, al abandonar la residencia de Jiménez, fueron asaltadas y despojadas de sus pertenencias, entre las cuales figuraban tanto el reloj como el dinero en efectivo hurtados, por lo que presentaron a su vez denuncia ante las autoridades de la Policía Técnica Judicial.

Como quiera que esa es la realidad fáctica de este caso, y que, por otra parte, se advierte que la detención acusada de ilegal fue decretada mediante el cumplimiento de las formalidades que establece el artículo 2159 del Código Judicial (fs. 46 a 48), es del caso resolver contrariamente a la pretensión del demandante.

Por las anteriores razones, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de JENNIFER SINGH MORENO, y ORDENA que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRASCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Habeas Corpus interpuesta por la Licenciada **INDIRA V. RUIZ S.** contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, a favor de **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR.**

Acogida la presente acción, se libró el mandamiento correspondiente contra

el señor Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, Licenciado **JUAN ANTONIO TEJADA**, quien mediante Oficio N° 248 de 5 de febrero de 1996, rinde su informe de conducta en los siguientes términos:

> "... 1. No es cierto que este Despacho haya ordenado la detención del recurrente. La detención del señor **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR**, fue ordenada mediante providencia fechada el día 30 de agosto de 1995, emitida por la Fiscalía Tercera de Circuito de la Provincia de Colón. (ver foja 49). ...".
>
> "... 3. En la actualidad el señor **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR**, se encuentra detenido en la Cárcel Pública de Colón, a órdenes de este Despacho Instructor, en virtud de nota N° 2677 del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, fechada el 13 de noviembre de 1995 y dirigida al Director de Corrección de la provincia de Colón. No obstante, a fin de verificar esa información se llamó vía telefónica a la Cárcel Pública de Colón en donde se nos manifestó que el detenido se encuentra a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón por este mismo hecho delictivo." (Fs. 8 y 9).

De conformidad con lo manifestado por el señor Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, se desprende que **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR** se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Tercera de Circuito de Colón. Este hecho hace que el Pleno de la Corte Suprema carezca de competencia para conocer del fondo del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2588 y 2602 numeral 2 del Código Judicial; éste último indica que son competentes para conocer de la demanda de Habeas Corpus:

> "... 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por actos que procedan de autoridades, o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia; ...".

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento del presente negocio; y en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN HORACIO CEDEÑO EN NOMBRE DE BINDO FRÍAS ARCIA, CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edwin Horacio Cedeño interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Acción de Habeas Corpus a favor del señor BINDO FRÍAS ARCIA y contra el Fiscal Primero Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Manifiesta el actor que el funcionario demandado mantiene detenidos a los señores BINDO FRÍAS ARCIA y Enrique Castillo Frías, a pesar de que el médico forense de la provincia de Los Santos rindió una declaración el día 6 de

diciembre de 1995 en la que dejó claramente establecido que el occiso (Simón Bolívar Barrerra Barba) sólo recibió una herida mortal, de lo cual se desprende la existencia de un solo sujeto activo del delito que se investiga. Indicó, asimismo, que de acuerdo con las declaraciones dadas por el médico forense, resulta imposible que el occiso recorriera una distancia de 90 metros desde el lugar donde se dice que fue herido por BINDO FRÍAS ARCIA y el lugar donde aquél cayó. Además, FRÍAS ARCIA tampoco pudo haber llegado al lugar donde el occiso fue ultimado, toda vez que fue herido mortalmente por éste último en la mejilla izquierda hasta la comisura labial.

Finalmente, el actor sostiene que los testigos que declararon contra BINDO FRÍAS ARCIA son sospechosos, ya que son parientes de Enrique Castillo Frías, además de que se contradicen en sus declaraciones, al igual que lo hace Enrique Castillo Frías, quien dio tres versiones distintas del hecho delictivo investigado (fs. 5-7).

Al librar el mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, éste lo rindió mediante el Oficio N° 44 del 31 de enero de 1996, en cuya parte pertinente expuso lo siguiente:

> "B). En la investigación milita el cuerpo del delito a través de la necropsia legal, practicada el día 4 de noviembre de 1994, por el Dr. Klever De Lora, en donde ha señalado que el finado presentaba una lesión en la aorta toraxica (sic), que era mortal por necesidad y señala como causa de muerte: "SCHOCK HIPOVOLÉMICO, HEMORRAGIA TORACO ABDOMINAL AGUADA (sic), HERIDA POR ARMA BLANCA (Ver fojas 349-360); además, en el expediente militan varias declaraciones que vinculan a BINDO FRÍAS ARCIA, como presunto autor de la lesión mortal, tales como la ampliación de la indagatoria de ENRIQUE CASTILLO FRÍAS (fojas 829) y su declaración jurada de fojas 851; los testimonios de ILUMINADA FRÍAS DE ARCIA (fs. 865), JOSÉ CASTILLO MARTÍNEZ (fs. 860) (sic), EDUARDO YOVANI CASTILLO (fs. 949), MIGUEL GUSTAVO GUTIÉRREZ (fs. 1,007 y 1,012); aunado a la diligencia de careo practicada por el funcionario de instrucción entre BINDO FRÍAS ARCIA y ENRIQUE CASTILLO FRÍAS, ostensible a fojas 1,045 del proceso." (Fs. 11-12).

A juicio del Pleno de la Corte, la detención decretada por el Fiscal Primero Superior del Cuarto Distrito Judicial contra BINDO FRÍAS ARCIA es legal, porque fue dictada cumpliendo con las exigencias establecidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. En tal sentido, consta de fojas 349 a 360 el Protocolo de Necropsia practicado al occiso Simón Bolívar Barrera Barba, mediante el cual se acredita plenamente el cuerpo del delito.

Asimismo, constan en el expediente del proceso penal seguido contra BINDO FRÍAS ARCIA varias declaraciones que lo vinculan directamente a la comisión del hecho punible que se le imputa, tales como la declaración indagatoria de Enrique Castillo Frías (fs. 829-838), ratificada mediante diligencia que consta a foja 851; las declaraciones de Iluminada Frías Arcia (865-868), José Castillo Martínez (fs. 869-870), Eduardo Yovany Castillo (fs. 876-879), Misael Cubilla (882-890), Tiburcio Díaz Prado (949-950) y la diligencia de careo que reposa de foja 1045 a 1049 de dicho expediente.

Con relación a las objeciones formuladas por el apoderado del actor a las diligencias probatorias anteriormente mencionadas, el Pleno de la Corte estima necesario reiterar, como lo hizo en su fallo del 16 de noviembre de 1995, que en las acciones de habeas corpus únicamente se debe considerar si la detención preventiva ordenada en autos cumple con los requisitos formales señalados en la ley. No es procedente, por tanto, en esta etapa incipiente del proceso y como pretende el licenciado Cedeño, hacer una evaluación definitiva de los testimonios que obran en autos, los cuales, como se ha dicho, vinculan directamente al señor FRÍAS ARCIA con la muerte del ciudadano Simón Bolívar Barrera Barba.

Cabe agregar además, que la detención preventiva decretada contra el procesado no viola ninguna de las normas constitucionales que le garantizan su

libertad corporal.

Por estas razones, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la detención del procesado es legal y así debe declararse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de BINDO FRÍAS ARCIA, ordenada por el Fiscal Primero Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante Resolución del 6 de julio de 1995, dentro de las sumarias que se le siguen por el delito de homicidio en perjuicio de Simón Bolívar Barrera Barba.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Tal como lo he expresado en la lectura del proyecto de la Distinguida, Magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera, supuesto sindicado BINDO FRIAS ARCIA, por la situación encontrada en el expediente; por la herida recibida que obligaron a atenderlo médicamente, era imposible su participación en el hecho imputado en su contra.

Por otro lado, el cúmulo de testigo que lo incriminan en la acción supuestamente incurrida, resultan ser parientes del occiso, aspecto que no tomó en cuenta o pasó desapercibido el Tribunal de la instancia, todo lo cual revela nula participación de Frías Arcia en el ilícito cuestionado.

Fecha ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE DE LEÓN, CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE FAMILIA Y EL MENOR. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 15 de enero de 1996 (f. 9), esta Corporación Judicial declinó el conocimiento de la acción de Habeas Corpus interpuesta por el señor **JORGE DE LEÓN**, y contra el Fiscal Auxiliar de la República, al Juzgado Municipal de Ancón.

El Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, con sede en el Corregimiento de Ancón, mediante resolución de 31 de enero de 1996 (f. 12), se inhibió de conocer de la acción de Habeas Corpus interpuesta por el señor **JORGE DE LEÓN**, sindicado por el supuesto delito de Violencia Intrafamiliar y Daños, en perjuicio de las señoras **MARTA CRUZ y DILSA NATIVIDAD CRUZ**, ya que el señor DE LEÓN se encontraba a órdenes de la Fiscalía Especializada del Menor y la Familia.

Recibido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el cuadernillo contentivo de ésta acción el día 31 de enero de 1996, y de acuerdo con el artículo 108 del Código Judicial, nuevamente éste Despacho pasa al conocimiento de la acción de Habeas Corpus a favor del señor **DE LEÓN**, el día 2 de febrero de 1996. Inmediatamente se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada quien, mediante Oficio N° 49-96 de la Fiscalía Segunda Especializada en Asuntos de Familia y el Menor de fecha 5 de febrero de 1996 (f. 28), manifestó que el señor JORGE DE LEÓN se encontraba en libertad mediante providencia de 25 de enero de 1996, y enviada por Oficio N° 029P-96 de la misma fecha al Director de la Cárcel Modelo.

Tenemos que resaltar que estas Fiscalías Especializadas en Asuntos de Familia y el Menor, tienen mando y jurisdicción en el Distrito de Panamá y San Miguelito, del Primer y Segundo Circuito Judicial de Panamá, otorgadas mediante resolución de 28 de diciembre de 1995, situación que varía la competencia de esta Corporación Judicial para conocer de la acción impetrada, por lo que debe declinarse el conocimiento de esta al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, tal como lo preceptúa el artículo 2588 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA esta acción de Habeas Corpus al Segundo Tribunal Superior de Justicia para que asuma la competencia y decida lo que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO BÁRCENAS PÉREZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada CLAUDIA BÁRCENAS RANGEL, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor MARIO BÁRCENAS PÉREZ, y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dicho funcionario contestó mediante Oficio N° 1173-96, lo siguiente:

"...
A.- Si es cierto que esta Agencia de Instrucción ordenó la detención del señor **MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ**, dicha orden se dio por escrito, mediante **resolución de fecha 23 de noviembre de 1995**, tal y como aparece acreditado a fojas 193 y 196 del sumario.

B.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

Los hechos que motivaron la detención preventiva del sindicado **MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ**, los reseñamos de la siguiente manera:

1. El día once (11) de noviembre de 1995, se evaden de las instalaciones de la sección de Investigación de la Dirección de

Migración y Naturalización, del Ministerio de Gobierno y Justicia, de la que forma parte el sindicado **BÁRCENAS PÉREZ**, los súbditos Colombianos **EDUARDO ALBERTO JARAMILLO TORRES y JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ**, quienes eran objeto de Instrucción sumarial, por delitos **CONTRA LA SALUD PÚBLICA**, relacionado con drogas.

2. De las investigaciones adelantadas hasta el día 23 de noviembre de 1995, fecha en que esta Agencia de Instrucción decretó la detención preventiva del recurrente, se pudo acreditar en autos, que la evasión de los prenombrados **JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ**, se materializó, gracias al concierto de voluntades de una serie de individuos (funcionarios públicos y particulares), con el único fin ilícito de lograr con documentación falsa, el traslado de los evadidos, el día 9 de noviembre de 1995, desde la Cárcel Modelo a la Dirección de Migración y Naturalización, y específicamente a la sección de Investigaciones, de dicha entidad, de donde se evaden el día 11 de noviembre de 1995, con el concurso de funcionarios de esta dependencia estatal.

3. El traslado de los evadidos JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ, fue efectuado por el sindicado MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ, funcionario de la Dirección de Migración y Naturalización, quien al ser indagado (fs. 150-152), señala que recibió una llamada del también sindicado HUMBERTO PINEDA ARAUJO, el día ocho (8) de noviembre de 1995, como a las ocho y veinte (8:20 p. m.), quien le comunicó que le había enviado un fax, relativo a la libertad de los prenombrados JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ, por lo que subió a la Dirección a buscar el documento con el Visto Bueno del Director, cuando recibe la orden de la Licenciada OSORIO, quien funge como Directora Administrativa de la institución, de que dejara eso para potro (sic) día. Narra que el día jueves nueve (9) de noviembre luego de haber recibido la nota original, enviada de la modelo, pensó dejar el traslado para el lunes siguiente, ya que ese fin de semana se iba a fumigar, después cambia de opinión, ya que el señor que iba a buscar a los detenidos, manifestó ser abogado, y lo reconoce en este despacho al verlo pasar, resultando ser éste, el también sindicado GILBERTO BILLINSGLEA DORATI.

Al ampliar su indagatoria, el sindicado BÁRCENAS PÉREZ (fs. 182-186), señala que PINEDA DE LA Cárcel Modelo, le informó que el abogado iba a poner el transporte para trasladar a los detenidos.

Sobre este particular, ORDONEL HERNÁNDEZ, jefe de la sección de investigaciones al rendir declaración jurada, (fs. 267-272), señala que a MARIO LUIS BÁRCENAS, no se le dio orden alguna para ir a buscar a los hoy evadidos JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ, que incluso se molestó con éste, por haber trasladado a los detenidos, ya que se tenía programado fumigar ese día y cuando éstos llegaron a la sección había veneno esparcido por todos lados, y que al cuestionar a BERCENAS (sic) sobre el traslado, éste se mostró preocupado.

En adición a ello, ANAYANSI DE GÓMEZ, quien es señalada por BÁRCENAS PÉREZ, como la secretaria que le entregó la libertad a los evadidos, señala a fojas 310-313, que al recibir las boletas procedentes de la dirección, le dijo al señor BÁRCENAS sobre la existencia de dos libertades, y que se dirigió a él, por el hecho de que era el único que tenía en la sección, licencia de conducir vigente, curiosamente BÁRCENAS PÉREZ, no conduce vehículo alguno el día que son trasladados JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ, por otro lado, esta testigo niega haberle dado orden alguna a BÁRCENAS PÉREZ, con relación al traslado de los hoy evadidos.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

> Aún cuando BÁRCENAS PÉREZ, podría alegarse que no estaba en el teatro de los hechos, cuando se materializa la evasión de los colombianos JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ, debemos recordar, que para la consumación del delito era necesaria la existencia de un concurso material de delitos, que van desde la asociación ilícita para cometer delitos relacionados con el Tráfico de Drogas Ilícitas, Sustancias Psicotrópicas o Delitos Conexos, cuya pena es de 5 a 8 años de prisión; Falsificación de Documento Público con una penalidad de 3 a 6 años de prisión y procurar la evasión de persona vinculada con delito contra la salud pública relacionado con droga.
>
> Tal y como obra en la resolución de fecha 23 de noviembre de 1995, el fundamento de derecho para decretar la detención del sindicado **MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ**, lo constituye los Artículos 2148, 2159 del Código Judicial y Artículo 263-G del Código Penal, adicionado por la Ley 13 de 27 de julio de 1994.
>
> C.- El Sindicado **MARIO LUIS BÁRCENAS**, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario LA JOYA y desde este momento se han puesto a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia".

Del informe transcrito se desprende, que la resolución de 23 de noviembre de 1995, mediante la cual se ordenó la detención de MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ, se basó en que el referido señor coadyuvó a la evasión de los colombianos EDUARDO ALBERTO JARAMILLO TORRES y JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ, quienes se encontraban recluidos en la Cárcel Modelo en virtud de sumarias instruidas en su contra por el delito Contra la Salud Pública, relacionada con Drogas.

Como fundamento de derecho para la detención de BÁRCENAS PÉREZ, señala el referido informe, los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, así como también el artículo 263-G del Código Penal, adicionado a la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

El artículo 263 G, es del tenor siguiente:

> "El servidor público que tenga a su cargo la investigación, juzgamiento o custodia de las personas vinculadas con los delitos tipificados en esta Ley y que oculte, altere, sustraiga o destruya rastros, pruebas o instrumentos del delito, o procure la evasión, de la persona capturada, detenida o condenada, será sancionado de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años".

Una vez realizada la lectura de las sumarias instruidas hasta el momento, es menester estimar las condiciones en que se dio la detención, con la intención de verificar si la misma cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del código Judicial.

El artículo 2148 de nuestro Código de Procedimiento, tiene como supuestos que justifican la detención preventiva, los delitos con penas mínimas de dos (2) años así como la "flagrancia" en la comisión de los mismos.

Por su parte, el artículo 2159, señala los elementos necesarios para que prospere la detención preventiva, so pena de nulidad, si los mismos no se cumplen:

1. El hecho imputado.

2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y

3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

Observa el Pleno en el expediente que contiene las sumarias, que se vincula

al señor MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ como la persona que trasladó a los señores EDUARDO ALBERTO JARAMILLO TORRES y JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ de la Cárcel Modelo hacia las instalaciones del Departamento de Migración y Naturalización, de donde se evadieron posteriormente.

Lo anterior se corrobora a fojas 42 del expediente que contiene las sumarias, en lo que se denomina "Libro de Sala de Guardia" que dice:

> "4:00 p. m. Procedente de la modelo llega el inspector Bárcenas con los siguientes detenidos:
>
> 1. JOSÉ LÓPEZ Colombiano
> 2. EDMUNDO ALBERTO TORRES Colombiano"

Es importante determinar, en primer lugar, bajo qué circunstancias los señores JARAMILLO, TORRES y LÓPEZ GÓMEZ, pudieron salir de la Cárcel Modelo en donde se encontraban detenidos por sumarias instruidas en su contra, por el Delito contra la Salud Pública, relacionada con Drogas.

Mediante oficio N° 3762-GJM-95 de fecha 8 de noviembre de 1995, obrante a fojas 26, el Director de la Cárcel Modelo, Licdo. VICTOR MANUEL QUIROZ PINTO, le comunica al Licdo. GERMÁN GIL SÁNCHEZ, Director Nacional de Migración y Naturalización, lo siguiente:

> "...
> Por este medio me dirijo Usted, a fin de informarle que se recibió en este Centro Carcelario las BOLETAS DE LIBERTAD de los siguientes internos:
>
> JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ: de nacionalidad Colombiano, sindicado por el delito de CONTRA LA SALUD PÚBLICA, y se encuentra a órdenes del juzgado 13° de Cto. de lo Penal del cto. de Panamá.
>
> EDUARDO ALBERTO TORRES JARAMILLO: de nacionalidad Colombiano, sindicado por el delito de CONTRA LA SALUD PÚBLICA y se encuentra a órdenes del Juzgado 13° de Cto. de lo Penal del Cto. de Panamá.
>
> Y el mismo Juzgado le otorgó su LIBERTAD DEFINITIVA, por haber dictado ACTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a su favor, mediante Oficio N° 2505 del 06 de noviembre de 1995."

De acuerdo a las constancias procesales, el oficio 3762-GJM-95 remitido al Departamento de Migración, fue enviado por el custodio de la Cárcel Modelo, HUMBERTO PINEDA, quien se ha declarado confeso en el sentido de que contribuyó, bajo supuestas amenazas que le hiciera el señor GILBERTO OWEN BILLINSGLEA DORATI, en la confección de las boletas de libertad, así como de hacer la comunicación al Depto. de Migración y Naturalización sobre la libertad de los mencionados señores.

Más adelante, en la ampliación de su declaración que hace el custodio HUMBERTO PINEDA ARAUJO, visible de fojas 145 y siguientes, específicamente a foja 149 del expediente, manifestó que llamó a Migración y habló con el Inspector BÁRCENAS sobre el Fax que estaba remitiendo acerca de la libertad de los señores JARAMILLO TORRES y LÓPEZ GÓMEZ y éste (refiriéndose a Bárcenas) le contestó que "ellos no tramitan nada por fax". Explica en su declaración Pineda (fs. 49) que el procedimiento en estos casos, es el siguiente:

> "... una vez llegada la boleta de libertad de cualquier extranjero, se le manda una nota a Migración donde lo estamos poniendo a órdenes de ellos para que ellos se encargaran de su respectivo proceso de documentación. Se demanda una nota donde le hacemos constar que se recibió la boleta, con fecha y oficio de esta manera ellos proceden a venir a buscarla".

Por otra parte, consta a fojas 200-201 del expediente, en la declaración jurada rendida por GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI, quien declaró:

> "... yo era la persona que iba a facilitar el transporte de los mismos, el que estaba encargado me atendió, entró en la oficina y salió acompañado de un inspector que se presentó como el Inspector Bárcenas y a él fue que autorizaron para la conducción de los detenidos Torres y López de la Modelo hacia Migración. Fuimos, estacioné el carro enfrente de la Modelo yo me quedé afuera esperando es más, posteriormente salieron los detenidos con el Inspector, se subierom al carro y los conduje hasta Migración. Allá me enteré de que ellos se tenían que quedar allí hasta el Lunes, ..."

Por último tenemos la declaración indagatoria rendida por el señor MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ (fjs. 145-146), que en su parte medular dice:

> "... el día 8 de noviembre a eso de las ocho y veinte de la mañana (8:20 a. m.) recibí una llamada del señor PINEDA, el cual trabaja en la Judicial de la Modelo, como anteriormente lo había hecho me comunicó que estaba enviando un fax para una libertad de unos ciudadanos colombianos, subí a buscar el fax a la Dirección, cuando el director le iva (sic) a poner el visto bueno me llamó la licenciada OSORIO, y me preguntó que quién enviaba ese fax y yo le respondí que de la Cárcel Modelo, ella me dijo que dejara eso para otro dia (sic) de ahí baje (sic) con el fax a la oficina de investigaciones para mejor esperar el original, ... me dijo la secretaria que ya estaba la libertad firmada por el director y con el visto bueno cosa que es lo normal para ir un detenido a cualquier centro penitenciario, le dije que mejor lo dejáramos para el día lunes porque iban a fumigar, despues (sic) cambie (sic) de ideas y como el señor que iba a llevar los custodios a buscar a los detenidos, el mismo manifesto (sic) ser abogado y cual acabo de ver en este Despacho a reconocer unas pertenencias que le mostraron ..."

Obviamente, no existe hasta el momento elementos probatorios que incriminen a BÁRCENAS PÉREZ dentro de los parámetros señalados en el artículo 263-G antes transcrito, al contrario, su actuación fue la de mero cumplimiento de sus deberes, y ello se corrobora con la nota que presentó en la Cárcel Modelo para que le fueran entregados los internos antes mencionados. La referida nota tenía el visto bueno del señor Director de Migración, por tanto, procedía tal comunicación.

El Pleno concluye que no se han dado los elementos probatorios exigidos por el artículo 2159 del Código Judicial, para la detención del prenombrado BÁRCENAS PÉREZ, por tanto, carece de fundamento la orden impetrada y que se lee en el informe de conducta del funcionario acusado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ y, en consecuencia, ORDENA su inmediata libertad, siempre y cuando no tenga otra causa penal pendiente que amerite su detención preventiva.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL

FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de Habeas Corpus interpuesta por el Licenciado **ENRIQUE DOMÍNGUEZ HURTADO** contra el FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, a favor del señor **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME** detenido en la Cárcel Modelo por delito contra la Salud Pública.

Acogida la presente acción, se libró el mandamiento correspondiente contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licenciado ROSENDO MIRANDA, quien mediante oficio N° 1209 de 31 de enero de 1996 rinde su informe de conducta en los siguientes términos:

> "PRIMERO: SÍ es cierto que ordenamos la detención del señor **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME**. Dicha decisión fue emitida mediante Resolución de fecha 22 de enero de 1996, la cual se encuentra acopiada en las sumarias que se le siguen a **ILMA GRACIELA HERNÁNDEZ CÓRDOBAS**, **GERARDO RODRÍGUEZ STERLING** y al Prenombrado. ...". (F. 9).

En cuanto a los fundamentos procedentes, el Señor Fiscal manifiesta que los hechos se dieron el pasado 17 de enero, fecha en que se logra la captura de **GERARDO RODRÍGUEZ STERLING (a) TITO STERLING**, el cual había sido señalado por una ciudadana retenida la noche anterior como la persona que le vendió la sustancia ilícita.

Luego del allanamiento a la casa del señor **STERLING**, éste se manifiesta dispuesto a cooperar con las autoridades para lograr la captura de sus distribuidores y abastecedores; se le autoriza entonces para hacer una llamada al teléfono N° 221-6727 para solicitar que se le proporcionara cierta cantidad de sustancia ilícita.

Al trasladarse los agentes de la Policía Técnica Judicial, de la Policía y del Despacho del Fiscal a el sector de Río Abajo en los estacionamientos de la Clínica 24 Horas San Luis, lugar acordado para la entrega de la droga, detienen a dos (2) damas que se dirigieron exactamente adonde estaba STERLING, identificándolas como **ILMA GRACIELA HERNÁNDEZ CÓRDOBA** y **BELKIS QUINTERO** (menor de edad). Inmediatamente se efectúa un registro corporal logrando encontrar en poder de la menor, una bolsa plástica de color blanco, dentro de la cual se encontraron ocho (8) bolsas de plástico transparente, contentivas cada una de ellas de cierta cantidad de una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea **COCAÍNA**.

Al obtener la dirección de la señora **ILMA GRACIELA HERNÁNDEZ CÓRDOBA**, se ordenó la diligencia de allanamiento en el cuarto N° 6, casa 3019 de la calle 15 Río Abajo, mismo lugar donde reside **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME (A) TONY**.

Sigue diciendo el señor Fiscal, que al entrar a la residencia antes mencionada, el señor **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME** manifestó no dedicarse a la venta de sustancias ilícitas y no tener valores, armas o drogas; sin embargo, una vez iniciado el registro se encontró debajo de una refrigeradora, un (1) revólver calibre 38 de marca ROSSI, con cinco (5) municiones vivas, una (1) pesa calibrada en gramos, gran cantidad de bolsitas de plástico transparente vacías, una (1) bolsita con harina de aspecto extraño, y debajo de la cama una cajeta con la cantidad de cuatrocientos veintisiete dólares con veintisiete centavos ($427.27) en billetes de diferentes denominaciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el señor Fiscal en su informe de conducta nos indica, entre otras cosas, lo siguiente:

> **"SEGUNDO:** Al someterse a los rigores de la Indagatoria el señor **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME**, manifestó que le dicen **"Tony"** y es amigo

del sujeto apodado "**Cesarín**" ya que es vecino de la comunidad, ...".

"... y aceptó que su número telefónico es el 221-6727, mismo que fue marcado por el señor **TITO STERLING**, en presencia de los funcionarios para pedir que se le abasteciera de drogas. ..."

"... Con todos estos elementos expuesto (sic) se dan los presupuestos legales que establece el artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que éste Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional de ordenar la detención de la (sic) prenombrada (sic). ...". (fojas 11 y 12).

Por su parte, el Licenciado **ENRIQUE DOMÍNGUEZ HURTADO** expresa en su demanda de Habeas Corpus, que en realidad no se efectuó "una diligencia de allanamiento presidida por autoridad con mando y jurisdicción competente o en su defecto por orden o comisión de ésta" (fojas 1 y 2), además señala que "no se levantó en el lugar de los hechos el acta de allanamiento correspondiente y tampoco se le mostró al detenido el proveído que ordenaba el allanamiento". Sin embargo, observamos que en la copia autenticada del sumario remitida por el señor Fiscal, consta la resolución de 17 de enero de 1996 por la cual "se decreta el allanamiento en cuarto N° 6, casa N° 3019, calle 15, Río Abajo, relacionado con la supuesta existencia de drogas ilícitas o evidencias, documentos o dineros relacionados con el narcotráfico." También consta en el sumario, el Acta de la Diligencia de Allanamiento al mencionado inmueble, la cual aparece debidamente firmada por el allanado, señor **MIGUEL DEAN**.

Igualmente manifiesta el Lic. DOMÍNGUEZ en su escrito, que, "... contra el señor **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME**, no existe señalamiento directo, tampoco ninguna prueba o indicio que lo involucre ..." (el subrayado es nuestro). Sin embargo en el Informe de Novedad de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de 16 de enero de 1996, el Detective ROGER GONZÁLEZ indica que **GERARDO RODRÍGUEZ STERLING** señala a **CÉSAR CARRASCO (A) CESARÍN** como su proveedor y a **TONY** (MIGUEL ANTONIO DEAN) como su "compinche".

El artículo 2148 del Código Judicial señala los dos casos en que es aplicable la detención preventiva: cuando se procede por delito con pena mínima de dos (2) años, y cuando el autor es sorprendido en flagrancia. En este sentido, el artículo 2149 señala:

"... También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, ...". (Lo subrayado es nuestro).

Tenemos, pues, que existe un señalamiento directo contra **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME** por parte del señor **STERLING**, como uno de sus proveedores; unido a esto, los hallazgos producto del allanamiento a su residencia que constituyen claramente implementos utilizados para el tráfico de estupefacientes.

En declaración indagatoria rendida por **MIGUEL DEAN**, éste dice que las bolsitas encontradas en su casa son utilizadas por él para la venta de clavitos de olor, e igualmente afirma que la pesa calibrada en gramos es para pesar el polvo de hornear cuando elabora dulces que también vende.

Contrario a lo anterior, obra en el sumario el Informe de Comisión de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial del día 17 de enero de 1996, el cual en su última foja indica lo siguiente:

"... al cuestionar al señor **DEAN** sobre los artículos encontrado (sic) no pudo dar respuesta alguna, también se le preguntó sobre el número de la línea telefónica que mantienen en el apartamento contestando que era el `221-6727 ." (El subrayado es nuestro).

Ahora bien, observa esta Corporación de Justicia que está acreditada la

comisión del hecho punible, ya que primeramente, la prueba de campo realizada por la División de Estupefacientes de la P. T. J. a las ocho bolsitas plásticas que portaba la sobrina de DEAN, dieron resultado positivo para la droga **COCAÍNA**. En segundo lugar existe el señalamiento directo del señor **GERARDO RODRÍGUEZ STERLING** quien vincula a **MIGUEL ANTONIO DEAN** como uno de sus proveedores. Y, en tercer lugar, en la diligencia de allanamiento realizada en su residencia fueron encontrados rastros que hacen presumir la autoría del delito, requisitos establecidos en el artículo 2148 y 2149 del Código Judicial, pues se trata de elementos utilizados para la preparación y distribución de drogas.

Compartimos con el señor Fiscal, que se debe tener como indicio la declaración indagatoria de la señora **ILMA GRACIELA HERNÁNDEZ CÓRDOBA,** manifestando que vive en la residencia allanada, aceptando que la joven **BELKIS** se encontraba en su casa y que le cuida a sus hijos.

El delito por el cual se encuentra detenido el referido **MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME** es de aquellos que atentan contra la Salud Pública relacionados con drogas, y específicamente el de tráfico, tipificado en el artículo 258, Capítulo V, Título VII del Libro II del Código Penal, en el que se establece una pena mayor de dos (2) años de prisión.

De lo anterior se desprende que estamos ante un hecho criminoso que amerita la medida cautelar de detención preventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 2148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME, y en consecuencia ORDENA sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO ENRIQUE ACEVEDO Y ALEXANDER ALMILLÁTEGUI CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS presentó acción de habeas corpus a favor de los señores GILBERTO ENRIQUE ACEVEDO y ALEXANDER ALMILLÁTEGUI, contra el Fiscal Segundo de Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, licenciado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ. El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial acogió la demanda y libró mandamiento contra el funcionario demandado, quien oportunamente contestó.

Al resolver la acción ese tribunal declaró legal la orden de detención preventiva contra los señores GILBERTO ENRIQUE ACEVEDO y ALEXANDER ALMILLÁTEGUI, y ordenó poner los detenidos a órdenes del Fiscal Segundo de Circuito. Contra esa decisión el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS, apeló.

Procede la Corte a resolver sobre la apelación. El Tribunal Superior del

Segundo Distrito Judicial, al declarar- legal la detención establece en la parte medular de su sentencia lo siguiente:

> "...
> Del estudio practicado colige la Sala que, contrario a lo que expone el letrado recurrente, en el caso **subjudice** no estamos en presencia de un ilícito inacabado, pues, la aprehensión de los sindicados no se efectúa en el instante en que se introducen o que salen de la residencia del ofendido, sino momentos después, cuando ya éstos -luego de perpetrar el ilícito- viajaban con el botín conseguido y al ver a los agentes de la Policía, se dieron a la fuga, dejando caer los bienes sustraídos. En otras palabras, al tenor de lo que señala el artículo 2149 del Código Judicial, la conducta de éstos -ya explicada- refleja flagrancia. ..."

En base a las constancias procesales, se puede observar que los detenidos GILBERTO ENRIQUE ACEVEDO y ALEXANDER ALMILLÁTEGUI, fueron detenidos de manera infraganti por los agentes de la Policía, lo cual queda corroborado con la declaración jurada del señor CÉSAR RÍOS VARGAS. Así lo expresa en parte de su declaración:

> "... Señor fiscal, a estos señores, los conocí el día del hecho que se investiga, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: Yo me encontraba con mi compañero Jaime Flores, en el vehículo patrulla por el área de San Francisco, serían aproximadamente las 2:30 p. m., cuando recibimos la llamada por radio que estaban violando la puerta de uno de los apartamentos del edificio SAN GREGORIO, ubicado en San Francisco, Reparto El Carmen. Nos acercamos al lugar, cuando vimos salieron a tres sujetos, con las descripciones que nos habían dado, ellos no nos habían visto, nos acercamos y le dimos la voz de "alto", le dijimos "parecen allí", entonces ellos abandonaron los objetos que llevaban, y salieron en estampida corriendo ... PREGUNTADO: Diga el declarante qué objetos llevaban los tres sujetos que usted señala salían del apartamento ubicado en Reparto el Carmen. CONTESTO: Señor Fiscal, llevaban un betamax, y la radiograbadora, crown, no se si llevarían artículos pequeños ..."

De lo anterior se colige que los detenidos no fueron sorprendidos dentro del lugar de los hechos, por lo que no se puede concluir que en este caso exista tentativa de delito como lo supone el accionante, sino de un delito consumado, dado que los objetos provenientes del ilícito fueron encontrados cuando los incriminados abandonándolos, se dieron a la fuga.

Es importante señalar que el señor ORESTE JESÚS BLANCO DOMÍNGUEZ reconoció los artículos encontrados como sustraídos de su residencia y acreditó la propiedad de los mismos con los testimonios de la señora HAYDEE ARTEGA DE ARNHEITER y la del señor CRISTIAN VALENTINE ARNHEITER (fs. 36), los mismos acreditan la propiedad de los artículos al señor ORESTE JESÚS BLANCO DOMÍNGUEZ (fs. 37 y 40). Por otra parte en el presente caso se han dado los requisitos necesarios para declarar legal la detención.

Finalmente, se está en presencia de un hecho delictivo penalizado con un mínimo mayor de dos (2) años de prisión. Consta en los autos las pruebas suficientes que acreditan la existencia del delito.

En consideración a lo anterior, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 3 de enero de 1996, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta por los señores GILBERTO ENRIQUE ACEVEDO y ALEXANDER ALMILLÁTEGUI, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY J. FAARUP M. CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada a favor del señor **HENRY J. FAARUP M.** contra el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, con el objeto de que se dejen sin efecto las medidas cautelares personales adoptadas contra el recurrente.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia decidió en primera instancia la presente acción constitucional, mediante sentencia de 29 de diciembre de 1995, que declaró legales las medidas cautelares aplicadas al señor FAARUP, utilizando como argumento principal, el siguiente:

> "Tenemos entonces que las medidas cautelares emanan de autoridad competente, proceden en delitos contra el honor, porque sólo se excluye la detención preventiva y, no es admisible el argumento de que ante la imposibilidad de aplicar ésta, tampoco son aplicables las otras, pues esa tesis sería contraria a la filosofía de tal instituto procesal bajo análisis y de toda la estructura jurídica al respecto.
>
> Dentro de otro contexto, consta la calificación de la fase intermedia, el proceso se encuentra en la fase plenaria y deben ser declaradas legales las medidas cautelares personales aplicadas." (Foja 14).

Por su parte, la firma forense Muñoz y Asociados, apoderada judicial del señor HENRY J. FAARUP M., fundamenta su apelación señalando que "En los delitos contra el honor no cabe la imposición de ninguna medida cautelar, ya que dichos delitos tienen previstas penas que no tienen como **mínimo una penalidad de dos años de prisión** que es el presupuesto indispensable para la imposición de medidas cautelares".

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que el recurrente no se encuentra privado de su libertad en ningún centro penitenciario. No obstante, sobre su persona pesan las medidas cautelares de carácter personal establecidas en las letras ordinales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial, las cuales afectan la libertad ambulatoria del señor FAARUP.

De acuerdo con las constancias procesales, dichas medidas cautelares fueron impuestas por el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto proferido el 20 de diciembre de 1995 que decretó, "APERTURA DE CAUSA CRIMINAL contra HENRY JOSEPH FAARUP MAUAD ... como presunto vulnerador de las disposiciones legales señaladas en el Capítulo I, Título III, Libro II del Código Penal, es decir, por los delitos genéricos de CALUMNIA E INJURIA." Además, señaló que en vista de que dichos delitos no ameritaban detención preventiva, en su lugar debían ser aplicadas las siguientes medidas cautelares personales:

> "1. La prohibición de salida del país, sin la correspondiente autorización judicial.

2. La obligación de comparecer a la sede de este Tribunal, los días 15 y 30 de cada mes, para lo cual se le llevará el debido registro de comparecencia.

3. La obligación de residir dentro de la circunscripción territorial correspondiente a la jurisdicción de este Tribunal." (Foja 120 del cuaderno principal).

Del texto transcrito se colige que la conducta ilícita que se le imputa al recurrente se encuentra consagrada en los artículos 172 a 175 del Código Penal. Dichos artículos contienen los delitos contra el honor, sancionados con días multa y con pena mínima de prisión inferior a los dos años.

Al respecto, el apoderado judicial del señor HENRY J. FAARUP alega que en vista de que el delito por el cual se le investiga no tiene pena mínima de prisión de dos años, no es aplicable ninguna medida cautelar personal.

Sin embargo, la Corte considera que la ley establece esa limitación únicamente para la detención preventiva y no para las demás medidas cautelares que contempla el artículo 2147-B del Código Judicial.

Así, el artículo 2147-C del Código Judicial se refiere, en general, a cuándo son aplicables las medidas cautelares; pero no a los casos particulares en que procede cada una de dichas medidas cautelares.

Eso explica que el artículo 2148 del mencionado código señale de manera particular, que la medida cautelar de prisión preventiva sólo procede cuando el delito de que se trate tenga pena mínima de dos años de prisión. Significa, entonces, que ese requisito no es necesario para imponer el resto de ellas.

Consecuentemente, las medidas cautelares decretadas contra el recurrente son legales y, por tanto, debe confirmarse la decisión del Tribunal Superior, en vista de que se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 29 de diciembre de 1995, que DECLARO LEGALES las medidas cautelares personales impuestas al señor HENRY J. FAARUP M.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. José A. Tejada M., ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor Franklin Ramos y en contra del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dicho funcionario dio respuesta al mismo mediante el oficio N° 300 de 30 de enero de 1996, en los siguientes términos:

> "Sí es cierto que esta Agencia del Ministerio Público ordenó la detención preventiva del recurrente FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS, mediante providencia de seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
>
> 2. Los motivos o fundamentos de Hecho y de Derecho que tuvo el Despacho para adoptar esta acción restrictiva de la libertad en contra de FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS están plasmados en la Providencia antes señalada.
>
> Dicha Providencia se dictó dentro del proceso que instruye esta Despacho acerca del HOMICIDIO cometido en perjuicio del menor LUIS FELIPE SAAVEDRA, hecho ocurrido el veintiséis (26) de septiembre de 1995 en el Distrito de Chame.
>
> La muerte traumática del menor LUIS FELIPE SAAVEDRA se encuentra debidamente acreditada mediante el Protocolo de Necropsia suscrito por el doctor ALFREDO RODRÍGUEZ LAY, médico forense del Instituto de Medicina Legal de la Chorrera quien estableció como causa de muerte: "SHOCK TRAUMÁTICO- HEMORRÁGICO, TRAUMATISMO TORACO-ABDOMINAL.
>
> La vinculación del sindicado FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS se ha comprobado dentro del sumario a través de diversos testimonio allegados al mismo.
>
> Los presupuestos de Derecho en que se basó esta Agencia de Instrucción para ordenar la detención preventiva de FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS son lo establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> 3. El ciudadano FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS se encuentra detenido actualmente en la Cárcel Modelo y a partir de la fecha será puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia."

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto al señor **FRANKLIN ALBERTO RAMOS CAMPOS** se le imputa el delito de homicidio en perjuicio del menor LUIS FELIPE SAAVEDRA.

Dentro de la solicitud presentada por el Lcdo. Tejada, sostiene que la detención de la que es objeto su representado es ilegal. A su juicio, el delito que se le imputa a su defendido es homicidio culposo, y, por ende, no es de conocimiento de la Fiscalía Superior ni tampoco amerita detención preventiva. A ello añade que la principal sospechosa es la madre, pues, era ella quien más tiempo pasaba con el menor.

La Corte observa que la muerte del menor LUIS FELIPE SAAVEDRA está debidamente acreditada tal como se aprecia en el informe de protocolo de necropsia practicado al menor visible de fojas 26 a 40 de las sumarias y en cuyas consideraciones médico legales señala que:

> "Se practica necropsia a cadáver de un infante de unos 3 años de edad. El desarrollo músculo-esquelético es normal a su edad cronológica. Mide 92 cms. Tiene peso aproximado de 12-13 kilogramos. Los fenómenos cadavéricos están representados por las livideces dorsales y rigidez muscular.
>
> En el examen externo se observan lesiones de tipo traumáticas en diferentes estados evolutivos y por diferentes objetos: contuso y contundentes y otros compatibles con mordeduras humanas.
>
> En el examen interno se observaron los siguientes hallazgos:

1. Hemorragia recientes pulmonar derecha, desgarros hiliares pulmonares y mediastínica posterior.
2. Desgarro hepático, desgarro de hilio hepático, desgarro mesentérico, hemorragia perirrenal derecha y desgarro hiliar esplénico. No se aprecian lesiones patológicas previas.

La causa de la muerte se debió al traumatismo toraco-abdominal: hemorragia pulmonar derecha, hemomediastino, laceración hepática, hemorragia perrirenal y de hilo esplénico.

CAUSAS DE LA MUERTE
SHOCK TRAUMÁTICO-HEMORRÁGICO
TRAUMATISMO TORACO ABDOMINAL".

Igualmente observa la Corte, que dentro de las sumarias constan declaraciones de diversas personas visibles de fojas 10 a 20 de las sumarias, que son coincidentes en señalar al señor FRANKLIN ALBERTO RAMOS, como la persona que profería maltratos tanto a la joven YAMILETH SAAVEDRA, madre del menor, como a sus dos hijos. También la madre del menor rinde declaración en la que se destaca que la noche anterior a la muerte de su hijo, "el niño estaba comiendo, yo le estaba dando la comida, el bebi me decía que no quería más, en eso llegó FRANKLIN RAMOS, que era el hombre con el que yo vivía, entonces el escuchó esto y lo agarró y le empezó a dar la comida a la fuerza que vomitó, no era la primera vez que hacía esta gracia ..." Luego añade que "... agarró un palo de la escoba y le pegaba en la cabeza, por la espalda y por todo el cuerpo, el niño tenía un cortadita en el cuello lado izquierdo eso lo había hecho él, más antes él también le había fracturado un brazo ...".

Una vez leído el informe del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y estudiado las sumarias seguidas al señor FRANKLIN RAMOS por el delito de homicidio en perjuicio del menor de 3 años de edad LUIS FELIPE SAAVEDRA, la Corte estima que hasta esta etapa incipiente del proceso existen fuertes indicios que lo vinculan con los hechos a él imputados.

Por otra parte, consta de fojas 49 a 51 de las sumarias, que el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial ordenó la detención preventiva del señor Franklin Ramos por el delito de "homicidio", delito que tiene fijada pena de prisión mínima superior de 2 años, razón por la cual, la orden de detención preventiva ha sido expedida por dicho funcionario con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial.

Por todo lo antes expuesto, concluye el Pleno que en la detención preventiva del señor FRANKLIN RAMOS no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y, por lo tanto, lo procedente es, pues, declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor FRANKLIN RAMOS y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUCRECIO VARGAS GONZÁLEZ CONTRA DEL FISCAL DE

CIRCUITO DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema, de la acción de Habeas Corpus presentada por el licenciado **MOISÉS ESPINO BRAVO** a favor de **LUCRECIO VERGARA GONZÁLEZ** contra el Fiscal de Circuito Judicial de Los Santos, por considerar que la privación de libertad que sufre el señor **VERGARA**, es ilegal.

El Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, al conocer en primera instancia de la acción propuesta, decidió declarar legal la orden de detención expedida por la Fiscalía de Circuito, al manifestar que de las piezas de instrucción aportadas se desprende que la medida cautelar aplicada ha cumplido con las formalidades constitucionales y legales pertinentes, y que la misma obedece a que el señor **VERGARA** se encuentra sindicado por delito contra el patrimonio, en perjuicio del señor ZOILO VARGAS.

LA RESOLUCIÓN APELADA

El Tribunal Superior de Justicia, en resolución de 25 de enero de 1996, al declarar legal la detención del señor **LUCRECIO VERGARA**, señaló:

> "Observa esta Corporación Judicial que, según las constancias sumariales, **ZOILO ENRIQUE VARGAS HERRERA** se apersonó a las oficinas de la Policía Técnica Judicial en esta ciudad para denunciar que allá en la comunidad de Oria de Cañafístulo, Distrito de Pocrí, el 7 de diciembre de 1995, a tempranas horas de la mañana, salió a trabajar con su nieto EMILIO ESCUDERO, y al regresar al mediodía a su domicilio encontró a su mujer, IGNACIA JIMÉNEZ VERGARA, muy alterada, porque dos hombres cubriéndose el rostro con medias de uso femenino y portando un arma de fuego con la que amenazaron, la obligaron a entregarle todo el dinero que tenía depositado en una bolsa de arroz de veinticinco (25) libras, que según se ha dicho, ascendía a más de veinticuatro mil balboas (B/.24,000.00) y un collar que la infortunada mujer llevaba puesto.
>
> Todo indica entonces, que se investiga, fundamentalmente, la comisión de un hecho punible catalogado como robo calificado, por cuanto que los autores no sólo intimidaron a IGNACIA JIMÉNEZ VERGARA con un arma de fuego, que según ellos, posteriormente, lanzaron a un herbazal por aquel recóndito lugar, sino que se enmascararon, lo que indudablemente trae consigo pena mínima superior a dos (2) años de prisión ...
>
> Lo cierto es que en su indagatoria LUCRECIO VERGARA GONZÁLEZ (fs. 296-304 y 401-402) da a entender que él no participó en el acto punible, lo que resulta cierto ateniéndonos a las palabras de CALVO y CÁRDENAS que admitieron que el 7 de diciembre último se apoderaron de una alta suma de dinero bajo circunstancias ya conocidas, sin embargo, también es verdad que de las transcripciones realizadas en líneas anteriores se desprende que entre él y los autores materiales había un concierto de ideas para delinquir, lo que ubica no sólo como integrante de una asociación ilícita, sino como instigador que intencionalmente determinó a otros a realizar un hecho punible, y resulta que según nuestra legislación positiva los autores, cómplices primarios e instigadores serán sancionados con pena que la ley señala al hecho punible."

Por su parte, el licenciado ESPINO, en su calidad de defensor de oficio del señor **VERGARA**, ha señalado que su disconformidad con la resolución apelada se centra en que el único acto imputable a su defendido es haber recibido en calidad

de préstamo, una suma de dinero que había sido parte del botín robado por los señores CALVO y CÁRDENAS, sugiriendo que no existen elementos probatorios que le vinculen, en ningún grado, con el hecho punible.

Esta Superioridad procede en consecuencia, al análisis de las piezas de instrucción allegadas al expediente, así como de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, que consideró que había plena legitimidad formal en la medida de privación de libertad adoptada.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL AD-QUEM

El Pleno de la Corte, al examinar los elementos que constan en el legajo contentivo del sumario iniciado contra el señor **VERGARA** advierte que el mismo se origina con la denuncia suscrita por ZOILO VARGAS HERRERA, en el sentido de que su esposa había sido víctima de un robo a mano armada en su propia residencia por parte de dos sujetos, posteriormente identificados como LUIS CALVO y JOSÉ CÁRDENAS, quienes confesaron su participación en el hecho.

Según el examen adelantado por el Tribunal A-quo, la vinculación del señor **VERGARA** con el delito se desprende de las diferentes declaraciones que se recogen en el expediente contentivo de 444 fojas útiles, en el sentido de que el prenombrado no sólo era conocedor del hecho punible que se pensaba perpetrar, sino que además había recibido una de las tres partes en que se había distribuido el botín o dinero sustraído. Ello obedecía a que el señor **VERGARA** se había comprometido por una parte, a guardar el secreto sobre ilícito, y había aportado ideas sobre la forma de consumación del mismo.

Estos elementos objetivos y subjetivos llevaron al Fiscal de Circuito a ordenar la detención preventiva del señor **VERGARA**. La de los señores CALVO y CÁRDENAS ya se había dispuesto, al estar éstos confesos del ilícito cometido.

Del extenso expediente sumarial pueden extraerse efectivamente, y tal como expusiese el Tribunal de primera instancia, elementos que apuntan hacia la participación del detenido en el hecho punible. Entre los más importantes tenemos los siguientes:

Los testimonios de VIRGINIA VALLE DE CORDERO y NELSON CORDERO, que declararon haberle guardado a **VERGARA** un envoltorio sellado que él les había manifestado era de su propiedad, contentivo de una importante suma de dinero que en el transcurso de la investigación se determinó que era parte del botín robado.

La joven MARILIN ANDERSON, quien convivía con LUIS CALVO en casa del señor **VERGARA**, al rendir declaración manifiesta claramente que **LUCRECIO VERGARA** conocía con antelación del ilícito que se planeaba, a tal punto que una vez perpetrado el mismo **"había preguntado directamente a LUIS CALVO cómo había resultado todo"**, y **había recibido parte del dinero que había llevado CALVO a la casa** (cfr. 264-265); posteriormente recibió otra parte del dinero (f. 266). Al ser careada con el señor **VERGARA**, la joven MARILIN señaló: **"él si sabía que LUIS venía para acá, porque de no ser así por qué le preguntó a Luis cómo salió, que si salió bien ..."**

El otro imputado, señor LUIS CALVO en su indagatoria (cfr. foja 286) manifiesta que **LUCRECIO VERGARA** conocía bien del ilícito que se pensaba realizar, les había hecho algunas advertencias en el sentido de que fuesen cuidadosos, y una vez perpetrado el mismo también recibió parte del dinero robado, mismo que utilizó, entre otros fines para el alquiler de un vehículo, guardando el restante.

Estas dos personas fueron careadas en diligencia visible a folios 331-334, y el señor CALVO se ratifica de lo declarado al señalar: "y entonces LUCRECIO, me dijo que hiciera eso pa' comprar un lote para mi casa y entonces LUCRECIO, me dijo que hiciera pa' compra una casa que estaba a mediasta (sic) y la comprobaba a nombre de él, y después él LUCRE me pasaba el título a nombre mío".

A foja 394 se observa que CALVO manifestó que **"Lucre le dijo que le**

entregara dinero para guardarle el secreto, después los tres tocaron mita y mita, él le dio plata de esa a Lucre, mita y mita", sigue diciendo que el dinero del robo lo partió él en tres partes **"porque una era para él, otra para Lucre y la otra para José ... le entregó a José una de las tres partes y las otras dos se las llevó él, y que la partió con Lucre para que le callara el secreto, porque estaba viviendo en la casa de Lucre, quien le dijo que si iba a estar metido iba a estar metido de lleno, por eso le dio el dinero que le tocaba ...".**

El Tribunal Superior, en la resolución atacada realiza un examen de la situación procesal del imputado **VERGARA**, y concluye que aunque éste no participó materialmente en la ejecución del robo, participó en su ideación o instigó para la realización del mismo, tal como se describe en la diferentes declaraciones que lo incriminan, a tal punto que recibió en pago parte del dinero, circunstancia ampliamente probada en la instrucción sumarial.

La detención preventiva en este sentido, se sustenta en las pruebas recabadas, que hasta el momento apuntan hacia la participación del señor LUCRECIO en un ilícito cuya sanción punitiva excede los dos años de prisión, lo que hace viable la medida cautelar personal aplicada.

Esta fue ordenada atendiendo las exigencias legales establecidas a los fines de decretar una detención preventiva, y aunque el imputado sostiene que no se encuentra vinculado al hecho punible, pesan sobre el mismo señalamientos específicos en el sentido de que instigó para la realización del robo perpetrado, y posteriormente exigió dinero a cambio de encubrir el delito, dinero que efectivamente tuvo en su poder, y que ha señalado con posterioridad obedecía a un préstamo.

No ha podido sin embargo explicar de manera convincente para qué fines solicitó el referido "préstamo", y tampoco aclara por qué hizo llegar al detenido LUIS CALVO nota secreta en la cárcel, en la que a manera de advertencia le indicaba que debía "enfrentar el problema solo" (f. 401-402).

Nada impide que en el transcurso de la investigación se alleguen nuevos elementos que hagan variar la situación procesal del imputado, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos a su favor, circunstancia que deberá ser deslindada por el juzgador de la causa en la etapa correspondiente. Sin embargo, al presente efectivamente reposan en autos, contrario a lo esbozado por la parte actora, elementos que le vinculan con el hecho investigado.

En estas circunstancias se concluye que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, pues se sustenta con la existencia de elementos probatorios que apuntan hacia la vinculación por parte del detenido con el hecho punible, razón por la cual la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que examinó la detención preventiva del señor **LUCRECIO VERGARA**, debe ser confirmada.

En consecuencia, la Corte Suprema Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 25 de enero de 1996 que DECLARO LEGAL la detención del señor LUCRECIO VERGARA GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIN WEI CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Lorenzo Isaac Camarena interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de LIN WEI y contra el Director Nacional del Departamento de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Llama la atención el hecho de que el demandante no solicite la revocatoria de la medida ni que se le conceda la libertad al agraviado, y la pretensión que anuncia es que se ordene el traslado del detenido "a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial **a efecto de evitar que sea deportado**" (f. 2). Aun cuando no es esta la vía idónea para formular objeciones dentro de un proceso de extradición, ese no es propiamente la situación que se trae a conocimiento del Pleno, como tampoco se alega la ilegalidad de la deportación, que es una de las razones que autoriza el examen de la situación procesal del detenido por este mecanismo constitucional (a. 2566, numeral 5).

Por acogida la presente iniciativa constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien contestó mediante oficio N° DNMYN 039-96 de 3 de febrero del año en curso. El funcionario acusado admite en su informe de conducta haber ordenado la detención de Wei, la que corrió a cargo de agentes de esa entidad estatal de servicio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 24 de enero del año que decurre, cuando el detenido se disponía a partir hacia los Estados Unidos de América utilizando "un pasaporte falso a nombre de YU, CHING-HSIA, de nacionalidad taiwanesa" (f. 5). Agrega que posteriormente se pudo comprobar la identidad de Wei, mediante copia de su verdadero pasaporte que reposa en los archivos de la institución, y que la Embajada de la República de China, mediante nota P-96-33 de 29 de enero de 1996, demostró la usurpación de identidad en que incurriera el detenido. Por último, se informa que el detenido se encuentra "en espera de Resolución para ser efectiva su deportación" (f. 6).

Es preciso indicar que, junto con la contestación del mandamiento, la autoridad demandada remitió fotocopias de documentos que se presume conforman el expediente migratorio de Lin Wei.

Con la documentación aportada por el Director de Migración y Naturalización, concretamente de la hoja de filiación del Registro de Inmigrantes, se comprueba que el detenido es nacional de la República de China y que ingresó a Panamá el 21 de abril de 1994 en calidad de turista, con destino final a su país natal (f. 7).

A fojas 8 y 9 del cuaderno aparece copia del pasaporte N° 140328265, expedido por la República Popular de China el 16 de marzo de 1994, que da cuenta de que el detenido tenía visa hasta por un término de 30 días, con fecha de vencimiento el 14 de julio de 1994.

Conforme viene dicho, el informe de la autoridad acusada indica que, al momento de su captura, efectuada por agentes del Departamento de Migración y Naturalización, el detenido portaba un pasaporte falso. A folios 11-14 figura copia del pasaporte N° M 3452060, expedido en Taipei, que portaba Wei cuando se le detuvo. La Dirección de Migración y Naturalización solicitó a la embajada de la República de China que certificara la autenticidad de ese documento, recibiendo respuesta en el sentido de que "el pasaporte mencionado muestra estar alterado en la fecha de nacimiento, sexo y en la foto, ya que no corresponden a la persona a quien se le expidió el mismo" (f. 16).

A juicio de la Corte Suprema la actuación de las autoridades de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización se encuentra ajustada a derecho,

habida cuenta de la grave infracción de la normativa migratoria vigente (Decreto Ley N° 16 de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 1965 y la Ley N° 6 de 1980) en que incurriera el detenido.

Por otro lado, la Corte estima improcedente la pretensión que anuncia el libelo de habeas corpus, en el sentido de que se ordene el traslado del detenido a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, con el fin de evitar su deportación, ya que los artículos 58, 60, 65 y 66 del Decreto Ley N° 16 de 1960 establecen como autoridad competente para la custodia y deportación de extranjeros indocumentados al Departamento de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Lin Wei y, en consecuencia, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS A FAVOR DE NIVALDO MADRIÑÁN APONTE Y CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de Habeas Corpus a favor de NIVALDO MADRIÑÁN APONTE y contra el señor Procurador General de la Nación.

Acogido el recurso y librado el mandamiento de Habeas Corpus, el funcionario demandado rindió el informe solicitado mediante el Oficio N° DPG-199-96, del 14 de febrero de 1996 en el que indicó que sí ordenó la detención de NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, mediante providencia del 26 de enero de 1990, pero que en la actualidad, el mismo "no se encuentra a órdenes de este despacho, pues las sumarias que se seguían en contra del mismo salieron de este despacho el 21 de mayo de 1990, con el oficio DPG-1918-90, quedando radicadas, posteriormente, en la Fiscalía Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá" (f. 8).

Tal como se observa, el detenido fue puesto a órdenes de la Fiscalía Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, por lo cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para conocer de la presente acción de Habeas Corpus y debe declinar su conocimiento al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, de conformidad con los artículos 2602, numeral 2°, y 2588 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de Habeas Corpus en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO EUCLIDES SORIANO CONTRA EL LIC. HUMBERTO COLLADO CASTILLO DE LA SECRETARÍA DE DROGAS, AGENCIA DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Edwin Horacio Cedeño Rodríguez presentó acción de habeas corpus a favor del señor **PABLO EUCLIDES SORIANO**, quien se encuentra detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Chitré, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

Cumplidas las ritualidades correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento contra la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados con Drogas del Cuarto Distrito Judicial. El Licenciado Humberto A. Collado Castillo, Fiscal Primero Superior Interino del Cuarto Distrito Judicial respondió por medio de Oficio N° 100 de 31 de enero de 1996, consultable de foja 9 a 11, en el que informa lo siguiente:

> "A) Es cierto que ordené mediante la resolución calendada 26 de enero de este año y visible de folios 26 a 28 del cuaderno principal, la detención preventiva del señor PABLO EUCLIDES SORIANO (A) HUECA;
>
> B) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que originaron esta detención son los siguientes:
>
> El día 25 de enero del presente año la Sub Dirección de Información e Investigación Policial de la Policía Nacional de Los Santos (SUB-DIIP), logró la captura de un señor llamado ELISEO VEGA BENAVIDES, quien poseía 5 paquetes plásticos rellenos de un polvo blanco y un sobrecito plástico más pequeño también con un polvo blanco, que al practicársele la prueba de campo visible a folios 3 del expediente principal dio resultados positivos para la presencia de la droga conocida como cocaína.
>
> En vista de esta situación se ordenó la recepción de la declaración indagatoria del precitado VEGA BENAVIDES quien explicó que la droga encontrada en su poder le fue entregada en Panamá por un sujeto de nombre ARMANDO para ser trasladada hacia la comunidad de Guararé para su distribución por el sujeto apodado HUECA, quien se verificó responde al nombre de PABLO E. SORIANO, según los informes de seguimiento de la Agencia Regional de Drogas de Azuero. Esa transacción respondió a una propuesta que con anterioridad Soriano le hizo, por lo que al momento de su detención se encontraba esperándolo en una hamaca en el portal de su residencia (la de Soriano), ya que por el transporte de la droga le había prometido la suma B/.50.00; todo ello se aprecia en la indagatoria de folios 8 a 12 del presente proceso; así también, estos cargos fueron ratificados en la declaración jurada de página 13.
>
> La detención atacada también se basó en diversos informes de seguimiento que reposan en la Agencia Regional de Drogas (véanse las

fojas 16 a 17) que indican que PABLO E. SORIANO está vinculado en el trasiego de drogas."

Igualmente, la autoridad acusada remitió copia del proceso que se adelanta contra los señores ELISEO VEGA BENAVIDES y PABLO EUCLIDES SORIANO, por supuesto delito contra la salud pública.

Del informe rendido por el Fiscal Primero Superior del Cuarto Distrito Judicial y del resto de las constancias procesales se colige que la detención del beneficiado con el presente habeas corpus, es legal.

En primer lugar, de foja 26 a 28 de dicho cuaderno se encuentra providencia fechada 26 de enero de 1996, por medio de la cual la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial decretó la detención preventiva del señor PABLO E. SORIANO (A) HUECA y ordenó se le recibiera declaración indagatoria.

En segundo lugar, existen elementos probatorios que vinculan al recurrente con la comisión del hecho ilícito que se le imputa. Así, consta el señalamiento directo del señor ELISEO VEGA BENAVIDES, quien sostiene en su declaración indagatoria, que la droga que le fue incautada al momento de su detención le pertenecía al señor SORIANO; y que éste se encargaría de distribuirla posteriormente. Posteriormente, en declaración jurada consultable a foja 13 del cuaderno principal, se ratifica de los cargos contra el recurrente.

En tercer lugar, a foja 3 de ese mismo cuaderno, aparece la diligencia de la prueba de campo en la cual se señala que la sustancia que le fue decomisada al señor BENAVIDES, "que consiste en cinco (5) envoltorios grandes de un plástico transparente con un polvo de color blanco y un (1) envoltorio más pequeño plástico de un polvo blanco", al practicársele la mencionada prueba de campo dio resultado positivo a la droga conocida como cocaína.

Por último, se observa que el ilícito investigado posee pena mínima de prisión superior a los dos años, razón por la cual debe concluirse que la detención preventiva del señor PABLO EUCLIDES SORIANO es legal, en vista de que cumple con los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor PABLO EUCLIDES SORIANO (A) HUECA y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes del Fiscal Primero Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHIDE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BALDOMIR KRIZAJ Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA**, mediante escrito presentado

a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, promovió acción de Habeas Corpus a favor de los señores **BALDOMIR KRIZAJ Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ** y contra el **SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ** al ordenar mediante auto de 10 de marzo de 1995, la detención de sus representados.

De conformidad al texto del libelo presentado, la ilegalidad de la orden de detención se produce por la presentación paralela de varias denuncias en distintos tribunales, omitiendo la acumulación de los procesos, dando como resultado el doble juzgamiento por las mismas causas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, el presidente encargado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, remitió el oficio N° 34-F de 31 de marzo de 1996, que en lo pertinente dice:

> "Con el debido respeto presentamos el informe referente a la Demanda de Habeas Corpus formulada por el Lcdo. Eugenio Carrillo Gomila, en beneficio de los señores BALDOMIR KRISAJ (sic) KREGAR y EDITH CALVERA DE KRIZAJ, con motivo de la decisión adoptada en la Sala integrada por los Honorables Magistrados Joaquín Ortega V. y Wilfredo Sáenz F., con fecha de 10 de marzo de 1995, consultable de fojas 1418 a 1421, por medio de la cual se reforma el auto de 15 de septiembre de 1994, proferido por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, y mantiene la detención preventiva de los señores BALDOMIR KRISAJ (sic) y EDITH CALVERA DE KRISAJ (sic), en los siguientes términos:
>
> A. Sí es cierto que la Sala citada ordenó la detención preventiva cuestionada, como consecuencia de un recurso de apelación contra la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, el día 15 de septiembre de 1994, reformada por este Tribunal Superior el día 10 de marzo de 1995 (fs. 1418-1421).
>
> B. La medida cautelar personal cuestionada está fundamentada en que los esposos BALDOMIR KRISAJ (sic) y EDITH CALVERA DE KRISAJ (sic), protocolizaron un acta de reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad KREPOR INVESTMENT, INC., dejando sin efecto la Escritura Pública 9880 de 28 de diciembre de 1992, de la Notaría Primera de Circuito de Panamá, bajo supuesto de poseer el 100% de las acciones y, el denunciante ROLANDO ELÍAS GONZALEZ SALERNO presentó denuncia y pruebas consistentes en copia autenticada del acta de la reunión extraordinaria de fecha de 8 de enero de 1993, celebrada por la Junta General de Accionistas de la sociedad KREPOR INVESTMENT, INC. y protocolizada mediante Escritura 394 de 12 de enero de 1993, demostrando que los esposos KRISAJ no son los propietarios de las acciones descritas, sino la sociedad AUTUM TRADING CORP.
>
> Esa situación configura el delito de falsedad ideológica, tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal, los cuales permiten la detención preventiva, porque la pena mínima no es menor de dos años de prisión.
>
> C. La Sala no tiene bajo su custodia u órdenes las personas en cuyo beneficio ha sido presentada la demanda de habeas corpus y el proceso en mención se encuentra radicado en el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, porque lo devolvieron a ese Tribunal y lo hemos solicitado para remitirlo a la Honorable Corte Suprema de Justicia".

De la lectura de la prueba documental aportada por el accionante y del examen del expediente de 1506 folios, que contiene el proceso penal seguido a Baldomir Krizaj Kregar por delito contra la fe pública, se colige que, en efecto, en distintos tribunales penales se han tramitado procesos contra Krizaj Kregar

y Edith Calvera de Krizaj por delitos de falsedad, algunos de ellos ya decididos en dos instancias.

En cuanto al caso penal cuya orden de detención se impugna, salta a la vista dos hechos relevantes para la decisión de la acción propuesta. Ellos son: 1. La fecha del auto confirmatorio del Segundo Tribunal Superior de Justicia que data del 10 de marzo de 1995 y 2. La fijación de la cuantía de la fianza solicitada por los abogados de los encausados en este caso, con posterioridad a la notificación del auto encausatorio.

Por razón de la inadecuada instrucción de los sumarios y la desordenada incorporación de la documentación pertinente, se registra en la práctica un número crecido de procesos en los que se reiteran los mismos escritos y pruebas que ya han sido presentados previamente en otros procesos, sean estos de naturaleza penal o civil, lo que convierte cada expediente en una amalgama confusa, abultada e incoherente de los hechos en que se basan las distintas pretensiones de los sujetos procesales. Tal es el caso que hoy reclama nuestra atención, en el que se encuentran dos autos de vocación a juicio dictados por el Juzgado Octavo del Circuito, ambos confirmados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en los que se ordena la detención de los señores Krizaj.

La acción de Habeas Corpus, como es del conocimiento de los estudiosos de las ciencias jurídicas, está destinada a tutelar dos derechos fundamentales de la mayor importancia en cualquier estado de Derecho: la libertad personal y la libertad ambulatoria. Su razón ontológica, como lo anota Castro Loría, es "prevenir y reprimir cualquier restricción ilegítima a su libertad, sin importar su origen" (Cfr. Castro Loría, Juan Carlos. Recursos de Amparo y Habeas Corpus. Edit. Juritexto, San José, C. R. 1993, p-19). Lo expresado significa que a través de esta acción no es posible suplir una diligencia de acumulación de procesos, ni revisar el basamento jurídico de la valoración del sumario, menos aún, cuando el expediente que sirve de antecedente a esta acción recoge una diversidad de incidentes, solicitudes y medios de impugnación presentados por las partes, que son un claro indicador de que en el mismo se le han otorgado todas las garantías procesales que la Constitución y la ley reconocen.

La orden de detención surge como consecuencia del auto encausatorio dictado por supuestas infracciones a la ley penal que conllevan tal medida cautelar personal. A su vez, la privación de libertad decretada emana de autoridad competente, por lo que los vicios de ilegalidad imputados no tienen apoyo en la realidad procesal examinada.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia contra BALDOMIR KRIZAJ KREGAR Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ mediante auto de 10 de marzo de 1995.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZALEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WILSON CÁCERES MOSQUERA, CONTRA EL SUBCOMISIONADO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL (D. I. I. P.), DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis Quintero Poveda, presentó acción de Habeas Corpus a favor del señor **WILSON CÁCERES MOSQUERA**, y contra el Sub-Comisionado **TOMÁS GARCÍA TOBAR**, Director de la Dirección de Información e Investigación de la Policía Nacional (D. I. I. P.), el día 15 de febrero de 1996.

Una vez librado el correspondiente mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada, ésta mediante Oficio N° DAL-0179 de fecha 22 de febrero de 1996, contestó lo siguiente:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente, ni en forma verbal ni escrito.
>
> B. Queda explicado en el literal anterior.
>
> C. No tengo bajo mi custodia al Señor **WILSON CÁCERES MOSQUERA** El mismo no se encuentra detenido en ninguna de las instalaciones de la Policía Nacional."

Del informe se desprende que el señor **WILSON CÁCERES MOSQUERA**, se encuentra en pleno ejercicio de su libertad ambulatoria, por lo cual no procede la continuidad procesal en la presente acción.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO VÍCTOR CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado AZAEL PABLO TSIMOGIANIS VILLALOBOS ha interpuesto acción de Habeas Corpus contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia a favor de **JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO VÍCTOR**, quien se encuentra actualmente detenido en el Centro Penitenciario LA JOYA a órdenes de dicha autoridad.

Entre los hechos que el demandante expresa como fundamento de la presente acción se destaca: que JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO se encuentra privado de su libertad desde el 17 de octubre de 1971 a causa del homicidio de HIGINIO CEDEÑO; que el 5 de diciembre de 1993 el Segundo Tribunal Superior dictó auto de sobreseimiento definitivo por considerar al sindicado inimputable por trastorno mental al cometer el delito y ordenó mantenerlo en un lugar con condiciones de seguridad hasta que no representara un peligro; posteriormente, luego de evaluaciones psiquiátricas que señalaron que el imputado no presentaba trastorno mental, del examen de documentación sobre su buena conducta y la opinión favorable del Ministerio Público, el Tribunal dictó resolución de 2 de agosto de 1995 ordenando su inmediata libertad, que sería efectiva cuando alguno de sus parientes se

hiciera responsable del mismo.

En tal sentido, el recurrente considera que la detención que aún sufre el sindicado es ilegal pues se está subordinando los efectos de un acto de administrar justicia que ordena la inmediata libertad a la voluntad de terceras personas. Aunado a lo cual indica que se han ignorado las pruebas que demuestran que dejaron de subsistir las condiciones que determinaron la aplicación de las medidas curativas (artículos 110 y 115 del Código Penal).

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, el funcionario demandado contestó mediante Oficio N° 37. G. Q. de 13 de febrero de 1996, que en síntesis señala:

Que la decisión de condicionar la libertad del sindicado se fundamentó en las evaluaciones de diferentes Psiquiatras Forenses del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, entre las cuales la del Dr. Kaled indica en el punto 6 que "La experiencia para estos casos aconseja Medida de Prevención porque hemos tenido inclusive en nuestro ejercicio profesional varios casos semejantes que han reincidido en homicidios por no adoptarse las medidas precautorias".

Como fundamento de derecho cita los artículos 115 y 116 del Código Penal.

DECISIÓN DE LA CORTE

El Pleno de la Corte procede a resolver lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

Como es sabido la acción de habeas corpus tiene como objeto proteger los derechos individuales de libertad, integridad y seguridad personal. Por ello una de sus finalidades es determinar si la detención que sufre una persona está legalmente fundamentada. En esta oportunidad no se trata del caso común para el cual se utiliza esta acción, consistente en impugnar una orden de detención (ejecutada o no), pues la denuncia se formula contra una detención sin causa legal o, en otras palabras, contra una resolución que ordena la libertad pero la condiciona.

Como se ha podido apreciar del expediente, se trata de una persona que si bien estuvo legalmente detenida durante muchos años por razón de una medida de seguridad de tipo curativa, aún se le restringe el goce de su libertad luego de haberse declarado en resolución judicial que habían dejado de existir las condiciones que determinaron la aplicación de tal medida. Por esa razón, el mismo fallo ordenó su inmediata libertad pero condicionó su efectividad a que un pariente se responsabilizase del interno.

La decisión antes aludida cita como fundamento de derecho los artículos 115 y 116 del Código Penal que establecen lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 115**: El término máximo de duración de las medidas de seguridad que impliquen internamiento será de 20 años, salvo las de carácter curativo que subsistirán mientras duren las causas que las motivaron.
>
> **ARTÍCULO 116**: Transcurrido el término mínimo de la medida de seguridad a que se refiere el artículo 111, el Tribunal ordenará el examen de la persona sometida a custodia o tratamiento para decidir si subsisten o no las condiciones que determinaron las medidas de seguridad. En caso afirmativo, el Tribunal fijará otro término para su estudio ulterior, sin perjuicio de practicar, en cualquier tiempo, un nuevo examen del sujeto, cuando hubiere razones suficientes para creer que las condiciones que determinaron las medidas de seguridad han cesado."

La confrontación de lo preceptuado por las normas antes transcritas con lo acontecido en este caso claramente revela que la medida de seguridad de carácter curativo impuesta a JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO no puede seguir subsistiendo puesto que la causa que la motivó, en este caso la enfermedad mental del imputado, ha

cesado. Esta circunstancia fue certificada por médicos forenses del Ministerio Público que practicaron los últimos exámenes psiquiátricos al interno.

Lo anterior fue reconocido en la resolución de 2 de agosto de 1995, pero ese reconocimiento no se refleja del todo en su parte resolutiva, cuando ordena la libertad del sindicado restringiéndola e impidiéndola al mismo tiempo. Para llegar a esa contradictoria decisión el fallo aludió a diversos aspectos y a cierta documentación que son parte de los antecedentes de este caso, entre los que se destacan los siguiente puntos o argumentos:

1. La Vista de la Fiscalía Superior Segunda del Primer Distrito Judicial (fs. 51 a 53), en la que el funcionario opinó **"que la medida curativa de reclusión con la finalidad de recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico durante su internamiento han producido resultados positivos y alentadores, en relación al cuadro de esquizofrenia paranoide que presentaba JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO VÍCTOR, hace 24 años"**. Dicha conclusión la fundamenta en la Certificación, visible a foja 6, de dos médicos Psiquiatras Forenses del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público; en permisos provisionales para salir del penal otorgados al sindicado desde 1994; en la certificación del Consejo Técnico Penal en que se alude a la gestión realizada por el señor CEDEÑO VÍCTOR para conseguir para el futuro una residencia (fs. 10); en el documento referente a la salida del interno para retirar dinero de su cuenta en la Caja de Ahorros (fs. 38).

2. Resalta que desde que ocurrió el delito en 1971 Cedeño Víctor ha estado detenido preventivamente y así ha permanecido aún después que se decidió su sobreseimiento definitivo (1973) debido a su condición mental, sin embargo no existe constancia en el expediente que desde esa época hasta ahora se le haya sometido a tratamiento psiquiátrico, pero sí de que ha sido objeto de evaluaciones progresivamente.

Sobre estas evaluaciones el juzgador destaca la efectuada al paciente el 1° de abril de 1993 por el Doctor José A. Kaled, Psiquiatra del Departamento de Corrección; y, otra de fecha más reciente, 28 de marzo de 1995, realizada por los doctores Bressan y Pérez, Psiquiatras del Instituto de Medicina Legal (en la que se fundamentó el Fiscal).

3. Destaca los diversos permisos para salir del penal que se le han otorgado para diversos asuntos y el hecho de que dentro del Centro Penitenciario realiza labores calificadas como loables debido a los 63 años de edad con que cuenta.

En atención a todo lo anterior el Pleno de la Corte considera que lo que influyó en el ánimo del Tribunal para condicionar la libertad concedida al interno fue el dictamen del doctor Kaled expedido hace casi tres años y, en efecto, se puede apreciar que el punto 6 del dicho dictamen es el que invoca el funcionario demandado al contestar el presente mandamiento de habeas corpus. Sin embargo, la Corte debe anotar que en ese punto el médico aconseja medidas de prevención para evitar una posible reincidencia y que tales medidas de acuerdo al artículo 107 del Código Penal se aplican para evitar la conducta delictiva y **"no conllevan internamiento"**. (Énfasis de la Corte).

En este caso son más relevantes los últimos exámenes practicados al paciente, lo que resulta reforzado con la documentación y otras circunstancias del expediente que demuestran la buena conducta del paciente durante el largo tiempo en que ha estado recluido.

Todos los elementos mencionados resultan suficientes para reconocer, como en efecto lo hizo el Tribunal, que en la actualidad no concurren en la persona las causas que motivaron la medida de seguridad de tipo curativo; por lo que, a juicio de la Corte, su ejecución tiene que finalizar, así como la privación de libertad que ella conlleva, sin querer significar por eso que se dejen de aplicar otra clase de medidas de seguridad que no impliquen el internamiento de la persona que estuvo enferma en un centro penitenciario.

No se puede mantener a la persona que cometió un delito a consecuencia de una enfermedad mental indefinidamente en un establecimiento carcelario, en

particular cuando a la misma se le ha declarado inimputable, se le ha aplicado una medida de seguridad-curativa (que conllevó su internamiento por más de 20 años) la cual, según lo declaró la autoridad competente, también ha culminado.

En estas situaciones el Estado es responsable de que a las personas en estas condiciones se les brinde un tratamiento diferente y especial. Para tales efectos se han creado las medidas curativas que fueron aplicadas en este caso y cuyo objeto es modificar la conducta y personalidad del sujeto, a fin de evitar la repetición de hechos punibles, las que además deben ser ejecutadas en establecimientos especiales o secciones adecuadas de los centros penales (artículo 110 C. Penal).

Por lo antes indicado, si en el caso que nos ocupa se cumplió el objeto de la medida curativa (modificar la conducta y personalidad del sujeto) es un contrasentido que aún continúe recluido en el penal, debido a la incertidumbre que provoca en el ánimo del juzgador su potencial conducta en el futuro. No puede, en opinión del Pleno, hacerse depender el goce de la libertad individual de los temores surgidos al calor de simples especulaciones, por mejor intencionado que sea el motivo en que éstas se inspiren.

En los casos en que se suspenda o termine una pena o una medida de seguridad se podrían aplicar otras medidas como las preventivas, que impongan la obligación de presentarse, por un tiempo prudencial, a organismos especiales encargados de vigilancia previamente designados por el Tribunal, evitando con ello la merma de la garantía de la libertad personal. (Artículos 107, 108 y 112 ord. 3 del C. Penal.)

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de JOSÉ DEL CARMEN CEDEÑO VÍCTOR, ORDENA a la autoridad competente le otorgue su inmediata libertad y le aplique la medida preventiva correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS A. CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELISEO ANTONIO MÁRQUEZ C. CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta a favor de **ELISEO ANTONIO MÁRQUEZ**, contra el **Fiscal Auxiliar de la República**, Licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA.

Acogida la presente acción, se libró el respectivo mandamiento contra el funcionario acusado, quien mediante oficio N° 2892 de 16 de febrero de 1996, informó lo siguiente:

> "Con relación de darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus librado en contra del suscrito y en favor de ELISEO ANTONIO MÁRQUEZ C., informo a usted, que el expediente fue enviado a la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el Oficio N° 1343, del 24 de enero del presente año. El traspaso del detenido

a la Cárcel Modelo es el N° 1341, del 26 de enero de 1996." (F. 5).

De conformidad con lo manifestado por el señor Fiscal Auxiliar de la República, se desprende que **ELISEO ANTONIO MÁRQUEZ** se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial; lo cual hace que esta Corporación carezca de competencia para conocer de la presente acción en virtud de lo dispuesto en los artículos 2588 y 2602 numeral 2 del Código Judicial; éste último es del tenor siguiente:

> "... 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por actos que procedan de autoridades, o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia; ...".

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento del presente negocio; y en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAS (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE MATSEL ANEL MORALES CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al **PLENO** de la Corte Suprema, la acción de Habeas Corpus interpuesta contra el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, a favor de **MATSEL ANEL MORALES** detenido en la Cárcel Pública de David por delito contra la Salud Pública.

Acogida la presente acción, se libró mandamiento correspondiente contra el mencionado agente del Ministerio Público, Licenciado **EDWIN ÁLVAREZ CAMAÑO**, quien mediante oficio N° FPS-SDCH-1092/95 de 20 de diciembre de 1995, rinde su informe de conducta en los siguientes términos:

> "**PRIMERO**: Ciertamente yo ordené la detención preventiva del ahora demandante en la acción de Habeas Corpus. Dicha medida cautelar personal se dictó en las sumarias que se instruyen por delito genérico **CONTRA LA SALUD PÚBLICA** mediante resolución escrita consultable de fojas 11 a 13 de la instrucción en referencia. ...
>
> ... En la citada resolución se hace referencia al informe confeccionado por los Cabo **BEITA** y **LAINE**, los cuales se encontraban a las 20:50 hrs. del día 21 de noviembre del presente año, de servicio en la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial de Chiriquí, recibiendo este último una llamada telefónica en la Sala Guardia del S. D. I. I. P de David, mediante la cual se le informaba que el Bar Arco Iris de esta ciudad había un sujeto de nombre "**Matsel**", quien se estaba dedicando a la venta de sustancias presumiblemente droga y que el mismo vestía pantalón jeans y camisa a rayas. Así mismo, fueron informados que el ciudadano en mención había solicitado a las dependiente una gillete y que luego se

dirigió a los servicios.

En atención a la información obtenidas, aproximadamente cinco minutos después de recibir dicha llamada, es por lo que los Cabo **BEITÍA**, **LAYNE** , **RUIZ** y **SÁNCHEZ**, a bordo de un vehículo Hyundai se trasladaron al citado Bar, logrando visualizar cuando el sujeto descrito salía de los servicios y al percatarse de la presencia de las unidades de la Policía en el lugar, se dirigió a la barra y al ser registrado se percataron que se trataba de **MATSEL ANEL MORALES**, cedulado N° 1-26-2291 y en el servicio se encontró una gillette persona, un carrrizo de material plástico, papel amarillo y de aluminio y en la puerta del lado izquierdo se encontró un envoltorio de papel aluminio en su interior contenía cinco (5) fragmentos de sustancia sólida color crema, presumiblemente la droga conocida como "piedra". evidencias que fueron encontrada por el Cabo **GUSTAVO LAYNE**, las últimas evidencias al ser sometidas a la prueba de campo preliminar resultaron positivas para la determinación de **COCAÍNA (CRACK)**. ..." (F. 8 y 9).

Por su parte, el recurrente manifiesta en su escrito de Habeas Corpus, que fue privado ilegalmente de su libertad por agentes del D. I. I. P., mientras se encontraba en la cantina Arco Iris en compañía de EIRA RODRÍGUEZ, DANIEL MIRANDA, ALFREDO (A) TROMPAZO y el joven RAMÓN; que se le efectuó un registro a él y a los jóvenes DANIEL MIRANDA y JOSÉ DEL CID y que no se le encontró nada ilícito en su poder.

A foja 25 del sumario se lee la declaración jurada del Cabo **Fidelcio Beitía**, quien indica lo siguiente:

"... al llegar al lugar de los hechos el sujeto fue señalado por la persona que había realizado la llamada telefónica sin que él se diera cuenta. Cuando llegamos al Bar Arco Iris el sujeto estaba dentro del Baño, de allí salió sospechosamente, tomo (sic) asiento ..." (El subrayado es nuestro).

Similares declaraciones hace el Agente **ABDIEL SÁNCHEZ** a foja 28 del sumario cuando indica:

"... el mismo (MATSEL) utilizaba según el informante, el baño del establecimiento para evitar cualquier sospecha o encontrar sustancia alguna en su poder, ...

... nos percatamos que un sujeto salía del baño y fue señalado de manera disimulada de una señora que es la informante que ése era el sujeto que ella había observado en una actitud sospechosa, ..."

"... lo conocía sólo de vista debido a que este sujeto ya había sido señalado con anterioridad de que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en el área del Mercado Público. ..." (El subrayado es nuestro).

Observa esta Corporación, que el caso que nos ocupa cumple con los requisitos que exige el artículo 2148 para que proceda la medida cautelar decretada; esto es, cuando se trate de delito que tenga señalada pena mínima de dos años, y cuando el autor es sorprendido en flagrancia. En este sentido, el artículo 2149 dispone:

"... También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, ..." (El subrayado es nuestro).

Tenemos, pues, que existen graves indicios que vinculan a MATSEL MORALES con la comisión del delito en cuestión:

-la llamada telefónica de la informante, señalándolo por su nombre como el vendedor de drogas e indicando la forma como estaba vestido;

-el señalamiento directo que en el lugar de los hechos hace la misma informante de que era MATSEL el sujeto en cuestión;

-el hecho de que era él la única persona que estaba en el baño antes que los agentes del D. I. I. P. lo revisaran y encontraran la droga.

-la prueba de campo practicada a la sustancia encontrada, indicando que se trata de COCAÍNA (CRACK);

Estima la Corte que las anteriores circunstancias son suficientes para considerar que la detención preventiva tiene mérito en el proceso que nos ocupa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL, la detención preventiva decretada contra MATSEL ANEL MORALES, y en consecuencia ORDENA sea filiado nuevamente en la Cárcel Pública de David, a órdenes del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR MAXIMINO MEJÍA ORTEGA A FAVOR DE JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ADAMES CONTRA EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado MAXIMINO MEJÍA ORTEGA a favor de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ADAMES, contra el MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, señor RAÚL MONTENEGRO DIVIAZO.

Acogida la presente acción, se libró el mandamiento de rigor contra el funcionario acusado, quien mediante escrito del 16 de febrero de 1996, informa, a través de su apoderado judicial, el Licenciado EFEBO DÍAZ HERRERA, lo siguiente:

"...

PRIMERO: El Señor Ministro de Gobierno y Justicia no ha impartido órdenes de detención de ninguna naturaleza en contra del demandante; ni jamás este ciudadano se ha mantenido privado de su libertad por órdenes de funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia.

SEGUNDO: Tengo conocimiento de que el demandante originalmente fue recluido en el Hospital Santo Tomás por causa de un extraño accidente del cual salió con serias quemaduras.

TERCERO: Luego JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ADAMES por razones desconocidas y además extrañas, fue ingresado a la sala 31 de dicho hospital, la cual está reservada únicamente para personas sometidas a detención judicial.

Mi mandante tampoco ordenó el traslado del demandante a aquella sala de detenidos, ni ese traslado ha sido autorizado por el Director Nacional del Corrección.

CUARTO: Informo que con el nombre de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ADAMES no aparece nadie registrado como detenido, cumpliendo condena ni bajo proceso alguno. ...". (Fs. 5 y 6).

En este sentido, de conformidad con lo manifestado por el señor Ministro de Gobierno y Justicia, se desprende que no existe orden de detención decretada contra el precitado GONZÁLEZ ADAMES. Por lo tanto, resulta notorio que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia; y consecuentemente sería infructuoso iniciar un procedimiento de habeas corpus, ya que el precitado goza de libertad corporal, pues no obra contra él detención o proceso alguno. Por lo tanto procede ordenar el cese del procedimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el CESE DEL PROCEDIMIENTO en la presente acción de habeas corpus; y por consiguiente, DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Los argumentos expuestos por el actor para sustentar su acción son los siguientes:

1) Que mediante oficio fechado mayo 19 de 1995 y numerado 110-O. V., el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia le ordena a la Dirección de la Cárcel Modelo que sea puesto en inmediata libertad en todos los casos o procesos que reposan en los juzgados 1°, 2°, 4°, 6° y 13° de Circuito Penal y que las sentencias que reposan en el Departamento Nacional de Corrección de los Juzgados 8° de Circuito Penal, a purgar 8 años de prisión; Juzgado 3° de Circuito Penal, a purgar 5 años 5 meses de prisión; Juzgado 10° de Circuito Penal a purgar 4 años de prisión, la colegiatura de Magistrados del Segundo Tribunal se inhibe, sobre esos tres casos en particular. Sin embargo, conocedores somos que sólo estoy pagando o purgando esos tres procesos de esos juzgados 3°, 8°, 10°, que en su totalidad arrojan 17 años 5 meses de prisión por delito de falsedad de documento privado (cheque) y conocedores somos de que no tengo más nada pendiente ...
... en días pasados observé por medios noticiosos televisivos y escuché también por medios noticiosos radiales un "pronunciamiento"

> de la señora Procuradora de la Administración ... la que dijo que "las penas o condenas corren paralelas", esto es que la pena más grande absorbe la más chica cuando existen dos o más sentencias que purgar (Una especie de acumulación de penas y condenas). Ahora bien, en mis tres condenas el Juzgado 3° condenó con 5 años 5 meses; el 10° condenó con 4 años y el 8° Circuito Penal condenó con 8 años; siendo ésta la mayor y lógico nos resulta que esos ocho (8) años absorben (sic) las otras dos, por lo menos esto siempre ha sido así ...
>
> Señor Magistrado demostrado está que llevo más de trece (13) preso y que con trece años cubierto está de sobra la condena de ocho (8) años del Juzgado 8°, ésta absorbe (sic) por ser la mayor a la del Juzgado 3° y 10° Circuito Penal, entonces qué hago yo preso, si no tengo más nada pendiente? ...
>
> 3) Por otra parte tenemos que si aplicamos el artículo 85 del Código Penal y sus 2/3 partes para obtener libertad condicional tenemos que 17 años y 5 meses pagan con once (11) años y sencillo, yo llevo 13 años preso "comprobado" y con buena conducta ... con todo el respeto solicito a los señores Magistrados se me ponga en inmediata libertad por tener mis condenas pagas, por aquello de lo dicho por la señora Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher y que "las penas corren paralelas" o bien porque caigo dentro de los parámetros de lo contemplado en el artículo 85 del Código Penal." (Fs. 1-5).

Al contestar el mandamiento de habeas corpus, mediante Nota N° 464-DNC. 96. S del 6 de febrero de 1996, el Director Nacional de Corrección expresó que el señor **JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA** se encuentra detenido a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección y bajo la custodia del Director de la Cárcel Modelo, cumpliendo tres condenas, a saber: cuarenta y ochos meses de prisión impuesta por el Juzgado Décimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Sentencia del 14 de octubre de 1993, la cual terminará de cumplir el 16 de diciembre de 1997; ocho años de prisión impuestos por el Juzgado 8° del Circuito Penal de Panamá, mediante Sentencia del 12 de julio de 1989, la que se cumplirá totalmente el día 16 de diciembre del año 2,005; y, finalmente, la pena de cinco años y cinco meses de prisión y ciento doce días-multa, impuesta por el Juzgado 3° de Circuito del mismo Circuito penal en la Sentencia del 20 de febrero de 1992 y que terminará de cumplir el día 16 de mayo del año 2,011 (fs. 14-15).

Al axaminar los hechos a los que se contrae la presente acción de habeas corpus, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia observa que mediante Sentencia del 13 de junio de 1995, esta Corporación de Justicia se pronunció sobre la misma pretensión que ahora formula el demandante.

En efecto, mediante Sentencia del 8 de mayo de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal la detención preventiva que venía sufriendo el señor JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA con relación a los procesos que se le siguen en los Juzgados 1°, 2°, 4°, 6° y 13° del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal, y ordenó su inmediata libertad. En esa misma sentencia, dicho tribunal se inhibió de conocer del recurso de habeas corpus en cuanto a los procesos ventilados en los Juzgados 3°, 8° y 10° de la misma jurisdicción y circunscripción, en virtud de que CHÁVEZ HERRERA fue condenado en estos tres últimos procesos y estaba a órdenes del Director Nacional de Corrección (Cfr. el expediente sobre la Acción de Habeas Corpus interpuesta por JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA contra el Juez Primero de Circuito de Panamá, Magistrado Ponente Joaquín Ortega, Entrada N° 126, fs. 23-33).

Después de remitido aquel negocio al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se dictó la mencionada Sentencia del 13 de junio de 1995 mediante la cual se declaró legal la detención del precitado señor JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA. En la parte pertinente de ese fallo, esta Corporación de Justicia expuso lo siguiente:

"Esta Superioridad al proceder al examen de la acción presentada, advierte que la detención que sufre el señor **JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA** obedece, conforme a lo expresado por el proponente de la acción y de conformidad con el informe y las certificaciones que reposan a folios 40-44 del expediente, remitido por la Dirección Nacional de Corrección, a que el mismo se encuentra cumpliendo las penas impuestas por las sentencias condenatorias proferidas por:

1. El Juzgado Décimo de Circuito de Panamá, Ramo Penal, en sentencia de 14 de octubre de 1993 condenó al señor **CHÁVEZ** a cumplir la pena de 4 años de prisión por delitos de **Estafa y Falsedad** en perjuicio Bodega Mi Amiga (Denunciante: Nixia Rivera) y Supersónico, S. A. (Denunciante: Ricardo Moreno); y

2. El Juzgado Octavo de Circuito de Panamá, Ramo Penal, en sentencia de 12 de julio de 1989, condenó al señor **CHÁVEZ** a cumplir la pena de 8 años de prisión por el delito de **Falsedad** en perjuicio de: José Paniza; Hotel Ejecutivo; Herberto Archivol; Fernando Broce; SECOFISA: Saúl Alein; Mueblería Panamá: Saturnino González; Empresa Tacusco: Ricardo Testa; FIDANQUE Hnos. e hijos, S. A.; Guillermo Iglesias, RAPICHEQUE, Ricardo de Obaldía.

Como se desprende de las certificaciones de la Dirección Nacional de Corrección remitidas a esta Corporación Judicial legible a fojas 42 y 44 del expediente, **el señor JUAN CHÁVEZ se encuentra recluido en la Cárcel Modelo en la etapa de ejecución de las penas impuestas**. En el caso de la condena de 4 años de prisión impuesta por el Juzgado Décimo de Circuito Penal de Panamá, la misma se cumpliría en su totalidad el día **16 de diciembre de 1997**; y en el caso de la sanción condenatoria de 8 años de prisión impuesta por el Juzgado Octavo de Circuito Penal de Panamá, el total de la misma se cumplirá el día **16 de diciembre de año 2005.**

Sin embargo, el Magistrado Sustanciador al examinar la documentación remitida por la Dirección Nacional de Corrección y confrontarla con los legajos remitidos por el Segundo Tribunal Superior de Justicia se percató de que en la contestación del libramiento de habeas Corpus se omitió adjuntar la información relativa a la ejecución de la pena de 5 años de prisión y 112 días multa impuesta a **JUAN ANTONIO CHÁVEZ** por el Juzgado Tercero de Circuito Penal. ...

Este Máximo Tribunal de Justicia observa que la disconformidad del recurrente con la privación de libertad que sufre radica de manera central en el hecho alegado de que ya ha cumplido con todas las penas impuestas, puesto que si se hace un **cómputo simultáneo de las penas**, el señor **CHÁVEZ** ya cumplió con las tres sanciones condenatorias, en virtud de su prolongada detención preventiva, que abarca más de doce años de reclusión carcelaria.

Sin embargo la correcta interpretación del artículo 58 del Código Penal nos conduce a señalar que la detención preventiva se descuenta del cómputo de la pena impuesta en la sentencia, lo que se conoce como "abono a pena", pero se limita al caso específico que motiva la detención.

Como quiera que en esta punto se produce el fenómeno de la **pluralidad delictiva**, en la que no ha sido posible la acumulación por cuanto no había identidad de delito, ni identidad de propósitos, ni identidad de sujetos pasivos, el procesado tiene derecho, a que se le considere autor de un concurso real del delito y a la **unificación de las penas**, por resultar aplicables los artículos 2003 del Código Judicial, 64 y 65 del Código Penal, que especifican el procedimiento a seguir para computar correctamente la sanción imponible, ya sea que se trate de la misma clase de pena o de penas diferentes.

> Mas debemos indicar que la vía procesal para corregir la omisión en que se incurrió no es la seleccionada por el recurrente, toda vez que la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas cautelares personales que desconozcan los parámetros y formalidades constitucionales y legales establecidos para garantizar la libertad individual, y en este caso no puede aducirse que la detención del señor **JUAN ANTONIO CHÁVEZ** fue decretada al margen de la Ley, puesto que en su momento, la medida cautelar personal de privación de libertad fue ordenada por las autoridades competentes, dentro de las instrucciones sumariales por delitos de falsedad y estafa, y con ajuste a las disposiciones legales que regentan la materia." (El primer subrayado es nuestro). (Registro Judicial de junio de 1995, págs. 90-93).

Tal como se observa, la misma materia que en el presente caso se somete al examen del Pleno de la Corte, ya ha sido decidida mediante la Sentencia parcialmente transcrita. En esa oportunidad, esta Corporación de Justicia resolvió la acción habeas corpus presentada por el señor JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA declarando legal la privación de libertad que aún en la actualidad sufre, **por considerar que está cumpliendo las condenas impuestas por los Juzgados 8°, 3° y 10°** de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal. En dicha acción, remitida al Pleno por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, también figuró como funcionario demandado el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia. En la presente causa, el señor CHÁVEZ HERRERA pide que se declare ilegal su detención **por estimar cumplidas las penas impuestas por los tres tribunales aludidos** y dirige su acción contra el funcionario antes mencionado.

Después de examinar los hechos expuestos por el demandante en esta nueva acción de habeas corpus, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que no existen motivos para declarar ilegal su detención, ya que las circunstancias que llevaron a esta Corporación Justicia a declarar la legalidad de la misma, mediante la Sentencia del 13 de junio de 1995, no han variado.

Finalmente, esta Corporación de Justicia considera necesario reiterar al demandante, que la vía escogida para promover su pretensión no es la correcta "toda vez que la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas cautelares personales que desconozcan los parámetros y formalidades constitucionales y legales establecidos para garantizar la libertad individual". En todo caso y como se indicó en el fallo transcrito, el señor JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA debe acogerse a lo establecido en los artículo 2003 del Código Judicial y 64 y 65 del Código Penal.

Con respecto a la alegada aplicación del artículo 85 del Código Penal, el Pleno de la Corte nuevamente debe indicar que el actor yerra en la vía procesal escogida, ya que de acuerdo con el artículo 86 del mismo Código, dicho beneficio sólo puede otorgarlo el Organo Ejecutivo mediante resolución.

Por las razones anotadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que ES LEGAL la detención del señor JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERRERA, quien está a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OLEGARIO DÍAZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Eduardo E. Ríos Molinar interpuso acción de habeas corpus a favor del señor **OLEGARIO DÍAZ**, contra el Inspector Jefe de la Policía Técnica Judicial del Corregimiento de San Francisco.

El Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien informó que el recurrente se encontraba a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República. Como consecuencia de ello, se remitió el recurso a esta corporación judicial.

El Magistrado Sustanciador libró mandamiento contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien respondió mediante Oficio N° 2450 de 12 de febrero de 1996, lo siguiente:

> "A) No es cierto que haya ordenado la detención del señor **OLEGARIO DÍAZ**, ya que mediante oficio N° 2448 del 9 de los corrientes, dirigido a la Policía Técnica Judicial, se ordenó que se dejara sin efecto su aprehensión." (Foja 10).

Del informe transcrito se concluye que el recurrente se encuentra libertad, razón por la cual debe ordenarse el cese de la presente acción de habeas corpus, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor OLEGARIO DÍAZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO OMAR RIVAS QUIJADA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Asunción Alonso de Montalvo presentó recurso de habeas corpus a favor del señor **Roberto Omar Rivas Quijada** y en contra del Director Nacional de Corrección.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Correción, dicho funcionario contestó mediante Oficio N° 498-DNC. 96. S. lo siguiente:

> "A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor ROBERTO OMAR RIVAS QUIJADA, ni verbalmente ni por escrito.

B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.

C. El recurrente, señor ROBERTO OMAR RIVAS QUIJADA con cédula de identidad personal N° 8-411-942, fue puesto a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección toda vez que el Juzgado Segundo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia N° SC-85 de fecha 19 de mayo de 1994, condenara al precitado señor a la pena de veinte (20) meses de prisión por la comisión del delito de Robo en grado de tentativa en perjuicio de Lim Wat o Lim Huan Ding, y dado que a la fecha, el mismo ha cumplido la totalidad de la pena, esta Dirección ha ordenado su libertad."

Aunado a lo anterior, igualmente observa el Pleno, que a foja 6 del expediente aparece la boleta N° 100-DNC fechada el 12 de febrero de 1996, en la que se le concede la libertad por haber cumplido la pena total.

Dado que de lo antes anotado se colige claramente que el señor ROBERTO OMAR RIVAS QUIJADA goza de libertad, el Pleno de esta Corporación considera que debe procederse entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor CARLOS P. BROWN ha promovido acción de habeas corpus a favor de RICAURTE EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, por considerar que es ilegal la detención que lo mantiene privado de su libertad.

Una vez librado el mandamiento de habeas corpus, se requirió el informe de rigor a la autoridad demandada. Mediante Oficio N° 415 de 16 de febrero de 1996. El funcionario acusado rindió el siguiente informe:

"...

1. No es cierto que este Despacho haya ordenado la detención del recurrente. La detención del señor RICAURTE EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY, fue ordenada mediante providencia fechada el día 30 de agosto de 1995, emitida por la Fiscalía Tercera del Circuito de la Provincia de Colón. (Ver foja 49).

2. Según se desprende de la providencia en comento, la detención de RICAURTE EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY tuvo como fundamento lo siguiente:

"... denuncia suscrita por EDWIN HENRY CABAL MARÍN, en la P. T. J. de Cristóbal, el día 21 de julio de 1995; por el asalto cometido en horas de la noche del veinte (20) de ese mismo mes y año, por dos sujetos en la residencia del prenombrado FERNANDO MARÍN, quien resultó herido con arma de fuego, debido a disparos hechos por los asaltantes. Posteriormente rindió declaración jurada en la P. T. J. de Cristóbal, la señora RUBIELA MARÍN GUTIÉRREZ, hermana de Fernando Marín, quien dijo que al irlo a visitar en la sala de cuidados intensivos, del hospital Manuel Amador Guerrero, éste le dijo que los sujetos que lo atacaron fueron, el hijo de Gisela que le dicen ADI y otro de apodo REY, con residencia en Coco Solo, quienes tenían capuchas puestas en el rostro, logrando quitarle a uno de ellos la que tenía puesta ..."

3. En la actualidad el señor RICAURTE EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) "REY", con cédula de identidad personal N° 3-701-2333 y con residencia en la Barriada Coco Solo, se encuentra detenido en la Cárcel Pública de Colón, a órdenes de este Despacho Instructor, en virtud de nota N° 2677 del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, fechada el 13 de noviembre de 1995 y dirigida al Director de Corrección de la provincia de Colón. No obstante, a fin de verificar esa información se llamó vía telefónica a la Cárcel Pública de Colón en donde se nos manifestó que el detenido se encuentra a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón por este mismo hecho delictivo.

De los Honorables Magistrados,

(Fdo.)
LIC. JUAN ANTONIO TEJADA
Fiscal Primero Superior
del Primer Distrito Judicial".

En vista de que el detenido se encuentra a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón, como se expresa en el informe transcrito, se procede a enviar este negocio al Tribunal competente.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial, la acción de Habeas Corpus propuesta a favor del señor RICAUTER EURÍPIDES SINCLAIR.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Enrique Domínguez Hurtado ha presentado acción de habeas corpus a favor de la señora **ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA**, quien se encuentra detenida

por la supuesta comisión de delito contra la salud pública, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

El apoderado judicial de la beneficiaria del presente recurso de habeas corpus alega, entre otras cosas, que la detención de su representada "se efectuó sin que mediara orden previa y por escrito de autoridad competente, sin que existiera flagrancia, persecución o un motivo preestablecido en la ley y también sin cumplir con las formalidades legales correspondientes."

Cumplidos los trámites correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada. Mediante Oficio N° 1321 de 6 de febrero de 1996, el Fiscal Especial detalla los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ordenar la detención preventiva de la señora ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA, de la siguiente forma:

> "A. Sí es cierto que se ordenó la detención preventiva de la señora ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA, la misma fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, calendada 22 de enero de 1996. ...
>
> El señor GERARDO RODRÍGUEZ STERLING (A) TITO STERLING, según el informe de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, acepta haber tirado la droga por el sanitario y manifiesta estar anuente a cooperar con las autoridades y dispuesto a entregarnos a su proveedor, por lo que se procede, con la anuencia del Despacho, a efectuar una llamada al teléfono 221-6727, en donde se contacta a un sujeto conocido como TONY, y se logra concertar la compra y entrega de cierta cantidad de sustancia ilícita (droga), a la altura de la Clínica 24 Horas San Luis de Río Abajo. Una vez en el lugar antes señalado se visualizan a dos jóvenes que se dirigían hacia el lugar concertado, por lo que se procede a retenerlas y a efectuarles un registro, encontrando en poder de la joven BELKIS QUINTERO QUINTERO, menor de edad, ocho (8) bolsitas plásticas transparentes con cierta cantidad de una sustancia en forma de polvo blanco que se presume sea Cocaína, quien estaba acompañada de la joven ILMA GRACIELA HERNÁNDEZ CÓRDOBA, con cédula de identidad personal N° 8-452-477, por lo que se procede a efectuar el allanamiento en la casa N° 3019, cuarto N° 6 de calle 15 Río Abajo, propiedad de la prenombrada Hernández Córdoba, en donde también reside el sujeto MIGUEL ANTONIO DEAN JEROME (A) TONY. El señor DEAN niega que en su residencia hayan armas, dineros o sustancias ilícitas, pero al ser registrado el lugar se logra detectar debajo de la refrigeradora, un revólver marca ROSSI, calibre 38, una pesa calibrada en gramos, gran cantidad de bolsitas plásticas transparentes y en una cajeta debajo de la cama, la cantidad de trescientos veintisiete dólares (B/.327.00) en diferentes denominaciones, una bolsita o carterita de paja conteniendo cien dólares con sesenta y cinco centavos ($100.65), artículos y dineros que el señor DEAN no pudo justificar. De igual forma se le cuestionó sobre su número telefónico, a lo que contestó que era el 221-6727, corroborando de esta manera el número que había marcado TITO STERLING para concertar la compra de la droga minutos antes.
>
> A la sustancia incautada se le practicó la prueba de campo, arrojando resultados positivos para la determinación de la droga conocida como Cocaína.
>
> Al momento de ser indagado GERARDO RODRÍGUEZ STERLING (A) TITO, aceptó ser consumidor y haber cooperado para lograr la captura de su abastecedor, a través de la llamada telefónica.
>
> Al ser sometida a los rigores de la indagatoria ILMA GRACIELA HERNÁNDEZ CÓRDOBA negó conocer a GERARDO RODRIGUE STERLING (A) TITO, excepcionando a su favor que el día de los hechos estaba acompañando a la menor para que no se la llevara la batida. Además, negó tener

conocimiento respecto a los objetos encontrados dentro de su residencia, que resultan ser presuntas evidencias del hecho ilícito investigado, pero sí aceptó ser consumidora de sustancias ilícitas y haber sido investigada por este tipo de delitos." (Fojas 12 y 13).

El informe transcrito y las constancias procesales remitidas junto con el mismo, ponen de manifiesto que la detención preventiva que sufre la señora ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA, no tiene vicios de ilegalidad.

En primer lugar, de foja 60 a 66 del cuaderno principal se encuentra providencia proferida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el 22 de enero de 1996, por medio de la cual se ordenó la detención preventiva de la recurrente.

En segundo lugar, la señora ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA fue detenida en compañía de la menor BELKIS QUINTERO QUINTERO, quien tenía en su poder ocho bolsitas con un polvo blanco que al practicársele la prueba de campo, dio resultados positivos para la determinación de cocaína.

En tercer lugar, según se desprende del acta levantada en la diligencia de allanamiento practicada en la residencia de la recurrente, consultable de foja 14 a 16 del cuaderno principal, se encontró un arma calibre 38, marca Rossi, serie AA-112504, una pesa calibrada en gramos, bolsitas plásticas transparentes y harina, además de la suma de cuatrocientos veintisiete balboas con sesenta y cinco centavos (B/.427.65); artículos que no pudieron ser justificados.

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que existen suficientes elementos que vinculan a la señora ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA con el delito que se le imputa y, consecuentemente, la detención preventiva que sufre es legal, en vista de que fue ordenada por autoridad competente y en concordancia con los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de la señora ILMA HERNÁNDEZ CÓRDOBA y ORDENA que sea puesta, nuevamente, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CONTRERAS MURCIA CONTRA EL SUBCOMISIONADO DEL DIIP, DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Luis Quintero Poveda presentó acción de habeas corpus a favor del señor **LUIS ENRIQUE CONTRERAS MURCIA**, contra el Sub-Comisionado de la Dirección de Información e Investigación Policial de la Policía Nacional (D. I. I. P.).

Cumplidos los trámites correspondientes, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio DAL-0178 de

22 de febrero de 1996, en el que informa lo siguiente:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente, ni en forma verbal ni por escrito.
>
> B. Queda explicado en el literal anterior.
>
> C. No tengo bajo mi custodia al Señor **LUIS ENRIQUE CONTRERAS MURCIA**. El mismo no se encuentra detenido en ninguna de las instalaciones de la Policía Nacional." (Foja 5).

Del informe transcrito se concluye que el señor LUIS ENRIQUE CONTRERAS MURCIA no se encuentra detenido ni existe orden de detención en su contra, por lo cual debe ordenarse el cese del procedimiento de la presente acción de habeas corpus, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento de la presente acción de habeas corpus.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA EL ARTÍCULO 762 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN QUE INTERPUSIERA CONTRA EL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Darío Eugenio Carrillo Gomila** ha presentado Advertencia de Inconstitucionalidad contra el Artículo 762 del Código Judicial, dentro del Incidente de Recusación que interpusiera contra el Juez Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

Se procede, entonces, a examinar la presente advertencia a fin de verificar su viabilidad y el cumplimiento de las formalidades que establece el artículo 2551 del Código Judicial, en concordancia con el 654 y 102 del citado texto.

Al confrontar estos requisitos con el libelo de la advertencia en examen, se aprecia que fueron omitidas dos exigencias legales previstas por la jurisprudencia en esta materia, que son:

1. La identificación del proceso y de las partes;

2. La exposición de los hechos, que sería un resumen del proceso.

Al no cumplirse en el escrito de advertencia con las formalidades anotadas, resulta imposible constatar algunos de los presupuestos fundamentales exigidos para la utilización y procedencia de este mecanismo cuya finalidad es activar el control constitucional, de manera que se pueda determinar que se haya formulado

dentro de un **proceso** en que un funcionario administre justicia y que sea una de las **partes** litigantes la que advierta la posible inconstitucionalidad de una norma aplicable al caso.

En los negocios constitucionales como el sometido a consideración, a la Corte no le es permisible suplir las omisiones del advertidor, quien debe determinar con claridad y precisión las formalidades establecidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Como en la presente demanda no se cumple con los requisitos exigidos para tal acción, ésta no debe admitirse.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, contra el artículo 762 del Código Judicial, dentro del incidente de recusación que interpusiera contra el Juez Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FISCAL SÉPTIMA DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO 469 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994, CORREGIDO POR EL DECRETO EJECUTIVO N° 310 DE 3 DE JULIO DE 1995, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ÁNGEL SANTOS BUITRAGO POR LOS DELITOS DE CONCUSIÓN Y EXACCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Fiscal Séptima del Circuito del Primer Circuito Judicial ha formulado advertencia de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N° 469, de 23 de septiembre de 1994, en un proceso penal contra ÁNGEL SANTOS BUITRAGO.

El Pleno de la Corte debe decidir, en primera instancia, si admite o no la consulta elevada por la expresada funcionaria, de conformidad con el ordenamiento jurídico que gobierna este proceso constitucional.

Observa el Pleno de esta Corporación de Justicia, que el advirtiente no cumplió con lo señalado en el artículo 2551, puesto que no transcribe literalmente en su totalidad la norma acusada de inconstitucional, sino una frase de ella, así como tampoco reúne los requisitos previstos en el artículo 654 del Código Judicial referentes al contenido que debe tener toda demanda. Dicho requerimiento es extensivo no solamente a las demandas de inconstitucionalidad, sino a las consultas de inconstitucionalidad, como ha destacado en reiteradas ocasiones el Pleno de esta Corporación. Sobre el particular, puede consultarse el fallo de 3 de mayo de 1994, bajo la ponencia del Magistrado RODRIGO MOLINA A. (Q. E. P. D.).

Que acuerdo con lo preceptuado en el artículo 203, numeral 1 de la Constitución Política de la República, la advertencia de inconstitucionalidad procede:

"ARTÍCULO 203: La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientess:

1. La guarda de la integridad de la Constitución para la cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador General de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.

Cuando en un proceso el funcionario público advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto den pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

Las partes podrán formular tales advertencias una vez por instancia.

2. ..."

La consulta se refiere a aspectos del Decreto 469, de 23 de septiembre de 1994, que constituye un acto concreto en ejecución de una atribución que la Constitución Política, en su artículo 179, numeral 12, le atribuye al Órgano Ejecutivo. No se trata, por lo tanto, de una norma, ni legal, ni reglamentaria, la que deba aplicarse en la presente encuesta.

Los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y RAMÓN FERNÁNDEZ, refiriéndose a la distinción entre actos y reglamentos, manifiestan:

"La distinción más obvia entre el Reglamento y el acto es que aquél forma parte del ordenamiento jurídico, en tanto que el acto es algo "ordenado", producido en el seno del ordenamiento y por éste previsto como simple aplicación del mismo".

Mas adelante, los citados autores señalan sobre el mismo aspecto:

"El acto administrativo, sea singular o general su círculo de destinatarios, se agota en su simple cumplimiento; para un nuevo cumplimiento habrá que dictar eventualmente un nuevo acto ... En cambio, la norma ordinamental no se consume con su cumplimiento singular, antes bien se afirma, se consolida, se mantiene y es susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos; sigue "ordenando" la vida social desde su superioridad."

(GARCÍA DE ENTERRÍA/RAMÓN FERNÁNDEZ, "CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO", TOMO II, págs. 201 y 203, Tomo II, 1992).

Resulta evidente, que al no ser el indulto una norma o disposición de rango legal o reglamentaria, no es susceptible de ser advertida su posible inconstitucionalidad. La norma a ser aplicada, que toma como presupuesto el acto singular de indulto por parte del Órgano Ejecutivo, lo constituye el artículo 91 del Código Penal, pero éste no ha sido objeto de consulta de constitucionalidad.

Desde otra perspectiva, lo expresado en párrafos antecedentes no obsta para que las personas interesadas promuevan la acción autónoma de inconstitucionalidad. En el presente caso, el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, se limitó a declarar extinguida la acción penal con base a un indulto decretado a favor de ÁNGEL SANTOS BUITRAGO, por los delitos de concusión y exacción, lo que ubica su actividad jurisdiccional en la etapa procesal de ejecución de la medida; decisión ésta que era susceptible de un recurso de apelación para su revisión por un tribunal colegiado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad formulada por la Fiscal Séptima del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá contra el Decreto Ejecutivo N° 310 de 3 de julio de 1995, dentro del proceso penal seguido a ÁNGEL SANTOS BUITRAGO por los delitos de concusión y exacción.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON PARA QUE SE DECLARE INCONSTITUCIONAL LAS FRASES "O CON MUJERES", "LAS MUJERES" Y "Y LOS SIRVIENTES DOMÉSTICOS", CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1246, 1552 Y 1557, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra las frases **"o con mujeres"**, **"las mujeres"** y **"y los sirvientes domésticos"**, contenidas en los artículos 1246, 1252 y 1257 del Código Administrativo.

Cumplidos los trámites a que se refieren los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial, la demanda se encuentra en estado de resolver y a ello se procede de conformidad con las consideraciones siguientes.

I. LAS FRASES ACUSADAS

Las frases acusadas están contenidas en los artículos 1246, 1252 y 1257 del Código Administrativo. Veamos a continuación, en el mismo orden, el contenido de estas normas:

> **"Artículo 1246.** El individuo o individuos que jugaren con personas en estado de embriaguez, de locura o demencia, **o con mujeres**, o individuos del Cuerpo de Policía o con menores de edad y les ganaren alguna cosa, sin embargo de saber el estado o edad de dichas personas, sufrirá la pena de trabajo en obras públicas por dos a seis meses y devolverán lo que hubieren ganado, sin perjuicio de las demás penas en que puedan haber incurrido, según el caso."

> **"Artículo 1252.** No pueden ser admitidos en establecimientos de juegos: los menores de edad, **las mujeres**, los individuos de tropa, los miembros del Cuerpo de Policía no encargados de la vigilancia del establecimiento **y los sirvientes domésticos**."

> **"Artículo 1257.** Cuando la Policía encuentre en un establecimiento de juegos permitidos a personas que no deban ser admitidos en él, como los menores, locos o dementes, **domésticos y mujeres**, las conducirá a sus respectivos domicilios, y advertirá a aquellos de quienes dependan que vigilen mejor su conducta. Si fueren militares o individuos de Policía dará parte al respectivos Jefe.

> En caso de primera reincidencia de **las mujeres**, dementes o menores **y domésticos**, se aplicará la pena de apercibimiento. Si los menores **domésticos y mujeres** y dementes no dependieran de otra persona, la advertencia, el apercibimiento y la multa se entenderán con ellos directamente." (Los subrayados son del Pleno).

II. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS
Y EL CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO

La licenciada STAFF WILSON estima que las disposiciones citadas violan los artículo 19 y 20 de la Constitución Política. El artículo 19 tiene el contenido siguiente:

> "**Artículo 19.** No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

A juicio del demandante, la violación de la norma transcrita consiste en que las frases acusadas prohíben el juego legal con las mujeres y su entrada a los establecimientos de juego, sin una fundamentación válida, situación que constituye una distinción injusta e injuriosa que atenta contra el principio de la no discriminación por razón del sexo. Agrega la licenciada STAFF WILSON, que las mujeres mayores de edad tienen plena capacidad y goce de derechos y, por tanto, pueden participar en cualquier juego permitido por ley a los hombres en iguales circunstancias.

Asimismo, las frases acusadas prohíben el juego legal de los domésticos y su entrada a establecimientos de juego, con fundamento en su condición de sirvientes, lo que a todas luces constituye una discriminación injusta que infringe el aludido artículo 19 de la Constitución Política.

En la demanda también se cita como infringido el artículo 20 de la Constitución Política, disposición que tiene le contenido siguiente:

> "**Artículo 20.** Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales".

En el concepto de la infracción la licenciada STAFF WILSON manifiesta que las frases acusadas establecen una desigualdad jurídica en perjuicio de las mujeres y de los sirvientes domésticos que se encuentran en igualdad de condiciones con los hombres respectos de los juegos permitidos por la ley, con lo cual se infringe el principio constitucional de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley (fs. 1-3).

III. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N° 58 del 20 de diciembre de 1994, el Procurador General de la Nación emitió concepto y solicitó al Pleno de la Corte que accediera a la pretensión de la demandante, en virtud de que las frases acusadas son violatorias de los artículos 19 y 20 de nuestra Carta Fundamental, porque infringen el principio de igualdad de los seres humanos que consagran ambos artículos, ya que dan un trato de inferioridad a las mujeres y a los sirvientes domésticos por razón de su sexo y de la clase social a que pertenecen (fs. 7-16).

IV. DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

El artículo 19 de la Constitución Política prohíbe todo fuero o privilegio personal, al igual que toda discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Asimismo, el artículo 20 de ese

Estatuto Fundamental, consagra el principio de igualdad de los panameños y extranjeros ante la Ley. Tal como se observa, estas normas están íntimamente relacionadas, en la medida que obligan a las autoridades nacionales a brindar un tratamiento igualitario a todas las personas.

Sin embargo, las frases acusadas se alejan del contenido de aquellos preceptos constitucionales, en la medida en que consagran prohibiciones que suponen un trato discriminatorio y desigual tanto para las mujeres como para los sirvientes domésticos frente al resto de los hombres e individuos que componen la sociedad. En el caso del artículo 1246 del Código Administrativo, el legislador prohíbe a los individuos el juego con las mujeres, mientras que en el 1252 les prohíbe, al igual que a los sirvientes domésticos, la entrada a los establecimientos que se dediquen a actividades de suerte y azar. Como afirma la demandante, esta distinción que se hace en las aludidas normas resulta injuriosa e injusta, pues, en el caso de las mujeres, se desconoce la plena capacidad y el goce de derechos de aquellas que han alcanzado la mayoría de edad, con lo cual se atenta contra el principio de no discriminación por razón de sexo. En el caso de los sirvientes domésticos, dicha distinción supone una discriminación derivada de la clase social a que pertenecen y del oficio que éstos ejercen. Igual razonamiento se aplica al artículo 1257 del Código Administrativo, en el que se establecen las medidas que debe adoptar la policía cuando encuentre a las mujeres o a los sirvientes domésticos en los establecimientos de juego.

El Pleno de la Corte coincide así con lo expresado por la demandante en el sentido de que las frases acusadas autorizan un trato discriminatorio y, por tanto, desigual contra las mujeres y los sirvientes domésticos respecto de quienes no gozan de estas cualidades y, por estas razones, violan los artículos 19 y 20 de la Constitución Política.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que las frases "o con mujeres", "las mujeres" y "los sirvientes domésticos", consagradas en los artículos 1246, 1252 y 1257 del Código Administrativo, SON INCONSTITUCIONALES, y que el contenido de estas normas será el siguiente:

> "artículo 1246. El individuo o individuos que jugaren con personas en estado de embriaguez, de locura o demencia, o individuos del Cuerpo de Policía o con menores de edad y les ganaren alguna cosa, sin embargo de saber el estado o edad de dichas personas, sufrirá la pena de trabajo en obras públicas por dos a seis meses y devolverán lo que hubieren ganado, sin perjuicio de las demás penas en que puedan haber incurrido, según el caso.
>
> La misma pena de trabajo en obras públicas, por dos a seis meses, sufrirá el dueño o encargado de la casa, si permitiere el juego a sabiendas."
>
> "Artículo 1252. No pueden ser admitidos en establecimientos de juegos: los menores de edad, los individuos de tropa y los Miembros del Cuerpo de Policía no encargados de la vigilancia del establecimiento.
>
> El dueño o encargado de un establecimiento en donde se viole esta disposición, incurrirá en una multa de uno a diez balboas por cada vez que admita una persona de las indicadas."
>
> "Artículo 1257. Cuando la policía encuentre en un establecimiento de juegos permitidos a personas que no deban ser admitidos en él, como los menores, locos o dementes, las conducirá a sus respectivos domicilios, y advertirá a aquellos de quienes dependan que vigilen mejor su conducta. Si fueren militares o individuos de Policía dará parte al respectivo Jefe.
>
> En caso de primera reincidencia de los dementes o menores, se aplicará la pena de apercibimiento. Si los menores y dementes no

dependieren de otra persona, la advertencia, el apercibimiento y la multa se entenderán con ellos directamente."

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Discrepo de la mayoría del Pleno, que declara inconstitucionales algunas frases contenidas en los artículos 1246, 1252 y 1257 del Código Administrativo.

Creo que se debe declarar sustracción de materia, porque las disposiciones han caído en desuso y carecen de relación alguna con la sociedad panameña actual.

La declaración de inconstitucionalidad parcial las resucita.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PRESENTADA POR EL LCDO. JORGE COSTARANGOS EN REPRESENTACIÓN DE H. TZANETATOS INC., DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 7 DE 30 DE MARZO DE 1993 DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOUSA, DE SOUSA Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Costarango presentó advertencia de inconstitucionalidad contra la parte final del artículo 5 de la Ley 7 de 30 de marzo de 1993, dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Asociación Nacional de Avicultores contra H. Tzanetatos Inc.

Acogida la advertencia y surtido todos los trámites procesales contemplados por el libro IV del Código Judicial, pasa la Corte a decidir, previa las siguientes consideraciones.

El artículo 5 de la Ley 7 de 30 de marzo de 1979 dispone que "el ministerio de desarrollo Agropecuario (MIDA) solicitará a las asociaciones de productores avícolas legalmente constituidas en la República de Panamá, constancia de que a los productores nacionales se les permite real y efectivamente, exportar productos avícolas al país solicitante".

El Procurador de la Administración estima, como asunto previo a la decisión de fondo, que debe considerarse la viabilidad de esta advertencia y en ese sentido expresa lo siguiente:

"1. En primer lugar, en materia de consulta de inconstitucionalidad

> se requiere, por mandato de la propia Constitución y por doctrina de la Corte Suprema de justicia así sostenida, que la disposición legal o reglamentaria sobre la cual recae la advertencia, ha de ser aplicable al caso, sin que haya, en ese sentido, duda alguna.
>
> 2. Por otra parte y, como derivación de la aplicabilidad al caso del precepto legal o reglamentario advertido como infractor de la Constitución, éste aún no ha debido ser aplicado.
>
> Por tanto, en un caso como en otro -la no aplicabilidad de la disposición al caso o, siendo ésta aplicable y ya se haya aplicado-, trae como resultado que la consulta elevada ante la Corte Suprema de Justicia, devenga en no viable."

El Pleno de la Corte considera que le asiste razón al señor Procurador de la Administración, ya que es indudable que la norma advertida no es aplicable en este caso.

Esta no aplicabilidad de la norma se debe a que se excluye del ámbito de aplicación de la ley citada a los productos avícolas precocidos, lo cual es el presente caso. Así lo vemos cuando la frase que se tilda de inconstitucional al señalar "... constancia de que a los productos nacionales se les permita real y efectivamente, exportar productos avícolas al país solicitante" y la ley define a los productos avícolas en el numeral tres (3) del artículo uno (1) como "los productos avícolas o alimentos preparados a base de estos, cocidos o precocidos que estén o no congelados o refrigerados, cuya importación seguirá regida por las normas legales vigentes", es claro que está excluyendo de la misma a los productos avícolas precocidos. y por lo tanto, éstos se regirán por las normas regulares.

Al no ser aplicada la norma al presente caso, no queda más que declarar no viable la presente advertencia de inconstitucionalidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Jorge Costarango en representación de H. Tzanetatos Inc. dentro de la demanda ceso contencioso administrativo de nulidad promovido por la Asociación Nacional de Avicultores contra H. Tzanetatos In.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR DIÓGENES SAGEL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 35 DE 16 DE FEBRERO DE 1989 DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA LA POSTULACIÓN DE GUILLERMO ENDARA GALIMANIY (SIC) PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR LA ALIANZA LLAMADO (SIC) ADO-CIVILISTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por **Roberto García Flores** en representación de

DIÓGENES SAGEL, contra la Resolución N° 35 de 16 de febrero de 1989 del Tribunal Electoral por medio de la cual se acepta la postulación de GUILLERMO DAVID "CUCHUNGO" ENDARA GALIMANY para el cargo de Presidente de la República por la Alianza Democrática de Oposición Civilista ADO -CIVILISTA, constituida por los partidos políticos Liberal Auténtico, Demócrata Cristiano y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA).

El actor fundamenta su demanda en el hecho de que el señor GUILLERMO "CUCHUNGO" ENDARA GALIMANY fue postulado como candidato al cargo de Presidente de la República en las elecciones de 7 de mayo de 1989, sin estar inscrito en ninguno de los partidos políticos que conformaban la alianza política ADO-CIVILISTA, toda vez que siempre estuvo inscrito en el Partido Panameñista Auténtico, según consta en certificación expedida por el Tribunal Electoral que señala la inscripción de GUILLERMO ENDARA GALIMANY como miembro del Partido Panameñista Auténtico Arnulfista, en el libro 8-7-46, página 5, asiento 5 de la Provincia de Panamá (f. 20).

Otro argumento en que se fundamenta el demandante lo constituye el hecho de que el licenciado HILDEBRANDO ANTONIO NICOSIA PÉREZ fue postulado por el Partido Panameñista Auténtico Arnulfista (PPAA), del cual era el Presidente, por lo que resulta ilegal la postulación de otro candidato para el mismo cargo de elección popular.

Siendo inconstitucional la Resolución N° 35 de 16 de febrero de 1989 del Tribunal Electoral, esto habría acarreado la pérdida del carácter de postulado de GUILLERMO ENDARA GALIMANY, y la consecuente asumición de la candidatura al cargo de Presidente, por parte del candidato a la Primera Vicepresidencia de la República, RICARDO ARIAS CALDERÓN, según lo establecido en el artículo 188 del Código Electoral.

Entre las disposiciones supuestamente infringidas, está la contenida en el artículo 132, párrafo primero, de la Constitución Nacional, según la cual los partidos políticos "son instrumentos fundamentales para la participación política", de donde se entiende que toda participación política como candidato a puesto de elección popular tiene que hacerse entre los miembros de los partidos, según el criterio de la Democracia Política de Partidos, por lo que quien aspire como candidato a Presidente de la República, debe estar comprometido con el programa de gobierno de su partido.

De lo dicho anteriormente se desprende que solamente podrá ser postulado el que está inscrito y, en este sentido, el artículo 145 de la Constitución Nacional, establece que solamente podrá renunciar el que está inscrito.

Mediante la Vista N° 36 de 12 de diciembre de 1990 (fs. 23 a 29), el Procurador General de la Nación, Rogelio Cruz Ríos, solicita la declaratoria de sustracción de materia en la presente demanda de inconstitucionalidad, fundamentándolo en la emisión por parte del Tribunal Electoral de la Resolución N° 502 de 27 de diciembre de 1989, "Por la cual se convalida acto de juramentación y se proclaman candidatos los electos en las elecciones populares de 7 de mayo de 1989 para las posiciones de Presidente y Vicepresidente de la República" (f. 25-26).

El Procurador General sostiene que el acto atacado de inconstitucionalidad en el presente negocio, se encuadra dentro del concepto de sustracción de materia; en virtud de que dicho concepto abarca:

> "... situaciones que están reguladas por una ley y que antes de ser resueltas son objeto de modificación o derogación. También se aplica a los asuntos que ya han sido resueltos previamente por el mismo Tribunal y a los que con el tiempo cambian de tal manera que su decisión o solución carece de relevancia" (Boletín de Informaciones Jurídicas, Órgano de Información del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Panamá, julio-diciembre, 1983, año IX, Segunda Época, N° 19, Pág. 1). (Lo subrayado es de la Corte).

Y, finalmente se refiere a la improcedencia del presente recurso, toda vez que el artículo 219 del Código Electoral, establece los parámetros para impugnar postulaciones de candidaturas para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, entre otros, las cuales deben surtirse ante el Tribunal Electoral acompañadas de la prueba sumaria respectiva.

La Corte comparte el criterio emitido por el Procurador General de la Nación, sobre la declaratoria de sustracción de materia en el caso sub judice, lo cual se desprende de la Resolución N° 35 de 16 de febrero de 1989, emitida por el Tribunal Electoral; aunado a lo anterior, el hecho notorio de que el Presidente GUILLERMO ENDARA GALIMANY dejó de ocupar el cargo de Presidente de la República el día primero (1°) de septiembre de 1994, luego de haber completado su respectivo período de cinco años (1989-1994), y que en la actualidad dicho cargo es ocupado por el señor Presidente de la República ERNESTO PÉREZ BALLADARES. Por tal razón resultaría improcedente declarar como inconstitucional la Resolución N° 35 de 16 de febrero de 1989, y emitir un fallo al respecto carecería de relevancia jurídica alguna.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la presente demanda de inconstitucionalidad y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON CONTRA LOS ARTÍCULOS 1007 Y 1008 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1007 y 1008 del Código Administrativo.

Cumplidos los trámites a que se refieren los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de resolver, a lo cual procedemos de conformidad con las consideraciones siguientes.

Al momento de resolver la pretensión de la licenciada STAFF WILSON el Pleno de la Corte estima que no es procedente un pronunciamiento de fondo, pues, tal como afirma el señor Procurador General de la Nación, las normas que se citan como violadas en la demanda ya no tienen vigencia.

En efecto, mediante la Ley N° 3 del 17 de mayo de 1994, la Asamblea Legislativa adoptó el Código de la Familia y del Menor. El artículo 838 de ese cuerpo normativo dispuso claramente que a partir su vigencia, "quedan derogadas todas las disposiciones legales referentes a la familia y a los menores, así como las demás leyes especiales que en esta materia sean contrarias o incompatibles con el presente Código". En el presente caso, no cabe duda alguna de que las dos normas impugnadas consagran materias relativas al derecho de familia, en la

medida en que regulan relaciones entre marido y mujer y entre éstos y sus hijos. Dichas materias guardan relación con la separación de hecho de la mujer del lado del marido; con las medidas que podrían adoptarse, a petición del marido, en caso de que exista tendencia de su mujer a pervertirse; con la guarda y crianza de los hijos menores de tres años y con el suministro de una pensión alimenticia a favor de la mujer e hijos, en caso de abandono del hogar por parte del marido.

El artículo 1008, por su parte, alude al procedimiento que debe seguirse cuando se trate de abandono de hogar o negativa de trasladarse a otro punto escogido para residencia por parte de las personas de quien se dependa.

Cabe señalar, que en el Código de la Familia existen disposiciones específicas que regulan los aspectos de que tratan las normas acusadas, entre ellas, los artículos 326 al 331, que se refieren al régimen de guarda y crianza, de comunicación y de visita; los artículos 377 al 388 que consagran reglas especiales sobre alimentos; los artículos 198 al 206 que regulan la separación de cuerpos; el numeral 1° del artículo 152 que le otorga a los Jueces Seccionales de Familia el conocimiento de los procesos de separación de cuerpos; y el numeral 3° del artículo 751, que establece la competencia en los procesos originados en razón de la fijación y traslado del domicilio conyugal. Inclusive, los artículos 364 al 376 del aludido Código regulan lo relativo a la colocación familiar u hogar sustituto, señalando los casos y las personas con respecto a las cuales la adopción de esta medida procede.

Siendo lo anterior así, es evidente que en el presente caso ha desaparecido el objeto procesal y, por tanto, se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en la demanda de inconstitucionalidad promovida por la Licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON contra los artículos 1007 y 1008 del Código Administrativo se ha producido el fenómeno conocido como SUSTRACCIÓN DE MATERIA.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD,INTERPUESTA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE 27 DE AGOSTO DE 1992, DICTADO POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Lcda. Mabel Del C. Atencio V. ha presentado demanda de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare inconstitucional el auto de 27 de agosto de 1992 proferido por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial De Panamá, Ramo Civil dentro del proceso de juicio ejecutivo hipotecario instaurado por Victorie Universel, S. A. contra Kreport Investment, Inc. y Corporación de Inversiones Navales, S. A. (CINSA). Dicha acción ha sido promovida por la Lcda. Atencio actuando en representación de las sociedades Kreport Investment, Inc. y Corporación de Inversiones Navales, S. A.

I. Las pretensiones del demandante y los artículos que considera violados.

La Lcda. Atencio considera que el auto de 27 de agosto viola lo artículos 32, 44 y 212 de la Constitución Nacional.

El texto del auto impugnado resolvió lo siguiente:

> "ADMITIR la presente demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por VICTOIRE UNIVERSEL, S. A. contra KREPORT INVESTMENT, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.
>
> LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de VICTOIRE UNIVERSEL, S. A. contra KREPORT INVESTMENT, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A., hasta la concurrencia de la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO BALBOAS CON TREINTA CENTÉSIMOS (B/.13,998.30) que desglosados representan; CAPITAL, B/.10,700,000.00; INTERESES, B/.2,020,202.00; COSTAS, B/.1,277,620.20; GASTOS, B/.296.10.
>
> DECRETAR EMBARGO a favor de VICTOIRE UNIVERSEL, S. A. y en contra de KREPORT INVESTMENTS, INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A., sobre las siguientes FINCAS: FINCA N° 26221, (FINCA MADRE de P. H.) y las que han sido segregadas constituyéndose en fincas independientes las cuales se identifican como las fincas N° 26222, 26223, 26224, 26225, 26226, 26227, 26228, 26229, 26230, 26231, 26232, 26233, 26234, 26235, 26236, 26237, 26238, 26239, 226240, 26241, 26242, y 26243, todas inscritas al rollo 2823 complementario, documento 1, sección de la Propiedad Horizontal de la provincia de Panamá, y la FINCA N° 9513 INSCRITA AL tomo 297, folio 410, de la sección de la Propiedad de la provincia de panamá, la primera de ellas, FINCA N°26221 y las 22 fincas segregadas de la finca madre de P. H., son de propiedad de KREPORT INVESTMENT, INC, y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.; las dos últimas, distinguidas con el N° 10356 y 9513 son de propiedad de KREPORT INVESTMENT, INC., hasta la concurrencia de B/.13,998,118.30, que desglosados representan; CAPITAL, B/.10,700,000.00; INTERESES B/.2,020,202.00; COSTAS B/.1,277,620.20; GASTOS, B/.296.10.
>
> ORDENA LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA de las fincas embargadas y descritas anteriormente, a fin, que con el producto de la misma se le pague a el ejecutante su crédito.
>
> OFICIAR al Registro Público, a fin que ordenen la inscripción correspondiente para los fines legales consiguientes.
>
> EMITIR el expediente a la Dirección general de Ingresos fin, que mediante certificación de que trata el artículo 1803 del Código Judicial haga valer sus derechos por medio de la tercería que a bien tenga."

El accionista formula, pues, pretensión consistente en una petición dirigida a la Corte Suprema de Justicia para que declare que es inconstitucional el auto de veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), arriba transcrito.

El fundamento de derecho de la pretensión formulada por la Lcda. Atencio son los artículos 32, 44 y 212 de la Constitución Política, los cuales son del tenor siguiente:

> Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria"
>
> "Artículo 44: Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales."

"Artículo 212: Las leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios:

1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos.

2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial."

Según el accionista, se infringe en forma directa los artículos 32 y 212 de la Constitución Política puesto que no se ha seguido el debido proceso, e igualmente el artículo 44 que consagra el derecho a la propiedad privada.

II. La opinión de la Procuradora de la Nación.

La suplente Procuradora de la Nación, Lcda. Mercedes Araúz de Grimaldo, emitió concepto en relación con la acción de inconstitucionalidad formulada por la Lcda. Atencio, mediante la Vista N° 29 de 13 de junio de 1995.

Considera la Procuradora de la Nación que el artículo impugnado no es inconstitucional, y se expresa en los siguientes términos:

"Después del examen de las constancias de autos y el estudio de las actuaciones y eventualidades procesales por las que atravesó el presente proceso ejecutivo hipotecario, colige este despacho que el mismo se substanció conforme a las ritualidades del procedimiento aplicable, sobre la base del contexto dialéctico que implica el contradictorio, sin menoscabo del derecho de defensa de las partes que en el contienden.

Si realmente -como anota MARÍN PAGEO- el justo, **el debido proceso** es el que se obtiene cuando el proceso responde a los principios, y garantías jurisdiccionales ínsitos en la Constitución (LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PROCESO CIVIL, Edit. Civitas, Madrid, 1990, pág. 156), es fácil concluir que el proceso como instrumento de la jurisdicción ya no implica -como admite el profesor JUAN MONTERO AROCA- el reducirlo a medio técnico neutro. Antes al contrario, asistimos en los tiempos que corren a la constitucionalización de sus principios básicos. (INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL, Madrid, Tecnos, 1976, pág. 210).

Pero la lógica y la prudencia indican que esta noción no puede llevarse a extremos como ocurre cuando se le inserta en demanda de inconstitucionalidad contra un acto emanado del órgano jurisdiccional, pretendiendo que el tribunal constitucional, indague el sentido y alcance de factores de prueba, puesto que "La Corte en estos procesos constitucionales debe prescindir de la evaluación de los elementos de fondo del proceso que originó la resolución impugnada, es decir, que no se puede detener a determinar si hubo y no una correcta valoración probatoria"; La Corte sólo debe circunscribirse -como ella misma lo ha afirmado- "a determinar si el acto infringe o no la Constitución Política y debe declarar lo que haya lugar". (Sentencia de 14 de junio de 1994, Registro Judicial de junio de 1994, pág. 56).

En la misma tesitura, la Corte estableció en sentencia de 17 de junio de 1981 (Registro Judicial de junio de 1981, pág. 63) que cita en la recién mencionada sentencia de junio de 1994, lo siguiente:

"La sentencia no se torna inconstitucional por el sólo hecho de haberse dejado de apreciar una prueba o por error en la interpretación de la Ley. Tampoco deviene deviene en inconstitucional, si la actividad valorativa del Tribunal, mostrada en la motivación, conduce a un trato incorrecto de los hechos desde el punto de vista de la Ley sustancial. Tales errores jurídicos

conducen o pueden conducir a una sentencia injusta e ilegal; pero no la tornan, por ello inconstitucional."

Ahora bien, tales pronunciamientos no deben entenderse como cortapisas a la garantía constitucional del debido proceso que el Dr. Arturo Hoyos define como "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso ... oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independientemente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a Derecho, de tal manera que las personas, puedan defender efectivamente sus derechos". (EL DEBIDO PROCESO EN EL NUEVO CONTEXTO DEMOCRÁTICO DE LATINOAMÉRICA, Revista Lex del Colegio de Abogados, septiembre/enero 1995, págs. 28-29).

Fundamentados en el precedente análisis arribamos a la conclusión que la resolución proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 27 de agosto de 1992 en el proceso ejecutivo hipotecario propuesto por **Victoire Universel, S. A.** contra **Kreport Investment, Inc., y Corporación de Inversiones Navales, S. A., NO ES INCONSTITUCIONAL.**"

III. La garantía constitucional de la propiedad privada.

Nuestra Constitución garantiza la propiedad privada "adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales", según se dispone en el artículo 44.

Es conveniente entonces delimitar el contenido de esta garantía constitucional, de conformidad como ella se desarrolla en nuestro sistema jurídico.

El artículo 337 del Código Civil, en su párrafo 1°, dispone que "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley". Según esta norma, cuya fuente es el artículo 348 del Código Civil de España, la propiedad es un derecho en el que se contienen dos poderes fundamentales: el de gozar y el de disponer del bien.

Vemos dos elementos en la norma, el primero es en cuanto a la facultad de goce, la doctrina tradicional entiende que "el poder de goce se resuelve en la utilización directa del bien" por el propietario (Francesco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, Traducción de Santiago Sentis Meléndez, Tomo III, Editorial Jurídica Europa-América, Buenos Aires, 1979, pág. 257). Sin embargo, el goce comprende la utilización indirecta del bien a través de contratos que den una cierta medida de goce a otras personas, así como el arrendamiento, según lo enfatiza la doctrina moderna (Vicente L. Montés, La Propiedad Privada en el Sistema del Derecho Civil Contemporáneo, Editorial Civitas, Madrid, Primera edición, 1980, pág. 246).

El segundo elemento que integra el derecho de propiedad en nuestro ordenamiento es la facultad de disposición que tiene el titular, facultad que se entiende como la posibilidad de transferir o transmitir este derecho sobre las cosas. Es evidente que la facultad de goce comprende la recolección de frutos del bien y que la facultad de disposición entraña la posibilidad de enajenarlos, consideración que es importante en el presente caso ya que nuestro Código Civil prevé la regulación sobre la hipoteca, lo que incide en el presente caso.

La parte actora señala que se violó el artículo 44 de la Constitución Política puesto que "el bien inmueble de **KREPORT INVESTMENT, INC.** sufrió transformaciones en relación con su estructura por mejoras instauradas por **CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.** y ellas a su vez, se constituyeron en propiedad de ésta última, ya dichas mejoras adquirían un nuevo estatus jurídico ... que no era factible ejecutarla en la forma unitaria e indiscriminada, sino en forma específica" y añade que la propietaria del Condominio Vista Bahía no

celebró contrato de hipoteca con la sociedad demandante en el juicio ejecutivo.

Ese planteamiento no parece irrefragable pues el Código Civil en el artículo 1571 señala que "La hipoteca **se extiende** a las accesiones naturales, **a las mejoras**", lo que, añadido al artículo 1775 del mismo código que dispone lo siguiente:

> "Artículo 1775: La inscripción del título de hipoteca sobre un terreno comprende todas las construcciones, plantaciones y modificaciones que en él existan aun cuando no se hayan mencionado en dicho título, y comprende también sin necesidad de nueva inscripción, todas las construcciones, plantaciones y modificaciones que en él se hicieren después del registro de la hipoteca."

Ambos artículos señalan que la extensión de la hipoteca abarca las mejoras y una vez inscrito el título hipotecario sobre un terreno en el Registro Público, comprenderá la construcción que en el futuro allí se hagan, a pesar de que no se haya mencionado en dicho título o se hiciere después de la inscripción de la hipoteca.

Debemos añadir que el artículo 1576 del Código Civil, permite al tenedor de la primera hipoteca registrada dirigirse contra las demás, pues así dispone al señalar que "podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera, o contra todas a la vez". La presente demanda se ha dirigido contra la finca madre y contra las que se ha dividido y así fue confeccionado el auto impugnado de insconstitucional.

Por lo que, una vez el propietario ejerce la facultad constitucional de disponer del bien, en este caso de hipotecar el mismo, no queda más que seguir lo que disponen las leyes en nuestro ordenamiento jurídico sobre hipoteca, lo que ha ocurrido en este caso.

IV. Decisión de la Corte en cuanto a la infracción del debido proceso legal en este caso.

Una vez expuestos los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador de la Administración, entra el Pleno a estudiar el requerimiento que se formula.

En el caso subjúdice, la Corte (PLENO) entrará a constatar si el auto atacado viola directamente alguna de las normas constitucionales señaladas, o alguna otra norma imperativa de igual materia que imponga expresamente mandatos al juzgador.

La parte demandante alega que la resolución judicial por ella impugnada ha infringido los artículo 32, 44 y 212 de la Constitución Nacional. El artículo 32 consagra la garantía constitucional del debido proceso legal, el artículo 44 garantiza contiene la garantía de la propiedad privada y el artículo 212 contiene los principios en que se debe fundamentar nuestras leyes procesales y estos son, el de economía procesal y el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial.

Básicamente, los cargos alegados por el demandante el resultado de que el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el auto de 27 de agosto de 1992, "pasa inadvertido el contenido insuficiente de las certificaciones del Registro Público, aportadas a manera de recaudo ejecutivo en la demanda" y como consecuencia de esto, se violan las normas citadas. Se desprende entonces que el accionista pretende sea revisado el certificado en cuestión y por ende la Sala se pronuncie sobre la valoración que el juzgador le diera a esta prueba.

A este respecto cabe señalar que ha sido jurisprudencia constante de esta superioridad dejar claramente establecido que, dada la naturaleza propia del recurso de inconstitucionalidad, no es viable que a través del mismo se pretenda

convertir a la Corte Suprema en un tribunal de instancia superior, a fin de que revise las actuaciones de los tribunales de justicia y que determine si las mismas son justas o no, o si son contrarias al derecho común que regula tal actividad.

En diversas ocasiones ha señalado la Corte Suprema de Justicia que la garantía constitucional del debido proceso legal es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso-legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas-oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a Derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

En el presente caso, con respecto a los cargos endilgados al artículo 32 y al artículo 212 de la Constitución Política, no encontramos que exista indicación alguna de que se haya violado alguno de los elementos que integran la garantía constitucional del debido proceso ya que ambas partes comparecieron, adujeron pruebas, tuvieron la oportunidad de contradecir la pretensión de la contraparte e interpusieron los recursos previstos en la ley que fueron decididos conforme a derecho.

De todo lo anterior se desprende que el accionante pretende que el juzgador le dé al contenido del certificado del Registro Público un valor diferente, por lo que estaríamos entrando a juzgar el criterio del juzgador y lo que trata un proceso de constitucionalidad es acerca de la violación a normas constitucionales, lo que, como hemos señalado, no se da en el auto impugnado.

Podemos concluir entonces, que el juzgador actuó correctamente al incluir la finca nueva y todas las demás en que se había dividido y constituido la finca hipotecada original que consistía en un terreno, sin violar ningún principio de la propiedad privada u otra norma constitucional.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el auto de 27 de agosto de 1992 no viola los artículos 32, 44 y 212 ni ninguno otro de la Constitución Nacional.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO SUPLENTE CARLOS MUÑOZ POPE DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE E. MORA VALDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO DE BIASE ÁLVAREZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado CARLOS E. MUÑOZ POPE, ha presentado solicitud de impedimento, para que se le separe del conocimiento del recurso de reconsideración propuesto por la Licenciada IRENE ESTHER MORA VALDÉS, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovido por YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., contra la Orden de Hacer dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 13 de junio de 1995.

El Magistrado CARLOS E. MUÑOZ POPE, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

"MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO CARLOS E. MUÑOZ POPE.

Manifiesto mi impedimento para actuar en este proceso, toda vez que fui el primer apoderado de YAKIMA INTERNACIONAL, S. A. en la querella contra el BANCO ANVAL, S. A.

Fui, por tanto apoderado de la parte actora en la causa inicial y en todos los casos promovidos por la demandante me he daclarado impedido cuando he asumido el cargo en reemplazo de la titular del cargo.

Solicito, por tanto, se me separe del conocimiento de este caso.

Panamá, 24 de enero de 1996.

(fdo.)
MGDO. CARLOS E. MUÑOZ POPE"

La circunstancia invocada por el Honorable Magistrado, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 5° del artículo 749 del Código Judicial, por lo que corresponde designar a un Magistrado Suplente, mediante el sorteo respectivo, para que asuma el conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado CARLOS E. MUÑOZ POPE, para actuar en el recurso de reconsideración promovido por YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución de 13 de junio de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, lo separa del conocimiento del mismo y DESIGNA a un Magistrado Suplente que sea elegido mediante sorteo, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DENUNCIA CRIMINAL CONTRA OSWALDO FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y MARISELA OSORIO, DIRECTORA DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE LESIONES PERSONALES Y DE ENCUBRIMIENTO EN PERJUICIO DE JOSÉ LUIS ARANDA CABALLERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 0SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de 12 de enero de 1994 (fs. 42-44), declinó competencia de la denuncia contra el licenciado **OSWALDO FERNÁNDEZ**, Director de la Policía Nacional y la licenciada **MARISELA OSORIO**, Directora de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Con respecto al licenciado **OSWALDO M. FERNÁNDEZ** y a la licenciada **MARISELA OSORIO**, observamos primeramente, que por ser un hecho público y notorio que los mismos actualmente no se encuentran desempeñando los cargos de Director General de la Policía Nacional y Directora de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, respectivamente, es por lo que el Pleno de la Corte Suprema carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del presente asunto. Estas particularidades hacen que por razones de competencia, corresponda a los Jueces Municipales pronunciarse sobre los citados procesos seguidos al licenciado **OSWALDO M. FERNÁNDEZ** y a la licenciada **MARISELA OSORIO**, debido a que los delitos imputados tienen pena de prisión que no excede de dos años (Ver Art. 136 del Código Penal, y Art. 174, Acápite A, numeral 1 del C. J.).

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento de los procesos seguidos al licenciado OSWALDO M. FERNÁNDEZ y a la licenciada MARISELA OSORIO y, en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA ante los Jueces Municipales del Distrito de Panamá, Ramo Penal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ISABEL CORRO RODRÍGUEZ, EN CONTRA DE LOS SEÑORES JUAN B. CHEVALIER, MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y EL LICDO. OSWALDO FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. (ABUSO DE AUTORIDAD, LESIONES PERSONALES Y EXCESIVO USO DE LA FUERZA). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de 8 de septiembre de 1995 (fs. 38 a 46), se inhibe del conocimiento del proceso seguido al licenciado JUAN B. CHEVALIER B. y declina competencia a la Corregiduría de Ancón; y en lo referente al licenciado **OSWALDO M. FERNÁNDEZ** ordena la ampliación sumarial en el sentido de averiguar de qué funcionario emanó la orden de disolución de la manifestación de la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, y si se justificó la medida adoptada.

En virtud de lo anterior, mediante Vista N° 51 de 20 de diciembre de 1995 (fs. 51-52), el Procurador General de la Nación, Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R., luego de cumplir con la ampliación solicitada por el Pleno de la Corte Suprema, remite el sumario seguido al licenciado **OSWALDO M. FERNÁNDEZ**, Director General de la Policía Nacional, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, lesiones personales y excesivo uso de la fuerza, denunciados por la señora ISABEL DE LA CONCEPCIÓN CORRO RODRÍGUEZ.

Con respecto al Licenciado **OSWALDO M. FERNÁNDEZ**, observamos primeramente, que por ser un hecho público y notorio que el precitado acusado actualmente no se encuentra desempeñando el cargo de Director General de la Policía Nacional, es por lo que el Pleno de la Corte Suprema carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del presente asunto. Estas particularidades hacen que por razones de competencia, corresponda a los Jueces Municipales pronunciarse sobre el citado proceso seguido al licenciado **OSWALDO M. FERNÁNDEZ**, debido a que los delitos imputados tienen pena de prisión que no excede de dos años (Ver Art. 336 del C. Penal, y Art. 174, Acápite A, numeral 1 del C. J.).

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento del proceso seguido al licenciado OSWALDO M. FERNÁNDEZ y, en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA ante los Jueces Municipales del Distrito de Panamá, Ramo Penal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA QUEJA POR DESACATO INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS DOCTORES ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR Y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, ha presentado solicitud de impedimento, para que se le separe del conocimiento de la queja por desacato propuesto por el Licenciado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en nombre y representación de los doctores ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, contra el Director General de la Caja de Seguro Social.

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

> "Para su correspondiente lectura, ha ingresado a este Despacho el proyecto presentado por el Magistrado Sustanciador que resuelve la queja por desacato propuesta por el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en nombre y representación de lo doctores ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, contra el DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.
>
> Como quiera que el abogado de los quejosos en este caso es el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, a quien me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, solicitó al resto de los Magistrados que conforman el Pleno de esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento del presente caso.
>
> Derecho: artículo 749 numeral 1° del Código Judicial. Panamá, 9 de febrero de 1996.
>
> (fdo.)

AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia".

La circunstancia invocada por la Honorable Magistrada, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 1ª del artículo 749 del Código Judicial, por lo que corresponde designar a su Magistrado Suplente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, para actuar en la queja promovida por los doctores ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, contra EL DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, la separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar a su Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 1996, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE MOISÉS DAVID MIZRACHI E IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTILLERO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA**, en su propio nombre, presentó en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia escrito contentivo de un recurso de hecho contra la resolución calendada el 18 de enero de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de **MOISÉS MIZRACHI e IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTILLERO**, mediante la cual se le niega recurso de apelación interpuesto oportunamente.

A fin de darle cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 1139, 1141 y concordantes del Código Judicial, es necesario revisar si estamos ante un caso que cumple con cada uno de los requisitos formales y sustanciales que hacen viable un medio de impugnación de esta naturaleza.

De conformidad con las constancias documentales que se adjuntan al recurso presentado, el recurrente se ajustó a los términos establecidos por la ley con relación a las copias que deben acompañar este recurso; a su vez, el mismo fue interpuesto oportunamente y el tribunal del conocimiento rechazó de plano la apelación interpuesta por el recurrente mediante resolución de 25 de enero de 1996.

Antes de determinar si la resolución que se impugna es recurrible o no en grado de apelación por la acusación particular es necesario mencionar, de manera breve, los antecedentes del caso al igual que los argumentos más salientes que esgrime el recurrente.

El caso se origina en la denuncia formulada por **JOSUE LEVY LEVY** por el supuesto delito de falsedad contra **MOISÉS DAVID MIZRACHI e IDA ESPERANZA**

DOMÍNGUEZ CASTILLERO dentro de la acción de secuestro promovida por **FUJI FILMS** de Panamá contra el denunciante y otros. La instrucción de este caso dio lugar a una orden de detención preventiva contra los señores **MIZRACHI y DOMÍNGUEZ,** emitida por el Fiscal Primero de Circuito de Colón, orden contra la cual se promovió un recurso de habeas corpus preventivo. Tal acción fue decidida mediante resolución de 18 de enero de 1996 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la cual se declara ilegal la providencia que ordena la detención preventiva.

La ilegalidad de la resolución impugnada, de acuerdo con el criterio del Segundo Tribunal, obedece a que no se trata de un delito de falsedad sino de un delito de estafa, que al tenor del artículo 2148 del Código Judicial no conlleva detención preventiva.

La acción de habeas corpus, antes mencionada fue propuesta por la firma forense **RUBIO, ÁLVAREZ Y DÍAZ** y el licenciado **DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA** no era parte de dicha acción, a pesar de que funge como acusador particular en el proceso penal que se le sigue a los señores **MIZRACHI y DOMÍNGUEZ** por delito contra la fe pública. No obstante, según consta en autos, tanto el licenciado **CARRILLO GOMILA** en su calidad de acusador particular en su propio nombre y representación, como el Fiscal Primero de Circuito de Colón, anunciaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada el 18 de enero de 1996, a la que nos hemos referido antes, y mediante la cual se declara ilegal la providencia de 4 de enero de 1996 y se deja sin efecto la orden de detención preventiva de los señores **MOISÉS MIZRACHI e IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTILLERO,** decretada por el Fiscal Primero de Circuito de Colón. El Segundo Tribunal Superior al decidir la procedencia de ese medio de impugnación, conforme a los principios de oportunidad, legitimación activa y pasiva y demás presupuestos procesales, consideró que el licenciado **CARRILLO GOMILA**, con relación a la acción de habeas corpus, no era parte y que por lo tanto, carecía de legitimación para hacer uso de ese medio de impugnación, además, el artículo 2163 del Código Judicial en relación con el 2577 y 2599, limita el recurso de apelación a los casos en que se declara procedente la detención, o sea que este medio de impugnación sólo prospera cuando se declara legal la detención decretada. Con fundamento en esos criterios, rechazó de plano la apelación interpuesta por el Fiscal de Circuito y por el acusador particular.

Por su parte, el licenciado **CARRILLO GOMILA** en la sustentación del recurso de habeas corpus considera que el sistema jurisdiccional vigente no permite que se le impida a una de las partes el derecho de apelar la decisión adversa en el recurso de habeas corpus, en virtud de que en todo proceso se debe garantizar el principio de bilateralidad y, además, el artículo 2599 del Código Judicial permite, a contrario sensu, la apelación en el efecto diferido, en aquellos casos en que la resolución de habeas corpus declara ilegal la orden restrictiva de la libertad. Se alega también la legitimidad del acusador y su derecho de apelar conforme al artículo 1118 del Código Judicial y una recta interpretación del artículo 2599, antes mencionado.

Entre otros aspectos que destaca el recurrente menciona las limitaciones del habeas corpus por su propia naturaleza, con relación al papel del juzgador, de manera tal que no se puede imponer la única instancia en este tipo de acciones manteniendo en indefensión a los otros sujetos procesales.

Como se puede apreciar el asunto que nos ocupa, plantea diversas aristas, pero por ministerio de la ley en esta primera fase sólo cabe considerar si la resolución apelada es o no recurrible por el acusador particular. Sobre este aspecto el Pleno de la Corte ha mantenido el criterio que tanto el habeas como las demandas de inconstitucionalidad, son susceptibles de la acción popular, en virtud de la cual se le permite a cualquier persona impugnar a través de las acciones correspondientes los actos provenientes de autoridad que se estimen violatorios de la Constitución o de la libertad individual o ambulatoria de los ciudadanos.

Tratándose de la acción de habeas corpus, cualquier persona puede pedir que se tutele la libertad de un individuo detenido en violación de los casos y las

formas que la Constitución y la ley prescriben. Esto significa que tanto la Constitución como la ley ofrecen un margen amplio con miras a la preservación de la libertad de las personas; empero, no se mantiene el mismo criterio con respecto a la restricción de ese derecho fundamental, porque prevalece el principio del "mínimo penal", que no es más que la aplicación de medidas restrictivas de la libertad sólo a los casos de mayor gravedad.

Lo anterior nos conduce a señalar que le asiste razón al Segundo Tribunal Superior cuando rechazó de plano el recurso de apelación propuesto por la acusación particular, al considerar la falta de legitimación del recurrente y el carácter no recurrible de la decisión adoptada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el licenciado DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA contra la resolución de 18 de enero de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de MOISÉS MIZRACHI e IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTILLERO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL DOCTOR CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN GERMÁN KAHN KATTENBURG, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DENOMINADA AUTOS VARIOS N° 506 DE 16 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DÉCIMO SEGUNDA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, manifiesta impedimento para conocer el presente negocio, contentivo en la Acción de Amparo promovida por CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE, en nombre y representación de JUAN GERMÁN KAHN KATTENGURG, contra la orden de hacer contenida en la resolución denominada "Autos Varios N°506, de 16 de octubre de 1995, dictada por la Jueza Décima Segunda de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La manifestación está contenida en los siguientes términos:
"MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.

Para su correspondiente lectura, ha ingresado a este Despacho el proyecto presentado por el Magistrado Sustanciador que resuelve en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el doctor CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE, en nombre y representación de Juan Germán Kahn Kattenburg, contra la orden de hacer contenida en la resolución denominada "Autos Varios N° 506", de 16 de octubre de 1995, dictada por la Jueza Décima Segunda de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

> Como quiera que el abogado en la presente acción, es el doctor CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE, quien funge como mi suplente personal; a fin de mantener más allá de toda duda el principio de la imparcialidad y transparencia de la administración de justicia, solicito al resto de los Magistrados que componen esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento de este caso.
>
> Panamá, 12 de febrero de 1996
>
> (fdo.) Mgda. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ".

La Sala observa que la circunstancia invocada por la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, se encuentra consagrada como causal de impedimento en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial; el mismo reza así:

> "ARTÍCULO 749:
> ...
> 13. estar vinculado el Juez o Magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas suceptibles de ser afectadas por la decisión;
> ..."

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la manifestación de impedimento de la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ para conocer de esta acción y, DISPONE llamar al Magistrado Suplente que corresponda, de acuerdo al sorteo respectivo.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

FEBRERO 1996

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

SAN MARCOS TRADING, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LAS EXCEPCIONES DE SER CONDICIONAL LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA Y NO ESTAR CUMPLIDA LA CONDICIÓN, EXCEPCIÓN DE SECUESTRO PREVIO, EXCEPCIÓN DE AUSENCIA DE TITULO EJECUTIVO PROPUESTO POR BANCO GANADERO, S. A. EN EL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR SAN MARCOS TRADING, S. A. CONTRA BANCO GANADERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada por esta Sala, de fecha diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), se ordenó la corrección del recurso de casación propuesto por SAN MARCOS TRADING, S. A., dentro del proceso ejecutivo que le ha seguido a EL BANCO GANADERO, S. A. y/o SIDERÚRGICA DE BOYACÁ, S. A. La Secretaría de la Sala de lo Civil, ha remitido a este Despacho el recurso de casación corregido dentro del término que establece la ley, razón por la cual precisa ahora que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución impugnada es susceptible del recurso de casación y el mismo fue interpuesto en tiempo oportuno, tal como se indicó en la resolución por medio de la cual se ordenó la corrección del mismo.

La Sala observa que el casacionista no cumplió con el mandato de corrección, por lo cual procede a rechazarlo.

En la corrección se le ordenó al recurrente que señalara en qué consistían las pruebas, que según su criterio, son inexistentes, lo cual no hace el casacionista.

En cuanto a la segunda causal, originalmente era "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, posteriormente, en el recurso de casación corregido, la cambia a interpretación errónea de la norma, lo cual es inaceptable, dado que el cambio de la causal constituiría otro recurso. Las correcciones son en cuanto a defectos de forma, como señala el artículo 1166 del Código Judicial. No es permitido el cambio de la causal en la corrección.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por SAN MARCOS TRADING, S. A., mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HUGO ARJONA ARJONA Y REBECA BERAHA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE HUGO ARJONA ARJONA LE SIGUE A REBECA BERAHA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ALCIDES PEÑA A., en su condición de apoderado judicial de

HUGO EDMUNDO ARJONA ARJONA, ha elevado escrito solicitando aclaración de la resolución de 12 de diciembre de 1995, mediante la cual la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la corrección del recurso de casación, en el fondo, presentado por el apoderado judicial de la señora REBECA BERAHA CONCEPCIÓN; y DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por el señor HUGO EDMUNDO ARJONA ARJONA.

Sobre la materia motivo de estudio, el articulo 1168 del Código Judicial, preceptúa lo siguiente:

"ARTÍCULO 1168. Contra las resoluciones de la Corte sobre corrección o sobre admisibilidad no cabe recurso alguno".

De conformidad con la norma transcrita, no cabe la aclaración solicitada por el apoderado judicial del señor HUGO EDMUNDO ARJONA ARJONA.

Por tal razón, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de la resolución dictada por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 1995, formulada por el Licenciado ALCIDES PEÑA A.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MALLOL TAMAYO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA PROPUESTO POR EL BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA L ATELIER, S. A., IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MAYOL TAMAYO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados AROSEMENA, DÍAZ & MOLINA actuando en su carácter de apoderados de los quebrados IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO y GILBERT MALLOL TAMAYO, interpusieron recurso de casación, en el fondo, contra el Auto del 20 de julio de 1995, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso de Quiebra que le sigue el BANCO EXTERIOR a L ATELIER, S. A., IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO y GILBERT MALLOL TAMAYO.

El negocio ingresó a la Secretaría de la Sala por el término señalado en la ley, a fin de que las partes alegaran por escrito, sobre la admisibilidad del recurso, período que fue aprovechado, tanto por el opositor como por el recurrente.

Vencido de esa forma el término de lista a que se refiere el artículo 1164 del Código de Procedimiento Civil, la Corte, debe examinar el escrito de formalización del recurso de casación interpuesto, a fin de determinar si el mismo ha sido concedido por el Tribunal Superior que dictó la sentencia recurrida, mediante la concurrencia de los requisitos expresamente establecidos en los numerales del artículo 1165 del Código Judicial.

La Sala observa que la Resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley.

El recurso fue interpuesto en tiempo.

El escrito de formalización del recurso de casación contiene, en términos generales, los requisitos del artículo 1160.

La causal invocada es la de "infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo", dicha causal se encuentra expresamente señalada en la ley.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO, y GILBERT MALLOL TAMAYO.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(Con salvamento de voto)
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Al decidir un recurso de hecho, ya la Sala se pronunció en el sentido de que la resolución contra la cual se recurre en casación y el auto del Primer Tribunal Superior de 20 de junio de 1995 (f. 261), es susceptible de ser impugnado de esa manera.

Expresa la Sala que lo es conforme al numeral 4 del artículo 1149 del Código Judicial, que se refiere a "autos que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones en procedimientos cautelares".

En esa ocasión salvé mi voto. Ahora debo hacerlo nuevamente. Considero que la resolución no es susceptible de ser recusada mediante casación.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

OSVALDO HERAZO DE LOS RÍOS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE TEÓFILA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado VÍCTOR LUIS CASTILLO ORTEGA, en su condición de apoderado judicial del señor DIGNO OSVALDO HERAZO DE LOS RÍOS, dentro del proceso ordinario que le sigue TEÓFILA RODRÍGUEZ, formalizó recurso de casación contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 3 de octubre de 1995. Recibido el expediente, se dio la oportunidad a las partes para que alegaran acerca de la admisibilidad. Corresponde ahora a la Sala pronunciarse respecto a la aceptación o no de este recurso.

Se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido en lo dispositivo de la resolución. Esta causal está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial. Se observa que el recurso se interpuso oportunamente, por persona hábil.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades

establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo se aparta totalmente de la técnica y formalidad exigida en este recurso extraordinario de casación. El recurso de casación debe enderezarse contra las resoluciones de segunda instancia, tal como lo preceptúa el artículo 1149 del Código Judicial, pero, en el caso en estudio, el casacionista hace alegaciones y recuentos procesales que resultan confusos y no ilustran al Tribunal de qué forma el fallo apelado ha quebrantado el ordenamiento jurídico. Por otra parte, estamos en presencia de una causal probatoria, error de derecho en la apreciación de la prueba, y en el motivo se señala una prueba que legalmente no existe, esta es, copia de una sentencia de inconstitucionalidad dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que fue presentada extemporáneamente dentro de un incidente.

Es obvio que no existe congruencia entre el único motivo alegado y la causal invocada.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y la explicación de como han sido, el recurrente cita los artículos 775, 781, 790, del Código Judicial y el artículo 1696 del Código Civil. Llama la atención de la Sala que al momento de explicar en qué consistió la infracción, el casacionista señala textualmente el mismo contenido de violación en los citados artículos. Esta situación resulta a todas luces inaceptable.

En el caso en estudio se dan lo presupuestos que señala el artículo 1167 del Código de Procedimiento Civil, para declarar la inadmisibilidad del recurso, el cual resulta ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por OSVALDO HERAZO contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 3 de octubre de 1995.

Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA NACIÓN Y HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE URYL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada por esta Sala, de fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), se declaró inadmisible la primera causal, en el fondo, se ordenó la corrección de la segunda causal, dentro del recurso de casación propuesto por HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO, en el proceso ordinario que le sigue URYL, S. A. La Secretaría de la Sala de lo Civil, ha remitido a este Despacho el recurso de casación corregido dentro del término que establece la ley, razón por la cual precisa ahora que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución impugnada es susceptible del recurso de casación y el mismo fue interpuesto en tiempo oportuno, tal como se indicó en la resolución por medio de la cual se ordenó la corrección del mismo.

La Sala observa que el casacionista cumplió con el mandato de corrección, por lo cual procede a aceptar este recurso y, en términos generales, reúne los requisitos que exige la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, en cuanto al la segunda causal, propuesto por HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANTONIO ESPINO VELÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario instaurado por el señor **JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ** contra **ANTONIO ESPINO VELÁSQUEZ**, el apoderado judicial de la parte actora presentó recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, el 17 de octubre de 1995.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes a esta clase de negocio, es tarea de la Sala determinar si cumple con los requisitos que la ley exige para su admisibilidad.

Se observa que la resolución recurrida es susceptible de impugnación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

Consta en autos que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por la persona agraviada con la sentencia de segunda instancia.

En relación con el escrito de formalización se advierte que se trata de recurso de casación en el fondo, en el cual se ha invocado como única causal "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba".

Sin embargo, al adentrarnos en el estudio de los motivos que le sirven de fundamento, se observa que en el motivo primero el recurrente afirma que el fallo impugnado da por probado que el demandante vendió al demandado sus derechos posesorios, "basándose en una supuesta solicitud de permiso para la venta de derechos posesorios y la consiguiente supuesta autorización que la Reforma Agraria concedió al demandante", motivo que guarda relación con la causal probatoria de error de derecho y no de error de hecho.

En el motivo segundo, alega que "En ninguna parte del expediente figura documento público o privado, ni medio probatorio alguno que pruebe que efectivamente el Demandante haya vendido al Demandado los referidos derechos posesorios, incurriendo así el fallo impugnado en dar por existente una prueba que no existía."

El contenido de esos motivos es contradictorio. No es posible plantear que la sentencia recurrida dio por probado un hecho sin que existiera prueba que lo acreditara y, simultáneamente, señalar que ese mismo hecho se dio por probado sobre la base de dos documentos que constan en el expediente, pero que no son idóneos para ello.

En cuanto a los motivos tercero, cuarto y quinto, la Sala advierte que el recurrente en casación se limita a señalar que la sentencia impugnada "desconoció el contenido" de varias pruebas aportadas al proceso, manteniéndose en un nivel de abstracción impropio de la realidad del proceso.

Las circunstancias anteriormente señaladas hacen que el presente recurso de casación sea ininteligible, en vista de que los motivos, que son los hechos en los cuales se fundamenta la causal que se invoca, se desdicen, en vez de contribuir a precisar las objeciones contra la sentencia recurrida.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ, dentro del proceso ordinario que le sigue a ANTONIO ESPINO VELÁSQUEZ.

Las costas a cargo de la parte recurrente, se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

K. R. M. G., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE DISTINTA JURISDICCIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR K. R. M. G., S. A. CONTRA LA NACIÓN Y EL LICENCIADO GUILLERMO ENDARA GALIMANY (M. P.). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Vásquez y Vásquez, en representación de las sociedad **K. R. M. G., S. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 11 de agosto de 1995, mediante la cual se decidió en segunda instancia el incidente de nulidad de distinta jurisdicción, promovido por la Fiscal Sexta del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario instaurado por la parte recurrente contra **LA NACIÓN y el Licenciado GUILLERMO ENDARA GALIMANY.**

En vista de que se ha cumplido con los trámites procesales correspondientes a esta clase de negocio, es tarea de la Sala determinar si el presente recurso de casación debe ser admitido.

Se observa que la decisión recurrida es susceptible de este medio impugnativo, ya que se trata de una resolución que le pone fin al proceso, proferida en segunda instancia por un tribunal superior, dentro de un juicio ordinario.

Consta en autos que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y por persona idónea.

En relación con el libelo del recurso, se advierte que se trata de casación en la forma, en la que se invoca como única causal "Haberse abstenido el Juez de

conocer un asunto de su competencia", la cual corresponde al número ordinal 6 del artículo 1155 del Código Judicial.

En cuanto a los motivos que le sirven de fundamento, a la disposición jurídica que se considera infringida y la explicación de dicha infracción, la Corte concluye que resultan adecuadas, luego de un primer examen formal.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en la forma presentado por la sociedad K. R. M. G., S. A., en el incidente de nulidad de distinta jurisdicción interpuesto dentro del proceso ordinario instaurado por la recurrente contra LA NACIÓN y el Licenciado GUILLERMO ENDARA GALIMANY.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BRINK S PANAMÁ, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FERRARI INTERNACIONAL (SOCIEDAD EXTRANJERA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada el 16 de enero de 1996, esta Sala ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por BRINK S PANAMÁ, S. A., mediante apoderados especiales, dentro del proceso ordinario que le sigue a FERRARI INTERNACIONAL, (sociedad internacional). Para tal fin, se concedió el término de cinco (5) días hábiles, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial. Dicho término ha vencido sin que la parte recurrente corrigiera el recurso, es decir, ha precluido el término.

El vencimiento del término para la corrección trae consigo la declaración de inadmisibilidad del recurso con la consiguiente imposición de costas a cargo del recurrente, tal como lo señala el artículo 1166:

> "ARTÍCULO 1166: Si el recurso adolece de defectos de forma, la Corte ordenará su corrección, señalando al recurrente las deficiencias o defectos. Si el recurrente no lo corrigiere conforme lo ordenado, dentro del término de cinco (5) días, la Corte declarará inadmisible el recurso, con costas de setenta y cinco balboas (B/.75.00) a quinientos cincuenta balboas (B/.550.00), según la cuantía o la importancia del asunto y devolverá el proceso al Tribunal del conocimiento".

En virtud de lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por BRINK S PANAMÁ, S. A., mediante apoderados especiales.

Se condena en costas a la parte recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO

Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

PEDRO BONILLA AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A MÁXIMO AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ALCIBIADES BALLESTEROS JAÉN actuando como apoderado especial de PEDRO BONILLA AGUILAR ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Justicia, del Segundo Distrito Judicial de fecha 9 de agosto de 1995, dentro del Proceso Ordinario de oposición que le sigue a MÁXIMO AGUILAR.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad, lo que no fue aprovechado por ninguno.

Procede la Sala a decidir acerca del recurso, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1165 del Código Judicial, en concordancia con el 1160 y otros del mismo Código.

Al verificar el cumplimiento de la primera exigencia, para la procedencia del recurso de casación, o sea, si "la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley", la Sala ha podido observar que se trata de una sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en segunda instancia en un proceso de oposición a título de dominio.

El recurso ha sido interpuesto en tiempo.

En cuanto a las exigencias formales que describe el artículo 1160 ibídem, la Sala debe señalar lo siguiente:

En primer lugar, a simple vista, se puede observar que el recurrente estructura el recurso de casación de manera inusual, como si se tratara de un recurso ordinario o de un alegato, cuando se sabe que la casación es un medio impugnativo extraordinario, que exige una técnica diferente a la que se emplea en recursos comunes y presenta características especiales, por lo que mal puede equipararse a un alegato de instancia.

La causal no ha sido determinada en los términos que consagra el artículo 1154 del Código Judicial, ni siquiera en forma similar y menos completa. El recurrente expresa "ERROR DE DERECHO", para continuar desarrollando una serie de consideraciones que abarcan dos páginas, previas a los motivos, sobre el fallo de primera instancia y transcribiendo parte de la sentencia de segunda instancia, todo lo cual es totalmente improcedente.

El contenido de los motivos también se aparta totalmente de la técnica que debe preservarse respecto a los apartados de este recurso. Así, se refieren a las pruebas que practicó y no practicó el Tribunal de Primera Instancia, transcribe los informes de los peritos, transcribe parte del fallo de segunda instancia, transcribe un pronunciamiento en apelación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y parte de una sentencia de la Corte Suprema. Además de todo esto, analiza y expresa opiniones subjetivas en relación al recuento de los hechos acaecidos en el proceso.

Por tanto, es imposible percibir el obligante cargo de injuricidad, congruente con la causal, pues se encuentra difuso entre otras consideraciones del recurrente.

En cuanto a las normas de derecho que se consideran infringidas, la

doctrina y la jurisprudencia de la Corte han sostenido que en éstos casos, para que la causal probatoria invocada prospere es preciso que se citen, en primer lugar, las disposiciones referentes al valor de las pruebas y luego las obligantes normas sustantivas, requisito que no cumple el recurrente pues omite la mención de éstas últimas.

Las anteriores consideraciones conducen a la Sala a concluir que el recurso de casación resulta ininteligible, por lo que no procede su admisión, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1167 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE el presente recurso de casación presentado por PEDRO BONILLA AGUILAR dentro del proceso ordinario de oposición que le sigue a MÁXIMO AGUILAR.

Las obligantes costas de casación, a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARISA GONZÁLEZ REVILLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A CORPORACIÓN DE DESARROLLO HOTELERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Primera de la Corte declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la firma forense **DE OBALDÍA Y GARCÍA DE PAREDES**, en su condición de apoderados especiales de la Sra. **MARISA GONZÁLEZ REVILLA**, contra la Resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 25 de enero de 1995, en reemplazo de la sentencia N° 61 de 21 de octubre de 1993, proferida por el Juez Séptimo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La disputa en este grado de la controversia procesal se contrae a determinar si el Presidente y Representante Legal de una sociedad anónima tiene o no capacidad legítima para representar, en una Asamblea General de Accionistas de otra persona jurídica, el grupo de acciones de las que sea tenedora la primera, sin que medie una autorización expresa de la propietaria de esas acciones que le otorgue al mencionado mandatario la facultad de representarlas en el evento social llevado a cabo, durante cuyo desarrollo se adoptaron decisiones atinentes al funcionamiento y organización interna de la persona jurídica que celebró la Asamblea de Accionistas.

Para una mayor claridad del problema se procede a hacer una síntesis del planteamiento formulado por el casacionista.

El recurrente se apoya en una causal única de fondo: "**Infracción de Normas Sustantivas de Derecho por Interpretación Errónea de la Norma de Derecho que ha Influido Sustancialmente en lo Dispositivo de la Resolución Recurrida**". Los motivos invocados pueden ser resumidos en los siguientes términos: El Primer Tribunal Superior de Justicia estimó válida y legítima la participación del señor José Bernardo Cárdenas en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A. celebrada el 28 de septiembre de 1992 y en la cual representó acciones de las que la Sociedad de Bienes Raíces EL MAR, S. A. es propietaria, sin haber acreditado por medio idóneo la habilitación requerida para tales propósitos. El señor Cárdenas se limitó a

presentar en esa oportunidad un certificado del Registro Público donde se atestaba su condición de Presidente y Representante Legal de Bienes Raíces EL MAR, S. A., lo cual a juicio del recurrente, no constituye un documento legítimo que lo facultara para representar las mencionadas acciones.

A continuación, el recurrente le censura a la sentencia el sostener que las funciones de la Junta Directiva de una Sociedad Anónima se circunscriben a la administración y dirección de sus negocios, mientras que aquello que se refiere a su representación frente a terceros no forma parte de sus facultades. Como una derivación de lo anterior, se afirma que la sentencia impugnada incurrió en la interpretación errónea del precepto jurídico más adelante calificado de infringido, por haber presumido **"que si la Ley y el Pacto Social de Bienes Raíces El Mar, S. A. no disponen nada al respecto, el Presidente y Representante Legal, Licenciado José Bernardo Cárdenas, puede ejercer las funciones representativas de la sociedad anónima, sin resolución previa de la Junta Directiva"**. Concluye la censura aseverando que sin la participación de las acciones de Bienes Raíces El Mar, S. A. en la Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A. no era posible lograr el quórum reglamentario y, por lo tanto, los resultados de dicha Asamblea son completamente nulos, como lo está solicitando la parte actora en este juicio.

Cita el recurrente como violado, por interpretación errónea, el artículo 49 de la Ley 32 de 1927 que indica lo siguiente:

> "Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por una Junta Directiva compuesta por lo menos de tres miembros, mayores de edad y sin distinción de sexo".

En opinión de la Sala, son varios los puntos claves que deben abordarse antes de resolver satisfactoriamente el presente recurso de casación. Desde un ángulo estrictamente jurídico, la Sala se encuentra en la necesidad de determinar si la causal invocada interpretación errónea de la norma de derecho, en efecto, ha tenido lugar y, de igual manera, si los motivos invocados y la identificación de la disposición normativa precisada por el casacionista sirven para configurar un razonamiento lógico capaz de producir la conclusión de que el Tribunal Superior incurrió en la falta que le señala la censura.

Se debe comenzar por despejar el auténtico significado de la norma que se señala como violada. Para ese fin se pregunta la Sala: Están o no comprendidas dentro de esa disposición las facultades de representación de una sociedad anónima en relación con el papel desempeñado por la Junta Directiva de la misma o, por el contrario, es esta una materia no cubierta por la disposición bajo estudio? De los términos correctos con que se responda a esa interrogante se podrá inferir si la Junta Directiva de Bienes Raíces El Mar, S. A., de acuerdo con la Ley y especialmente conforme a la norma citada como infringida (art. 49 de la Ley N° 32 de 1927), debió autorizar a una determinada persona natural para que representase a esa sociedad en la Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A.

Sobre el particular el Tribunal Ad-quem dejó dicho que no hay que confundir las gestiones administrativas con las funciones de representación que se generen, en razón de las actividades que despliega una sociedad anónima.

El Tribunal Superior, a juicio de la Sala, dilucidó con claridad, apoyando su razonamiento en diáfanos conceptos doctrinales y legales, el dilema planteado en esta controversia judicial, pues como dejó sentado, una cosa es la administración de los negocios, su programación, incluyendo los planes de producción, el mercadeo, el almacenamiento, el transporte y la publicidad que, en el caso panameño, el ordenamiento jurídico lo asigna a las juntas directivas de las empresas, y otra cosa muy distinta es la tarea de representarlas frente a terceros con las que obligatoriamente tienen que relacionarse las sociedades anónimas, en virtud del giro ordinario de los negocios que estas realizan.

Por supuesto, la Sala coincide con el Tribunal Superior en cuanto a que la Ley N° 32 de 1927 no contempla ni identifica en ninguno de sus artículos cuáles

son las facultades de representación que está en capacidad de ejercer quien ostente la dignidad de Presidente y Representante Legal de las sociedades anónimas. Pero este hecho con ser cierto no significa que se pueda, por vía de la interpretación, pretender que la facultad de representación de estas entidades sociales descansa en sus Juntas Directivas, a partir de lo establecido en el artículo 49 de la Ley N° 32 de 1927. Esa disposición atañe sin duda a la mencionada administración y dirección de los negocios de las sociedades, que no al fenómeno de representación de las mismas, como equivocadamente sostiene en su censura el recurrente.

Acerca de la capacidad que el señor José Bernardo Cárdenas pudiese haber tenido para concurrir a la Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A., y representar las cinco mil trescientas acciones de propiedad de Bienes Raíces El Mar, S. A., dada su condición de Presidente y Representante Legal de esta última, conviene hacer los siguientes comentarios: Aún cuando la ley N° 32 de 1927 no se refiere a la representación legal de las sociedades anónimas, en el derecho positivo panameño existen disposiciones legales aplicables a esta materia. El artículo 73 del Código Civil dice lo siguiente:

> **Artículo"73. Las personas jurídicas serán representadas judicial o extrajudicialmente, por las personas naturales que las leyes, o los respectivos estatutos, constituciones, reglamentos o escrituras de fundación determinen; y a falta de esta determinación por las personas que un acuerdo de la comunidad, corporación o asociación de que se trata, designe con tal objeto".**

Esa disposición resulta perfectamente aplicable al caso de la representación legal de las sociedades anónimas, y de ella se desprende que el cargo de representante legal de las personas jurídicas en Panamá no puede ser desempeñado por una entidad colegiada, como lo es una junta directiva de una sociedad anónima, sino que esa representación debe recaer en la persona natural a quien tal designación le haya sido conferida. En Panamá, contrario a lo previsto por la ley en otros países (vg. España) en donde la representación legal de las sociedades anónimas se le atribuye a los llamados consejos de administración, no se le podría asignar esta dignidad a una entidad que no fuese una persona natural.

En cuanto a si el señor José Bernardo Cárdenas requería de un mandato expreso para representar las acciones de propiedad de Bienes Raíces El Mar, S. A. en la Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A. la Sala cree conveniente formular algunos comentarios.

Ante el silencio que la Ley N° 32 de 1927 y el Pacto Social de Bienes Raíces El Mar, S. A. guardan sobre cuáles son las facultades del Presidente y Representante Legal de la Sociedad, se debe presumir que éste tiene todas aquellas que le permitan desempeñarse en interés del ente social al cual obligatoriamente representa, sobre todo en sus relaciones con terceros. No parece adecuado ni correcto que el juzgador, ante la ausencia de disposiciones directas y expresas con respecto a una determinada materia, se permita el lujo de razonar e interpretar absurdamente las disposiciones legales. Y eso sería precisamente lo que ocurriría si se le negase a un representante legal de una sociedad anónima, el derecho a actuar en representación de los intereses de la sociedad en cuestión, siempre y cuando los actos que ejecute se encuentren comprendidos dentro del objeto social y se relacionen con el funcionamiento propio de la entidad representada. Recuérdese que en materia de derecho privado se puede hacer todo aquello que la Ley no prohíbe. Si ni la Ley ni el Pacto Social de Bienes Raíces El Mar, S. A. le prohibían al señor José Bernardo Cárdenas participar en la Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A. representando las acciones que son propiedad de la primera, no ve la Sala razón legal para anular los resultados de esa Asamblea General de Accionistas.

Es prudente, además, llamar la atención sobre el hecho de que no ha sido la sociedad Bienes Raíces El Mar, S. A. ni tampoco ninguno de sus accionistas, ni sus dignatarios, ni sus directivos quienes intentan anular los resultados de

la Asamblea General de Accionistas en donde los representó el señor José Bernardo Cárdenas, lo cual hubiese sido lo normal en caso de que se sintiesen mal representados. Quien ha impetrado la acción pretendiendo la anulación de los acuerdos de la tantas veces mencionada Asamblea General de Accionistas ha sido una accionista minoritaria de la Corporación de Desarrollo Hotelero, S. A. y esa circunstancia no deja de ser relevante en este caso.

Por todo lo que ha quedado expuesto no encuentra la Sala fundamento para considerar que el texto legal que adujo el recurrente como infringido haya sido interpretado errónea o incorrectamente o que, por otra parte, haya sido aplicado en un sentido ajeno al que corresponde por el Tribunal que desató la controversia en segunda instancia.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el recurso de casación interpuesto por MARISA GONZÁLEZ REVILLA contra la Resolución de fecha 25 de enero de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes costas de casación a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ AGRIPINO BATISTA GONZÁLEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ELIZABETH BARRÍAS RODRÍGUEZ A FAVOR DEL MENOR JONATHAN ABDIEL BARRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 12 de diciembre de 1995, esta Sala de la Corte **ordenó la corrección del recurso de casación** formalizado por **JOSÉ A. BATISTA** contra la Sentencia de 21 de junio de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del **Proceso de Filiación** instaurado por **ELIZABETH BARRÍAS RODRÍGUEZ a favor del menor JONATHAN ABDIEL BARRÍAS** contra el recurrente.

El defecto que presentaba el recurso consistía en haber citado como infringidas normas sustantivas, del Código de la Familia de 1995, que no estaban vigentes cuando el proceso de filiación fue iniciado y que en consecuencia no fundamentaron la resolución de primera instancia ni la de segundo grado, que confirmo la anterior.

En ese sentido según se observa en el nuevo escrito de formalización de la casación, visible de fojas 196 a 208, el recurrente enmendó el defecto señalado, refiriéndose a normas contenidas en la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990 que en efecto fueron invocadas por el juzgador en el fallo como fundamento de derecho, como se colige a fojas 131 del expediente.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el Proceso de Filiación que le sigue ELIZABETH BARRÍAS RODRÍGUEZ a JOSÉ AGRIPINO BATISTA GONZÁLEZ a favor del menor JONATHAN ABDIEL BARRÍAS.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ERNESTO I. FERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR ELLA I. BORDEN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El apoderado judicial del señor ERNESTO I. FERNÁNDEZ, parte demandada en el proceso ejecutivo que le sigue ELLA IDA BORDEN, promovió recurso de casación contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

El término de alegatos fue aprovechado por ambas partes, representados por sus respectivos apoderados judiciales.

Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió únicamente la segunda causal de fondo invocada, esta es "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la cual se encuentra consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

El recurrente fundamenta su recurso en tres (3) motivos que se transcriben a continuación:

> "PRIMERO: La sentencia impugnada infringió la ley al aplicar la regla de hermenéutica legal que establece que las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, es decir, que deben ser interpretadas sistemáticamente, a un supuesto en que no cabe la aplicación de reglas de interpretación como es el de un título ejecutivo, siendo que de este último sólo pueden generarse ohligaciones (sic) claras, es decir, obligaciones que hacen innecesaria la necesidad de acudir a las reglas de hermenéutica para desentrañar su significado.
>
> SEGUNDO: La sentencia censurada infringió la ley al aplicar la regla de interpretación sistemática de los contratos, a una obligación contenida en un título ejecutivo, que por el simple hecho de estar contenida en un documento de esta naturaleza, debe ser clara, de modo que de su tenor literal sea deducible su sentido y alcance.
>
> TERCERO: Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la parte resolutiva de la sentencia recurrida".

En cuanto a las disposiciones infringidas se cita y explica el artículo 1136 del Código Civil.

De la lectura de los motivos en que se funda la causal alegada, se desprende que el núcleo del presente recurso se contrae a determinar si el Tribunal Superior interpretó adecuadamente el acuerdo suscrito dentro de un proceso de alimentos o, por el contrario, el fallo infringió las normas sustantivas de derecho por aplicación indebida. Dentro del citado acuerdo, además, la polémica se centra en la Cláusula Segunda, número B5, que, para una mayor ilustración se transcribe:

> "SEGUNDO: En consecuencia del hecho anterior, el demandando ofrece y nuestra representada acepta el siguiente acuerdo, mediante el cual

el demandado se compromete a lo que se detalla a continuación:

B.5. Ceder mediante Escritura Pública y debidamente inscrita en el Registro Público la Finca N° 58.447 de su propiedad e inscrita al tomo 1307, folio 174, asiento N° 4 de la Sección de Panamá del Registro Público, para que constituyan albergue y morada a nuestra representada y a sus menores hijos".

Las reglas para la aplicación de los contratos se encuentra en el Capítulo IV del Título II, del Libro IV del Código Civil, y, según reiterada jurisprudencia de la Corte, no son disposiciones adjetivas, sino sustantivas. De allí que la labor hermenéutica ha de indagar sobre la voluntad de las partes, columna vertebral de los contratos. Dichas reglas parten de un principio general, para, de allí (artículo 1132 del Código Civil), ir desprendiendo reglas especiales para supuestos específicos, en las cuales se encuentran las frases dudosas. Entre dichos principios se encuentra el de la globabilidad de la interpretación, contenida en el artículo 1136 del Código Civil, que se transcribe.

"Art. 1136 Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas".

Dicha norma viene a complementar la regla general, contenida en el artículo 1132 del Código Civil, que se reproduce:

"Art. 1132. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas".

El escrito presentado por los señores ERNESTO ISAAC F. U. y ELLA IDA BORDEN DE FERNÁNDEZ y que consta a fojas 52 a 54 del expediente, dentro del proceso de alimentos, consiste en un acuerdo entre dos partes sobre los alimentos que el primero tiene para con la segunda y sus menores hijos. Se trata del cumplimiento del deber de alimentos que le impone el artículo 233 del Código Civil y el artículo 377 del Código de la Familia. Es obvio y natural que las partes contratantes llegaron a un acuerdo para definir la situación económica de la madre y sus menores hijos. De allí, a que la cláusula bajo la cual se definen las prestaciones específicas del acuerdo, venga con el siguiente encabezamiento, aplicable a todas las prestaciones específicas:

"SEGUNDO: En consencuencia del hecho anterior, el Demandado ofrece y nuestra Representada acepta el siguiente acuerdo, mediante el cual el Demandado se compromete a lo que se detalla a continuación:

A- Pagar la suma de DOS MIL DÓLARES CON 00/100 ($.2,000.00) mensuales a favor de nuestra Representada y de sus menores hijos, suma esta que pagará por medio de un cheque debidamente certificado por un Banco de la localidad y dirigido a nombre de nuestra Representada, el cual deberá ser consignado en la Casa Matriz del, CHASE MANHATTAN BANK cuenta número 766-2-282016, cuenta ésta que esta a nombra de la señora TOTHA A. de BORDEN y de Nuestra Representada".

Al analizar las cláusulas dudosas del artículo 1285 del Código Civil Español, idéntica a nuestro artículo 1136, el expositor español PUIG BRUTAU, expone lo siguiente:

"...

2. Clásulas dudosas. El art. 1,285 dispone: "Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas."

> Este artículo se refiere a la interpretación sistemática del contrato o a lo que algún autor ha llamado el canon hermenéutico de la totalidad. Sería contrario a toda lógica admitir que las contradicciones que pudieran aparecer en los términos del contrato han sido realmente queridas por los contratantes. Por ello han de relacionarse las diferentes cláusulas del mismo contrato para determinar el sentido unitario del conjunto de todas ellas. De igual modo, como ha observado PUIG PEÑA, del artículo 1,285, "puesto en conexión con el 1,282, se infiere la consideración que merece como factor interpretativo el engarce del negocio de que se trate con otros que guarden relación con él, y que indudablemente tendrían la consideración de actos anteriores, coetáneos o posteriores al contrato". ...".

El profesor LUIS BIEZ PICAZO por su parte, expone sobre el mismo tema, en la forma que se transcribe:

> "...
> En la interpretación de los contratos tiene una gran importancia lo que BETTI llamó el <canon hermenéutico de la totalidad> o interpretación sistemática del contrato, que nuestro Código recoge en el art. 1,285. Según él, las cláusulas de un contrato <deben interpretarse las unas por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todo>.
>
> Como recuerda J. JORDANO, la jurisprudencia ha consagrado este criterio, al señalar que el principio de interpretación sistemática tiene un indiscutible valor, <ya que la intención, que es el espíritu del contrato, es indivisible, no pudiendo encontrarse en una cláusula aislada de las demás, sino en el todo orgánico que constituye> (STS de 15 de febrero de 1975). La STS de 9 de octubre de 1981 ha insistido en la consideración del contrato como un conjunto orgánico <y no como una mera suma de cláusulas>, lo que impone la conexión entre las distintas partes y determina la procedencia del análisis sistemático. ...".

Esta Corte no tiene la menor duda de que las distintas prestaciones a las cuales se obligó el obligado consistían prestaciones a favor de la reclamante de los alimentos, la señora ELLA IDA BORDEN DE FERNÁNDEZ. A mayor abundamiento, la prestación identificada como B5 establece, con toda nitidez, cual era la voluntad del transfiriente de la propiedad, manifestada literalmente como "para que constituyan albergue y morada a nuestra representada", parte principal en el acuerdo, y sus menores hijos.

En base a las consideraciones que anteceden, esta Corte considera que el Tribunal Superior actuó conforme a las reglas de interpretación de los contratos, singularmente las reglas de las que se ocupan los artículos 1132 y 1136 del Código Civil.

De lo anterior se concluye que no existen méritos para casar la sentencia impugnada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Las obligantes costas de casación, se estiman en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INCOADO POR PATRICO ANTONIO MERELO GONZÁLEZ E IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DINER VINDA, en su condición de apoderado especial de la señora IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 7 agosto de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Familia en el proceso de divorcio por mutuo consentimiento incoado por PATRICIO ANTONIO MERELO GONZÁLEZ E IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO.

Después de fijado el término para realizar los alegatos, se corrió traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto en cuanto a la admisibilidad del recurso tal como lo dispone la ley. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

La causal que se invoca es infracción de normas sustantivas de Derecho, en concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, la misma está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Se observa que el recurso se interpuso oportunamente, por persona hábil.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, la Sala observa que los dos motivos que presenta el recurrente formula el mismo cargo de injuricidad, lo cual no es propio de este recurso. Deseamos recordarle al recurrente, que los motivos deben ser redactados de forma clara y precisa, de modo que permitan al Tribunal "prima facie", determinar en qué consiste la infracción cometida por el Tribunal Superior. Señalar en los dos motivos la misma situación hace que el mismo se torne redundante, lo cual atenta con la formalidad que esta revestido este extraordinario recurso. Por lo tanto, no se requiere la repetición del mismo planteamiento en los motivos, basta para ello, que la fundamentación sea clara, precisa y concisa.

En cuanto a la violación de normas sustantivas de derecho y, la explicación de cómo lo han sido, observa la Sala que dentro de la explicación del artículo 1081 del Código Judicial, hace señalamientos de otra disposición legal. El casacionista no puede mencionar artículos sin que sean debidamente explicados, esto se aparta de la técnica del recurso de casación.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por la señora IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Familia el día 7 de agosto de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FIELDCREST CANNON INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MAY'S ZONA LIBRE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE

(13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La representación judicial de la sociedad **FIELDCREST CANNON INC.** formalizó recurso de casación contra la sentencia de 17 de mayo de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que le sigue a **MAY'S ZONA LIBRE, S. A.**

Encontrándose el negocio pendiente de resolver en el fondo, los apoderados judiciales de ambas partes han adjuntado a la actuación escrito de transacción del proceso. Dicho escrito fue presentado personalmente ante la Secretaría de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y en él se expresa lo siguiente:

> "Nosotros **BENEDETTI & BENEDETTI**, apoderados de la parte actora y **RUBIO, ÁLVAREZ, MIZRACHI/DÍAZ**, apoderados de la parte demandada, por medio del presente manifestamos al Tribunal que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1500 del Código Civil, hemos llegado a una transacción que le pone término a la demanda que se enuncia al margen superior, en los siguientes términos:
>
> **PRIMERO:** Declaran las partes que han llegado a un acuerdo final y definitivo, por medio del cual la demandada reconoce en favor de la demandante, la suma única de $ 130,000.00 en concepto de capital, intereses, costas y gastos.
>
> **SEGUNDO:** Declara la parte actora que ha recibido el pago de la suma antes dicha, por lo que no tiene reclamo alguno que hacerle a la parte demandada con motivo o a consecuencia del objeto de la demanda.
>
> **TERCERO:** La parte demandada acepta y reconoce no tener reclamación alguna con la demandante, con motivo o a consecuencia de la demanda objeto de esta transacción.
>
> **CUARTO:** Ambas partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra.
>
> En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva aprobar esta transacción y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, previo el levantamiento del secuestro.
>
> Nos damos por notificados de la resolución que aprueba esta transacción." (Foja 348).

La transacción es un medio extraordinario de terminación del proceso, que se encuentra regulado en los Códigos Civil y Judicial. Así, el artículo 1500 del Código Civil define la transacción como "un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado."

Por su parte, el artículo 1068 del Código Judicial contempla la posibilidad de que las partes celebren una transacción en cualquier etapa del proceso, inclusive durante el trámite del recurso de casación. Como requisitos formales para su validez exige que se presente la solicitud acompañada del documento que contiene la transacción, ante el juez que conoce del negocio. Dicha presentación debe hacerse personalmente, a menos que la firma de las partes haya sido autenticada ante un Juez o Notario.

El examen del documento presentado en este caso pone de manifiesto que se ha cumplido con los requisitos exigidos por los artículos anteriormente señalados. Además, se ha podido constatar que los apoderados judiciales de ambas partes poseen facultad expresa para transigir, como se desprende de los poderes

consultables de foja 18 a 22 y a foja 316 del expediente.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN celebrada dentro del proceso ordinario instaurado por FIELDCREST CANNON INC. contra MAY'S ZONA LIBRE, S. A., DECLARA TERMINADO EL PROCESO y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente, previo el levantamiento del secuestro.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MACANO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A NORA PARRA MIRANDA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 28 de diciembre de 1995, esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo, interpuesto por la firma forense Moncada y Moncada, en representación de la sociedad **MACANO, S. A.**, dentro del proceso ordinario que le sigue a la señora **NORA PARRA MIRANDA.**

En vista de que ha vencido el término para la corrección del recurso y que la misma fue efectuada dentro del período que la ley concede con ese propósito, corresponde a la Sala resolver en forma definitiva su admisibilidad. Para ello, es necesario confrontar la resolución que ordenó la corrección con el nuevo escrito de formalización, con el objeto de determinar si se ha cumplido o no con lo ordenado por esta corporación judicial.

Después de analizar las piezas señaladas anteriormente, se concluye que el recurrente corrigió satisfactoriamente los defectos formales que se le habían señalado; de manera que el recurso corregido cumple con los requisitos que la ley exige, por lo cual debe ser admitido.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por la apoderada judicial de la sociedad MACANO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FRANCISCO MAYA CAMARENA, AUGUSTO GUERRA Y JUAN DEMÓSTENES GUERRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A ASENTAMIENTO CAMPESINO TODO POR LA PATRIA DE FARFAN O RÍO GRANDE DE SONÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, el 2 de marzo de 1995, la firma de abogados MORENO Y FÁBREGA formalizó, en representación de los señores FRANCISCO MAYA CAMARENA, JUAN DEMÓSTENES GUERRA Y AUGUSTO GUERRA, recurso de casación en el fondo en búsqueda de que se revoque la resolución atacada que negó las pretensiones de sus representados, quienes mediante los procedimientos del juicio civil ordinario demandaron al Asentamiento Campesino Todo Por la Patria, a fin de que resultase condenado a devolverle "los bienes propios que aportaron para dicho asentamiento", que se dice consistieron en reses, tierras con sus mejoras, así como los beneficios, cuotas, intereses y los otros derechos que les correspondían por haber pertenecido a la organización social demandada.

La resolución impugnada confirmó en todas sus partes la Sentencia N° 64 de 1° de junio de 1994, dictada por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, y que se profirió en los siguientes términos

> **"Por las anteriores consideraciones, quien Suscribe, JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VERAGUAS, RAMO DE LO CIVIL, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la LEY, CONDENA EN ABSTRACTO al ASENTAMIENTO CAMPESINO "TODO POR LA PATRIA N° 2", Organización campesina debidamente registrada y reconocida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a pagarle todos los beneficios, cuotas, intereses y demás derechos que tuvo como socio activo el señor AUGUSTO GUERRA o AUGUSTO MACHUCA GUERRA dentro de la organización campesina hasta el 28 de septiembre de 1989. Para la liquidación de la misma, sólo se tendrá la participación y aportación que dicho miembro mantuvo dentro de la organización. SE NIEGA las demás declaraciones impetradas por el demandante, así como las declaraciones judiciales solicitadas en la demanda de reconvención. Sin costas para ambas partes."**

El recurrente en casación ha invocado dos causales de fondo que serán examinadas por la Sala en forma separada.

PRIMERA CAUSAL DE FONDO.

Se invoca la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa y se señalan los motivos que ahora la Sala pasa a resumir, cuidándose de destacar lo medular.

En primer lugar, dícese que la sentencia reconoció que los demandantes hicieron aportes al asentamiento campesino demandado en concepto de bienes, ganado y servicios, pero que simultáneamente les desconoció el derecho que tienen a recuperar el valor económico de los mismos. Se añade que no se ha respetado la presunción que obra a favor de los demandantes en el sentido de que los aportes se hicieron para obtener beneficios materiales, pues la sentencia ha ignorado que el asentamiento es un ente de naturaleza económica de cuyo funcionamiento surgen derechos consagrados en la Ley a favor de quienes hayan contribuido y participado en su creación y en el desenvolvimiento de sus actividades. Se señala que la Ley le asegura a quienes se separen de un asentamiento que se les reconozcan sus aportes y una participación en los beneficios que hayan podido haberse alcanzado. En el caso de los demandantes FRANCISCO MAYA CAMARENA y JUAN DEMÓSTENES GUERRA la sentencia omitió decretar una condena en abstracto, fundándose en que no se pudo establecer el quántum, decisión también censurada por el recurrente.

Como normas infringidas por la sentencia se denuncian el artículo 1643a del Código Civil que obliga a quien se hubiere enriquecido sin causa a indemnizar al perjudicado en su patrimonio como consecuencia de aquel resultado; el artículo 17 del Decreto N° 66 de 25 de septiembre de 1984, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley N° 23 de 21 de octubre de 1983, mediante el cual se le garantiza a los asentados que dejen de serlo una proporción del aumento del capital del asentamiento que haya sido generado durante el período de su pertenencia al mismo, de acuerdo al trabajo aportado; y, por último, el artículo 983 del Código Judicial que impone la obligación de condenar en abstracto cuando la cuantía no apareciese demostrada.

Al examinar esta primera causal la Sala debe partir haciendo el señalamiento de que entiende que este recurso extraordinario ha sido interpuesto en nombre de dos de los tres poderdantes a quienes la firma forense MORENO Y FÁBREGA está representando en este juicio. Nos referimos a los señores FRANCISCO MAYA CAMARENA y JUAN DEMÓSTENES GUERRA, personas que resultan afectadas por la resolución atacada al no favorecerlos en sus pretensiones y, aunque ese punto no se encuentra debidamente aclarado por el casacionista, para la Sala no tendría sentido entender que se ha recurrido en nombre del señor AUGUSTO GUERRA, pues éste resultó beneficiado por la sentencia que se le solicita a la Corte sea casada.

Hecha esta observación la Sala queda en condiciones de examinar la primera causal de fondo invocada por el recurrente.

Sobre esta materia lo primero que llama la atención consiste en que, de los motivos expuestos, se desprende que a la sentencia del Tribunal Superior impugnada se le censura la supuesta falta de reconocimiento de los aportes económicos y los servicios prestados por los demandantes al asentamiento campesino Todo Por la Patria, por lo que se concluye que se están desconociendo sus derechos.

Para el recurrente la sentencia atacada ha patrocinado el enriquecimiento sin causa de la parte demandada violándose con ello, en esa forma, el artículo 1643a del Código Civil de manera directa.

No comparte la Sala esa opinión, en virtud de diversas razones. La primera consiste en que, como sistemáticamente se ha venido sosteniendo, las causales en que se base el recurso de casación, sus motivos y las normas de derecho que se aleguen infringidas deben mantener una conexión directa con el contenido de la resolución que se impugna. Es decir, los aspectos que se denuncien como valorados, interpretados o decididos incorrectamente deben encontrarse subsumidos en la sentencia atacada. En este caso, no encuentra la Sala, después de analizar la sentencia del Tribunal Superior, que esto haya ocurrido. Es verdad que, esa resolución no se refirió en ninguna de sus partes a los cargos de enriquecimiento ilícito mencionados por el casacionista en los apartes y en la exposición de la primera causal invocada. Sin embargo, la Sala al estudiar la decisión proferida por el ad-quem encontró que ese Tribunal sí se pronunció de manera categórica en torno a la controversia procesal planteada, o sea, acerca de los hechos de la demanda y de su contestación, acerca de los surgidos con motivo de la demanda de reconvención que se interpuso y, por supuesto, acerca de todas las pretensiones alegadas por las partes. No está demás volver a recordar que lo pedido por la parte actora en este juicio se contrajo a que le fueran devueltos ciertos bienes muebles e inmuebles y se le reconocieran otros beneficios y derechos que supuestamente le correspondían y se le adeudaban por parte del asentamiento campesino demandado. Sobre esa materia giró íntegramente la controversia judicial y la decisión del Tribunal Superior no se ha apartado en ningún momento de los temas sometidos a su juicio, los que fueron, en opinión de la Sala, debidamente dilucidados. Se observa que al fallar, el Tribunal se limitó a considerar lo que se cuestionaba en el pleito, es decir, si los actores en verdad hicieron o no los aportes reclamados y si la parte demandada se los había reconocido, o si, por el contrario, alguna obligación quedaba pendiente de cumplimiento. Concluyó el Tribunal Superior decidiendo que, en el caso de los señores FRANCISCO MAYA CAMARENA Y JUAN DEMÓSTENES GUERRA, no emergió como verdad material del proceso el supuesto derecho reclamado y por ese motivo procedió a absolver a la parte demandada.

No tenía el Tribunal Superior ninguna obligación de aplicar el artículo 1643a del Código Civil (sobre enriquecimiento sin causa) en este caso. Como quiera que nunca fue debatido en el proceso el tema del enriquecimiento sin causa y que las constancias procesales demuestran que ese tipo de responsabilidad era por completo extraña a las obligaciones de la parte demandada, mal puede entonces exigírsele a la sentencia impugnada que formulara un pronunciamiento en relación con ese instituto jurídico y mucho menos que aplicara el artículo 1643a del Código Civil.

En cuanto al artículo 17 del Decreto N° 66 de 25 de septiembre de 1983 no encuentra la Sala que procede la censura, pues no es cierto que esa disposición no fuese tomada el consideración por la sentencia recurrida. El Tribunal Superior al confirmar integralmente la sentencia del juzgador de primera instancia, así como también a partir del análisis realizado al emitir su propio pronunciamiento, ponderó en extenso la cuestión de los aportes efectuados por los demandantes al asentamiento, pero sin ignorar por eso los beneficios reales y tangibles que ellos recibieron como compensación a las contribuciones hechas. Por ese camino el Tribunal Superior llegó a la conclusión de que la parte demanda no tenía obligaciones pendientes de cumplimiento en relación con la parte actora.

Frente a la supuesta violación del artículo 983 del Código Judicial denunciada por el recurrente estima la Sala que apenas si es necesario expresar que no existen fundadas bases para la impugnación de la resolución del ad-quem. No hay asidero jurídico para proferir una condena en abstracto a favor de FRANCISCO MAYA CAMARENA y JUAN DEMÓSTENES GUERRA. Si lo hubo o no en el caso del tercer demandante, AUGUSTO GUERRA, ese es un asunto sobre el cual no le es dable pronunciarse a la Sala con ocasión de este recurso.

Al no prosperar ninguno de los cargos de que se acusa la sentencia, la causal de fondo alegada por el recurrente no está justificada.

SEGUNDA CAUSAL DE FONDO.

Invoca como segunda causal de fondo el recurrente la infracción de la norma sustantiva de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba. Los motivos se hacen descansar en que no fue tomado en cuenta por la sentencia el Reglamento Interno del Asentamiento Campesino Todo Por la Patria, en particular su artículo primero, en donde se establece la finalidad económica de esa organización social, lo que llevó a desconocer, según el casacionista, que los aportes hechos por sus representados no se hicieron a título gratuito sino a título oneroso.

Se citan como infringidos el artículo 779 del Código Judicial que le confiere valor probatorio a los documentos; el artículo 819 del Código Judicial que define y describe las distintas clases de documentos; y, el artículo 253 del Código de Comercio que le reconoce a los socios integrantes de una sociedad de hecho el derecho a retirar los aportes que hagan para contribuir al patrimonio de la sociedad.

Tan pronto la Sala entra a examinar esta causal referida al error de hecho sobre la existencia de la prueba, confrontándola con la sentencia impugnada, se percata de que tanto la pretensión como la censura son, a todas luces, desproporcionadas. En este juicio se practicó un número plural de pruebas. Ellas van desde los testimonios rendidos, a favor y en contra, por FROILAN JIMÉNEZ, ASUNCIÓN ZIQUEIRA, NICOLÁS ZIQUEIRA, VICTORIANO VEGA, FIDEDIGNA GUERRA DE CAMARENA, MARCIANO CAMARENA ORTIZ, MARCELINO ALFONSO CUEVAS, WENCESLAO ESPINOZA AMBULORIO Y ELIDIA RODRÍGUEZ ESPINOZA hasta la práctica de varios peritajes, sin olvidar el copioso número de documentos atinentes al caso que fueron allegados al proceso, hasta lograr traducirlo en un voluminoso expediente de más de 600 fojas.

La Sala aprecia que la sentencia atacada analizó y valoró los medios probatorios que hemos dejado mencionados y que, como producto de esa labor, se arribó a la decisión consistente en que el señor FRANCISCO MAYA CAMARENA recibió, a cambio de sus aportes, proporcionales beneficios, entre los que pueden señalarse la asignación de un terreno de 25 hectáreas en compensación de la parcela que había entregado al asentamiento; el uso durante doce años de los potreros del asentamiento para pastorear el ganado de su propiedad, así como la ayuda que se le proporcionó para la educación de un hijastro suyo. En cuanto a JUAN DEMÓSTENES GUERRA, en autos no se demostró que hubiera aportado bienes de naturaleza mueble o inmueble al asentamiento.

También la sentencia cuestionada fue cuidadosa al considerar si, de alguna manera, se había podido probar en el proceso que a los señores FRANCISCO MAYA

CAMARENA y JUAN DEMÓSTENES GUERRA se les adeudaba alguna suma de dinero en concepto de los trabajos que alegaron haber efectuado durante determinada cantidad de años para el asentamiento, sin que tal extremo llegara a demostrarse por la parte sobre la cual recaía la carga de la prueba.

Cuando se analiza el valor probatorio que pudiese tener el Reglamento Interno de la Organización Todo Por la Patria es necesario hacerlo en relación con el conjunto de los otros medios de pruebas que obran en el expediente y sería incorrecto considerar ese instrumento probatorio en forma aislada. En fin de cuentas, el Reglamento y sus disposiciones no dejan de ser una manifestación abstracta de los derechos que pudiesen haber surgido para los demandantes en determinadas condiciones. Por sí solos, ni el Reglamento ni su articulado bastan para demostrar que tales derechos existen o que legítimamente deban ser reconocidos, puesto que los mismos no tienen porqué ser presumidos, mucho menos cuando otras pruebas no confirman su existencia, sino que revelan todo lo contrario.

La Sala tiene que desestimar la censura relativa a la supuesta infracción del artículo 819 del Código Judicial porque no advierte que la sentencia de segunda instancia haya desconocido el Reglamento del Asentamiento Campesino Todo Por la Patria y, así mismo, considera que no hubo violación del artículo 253 del Código de Comercio porque la verdad reflejada en autos no respalda la afirmación de que a los recurrentes no se les hubiesen reconocido los aportes que supuestamente hicieran.

Por lo anterior expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA, la sentencia de fecha 2 de marzo de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial.

Las obligantes costas de casación a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK) RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA COADYUVANTE QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR BANCO GENERAL, S. A. CONTRA JOSÉ HERNÁNDEZ ARAÚZ Y BRENDA DELGADO DE HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado TOMÁS VEGA CADENA, en su condición de apoderado especial del BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK), oportunamente formalizó recurso de casación contra la Resolución de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la tercería coadyuvante que propone dentro del proceso ejecutivo hipotecario incoado por BANCO GENERAL, S. A. contra JOSÉ HERNÁNDEZ ARAÚZ Y BRENDA DELGADO DE HERNÁNDEZ.

Fijado en término el negocio para alegar acerca de la admisibilidad, solamente el recurrente presentó escrito en donde solicitó se proceda a aceptar la impugnación a la resolución. Procede el Tribunal de Casación a determinar, tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial, si procede la admisibilidad.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

El recurso se presentó en el fondo y se alegó una causal.

La causal invocada es de las consagradas en el artículo 1154 del Código Judicial, la misma es "infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de Violación Directa, lo que ha influido sustancialmente en el fallo."

El recurrente presenta un solo motivo para sustentar la causal, la Sala observa que el motivo no es congruente con la causal y, además, el casacionista señala en los motivos normas infringidas, lo que no es compatible con la formalidad que reviste a este recurso extraordinario de casación.

La Corte ha señalado reiteradamente que:

> "Los motivos deben expresar únicamente el cargo de injuricidad contra la sentencia, señalando cada uno un cargo diferente. No es propio que contengan apreciaciones subjetivas del recurrente, sobre lo que éste considera debió hacer el Ad-quem, ni que aludan a normas de derecho consideradas violadas por el fallo impugnado". Registro Judicial de marzo de 1994.
> (CASACIÓN, JORGE FÁBREGA, PAG. 117).

De lo anterior se desprende que, los motivos deben ser claros y precisos, pero observa la Sala en el escrito de formalización del recurso que el recurrente expresa: "Estimo que el Juzgador de Segunda Instancia ha incurrido en una inexactitud jurídica, nacida de un error de juicio, al interpretar una norma incorrectamente, ...". Esta es una frase genérica que no contiene un cargo específico contra la sentencia, de la cual se pueda lograr la anulación por la vía del recurso extraordinario de casación.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y la explicación de cómo lo han sido, mal puede la Sala entrar al estudio de dichas infracciones cuando no hay congruencia entre el motivo único expuesto y la causal invocada. Sin embargo, señalamos de manera didáctica al casacionista que el artículo 1766 del Código Judicial, no es una norma sustantiva siendo requisito sine-quanon para la causal alegada se cite normas sustantivas de derecho. Por otra parte, llama la atención de la Sala que también se menciona el artículo 1639 del Código Judicial sin que se explique en qué consistió la infracción.

La enunciación de la supuesta infracción de una norma, no basta para que el juzgador pueda determinar si efectivamente el fallo impugnado violó tal precepto legal, para ello es necesario la explicación de cómo se quebrantó la ley.

En consecuencia, se dan los presupuestos señalados en el artículo 1167 del Código Judicial, para declarar la inadmisibilidad del recuso por ser ininteligible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE del recurso de casación en el fondo, interpuesto por BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK), mediante apoderado judicial, contra la Resolución de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES JACQUELINE, S. A. Y/O EL CHIC, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE GERMÁN ADOLFO ARROCHA, AMPARO RUIZ DE ARROCHA, JEANINE P. DE WEIL, CARLOS WEIL, ESPERANZA DE MARTÍNEZ, SANDRA M. SANTOS Y ROLANDO SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario instaurado por los señores **GERMÁN ADOLFO ARROCHA**, **AMPARO RUIZ DE ARROCHA**, **JEANINE P. DE WEIL**, CARLOS WEIL, ESPERANZA DE MARTÍNEZ, SANDRA M. SANTOS y ROLANDO SANTOS contra **INVERSIONES JACQUELINE**, **S. A. y/o EL CHIC**, **S. A.**, los apoderados legales de ambas partes presentaron sendos recursos de casación contra la sentencia que decidió este proceso en segunda instancia, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 18 de septiembre de 1995.

En vista de que se ha cumplido con las ritualidades procesales correspondientes, la Sala debe determinar si los recursos presentados llenan los requisitos que la ley exige para su admisibilidad.

Se advierte que la resolución que se pretende impugnar es susceptible de casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía.

Consta en autos que ambos recursos fueron anunciados y presentados en tiempo oportuno y ambas partes son idóneas para recurrir en casación.

En cuanto a los escritos de formalización, la Corte procede a analizarlos separadamente.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

Se trata de recurso de casación en el fondo en el cual se invoca como única causal, "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", causal que contempla el artículo 1154 del Código Judicial.

En cuanto a los motivos que le sirven de fundamento, las disposiciones legales que se consideran infringidas y el concepto de dichas infracciones, resultan adecuados en su aspecto formal, razón por la cual la Sala debe admitir el recurso de casación presentado por la apoderada judicial de la parte actora.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

El apoderado de la parte demandada ha presentado recurso de casación en la forma, invocando como única causal el número ordinal 6 del artículo 1155 del Código Judicial, que consiste en "Haberse abstenido el Juez de conocer asunto de su competencia".

La lectura de los motivos que le sirven de fundamento pone de manifiesto que el recurrente en casación plantea dos situaciones distintas: 1) que la sentencia impugnada omitió resolver materia que había sido objeto del litigio, esto es, que no decidió "la pretensión implícita de daños y perjuicios formulada en el hecho octavo del libelo de reconvención propuesto por nosotros como apoderados de la parte demandada"; 2) que la sentencia impugnada desconoció el principio de la limitación de la apelación, revocando un aspecto que no era objeto del recurso.

El Doctor Jorge Fábrega P. en su obra "Casación", señala en relación con la causal invocada, lo siguiente:

"Se produce cuando se decide en supuestos de competencia negativa.

> Para que se produzca esta causal es indispensable que, en el fallo, el tribunal se declare incompetente para conocer el asunto. En este último caso, el tribunal deja de resolver sobre alguno o algunos de los puntos controvertidos. Se da en el caso que en la parte resolutiva del fallo del tribunal declare la abstención." (Páginas 189 y 190).

Del texto transcrito se colige que las situaciones descritas por el recurrente son incongruentes con la causal invocada. Así, en cuanto a la primera, el Tribunal Superior negó la declaración a que se refiere la parte recurrente, no por estimar que carecía de competencia para decidir sobre ella, sino por considerarla extrapetita; circunstancia que guarda relación con la falta de congruencia entre la pretensión y el fallo del tribunal y que se contempla en una causal de forma distinta a la enunciada en el presente recurso de casación.

En cuanto a la segunda situación, esto es, que se desconoció el principio de la limitación de la apelación, la Corte advierte que guarda relación con la causal de forma contemplada en el número ordinal 2 del artículo 1155 del Código Judicial. Ello es así, porque no se trata de que el Tribunal se abstuvo de conocer asunto de su competencia sino, por el contrario, de que el Tribunal carecía de competencia procesal para decidir sobre ese aspecto, porque no era parte del recurso de apelación.

En vista de que los motivos no son congruentes con la causal invocada, el recurso de casación presentado por la parte demandada es ininteligible y por tanto, inadmisible.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por los señores GERMÁN ARROCHA, AMPARO DE ARROCHA y OTROS y NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por INVERSIONES JACQUELINE, S. A. y/o EL CHIC, S. A.

Se condena a INVERSIONES JACQUELINE, S. A. y/o EL CHIC, S. A. a setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente, en concepto de costas de casación.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FINANCIERA LAS TABLAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE A EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS, apoderados especiales de la FINANCIERA LAS TABLAS, S. A., parte actora en el proceso ejecutivo hipotecario que le sigue a EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ, ha impugnado a través de recurso extraordinario de casación, en la forma, el auto de segunda instancia dictada por el Cuarto Tribunal Superior de el 25 de octubre de 1995.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo,

tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación, puesto que se trata de una resolución de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior en un proceso ejecutivo donde se aprueba un remate, con una cuantía superior a la señalada en el numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

La causal invocada, cual es, "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley", está prevista como causal en la forma, conforme a lo que consagra el artículo 1155 del Código Judicial.

En cuanto a los motivos y a las normas de derecho con la explicación de cómo han sido infringidas, la Sala observa que, en términos generales cumplen con los requisitos exigidos por la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE del recurso de casación, en la forma, propuesto por la FINANCIERA LAS TABLAS, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PEDRO MORALES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRANKLIN MORALES MORALES. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario propuesto por PEDRO A. MORALES contra FRANKLIN MORALES M., el demandante promovió recurso de casación, en el fondo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 30 de noviembre de 1994. Recibido en la Sala de lo Civil y realizado el reparto correspondiente, se procedió a escuchar a las partes sobre la admisibilidad del mismo.

El Tribunal al estudiar el aspecto formal, consideró admisible dicho recurso. Se procedió posteriormente a fijar el término para que las partes alegaran en cuanto al fondo, período que no fue aprovechado por ninguna de las partes.

La Sala entra al estudio del recurso promovido, previas las consideraciones que a continuación se expresan:

El señor PEDRO MORALES promovió demanda civil ordinaria declarativa de mayor cuantía contra FRANKLIN MORALES MORALES, el día 20 de julio de 1990, a objeto de que se hagan las siguientes declaraciones:

"...

PRIMERA: Que queda rescindido el ofrecimiento unilateral y voluntario hecho por el demandante PEDRO MORALES en favor de FRANKLIN MORALES MORALES que le permitía a éste último usar el camino de propiedad del demandante, construido para acceder a finca

también de propiedad del demandante ubicada en Caizón Arriba, Distrito de Renacimiento, entre las fincas de los señores JOSÉ BERNARDO ESTRIBÍ y FRANKLIN MORALES MORALES;

SEGUNDA: Que el demandado FRANKLIN MORALES MORALES deberá pagar al demandante la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) en concepto de daños y perjuicios consistentes en: a) los gastos legales que lo ha obligado a incurrir por razón de su conducta absoluta al hacer uso del acto de mera tolerancia y amistad que se menciona en la anterior declaración; b) Los daños materiales causados por el demandado a cercas y portones de propiedad del demandante; c) Los gastos que tuvo que incurrir el demandante para darle seguridad a su finca y ganados en vista de los actos violentos realizados por el demandado al destruir cercas y portones del demandante; c) (sic) Los daños y perjuicios derivados del delitos de daños y de prohibición de hacerse justicia por sí mismo por los cuales fue hallado responsable ante los Tribunales y condenado penalmente.

TERCERA: Que en caso de oposición, el demandado deberá pagar costas y gastos".

El demandado FRANKLIN MORALES, al constestar el traslado de la demanda por conducto de su apoderado judicial, a las declaraciones formuladas en la demanda, negó algunos hechos y otros los aceptó, oponiéndose finalmente a las pretensiones del demandante.

El conocimiento del caso de primera instancia estuvo a cargo de la Juez Segunda del Circuito de Chiriquí, quien mediante sentencia N° 145 de 12 de noviembre de 1993, negó las declaraciones pedidas por el actor.

Contra este fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo, ingresando de esta manera el negocio al Tribunal del Tercer Distrito Judicial, para que se surtiera la alzada.

El Tribunal de segunda instancia, mediante sentencia de 30 de noviembre de 1994, CONFIRMO la sentencia de 12 de noviembre de 1993, proferida por el Juez Segundo de Circuito de Chiriquí.

Contra este fallo de segunda instancia, es que el apoderado judicial de la parte demandante ha interpuesto recurso de casación, el cual fue declarado admisible por esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

El casacionista invoca la causal de "Infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa de las normas de derecho, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

La causal de fondo transcrita aparece fundamentada en dos motivos. En el primero de ello se acusa a la sentencia de que, pese haber reconocido que el demandado había incurrido en el delito de "daños y prohibición de hacerse justicia por sí mismo ...", en contra de su representado, dicha sentencia absolvió al demandante, liberándolo de la responsabilidad civil emanada de dicho delito. En el segundo motivo reitera que la sentencia recurrida extingue la responsabilidad civil emanada del delito cometido por el demandado, violando, en consecuencia, la ley sustantiva que consagra la extinción de la responsabilidad civil.

Las normas de derecho citadas y explicadas como infringidas son los artículos 119 y 130 del Código Penal y 977 del Código Civil.

Estamos en presencia de una causal en que la violación directa de la ley, puede ocurrir, por omisión, cuando se ha omitido su aplicación a situaciones que así lo requieren; o , por comisión, cuando se aplica desconociendo un derecho consagrado en esa norma. Por su parte, observa la Sala que el casacionista cita y explica como disposiciones legales infringidas, los artículos 119 y 130 del Código Penal y 977 del Código Civil, aunque en la explicación de este último

artículo hace referencia a otra norma, esta es, el artículo 983 del Código Judicial. Conforme a lo expresado, el recurrente manifiesta que dichas normas han sido violadas por omisión.

En el caso en estudio, el Tribunal acogió una demanda por daños y perjuicios derivados de una acción penal, en la cual se persigue una cuantía de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00).

Con el libelo de demanda el actor presentó pruebas documentales, las cuales no estaban autenticadas ni fueron aceptadas por el demandado. Por tal motivo carecen de valor probatorio. Por otra parte, en la etapa probatoria solicitó al Tribunal que se oficiara a la Alcaldía Municipal del Distrito de Renacimiento copias auténticas del expediente instruido en ese Despacho en relación con la controversia existente entre su cliente y el demandado: así como también, copia auténtica del expediente instruido contra FRANKLIN MORALES por el delito genérico de prohibición de hacerse justicia por sí mismo. Por último, designó a la Licenciada MIRIAM RODRÍGUEZ, para la prueba pericial, a fin de que se estableciera el monto de los daños y perjuicios causados a su representado por el demandado.

El Tribunal de primera instancia acogió las pruebas aducidas, ordenando los oficios correspondientes y señaló fecha para la prueba pericial (foja 50). Con respecto a esta prueba, consta a foja 54 del expediente, la declaración de impedimento manifestado por la perito nombrada por el apoderado judicial del actor, para la realización de la prueba a ella solicitada y cuya fecha de verificación lo era el 4 de diciembre de 1990. Mediante edicto N° 990 de 5 de diciembre de 1995, el tribunal puso en conocimiento del representante legal de la parte actora, el impedimento presentado por la citada perito.

El Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí profirió la sentencia N° 145 el 12 de noviembre de 1993, negando las declaraciones pedidas por el actor, siendo apelada dicha sentencia dentro del término que establece la ley.

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dictó sentencia el 30 de noviembre de 1994. por medio de la cual CONFIRMA la de primera instancia. El Tribunal Superior, al hacer una evaluación de las pruebas documentales aportadas por el actor, concluye que, de acuerdo a los artículos 820 y 829 del Código Judicial, las mismas carecen de valor, tal como lo decidió el Juez de la causa. Considera también el Tribunal de segunda instancia que las pruebas aducidas por el actor fueron admitidas por el Juzgador, sin embargo las mismas no fueron evacuadas ni incorporadas al proceso ordinario.

En tal sentido, concluye el Tribunal Superior que la parte actora no ha probado los hechos en que fundamentó su demanda, por tanto no se puede acceder a las declaraciones solicitadas por el actor, a quien le cabía la comprobación de los supuestos daños y perjuicios sufridos por su mandante.

Es sabido que la responsabilidad penal por la comisión de un delito lleva, además, acarreada la responsabilidad civil correspondiente. A este específico derecho del afectado por el ilícito penal, el artículo 119, citado por el recurrente, deriva también responsabilidad civil. El mecanismo para recabar la tutela jurisdiccional encaminada a la declaración de la indemnización adeudada puede ser recabada dentro del mismo proceso penal (artículo 1989 del Código Judicial) o en proceso judicial civil independiente (artículo 1986 del Código Judicial). Consta en autos del expediente penal (aportado como prueba en el proceso civil, al cual accede la pretensión de indemnización de daños y perjuicios), que la pretensión indemnizatoria no fue reclamada en el proceso penal, mediante la vía incidental, sino, por el contrario, en proceso civil ordinario.

El proceso civil tiene, como uno de sus principios medulares el de la carga da la prueba, al punto que quien afirma algo, sin probarlo, no puede verse favorecido con una sentencia favorable a los intereses reclamados en juicio. Este principio viene recogido del artículo 773 del Código Judicial, que fue inspirado en el Código de Procedimiento Civil colombiano.

Con respecto a ello, el jurista colombiano, HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, en su obra Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II, página 163, expresa:

> "... a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal ..."

En consecuencia, la sentencia recurrida no ha violado los artículos 119 y 130 del Código Penal citados por el casacionista, ya que la acción civil derivada del delito debió probarse de acuerdo a las normas procesales civiles pertinentes.

Todo lo anterior, lleva a la Sala a establecer que no se ha dado la violación directa de las normas de derecho en el caso en estudio, por parte de la sentencia recurrida.

No habiendo por tanto el actor acreditado los perjuicios causados por el ilícito penal, este Tribunal debe aceptarlas conclusiones de la sentencia del a-quem, y proceder a no casar la sentencia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 30 de noviembre de 1994, dentro del proceso ordinario propuesto por PEDRO MORALES contra FRANKLIN MORALES MORALES.

Las obligantes costas de casación, se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00), a cargo de la parte recurrente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PEDRO PABLO CABALLERO MORENO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A ISIDRO AGUILAR BARROSO O JOSÉ ISIDORO AGUILAR BARROSO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado **JUAN B. IBARRA C.**, en su condición de apoderado especial de **PEDRO PABLO CABALLERO MORENO**, interpuso recurso de casación contra la sentencia de 17 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario declarativo que le sigue a ISIDRO AGUILAR BARROSO ó JOSÉ ISIDRO AGUILAR BARROSO.

Cumplidas las reglas del reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ninguna aprovechó.

Luego de realizar el examen de rigor del presente recurso de casación, la Sala considera que se cumple a cabalidad con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código Procesal, es decir: 1) La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley; 2) El recurso ha sido interpuesto en tiempo; 3) El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y, 4) La causal expresada es de las señaladas por la Ley.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en el proceso ordinario declarativo que PEDRO PABLO CABALLERO MORENO le sigue a ISIDRO AGUILAR BARROSO o JOSÉ ISIDRO AGUILAR BARROSO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE NICOLÁS MADRID CAMPINES A DOMINGO CORTES ESCOBAR Y/O EXPRESO PACÍFICO, S. A., ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Primer Tribunal Superior de Justicia el día 23 de noviembre de 1994, fueron interpuestos sendos recursos extraordinarios de casación en representación del señor DOMINGO CORTEZ ESCOBAR y de la Sociedad Anónima ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A., los dos demandados que resultaron condenados a pagarle al actor, señor NICOLÁS MADRID CAMPINES (la segunda hasta el límite de la cobertura de una póliza de seguros), la suma de dinero que resulte de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 983 del Código Judicial -condena en abstracto-, además de las costas en los términos en que finalmente sean tasadas.

Agotados los trámites de rigor que impone el ritualismo reservado a este recurso de carácter extraordinario, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se dispone a resolver la casación de conformidad con los términos de la admisibilidad decretada en ambos casos.

SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES.

El señor NICOLÁS MADRID CAMPINES, mediante apoderado judicial, presentó demanda ordinaria contra la Sociedad Expreso Pacífico, S. A., la Sociedad Administración de Seguros, S. A. y/o DOMINGO CORTES ESCOBAR, peticionante que se les condenase al pago de los daños y perjuicios, costas y gastos legales resultantes del accidente automovilístico ocurrido el día 7 de mayo de 1990 en la carretera Transístmica, provocado por el mencionado DOMINGO CORTEZ ESCOBAR, en su condición de conductor del vehículo portador de la matrícula N° C-833.

Surtidos los trámites del juicio ordinario, el Juez de Primera Instancia dictó sentencia condenatoria contra dos de las partes demandadas y absolvió de cargos a la Sociedad Expreso Pacífico, S. A.

Interpuesto y sustentado el correspondiente recurso de apelación, el Primer Tribunal Superior de Justicia se pronunció y desató la controversia en los términos anteriormente expresados, dando lugar a que dos de los demandados decidieran recurrir en casación ante esta Sala.

Como queda dicho, tanto DOMINGO CORTEZ ESCOBAR como ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. son los recurrentes y, como quiera que ambos han recurrido por separado, separadamente se examinarán cada uno de los recursos presentados.

EL RECURSO DE DOMINGO CORTEZ ESCOBAR.

Se trata de un recurso de casación en el fondo donde han sido invocadas dos

causales, y para examinarlas lo haremos en el orden en que fueron invocadas.

PRIMERA CAUSAL.

El recurrente denuncia la sentencia del Tribunal Superior acusándola de haber incurrido en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Sustenta su impugnación en tres motivos cuyos cargos se resumen en el valor que le otorgó el sentenciador al documento visible a foja 110 del expediente, allegado al proceso mediante la práctica de una diligencia de inspección judicial. A juicio del recurrente, el documento no satisface los requisitos legales para ser tenido como prueba en el proceso; la diligencia practicada, o sea la inspección judicial que permitió su incorporación a autos, tampoco se realizó, según él, observando los requerimientos legales; y, por último, sostiene que a esa pieza de convicción se le atribuyó la facultad de demostrar la existencia de una obligación de seguro, cuando se trata de un documento carente de los requisitos especiales que la Ley señala para el otorgamiento de una póliza (contrato) de seguro.

Se dicen infringidos los artículos 849, 820, y 770 del Código Judicial; el artículo 1013 del Código de Comercio y el artículo 1108 del Código Civil.

Lo primero que la Sala nota al examinar la causal, los motivos y las normas jurídicas que se afirman infringidas es que la parte que interpuso el recurso ataca la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia por el valor que le asignó a una prueba documental (visible fs. 110) que no tiene absolutamente nada que ver con los elementos probatorios en que se basaron, tanto el Juez de Primera Instancia y luego el Tribunal Superior, para proferir la sentencia condenatoria en contra del señor DOMINGO CORTEZ ESCOBAR. Así fue en efecto. A DOMINGO CORTEZ ESCOBAR se le ha condenado para que responda por la indemnización de daños y perjuicios a favor de NICOLÁS MADRID CAMPINES, no en razón de la existencia o validez de una póliza de seguro, sino en virtud de la responsabilidad extracontractual surgida en contra suya debido a que fue quien ocasionó, a partir de su conducta negligente, el accidente automovilístico que subsecuentemente le produjo pérdidas materiales a los bienes, así como a la salud de la parte demandante.

Nótese que, para alcanzar esa decisión, la sentencia recurrida en casación nunca llegó a ocuparse de una prueba documental que, como es natural, resulta ajena por completo a la responsabilidad extracontractual que dimana, en el caso del señor CORTEZ ESCOBAR, de los hechos en que se fundó la demanda interpuesta en su contra. Esos hechos (los que tienen que ver con su responsabilidad) se comprobaron a base de otras pruebas, cuya idoneidad y eficacia fueron valoradas por el Tribunal de Segunda instancia sin que el documento visible a fojas 110 del expediente tuviese alguna relevancia en cuanto a las razones en que se basó la resolución recurrida para condenar al casacionista. Se puede asegurar, sin riesgo de incurrir en equivocaciones, que dicho documento, con respecto al recurrente, en nada influyó en la parte dispositiva del fallo, puesto que fueron las pruebas que corren de fojas 30 a 108 y de fojas 111 a 153 del expediente, compuestas de testimonios, documentos, informes periciales, inspección judicial, etc., las que de manera contundente sirvieron al juzgador para condenar al demandado.

En consecuencia, al no prosperar el cargo formulado se desecha la causal por improcedente.

SEGUNDA CAUSAL.

Como segunda causal el recurrente invocó la infracción de las normas sustantivas de derecho por violación directa, y como motivo único expresó que la resolución ha declarado obligaciones civiles que nacen de delitos o faltas sin que se hayan aplicado previamente las disposiciones de la Ley Penal. Se señalan como infringidos los artículos 976(sic) del Código Civil y el numeral 10 del artículo 679 del Código Judicial. Por supuesto, el recurrente equivocó el artículo del Código Civil, pues no es del 976, como él indica, sino del 974 de ese cuerpo legal del que pudiera desprenderse que, en el caso de las obligaciones

surgidas de lesiones personales culposas, la ley penal debe ser aplicada previamente, es decir, antes de que se determine la responsabilidad civil que pueda caberle al demandado.

No obstante, la Sala estima pertinente referirse a esta materia, a fin de dilucidar si, en efecto, la parte actora incurrió en la pretendida Petición Antes de Tiempo, alegada como excepción por la parte demandada y que fuera fallada en contra por el Tribunal de Segunda Instancia.

Al margen de la discusión que pueda producirse en torno a si se debe o no supeditar el reconocimiento de la responsabilidad civil extracontractual de la demandada al reconocimiento previo de la responsabilidad penal que le cupiera al demandado como autor de las lesiones causadas al actor, estima la Sala que cualquier duda sobre este aspecto del proceso queda superada cuando se comprueba, mediante la copia auténtica de la sentencia dictada el 4 de julio de 1991 por el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, que el señor DOMINGO CORTEZ ESCOBAR fue condenado por la comisión del delito que se le imputó en la causa incoada en su contra, a raíz del accidente automovilístico en que resultó lesionado el señor NICOLÁS MADRID CAMPINES. Ese documento rola de fojas 150 a 153 del expediente. Desde ese punto de vista fue ajustada y conforme a derecho la denegación que se hizo de la excepción de Petición de Antes de Tiempo formulada por la demandada y, consecuentemente frente a esta realidad jurídica, la Sala de la Corte tiene que desechar la impugnación que sobre la sentencia de segunda instancia hace recaer el recurrente en su aspiración de casar la resolución atacada basándose en que no se esperó el pronunciamiento del juicio penal correspondiente. En consecuencia, al no prosperar el cargo formulado, la segunda causal tampoco está justificada.

SEGUNDO RECURSO DE CASACIÓN.

La también demandada en el proceso ordinario, ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A., interpuso el correspondiente recurso extraordinario para que se case la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, siéndole admitido éste, solamente, por una de las causales invocadas; la primera, referida a la infracción de normas sustantivas por violación directa.

Expone el casacionista los hechos o cargos que le imputa a la sentencia recurrida indicando que se ha violado el principio de que los contratos sólo producen, como regla general, efecto entre las partes que los hayan otorgado, ya que ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. no fue la parte contractual que expidió la póliza de seguro (el contrato) destinado a cubrir los riesgos que pudieran surgir por el empleo del vehículo que conducía CORTEZ ESCOBAR cuando se produjo el accidente de tránsito que diera lugar a la reclamación que se debate en este juicio. Dice el casacionista que mal puede, bajo esa circunstancia, obligarse a su representada a pagar los daños y perjuicios que pudieron haberse causado. Agrega que, a pesar de no existir el contrato de seguro que obligara a la demandada, se le ha condenado a pagar la indemnización reclamada, siendo que no se está ante una obligación surgida de la Ley, de un contrato, de un cuasi contrato, ni de actos u omisiones ilícitas en que haya intervenido cualquier género de culpa o negligencia atribuible a la parte demandada en uso del presente recurso. Reconviene a la sentencia el haber declarado la responsabilidad solidaria de ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. en función de un accidente de tránsito, alegando que la solidaridad sólo emana cuando ésta haya sido expresamente declarada por la Ley o por el contrato, y niega que en este caso ese fenómeno jurídico se haya producido.

Se indican infringidas las siguientes disposiciones legales:

El artículo 1165 del Código Civil, en donde se define en qué consiste un contrato y se le confronta con la afirmación de que se procedió a condenar a ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. sin que esa Sociedad hubiese asumido alguna responsabilidad contractual, afirmándose que nunca se obligó a dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor de la parte demandante.

El artículo 1108 del Código Civil, violado, según el casacionista, porque

los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y, si no existía ningún contrato, el Tribunal Superior erró al condenar a ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. a cumplir obligaciones basándose en un acto inexistente.

El artículo 1112 del Código Civil, que establece los requisitos de los contratos. Aquí la censura consiste en denunciar que la obligación (contrato de seguro) en verdad fue contraída con otra compañía denominada ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. y no con ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A.

El artículo 1013 del Código de Comercio, indicador de que el contrato de seguro, para su validez, debe constar por escrito, y lo constituirá la póliza de seguro. Se reitera en este aparte que la parte demandada no fue la compañía con la cual se celebró el contrato de seguro para cubrir los riesgos del automóvil que causó el accidente. Vuélvese a insistir que esa póliza fue expedida por ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. y no por ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. que es una persona jurídica distinta.

El artículo 974 del Código Civil que, como se sabe, identifica las fuentes de las obligaciones, haciendo el casacionista énfasis en que, al no haber fuente obligacional de la cual emane la responsabilidad, es injurídica la resolución atacada porque está obligando a quien no tiene responsabilidad a responder por una indemnización que no se basa en ningún acto legítimo.

El artículo 1024 del Código Civil en donde se indica que las obligaciones serán solidarias, siempre y cuando esa condición se haya hecho constar expresamente. Se dice infringida esta norma porque esa constancia no ha llegado a producirse.

POSICIÓN DE LA CORTE.

Para examinar los cargos que el recurrente formula contra la resolución atacada, precisa la Sala comenzar a considerar el medio invocado, a fin de reunir los elementos que le permitan arribar a una decisión ajustada a derecho.

El casacionista ha fundamentado su petición en la causal de fondo identificada como infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa. Remontándonos a los motivos que sustentan la causal, puede la Sala colegir que la esencia del cuestionamiento se hace radicar en la inexistencia o ausencia de un contrato (póliza de seguro) o de cualquier otro vínculo jurídico que pudiese ligar a la empresa demandada con los derechos y obligaciones surgidos en relación a los hechos que sirvieron de fundamento a las reclamaciones del demandante, es decir, al accidente de tránsito que produjo los daños cuya reparación se demanda.

En este orden de ideas, la Sala tiene que referirse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia cuestionada mediante este recurso en aquella parte de la misma en que se analiza el fenómeno del vínculo contractual existente entre el demandante y la demandada. Conviene por eso reproducir exactamente lo que al respecto se dejó establecido.

> "Por otro lado, el apoderado judicial de los demandados, al momento de sustentar su recurso de apelación sostuvo que "el demandante inició acción legal contra Administración de Seguros, S. A., pero no ha demostrado que ésta sociedad haya contratado el seguro que ampare al vehículo del accidente reclamado", razón por la que su mandante no debe ser condenada.
>
> Al referirse a los hechos sobre los cuales fundamenta su argumento, el Licenciado Stevens sostiene que:
>
> "ASSA Compañía de Seguros, S. A." es una persona jurídica creada bajo la legislación panameña e inscrita en la ficha 53659, rollo 3724 e imagen 102 del Registro de personas mercantil del Registro Público, y es distinta a la denominada "ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A.", inscrita en el tomo 817, folio 435, asiento 134379 de las

personas mercantil del Registro Público.

De la comparación de las certificaciones expedidas por el Registro Público, que constan en fojas 6 y 211, se colige que, en efecto, se trata de dos personas jurídicas distintas.

Como mencionáramos en líneas anteriores consta en foja 110 del expediente una fotocopia de la póliza N° B15962B. Dicha póliza representa el contrato de seguros de automóvil celebrado entre la sociedad Administración de Seguros, S. A. y la empresa Expreso Pacífico, S. A. que comprende el vehículo que conducía el señor Cortez Escobar al momento de ocurrido el accidente automovilístico que ocasionó la acción incoada por el demandante.

En efecto, dicho documento póliza compromete a la empresa Administración de Seguros, S. A. a pagar la indemnización que resulte de alguno de los siniestros protegidos por el contrato de seguros celebrado hasta el límite de su cobertura".

Es evidente que fueron esas consideraciones formuladas por el Tribunal de Segunda Instancia las que sirvieron de soporte directo a la parte dispositiva del fallo atacado en donde se dicta una condena contra ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A., obligándola a pagar al demandante (hasta el límite de la cobertura de la póliza) la suma de dinero que resulte de la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 983 del Código Judicial.

Lo anterior ilustra a la Sala en el sentido de que la sentencia censurada partió y basó la decisión que se le cuestiona en la existencia y en la realidad, propiamente dicha, que se le confiere a un contrato de seguro, el cual en opinión del sentenciador se celebró entre el asegurado y el asegurador (en este caso Administración de Seguros, S. A.) cumpliendo con los requisitos que lo potenciaban para surtir a plenitud todos sus efectos. Según la sentencia, como puede ser observado, ese contrato está expresado o se hizo constar en un documento: el visible a fojas 110 del expediente.

Ahora bien, ha sido en contra de esa elaboración conceptual (que, por supuesto, incide notablemente en lo dispositivo de la sentencia recurrida) que el casacionista formula su impugnación a través de la única causal que le fuera admitida por esta Sala Primera de la Corte, ya que la segunda por él intentada (error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba) le fue rechazada, estimándose que los motivos que le servían de sustentación a esta última **"no son congruentes con la misma (causal)"**. Para la Sala, en este punto estriba la cuestión medular al momento de determinar la procedencia o no procedencia del recurso interpuesto con el propósito de impugnar la sentencia dictada en segunda instancia. El casacionista pretende por vía de la causal fundada en la violación directa, atacar anular y dejar sin efectos la operación probatoria elaborada por el fallo impugnado. La jurisprudencia de la Corte ha mantenido sobre el particular que la violación directa no es el instrumento idóneo para alcanzar esos propósitos. El autor Jorge Fábrega, en su obra Casación, pág. 137, observa lo siguiente:

> **"Cada vez que se aspira a impugnar un fallo o que se está en desacuerdo con la actitud que asume el fallo respecto a los hechos de la controversia, sólo se puede lograr a través de una causal probatoria. No es viable -al invocar uno de los tres primeros conceptos del artículo 1154- partir de hechos, contrarios a los reconocidos en el fallo de instancia; ..."**

Esto quiere decir, en otras palabras, que para poder impugnar con posibilidades de éxito los hechos en que se fundó la sentencia, al acreditar y otorgarle validez en los términos en que lo hizo al documento mencionado (fs. 110 del expediente), el casacionista tenía que haber utilizado una de las causales probatorias, algo que como puede ser observado no ha ocurrido en este caso.

El asunto en debate atañe a la cuestión del valor que le fue atribuido a

un instrumento probatorio (documento de fojas 110), al cual el juzgador, tanto en primera como en segunda instancia, le confirió la jerarquía de un contrato del que se derivaban precisas y comprometedoras obligaciones para la parte demandada. Desde ese punto de vista ese instrumento es una prueba que, a juicio de los juzgadores de instancia, era eficaz, desde el punto de vista procesal, para determinar el grado de responsabilidad que a ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. le cabe en este caso. Subsecuentemente, esa certidumbre probatoria asignada al documento sólo podría ser destruida mediante la utilización de una de las causales probatorias y no podría serlo a través de la causal empleada por el casacionista (violación directa), pues por ese camino el objetivo se hace inalcanzable.

Si nos atenemos a los motivos y a las normas de derecho que se denuncian como infringidas no se podría acceder a la pretensión del casacionista. El recurrente invariablemente hace referencia, en todos los apartados de la causal invocada, a la ausencia, a la falta o a la inexistencia (como quiera decirse) de un contrato vinculante, cuyos efectos (precisamente por no existir el contrato) no pueden alcanzar a la parte demandada, en el cual, además, no concurren los requisitos para su formación y donde no se han observado las formalidades que la ley exige para su validez. Sin embargo, no se puede pasar por alto que esos ataques tendrían sentido y serían efectivos si la causal empleada pudiera ser enrumbada hacia la determinación del valor o la eficacia de las pruebas que obran en el proceso, en especial hacia todos o alguno de los medios de prueba que hubiesen podido servir de base al juzgador para establecer las obligaciones y derechos surgidos para las partes. Hay que recordar que la sentencia no ha sido impugnada por haberse apoyado en una prueba incorrectamente apreciada, sino porque su parte dispositiva supuestamente es el producto de la violación directa de las normas sustantivas de derecho. Esta visión de la Sala se ve reforzada al analizar el alegato presentado por el casacionista, partes del cual nos permitiremos transcribir:

"LA ESENCIA DE NUESTRA IMPUGNACIÓN

La sentencia atacada debe invalidarse por las razones que a continuación sintetizamos:

a) Dicha decisión pretende, erróneamente, obligar a ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. a asumir una prestación contractual inexistente, ya que ésta jamás expidió una póliza de seguros que amparara los riesgos que le reclama el demandante.

b) El documento al que el Tribunal de Segunda Instancia atribuye la virtualidad de obligar a ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. no cumple con ninguno de los requisitos, que, conforme a la ley sustancial, configuran una póliza de seguros.
...
Analizaremos cada uno de estos extremos por separado.

I. INEXISTENCIA DE PÓLIZA EXPEDIDA POR NUESTRA REPRESENTADA.

La primera razón que justifica la rescisión del fallo atacado radica en que no existe en el expediente una póliza de seguros emitida por la sociedad ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. que la obligue a responder de los reclamos instaurados por el demandante. ...

De manera que es indudable que quien en todo caso expidió la póliza de seguro que aparece a foja 109 del expediente fue una empresa distinta de nuestra representada. ...

El documento que reposa a foja 110 del expediente no constituye una póliza de seguro ya que no cumple con ninguno de los requisitos enunciados en el artículo 1016 del Código de Comercio. ..." (Subraya la Sala).

Todos esos argumentos del recurrente giran como tiene que ser en torno al elemento probatorio. Frente a esa realidad la Sala tiene que reiterar su opinión de que la causal utilizada para impugnar la sentencia no era la que correspondía para lograr tales efectos. Esta misma opinión fue la que sostuvo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 14 de octubre de 1992:

> "El artículo 1154 del Código Judicial establece que cuando estamos frente a la causal de violación directa no puede invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba. De aquí que no le es permitido al casacionista sostener que hay violación directa de una norma porque el tribunal en su decisión comete una apreciación equivocada de los hechos que son parte fundamental de la demanda".

La demanda interpuesta en contra de ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. en el hecho Sexto dice lo siguiente:

> "SEXTO: Que el señor DOMINGO CORTEZ ESCOBAR al momento del accidente tantas veces mencionado era empleado de la empresa EXPRESO PACÍFICO, S. A., y el camión objeto de la colisión de propiedad de ésta empresa y el mismo se encontraba realizando labores para tal corporación. Por otra parte el camión colisionante con placa N° 3C-833 de propiedad de la demandada EXPRESO PACÍFICO, S. A., no se encontraba asegurado, mediante pólizas de seguros para tales eventualidades que compró a través de la empresa ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. (ASSA) la cual reconoce también la culpabilidad de los otros demandados que por la vinculación contractual con ellos, la convierten en responsable solidaria; además tras ingentes cobros extrajudiciales se ha negado a reconocer los riesgos de pago que debe efectuar al demandante, ofreciendo una ridícula suma de B/.5,000.00 (CINCO MIL BALBOAS), que no cubren los daños y perjuicios ocasionados a él." (Subraya la Sala).

La sentencia de segunda instancia decidió ese hecho sobre la base de la prueba documental que consta a fojas 110 y esa decisión, a juicio de la Sala, sólo podía ser desvirtuada en casación utilizando una de las causales probatorias; en este caso particular la de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

La causal utilizada (que le fuera admitida) por el casacionista (violación directa) lo ha imposibilitado de atacar el documento (un contrato de seguro según la sentencia impugnada) de donde en segunda instancia se derivó las responsabilidades que le caben, a ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. Con independencia de cualquier otra consideración, ese documento, al cual se le confirió la virtualidad de un contrato de seguro celebrado por la demandada, se convirtió en el elemento medular que guió al Tribunal Superior para dictar la sentencia en el sentido en que esta fuere proferida. Que ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A. fuese o no fuese parte de ese contrato es una materia que no cae dentro de la esfera de la violación directa de las normas de derecho porque ese aspecto no se encuentra ligado a la materia probatoria y ninguna causal de esa naturaleza se utilizó, o, para ser más precisos, llegó a prosperar en este recurso extraordinario. Nótese, además, que el casacionista al señalar las normas de derecho que se dicen infringidas por la resolución del Tribunal Superior no hace mención de los artículos 1132 y ss. del Código Civil sobre la interpretación de los contratos que serían los que se tendría que invocar en correspondencia con la causal utilizada (violación directa), en caso de que la decisión o pronunciamiento de esta Sala tuviese que recaer en aspectos no vinculados a las normas probatorias.

Acerca del artículo 1024 del Código Civil denunciado finalmente como violado por la sentencia, cuando se sostiene que la solidaridad sólo tiene lugar cuando la obligación expresamente así lo determina, la Sala se pronuncia por la desestimación del cargo, pues en este caso se deduce, sin mayores esfuerzos, que la responsabilidad que se extendió hacia ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A., obedece a un contrato de seguro que ofrecía cobertura a los riesgos que pudiesen ser causados por el empleo del bien asegurado (vehículo a motor con placa N° 3C.

833). Es lógico y normal que si la sentencia recurrida reconoció la existencia del contrato de seguro, los efectos del mismo, debido a la propia naturaleza del contrato, se tienen que reflejar en el tercero que sufre las consecuencias del riesgo o del siniestro que esa clase de contratos ampara.

El cargo por tanto, se desecha.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia de fecha 23 de noviembre de 1994, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que NICOLÁS MADRID CAMPINES le sigue a DOMINGO CORTEZ ESCOBAR y/o EXPRESO PACÍFICO, S. A. y ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) a cargo de cada una de las partes recurrentes.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

EUGENE MC GRATH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MICHAEL ERHART A., HERMAN ERHART Y MILDRED R. JOYCE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado GUSTAVO ADOLFO RUSSO ROS, en su condición de apoderado especial del señor EUGENE C. Mc GRATH, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 4 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en el proceso ordinario propuesto por EUGENE C. Mc. GRATH en contra de HERMAN ERHART y MILDRED R. JOYCE.

Fijado en término el negocio para alegar acerca de la admisibilidad, solamente el opositor presentó escrito en donde solicitó no admita la impugnación a la sentencia. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

El recurso se presentó en la forma y se alegó una causal.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo se aparta totalmente de la técnica exigida en este recurso extraordinario de casación.

En cuanto a la causal invocada ha sido enunciada erróneamente, siendo la forma correcta: "Por haberse omitido trámite o diligencia considerada esencial por la Ley cuya omisión causa nulidad". Está consagrada en el numeral 1 del artículo 1155 del Código Judicial.

Para fundamentar la causal, en la forma, en el primer motivo el casacionista señala una prueba que obra a fojas 65 de los autos y que, según el recurrente,la firma no fue reconocida "por el Tribunal Superior ni por el inferior", con respecto a esta apreciación observa la Sala que esta prueba fue

admitida por el Tribunal mediante auto N° 663 de 11 de junio de 1993 (f. 80).

Por otra parte se puede apreciar que el recurrente en el motivo segundo reconoce que no hubo omisión por parte del Tribunal en los trámites inherentes a este proceso, ya que indica que la prueba antes referida o mencionada, el tribunal no la apreció como tal, porque no cumplía con las formalidades de ley, por tanto, no puede prosperar esta causal.

Es obvio que no existe congruencia entre los motivos alegados y la causal invocada.

En consecuencia, se dan los presupuestos que señala el artículo 1167 del Código de Procedimiento Civil, para declarar la inadmisibilidad del recurso, el cual resulta ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en la forma, propuesto por EUGENE MC. GRATH contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 4 de diciembre de 1995.

Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de Casación Civil de la Corte, cumplidos los trámites de la sustanciación dispuestos por la ley ritual, declaró admisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por el **BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.** contra la sentencia de 29 de diciembre de 1994, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que el BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. le sigue a BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.

El negocio se encuentra, por tanto, en estado de decidir de conformidad con las pautas establecidas por el artículo 1177 del Código Judicial; y a ello se procede previas las consideraciones que seguidamente se adelantan:

SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES

Los autos de la presente litis ilustran que el **BANCO EXTERIOR, DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A.** (en adelante **"EXTEBANDES"**) interpuso demanda de mayor cuantía contra la persona jurídica denominada **BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.** (en adelante BANCO CAFETERO), el 22 de noviembre de 1991 ante el Juzgado de Circuito, a fin que declarara:

1) Que el Banco Cafetero ordenó a EXTEBANDES el pago de CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES (US $140,000.00) a favor de RIBIAK, S. A.;
2) Que BANCO CAFETERO está obligado a pagar a EXTEBANDES dicha suma de US $140,000.00 más intereses, costas y gastos del proceso; y,

3) Que el BANCO CAFETERO ha incurrido en mora desde noviembre de 1986.

Estas pretensiones se fundamentan en una operación bancaria que, según el demandante, "constituye un mandato irrevocable que genera derechos y obligaciones para las partes en el contrato". Esta operación consiste en la confirmación que hizo la Gerencia del BANCO CAFETERO, mediante telex que expidiera el 26 de noviembre de 1986, de "haber transferido por conducto de BANKERS BANK-NEW YORK a su cuenta con el BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. New York la suma de CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES (US $140,000.00) para el crédito final de la cuenta N° 3030.429Z. RIBIAK, S. A. Madrid-España." (hecho sexto). En base a esto, que califica el actor como "orden de pago" o "mandato", el 28 de noviembre de 1986 EXTEBANDES procedió a abonar la suma indicada a la cuenta de RIBIAK. (Demanda fs. 1-6).

Por su parte el demandado, BANCO CAFETERO, contestó la demanda (fs. 42 a 45) negando la mayoría de los hechos, entre éstos el sexto, pero comentando al respecto que "El telex en referencia no contenía ninguna orden de pago, ya que era sólo un aviso de transferencia. Sin embargo dicha operación fue anulada por el ordenante de conformidad con las instrucciones dadas al Banco demandado". De las pruebas objeta las 7 y 8 señalando que son documentos a los cuales el Banco demandado no ha tenido acceso.

Con el libelo de contestación de demanda se introducen dos Incidentes: Excepción de Inexistencia de Responsabilidad (fs. 57-58) y **Excepción de Prescripción** de la Acción (fs. 65-66); este último, para el supuesto que se le atribuyera alguna responsabilidad, por haber transcurrido más de cinco años desde que se produjeron los hechos en que se basan las pretensiones de la sociedad extranjera demandante, prescripción que se da a partir de un año en estos casos, "por no existir nexo mercantil entre el Banco demandante y el Banco demandado en relación con el pago efectuado por el demandante a favor de un tercero sin las instrucciones pertinentes de parte de nuestro mandante".

El Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, al conocer el caso en primera instancia, mediante sentencia N° 57 de 11 de junio de 1993, consultable de fojas 154 a 181, "DECLARA:

PRIMERO: Que el BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A., ordenó a BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. el pago de la suma de CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES (US $140,000.00), moneda legal de los Estados Unidos de Norteamérica a favor de RIBIAK, S. A.

SEGUNDO: Que el BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A. está obligado a pagar a BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. la suma de CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES (US $140,000.00), más los intereses contados desde el 28 de noviembre de 1986, costas y gastos del proceso.

TERCERO: Que el BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A. ha incurrido en mora desde el 28 de noviembre de 1986.

FIJA las COSTAS que el contendiente perdidoso deberá satisfacer, de conformidad con la declaración segunda formulada en esta sentencia y, en lo que respecta al trabajo en Derecho, en la suma de VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.20,250.00)

DECLARA NO PROBADAS las excepciones de inexistencia de responsabilidad y de prescripción alegadas en este proceso.

Liquide el Secretario los gastos de su cuido. ..."

Del fallo de primera instancia, parcialmente transcrito, apeló el Banco demandado a través de su apoderado judicial, quien sustentó el recurso en escrito que consta de fojas 194 a 205, por lo que el negocio ingresó al tribunal de segunda instancia para resolver.

El Primer Tribunal Superior de Justicia, por su parte, en la sentencia

calendada 29 de diciembre de 1994 "CONFIRMA, la sentencia N° 57 de fecha 11 de junio de 1993, como el auto N° 1392 de fecha 17 de junio de 1993, dictados por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Las costas de segunda instancia, por razón de los recursos de apelación, se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00)". (Fs. 251-274 vta.).

Es, pues, contra esta última resolución que la parte demandante ha interpuesto el recurso de casación en el fondo, que conoce la Sala de la Corte por haberlo declarado admisible.

EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

En la sentencia que decide la alzada el tribunal Superior confirma la decisión que había dictado el juzgado inferior, para lo cual reitera y reafirma los razonamientos del mismo.

En primer término la resolución hace un recuento de los antecedentes del negocio, enfatizando desde ese momento su apreciación del caudal probatorio, al expresar que "se han de tener como elementos de convicción aportados por la parte actora en el primer nivel jurisdiccional" los documentos públicos y privados consultables de fojas 7 a 36 y de fojas 72 a 78 y la declaración de parte a fojas 85 a 86 y 88 a 95. (Ver fs. 255 a 256).

Así, destaca que la sentencia del a-quo, en virtud de los elementos aportados por la actora "(pruebas que fueron descritas por esta Superioridad)", resolvió que se habían probado en forma fehaciente los hechos de la demanda, dando cumplimiento al onus probandi que manda el artículo 773 del Código Judicial.

En ese orden de ideas la sentencia de segunda instancia, recurrida en casación, expone los fundamentos del fallador de primera instancia, como se aprecia de fojas 257 a 270 (9-22), para concluir sosteniendo:

> "... Entrando ahora sí en la decisión de fondo que conlleva la sentencia apelada, esta Superioridad ha de coincidir con el Juez de la instancia inferior, en el sentido de que, el punto neurálgico sobre el cual giraba la controversia planteada por las partes, lo era el carácter que en el campo jurídico se le debería conceder al telex que le fuera remitido por la gerencia financiera del banco demandado al banco demandante el día 26 de noviembre del año 1986, pues, en el libelo de demanda la parte actora dejó establecido, como uno de los hechos básicos en que hacía descansar su pretensión, que el telex en cuestión "constituye un mandato irrevocable que genera derechos y obligaciones para las partes en el contrato". Aseveración ésta que fue rechazada por la apoderada legal del BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. en el escrito de contestación de demanda, y para quien, el telex de fojas 28 "era sólo un aviso de transferencia".
>
> Ahora bien, este Tribunal Ad-quem no sólo se manifiesta conforme con el Juez A-quo en la identificación del tema a decidir en la encuesta bajo examen, sino que además, ha de avalar la decisión de primer grado al considerar que la relación jurídica que se originó entre las partes por razón o con motivo de telex de fojas 28 se adecua perfectamente al concepto o definición que del contrato del mandato da el Código Civil panameño en su artículo 1400 (ver artículo 5 del Código de Comercio). No se trata, entonces, como lo alega la apoderada legal del banco demandado en el escrito de contestación de demanda y lo recalca ahora en el escrito de sustentación del recurso de apelación impetrado por ella, de un simple "aviso informativo de transferencia bancaria", sino que el telex cuestionado realmente, como lo anota el Juez A-quo, se encuentra revestido de "precisas instrucciones dirigidas a obtener, del destinatario, la realización de ciertas operaciones de índole bancario por su puesto",

instrucciones éstas que, como también lo deja señalado el Juez del conocimiento, han de ser contenidas, como "encargo de un mandato mercantil".

Sobre el tema de la naturaleza jurídica del telex de fojas 28, debe esta Superioridad apuntar por último, en apoyo a la tesis del mandato mercantil del cual se encuentra revestido el mismo, que en el campo doctrinal autores colombianos especialistas en la materia bancaria, como lo son SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO e HILDEBRANDO LEAL PÉREZ, coinciden en señalar que tal contrato mercantil tiene aplicación en algunas operaciones bancarias, entre las que mencionan las transferencias bancarias, de la que precisamente trata el controvertido telex de fojas 28 (ver obras de los citados autores denominadas ambas "CONTRATOS BANCARIOS", que coincidencialmente tocan el tema de las transferencias bancarias en las páginas 559-560 de sus respectivas obras jurídicas).

"Prestando ahora atención al reclamo de los CIENTO CUARENTA MIL BALBOAS (B/.140,000.00) que demanda la parte actora, el Tribunal advierte que el Juez A-quo al acceder al reconocimiento de esa suma en favor del BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. no hizo más que ajustarse a las normas jurídicas que gobiernan el contrato de mandato, particularmente el artículo 1419 del Código Civil patrio, anteriormente transcrito, pues consta en el expediente a fojas 29, 30 y 78, prueba documental de carácter privado que da fe que el BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. en estricto apego al encargo que le fuera transmitido por el Banco demandado en el telex de fojas 28, depositó en la cuenta de la Compañía Ribiak, S. A. la suma de B/.140,000.00 sin que se advierta en autos elemento de juicio alguno que permita establecer el pago o reembolso de tal suma de dinero de parte del banco demandado, ni tampoco este último, como lo apunta la apoderada legal de la parte actora en el escrito de oposición al recurso de apelación que se examina "nunca revocó las instrucciones dadas al BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. Madrid-España, antes de devolver el dinero a su cliente CAMGEN, S. A."

"El incumplimiento del contrato de mandato por parte del banco demandado hace que este último se vea compelido, en base a la norma jurídica arriba citada, a reembolsarle al BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. la suma de B/.140,000.00, motivo por el cual se justificaba plenamente, no sólo la condena en ese sentido de parte del Juez A-quo, sino que, además, ello constituía razón suficiente para que el Juez del grado inferior desestimara, como efectivamente lo hizo, la excepción de "inexistencia de responsabilidad" promovida por la apoderada legal del BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.

En cuanto al insistente argumento del apelante de que el telex tantas veces mencionado no está testado, esta Superioridad lo descarta por cuanto el mismo hubiera tenido alguna importancia si el banco demandado en algún momento hubiera negado la autoría del referido telex, pero como ha quedado establecido, el BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. ha aceptado a través de todo el proceso que envió el telex.

Del mismo modo que esta Superioridad avala la condena de que fue objeto el BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. por el Juez del conocimiento y considera correcta la decisión del Juzgador primario al declarar como no probada la excepción de que se hizo mérito en el párrafo anterior, debe igualmente el Tribunal prestar su aprobación a la sentencia apelada al desestimar la excepción de prescripción que fuera promovida también por la parte demandada, ya que, quedando claramente establecido que, por razón del telex de fojas 28, se dio entre las partes de este proceso una relación contractual de mandato mercantil, la norma aplicable para efectos de fijar el término de prescripción de la acción en el caso que nos ocupa, lo es, el

artículo 1650 del Código de Comercio, tal cual lo deja señalado el Juez de la causa y no el artículo 1706 del Código Civil, que regula lo concerniente a la prescripción en materia de responsabilidad extracontractual, norma jurídica última, que aparece invocada como fundamento de derecho por la apoderada legal de la excepcionante. Y siendo que, el banco demandante, como bien lo deja anotado el Juez A-quo, antes de que venciera el término de los cinco años consignados en el citado artículo 1650 del Código de Comercio, publicó en un diario de circulación nacional la certificación correspondiente expedida por la Secretaría de Juzgado de origen que daba cuenta de la presentación de esta demanda ordinaria declarativa, tal publicación produjo el efecto de interrumpir el "lapso prescriptivo", al decir de lo dispuesto en el artículo 658 del Código Judicial. ..." (Fs. 270-274).

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En el recurso, el recurrente se fundamenta en las siguientes causales:

"A) Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo".

"B) Infracción de las normas sustantivas de derecho por indebida aplicación de las normas sustantivas, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo".

La primera causal aparece fundamentada en cinco motivos a saber:

"1) El Juez de la causa, en su sentencia del 11 de junio de 1993, accedió a las declaraciones impetradas por la parte demandante contra BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A., y negó por auto número 1392 del 17 de junio de 1993, la reforma de la sentencia antes aludida por el monto de la condena en costas; decisiones estas que fueron confirmadas, por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en sentencia del 29 de diciembre de 1994, al darle el valor de plena prueba a documentos privados objetados, producidos por la propia demandante sin la intervención del Banco demandado y aportadas sin los procedimientos judiciales válidos y sin las autenticaciones extranjeras y nacionales correspondientes. (Fojas 26, 27, 29, 30, 31, 33, 76, 78).

2) La decisión de Segunda Instancia, valoró erróneamente, al darle valor de plena prueba, a los documentos de carácter privado aportados a los autos y los cuales no dan cuenta de que, en la fecha de la demanda o en cualesquiera otra, la sociedad RIBIAK, S. A., le adeuda al Banco demandante la suma de B/.140,000.00, vinculadas al telex del 26 de noviembre de 1986; ya que, los documentos de fojas 29, 30 y 78 carecen de todo valor jurídico por haber sido objetados unos y no estar autenticadas sus firmas otros por las autoridades competentes extranjeras y nacionales correspondientes y el de fojas 78 por emanar del propio Banco demandante y referirse a una operación ocurrida en el año de 1986; pero sin que se indique que dicha suma no ha sido pagada por RIBIAK, S. A., a la fecha de expedición de dichos documentos de certificación de una supuesta deuda o la de la presentación de la presente demanda.

3) La decisión de Segunda Instancia no valoró, correctamente los documentos privados en que se dice que RIBIAK, S. A., no le ha pagado la suma acreditada a su cuenta, en virtud del telex del 26 de noviembre de 1986; ya que, los documentos privados aportados a los autos no tienen el carácter de auténticos y tampoco se conoce su origen al no estar autenticados por las autoridades del país donde provienen (Reino de España) y por las autoridades nacionales (el Cónsul panameño acreditado en la ciudad del país de donde emanan los

documentos privados y por la Sección correspondiente de la Cancillería de la República).

4) La decisión de Segunda Instancia, no valoró correctamente los documentos privados (fojas 29, 30 y 78); ya que, de los mismos no emana suma alguna adeudada por RIBIAK, S. A. al Banco demandante y que se haya acreditado como consecuencia del telex informativo remitido por el Banco demandado al demandante el 26 de noviembre de 1986.

5) Los errores valorativos cometidos por el Tribunal de la alzada, en la sentencia atacada por el presente recurso de casación, al analizar el cúmulo probatorio privado antes aludido y aportado por el Banco demandante, en la presente encuesta de naturaleza mercantil, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuestionado por este medio extraordinario de impugnación."

La Segunda causal, "Infracción de las normas sustantivas de derecho por indebida aplicación de las normas sustantivas de derecho, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo", aparece fundamentada en los siguientes motivos:

"El Juez de la causa, en su sentencia de 11 de junio de 1993, accedió a las declaraciones impetradas por la parte demandante contra el BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A., y negó por auto número 1392 del 17 de junio de 1993, la reforma de la sentencia antes aludida por el monto de la condena en costas; decisiones estas que fueron confirmadas, por el Primer Tribunal Superior de Justicia al aplicar indebidamente las normas sustantivas que rigen el mandato mercantil de las relaciones entre bancos no corresponsales en relación con una transferencia bancaria electrónica notificada por un telex informativo y sin estar testado, esto es, sin la clave y sin la existencia de un contrato de corresponsalía acordado previamente.

2) La decisión de Segunda Instancia, al aplicar indebidamente las normas sustantivas que regulan el mandato mercantil, ignora las prácticas bancarias y basadas en acuerdos interbancarios que se basan en el documento 400 de la Cámara de Comercio Internacional; ya que, las relaciones de mandato se dan es entre el cliente y el Banco ordenante y no entre este y el banco corresponsal.

3) La decisión de Segunda Instancia aplica indebidamente a una relación jurídica innominada en nuestro derecho positivo las reglas del mandato mercantil y en desconocimiento de los acuerdos de corresponsalía que deben regir, según las prácticas bancarias, las transferencias de dinero electrónicas de carácter internacional.

4) Las indebida aplicación de las reglas del mandato mercantil a las transferencias notificadas electrónicamente a nivel internacional, en desconocimiento de las prácticas bancarias, cometida por el Tribunal de la alzada, en la sentencia atacada por el presente recurso de casación, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuestionado por este medio extraordinario de impugnación".

En este sentido, la institución bancaria recurrente acusa a la sentencia impugnada de infringir en forma directa los artículos 769, 773, 843, 848, 849 y 864 del Código Judicial; el artículo 244, numerales 2, 4, 5 y 8 del Código de Comercio; y los artículos 1100, 1102 y 976 del Código Civil, en cuanto a la primera causal; y en cuanto a la segunda causal invocada, se refiere a los artículos 1400 y 1419 del Código Civil; y, 590 del Código de Comercio.

EXAMEN DE LAS CAUSALES Y
LOS MOTIVOS QUE LAS FUNDAMENTAN

Expuesta la reseña que antecede, como marco de referencia de la casación interpuesta contra la impugnada sentencia, veamos si las causales de fondo invocadas y los motivos que las sustentan están justificadas, a la luz de los cargos de injuricidad formulados en los transcritos motivos.

PRIMERA CAUSAL:

Al examinar los cinco motivos expresados como fundamento de la causal de Error de Derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se observa que, en síntesis, todos se refieren al mismo cargo, consistente en la incorrecta valoración, plasmada en la sentencia de segunda instancia, de los documentos privados visibles a fojas 26, 27, 29, 30, 31, 33, 76 y 78, a partir de que algunos de ellos fueron producidos por la parte demandante sin estar presente el Banco demandado, y otros fueron aportados sin los procedimientos judiciales válidos, o sea, sin estar autenticados por las autoridades extranjeras y nacionales correspondientes. Sin embargo, el énfasis recae sobre los documentos visibles a fojas 29, 30 y 78, a los que se les dio valor de plena prueba a pesar de los defectos aludidos y luego de ser objetados (los dos primeros) en la contestación de la demanda.

Por los cargos señalados se citan como violados los artículos 769, 773, 843 numeral 3, 848 inciso primero, 849 y 864 del Código Judicial. Como normas sustantivas infringidas, los artículos 244 numerales 2, 4, 5 y 8 del Código de Comercio que se refiere a cómo se prueban las obligaciones mercantiles, el artículo 1100 del Código Civil que impone el probar las obligaciones y su extinción a quien lo alega; y el 976 también del Código Civil que consagra la regla de la fuerza de ley entre las partes que tienen las obligaciones que nacen de contratos y cuyo cumplimiento debe darse al tenor de las mismas.

La Sala no entrará al análisis de las dos primeras normas procesales -artículos 769 y 773 del Código Judicial- puesto que no son congruentes con la causal invocada. La primera establece los diferentes medios de prueba y la segunda alude a lo que se debe probar. Por tanto, sólo resultan pertinentes las disposiciones que establecen valor a las pruebas, debido a que esta causal de error de derecho en la apreciación de la prueba supone que el juzgador meritó erróneamente una prueba frente a la disposición legal que la valora.

Se alega que ha sido violado el artículo 843, numeral 3 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público. El documento privado es auténtico en los siguientes casos:
> ...
> 3. Si habiéndose aportado al proceso no hubiera sido tachado u objetado en los términos del artículo 848. ...".

Sostiene la censura que esta norma fue violada directamente por el Tribunal de segunda instancia, al otorgársele valor de plena prueba a los documentos privados visibles a fojas 29 y 30, a pesar de que fueron objetados cuando se presentaron con la demanda, por ser documentos internos del Banco demandante y no contar con las autenticaciones de autoridades españolas y panameñas. Además, agrega que el de foja 30 es una simple fotocopia de un estado de cuenta de RIBIAK, S. A., que carece de valor al no estar autenticado por el custodio de su original.

A juicio de la Sala, sobre este aspecto le asiste razón al casacionista pues se ha podido comprobar que dichos documentos privados son los enumerados 7) y 8) en la demanda (fs. 5), que fueron los únicos que objetó el demandante al contestar la misma (fs. 45), que en efecto no están autenticados y son: una copia de un aviso de abono en moneda extranjera a favor de RIBIAK expedido en Madrid, el 28 de noviembre de 1986 por EXTEBANDES (fs. 29); y fotocopia de la cuenta corriente N° 30-30429Z de RIBIAK, S. A.

Ciertamente, la resolución impugnada en casación les atribuyó a las pruebas

documentales acabadas de citar un valor que no era procedente, pues no cumplían con una serie de requerimientos legales que se dejan anotados, por lo que el cargo, en relación a la vulneración de esta norma, está justificado.

La violación que se endilga a la sentencia respecto a los artículos 848 (párrafo primero) y 849 del Código Judicial ambos -referentes al valor del documento privado como prueba en el proceso, cuando es reconocido por la parte a quien se le atribuye o por quien lo suscribió- estima la Sala que no es procedente y el concepto de la infracción que desarrolla el recurrente en torno al contenido de estas normas y las aludidas pruebas resulta confuso. En tal sentido señala que el "Tribunal no se percata de que los documentos privados analizados allegados a la encuesta no están firmados por los responsables del Banco demandado", pero agrega que "dichos documentos son de carácter interno del Banco demandante ...". En otras palabras, no se está refiriendo al supuesto que describen las normas, por lo que la condición que ella impone no coincide con lo que alega la censura sobre los referidos documentos, que consiste en la falta de reconocimiento por el Banco demandado, cuando es obvio que dicha parte no los suscribió ni les son tampoco atribuidos.

Seguidamente, la vulneración del artículo 864 ibídem sí es factible en relación a las pruebas que señalan los cargos determinados. Veamos el contenido de la norma:

> Artículo 864: Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en país extranjero serán estimados como prueba, según los casos si se presentaren autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante ..."

En relación con la norma transcrita, se dice infringida por la sentencia acusada, ya que, a pesar de lo preceptuado, valoró documentos privados provenientes del extranjero sin las correspondiente autenticaciones de las autoridades españolas y panameñas, por lo que no podían probar "-como lo señala el fallo atacado- la deuda a cargo de RIBIAK, S. A. y a favor del Banco demandante ...". Así, sostiene el recurrente, esos documentos, como los que corren a fojas 29 y 30, "debieron descartarse y no tomarse en cuenta para justificar la condena proferida en contra del Banco demandado".

Por lo que hace a la violación de esta norma, relativa a las formalidades de los documentos extranjeros para ser considerados como prueba en el proceso, esta Corporación coincide con lo manifestado por el casacionista. La valoración de este tipo de documentos sin considerar la exigencia legal de su autenticación por el funcionario diplomático o consular correspondiente no fue la más afortunada.

La prueba visible a fojas 78, que también es un documento privado extranjero, sí cumple con la formalidad referida en párrafos anteriores, sin embargo el recurrente alega que fue producida por el propio Banco demandante, sin intervención del Banco demandado, a pesar de lo cual la sentencia la valoró en relación con los documentos de fojas 29 y 30, otorgándole el mérito de demostrar que el depósito se hizo en la cuenta de RIBIAK, S. A. en operación realizada en 1986 a raíz de la orden de pago recibida del demandado Banco Cafetero, según el documento número 00906.

Se aprecia que, en efecto, la parte inicial de dicho documento fue hecha a nombre del demandante, Banco Exterior de los Andes y de España por sus apoderados (cuyas firmas no fueron autenticadas por el agente diplomático) quienes allí certifican que el 28 de noviembre de 1986 acreditaron a la cuenta 30-30429-Z a nombre de RIBIAK, S. A. la suma de US$ 140,000.00 "en concepto de `orden de pago recibida a su favor del Banco Cafetero-PANAMÁ", según documento número 00906". Lo que implica que el banco demandante está calificando la naturaleza del telex (documento fundamental del reclamo que consta a fojas 28) e interpretando su significado.

El mismo documento, en su parte posterior, contiene otra certificación de dos miembros del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuyas firmas sí fueron autenticadas por los funcionarios consulares de Panamá en Madrid-España (fs. 78-vlta.), lo que confiere cierto valor a lo que expresaron y que textualmente se transcribe:

> "Que en base a la documentación que nos ha sido entregada: fotocopia del documento 00906 cuyo original está en poder de RIBIAK, S. A. y cuya copia obra en el expediente en Panamá, según nos manifiesta el Banco, fotocopia de la orden de pago (telex sin clave del Banco Cafetero de Panamá de fecha 26 de noviembre de 1.986) y original del extracto de cuenta del cliente RIBIAK, S. A. hemos comprobado que con fecha 28.11.86 se hizo un abono al mencionado cliente por importe de USD 140.000 y que dicho abono está recogido en el extracto de su cuenta cuyo saldo coincide con los balances del Banco Exterior de Los Andes y de España, S. A. al 29.11.86".

De lo anterior se colige que se acreditó a la cuenta de la sociedad RIBIAK la suma que reclama el demandante, pero ello no implica ni puede crear certeza en el sentido que esa actuación obedezca a una orden de pago emitida por el demandado BANCO CAFETERO, (Panamá) y, en consecuencia, que el telex conformara un mandato irrevocable para que se efectuara la transferencia. Menos aún si en la certificación transcrita claramente se advierte que se trata de un telex sin clave.

Por lo expuesto, es evidente que el sentenciador de la instancia superior del proceso erró al valorar la prueba documental a que se ha hecho referencia y la utilizó como un elemento complementario, hasta cierto punto, para acreditar la existencia de la supuesta obligación mercantil que tiene el demandado BANCO CAFETERO con la entidad financiera demandante, por la operación crediticia que ésta hizo a favor de un tercero. Sin embargo, aunque el fallo impugnado otorgó mérito a las pruebas sobre las cuales recaen los cargos que se aducen en esta causal y, a pesar de comprobarse que el juzgador incurrió en el referido yerro sobre esas pruebas, la Sala ha podido apreciar que dichas pruebas no fueron determinantes para arribar a la decisión o conclusión final contenida en la resolución que ataca el casacionista. En otras palabras, la resolución de segunda instancia estimó que lo que realmente probaba la obligación de reembolsar que demanda el actor, o, lo que constituía el hecho generador de la misma era el telex de 26 de noviembre de 1986, el cual por su forma y contenido, de conformidad con el criterio del Banco demandante, fue interpretado como un mandato irrevocable.

De acuerdo a lo señalado, la acusada sentencia no violó el artículo 244 del Código de Comercio citado por la censura, pues la prueba de la obligación la fundamentó en el telex aportado por la parte actora, documento éste que no fue objetado por la contraparte, sino por el contrario reconocido plenamente en cuanto a su existencia.

En igual sentido, tampoco se produce la alegada violación del artículo 1100 del Código Civil, pues es obvio que la parte demandante, a juicio del juzgador, probó la obligación que alegaba a su favor, conclusión que no se fundamentó en la valoración exclusiva de las pruebas previamente analizadas, pues el elemento central fue la prueba documental antes referida (telex).

En consecuencia, la PRIMERA causal invocada por el recurrente (demandado), bajo el cargo de infracción de normas sustantivas por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, no está justificada, razón que obliga a la Sala a pasar al examen de la segunda causal de fondo.

SEGUNDA CAUSAL:

Esta causal consiste en la infracción de normas sustantivas por aplicación indebida de las normas sustantivas de derecho y aparece fundamentada en cinco motivos (previamente transcritos), que en resumen aluden a los siguientes cargos:

Que la sentencia de segundo grado aplicó indebidamente normas sustantivas que regulan el mandato mercantil a una relación jurídica innominada en nuestro derecho positivo, que en el caso concreto (en cuanto a lo que se demanda) se dio entre dos bancos no corresponsales en virtud de la notificación electrónica que uno hizo al otro mediante un telex de una transferencia bancaria; que respecto a tal relación no mediaba la existencia de un contrato de corresponsalía, previamente acordado, además de que el telex era informativo ya que no estaba testado, es decir, no tenía "clave".

Concluye, entonces, que la indebida aplicación de las normas del mandato a la relación que origina la notificación electrónica de una transferencia bancaria a nivel internacional, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, aunado a lo cual han sido ignoradas las prácticas bancarias sobre acuerdos interbancarios de corresponsalía, que se basan en el documento 400 de la Cámara de Comercio Internacional.

En tal sentido, se citan como infringidos los artículos 1400, 1419 del Código Civil y el 590 del Código de Comercio.

Veamos:

El artículo 1400 del Código Civil, señala:

"Artículo 1400. Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra."

Se sostiene que la infracción de esta norma, reguladora del mandato (entre cliente y Banco), se debe a que fue aplicada analógica y equivocadamente a una relación distinta de la que regula. Se acusa al tribunal de confundir dicho mandato con la relación mercantil que se produjo en este caso, verificada entre banco y banco, que guarda relación con la transferencia bancaria que es en nuestro ordenamiento jurídico un contrato innominado y que requiere para su realización un contrato de corresponsalía entre bancos, en el cual necesariamente se exige que las instituciones establezcan claves. Es decir, que estas transferencias son una forma de remesas de fondos al extranjero, que implican corresponsalía entre el banco ordenante y el banco receptor. Lo anterior parte del supuesto de que las relaciones para tal efecto, entre banco y banco, se rigen por los contratos de corresponsalía. Y, a nivel internacional, por la práctica bancaria incorporada al Documento 400 de la Cámara de Comercio Internacional.

El concepto de la infracción de la segunda norma artículo 1419 del Código Civil revela prácticamente el mismo contenido del expresado en la primera. Alegase que se aplica, indebidamente, lo preceptuado en esta norma sobre el mandato, a una relación compleja que implica su ejecución por medios modernos, como es la que se ventila en este caso, no previsible en la época que fueron adoptados los Códigos Civil y de Comercio. Sostiene que son relaciones distintas; de allí que no se pueden aplicar las reglas simplistas del mandato, que involucra a sólo dos partes, a la transferencia bancaria que requiere más de dos: el cliente, el Banco ordenante, el Banco receptor y el cliente de éste último y, en el caso bajo estudio, adicionalmente a dos bancos corresponsales.

La Sala advierte, en cuanto a la violación atribuida a la tercera disposición sustantiva (Art. 590 del C. de Comercio), que no será considerada por no ser congruente con la causal invocada, pues se alude a su infracción por omisión, al haber sido aplicada en parte, interpretándola en forma equivocada, "para favorecer a una de las partes en la controversia judicial", cuando es sabido que la causal de Indebida Aplicación se produce cuando entendida rectamente una norma, sin que medie errores de hecho o de derecho, se aplica la regla jurídica a un hecho probado pero no regulado por ella.

A juicio de esta Sala de la Corte los cargos contra el fallo de segunda instancia en esta segunda causal prosperan debido a la infracción en que incurre el fallo de segunda instancia al aplicar indebidamente las dos normas citadas inicialmente (artículos 1400 y 1419 del Código Civil).

Veamos:

En efecto, conforme sostiene el casacionista, la relación jurídica (entre dos bancos), que genera la controversia y que el sentenciador ha resuelto aplicando las normas del mandato contenidas en el Código Civil, no se deriva directamente de la figura del mandato simple que describe dicho texto legal. Se trata de una relación mercantil más compleja y novedosa, con características propias, en la que pueden intervenir más de dos partes, denominada **transferencia bancaria** y que la doctrina al clasificar las operaciones bancarias (objeto exclusivo de los contratos bancarios) la ha incluido entre las "principales operaciones neutras". (Ver: Rodríguez Azuero, Sergio. **"CONTRATOS BANCARIOS Su significación en América Latina"**, cuarta edición, Bogotá, Colombia, pp. 121 y ss., 545 y ss., 559 y ss.).

En ese sentido, se considera que existen diversos tipos de operaciones neutras, en las que los bancos participan como intermediadores en los cobros y en los pagos, pero se diferencian por los distintos contratos bancarios que les sirven de antecedente (como por ejemplo los contratos de Depósito, Mandato, Compraventa, Cajilla de Seguridad, Fideicomiso).

En el caso específico de la operación de transferencia bancaria como una forma de intermediación en los pagos, su antecedente se traduce en el contrato de mandato. Por tanto, si bien la operación en sí no es un contrato de mandato propiamente, su origen guarda relación con el mismo. Por tanto, es pertinente expresar algunas consideraciones sobre el mandato, antes de referirnos a la normativa aplicable a la operación que nos ocupa.

El mandato como contrato clásico del derecho civil supone que una parte (mandatario) se obligue para con otra (mandante) a realizar un negocio jurídico en provecho de éste último, quien es el que hace el encargo. O sea, que el primero actúa por cuenta y en nombre del mandante, lo que implica la unión del mandato con la representación, sin que sean la misma figura.

Por regla general, se ha diferenciado el mandato mercantil del mandato civil por la finalidad propia del primero que es la realización de un acto jurídico comercial, siempre con remuneración del mandatario quien ha de ser comerciante; mientras que el de carácter civil puede o no ser remunerado, siendo, en la mayoría de los casos, gratuito.

En atención a la naturaleza jurídica del mandato, la doctrina y la mayoría de las legislaciones han distinguido dos modalidades: 1. el mandato con representación que se atribuye al de tipo civil -cuando el mandatario actúa por cuenta y en nombre de otro (mandante) y en ese carácter negocia con terceros-; y, 2. el mandato sin representación, calificado como comisión acogido en materia comercial, cuando la actuación del mandatario (comisionista) es por cuenta del mandante (comitente) pero en su propio nombre. Esta distinción es importante en cuanto a los efectos frente a terceros con quienes se contrata, pues en el segundo caso la posición del mandatario o comisionista es de contratante directo, por lo que los efectos recaen directamente sobre él (aunque ulteriormente puede transferirlos a su comitente).

El análisis de lo expuesto, en relación a la presente litis, nos permite ver con más claridad que el contrato de mandato mercantil o de comisión podría considerarse el antecedente conceptual o lo que sirvió de sustento a la operación de transferencia bancaria, si se toma en cuenta uno de sus aspectos de entre las diversas operaciones que conlleva, y sería el hecho de que comienza con una orden de pago iniciadora. Es decir, desde el punto de vista jurídico ésta operación, como otras, podría obedecer a la ejecución de un contrato de mandato.

En el presente caso, el mandato mercantil o la comisión específicamente se realizó entre el cliente y el banco comisionista (BANCO CAFETERO DE PANAMÁ), a quien se le encargó pagar o acreditar en la cuenta bancaria de un tercero (beneficiario) ubicada en un banco extranjero (BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA) determinada suma de dinero. Lo cual implica que el banco comisionista para la realización del encargo o la comisión, actuando en su propio nombre,

pondría en marcha la posterior operación de transferencia internacional, la cual conlleva relaciones con otros bancos que actúan como partes de esta nueva relación (como la de corresponsalía).

En nuestro país no existe una ley específica o un conjunto de disposiciones dentro de un Código de Derecho Privado que tipifiquen y regulen los contratos bancarios y las operaciones que ellos generan. En principio se piensa, como lo hizo el Ad-quem, en la aplicación de la legislación común como el Código Civil que regula los arquetipos fundamentales y el Código de Comercio que apenas se refiere a algunos. Por ello, como en otros países, algunos de estos contratos y operaciones bancarias han sido regulados y reglamentados por ciertas entidades, especialmente cuando media la **internacionalización** en el respectivo negocio jurídico, debido a lo cual se hace necesario asimilar e invocar reglas y usos uniformes que constituyen una costumbre internacional, recopilados por la Cámara de Comercio Internacional y que han sido prohijadas y difundidas por organismos internos como lo es, en nuestro medio, la Asociación Bancaria de Panamá que emite Acuerdos al respecto, pero que aún no han sido incorporados formalmente a la legislación interna nacional.

El fenómeno, en términos generales, ha sido recogido en nuestro Código de Comercio cuando se refiere en su artículo 5° a las fuentes del derecho mercantil, estableciendo que si las cuestiones relativas a derechos y obligaciones no pudieran ser resueltas por la ley comercial ni por casos análogos en ella previstos, "**serán decididos con arreglo a los usos de comercio observados generalmente en cada plaza**"; y en defecto de ello se estará a lo que preceptúa el derecho civil. (Énfasis subrayado de la Corte).

Al confrontar lo preceptuado con el problema que se presenta en este proceso es obligante concluir, en primer lugar, que nuestro Código de Comercio no regula ni resuelve la cuestión planteada ni tampoco casos análogos, pues se trata de la utilización internacional de las transferencias de fondos por medios electrónicos, en este caso por telex. Es así, debido a que dicho sistema internacional de mensajes interbancarios tiene relativamente poco tiempo de haber aparecido. Sin embargo, es importante resaltar el carácter internacional de este tipo de actividad bancaria que surge cuando intervienen personas con domicilios en distintos países o cuando se exige la ejecución de alguna operación en otros Estados, siendo cada vez más común e involucrando también un mayor número de relaciones jurídicas. Consecuentemente, se impone la aplicación de los Usos de comercio observados generalmente en cada plaza para resolver los reclamos que puedan surgir de la utilización de estas nuevas prácticas bancarias internacionales.

En nuestro país los bancos afiliados a la Asociación Bancaria de Panamá han suscrito una serie de Acuerdos interbancarios aplicables a este tipo de contratos y operaciones, como son por ejemplo:

1. El Acuerdo N° 3 de 1° de marzo de 1973 **"PARA ACOGERSE A LAS PRÁCTICAS Y COSTUMBRES DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL"**, que entre otros puntos destaca: el compromiso de todos los BANCOS afiliados a la Asociación Bancaria de Panamá de reconocer y acoger las prácticas uniformes que fija la Cámara de Comercio Internacional, para posibles litigios en relación con transacciones de créditos comerciales y cobranzas.

2. El **Acuerdo N° 20** que comenzó a regir a partir del 18 de agosto de 1986, **"POR EL CUAL SE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO UNIFORME ENTRE LOS BANCOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN RESPECTO AL MANEJO DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS DE FONDOS LOCALES E INTERNACIONALES"**.

3. El Acuerdo N° 29 que entró en vigencia el 1° de julio de 1993, **"SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES DEL EXTRANJERO Y TRANSFERENCIAS"**, el cual respecto a las transferencias dispone en su artículo tercero: la necesidad de **expresar en forma detallada** los datos del remitente cuando se envía la transferencia y del beneficiario cuando se recibe.

Para efectos del presente caso, es importante atender lo preceptuado por

el aludido Acuerdo No.20, vigente cuando se produjo la operación que da origen a esta controversia judicial, que se refiere al **procedimiento para el manejo de transacciones bancarias de fondos locales e internacionales**. En su artículo primero dicho Acuerdo establece y define quiénes son las partes que intervienen en estas operaciones, expresando que son:

1. El Banco ordenante: es el que origina la transferencia de fondos;

2. El Banco intermediario: es el que recibe la orden de transferencia para ser pagada a través de otro banco;

3. El Banco Beneficiario: es el que debe entregar los fondos transferidos a su destinatario final.

En el segundo artículo de este Acuerdo se establece el compromiso de los bancos de entregar en un tiempo determinado las transferencias de fondos locales o del extranjero recibidas, en su oficina. Continúa indicando, que cuando el banco intermediario reciba una transferencia carente de la información necesaria para tramitarla, adoptará inmediatamente las medidas necesarias para obtener tal información.

De acuerdo a lo expresado por este Acuerdo y en atención a lo que se desprende de este proceso, resulta claro que el demandado, **Banco Cafetero de Panamá, sería el Banco ordenante** porque originó la transferencia de fondos, por razón de la comisión o encargo de su cliente (Compañía General de Cambios, S. A.) que ordenó realizarla con cargo a su cuenta corriente; sin embargo dicho banco actuaba en su propio nombre.

El banco intermediario que en este caso serían dos (**BANKER TRUST CO. New York y el EXTEBANK NEW YORK**) es el que recibe la orden de transferencia para ser pagada a otro banco. El primero (BANKER TRUST-NY) recibió la instrucción (por medio de telex autenticado) del banco ordenante (**CAFETERO-PANAMÁ**) de cargar a su cuenta el monto de la transferencia y pagar esa cantidad al EXTEBANK NY para que este la acreditara a la cuenta corriente de EXTEBANDES-MADRID (que poseía en dicho banco en New York), para luego acreditarla en la cuenta de RIVIAK, S. A. (en España).

El Banco beneficiario sería el Banco Exterior de Los Andes y España (EXTEBANDES-MADRID), a quien correspondería entregar los fondos transferidos a su destino final, o sea a uno de sus clientes (RIVIAK, S. A.)

No obstante, como se desprende de autos, toda esta transacción resultó interrumpida y posteriormente revocada, a pesar que los fondos llegaron en un momento a los intermediarios en New York. Precisamente esa suspensión se produjo al ocurrir la eventualidad que describe el artículo segundo del Acuerdo Interbancario N° 20, previamente aludido, que consiste en que el Banco intermediario llegase a considerar que la transferencia no contiene la información necesaria para tramitarla. En base a ello, el banco en New York (Extebank-NY) se abstuvo de continuar su trámite y solicitó al otro intermediario en New York (Banker Trust-NY) que fuese completada la información. Este, a su vez, comunicó lo anterior al banco ordenante y éste último lo hizo a su cliente, quien decidió cancelar o revocar la operación, por lo que los fondos fueron devueltos desde New York (hasta donde habían llegado) a su titular (el cliente en Panamá).

El reclamo en este caso proviene del Banco beneficiario contra el Banco ordenante, por el hecho de haber entregado o hecho llegar los fondos objeto de la transferencia a su destino final (España), aduciendo que ello ocurrió al acatar una orden de pago expresada en un telex que le fuera enviado por el banco ordenante. Sin embargo, es evidente que el banco beneficiario aún no había recibido la transferencia o la orden de su ejecución (orden de pago) de parte del Banco intermediario quien fue el que recibió los fondos en New York y la primera orden o instrucción para su pago, la cual no acató y objetó alegando que la información era incompleta, de modo que el pago o entrega de fondos que era la finalidad de la transferencia no se podía ejecutar en España, porque el trámite

se suspendió por defectos formales y los fondos fueron devueltos.

En otro orden de ideas, volviendo al Acuerdo, el artículo tercero preceptúa que los bancos entregarán las transferencias de fondos utilizando un formulario llamado "Aviso de Transferencia Bancaria de Fondos".

Los artículos siguientes señalan que el Banco intermediario debe entregar el Aviso de Transferencia y tiene la responsabilidad de entregar la transferencia al Banco beneficiario **si la recibe**. Sobre el Aviso se exige que "deberá ir acompañado de la forma de pago en sobre cerrado dirigido al banco beneficiario"; sólo se enviará el Aviso sin la forma de pago debido en las excepciones siguientes:

1. Cuando la clave del Banco ordenante deba ser verificada en un tercer Banco;
2. Cuando la clave esté errada y se requiera su verificación;
3. Cuando se requiera confirmación de fondos por parte del Banco ordenante;
4. Cuando las instrucciones recibidas estén parcial o totalmente mutiladas y se requiera su repetición;
5. Por alguna otra causa, indicada claramente.

"En estos casos no se aceptan reclamos por intereses o compensación".

El siguiente artículo (octavo) dice que el Banco intermediario deberá tomar medidas para que la excepción sea aclarada y mientras ello suceda, el Banco beneficiario no revelará el nombre del intermediario.

La cuarta excepción antes descrita fue la que ocasionó, en el caso subjúdice, la suspensión de la tramitación de la transferencia al advertirla el Banco intermediario en New York, por lo que solicitó su aclaración. Como respuesta recibió instrucciones de devolver los fondos por haberse revocado la orden de pago respectiva.

Todo indica que las circunstancias que se presentaron en el desarrollo de esta operación bancaria impidieron su conclusión, aunque para el Banco beneficiario sí finalizó, pues entregó los fondos sin esperar la confirmación por parte del banco intermediario de que los mismos habían sido acreditados efectivamente a su cuenta, es decir, sin esperar que lo facultaran para después proceder. En esas condiciones es claro que el banco beneficiario se excedió en sus funciones y no observó la reglamentación o los mecanismos previstos para esta clase de transacción.

De lo expuesto se deduce que lo normado por el Acuerdo N° 20 de la Asociación Bancaria de Panamá contempla la situación que dimana de los hechos de la demanda y del expediente, lo cual está referido a la relación interbancaria de carácter internacional, por lo que resulta aplicable en este caso. Igualmente, cabe la aplicación, para resolver este tipo de conflictos en materia mercantil-bancaria, de las Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional, que en su mayoría han sido acogidas por las Asociaciones Bancarias y bancos de numerosos países, entre los que figura el nuestro, y como ejemplo están las contenidas en el Documento 400 (al cual alude el recurrente en casación) y Publicación 500-versión 1994, ambos adoptados por nuestra Asociación Bancaria, pero referentes a los Créditos Documentarios que no es el tema que nos ocupa.

También conviene hacer referencia, como fuente de derecho supletoria, a la **Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE CRÉDITO**, de 1994, y el documento contentivo de la Guía Jurídica de la **CNUDMI sobre TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS**.

Estos errores de interpretación o calificación de la demanda y consiguiente aplicación indebida de normas de derecho por parte del juzgador de instancia, bien sea por apegarse estrictamente al derecho invocado por el actor o por tratar de forzar una situación que no está tipificada a una regulación que no le corresponde, ha dado lugar a pronunciamiento de esta Sala de la Corte, en el sentido de aceptar,

> "la viabilidad del recurso de casación para enmendar la imprecisión conceptual de la relación sustancial del proceso en que pueda incurrir el Tribunal, ya sea o no a consecuencia de la confusión de las partes entre la finalidad de la prueba y el objeto de la demanda, debido a deducciones erróneas en cuanto a la aplicación de normas de derecho".
>
> (Sentencia de 12 de diciembre de 1995, YESSICA SAAVEDRA BARRERA recurre en casación en el proceso sumario que le sigue INMOBILIARIA SAAVEDRA, S. A.)

Por ello se reitera que los cargos recaidos en la indebida aplicación de las normas del Código Civil prosperan y la causal está justificada. Procede, entonces, la Sala a la invalidación del fallo de segunda instancia para dictar el que debe reemplazarlo conforme a la ley y al mérito de los hechos.

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Independientemente de las referencias iniciales hechas a los antecedentes del caso volveremos a hacer algunas acotaciones sobre la demanda, la contestación y las excepciones propuestas.

La pretensión del BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. es que se declare que el BANCO CAFETERO DE PANAMÁ, S. A. está obligado a pagarle la suma de US $140,000.00, debido a que el primero (el demandante) pagó dicha cantidad a la sociedad RIBIAK, S. A. por orden del segundo (el demandado).

Veamos, en síntesis, los hechos de esta pretensión que, a su vez, fueron negados por el demandado.

Los hechos TERCERO, CUARTO y QUINTO de la demanda son calificados por el demandado como irrelevante y señala que no están probados en autos. En tal sentido explica que el BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. no es socio ni accionista del banco demandante, que tales vínculos quien los tiene es el BANCO CAFETERO, S. A., sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, una persona jurídica distinta al demandado. Además, alega que no está probado ni existe ningún contrato de corresponsalía entre el banco demandante, sucursal de Madrid, Reino de España, y el banco demandado.

En efecto, lo que expresa el actor en los referidos hechos no está probado en el expediente pues la documentación aportada al respecto es una certificación del Registro Público de Panamá que acredita la existencia de la sociedad **BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.** (Fs. 25) y otra certificación (fs. 26) expedida en Caracas, Venezuela, por funcionarios del Banco Exterior de Los Andes y España en que se refieren a la vinculación del mismo con el **BANCO CAFETERO**, sin siquiera aludir al supuesto de que se trate de la misma sociedad; aunado a que dicho documento, emitido en el extranjero, no ha sido debidamente autenticado para que tenga valor probatorio en el proceso.

El hecho sexto expresa el contenido del telex de 26 de noviembre de 1986 enviado por el demandado al demandante y en el cual principalmente se fundamenta la pretensión. Este documento es calificado por el actor (en el hecho séptimo) como "un mandato irrevocable que genera derechos y obligaciones para las partes en el contrato".

Sostiene el demandado que la afirmación antes aludida (en relación al sexto hecho) no está probada, que es falsa y producto de una confusión del Banco demandante al pretender asimilar una comunicación de una transferencia bancaria a un mandato mercantil. Explica que el telex constituía un simple aviso que el banco demandado envió, informando mediante el mismo una transferencia efectuada, por razón de orden que uno de sus clientes le dio por escrito; instrucción que posteriormente dicho cliente canceló en forma escrita (sobre el particular remite a cartas de 25 de noviembre y 11 de diciembre de 1986, que constan en autos).

El detalle de esta operación bancaria es el siguiente:

La Compañía General de Cambios, S. A. en su calidad de cliente del BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A., el 25 de noviembre de 1986, le autorizó debitar de su cuenta corriente la suma de US$ 140,000.00, para girarlos a EXTEBANDES-NEW YORK (indicando su dirección), para depositar a favor de EXTEBANDES-MADRID y abonar a la cuenta 30-30429-X de RIVIAK. (sic), S. A. (Ver foja 99 del expediente).

Conforme a las instrucciones del cliente ordenante, el banco demandado (CAFETERO) solicitó a su corresponsal en New York, BANKER TRUST NEW YORK, efectuar la transferencia. Y, el 26 de noviembre de 1986 mediante un telex (sin clave), se le informó a EXTEBANDES-MADRID (el demandante) sobre la operación de transferencia, el conducto por el cual se remitió y el beneficiario final.

El banco corresponsal (BANKER TRUST N. Y.) del banco ordenante-demandado (CAFETERO-PMÁ) le informó que EXTEBANDES N. Y. no podía aplicar los fondos por falta de información, circunstancia ésta que comunicó el banco demandado a su cliente, por tanto, éste (el cliente) decidió revocar la orden mediante nota de 11 de diciembre de 1986 (ver fs. 100) indicando al Banco Cafetero que en vista al hecho anterior, solicitara a EXTEBANK NEW YORK la devolución de la suma de US $140,000.00 que le habían enviado y que debía depositar a favor de EXTEBANDES-MADRID.

El demandado informó, a través de telex con clave, a su corresponsal (BANKERS TRUST NEW YORK) las instrucciones del cliente en relación a sus fondos, quien posteriormente mediante telex (con clave) confirmó su cumplimiento, es decir, la devolución de los fondos por parte de EXTEBANDES NEW YORK (corresponsal del demandante).

Por otra parte, lo expresado en el hecho octavo de la demanda, que consiste en la interpretación que le dio el banco demandante al telex (consta a fs. 28) entendiéndolo como una orden de pago y por la cual realizó el pago a RIBIAK, no basta para probar que hubo un mandato y que este fuera irrevocable, aparte de que tal apreciación no es conforme con la realidad del contenido textual del telex (sin clave) ni con las consecuencias que el mismo conlleva en el ámbito comercial (bancario).

El contenido de dicho documento, que figura a fs. 28 del expediente, resulta fundamental en la presente litis:

"...
Panamá, Noviembre 26/86

extebandes
madrid españa

Les confirmamos que con fecha de noviembre 25/1986 y por conducto del banckers bank-new york, hemos transferido a su cuenta con extebandes new york us% 140,000.00 para el crédito final de la cuenta 3030429-x de reviak, s. a. con ustedes. por orden de un cliente nuestro.

cordial saludo
gerencia financiera
banco cafetero (panamá), s. a.
..."

Esta Corporación no comparte la posición del juez de la instancia inferior que coincide con la del actor, en el sentido de considerar el documento antes transcrito como un **mandato mercantil irrevocable** generador de derechos y obligaciones para las partes contratantes. Al contrario, resulta mucho más ajustado a derecho el criterio expuesto por la contraparte, que sostiene que el documento acredita un aviso de una transferencia.

Muy frágil es la tesis de que la relación jurídica que se originó entre las partes por razón del telex se adecua al contrato de mandato según lo regula el artículo 1400 del Código Civil, pues no se trata, como erróneamente hace ver el a-quo, de un documento que tenga instrucciones precisas para obtener del destinatario la realización de operaciones bancarias por razón de su puesto y,

menos aún, que tales instrucciones han de entenderse como encargo de un mandato mercantil.

Precisamente, el aludido telex visible a fojas 28, cuyo contenido fue transcrito previamente, dista mucho de contener instrucciones precisas conforme a las reglas y usos uniformes en materia bancaria (como la clave, que es la palabra secreta o medio similar que da autenticidad al mensaje), que signifiquen la autorización para ejecutar la orden de pago. En otras palabras, conforme a las reglas uniformes que siguen los bancos para este tipo de operaciones, la redacción que presenta dicho documento no se traduce en el propósito de que se efectúe el pago, que fuere ordenado por el iniciador, o el emisor de la (primera) orden de pago (a la cual obedece el envío de ese telex) dentro de la transferencia de fondos que se pretendía.

Para poder establecer si le cabe alguna responsabilidad al BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. por el envío del telex contentivo de la instrucción de transferencia al BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES y ESPAÑA, al haber éste último cumplido la instrucción, a pesar de que la orden de pago original al respecto se había revocado, debemos aclarar algunos aspectos sobre el tema de las TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES de fondos (definición, obligaciones de las partes, consecuencias de transferencias fallidas o erróneas). Con ese propósito nos remitiremos al documento preparado por las Naciones Unidas publicado en 1994 bajo el título de **"LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE CRÉDITO,"** y a sus comentarios, elaborados en 1992 por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, cuyo fin es unificar la legislación internacional para regular la materia relativa a la utilización internacional de las transferencias de fondos en papel, por telex y por medios electrónicos; no sin antes hacer presente que el contenido de documentos como este, originados por la O. N. U., se basa, sobretodo, en las experiencias, usos y prácticas utilizadas durante mucho tiempo en esta clase de menesteres y que terminan siendo regulados internacionalmente por este tipo de Códigos Modelo. Ellos se convierten, aún cuando no hayan entrado formalmente en vigor, en una respetable fuente de derecho que sirven de orientación a los miembros de la comunidad internacional a la hora de resolver situaciones como la que nos ocupa.

De conformidad con el instrumento de la CNUDMI hay un elemento que tienen en común estas tres formas de transferencias (cheques, telex y de computadora a computadora) y es que el valor transferido del iniciador al beneficiario se hace adeudando la cuenta bancaria del iniciador y acreditando la del beneficiario. Ellos se diferencian en que, en la primera, el cheque se transmite por correo o por otros medios independientes de los canales bancarios, por lo que el beneficiario es quien inicia los trámites bancarios para el cobro del cheque; mientras que en las transferencias por télex y de computadora a computadora el iniciador es quien empieza los trámites emitiendo una orden de pago a su banco para que adeude su cuenta y acredite la del beneficiario. Pero en muchos de estos casos no basta con el servicio del banco del iniciador y del beneficiario, sino que además se requieren los servicios de uno o varios bancos intermediarios, es decir, que la transferencia se inicia con una orden de pago dada por el iniciador a su banco, seguida por órdenes de pago dadas por el banco del iniciador al banco intermediario y por el banco intermediario al banco del beneficiario. La transferencia de crédito requiere asimismo **el pago de cada uno de los tres expedidores a su banco receptor**. (Art. 2, inc. a) de la Ley Modelo).

Definiciones:

La Ley Modelo en su artículo 2 define diversos términos referentes a las transferencias internacionales de crédito, que es la materia que regula, entre los cuales consideramos conveniente destacar:

Según la Ley Modelo para efectos de la cadena de órdenes de pago que puede generar esta operación (que comienza con la orden de pago de un iniciador para poner fondos a órdenes de un beneficiario, que esté en país diferente), el término "transferencia de crédito" comprende "toda orden de pago emitida por el banco iniciador o por cualquier banco intermediario destinada a cumplir la orden de pago del iniciador" y, en atención a ello, se considera que "la orden de pago

emitida con el propósito de efectuar el pago de esa orden forma parte de una transferencia de crédito diferente".

Partes de una transferencia de crédito:

La Ley define cinco partes, que son:

1. Iniciador: "se entenderá el emisor de la primera orden de pago en una transferencia";
2. Beneficiario: "se entenderá la persona designada en la orden de pago del iniciador para recibir fondos como resultado de la transferencia de crédito";
3. Expedidor: "se entenderá la persona que emite una orden de pago, comprendidos el iniciador y cualquier banco expedidor";
4. Banco receptor: "se entenderá el banco que recibe una orden de pago";
5. Banco intermediario: "se entenderá todo banco receptor que no sea el banco iniciador ni el banco del beneficiario".

Obligaciones de las partes:

El expedidor de una orden de pago puede ser el iniciador de la transferencia, cuando el cliente iniciador envía una orden de pago a su banco; el expedidor puede ser directamente un banco, dado que "todos los bancos intervienen en el proceso de la transferencia de crédito, con excepción del banco beneficiario, deben enviar su propia orden de pago al siguiente banco que forma parte de la cadena de la transferencia de crédito". (Comentario de CNUDMI sobre la Ley Modelo).

Así la obligación real y fundamental del expedidor es pagar al banco receptor la suma determinada en la orden de pago, "a partir del momento en que el banco receptor la haya aceptado". (Art. 5, núm. 1 y 6) (Comentario ídem).

Igualmente, la autenticación o la precisión necesaria de una orden de pago se constata mediante CLAVE que sería una palabra, número secreto o medio similar, acordado entre los bancos que le confiere la debida autorización y validez al mensaje.

El banco receptor tiene obligaciones que surgen ya sea de la transferencia de crédito bien ejecutada o que pueden surgir cuando algo falla. En el primer supuesto, los artículos 8 y 10 de la Ley Modelo (párrafos 2 y 1 respectivamente) establecen que las obligaciones de un banco receptor relativas a la ejecución de una orden de pago que ese banco haya **aceptado**, cuando dicho receptor no sea el banco del beneficiario, es emitir una orden de pago por la que se ejecute debidamente la orden de pago recibida. Entonces, la obligación del banco del beneficiario es poner los fondos a disposición del beneficiario. Por ello **hasta que el banco receptor no haya "aceptado" la orden de pago, no tiene obligación de ejecutarla**.

En la mayoría de los casos se entiende que un banco receptor (que no sea el beneficiario) -en función de banco intermediario- acepta una orden de pago cuando emite su propia orden de pago con la finalidad de ejecutar la orden de pago recibida. Y el banco beneficiario acepta una orden de pago cuando acredita la cuenta del beneficiario.

El artículo 10 numeral 2 de la Ley Modelo se refiere a aquellas órdenes de pago o supuestas órdenes de pago incompletas, por ejemplo, cuando un mensaje recibido no contiene los datos suficientes para ser una orden de pago expedida en debida forma o cuando por insuficiencia de datos la orden de pago no pueda ejecutarse, indicando la norma que el banco receptor tiene la obligación de notificar el problema de la insuficiencia al banco expedidor.

Se debe inferir, en consecuencia, que solamente hasta que el banco haya emitido su orden de pago en debida forma podrán surgir otras obligaciones.

Según los comentarios sobre la Ley Modelo hecha por la CNUDMI si la transferencia de crédito no se ha concluido (párrafo 1, art. 14 de la Ley Modelo)

el banco iniciador tendrá la obligación de reembolsar a su cliente (del iniciador) el importe de cualquier pago que haya recibido de él. El banco iniciador puede a su vez recuperar la suma que pagó a su banco receptor, y ese banco puede recuperarlo de su banco receptor que actuó por él en condición de banco intermediario. Las diferentes responsabilidades que puedan surgir en cuanto al reembolso terminan en el banco que no estuvo en condiciones de concluir la transferencia de crédito. (Por ejemplo debido a falta de información o datos incompletos en la orden de pago). En el caso bajo estudio la responsabilidad debe entenderse que terminó en EXTEBANK, NEW YORK.

Finalmente, se considera que la transferencia (art. 19 de la Ley Modelo) está completa cuando el banco del beneficiario acepta una orden de pago en beneficio de este último y, en consecuencia, se considera que, en ese momento, el sistema bancario ha liquidado sus obligaciones con el iniciador. Posteriormente, el banco del beneficiario quedará obligado, respecto de éste, a poner los fondos a su disposición o acreditar a su cuenta el monto de la orden que hubiera aceptado.

Tiene la Sala que determinar si la responsabilidad le corresponde, en este caso, al banco expedidor (iniciador), en circunstancias en que la transferencia de fondos se efectuó mediante un telex sin clave, enviado por el banco del iniciador al banco del beneficiario que al recibirlo acreditó inmediatamente la suma de B/.140,000.00, (cuya transferencia se anunciaba en el mensaje) a la cuenta de su cliente, es decir, RIBIAK, S. A.

Se debe determinar si el banco del beneficiario procedió de manera responsable y conforme con las costumbres bancarias. Si en atención a lo anterior quedaba en realidad obligado en virtud del contenido del telex, porque el mismo contenía datos suficientes que permitieran considerarlo una orden de pago, con una información completa y apta para obligar a su ejecución. Es decir, si el telex consistía en una orden de pago (perfecta) que, al ser recibida por el banco del beneficiario, lo obligaba a entregar la suma acreditada al beneficiario.

En primer lugar, no existe en autos evidencia alguna de que los bancos parte del proceso, el iniciador de la transferencia -CAFETERO, PANAMÁ- y el del beneficiario EXTEBANDES-MADRID- hayan celebrado ningún contrato o acuerdo en que se definiese la forma especial como debían de proceder entre ellos, cuando se enviaran o recibieran transacciones. En este caso hay que añadir que hubo la intervención de dos bancos corresponsales de la Ciudad de Nueva York y nada indica que existiera entre el Banco CAFETERO, PANAMÁ y el Banco EXTEBANDES acuerdo que permitiese obviar la mediación de esos bancos intermedios en la transferencia de fondos.

Si la voluntad de las partes de este proceso hubiere sido implementar un trámite más expedito y sin formalidades, no se hubieran tenido que utilizar los servicios de los bancos intermediarios en New York para la realización de la transferencia. Es más, no se ha acreditado que hubiese convenio alguno que estableciera una relación de corresponsalía entre ellos (demandante y demandado) o que en la práctica hubiesen establecido una costumbre entre ellos indicando procedimientos a seguir para ser aplicado en el caso de transferencias internacionales de fondos.

Cabe entonces resaltar, con relación al mensaje que contenía el aviso de transferencia u orden de pago, ciertos elementos a saber: que el mensaje enviado (télex) no fue una orden o una instrucciones de pago, sino más bien una información de transferencia de fondos con indicación del destino final de los mismos; que la suma transferida era considerable (B/.140,000.00); que el nombre de la solicitud a cuya cuenta aparentemente debía acreditar los fondos el banco receptor se indica como **Reviak, S. A.** y, finalmente que el mensaje fue enviado sin la clave correspondiente.

De lo anterior se desprende que el banco receptor, a falta de una clave que prestara confiabilidad a la autenticidad del mensaje, no podía, en efecto, proceder a hacer efectiva la misma sin verificar que su banco corresponsal hubiese recibido los fondos, aceptado la orden de pago y mandado ejecutar el pago

al banco del beneficiario, antes de aplicar el crédito correspondiente a la cuenta de su cliente. El que no se haya observado este procedimiento cobra, en un caso como este, mayor importancia porque fue precisamente el banco corresponsal de EXTEBANDES-MADRID quien no aceptó la orden de pago que se originó en el Banco CAFETERO-PANAMÁ aduciendo que la información recibida era incompleta, lo cual motivó que se cancelara la operación iniciada desde la República de Panamá.

En cuanto a la inexistencia de una clave en el mensaje recibido, cobra importancia el hecho de que el banco receptor acreditó los fondos antes de recibir confirmación de su banco en Nueva York, en el sentido de que se hubiesen recibido y depositado a su cuenta los fondos objeto de la transferencia, es decir, que sin tener la seguridad de que el mensaje de transferencia (télex) era auténtico y sin haber recibido aviso de que contaba con los fondos objeto de la transferencia, a su disposición y acreditados en la cuenta que mantenía con EXTEBANDES en New York, se procedió a acreditar la cuenta de su cliente, RIVIAK, S. A., en España.

Surge la interrogante de si el banco receptor, por el mero hecho de recibir el mensaje en cuestión, estaba obligado, por razón de algún tipo de mandato, a acreditar en forma inmediata la suma objeto de la transferencia a la cuenta de su cliente.

Considera la Sala que en ausencia de relaciones contractuales que específicamente impusieran tal obligación, no es cierto, como se desprende de todo el análisis realizado, que la costumbre internacional interbancaria, de alguna forma, obligaba al banco recipiente a efectuar dicho depósito en favor de RIVIAK en las circunstancias señaladas. Por el contrario, como se ha visto, los procedimientos bancarios, que para éstas situaciones gozan de aplicación casi universal sugieren que un banco que recibe un mensaje como el que nos ocupa no tendría ninguna obligación de aplicar los fondos en la forma solicitada hasta tanto no reciba una orden de su banco corresponsal autorizándolo a ejecutar el pago porque se ha verificado que se dispone de los fondos provenientes del banco iniciador destinados a cubrir la operación.

Se debe hacer notar que el banco receptor (del beneficiario) excedió las prácticas y costumbres bancarias haciendo un acreditamiento a la cuenta de su cliente, RIVIAK, S. A., antes que tuviera la obligación de hacerlo incurriendo en un riesgo que no se encuentra respaldado ni por relaciones de orden contractual con el banco remisor o iniciador ni por las prácticas o costumbres bancarias. Como consecuencia debemos concluir que el banco EXTEBANDES-MADRID, al acreditar la suma de B/.140,000.00 a la cuenta de su cliente RIVIAK, S. A., lo hizo otorgándole un crédito a su propio riesgo por el que no tiene que responder el banco expedidor del iniciador, o sea el BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.

Luego de haberse analizado los hechos y el derecho aducidos como fundamento de la pretensión se ha podido concluir que la causa de pedir no está justificada, lo que implica un pronunciamiento absolutorio a favor del demandado.

Acerca de la excepción, llamada de "inexistencia de responsabilidad" y de "inexistencia de la obligación" (f. 57), no es una excepción sino defensa. En cuanto a la excepción de prescripción, al desestimarse la pretensión resulta innecesario el examen de la misma, toda vez que estaba dirigida a considerar extinguida una obligación inexistente.

La Sala considera que la naturaleza del conflicto planteado pone de relieve y demuestra, luego de las consideraciones y el análisis hecho para arribar a una decisión, que la parte demandante ha actuado de buena fe.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 29 de diciembre de 1994 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, y REVOCA la sentencia N° 57 de 11 de junio de 1993, consultable de fojas 154 a 181 dictada por el Juez Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en su lugar DENIEGA las pretensiones del demandante BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A.

y DECLARA ABSUELTO al demandado BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. Igualmente se DECLARA que el BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA ha actuado con evidente buena fe. En consecuencia no se condena en costas en cuanto al trabajo en derecho; y en cuanto a los gastos del proceso, como se han causado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA ORTEGA DE CORRO, FRANKLIN CORRO ARJONA Y CÉSAR CORRO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario que ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA DE CORRO, FRANKLIN CORRO y CÉSAR CORRO ARJONA mantienen contra la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A., el apoderado judicial de los demandantes censura, con el recurso de casación, la sentencia dictada el 18 de julio de 1995 por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Recibido el expediente en esta Corporación, el Magistrado Sustanciador lo fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad. El opositor guardó silencio y el recurrente, en un corto escrito, solicita la admisibilidad del mismo. Procede la Sala, de acuerdo al mandato del artículo 1165 y 1160, a determinar si el mismo reúne las formalidades exigidas.

En cuanto a la resolución impugnada, la Sala declara en que la misma es de aquéllas que pueden ser impugnadas mediante el recurso de casación. El recurso fue interpuesto oportunamente.

La casación es en el fondo y se invocan dos causales las cuales se analizan separadamente.

La primera causal infracción de las normas sustantivas de derecho por violación directa de las mismas, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo, está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

La Sala observa que la causal en el fondo invocada es la violación directa, por cuanto, a juicio del casacionista la sentencia interpretó de manera defectuosa una cláusula de contrato de seguros que contenía una cláusula oscura, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 1139 del Código Civil vigente.

La Sala conceptúa que la interpretación de cláusulas contractuales sólo, se puede atacar mediante la violación directa y no bajo las cláusulas probatorias a que se refiere el mismo artículo. por ello la causal ha sido invocada de manera correcta por el recurrente. No obstante, es sabido que en materia de casación debe haber una íntima relación y una absoluta congruencia entre la causal, los motivos, en que esta causal se funda y las normas que resultan infringidas como consecuencia de los cargos que se le imputan a la sentencia.

Sin embargo en este caso el recurrente, en cuanto a los motivos, no señala de manera clara y determinante el cargo que le hace a la sentencia. Adicionalmente, al analizar las violaciones legales infringidas y la explicación de cómo lo han sido relativas al artículo 1139 del Código Civil (fs. 335), explica lo siguiente: "No se puede, pues, considerar que una persona que conserva todos sus reflejos y que está entrenado para soportar enormes esfuerzos físicos

puede estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas por haberse tomado unas cuantas cervezas en un paseo varias horas antes de disparársele accidentalmente su arma de fuego reglamentaria; ya que, estos extremos deben ser apreciados según circunstancias y los aspectos individuales de cada persona y no en la forma oscura bajo la frase "el asegurado se encontrare bajo la influencia ... de bebidas alcohólicas". La situación narrada no puede ser objeto de una causal en el fondo como lo es la violación directa, ya que ésta se produce independientemente de toda cuestión de hecho.

Respecto a la segunda causal "Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo fallo", la misma está consagrada como tal en la ley.

En lo referente a los motivos, el recurrente debe ser claro y preciso, plantear la misma situación de forma repetitiva y redundante, no es propio de este recurso, no es permitido realizar meras alegaciones, para ello hay un término específico en la ley, estas anomalías hacen ininteligible el recurso.

En cuanto a las infracciones de derecho y la explicación de cómo han sido violadas, la Sala observa que el recurrente repite en esta causal el artículo 1139 del Código Civil, el cual también fue incluido como violado en la primera causal. Esto es incompatible ya que si el artículo fue violado directamente por omisión, como sostiene el recurrente, mal puede decirse que fue utilizado para mala valoración de la prueba, en esta segunda causal estudiada.

En consecuencia, se dan los presupuestos señalados en el artículo 1167 del Código Judicial, para declarar la inadmisibilidad del recurso por ser ininteligible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República o por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo propuesto por ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA ORTEGA DE CORRO, FRANKLIN CORRO ARJONA y CÉSAR CORRO ARJONA, mediante apoderado judicial.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIO QUE INTERPUSO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., (EN ESPAÑOL) INDUSTRIAS INTERNACIONALES DE PESQUERÍA, S. A. Y PHILLIP ALEXANDER ASYN Y SAMUEL ANTHONY ASYN CONTRA BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense "MORGAN & MORGAN" actuando como apoderada judicial del BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. ha interpuesto recurso de casación (en el fondo) contra la resolución de 30 de agosto de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia para decidir el Incidente de Indemnización de Perjuicios propuesto por el casacionista, dentro del proceso ordinario incoado por INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., (en inglés) INDUSTRIAS INTERNACIONALES DE PESQUERÍA, S. A. (en español) y PHILLIP ALEXANDER ASYN y

SAMUEL ANTHONY ASYN.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ambas hicieron según consta de foja 128 a 132 (escrito del opositor) y 133 a 134 (escrito del recurrente).

Vencido de esa manera el término de lista, la Sala procede al examen correspondiente, de conformidad con las exigencias del artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, o sea, si:

1) La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley;
2) El recurso ha sido interpuesto en tiempo;
3) El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160, y;
4) Las causales expresadas son de aquellas señaladas por la Ley.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la firma forense MORGAN & MORGAN en representación del BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. en el Incidente de Indemnización de perjuicio que interpuso dentro del proceso ordinario incoado por INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., (en inglés) INDUSTRIAS INTERNATIONALES DE PESQUERÍA, S. A. (en español) y PHILLIP ALEXANDER ASYN y MANUEL ANTHONY ASYN.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA PRECAUTORIA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR LUIS ALBERTO GONZÁLEZ PELLITERO CONTRA AUROPUSCH INTERNACIONAL, S. A., ALFREDO PRIETO BOUZAS, PEDRO ERASMO ORTEGA, HÉCTOR PÉREZ Y NICOLÁS RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 31 de enero de 1996, esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor **LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO**, dentro de la solicitud de suspensión presentada por el recurrente, en el proceso ordinario instaurado por él contra **EUROPUSH INTERNACIONAL, S. A., ALFREDO PRIETO BOUZAS, PEDRO ERASMO ORTEGA, HÉCTOR PÉREZ y NICOLÁS RUIZ.**

Para tal efecto se concedió el término establecido en el artículo 1166 del Código Judicial, el cual fue aprovechado por el apoderado del recurrente en casación para presentar el libelo corregido ante la Secretaría de la Sala.

En vista de ello, debe la Corte decidir en forma definitiva si admite o no el presente recurso de casación. Para ello, es necesario confrontar la resolución que ordenó la corrección con el nuevo escrito de formalización presentado.

La resolución que ordenó la corrección señalaba que el recurrente planteaba en los motivos que fundamentaban la única causal invocada, un problema teórico que no es propio del recurso de casación, ya que éste debe referirse a una situación concreta, que contenga los cargos que se le imputan a la sentencia

impugnada.

Luego de revisar el nuevo libelo la Sala advierte que el recurrente no cumplió con lo que se le había ordenado, ya que los nuevos motivos mantienen el mismo grado de abstracción que tenían anteriormente. Consecuentemente, al no plantear los hechos concretos que se pretenden demandar en casación, el recurso resulta ininteligible.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el apoderado judicial del señor LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO.

Las costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1993, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) CONTRA TIERRAS E INVERSIONES, S. A., ARCITEC, S. A. Y ARCILLAS DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de fecha 12 de enero de 1996, esta Sala de la Corte decretó la acumulación de los recursos de revisión interpuestos por las sociedades **ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. y ARCITEC, S. A. contra la sentencia de 12 de noviembre de 1993, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario declarativo incoado por CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) contra TIERRAS E INVERSIONES, S. A., ARCITEC, S. A. y ARCILLAS DE CHITRÉ.** Ejecutoriada la aludida resolución; y, como el efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sustancien conjuntamente y se fallen en una resolución, pasa la Sala a decidir sobre su admisibilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 1199 del Código de Procedimiento y concordantes del Código de Procedimiento, previas las siguientes consideraciones jurídicas:

El despacho sustanciador fijó la suma que el recurrente debía consignar, dentro de los parámetros de la ley, a fin de poder acoger el recurso, siendo que el depósito requerido se verificó, en ambos recursos, en los términos preceptuados por el artículo 1196 del Código Judicial. En consecuencia, se dispuso solicitar al Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de lo Civil, el expediente contentivo del proceso declarativo, antes aludido, que dio lugar a la sentencia impugnada en revisión.

En tal sentido se ha podido verificar, del examen del libelo del presente recurso de revisión, al igual que de otros documentos contenidos en el expediente, el lleno de las formalidades necesarias para su admisión, o sea:

1) El recurso se presentó dentro del término legal;
2) La resolución impugnada está sujeta a revisión, según lo dispuesto por

el artículo 743 del Código Judicial.

3) La impugnación se funda en los hechos a que se refiere el artículo 1189 ibídem, específicamente en el descrito en su numeral 9.

4) Se hizo el depósito requerido, en la diligencia de consignación visible a fojas 147.

Finalmente, se ha podido observar que a fojas 11, el recurrente solicita con fundamento en el artículo 1205 del citado Código, se ordene al Registro Público, suspender los gravámenes hipotecarios y anticréticos a favor de CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, que declaró vigente la sentencia impugnada en revisión, y por tanto se suspenda el proceso ejecutivo hipotecario que dicha Corporación le sigue a las Empresas TIERRAS E INVERSIONES, S. A., ARCITEC, S. A. Y ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. en el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial, de lo Civil.

Sobre el particular, el citado artículo 1205 establece que la demanda de revisión no suspenderá la ejecución de la sentencia que la motive, sin embargo, permite dichos supuestos al señalar:

> **"Podrá, sin embargo, el Juez, en vista de las circunstancias, a petición del recurrente, previa constancia, ordenar que se suspendan las diligencias de ejecución de la sentencia o que se inscriba la demanda, si versa sobre inmueble o mueble susceptible de registro, con sujeción, en todo caso, a las normas sobre registro público.**
>
> **El juez señalará la cuantía de la fianza, la cual comprenderá el valor de lo litigado y los daños y perjuicios consiguientes a la ejecución de la resolución, para el caso de que el recurso fuere desestimado."**

En base a lo anterior, es factible acceder a la suspensión de las diligencias de ejecución de la sentencia, pero, antes el recurrente debe afianzar el valor total de lo litigado, más los perjuicios que se pueden causar. La Sala no puede acceder a la suspensión de los gravámenes hipotecarios y anticréticos declarados vigentes por la sentencia objeto del presente recurso de revisión, puesto que la norma en comento no autoriza a ello.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de Revisión propuesto por ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. y ARCITEC, S. A. contra la sentencia de 12 de noviembre de 1993 dictada por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, y por tanto, DISPONE:

A) Cítese personalmente a CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA), entidad autónoma del Estado creada por la Ley N° 65 de 1975, con domicilio en el Banco de Bostón, Piso 6, Ciudad de Panamá, República de Panamá, cuyo Gerente General y Representante Legal es el señor Franklin Rivera, portador de la cédula de identidad personal N° 8-188-324; TIERRAS E INVERSIONES, S. A., sociedad anónima debidamente inscrita a la ficha 187683, Rollo 20787, imagen 0228, Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, con domicilio en la Vía Frangipany, Ciudad de Panamá; y,ARCITEC, S. A. sociedad anónima debidamente inscrita a la ficha 074331, Rollo 06425, Imagen 0002, Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, con domicilio en Vía La Arena, Ciudad de Chitré, Provincia de Herrera, República de Panamá.

B) Se advierte que igualmente podrán intervenir en calidad de litis consorte cualquier otra persona o entidad a quien pueda agraviar, beneficiar, o afectar en cualquier forma la resolución que se dicte en esta revisión.

C) No se accede a la solicitud de suspensión de los gravámenes hipotecarios y anticréticos solicitados por la parte que recurre en revisión, en primer lugar porque los mismos ya se encuentran inscritos en el Registro Público y la sentencia se encuentra ejecutada en cuanto a esa medida. Por otra parte, la sentencia impugnada en revisión no afecta el valor de los gravámenes hipotecarios y anticréticos, sino que se refiere a quién es el beneficiado con las garantías

que esos gravámenes representan, en relación con el crédito de que se trata. En tercer lugar, de acuerdo con las circunstancias, no resulta aconsejable que se liberen los bienes de esos gravámenes que constituyen garantías de cumplimiento de la obligación.

D) En cuanto a la segunda petición, se concede la suspensión del Proceso Ejecutivo Hipotecario instaurado por la Corporación Financiera Nacional (COFINA) ante el Juzgado Segundo de Circuito, del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, contra las Empresas TIERRAS E INVERSIONES, S. A. ARCITEC, S. A. y ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. Conforme a lo pautado en el artículo 1205 del Código de Procedimiento, se fija en la suma de TRES MILLONES DE BALBOAS (B/.3,000,000.00) la cuantía adicional de la fianza que la parte revisionista debe consignar previamente a la suspensión solicitada en la Secretaría de la Sala, que comprende "el valor de lo litigado y los daños y perjuicios consiguientes a la ejecución de la resolución para el caso de que el recurso fuere desestimado".

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

FEBRERO 1996

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A LUIS ÁNGEL DOMÍNGUEZ BLOISE, SINDICADO POR DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE DAVID ENRIQUE ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de decisión recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado EFRAÍN ERIC ANGULO, Defensor de Oficio del señor **LUIS ÁNGEL DOMÍNGUEZ BLOISE**, contra la sentencia de segunda instancia dictada el 2 de agosto de 1995 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se condena a **DOMÍNGUEZ BLOISE** a la pena de dos (2) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período de la principal, por haber incurrido en el delito de lesiones personales.

El recurso que nos ocupa está fundamentado en una sola causal, cual es: error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violaciones de la ley sustantiva y ha influido decididamente en la parte dispositiva de la sentencia, la cual, a su vez, está sustentada en dos motivos, a saber:

PRIMERO: Que el Tribunal no apreció la declaración del señor DOMÍNGUEZ BLOISE en donde expone que le habían hurtado una sábana, y tampoco tomó en cuenta la situación de que su defendido se encuentra privado de su libertad y con problemas psicológicos de inestabilidad que requiere tratamiento científico. Considera el recurrente que el Tribunal no valoró las pruebas de acuerdo a la sana crítica por lo que incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, influyendo así en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDO: Que en Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, al no apreciar debidamente la declaración de LUIS ÁNGEL DOMÍNGUEZ BLOISE juntamente con las pruebas testimoniales que se encontraban en el expediente, se apartó del principio de la sana crítica al no darle validez jurídica a tales circunstancias, incurriendo así en error de derecho en la apreciación de la prueba, influyendo de manera decisiva en la parte dispositiva del fallo.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 2450 del Código Judicial, la Sala procederá a examinar cada uno de los motivos que fundamentan la causal.

Así se observa que, en torno al primer motivo el recurrente afirma que el tribunal ad quem no apreció la declaración de su mandante ni tampoco tomó en cuenta la situación de su defendido en el sentido de que el mismo se encuentra privado de su libertad y con problemas psicológicos, etc.

Tomando en cuenta que la causal invocada por el casacionista es la de error de derecho en la apreciación de la prueba, consideramos que este motivo es incongruente con la causal a demostrar, en el sentido de que equivale a otra causal que es error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. El recurrente afirma que "El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial ... no apreció la declaración de mi mandante ..., al igual que no tomó en cuenta, la situación de mi defendido ...". Es decir, que el ad quem no apreció y no tomó en cuenta el testimonio y la situación personal y social del imputado. Pues, consideramos que estamos hablando de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba ya que esta causal se origina cuando el Tribunal ad quem hace caso omiso, no considera, ni le da valor alguno a los elementos probatorios que tienen existencia material dentro del expediente, como piezas de convicción.

Otro error apreciable en el recurso del casacionista aparece cuando especifica las disposiciones que estima han sido violadas y el concepto de su infracción. En la segunda disposición expuesta por el recurrente, lejos de

explicar el concepto de la infracción que se imputa aduce como una dos conceptos de la infracción contradictorias, es decir que considera que se violó el artículo 136 del Código Penal por concepto de violación directa e indebida aplicación, lo cual no es posible tal como lo establecen precedentes que existen en nuestro país con respecto a este tema.

No cabe duda de que lo descrito contradice la técnica casacionista e impide que la Corte pudiera hacer, en su debida oportunidad, un análisis de los cargos de injuricidad que se formulan en la sentencia recurrida, lo que hace que este recurso se torne inadmisible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el Licenciado EFRAÍN ERIC ANGULO en representación del señor LUIS ÁNGEL DOMÍNGUEZ BLOISE.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ ANTONIO PÉREZ POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE HÉCTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ. MAGISTRADA. PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución del 2 de marzo de 1995 (fs. 355-357) el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, vía apelación, confirmó la sentencia N° 33 del 10 de julio de 1992 proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas en la cual se condenó a **JOSÉ ANTONIO PÉREZ (a) Toño** a la pena de cinco (5) años de prisión como autor del delito de robo en perjuicio de **HÉCTOR FERNANDO FERNÁNDEZ** (fs. 289-300).

El licenciado Alvaro Cedeño Barahona, apoderado judicial del procesado José Antonio Pérez, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación en el fondo, el cual fundamenta en dos causales con sus respectivos motivos, indicando las disposiciones legales infringidas y los conceptos en que lo han sido (fs. 405-412).

Luego de cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia oral (fs. 413, 434-447) se procede a resolver el fondo del recurso.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Se refiere el presente negocio penal al robo a mano armada de que fue víctima el señor Héctor Fernández López en horas de la noche del 16 de enero de 1991, cuando en momentos que se disponía a abordar su vehículo, estacionado frente al bar Éxodo en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, es distraído por una mujer quien, en combinación con un sujeto **-que le apuntaba con arma de fuego-**, lo obligan a conducir hasta la entrada de la carretera que va hacia Atalaya, luego llega un compañero de éstos en un vehículo, se acerca y lo apunta con una carabina, la mujer aprovecha y toma la conducción del vehículo dirigiéndose hacia Pueblo Nuevo de la Mata. Antes de llegar a la entrada se detiene, el sujeto que los sigue se sube al vehículo, y más adelante despojan a su víctima de todas sus pertenencias, abandonándolo sólo con su ropa interior.

CAUSALES INVOCADAS POR EL CASACIONISTA

El postulante fundamenta la acción en dos causales de fondo: **Error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la Ley sustancial penal**; y
Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que implica infracción de la Ley sustancial penal.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., al dar respuesta al traslado por medio de la vista N° 76 del 27 de noviembre de 1995, expone lo siguiente:

"En cuanto a la **primera causal** alegada, señala que en los tres primeros motivos expuestos, no se mencionan con precisión cuales fueron los requisitos legales que -según el impugnante- fueron omitidos por el tribunal y que sugerían la no valoración de la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos. Por lo que deben desestimarse, dado que carecen de un cargo o imputación de injuridicidad claro y concreto como lo prescribe el recurso de casación, el cual se encuentra sujeto a una serie de requisitos técnicos que deben ser cumplidos por quien pretende hacer uso del mismo".

Sobre el último motivo, descarta el yerro atribuido a la sentencia porque contrario al casacionista, afirma que si se cumplieron con los requisitos de ley para la práctica de la diligencia de la declaración indagatoria.

Por otro lado, considera que no fueron infringidos los artículos 2135, 969, 2114 del Código Judicial y que al no acreditarse la violación de una disposición adjetiva no se produce la vulneración de la ley sustancial en el caso del artículo 186 del Código Penal.

En cuanto a la **segunda causal** alegada, estima que el único motivo que presenta, referente a que la sentencia desconoció la existencia de la declaración jurada rendida por Elba Alicia Vásquez, se debe a que no fue ratificada, aún cuando la misma confirmaba o corrobora la autoría del procesado en el ilícito.

Señala que no se acredita la violación de los artículos 2122 y 1965 del Código Judicial y en consecuencia tampoco se produce la infracción del artículo 186 del Código Penal (fs. 414-431).

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

La primera causal invocada está contenida dentro de las cinco causales que contempla el numeral 1° del artículo 2434, y tiene lugar **"cuando el juzgador le asigna a la prueba un valor que no le reconoce la Ley o cuando no le reconoce el que la Ley le señala o cuando admite un medio probatorio sin ajustarse a las prescripciones legales"** (Corte Suprema de Justicia. Sala Segunda de lo Penal. Julio 17 de 1991).

En los primeros tres motivos que sustentan esta causal, el postulante se refiere a la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos.

Señala en el primero, que la mencionada diligencia no cumplió con los requisitos de Ley; en el segundo, que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, había desestimado dicho reconocimiento, por lo que al ser apreciada incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba. Y en el tercer motivo, que estimamos un tanto confuso, dice: **"La sentencia objeto de este recurso ha dado pleno valor a circunstancias que ha llamado indicios, al señalar las contradicciones producto del tiempo como indicios por considerar que existen contradicciones; incurriendo en error de derecho en la apreciación de la prueba, por cuanto la diligencia no cumplió con los requisitos de ley, lo que, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".**

Primeramente, al igual que la máxima representación del Ministerio Público, no observa esta Sala que el postulante de manera clara y precisa señale las prescripciones legales que afirma fueron omitidas por el tribunal ad-quem, lo

cual es suficiente para desestimar los motivos aludidos.

Si bien es cierto, que bajo otra ponencia, se solicitó nuevamente la práctica de la diligencia de Reconocimiento (f. 315), en la sentencia bajo análisis, al confirmar el fallo de primera instancia, el tribunal ponderó el caudal probatorio y en consecuencia, hace alusión a la diligencia objetada por el casacionista, indicando que tiene plena validez legal, según el artículo 2135 cuarto párrafo. Aprecia así, de manera razonable, no sólo ese medio de prueba sino también los otros, señalando que cada elemento es prueba de los otros, lo que arroja un conjunto de circunstancias unidas entre sí, que le dan la certeza de la culpabilidad del procesado.

Los juzgadores tienen facultad de evaluar las pruebas para formar su propia convicción, para lo cual gozan de prudente arbitrio, siempre que ello, no viole las reglas del correcto entendimiento humano.

En el cuarto y último motivo, se establece que la sentencia da valor a la indagatoria del sindicado, siendo que ésta no cumplió con los requisitos de ley tales como: exponer los hechos al sindicado, las pruebas, los indicios y que no se le nombró defensor al sindicado cuando lo requirió; y ello ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Efectivamente, la declaración indagatoria de José Antonio Pérez fue analizada por el tribunal a-quem, quien estimó que la misma entra en contradicción con las declaraciones vertidas por Juan Manuel Sánchez, María Farraguta de Peralta y Heriberto Enríquez González Vanega.

Contrario a lo afirmado por el casacionista, la declaración indagatoria rendida por José Antonio Pérez, el día 18 de abril de 1991, ante la Fiscalía Tercera del Circuito de Veraguas (fs. 129-136), se ajusta a los requisitos de ley.

Ello es así, por cuanto fue informado del derecho de ser asistido por un abogado, de conformidad con el artículo 22 constitucional. Si bien manifestó su deseo de contar con el apoyo de un Defensor de Oficio, no es menos cierto, que se consignó en la mencionada diligencia, que ninguno de los dos miembros del Instituto de Defensoría se encontraban y ante ello, José Antonio Pérez decidió prescindir de esa garantía. Consta además, que se le leyó y explicó el contenido del artículo 2113 del Código Judicial. En ese sentido, también le fue leída la denuncia suscrita por Héctor Fernando Fernández López, por lo que no prospera el cargo de injuridicidad.

Como disposiciones legales infringidas se mencionan los artículos 2135, 969, 2114 del Código Judicial por violación directa por omisión y el artículo 186 del Código Penal por violación directa por comisión.

El artículo 2135 que se refiere a los requisitos de ley para proceder a la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, no se violentó, ya que del acta de la diligencia aludida (fs. 155-156) se observa que si se indicó cual era el orden de izquierda a derecha y si bien no consta el nombre de la persona que fue reconocida, el tercero de derecha a izquierda era precisamente, el imputado Juan Antonio Pérez. Además, es falso que no exista constancia de la negativa del imputado a firmar el acta en comento, ello consta en el informe secretarial visible a foja 161.

Por otra parte, cabe anotar que aunque no se le indicó al sindicado el derecho que tenía de escoger el lugar que estimara conveniente dentro de la fila, en el cuarto párrafo del artículo 2135 del Código Judicial señala: "**sólo se dejará constancia de los nombres de las personas integrantes de la fila y de quien hubiere sido reconocido**", por lo que la objeción presentada no representaba un imperativo legal.

El artículo 969 del Código Judicial define lo que se debe entender jurídicamente por indicio y establece que para que un hecho sea considerado como tal, éste deberá estar debidamente probado en el proceso. No indica esta norma

los criterios taxativos para valorar la prueba el juzgador, por lo que se aplican los principios generales de la sana crítica, por lo tanto tal disposición no es susceptible de ser violada en este caso.

El artículo 2114 del Código Judicial obliga al funcionario instructor a exponer detalladamente al imputado que va a rendir declaración indagatoria, el hecho que se le atribuye. Como se señaló al analizar el motivo cuarto, en autos consta que el funcionario de instrucción se ocupó de que le fuera leída la denuncia presentada en su contra; por lo que no se da la violación de la normativa en comento.

Finalmente, en cuanto al artículo 186 del Código Penal, que describe el delito de robo agravado y en el cual se subsumió la conducta ilícita del procesado, en los casos de causales probatorias esta Sala ha reiterado que la violación de la ley sustantiva es consecuencia de la violación de normas procesales, lo que en este caso, no se ha comprobado.

Con respecto a la segunda causal invocada: **Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que implica infracción de la Ley sustancial penal**, ésta se origina cuando el Tribunal **"1. No considera la prueba que materialmente aparece en el proceso o, 2. Afirma que la misma no existe a pesar de que es parte integrante del expediente, o 3. Le asigna valor probatorio a un elemento de convicción que no tiene existencia material en el proceso"** (Fábrega Ponce/Guerra de Villalaz. Casación. Panamá 1995. pág. 318).

El único motivo que sustenta esta causal consiste en que la sentencia bajo censura desconoció la declaración jurada rendida por Elba Alicia Vásquez, de quien se dice condujo el automóvil. Manifiesta el casacionista, que en la misma, la declarante señala que no sabía manejar automóviles, por lo que se incurre en esta causal.

No se hace mención del folio donde consta la prueba aludida, la que se encuentra a fojas 332 a 335. La misma fue rendida ante la Policía Técnica Judicial, agencia de Veraguas el día **16 de septiembre de 1993**, dos años y siete meses después del ilícito investigado.

En esa declaración, la señora Vásquez narra detalladamente los hechos previos y posteriores al ilícito, su participación en el mismo, al igual que la de José Antonio Pérez (a) Toño y Manuel Ossa. Admitió que condujo el vehículo **- pero obligada por Toño-** tal como lo afirmó el ofendido y lo que también se avala con la declaración rendida por Teodoro Ramos Pimentel, la cual fue mencionada en la sentencia objeto de este recurso.

Si bien es cierto que la señora Vásquez, afirma que no sabía conducir automóviles, no menos cierto es, que explica que tal vez pudo hacerlo porque era automático. Luego entonces, esta prueba, lejos de favorecer al procesado, lo compromete más.

En cuanto al hecho del por qué no se consideró la declaración de la señora Vásquez, contrario a la opinión de la Procuraduría General de la Nación, quien hace alusión a lo normado en el artículo 2068 del Código Judicial y al artículo 52 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, se estima lo siguiente:

Primeramente, la mencionada Ley en su artículo 2 numeral 2 establece entre las funciones de la Policía Técnica Judicial :

> **"Recibir las denuncias, declaraciones y querellas que les sean presentadas por infracciones punibles, dar aviso de ellas por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, al respectivo Agente del Ministerio Público y practicar las diligencias preliminares que conduzcan al esclarecimiento de los delitos, descubrimiento y aseguramiento del delincuente, y realizar por delegación del Ministerio Público todas aquellas diligencias procesales que no estén reservadas a éste por la Ley".**

Cumpliendo con esa obligación, se le tomó declaración debidamente juramentada a la señora Elba Alicia Vásquez, por lo que se descarta que tenga que ser ratificada.

Por otra parte, el tribunal de alzada debía limitarse a los puntos objetados por el apelante (art. 2428 del C. J.) mismos que se referían a la motivación de la sentencia impugnada de fecha 10 de julio de 1992.

Si se observa muy bien, la prueba que se dice fue desconocida por el ad-quem, fue rendida posterior al fallo objeto de la apelación y al escrito de apelación presentado el 27 de julio de 1992 (fs. 289-300 y 303-304).

Luego entonces, no podía ser atendida por el tribunal de alzada y mucho menos si es desfavorable al procesado, como lo hemos evidenciado en párrafos anteriores.

De consiguiente la alegada violación directa por omisión de los artículos 2122 y 1965 del Código Judicial, y al artículo 186 del Código Penal no se ha dado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE BERRÍOS & BERRÍOS, APODERADOS DE BANQUE ANVAL, S. A., EN EL SUMARIO SEGUIDO A ESTE ENTE FINANCIERO POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE YAKIMA INTERNACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de decisión el recurso de casación en el fondo interpuesto por la firma forense BERRÍOS & BERRÍOS, apoderados de **BANQUE ANVAL, S. A.** contra el auto emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del 26 de enero de 1993, el cual confirmó el auto del 26 de marzo de 1992 proferido por el Juez Cuarto de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que niega un incidente de excepción de cosa juzgada promovida por dicho banco.

La historia concisa del caso revela que el Juez Octavo de Circuito de Panamá, Ramo Penal, emitió auto del 21 de febrero de 1989, que declaró prescrita la acción penal en el sumario seguido por la sociedad **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.** contra **BANQUE ANVAL, S. A.** y sus ejecutivos, con relación al traspaso de la cuenta cifrada N° 271001 a la N° 271002, en el que se da cuenta que los hechos investigados se suscitaron de enero de 1979 a agosto de 1980, siendo que habían transcurrido 8 años, 9 meses y 19 días aproximadamente.

Por su parte, **BANQUE ANVAL, S. A.** promovió incidente de excepción de cosa juzgada, el cual negó el Juez de conocimiento mediante auto del 26 de marzo de 1992, por estimar que se trataba de dos cuentas diferentes y por tanto dos hechos diferentes.

Dicha decisión fue apelada, y el Segundo Tribunal Superior, mediante auto del 26 de enero de 1993, confirmó la decisión del Juez Cuarto Penal, considerando que se trataba de dos cuentas distintas y, que por conveniencia, sugirió desdoblar la investigación, por tratarse de otra situación surgida con posterioridad".

El recurso que nos ocupa está fundamentado en una sola causal, cual es: error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual está sustentada en cuatro motivos, que se sintetizan de la siguiente manera:

En cuanto al primer motivo, señala el casacionista que el Tribunal de Alzada valoró erróneamente el auto del 26 de marzo de 1992 -dictado por el Juez Cuarto de Circuito de Panamá de lo Penal- que negó el incidente de excepción de cosa juzgada, toda vez que no se puede pretender en la valoración de una decisión judicial "desdoblar" los hechos investigados y asumir que se trata de nuevos hechos distintos a los investigados y declarados prescritos en decisión ejecutoriada.

El segundo motivo estriba en que el auto impugnado falla al valorar la decisión del a-quo, porque las decisiones ejecutoriadas son indivisibles y no se pueden desdoblar los hechos para ordenar nuevas investigaciones penales, pues viola el principio de "autoridad de cosa juzgada".

El tercer motivo se funda en que el Tribunal de Alzada, al valorar erróneamente la decisión ejecutoriada del Juez Octavo de Circuito Penal, violó el principio de autoridad de cosa juzgada, con lo que "autoriza arbitrariamente una nueva investigación penal sobre hechos objeto de una encuesta judicial archivada por estar prescrita la acción penal.

El cuarto motivo se refiere a que el auto impugnado, al valorar mal la decisión del inferior, incurrió en error de derecho en la valoración de la cuenta prueba documental pública, lo que influyó de modo sustancial en la parte resolutiva del fallo.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 2450 del Código Judicial, la Sala procederá a examinar cada una de los motivos que fundamentan la causal.

Advierte la Corte que los motivos están fundamentados en la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba "la cual se funda en documentos auténticos que constan en el proceso", la cual está contemplada en el artículo 2435, numeral 5° del Código Judicial; por tanto, los motivos deben tener una relación directa con la causal invocada.

La causal de error de derecho en la apreciación de la prueba se da en tres supuestos: a) cuando el juez asigna a la prueba una fuerza que la ley no le atribuye; b) cuando le desconoce la fuerza que la ley sí le atribuye; c) cuando se permite su producción sin satisfacer los requisitos legales, aplicándoles luego una fuerza establecida solamente para elementos probatorios que reúnen todos los requisitos exigidos por la ley.

Observa esta Corporación de Justicia que en los cuatro motivos invocados por el recurrente resalta el vicio de incongruencia con la causal aducida, toda vez que cuando se invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba como causal de casación, se parte de la premisa de que el Tribunal de segunda instancia tomó en consideración la prueba, es decir, que la tuvo en cuenta al momento de fallar y la apreció, pero que se equivocó al darle el valor jurídico que le asigna la ley.

Desde este punto de vista, es un contrasentido invocar esta causal y señalar como motivo que el ad-quem no tomó o no apreció tal o el medio probatorio esgrimido.

Ahora bien, siendo que los motivos de las causales desempeñan un papel importante en el recurso de casación, porque su misión es la de fundamentar y

comprobar la causal invocada, al no haber prosperado ninguno de los cargos de injuridicidad que fueron expresados por el casacionista, no le queda otra opción a la Sala que la de no casar la sentencia impugnada.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el auto del 26 de enero de 1993 dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICDA. ANA I. BELFON VEJAS, DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MANUEL SIEIRO MURGAS POR EL DELITO DE TORTURA COMETIDO EN PERJUICIO DE NELSON CEDEÑO FRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Ana Isabel Belfon Vejas ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra sentencia de 21 de agosto de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que reforma la sentencia proferida por el juez de la causa en el sentido de condenar a Manuel Sieiro Murgas, a la pena de 56 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de tortura cometido en perjuicio de Nelson Cedeño Frías; Armando Peralta Cortés; Teófilo César Medina; Nicolás Torres Beleño y Quiterio Alveo Hernández.

En este momento procesal le corresponde a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, a lo que se procede.

El examen del libelo permite advertir que la recurrente invoca como única causal la estipulada en el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial a saber: "Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o en la extensión de la pena aplicable" (f. 689).

En cuanto a los motivos relativos a la causal la recurrente plantea que su defendido ubicó a las víctimas en la cancha de baloncesto "para evitar que salieran lesionados" (primer motivo); que su defendido "no provocó ninguna lesión física o psíquica de gravedad en los ofendidos" (segunda causal), y que los ofendidos fueron víctimas de una "lesión personal" (tercer motivo) (f. 690). La Corte es del criterio que los motivos aducidos no se compadecen con la causal invocada puesto que los argumentos no indican de qué manera la sentencia atacada incurre en el error de derecho al calificar el delito. De ninguna manera los motivos aducidos contienen cargos de injuricidad que indiquen que la sentencia censurada incurre en los dos supuestos por los cuales se incurre en error de derecho al calificar el delito: a) cuando la calificación ha influido en el tipo; b) cuando la calificación ha influido en la extensión de la pena aplicable. El primer supuesto opera cuando el sindicado ha sido sancionado por un delito distinto por el cual fue llamado a juicio. En tanto que se incurre en el segundo supuesto cuando el juez de la causa sanciona al procesado con base a un tipo penal que, si bien se encuentra en el capítulo o título que preceptúa el delito genérico por el cual fue llamado a juicio, no corresponde a la situación jurídica del procesado.

Es evidente entonces que estamos frente a un libelo de casación carezca de motivos por cuanto que adolecen de coherencia con la causal aducida, situación

que ocasiona que el recurso se encuentre desprovisto de "... de sustento lógico-jurídico" (sentencia de 5 de mayo de 1994).

Por lo que hace a las disposiciones legales infringidas, la letrada cita el artículo 160 del Código Penal como la disposición legal infringida por la sentencia atacada. Sin embargo, vemos que la recurrente omite el concepto en que ha sido infringido la norma sustantiva que plantea, es decir, si la infracción es en concepto de violación directa, por indebida aplicación o por interpretación errada.

Ante la comprobación de que el libelo de casación en el fondo no cumple con las formalidades estipuladas en el literal c, numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, es del caso no admitir el recurso de casación contra la sentencia atacada.

Por todo lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo contra sentencia de 21 de agosto de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a Manuel Sieiro Murgas, a la pena de 56 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de torturas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JESÚS BARRERA GONZÁLEZ SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE EVA MARÍA HERNÁNDEZ CASTRO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 30 de enero del año en curso, la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, informó que se había dado cumplimiento a las diligencias posteriores a la celebración de la audiencia en el presente recurso de casación, y que correspondía al Sustanciador elaborar el proyecto de resolución, conforme lo dispone el artículo 2448 del Código Judicial.

Se trata del recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado ALCIDES ZAMBRANO, abogado defensor de **JESÚS BARRERA GONZALEZ**, dentro del proceso penal que se le sigue por delito contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de **EVA MARÍA HERNÁNDEZ CASTRO**.

LOS HECHOS

Consta en autos, que el día once de diciembre de 1994, se apersonó ante las oficinas del Jefe de la Policía Técnica Judicial de la Sub-Agencia de Los Santos, la señora Luciana Castro González, a fin de presentar querella contra el señor Jesús Barrera, por el delito de tentativa de violación carnal en perjuicio de su menor hija, de 10 años de edad, Eva María Hernández Castro. Relata que la noche anterior, su cuñada Teodolinda Hernández, escuchó los gritos de la joven y al salir pudo percatarse que un muchacho tenía agarrada a su sobrina cerca del servicio y al verla se dio en precipitada fuga. Dicha querella y otras declaraciones recibidas en la agencia de la Policía Técnica Judicial, fueron ampliadas y ratificadas ante el Personero Municipal de Los Santos, además de recibirle declaración indagatoria al inculpado. Al calificar el sumario, el Juez

de Circuito de Los Santos llamó a juicio al señor Barrera por tentativa de violación carnal y con posterioridad le impuso la pena de 24 meses de prisión, sentencia que al ser apelada por el Ministerio Público, fue reformada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, aumentando la sanción a 48 meses de prisión.

EL RECURSO DE CASACIÓN

Contra la sentencia de segunda instancia fue anunciado y formalizado recurso de casación en el fondo, basado en dos causales referentes a las circunstancias agravantes y que aparecen descritas en los numerales 8 y 9 del artículo 2434 del Código Judicial.

La Sala procede al examen de la primera causal invocada, conforme lo prevé el artículo 2450 del Código Judicial. Se trata del "error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes que implica violación de la ley sustantiva y que ha influido en la parte dispositiva del fallo".

El primer motivo se refiere a la admisión de la circunstancia agravante contenida en el numeral 9 del artículo 67, del Código Penal, que consiste en la introducción a la casa habitación de la menor mediante escalamiento. Este motivo es coherente con la causal aducida y se sustenta en el informativo de un Detective de la Policía Técnica Judicial y la declaración de la ofendida.

El segundo motivo es una apreciación del recurrente sobre una fracción de uno de los párrafos de la sentencia impugnada, pero que no concreta un hecho ajeno a la circunstancia mencionada.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, se anotan los artículos 904 del Código Judicial y el 67 del Código Penal. Respecto a la primera norma citada, se dice que fue violada directamente por omisión, porque al valorar los hechos constitutivos de la circunstancia agravante de escalamiento, no se aplicaron las reglas y principios de la sana crítica. Sobre este aspecto cabe recordar que la lógica, la experiencia y los conocimientos jurídicos en conjunto, permiten al juzgador apreciar las pruebas, de tal manera que en este caso el informe de la policía que se apersonó al lugar de los hechos inmediatamente después de que éstos ocurrieron, más la versión de la ofendida conjuntamente con los antecedentes del ofensor en este tipo de conductas, fueron los elementos que llevaron a la convicción del Tribunal que la penetración a la vivienda debió darse en forma irregular y no se advierte un error manifiesto que permita deducir que Jesús Barrera entró por le puerta o que la menor le abrió la misma, pues no hay elementos de juicio suficientes que conduzcan a ello, salvo las conjeturas externadas por la defensa.

En lo que respecta a la violación del artículo 67 numeral 8, que se dice fue violado en el concepto de violación directa por comisión, no puede perderse de vista que el ingreso a una vivienda en horas de la noche cuando sus ocupantes están durmiendo, con propósitos de abusar carnalmente de una menor, constituye una circunstancia modificadora de la responsabilidad penal y al tenor de la apreciación hecha por el Tribunal, tal como se ha expresado en el párrafo que antecede, no se incurrió en la infracción señalada.

La segunda causal de fondo alegada es la que trata sobre la "interpretación errada de la ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes", prevista en el numeral 9 del artículo 2434 del Código Judicial.

En cuanto al primer motivo que sustenta la causal aducida, el recurrente anota que el Tribunal Superior al aplicar el numeral 1° del artículo 67 del Código Penal, incurrió en un error de interpretación de la norma al no advertir que el tipo penal a que se contrae la investigación incluye esta circunstancia dentro de sus elementos integrativos. En efecto, ese es un cargo de injuridicidad del fallo impugnado que guarda estrecha relación con la causal invocada.

En lo que se refiere a las disposiciones legales infringidas, se citan los artículos 67 y 217 del Código Penal. Si bien es cierto -tal como lo apunta el Ministerio Público-, que el recurrente yerra al referirse al concepto de la infracción de la segunda norma, sin embargo, acierta al precisar la interpretación errónea de la primera, en virtud de que en los tipos de violación carnal agravada por razón de la edad de la víctima, el legislador ha tomado en consideración la superioridad del adulto y la elevada vulnerabilidad de la minoridad para fijar una pena más grave.

La infracción anterior, conduce a considerar probada la segunda causal y por lo tanto con base a lo dispuesto por el artículo 2453 del Código Judicial, cabe ajustar la pena, manteniendo la primera agravante, no así la segunda por cuanto esta es elemento constitutivo del tipo penal cometido en este caso y se excluye legalmente porque no puede imponerse una sanción que ya fue considerada en la punibilidad.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA LA SENTENCIA RECURRIDA y FIJA en cuarenta y dos (42) meses la pena de prisión que debe cumplir JESÚS BARRERA GONZALEZ como responsable del delito de tentativa de violación carnal en perjuicio de la menor Eva María Hernández Castro.

Fundamento legal, artículos 2434 numeral 9, 2450 y 2453 del Código Judicial, y artículos 67 numeral 1° y 217 del Código Penal, antes de la reforma introducida por la Ley 27 de 1995.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.)JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE CARLOS LUIS BAULE DEAGO, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN Y VENTA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Omar E. Samaniego ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 11 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de Los Santos que condena a Carlos Luis Baule Deago a la pena de treinta meses de prisión, como responsable del delito de posesión ilícita de drogas.

Corresponde a la Sala pronunciarse en este momento procesal sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario, a lo que se procede.

El examen del libelo de formalización del recurso permite advertir que el recurrente, en relación a las disposiciones legales que dice infringidas, no expresa en forma adecuada el concepto en que han sido infringido los artículos 2185, 2191, 904, 905, 970 y 973 del Código Judicial. En tal sentido aduce que han sido infringidas "de forma directa por error de derecho en la apreciación de la prueba" (fs. 542-547), concepto que es extraño al recurso de casación. El numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial establece claramente que la norma jurídica puede ser infringida en concepto de violación directa; por efecto de una interpretación errada de la ley o de la indebida aplicación de la norma al caso juzgado.

Con relación a la infracción del artículo 38 del Código Penal, sostiene el recurrente que ha sido violado "en forma directa por omisión", lo que resulta incongruente pues la sentencia atacada en ningún momento omite la alisión al concepto de la autoría penal, que en este caso recae sobre Baule Deago. Finalmente, sostiene el recurrente que el artículo 258 del Código Penal ha sido infringido "en forma directa por comisión" (f. 548). Recuerda la Sala que el incurre en ese vicio cuando el Tribunal Superior adecúa correctamente la norma jurídica a la situación planteada pero al hacerlo, desconoce un derecho consagrado en esa norma. Ahora bien, si el recurrente expone que el artículo 258 ibídem ha sido infringido porque "la conducta realizada por BAULE, no se ajusta al tipo penal establecido en la norma in comento" (f. 548), esa explicación no se compadece con el concepto de infracción invocado, pues de ella no infiere que la sentencia atacada haya desconocido un derecho consagrado en favor del sentenciado.

Como quiera que el concepto de la infracción de las disposiciones legales que se alegan como violadas no ha sido indicado ni sustentado adecuadamente, se concluye que el recurso de casación no cumple con el requisito que establece el literal c numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

Por las consideraciones anteriores LA CORTE SUPREMA, SALA DE PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado Omar E. Samaniego contra la sentencia de 11 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que la sentencia condenatoria de Carlos Luis Baule Deago por la comisión del delito de posesión ilícita de drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

APELACIÓN DE AUTO DE PROCEDER, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARCO ODERICO BULTRÓN NIETO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JORGE ELÍAS VEGA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ingresa a la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, el proceso seguido a **MARCOS A. BULTRóN NIETO**, sindicado del delito de homicidio cometido en perjuicio de **JORGE E. VEGA ARGÜELLES**, a fin de resolver el recurso de apelación promovido contra el auto de enjuiciamiento proferido en esta causa.

Las constancias procesales ponen en evidencia que el Tribunal Superior mediante auto de 13 de septiembre de 1995 (fs. 351-358) llamó a responder en juicio penal, por la vía en que interviene el jurado de conciencia, al prenombrado BULTRÓN NIETO por la comisión del delito de homicidio que describe el Capítulo I Título I del Libro II del Código Penal.

En la notificación de la resolución antes mencionada el imputado y su defensor interpusieron el correspondiente recurso de apelación, impugnación que únicamente fue sustentada por la defensa técnica del imputado.

A fojas 364-373 se observa la sustentación del recurso de apelación promovido por la defensa del imputado, quien en lo medular de su argumentación

señala que el comportamiento de su defendido se encuadra en la causa de justificación conocida como legítima defensa que está consagrada en el artículo 21 del Código Penal.

En su extenso escrito, la defensa manifiesta que su patrocinado debe ser favorecido con un sobreseimiento definitivo toda vez que el señor **BULTRÓN** fue víctima de una agresión por parte del occiso.

Para justificar su solicitud la defensa técnica del imputado señala que la existencia de dos armas blancas, una del occiso y otra de su representado, la inexistencia de la relación de trabajo que se aduce existía entre ambos y que originó una supuesta deuda que el fallecido pretendía cobrar, los testimonios que revelan el carácter agresivo del difunto cuando ingería alcohol y el hecho de producirse el incidente, entre otros aspectos, frente a la casa del imputado, cuando **VEGA** siguió al **BULTRÓN** para cobrarle, dan margen para apreciar la justificación que la defensa alega en el proceder de su representado.

Al corrérsele un traslado el recurso de apelación al Ministerio Público y al acusador particular, ambas partes consideran que se debe negar el recurso y confirmar el auto de enjuiciamiento recurrido.

Para resolver la impugnación, la Sala considera que debe dejarse claramente establecido que en el sumario no está comprobada la causa de justificación que la defensa del imputado alega.

No está comprobada la causa de justificación que se alega por lo que corresponderá al Tribunal de conciencia decidir la responsabilidad penal del imputado, ocasión que permitirá a la defensa y a las partes acusadoras externar los argumentos que estimen convenientes para fundamentar sus pretensiones.

El enjuiciamiento, por tanto, es correcto toda vez que se encuentran reunidos los requisitos exigidos en nuestra legislación procesal penal y a que hace referencia el artículo 2222 del Código Judicial, es decir, plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad.

Está comprobado que **BULTRÓN** le causó le muerte a **VEGA**, pero existen serias dudas sobre la existencia de la justificación alegada, por lo que debe confirmarse el auto apelado.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución recurrida en apelación.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ANTOLÍN CASTILLO RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE SALOMÓN ALMANZA GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante auto calendado 10 de octubre de 1995, abrió causa criminal contra Antolín Castillo Rodríguez, como presunto infractor del Capítulo I, Título I del Libro Segundo del Código Penal, o sea por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Salomón Almanza González. Contra esta decisión jurisdiccional

anunciaron sendos recursos de apelación el encausado y su defensor técnico.

La firma forense Ramsey, Pérez & Asociados, apoderados judiciales del imputado Castillo Rodríguez, manifiesta que su disconformidad con la resolución judicial impugnada consiste en que en la encuesta penal no existen suficientes indicios que involucren a su defendido en el hecho punible imputado. En tal sentido, explica que "el Auto Impugnado, tiene como fundamento para **DECRETAR** la apertura de causa criminal ... la existencia del hecho punible ... que el mismo ha sido reconocido plenamente por **DANIEL CLERY** ... Y además ... lo declarado por **ALVIS EUGENIO ORTEGA ALVEO**" (f. 375). A su juicio, sin embargo, el señalamiento de Daniel Clery es de valor dudoso, pues en su primera declaración manifestó no haber visto lesionado a Salomón Almanza, y luego, "pasados dos (2) años de investigación ... afirma que ha recordado el rostro de la persona que sostuvo la riña con su difunto amigo" (f. 376); aunado a esto, indica que la descripción que ofrece Daniel Clery del presunto autor del delito "NO COINCIDE CON LA DE NUESTRO DEFENDIDO" (f. 375).

Por otro lado, sostiene la defensa técnica que el deponente Alvis Eugenio Ortega brinda una descripción "más cercana a la de nuestro cliente"; que, sin embargo, "EL NO HA RECONOCIDO A NUESTRO CLIENTE, NI TAMPOCO LO HA SEÑALADO, NI SE LE HA CITADO EN NINGÚN MOMENTO PARA QUE COMPAREZCA Y DIGA SI NUESTRO CLIENTE ES ESA PERSONA" (f. 376).

Con base en los anteriores argumentos, la parte recurrente solicita "se CONCEDA A NUESTRO PATROCINADO ... un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2211, numeral 2do. del Código Judicial" (f. 377).

La Sala pasa a resolver el recurso interpuesto, sólo sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por el recurrente, según lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite conocer que Salomón Almanza González murió a consecuencia de varias heridas punzo cortantes producidas con arma blanca, durante la madrugada del 29 de noviembre de 1992, siendo localizado su cuerpo a un costado de la cantina Liu, ubicada en la avenida Libertador, Distrito de la Chorrera, Provincia de Panamá. De acuerdo con las consideraciones médico-legales consignadas en el protocolo de necropsia, el óbito fue ocasionado por "-SHOCK HEMORRÁGICO -HERIDA CARDÍACA -HERIDA PUNZO-CORTANTE TORÁCICA" (f. 33).

Con la finalidad de decidir sobre la situación jurídica de Castillo Rodríguez, resulta importante adelantar que el tribunal a-quo ordenó su enjuiciamiento fundado en "que el mismo ha sido reconocido plenamente por DANIEL CLERY, quien lo señala como la persona que armada con un cuchillo combatió con el occiso ... Pesa en su contra además lo declarado por ALVIS EUGENIO ORTEGA ALVEO, quien relató que a su lado pasaron dos personas, la segunda de ellas armada con un cuchillo ... la descripción que brinda ... coincide con la descripción física de ANTOLÍN CASTILLO" (f. 367).

Ahora bien, en primer término advierte la Sala que la credibilidad del testigo Daniel Clery González resulta cuestionable, ya que en su primera declaración, rendida ante la Policía Técnica Judicial el día 2 de diciembre de 1992, sostuvo que "cuando ibamos (sic) a la altura de la Cantina la Carta Vieja, de repente yo ví a mí comp (sic) peleando con otro sujeto este era de contextura GRUESA, de tex (sic) Blanco, de una extatura (sic) aproximada de 1.70m. de 40 ó 45 años de edad ... de cabello Negro Lacio" (f. 58). Esta versión la reitera en otra declaración, esta vez en la Personería Municipal del Distrito de La Chorrera, el 26 de enero de 1993 (f. 80).

Posteriormente, el 28 de marzo de 1994, compareció ante la Policía Técnica Judicial y manifestó que "yo iba a bordo de un bus de la ruta Chorrera-Panamá ... iba un señor ... era la persona que había ultimado a mi amigo ... posteriormente ... al pasar en un bus en asocio con un amigo ... me percaté de que era el mismo sujeto ... llamamos a este despacho para que lo fueran a buscar ... y ahora que lo vuelvo a ver no me cabe la menor duda que es el sujeto que mató a mi amigo" (fs. 222-224).

No obstante las declaraciones en cita, es de notar que la persona identificada por Clery González como presunto autor del hecho punible responde a la siguiente descripción: "nacido ... el día 15 de agosto de 1933, caucásico, cabello canoso de estatura aproximada de un metro setenta (1.70) centímetros, y peso aproximado de ciento setenta libras (170 lb)" (f. 239).

Como se puede advertir, Clery González identifica como responsable del hecho de sangre a un sujeto cuyas generales evidentemente no coinciden con las que él mismo detallara días después de perpetrado el delito.

Al respecto la doctrina nos informa que "el testimonio se conserva fiel en la memoria del deponente **solo algunos días después de la percepción**, puesto que luego de transcurrido algún tiempo se presenta mal determinado y notoriamente variado en las distintas personas" (NÚÑEZ CASTILLO, Adulfo. El testimonio como medio de prueba. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá 1978, pág. 30). Precisamente esto es lo que ocurre en el caso que ahora nos atañe, ya que el declarante afirmó, días después de cometido el ilícito, que el agresor tenía "de 40 ó 45 años de edad ... de cabello Negro Lacio" (f. 58) y, posteriormente, transcurridos 2 años, reconoce a un sujeto cuyo aspecto (62 años de edad y cabello canoso), no se ajusta a esa primera descripción.

Frente a esa situación, se concluye que esta prueba testimonial no puede ser considerada como un elemento de convicción válido para ubicar a Castillo Rodríguez en la escena del crimen, en razón de que, como viene dicho, las declaraciones del testigo Clery González no muestran coherencia en cuanto a la identidad del autor del hecho punible.

Por otro lado, consta en las sumarias el testimonio de Alvis Eugenio Ortega Alveo, quien manifestó que "paso un señor casi al lado mío, y más atrás venía otro, pude verle al que iba detrás que llevaba un cuchillo en la mano ... al rato voltee a mirar y ví que el señor que iba atrás venía limpiando el cuchillo ... Yo le calculó (sic) unos 45 a 50 años, de mediana estatura, más bien delgado, blanco y tenía bastante canas ..." (f. 105-106). Esta descripción, si bien se asemeja mucho a la del imputado Castillo Rodríguez, **carece de eficacia probatoria** al admitir el deponente que no podría reconocer a la persona que portaba el arma blanca, pues "la cara no se la llegué a ver muy bien ya que él me paso de lado" (f. 106).

Finalmente, valga por su relevancia señalar que el imputado Castillo Rodríguez, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, negó la comisión del delito, señalando que el día de los hechos "... estabamos (sic) en la casa mi señora y yo, nos pusimos una rato a ver televisión y no salí en toda la noche" (f. 241). Esta versión es corroborada por su esposa Alicia Delgado de Castillo (f. 262).

Las anteriores consideraciones permiten a la Corte concluir que, si bien ha quedado comprobado el hecho punible, no existen elementos de convicción que vinculen debidamente al imputado Castillo Rodríguez en el homicidio de Salomón Almanza González. Por consiguiente, es del caso declarar un sobreseimiento provisional, con fundamento en el artículo 2211, numeral 2, del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto del 10 de octubre de 1995, en el sentido de SOBRESEER PROVISIONALMENTE a Antolín Castillo Rodríguez, en cuanto a la imputación del delito de homicidio cometido en perjuicio de Salomón Almanza González.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. CARLOS HERRERA MORAN CONTRA EL AUTO DE PROCEDER DICTADO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, ha ingresado a la Sala Segunda de la Corte Suprema, en grado de apelación, el proceso seguido al señor **SAMUEL ANTONIO COUTTE FLORES** sindicado por el delito genérico de homicidio en perjuicio de **PEDRO ÁBREGO FLORES**, hecho ocurrido el 27 de mayo de 1989.

El recurso fue interpuesto por el sindicado y su defensor Licenciado **CARLOS M. HERRERA MORÁN**, contra el auto proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 27 de agosto de 1991, mediante el cual se abre causa criminal contra el sindicado.

Con motivo de este recurso, se corrió traslado al Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, Doctor **MILCIADES A. MÉNDEZ V.** a fin de que hiciera valer sus objeciones al respecto, lo cual hizo mediante contestación de traslado en Vista Sin número del 11 de mayo de 1994.

El auto encausatorio recurrido se basa en que contra el imputado milita la declaración de la testigo ocular **GLADYS CEDEÑO ÁLVAREZ** quien aporta una versión diferente en cuanto a cómo se dieron los hechos que produjeron la muerte de **PEDRO ÁBREGO FLORES**; además el informe pericial determina que la ocurrencia de los hechos se inclina más a lo narrado por ésta.

Ahora bien, antes de emitir un pronunciamiento de fondo, es necesario revisar las principales piezas procesales que componen el presente negocio.

BREVE RELATO DE LOS HECHOS:

El sumario nos indica que el día 21 de mayo de 1989, en horas de la noche, falleció el ciudadano **PEDRO ÁBREGO FLORES** a causa de herida con arma de fuego en el sector de Cabuyita del corregimiento de Tocumen, Provincia de Panamá.

Al respecto, **GLADYS CEDEÑO ÁLVAREZ**, concubina del difunto y único testigo del hecho, afirma en su declaración que aproximadamente a las seis de la tarde del 21 de mayo de 1989, ella y su señor **PEDRO ÁBREGO FLORES** se dirigieron a la quebrada la Candelaria de Tocumen para bañarse, pues no cuentan con agua en su vivienda. Estando en ese lugar, la testigo narra que se despojó de sus ropas y procedió a entrar al agua, mientras el occiso permanecía "al lado mío, ya que también iba a bañarse" (f. 19), en ese momento aparece un hombre (el sindicado) que "le pidió cédula de identidad personal a mi señor, mi señor le contestó que no tenía cédula" (f. 19). Según lo declarado por la testigo, a el sindicado no le importó la razón que le diera el hoy occiso sobre que no portaba cédula porque solo habían ido a bañarse, y siguió pidiéndole la cédula insistentemente, fue entonces cuando "empezó una lucha entre mi esposo y el hombre que acababa de llegar", luego escuchó dos disparos y a su señor decir "Cedeño me mataron"; fue por esto que salió corriendo para dar aviso a los familiares de **ÁBREGO FLORES** sobre lo ocurrido. También refiere la testigo que, el sujeto que hirió de muerte a su señor no se identificó y que éste no sacó en ningún momento el cuchillo encontrado en la escena del crimen, de propiedad de **ÁBREGO FLORES**.

No obstante, en ampliación de la declaración, la testigo varía la anterior versión, y afirma que la víctima no estaba en el agua sino en la orilla, que estaba parado cuando ocurrieron los hechos aproximadamente a metro y medio de donde estaba ella; que al insistirle el sujeto a **ÁBREGO FLORES** que le entregara la cédula, observó que aquél tenía la mano en la cintura, y que al responder **ÁBREGO FLORES** que no la tenía, sacó el arma y le disparó. Con respecto a el cuchillo del occiso, refiere que se encontraba como a dos metros de distancia de éste, envuelto en la ropa que él se había despojado para bañarse, e indica

categóricamente que su marido no lo sacó ; que **ÁBREGO FLORES** había ingerido cerveza, pero "él no estaba borracho" (f. 46).

Por su parte, el sindicado, **SAMUEL COUTTE** narra en su declaración indagatoria, que el día en que se dieron los hechos, él se encontraba junto con el Cabo **HERRERA** vestidos de civil, en un operativo de protección y prevención de ataques a la Fuerza Aérea; que estando en el lugar "yo me desplacé en el área sólo y mi compañero **HERRERA** se quedó en el carro en que andábamos"; indica que caminando se sorprendió con la presencia de un señor y una señora, y que, luego de identificarse como miembro de las Fuerzas de Defensa les pidió la cédula, a lo cual "el señor me contestó que él no estaba solo y que habían personas con él por allí cerca"; es en ese momento que **ÁBREGO FLORES** lo agarra por la basta del pantalón y lo empieza a halar hacia el barranco (estaba más abajo) y saca, según dice **COUTTE**, un cuchillo "de esos de cacería, me hala hacia él y me tira con el cuchillo", es por eso que **COUTTE** saca el arma de reglamento, la monta manipulando con la mano derecha sobre su cadera e hizo el primer disparo de advertencia, pero al ver que **ÁBREGO FLORES** no lo soltaba, hizo otro disparo al hombro, entonces el occiso lo soltó y cayó luego de decirle a su señora que lo habían matado (f. 52-56).

En cuanto a la autopsia del cadáver de **ÁBREGO FLORES**, el médico forense Dr. **OSCAR BULGIM TOMLINSON** indica en el Protocolo de Necropsia y luego en la declaración visible a foja 101 del sumario, que la trayectoria del proyectil fue "de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás".

Por otro lado, la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos y el informe de los peritos de balística de la Policía Técnica Judicial, **DARÍO HERRERA** y **DAVID VILLARREAL**, concluyen que "el disparo que hiriera mortalmente a la persona de **FLORES** (occiso), no creemos que se haya producido tal como lo explicara y demostrara el imputado" (f. 124). Además conceptúan que "los hechos que se investigan, más se inclinan a lo explicado y demostrado por la testigo (esposa) de la víctima Sra. **GLADYS CEDEÑO ÁLVAREZ**, la cual manifiesta que en ningún momento hubo lucha (forcejeo), ni antes ni después entre ambos protagonistas de este hecho de sangre."

ARGUMENTO DEL APELANTE:

Alega el Licenciado **CARLOS M. HERRERA** en su escrito de sustentación de apelación, como justificación de la conducta de su defendido, la figura de la Legítima Defensa, en los siguientes términos:

> "En el caso sub-judice, es viable invocar además la causa de justificación o de antijuridicidad conocida como la legítima defensa, toda vez que el occiso saco (sic) con su mano derecho (sic), un cuchillo de casería ... se vio en la necesidad de repeler el ataque con un disparo al cuerpo." (F. 164).

Agrega además, que no es recomendable someter al procesado a un plenario cuando quien representa la vindicta pública y ejerce la acción penal no encuentra mérito para un enjuiciamiento.

Vale la pena aclarar que las dos primeras Vistas Fiscales emitidas en el presente negocio, los respectivos Fiscales solicitaron al Tribunal Superior un sobreseimiento provisional a favor del imputado, por considerar que no existían suficientes pruebas en su contra; sin embargo, en la primera ocasión el Tribunal solicitó una ampliación del sumario, y en la segunda se produce el llamamiento a juicio que se recurre en la presente apelación.

No obstante, el último Fiscal en tener conocimiento en la encuesta penal, **DR. MILCIADES MÉNDEZ**, en su contestación de traslado del presente recurso de apelación, manifestó un criterio contrario al de sus predecesores, al solicitar que se confirme el auto recurrido, toda vez que "en la opinión que virtieron los dos fiscales anteriores no se determinó ninguna causa de justificación legal, que eximiera al imputado de su responsabilidad, ya que no existe ningún eximente que justifique el actuar por parte del imputado, ...".

Añade el señor Fiscal, que "en torno a si se dieron las causas de justificación legal en que ha pretendido amparar el apelante la conducta de su representado, consideramos que, lo depuesto por el sindicado no coincide con la realidad jurídica del hecho, ya que, a prima facie de la investigación, la única testigo presencial dio a conocer un relato distinto de los hechos (f. 5)." (F. 175).

Por su parte, el Auto apelado considera que se encuentra plenamente demostrada la muerte violenta de **PEDRO ÁBREGO FLORES** al ser herido con arma de fuego por **SAMUEL COUTTE FLORES**, según el Protocolo de Necropsia, el Certificado de Defunción, el levantamiento del cadáver, las vistas fotográficas y la declaración de **GLADYS CEDEÑO ÁLVAREZ.** También estima el Tribunal que es necesario llevar la causa al plenario para debatir la responsabilidad de **COUTTE**, pues éste acepta haber disparado a **ÁBREGO FLORES** pero su versión es contraria a la de la testigo **GLADYS CEDEÑO** y a la de los peritos de balística que opinan que la de ésta última es la versión que más se acerca a la realidad.

CRITERIO DE LA CORTE:

Antes de tomar una decisión en el proceso que nos ocupa, esta Corporación considera necesario hacer ciertas consideraciones en torno al argumento sostenido en el escrito de apelación del imputado, en el sentido de que este actuó en legítima defensa.

El argumento esgrimido se basa en lo declarado por el sindicado, de que se vio obligado a disparar contra **PEDRO ÁBREGO FLORES** porque al solicitarle la cédula a éste último, se negó diciendo que él no estaba solo y además sacó un cuchillo de cacería, lo haló por la basta del pantalón y lo atrajo hacia sí intentando herirlo; y que fue entonces cuando sacó su arma de reglamento e hizo dos disparos, uno de advertencia y otro que produjo la muerte de **ÁBREGO FLORES.** Sin embargo como ya hemos visto, esta versión entra en conflicto con la dada por la esposa del difunto, pues ésta afirma que su esposo nunca sacó el cuchillo y que no hubo forcejeo o pelea entre éste y el imputado. En esto último también coinciden los peritos de balística de la Policía Técnica Judicial, quienes en su informe conceptúan no estar de acuerdo con la versión de **COUTTE** sobre cómo se dio el disparo fatal, y por el contrario señalan que la versión de **GLADYS CEDEÑO**, en donde indica que no hubo pelea, es la que está más acorde con la realidad de lo ocurrido.

Para que se dé la legítima defensa, es indispensable que concurran ciertos requisitos que el Código Penal establece en su artículo 21. Sin embargo, observamos que no existen en el sumario suficientes evidencias que demuestren que el imputado actuó por legítima defensa; en este sentido la Sala Penal ha sostenido lo siguiente:

> "En fin, no hay en las sumarias pruebas dotadas de suficiente credibilidad para aceptar que la reacción del sindicado haya sido consecuencia de una agresión grave, injusta, actual o inminente, tal como lo exige el art. 21 del Código Penal.
>
> Esta Corporación -como lo ha reconocido el Ministerio Público- ha mantenido en esta materia el criterio, basado en fundamentos de justicia, que la procedencia y aceptación de una causal de justificación en el sumario depende de que la misma esté plenamente probada en autos."
>
> M. P. DRA. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. MARZO 30 DE 1990.

Considera esta Corporación que el presente proceso reúne los requisitos establecidos en el artículo 2222 del Código Judicial, indispensables para enjuiciar a los imputados de haber cometido un delito. Estos son;

-plena prueba de la existencia del hecho punible: la muerte de **PEDRO ÁBREGO FLORES** según Certificado de Defunción, Protocolo de Necropsia, etc.
-graves indicios contra alguno: en este caso, **COUTTE** acepta haber disparado

contra el occiso.

Por todo lo anterior, consideramos que resulta necesario que, tal como lo señala el Segundo Tribunal Superior, sea en el Plenario donde se evalúe la responsabilidad de SAMUEL COUTTE y si actuó o no en legítima defensa.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 27 de Agosto de 1991, mediante el cual se ABRE CAUSA CRIMINAL contra SAMUEL ANTONIO COUTTE FLORES por el delito de homicidio en perjuicio de PEDRO ÁBREGO FLORES.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A JOSÉ MANUEL SANTAMARÍA ZORRILLA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN ALBERTO HERRERA JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante auto de 15 de febrero de 1995, abrió causa criminal contra José Manuel Santamaría Zorrilla, alias "Chichito" por la infracción de normas contenidas en el Título I, Capítulo I, del Libro Segundo del Código Penal, o sea por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de Edwin Alberto Herrera Jiménez. En el acto de notificación del auto meritado, tanto el procesado como su abogado defensor anunciaron recurso de apelación, por lo que el negocio fue fijado en lista a los fines de la sustentación del recurso. Este trámite procesal fue cumplido por el licenciado Diego Velásquez Carvajal, defensor técnico del sindicado.

En lo medular de su escrito, el recurrente solicita la modificación del auto apelado, por considerar que "Las sindicaciones e imputaciones putativas que le hacen las hermanas del occiso a JOSÉ MANUEL SANTAMARÍA ZORRILLA, han sido enervadas por los testimonios de quienes vieron al sindicado el día de los hechos ..." (f. 186). Además, según su criterio, "los mismos investigadores de la Policía Técnica Judicial coercionaron a los testigos claves del proceso para que de todas maneras acusaran a JOSÉ MANUEL SANTAMARÍA ZORRILLA" (F. 186).

El Fiscal Tercero Superior, al contestar el traslado que le fuera corrido del escrito de sustentación, disiente del planteamiento del recurrente ya que, en su concepto, "de las declaraciones de DAYRA ANAYANSI HERRERA JIMÉNEZ se desprende que el imputado se había apersonado a su casa buscando al difunto ... que cuando encontrara al occiso le iba a meter unos tiros ... de la declaración de la joven YADIRA RODRÍGUEZ ... se ubica a ... JOSÉ MANUEL SANTAMARÍA ZORRILLA, en el lugar de los hechos ... con relación a la declaración de IRAIDA ZULEMA VIVEROS ESPINOZA ... nace la vinculación directa hacia el procesado como una de las personas que dispararon indiscriminadamente contra el hoy occiso " (fs. 192-193), por todo lo cual solicita la confirmación del auto de enjuiciamiento proferido contra el imputado (f. 194).

A los efectos de resolver la impugnación planteada resulta importante destacar que el recurso atribuye el conocimiento del proceso a esta Corporación de Justicia, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, según lo establece el artículo 2428 del Código Judicial.

La investigación guarda relación con el homicidio de Edwin Alberto Herrera Jiménez, hecho de sangre ocurrido la noche del 7 de marzo de 1994 en el área de Buena Vista, sector de Roberto Durán, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá. Según se infiere del protocolo de necropsia, el occiso murió a consecuencia de " A. SHOCK HIPOVOLÉMICO. B. MÚLTIPLES HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO" (f. 38).

Como cuestión previa, debe la Corte adelantar que el argumento externado por el recurrente, en el sentido de que "los mismos investigadores de la Policía Técnica Judicial coercionaron a los testigos claves " (f. 186), carece de asidero legal pues, si bien consta en el cuaderno penal que Iraida Zulema Viveros Espinoza, testigo presencial del hecho, se retractó del señalamiento directo que hizo contra Santamaría Zorrilla como autor del ilícito, afirmando que "A mi me obligaron en la P. T. J., de San Miguelito" (f. 158), lo cierto es que no existen elementos de convicción que comprueben tal amenaza o coacción de parte de las autoridades policiales.

Ahora bien, con el propósito de atender el reclamo que formula el recurrente sobre la responsabilidad de su defendido, resulta imperativo hacer una relación de los hechos comprobados sumarialmente. Se observa así que el imputado Santamaría Zorrilla, al ser indagado manifestó que el día de los hechos "yo me encontraba en casa de mi mujer LAURA VALDELAMAR" (f. 130), versión que corroboran Laura Edith Valdelamar Pineda (f. 143), y Martina Domínguez Pineda (f. 147). Asimismo, constan en las sumarias los testimonios de Magaly Mosquera Córdoba (f. 145), y Tamara Lizbeth Martínez Hurtado (f. 156), quienes también afirman que el imputado permaneció el día de los acontecimientos en la residencia de Valdelamar Pineda, aun cuando con respecto a estas últimas deponentes hay que enfatizar que sus testimonios resultan dudosos, pues si bien ambas residen en el mismo sector de la concubina del imputado, ninguna cohabita con ella, por lo que mal podrían asegurar cuanto tiempo estuvo Santamaría Zorrilla en ese lugar.

A pesar de esta salvedad, no se puede desatender el hecho de que en autos figuran, como se vio en líneas anteriores, deposiciones favorables al imputado que lo ubican en un lugar distinto de donde acaeció el hecho de sangre. No obstante ello, la Sala no puede reconocerle a estas declaraciones la eficacia de liberar a Santamaría Zorrilla de la grave inculpación que pesa sobre él, máxime cuando se comprueba la existencia de otros elementos de incriminación que comprometen su responsabilidad penal. En efecto, del relato de Dayra Anayansi Herrera Jiménez se desprenden graves indicios de culpabilidad contra el acusado, cuando manifiesta que"como a las nueve de la noche del día de ayer (9:00 p. m.), el sujeto de nombre CHICHITO, pasó en compañía de otro sujeto portando dos (2) armas en sus manos y el que lo acompañaba también llevaba un revólver en la mano" (f. 54).

Aunado a lo anterior, esta misma deponente sostuvo que Santamaría Zorrilla "siempre tenía una 9 mm. y una 3.80 encima" (f. 99), manifestación que es compatible con el informe de inspección ocular confeccionado por el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el que se acredita: "EVIDENCIA N° 5 Un casquillo de arma de fuego, calibre 380 ... EVIDENCIA N° 6 Un casquillo de arma de fuego, calibre 380 ... EVIDENCIA N° 7 Un casquillo de arma de fuego, calibre 380 ... EVIDENCIA N ° 8 Un casquillo de arma de fuego, calibre 9 mm ...EVIDENCIA N° 8A Un casquillo de arma de fuego, calibre 380" (f. 65).

Militan además contra el encartado el testimonio de Yadira Rodríguez: "yo vi cuando pasaron Chichito y Topito, ellos pasaron ... al ratito que mataron a EDWIN, yo estaba en la casa de EDWIN cuando los vi pasar a ambos con un arma cada uno y dijeron `ya vayan a recogerlo " (f. 83). De igual manera, la deponente Ilsa Del Carmen Zorrilla Jiménez manifestó que el imputado Santamaría Zorrilla había amenazado al hoy occiso "y le había tirado bala anteriormente, él le decía personalmente, o le mandaba decir, que lo iba a matar y después que mataron a mi hermano pasó con el otro muchacho por la vereda de la casa diciendo que lo fueran a recoger, lo dijo delante de los vecinos, con las armas en la mano él y el otro muchacho" (f. 109).

Finalmente, resulta importante destacar el testimonio de Sonia Esther

Zorrilla de Smith, quien declaró "... sobre las amenazas hacia nuestras personas por parte de MANUEL SANTAMARÍA ZORRILLA, eso viene por parte del homicidio de mi hermano EDWIN ALBERTO HERRERA ..." (f. 19).

De esta manera, es preciso concluir que el examen hecho al caudal probatorio de autos permite demostrar la existencia de graves indicios que comprometen la responsabilidad de Santamaría Zorrilla.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 15 de febrero de 1995 dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso seguido a José Manuel Santamaría Zorrilla (a) "Chichito", sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Edwin Alberto Herrera Jiménez.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ A., CONTRA EL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO PROFERIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR EN CONTRA DE TEÓDULO PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **Rafael Rodríguez A.**, en su condición de apoderado judicial del señor **TEÓDULO PIMENTEL**, ha presentado escrito desistiendo del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de llamamiento a juicio de veintiocho de febrero de 1994, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, "... y así darle el curso al proceso, evitando así su estancamiento y dando lugar a que fije a la mayor brevedad posible, fecha para la audiencia".

Ahora bien, en materia de desistimiento se requiere que el apoderado principal o sustituto designado por la parte esté autorizado para ello expresamente mediante poder, lo que no consta en el expediente bajo estudio, toda vez que la persona que interpuso el recurso en este caso, fue el licenciado **José Félix Henríquez C.**, quien es el apoderado judicial de **TEÓDULO PIMENTEL**, según el poder que consta a foja 35 del expediente.

Por lo tanto, al examinar la solicitud del licenciado **Rafael Rodríguez A.**, la Sala estima que no es viable el desistimiento manifestado, y en tal virtud no es posible acceder a lo pedido.

Por ello, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de llamamiento a juicio expedido el 28 de febrero de 1994, por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A TEÓDULO PIMENTEL ROMERO, POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ANDRÉS JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el Auto de 28 de febrero de 1994, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal y se mantiene la detención preventiva decretada contra **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte del señor ANDRÉS JARAMILLO PERALTA, hecho ocurrido el día miércoles 10 de febrero de 1993.

Se realizaron las respectivas diligencias de inspección ocular (fs. 268 a 275), y de allanamiento (fs. 276 a 283).

A fojas 471 a 475 del expediente, constan vistas fotográficas relacionadas con la diligencia de inspección ocular practicada en la Comunidad de Oquendo, Distrito de Chimán.

Consta en el expediente, la Evaluación Psiquiátrica Forense realizada a **TEÓDULO PIMENTEL MORENO** (fs. 181-183), por el doctor GUILLERMO GARCÍA RUIZ, Jefe del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal, de la cual se desprende que el señor **PIMENTEL MORENO** no padece de trastornos de sus facultades mentales, y es una persona imputable (Arts. 24 y 25 del Código Penal).

Según se desprende del historial penal y policivo de **TEÓDULO PIMENTEL MORENO** (f. 296), éste fue multado en el año 1972 por portar arma blanca.

Luego del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, la Sala pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiera el recurrente.

ANTECEDENTES:

Con el objeto de perfeccionar la investigación, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la Providencia de 30 de mayo de 1993 (fs. 202-203), comisiona al Personero Municipal del Distrito de Chepo para que realice una serie de diligencias.

La Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial al finalizar las investigaciones remite el presente sumario para su calificación legal y, al mismo tiempo, solicita que se dicte auto de llamamiento a juicio contra **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**, por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título I, Capítulo I, Libro II del Código Penal, mediante la Vista N° 159 P. I. P. de 30 de noviembre de 1993 (fs. 422 a 459).

De las declaraciones juradas rendidas por los hermanos del occiso: SERAFINA JARAMILLO DE JORDÁN (fs. 110-112); JOSÉ DE LA CRUZ JARAMILLO PERALTA (fs. 125-127); ÁNGEL JARAMILLO PERALTA (fs. 121-124); BERNABÉ JARAMILLO PERALTA (fs. 172 a 179); por el padre, CRESCENCIO JARAMILLO JARAMILLO (fs. 113-118); y la cuñada del occiso, OFELINA OJO ESPINOZA U OFELINA OJO (fs. 259 a 261), se desprende que el día 9 de febrero de 1993, aproximadamente a las seis (6:00 a. m.) de la mañana, salieron de La Maestra ANDRÉS JARAMILLO y sus padres, y llegaron como a las once (11:00 a. m.) de la mañana, a casa de su hermano BERNABÉ JARAMILLO, ubicada en la comunidad de Oquendo, Chimán. Luego, como a las cuatro (4:00 p. m.) de la tarde, ANDRÉS JARAMILLO salió a dejar a sus padres CRESCENCIO JARAMILLO y GABRIELA PERALTA en el Puerto de Pásiga, donde están las lanchas que realizan los viajes con destino a Chepo. En la tienda de OFELINA OJO, en Oquendo, ANDRÉS JARAMILLO les dijo a sus padres que **TEÓDULO PIMENTEL**, a través de su hijo "MECHE", le había mandado a decir que fuera a buscar a su hija AIDA. El mismo día

9 de febrero de 1993, al regresar de Pásiga, como a las ocho (8:00 p. m.) de la noche, compró víveres para su esposa e hijo, en la tienda de la mujer de BERNABÉ JARAMILLO, OFELINA OJO, ubicada en la casa de BERNABÉ JARAMILLO, lugar donde ANDRÉS JARAMILLO pasó la noche del 9 de febrero de 1993.

Luego -según se desprende de las declaraciones juradas rendidas por ELÍAS ÁBREGO DUARTE (fs. 227-228); GALILEA PIMENTEL DE ÁBREGO, madrina de matrimonio del occiso (fs. 233-234); OFELINA OJO ESPINOZA U OFELINA OJO (fs. 259 a 261); MARCOS GONZÁLEZ PASCASIO (fs. 262 a 264); y por la madre del occiso, GABRIELA PERALTA NAVARRO (fs. 282-283)- ANDRÉS JARAMILLO fue visto camino a Miraflores, y alrededor de las diez (10:00 a. m.) de la mañana fue a casa de los esposos ELÍAS ÁBREGO DUARTE y GALILEA PIMENTEL DE ÁBREGO. Después de desayunar, fue visto por última vez al salir hacia su casa en La Maestra, aproximadamente a las nueve (9:00 a. m.) de la mañana, por la señora GALILEA PIMENTEL DE ÁBREGO, a quien le manifestó su intención de dirigirse hacia la casa de su suegro, el señor **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**, ubicada en La Pita de Chimán, para reunirse con su mujer e hijo.

Aproximadamente a la una (1:00 p. m.) de la tarde se escuchó una detonación proveniente del área del Puerto de La Pita, cerca del depósito de **TEÓDULO PIMENTEL** -Según se desprende de la declaración rendida por MARGARITO PINEDA PIMENTEL (fs. 223 a 226).

HALLAZGO DE UN CADÁVER:

Consta en autos la declaración rendida por el Cabo 2° GENARO ALBERTO RODRÍGUEZ REYES (fs. 85 a 88), miembro de la Fuerza Pública del Área "F", Chimán-Chepo, quien manifiesta que el domingo 14 de febrero, a las ocho de la noche aproximadamente, ante el Cuartel de la Fuerza Pública de Chimán, recibió la denuncia realizada por el pescador MARIO CRESPO, donde informa que él y su hermano habían visto flotando un cuerpo en el río La Maestra desde el sábado 13 de febrero. En este sentido, en el informe de 26 de febrero de 1993, suscrito por el Sargento 1° JACOBO DÍAZ ESCOBAR, Encargado del D. I. I. P. de Chepo-Chimán de la Policía Metropolitana, se señala el hecho de que el domingo 14 de febrero de 1993, el cabo 2° GENARO RODRÍGUEZ de servicio en la Sub- estación de Policía del Distrito de Chimán, informó vía telefónica que el ciudadano ALFONSO PINILLA a las 7:00 a. m. en la playa de la región de La Maestra encontró un cadáver flotando amarrado con dos tanques y un cartucho plástico en la cabeza. Este hecho es corroborado por el pescador TOBÍAS ALFONSO PINILLA DELGADO (fs. 285-286), quien declara que había visto un cadáver flotando en uno de los esteros que salen al río La Maestra, con un tanque a cada lado del cuerpo y un cartucho en la cabeza, y aclara el hecho de que presentó la denuncia ante la Sub-estación de Policía de Chimán, junto con MARIO CRESPO, quien fue el que visualizó primeramente el cadáver; y les dijeron a los compañeros pescadores que nadie cogiera por ese lado y en cuanto llegaron a Chimán avisaron a las autoridades.

A raíz de dicho informativo, el día 15 de febrero de 1993, el Personero Municipal de Chimán llevó acabo la diligencia de reconocimiento y levantamiento de un cadáver (fs. 162 a 166), pero la marea se encontraba a su máxima altura y no se obtuvieron resultados positivos con respecto al hallazgo del cadáver y, por consiguiente, consideraron que la marea había arrastrado el cadáver hasta alta mar.

Ante la Personería Municipal del Distrito de Chimán, el día 15 de febrero de 1993 (fs. 167-168 del expediente), consta la primera declaración jurada rendida por el pescador MARIO ALBERTO CRESPO, sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en la boca del río La Maestra, que se encontraba amarrado a dos tanques de plástico color amarillo, y que vestía un pantalón corto negro.

También, ante la Personería Municipal del Distrito de Chimán, el 18 de febrero de 1993, BERNABÉ JARAMILLO PERALTA (fs. 144 a 146) denuncia la desaparición física de su hermano ANDRÉS JARAMILLO, visto por última vez el día 10 de febrero de 1993.

Y, ante la Personería Municipal del Distrito de Chimán, el 18 de febrero de 1993, MARIO ALBERTO CRESPO reitera el informe de que el sábado 13 de febrero

de 1993, a las 3:00 p. m., cuando se encontraba pescando en la boca del río La Maestra con su hermano JORGE ISAAC CRESPO, vieron el cadáver de un hombre de piel blanca, con un cartucho plástico blanco en la cabeza y amarrado a dos tanques de plástico de cinco (5) galones de color amarillo, con un pantalón corto negro, sin camisa, descalzo, boca abajo.

El día 19 de febrero de 1993, los familiares de ANDRÉS JARAMILLO, envían una Nota manuscrita a la Fuerza Pública de Chimán (fs. 2-4), solicitando su colaboración para la localización de ANDRÉS JARAMILLO dentro de los terrenos de **TEÓDULO PIMENTEL**, ya que el 10 de febrero de 1993 había sido visto alrededor de las 9:00 a. m. con destino a la casa de dicho señor.

El 22 de febrero de 1993, en la Garita de Policía en la entrada del Distrito de Chepo, BERNABÉ JARAMILLO PERALTA, solicita apoyo a las autoridades de Chepo para la localización de su hermano, donde JOSÉ C. JAÉN, Sub-teniente de Policía de Chepo, le indicó que denunciara el hecho ante la P. T. J. de Chepo, según consta en el informe de 26 de febrero de 1993, suscrito por el Sargento 1° JACOBO DÍAZ ESCOBAR, Encargado del D. I. I. P. de Chepo-Chimán de la Policía Metropolitana (fs. 68-69 y 82-83).

Posteriormente, se da un intercambio de información entre P. T. J. de Ancón; Fuerza Pública de Chimán y Chepo; y P. T. J. de Chepo, donde se tiene como presunto autor de la muerte de ANDRÉS JARAMILLO a **TEÓDULO PIMENTEL** (Ver fs. 68-69 y 82-83).

En este orden de ideas, mediante Oficio N° P. T. J. CH-196-93 el Inspector Jefe de la Agencia de la P. T. J. del Distrito de Chepo (f. 1), remite al Personero de dicho Distrito las declaraciones rendidas ante la P. T. J., de AIDA EDITH PIMENTEL PÉREZ y SERAFINA PÉREZ OJO DE OJO, hija y mujer del sindicado, respectivamente; y lo expuesto por **TEÓDULO PIMENTEL**, quien se tenía en primera instancia como confeso, en virtud del informativo por él rendido.

La Personería Municipal del Distrito de Chepo, remite las sumarias seguidas en el presente negocio a la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial.

También, en cuanto a la información sobre el hallazgo de un cadáver, constan en autos las declaraciones juradas de HUGO MODESTO MUÑOZ ÁVILA (fs. 50-52), y JUSTO MARCIAL ORTEGA (fs. 56-58), Personeros de los Distritos de Chimán y Chepo, respectivamente; del Sargento 1° JACOBO DÍAZ ESCOBAR (fs. 64-67), Jefe del D. I. I. P. de la Policía Nacional de Chepo, quien a las 9:00 a. m. informó al Personero del Distrito de Chepo, JUSTO MARCIAL ORTEGA, sobre el hallazgo de un cadáver, y sobre el traslado tardío hacia el lugar donde fue visto el cadáver, y que el cadáver era ANDRÉS JARAMILLO, según la descripción hecha por **TEÓDULO PIMENTEL** en su confesión. Y, las declaraciones rendidas por el Sargento 2° MANUEL ARIEL GARRIDO ZÁRATE (fs. 74-75), Agente de la Fuerza Pública del área de Chepo; el Capitán JOSÉ ANTONIO ESTRIBÍ ORTEGA (fs. 78-79), Jefe del área de la Policía de Chepo y Chimán; y el Cabo 2° GENARO ALBERTO RODRÍGUEZ REYES (fs. 85-88), Agente de la Fuerza Pública de Chimán.

La actuación del licenciado **José Félix Henríquez Centeno**, del **Consultorio Jurídico Henríquez y Asociados**, en el presente proceso penal, tiene su génesis en virtud de poder especial que le fuese otorgado por el sindicado **TEÓDULO PIMENTEL**, visible a foja 35, Tomo I del expediente. La actuación de la defensa técnica en el presente proceso se inicia con el escrito de solicitud de libertad provisional a favor de **TEÓDULO PIMENTEL** (fs. 140 a 142 y -copias- fs. 316 a 318), solicitud ésta cuyas argumentaciones son detalladamente desestimadas por la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en la Resolución de 14 de mayo de 1993 (fs. 184 a 199 y -copias- fs. 319 a 334), mediante la cual niega la libertad provisional solicitada.

Luego el apoderado especial de **TEÓDULO PIMENTEL** solicita ante la Personería Municipal de Chepo, en calidad de prueba, la comparecencia de AIDA PIMENTEL OJO -hija del imputado-, a fin de que se ratificara de la deposición hecha ante la P. T. J. (f. 211, Tomo I del expediente).

Posteriormente, consta a fojas 311 a 315 del sumario el incidente de controversia promovido por el licenciado **José Félix Henríquez C.**, contra la Resolución de 14 de mayo de 1993, proferida por la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso seguido a su defendido **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**. En este orden de ideas, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, Licenciado ROGELIO AROSEMENA, da contestación al traslado mediante la Vista N° S/N. de 14 de junio de 1993 (fs. 337 a 351), donde mantiene el criterio esbozado en la Resolución de 14 de mayo de 1993 (fs. 184 a 189) y, por consiguiente, solicita al Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirme dicha Resolución. Sin embargo, a foja 353, consta el escrito de desistimiento del incidente de controversia mencionado, que es admitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la Resolución de 12 de agosto de 1993, en base a lo establecido en el artículo 1073 del Código Judicial.

A fojas 366-368, consta solicitud de sustitución de detención preventiva por otra medida cautelar a favor de **TEÓDULO PIMENTEL**, promovida por la defensa técnica del sindicado, solicitud ésta que es negada por la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la Resolución de 18 de octubre de 1993 (fs. 370 a 406).

La argumentación presentada en la alzada, se sustenta en circunstancias ya aducidas por el licenciado **Henríquez** a lo largo del proceso, y cuyos razonamientos han sido claramente desvirtuados por la autoridad competente del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial; así, pues, la apelación se fundamenta, en primer lugar, en la inexistencia del elemento objetivo o cuerpo del delito, toda vez que, según el recurrente, no se ha comprobado legalmente la muerte de ANDRÉS JARAMILLO ni se ha hecho la presunción de muerte; y, en este sentido, manifiesta que: "... en los delitos contra las personas, verbigracia el homicidio, el delito se materializa en la persona del **muerto.**" (f. 552) y, en el caso en comento, se ha sostenido la legalidad de la misma en base a "declaraciones deleznables" sobre un cadáver que fue visto flotando; y en tal sentido, manifiesta el recurrente que: "... a sabiendas de que hay un desaparecido conocido y estimado como **ANDRÉS**, ..., lo lógico y natural hubiera sido acercarse al cadáver para identificarlo, ..." (f. 551). Con respecto a esta última afirmación del licenciado **Henríquez**, es conveniente aclarar que el cadáver fue visto flotando el día 13 de febrero de 1993, y no es hasta el día el 18 de febrero de 1993, que BERNABÉ JARAMILLO PERALTA denuncia la desaparición de su hermano ANDRÉS JARAMILLO (fs. 144 a 146), visto por última vez el día 10 de febrero de 1993. Además, como se advierte en líneas anteriores en la parte correspondiente al hallazgo de un cadáver, las declaraciones de los pescadores siguen un perfecto orden cronológico y se adecúan en tiempo y lugar a la realidad emanada de autos, por lo que las declaraciones lejos de ser tachadas de "deleznables", resultan totalmente verosímiles.

Como ya hemos mencionado anteriormente, a fin de resolver la presente alzada, analizaremos cada uno de los puntos en que se fundamenta el recurso, partiendo del hecho de que, contrario a lo alegado por el recurrente, en este caso sí existe el cuerpo del delito, concepto éste que ha sido ampliamente desarrollado por el Ministerio Público en la emisión de concepto, cuya parte pertinente trancribimos a continuación:

> "... partiendo del hecho de que los nexos familiares y sentimentales de ANDRÉS JARAMILLO, se dan dentro de la comunidad de Chimán y tomando en cuenta que su medio de vida es le (sic) agricultura, tal como lo han expresado sus familiares, para lo cual contaba con su propia finca, tenemos que colegir que la desaparición de ANDRÉS JARAMILLO, obedece a hechos no voluntarios y llegar a la conclusión que a pesar de que su cadáver no se ha podido recuperar, existen circunstancias coincidentes que se han analizado en la presente encuesta, con lo que nos encontramos frente al delito de HOMICIDIO, en donde todos los indicios señalan a TEÓDULO PIMENTEL, ...
>
> Ahora bien, durante la instrucción del presente sumario, el Apoderado Judicial del sindicado, ha presentado diversos escritos, en los cuales desvirtúa LA EXISTENCIA DEL CUERPO DEL DELITO,

requisito 'Sine Qua Non' para el ejercicio de la acción penal, en ese sentido debemos afirmar conceptos a fin de demostrar que dentro del caso que nos ocupa, existe a nuestro criterio, este elemento fundamental.

El tratadista CLEMENTE DÍAZ, en su obra 'El Cuerpo del Delito', refiere que esta figura jurídica está compuesta por tres elementos a saber: El Corpus Criminis, El Corpus Instrumentorum y El Corpus Probatorium, sin que sea necesaria la presencia de estos tres elementos, para que exista el Cuerpo del delito.

Nos define CLEMENTE DÍAZ el Corpus Criminis como:

'La persona o cosa sobre la cual se han cumplido o ejecutado los actos que la Ley menciona como delitos o la persona o cosa que ha sido objeto del delito. Conviene separar el llamado CORPUS CRIMINIS de la genérica CORPUS DELICTI. Mientras de éste se puede pensar como una figura abstracta dominada por la definición y caracterización legal de un hecho que se estima disvalioso y merecedor de la sanción penal, el primero solamente ser concebído (sic) como una figura objetiva, concreta, real y tangible, que aunque presupuesto en todo hecho delictuoso, su real presencia no es decisiva para la existencia del delito, en tanto ésta se llegue a acreditar mediante la existencia de otros elementos.'

La confusión podría residir en transfigurar el CORPUS DELICTI en CORPUS CRIMINIS, es decir, en sostener que el CORPUS DEL DELITO de HOMICIDIO es el cuerpo de la víctima, y si no existe cuerpo de una víctima no podrá existir delito de homicidio.". (El subrayado es nuestro). Pág. 40.

Otros tratadistas como CARLOS MARTÍNEZ SILVA en su tratado de PRUEBAS JUDICIALES, han definido el concepto de CUERPO DEL DELITO como el conjunto múltiple y completo de hechos de orden físico y de los vestigios materiales más o menos durables, que entran en la comisión de un delito o que lo revelan después de cometido.

Autores como SERVIO TULIO RUIZ, en su obra LA ESTRUCTURA DEL DELITO EN EL DERECHO PENAL COLOMBIANO, definen el Cuerpo del delito como:

'Los elementos estrictamente materiales (conducta, nexo de causalidad material y resultado del ilícito penal de que se trate.'

Dentro de nuestro ordenamiento procesal, no existe definición del concepto CUERPO DEL DELITO, pero en el artículo 2073, establece su forma de comprobación:

'ARTÍCULO 2073: El hecho punible se comprueba con el examen que se haga por los facultativos o de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que hayan dejado el hecho, o con las deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la Ley, ni violen los derechos humanos, ni sean contrarios al orden público.' ...". (fs. 440-444). ...

Además, podemos afirmar que se ha comprobado legalmente la muerte de ANDRÉS JARAMILLO, así pues, a foja 284, está el formato de reinscripción del Departamento de Archivo de la Dirección General de Registro Civil, donde constan los datos personales de ANDRÉS JARAMILLO PERALTA y, a foja 415, consta el Certificado de Defunción de ANDRÉS JARAMILLO PERALTA expedido por la Dirección General del Registro Civil, donde consta que murió en Chimán, Distrito de Chimán, el 10 de febrero de 1993. En este sentido, se manifiesta la Fiscalía Cuarta Superior al emitir concepto, en la Vista N° 159 P. I. P. de 30 de noviembre de

1993:

"...
A pesar que en la presente encuesta, nos encontramos ante la situación Sui-Generis, de un delito sin rastro; toda vez que por las razones antes expuestas, no se pudo recuperar el cuerpo de la víctima, se ha acreditado en primer orden la existencia legal de quien en visa (sic) se llamó ANDRÉS JARAMILLO PERALTA, a través del Certificado de Nacimiento inserto a fojas (420-421), el cúmulo de testimonios de familiares, vecinos y amigos del mismo, recabados durante la instrucción sumarial, así como también copia de las actas de matrimonio Civil y eclesiástico del interfecto, constantes a fojas (249 y 250) respectivamente. ...". (Fs. 456-457).

En cuanto al argumento de que el delito se materializa en la persona del muerto, la Sala considera oportuno transcribir el criterio esbozado por la Fiscalía Cuarta Superior en la emisión de concepto, a saber:

"...
La Doctrina y las legislaciones como la nuestra no pueden ser ajenas a la realidad que se da en muchos casos de delitos que no dejan rastro, tal es el caso cuando ocurre la desaparición del cuerpo, por voluntad propia del autor del hecho o por circunstancias distintas (casos de muerte en el mar, río, incendios, etc.) y se pueden admitir excepcionalmente, otros medios de prueba.

El conjunto de elementos probatorios que emanan de la encuesta son suficientes para demostrar la comisión de un hecho delictivo, los cuales constituyen la existencia plena de la noción del Cuerpo del delito. Y repetimos, el hecho que hasta el momento no se haya podido recuperar el cadáver, no es óbice para que no exista Cuerpo del Delito. ...". (Fs. 454).

Posteriormente, la Fiscalía Cuarta Superior, en la contestación del traslado que se le hiciese con motivo de la presente apelación (fs. 555 a 557), sugiere que se confirme la Resolución impugnada por el licenciado **José Félix Henríquez**; y se refiere al concepto de cuerpo del delito, en los términos siguientes:

"...
Como fue expuesto en detalle en nuestra emisión de concepto, atendible a fs. 337-351, el ordenamiento procesal moderno ha superado debido al constante perfeccionamiento de la actividad delictiva, la noción tradicional del cuerpo del delito, como requisito indispensable para la demostración del hecho punible.

Esta Agencia del Ministerio Público, concuerda con los planteamientos expuestos por el Tribunal A QUO, en la medida de que por las distintas diligencias probatorias, se ha establecido la existencia del hecho punible, estando vinculado a su comisión, el señor TEÓDULO PIMENTEL MORENO, en contra del cual constan graves indicios. ...". (Fs. 555 a 557).

En segundo lugar, el recurrente se refiere al elemento subjetivo del delito, alegando que la confesión del imputado **TEÓDULO PIMENTEL MORENO** fue realizada ante autoridades incompetentes, bajo coacción y amenaza o intimidación; y, en este sentido, señala el hecho de que la defensa de **TEÓDULO PIMENTEL** presentó ante el Personero denuncia contra el encargado de la P. T. J., la cual no prosperó.

A fin de analizar el argumento que tacha de ilegal la confesión por la falta de competencia de las autoridades, consideramos oportuno hacer referencia a lo externado al respecto por el Fiscal Cuarto Superior, en la Vista S/N. de 14 de junio de 1993, mediante la cual contesta el traslado que se le hiciere con motivo de incidente de controversia, interpuesto por la defensa de **TEÓDULO PIMENTEL**, contra la Resolución de 14 de junio de 1993 por él dictada; y, cuyo desistimiento fue admitido, mediante la Resolución de 12 de agosto de 1993, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (fs. 356-357). A

continuación transcribimos lo pertinente, en cuanto a la competencia de la Policía Técnica Judicial:

> "Hasta el momento de la investigación el despacho, no observa se hayan producido actos que violenten los derechos de PIMENTEL MORENO; toda vez que al tenor de la Ley N° 16 del 9 de Julio de 1991, por medio de la cual se aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial como una dependencia del Ministerio Público, en sus artículos Primero, Segundo ordinal 2 y 12, Tercero y Séptimo, establecen las atribuciones conferidas por Ley a la Policía Técnica Judicial, el procedimiento y términos dentro de los cuales deben enmarcarse sus actuaciones. ...
>
> ... y del estudio de las primeras piezas procesales, se observa que las actuaciones de la Policía Técnica Judicial, así como de la Personería Municipal del Distrito de Chepo, se enmarcan dentro de la Ley. ...". (Fs. 340-A a 341).

El recurrente sostiene que **TEÓDULO PIMENTEL** al ser indagado por la Fiscalía Cuarta Superior, negó el informativo rendido ante la P. T. J., y afirma que inventó una confesión, para que ordenaran la libertad de su esposa e hija, quienes habían sido obligadas a declarar contra él; informativos éstos que también fueron negados, mediante declaraciones posteriores hechas por las interrogadas ante el Personero Municipal.

En cuanto a la legalidad de la confesión de **TEÓDULO PIMENTEL**, hecha bajo supuesta coacción y amenaza o intimidación, la Fiscalía Cuarta Superior en la Vista N° 159 P. I. P., de 30 de noviembre de 1993, señaló:

> "...
> Igual criterio establece la Doctrina cuando señala:
>
> 'Las primeras declaraciones de los testigos que se recogen en el procedimiento escrito deben tenerse como las más verídicas, porque no hay tiempo de engañarlos o apartarlos de su deber, mientras en la discusión pública los testigos pueden, si están comprados o se les ha inducido a apartarse de su deber, retractarse impunemente de las declaraciones escritas en el expediente.' (EUGENIO FLORIAN, "De Las Pruebas Penales", Tomo II, pág. 75-76) ... .". (Fs. 446-447).

En este sentido, el Segundo Tribunal Superior en la Resolución apelada, concluye lo siguiente:

> "... la presunta responsabilidad de **TEÓDULO PIMENTEL**, emana de su confesión, que aunque posteriormente se retracte no le resta mérito probatorio, en razón que ello es producto de un acto reflexivo, sumado a que su hija relató que su padre le comunicó cómo lo había ultimado, ...; aunado también a las declaraciones de los agentes de la P. T. J. y los pescadores, ..., las declaraciones de: ...; los familiares y residentes en la comunidad del occiso, ...; todas estas pruebas proporcionan los indicios incriminantes contra el sumariado, por consiguiente, se completa el aspecto subjetivo ...". (Fs. 544-546).

Finalmente, a juicio de la Sala, el elemento subjetivo del delito, es decir, la presunta responsabilidad de **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**, emana principalmente de la confesión hecha ante la Policía Técnica Judicial de Chepo (fs. 22 a 26), el día 4 de marzo de 1993, donde acepta ser el responsable de la muerte de ANDRÉS JARAMILLO, narra como se produjo y como arrojó el cadáver al río.

Con respecto al concepto de confesión, el mismo fue ampliamente desarrollado en Providencia de 18 de octubre de 1993, proferida por la Fiscalía Cuarta Superior, mediante la cual se niega la solicitud de sustitución de la medida de detención preventiva por otra medida cautelar (Ver fs. 402-404 del expediente).

En este sentido, la Fiscalía Cuarta Superior al emitir concepto, externa el siguiente razonamiento:

> "De lo anterior se colige, que existiendo tantos detalles proporcionados por el sindicado, muy difícilmente estaríamos ante una falsa declaración; toda vez que el sindicado no sólo acepta haber realizado la acción, sino que explica con detenimiento cómo se desarrollaron los hechos y a la vez excepciona a su favor haber actuado en defensa propia". (Fs. 429-430).

Por otro lado, es importante el hecho de que en el informativo rendido ante la P. T. J., el 4 de marzo de 1993 (fs. 22 a 26), **TEÓDULO PIMENTEL** coincide en varios aspectos con lo investigado a lo largo del sumario; así, pues, acierta en el día y el lugar en que fue visto por última vez el occiso, cuando manifiesta lo siguiente:

> "... para la fecha del 10 de febrero del año en curso, aproximadamente a las once de la mañana (11:00 a. m.), mientras me encontraba en el Puerto Pita en Chimán, reparandome (sic) el motor de mi propiedad, se presentó el señor ANDRÉS JARAMILLO con una RULA o MACHETE en la mano derecha ...". (F. 23).

Y, continúa su declaración refiriéndose a la vestimenta del occiso el día de los hechos, y a la forma en que lanzó el cadáver al mar, a saber:

> "..., creo que tenía pantalón negro y sweter (sic) blanco y creo que tenía una sola cutarra. ..., traté de que la mera (sic) no se llevara el cuerpo ya que la marea estaba alta, luego busqué dos (2) tanques de cinco (5) galones, los cuales llené de arena y cascajo y uno de ellos los até a la cintura y el otro al pescuezo. ..., no era plástico, era un saco de nylon, el cual se lo puse encima ya que no le quería ver el rostro, ni quería tocarlo, se lo puse también para arrastrarlo ...". (Fs. 24-25).

Con esto último, en cuanto a la vestimenta del occiso, podemos decir que la descripción hecha por el imputado se asemeja, en primer lugar, a lo declarado por el hermano del occiso, JOSÉ DE LA CRUZ JARAMILLO PERALTA (fs. 125-127), quien manifiesta que el 10 de febrero de 1993, ANDRÉS JARAMILLO vestía pantalón negro y camisa blanca manga corta y a lo declarado por el otro hermano del occiso, BERNABÉ JARAMILO PERALTA (fs. 172-179), quien manifiesta que éste vestía suéter blanco, pantalón negro, cutarras, su machete y un sombrero "pintao", y llevaba un perrito; y por GALILEA PIMENTEL DE ÁBREGO (fs. 233-234), quien manifiesta que ANDRÉS JARAMILLO vestía ropa de trabajo, y se fue de su casa con un perrito y un machete. En segundo lugar, las declaraciones hechas por el imputado, sobre la vestimenta y la forma en que se encontraba flotando el cadáver, también coinciden con lo declarado por los pescadores que denunciaron el hallazgo de un cadáver en el río La Maestra.

Sobre la manifiesta enemistad entre el occiso y el imputado, se observa en el expediente, de fojas 245 a 253, la demanda de alimentos interpuesta por AIDA EDITH PIMENTEL DE JARAMILLO, contra el occiso ANDRÉS JARAMILLO, a favor de su hijo ERICK ADÁN JARAMILLO PIMENTEL. En tal virtud, cabe señalar lo dicho por OFELINA OJO ESPINOZA u OFELINA OJO (fs. 259 a 261), quien declara que le sorprendió que ANDRÉS JARAMILLO le dijera que iba a buscar a su esposa AIDA y a su hijo, porque sabía lo de la boleta -en el caso del proceso de alimentos-, y tenía conocimiento de que **TEÓDULO PIMENTEL** había dicho que si ANDRÉS seguía detrás de AIDA lo mataría, según palabras del propio ANDRÉS JARAMILLO.

Por su parte, AIDA PIMENTEL PÉREZ DE JARAMILLO en el informativo rendido ante la P. T. J. declara que estaba separada de su esposo ANDRÉS JARAMILLO porque su hermana "MICHA" -DEYSI NIDIA PIMENTEL PÉREZ- le dijo que su madre y su esposo andaban juntos, lo cual le manifestó a su padre TEÓDULO PIMENTEL el 4 de febrero de 1993, y éste le dijo que eso lo arreglaría. Y el 11 de febrero como a las 12:00 p. m., su padre le dijo que mató a ANDRÉS JARAMILLO en la loma con una escopeta, y ella no pudo más que resignarse.

SERAFINA PÉREZ OJO DE OJO, mujer de TEÓDULO PIMENTEL, ante la agencia de la P. T. J. el 4 de marzo de 1993 (fs. 27-30) manifestó que se encontraba presente en las oficinas de la P. T. J. cuando **TEÓDULO PIMENTEL** confesó que había matado a ANDRÉS JARAMILLO en defensa propia.

En relación con el informativo rendido por **TEÓDULO PIMENTEL**, constan en el expediente las declaraciones juradas de ERIC ALFARO CABALLERO (fs. 95 a 97), miembro de la P. T. J., quien se ratifica del informe de fojas 22 a 26, y manifiesta que escuchó el informativo inicial de **TEÓDULO PIMENTEL**, y que éste se encontraba arrepentido al momento de su confesión. Y, la declaración de CARLOS ABEL CÓRDOBA RODRÍGUEZ (fs. 98-99), Jefe de la P. T. J. de Chepo, que manifiesta que **TEÓDULO PIMENTEL** hizo la confesión explicando detalladamente cómo, cuándo y por qué lo hizo, ante su hija, AIDA EDITH PIMENTEL; el detective CECILIO ESPINOZA CONTRERAS; el Cabo 2° MARIO SÁNCHEZ BATISTA; y su esposa, SERAFINA PÉREZ OJO.

El licenciado **José Félix Henríquez**, solicitó al Personero Municipal de Chepo que hiciera comparecer a su despacho a la señora AIDA PIMENTEL OJO, para que ampliara la declaración hecha ante la P. T. J. (f. 211). Posteriormente, ante la Personería Municipal del Distrito de Chepo, SERAFINA PÉREZ OJO DE OJO (fs. 217-219), el 12 de julio de 1993; y, AIDA EDITH PIMENTEL DE JARAMILLO (fs. 150-155), el 18 de febrero de 1993, manifiestan que lo declarado ante la P. T. J. es falso.

Además sobre la personalidad violenta del imputado, son visibles en el sumario las declaraciones de ELÍAS ÁBREGO DUARTE (fs. 227-228); GALILEA PIMENTEL (fs. 233-234), y MARCOS GONZÁLEZ PASCASIO (fs. 262-264), que coinciden en afirmar que **TEÓDULO PIMENTEL** ha tenido problemas con otros vecinos del área de La Pita en Chimán.

Para concluir, el recurrente en su escrito destaca el hecho de que la hija de **TEÓDULO PIMENTEL** declaró que su padre le había dicho que había matado a ANDRÉS JARAMILLO de un disparo, con una escopeta; y, por el contrario, **PIMENTEL** en el informativo declaró que lo había matado con una madera, pata de cabra y, que luego, lo había atado a dos tanques y lo había tirado al río. En este aspecto, podemos decir que en la etapa correspondiente al juicio se aportarán y practicarán las pruebas necesarias para poder determinar el medio utilizado por el imputado para la comisión del delito. Sin embargo, a juicio de la Sala, deben mencionarse ciertos hechos relacionados con este aspecto. Así, pues, según se desprende de las declaraciones de GALILEA PIMENTEL (fs. 233-234), **TEÓDULO PIMENTEL** acostumbra portar arma de fuego porque se dedica a la cacería; y éste posee una escopeta, un rifle y un revólver, según lo declarado por ELÍAS ÁBREGO DUARTE (fs. 227-228), y por los hermanos del occiso, JOSÉ DE LA CRUZ JARAMILLO PERALTA, (fs. 125-127) y BERNABÉ JARAMILLO PERALTA (fs. 172-179 y 256-258).

Otro aspecto que se entrará a discutir más a fondo en la etapa concerniente al plenario, es la manifestación hecha por **TEÓDULO PIMENTEL** de que realizó el hecho en defensa propia, lo que se desprende del informativo éste rindió primeramente, cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

> "... él fue que (sic) tomó el primer viaje, ... Frente a frente, tenía una camisa manga larga de color blanca, me tiró el primer ciaje (sic) con la rulda (sic) de izquierda a derecha, cortándome la camisa, quedé distante de él y nuevamente tiró otro viaje a llevarme con la rula de la misma forma, como a cortarme el estómago, yo por otro lado, tenía mi machete distante a mi para defenderme, lo que encontré, fue una pata de cabra de hierro cerca de una esquina del rancho; al ver que venía nuevamente el viaje con el machete, tomé un palo de madera con la mano izquierda y al parecer, no quería él que quedara el machete encajado al palo y a lo que yo que (sic) lo vi cerca de mí con la pata de cabra la cual tenía en la mano derecha le asesté el golpe del lado izquierdo de la nuca y cayó de una vez en el suelo. ..., pienso yo que el golpe fue de muerte ya que no ví que se levantó más..., no le dije nada a nadie y no conversé con ninguna persona en particular. ..., en ese momento, le dejé allí tirado y me fui para mi casa, luego comí, posteriormente a dos horas de lo

ocurrido, regresé al puerto y todavía estaba tirado el cuerpo del señor ANDRÉS, como estaba próximo al rancho donde guardo mis cosas y mi motor, decidí arrastrarlo para la quebrada, hacia una playita que da abajo de donde fue el pleito. ...". (F. 23-24).

También, el hecho de que ANDRÉS JARAMILLO el 10 de febrero de 1993, tenía en su poder un machete, es corroborado en las declaraciones de BERNABÉ JARAMILO PERALTA, hermano del occiso, (fs. 172-179), y GALILEA PIMENTEL DE ÁBREGO (fs. 233-234).

En tal sentido, SERAFINA PÉREZ OJO DE OJO, mujer de TEÓDULO PIMENTEL, ante la agencia de la P. T. J. el 4 de marzo de 1993 (fs. 27-30) manifestó que "... en una ocasión en la residencia que tenemos en Chepo, Santa Isabel, el señor ANDRÉS JARAMILLO, amenazó a AIDA, le decía que si no regresaba con él, le iba a MATAR, a ella y después se iba a MATAR EL, para que no le pusiesen preso , a mí no me extrañó, porque en varias ocasiones ya le había dicho eso, ...". (f. 29). Además, la señora PÉREZ declaró que se encontraba presente en las oficinas de la P. T. J. cuando **TEÓDULO PIMENTEL** confesó que había matado a ANDRÉS JARAMILLO en defensa propia.

Con respecto al occiso ANDRÉS JARAMILLO, consta en autos el Oficio N° 14 de 19 de febrero de 1993 (f. 157), suscrito por el Juez Municipal de Chimán, Provincia de Panamá, Licenciado LUCIANO CHAVARRÍA G., del cual se desprende que BERNABÉ JARAMILLO era fiador del hoy occiso ANDRÉS JARAMILLO, a quien se le seguía causa criminal por delito de lesiones personales en perjuicio de RAFAEL ARCANGEL ÁVILA MORENO, en el Juzgado Tercero del Circuito Penal de Panamá, que estaba pendiente de fijar fecha de audiencia. A fojas 300-304, consta el Auto N° 5 de 14 de enero de 1988, proferido por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se abre causa criminal contra ANDRÉS JARAMILLO PERALTA, por infractor de las normas legales de los delitos contra la vida e integridad personal, contenidas en el Capítulo II, Título I, Libro II del Código Penal el encausado se encontraba libre bajo el beneficio de fianza de excarcelación.

Recordamos a la defensa, que nuestro Código de Procedimiento Penal, prevé un término común de cinco (5) días a las partes para que aporten todas las pruebas que utilizarán, de modo que nada impide que las pruebas que sustenten lo dicho por el imputado sobre la legítima defensa, sean solicitadas al Tribunal de la causa, entre otras múltiples que puede solicitar.

Por lo expuesto, existe hasta el momento, mérito suficiente para el llamamiento a juicio contra **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**, según lo establecido en el artículo 2222 del Código Judicial, debido a que se ha comprobado plenamente la existencia del hecho punible, aunado al hecho de que existen graves indicios contra el mencionado imputado, lo cual se desprende tanto de su confesión como de las distintas declaraciones recabadas durante la instrucción del presente sumario. En razón de esto, se desprende que el delito por el cual se llama a juicio a **TEÓDULO PIMENTEL MORENO**, es el de homicidio, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, sobre delitos contra la vida y la integridad personal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado de 28 de febrero de 1994, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en cuya parte resolutiva se abre causa criminal y se mantiene la detención preventiva decretada contra TEÓDULO PIMENTEL MORENO, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte del señor ANDRÉS JARAMILLO PERALTA, hecho ocurrido el día miércoles 10 de febrero de 1993.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) MARIANO HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A JULIO QUINTERO MELGAR (A) GUINEO Y ÁNGEL SANTOS ARJONA MENDOZA POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SANTIAGO MARCIAGA QUINTERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, el proceso que se le instruye a **JULIO QUINTERO MELGAR** y **ÁNGEL SANTOS ARJONA MENDOZA**, sindicados por el delito de homicidio cometido en perjuicio de SANTIAGO MARCIAGA QUINTERO, hecho ocurrido el día sábado 21 de agosto de 1993, en la comunidad de Rincón Hondo, Distrito de Pesé, Provincia de Herrera.

El recurso de apelación contra el auto de llamamiento a juicio de 12 de mayo de 1994, fue individualmente promovido a favor de **JULIO QUINTERO MELGAR** y **ÁNGEL SANTOS ARJONA**, ambos imputados en la presente causa penal, por sus defensores de oficio los licenciados **MOISÉS ESPINO BRAVO** y **ALCIDES ZAMBRANO GONZÁLES**, respectivamente.

En cuanto a las razones que brinda el licenciado **MOISÉS ESPINO BRAVO**, en su escrito de sustentación de la apelación, en defensa de **JULIO QUINTERO MELGAR**, transcribimos lo siguiente:

> "... es claro que la botella fue quebrada por el difunto para lesionar a mi defendido y siendo **Santiago Marciaga Quintero** más alto, de mayor contextura y, por ende, mas fuerte que **JULIO QUINTERO**, no le quedó otra alternativa que defenderse.
>
> A lo explicado, tenemos que sumarle el hecho que Santiago Marciaga era problemático y que en muchas ocasiones provocó a **JULIO QUINTERO**, razones por las cuales creó, en mi defendido, un estado de tensión que explotó el día en que trató de ultimarlo y en el cual se defendió **JULIO QUINTERO**.
>
> Por lo explicado, les pido sobreseer a mi defendido." (Fs. 286 y 287).

Por su parte, el licenciado **ALCIDES ZAMBRANO GONZÁLEZ**, justifica la actitud de su defendido **ÁNGEL SANTOS ARJONA**, en los siguientes términos:

> "... También contribuye a restar fuerza a que mi defendido infirió alguna herida con objeto punzocortante, la circunstancia de que en el acta comentado (sic) se hizo constar la existencia de una rajadura sobre la mampara de madera, que supuestamente según lo expuesto por el testigo **BARBA** la produjo mi defendido con su cuchillo después de haber lesionado al occiso, y no se mencionó rastro de sangre.
>
> En este mismo orden de ideas llama poderosamente la atención lo sostenido por **Rubén Chávez Samaniego** fs. 86-88, quien indicó que alcanzó a **JULIO QUINTERO** y **ÁNGEL SANTOS ARJONA**, frente a la Escuela del lugar, escasos minutos después de la ocurrencia del infortunado suceso, logrando convencerlos de que le entregarán los cuchillos y enseguida pasó por la Fuerza Pública de Pesé donde entregó las armas. Esto impidió que se produjera cualquier intento de desaparecer los puñales o de borrar las huellas de sangre que debían tener, y es paradógico que el cuchillo identificado como número uno el cual portaba mi defendido -fs. 151-152-, resultó negativo por sangre en las pruebas del laboratorio a que fue sometido.

> De la misma manera las heridas descritas en el protocolo de necropsia como mortales y peligrosas responden a la confesión que realizara **JULIO QUINTERO.**
>
> Otro aspecto importante es que **Heriberto Rafael Samaniego Bultrón**, fs. 113-114 quien narra lo ocurrido, preciso (sic) que luego de la reyerta discutían quién se atribuía la culpa y **TATO** dijo que él se hechaba (sic) la culpa, que no le importaba ir preso nuevamente, refiriéndose a **ARJONA MENDOZA.**
>
> Esta situación que no es infrecuente en el marco del proceso penal donde figuran como indiciados personas vinculadas por parentesco, donde se trata, en base al afecto que por naturaleza se tienen, de proteger, confesando hechos cometidos por el otro, aflora con claridad meridiana en este proceso, donde todas las evidencias apuntan en dirección a **JULIO QUINTERO** y su hermano se ha sacrificado aceptando una culpabilidad que no tiene. De estas circunstancias se ha hecho eco tanto la Constitución Nacional en su artículo 25 así como el Código Penal en su artículo 325 Párrafo segundo y el artículo 356 ordinal primero de la misma excerta legal.
>
> A nuestro juicio la aceptación por parte de **ÁNGEL SANTOS ARJONA** de haber lesionado a **SANTIAGO MARCIAGA QUINTERO** carece de valor jurídico, ya que está desvirtuada por otro medio de prueba y aun en el supuesto que la diésemos por cierta es imperativo puntualizar que las lesiones mortales fueron ocasionadas por el otro procesado, porque si mi defendido vio a su hermano en una pelea donde salieron a relucir botellas y cuhillos era una conducta natural de su parte tratar de defenderlo, máxime que hay evidencias de que trató a toda costa de impedir la confrontación.
>
> Por las razones antes expuestas pido que se revoque el auto apelado y se profieran sobreseimiento definitivo a favor de **ÁNGEL SANTOS ARJONA**." (Fs. 293-296).

Ahora bien, antes de emitir un pronunciamiento de fondo, la Sala considera necesario revisar las principales piezas procesales que componen el presente negocio.

RELATO DE LOS HECHOS:

El sumario revela que el día 21 de agosto de 1993, aproximadamente a las once (11:00 p. m.) de la noche, perdió la vida SANTIAGO MARCIAGA QUINTERO, en el Jardín LUPITA ubicado en Rincón Hondo, Distrito de Pesé, Provincia de Herrera. La muerte de MARCIAGA QUINTERO se produjo como consecuencia de una riña en la que éste resultó apuñalado y en donde se presume la participación de los hermanos **JULIO QUINTERO MELGAR** y **ÁNGEL SANTOS ARJONA MENDOZA.**

La diligencia de levantamiento del cadáver, que se realizó dentro del vehículo de propiedad de **BERNABÉ SAMANIEGO** -en el cual se transportó a Santiago hasta el hospital-, revela que el hoy occiso presentaba cinco (5) heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo.

A foja 35 del sumario consta la declaración indagatoria rendida por **ÁNGEL SANTOS ARJONA**, sobre cómo se iniciaron los hechos que trajeron como consecuencia la muerte de SANTIAGO MARCIAGA. Narra **ARJONA** que estando él, su hermano **JULIO QUINTERO** y su primo **ÁNGEL BULTRÓN** tomando seco en el Jardín LUPITA, dentro del billar, llegó SANTIAGO MARCIAGA y le pidió groseramente un trago, a lo que éste le dijo que esperara un momento, pero SANTIAGO siguió insultándolo, por lo que **QUINTERO** salió del billar y le dijo que "se dejara de vainas", que no se pelearan por un trago, pero al insistir SANTIAGO en su actitud, **QUINTERO** se enojó, iniciándose así una primera pelea que finalizó cuando **ÁNGEL ARJONA** separó a SANTIAGO y **ÁNGEL BULTRÓN** a **QUINTERO**; este último se lo llevó para su casa, donde se quedaron un rato, y mientras que **QUINTERO** tomaba agua, "le aconsejaba que

dejara de pelear" (f. 130). Cuando **QUINTERO** y **ÁNGEL BULTRÓN** regresaron de la casa de este último al Jardín, se encontraron a SANTIAGO y **ÁNGEL ARJONA**, y allí fue que se inició la riña, según testimonio del propio **ARJONA:**

> "... y Santiago Marciaga dijo que iba a matar a mi hermano, yo le dije que si de verdad pensaba hacer eso, tenía que pegarme a mí también, él se abalanzó conmigo y me tiró puñetazos y nos agarramos a la lucha, entonces él cayó y yo escuché una botella que se quebró yo pensé que él me iba a dar con el pico de la botella, y volvió y se paró, allí yo saqué mi cuchillo y lo corté." (Fs. 35 y 36).

> "... en eso salió mi hermano y Santiago cuando lo vió (sic) salir le tomo (sic) pareja y se pusieron a pelear, en el forsejeo (sic) vi cuando mi hermano le dió (sic) varias peñaladas (sic) y en eso cayó Santiago al piso y no se movió más." (F. 19).

Varios testigos del hecho coinciden en que hubo una primera pelea, lo cual es corroborado en los testimonios de **ÁNGEL BULTRÓN** (fs. 129 y 130), **BERNABÉ SAMANIEGO** (f. 81), **CONCEPCIÓN BARBA** (f. 91) y **GREGORIO ATENCIO** (fs. 108 y 109).

En relación con el momento de la muerte de SANTIAGO, básicamente todos los testigos coinciden con lo declarado por **CONCEPCIÓN BARBA**, a fojas 91 y 92 del sumario:

> "Señor Personero, primero como a eso de las diez y media más o menos yo decidí cerrar el billar porque habían empezado a discutir Santiago con Julio sobre unos tragos y apenas cerré el billar Santiago y Julio empezaron a forzajear (sic) y luego se calmaron como media hora después yo vi que ellos venían corriendo por el medio del Jardín y en eso vi a Santiago que cayó al lado de la tercera mampara al extremo derecho del Jardín, luego él se paró y corrió al otro extremo del Jardín y quedó al frente del corrijo (sic) quedó en la esquina de la cantina y yo pude ver cuando Julio le dió dos puñaladas a Santiago en el pecho y enseguida Santiago cayó al suelo y luego Julio y Ángel Santos los dos tenían los cuchillos en las manos y no dejaban que nadie se acercara a Santiago y Julio decía "yo sabía que lo mataba" y luego Ángel Santos que estaba como alterado le dió (sic) con el cuchillo a una de las mamaparas y se veía que la mampara estaba salpicada de sangre y luego ellos salieron para la parte de abajo del pueblo y luego llegó Bernabé y recogieron el herido y se lo llevaron al Hospital. ..."

Según la declaración de **RUBÉN CHÁVEZ**, una vez cometido el delito, al encontrarse con **ÁNGEL ARJONA** y **JULIO QUINTERO**, les pidió que le entregaran los cuchillos, lo cual hicieron. Luego de ésto, se dirigió a la Fuerza Pública de Pesé a fin de entregarlos uno con cacha negra de propiedad de **ÁNGEL ARJONA** y otro con cacha blanca con chocolate de propiedad de **JULIO QUINTERO**.

CRITERIO DE LA CORTE:

En este punto, estimamos indispensable enumerar algunas consideraciones en cuanto a ciertas contradicciones que aparecen entre los testimonios de **ÁNGEL ARJONA** y **JULIO QUINTERO**, por estimar que son fundamentales para determinar el grado de participación que tuvo cada uno en el hecho delictivo y, por tanto, la procedencia del auto encausatorio.

En cuanto a la excepción de legítima defensa que alega el apoderado de **JULIO QUINTERO**, opina esta Corporación que la misma no se encuentra plenamente probada en el sumario. Por el contrario, casi todos los testigos coinciden en que **QUINTERO** persiguió a SANTIAGO por todo el jardín, y que cuando logró darle alcance, fue cuando lo apuñaló varias veces -ver las declaraciones de **BERNABÉ SAMANIEGO** (f. 81), **FELICIANO DOMÍNGUEZ** (fs. 89 y 90), **CONCEPCIÓN BARBA** (fs. 91 y 92), **PEDRO JOSÉ SAMANIEGO** (fs. 119 y 120), **JOSÉ ROYO** (fs. 135 y 136)-.

Para que se de la legítima defensa, es indispensable que concurran ciertos requisitos que el Código Penal establece en su artículo 21. Sobre este tema, la Sala Penal se ha pronunciado en diversas ocasiones:

> "En fin, no hay en las sumarias pruebas dotadas de suficiente credibilidad para aceptar que la reacción del sindicado haya sido consecuencia de una agresión grave, injusta, actual o inminente, tal como lo exige el art. 21 del Código Penal.
>
> Esta Corporación-como lo ha reconocido el Ministerio Público- ha mantenido en esta materia el criterio, basado en fundamentos de justicia, que la procedencia y aceptación de una causal de justificación en el sumario depende de que la misma esté plenamente probada en autos."
>
> M. P. DRA. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. MARZO 31 DE 1980.

Llama la atención poderosamente, el hecho de que no haya testigos que manifiesten haber visto a **ÁNGEL ARJONA** herir a **SANTIAGO MARCIAGA**; por el contrario, el único que afirma esto es el propio **ARJONA** en su declaración indagatoria y en la ampliación de la misma, donde indica haber sido el primero en herir a SANTIAGO (Ver f. 36). En contraposición, **JULIO QUINTERO** afirma ser el primero en herir a SANTIAGO:

> "... PREGUNTA: Diga el indagado quién de los dos cortó primero a SANTIAGO MARCIAGA, usted o su hermano? CONTESTÓ: Yo señor Fiscal. ..." (F. 201).

También éstos incurren en contradicciones, en cuanto al orden cronológico en que ocurrieron los hechos; así pues, **ARJONA** señala que primero peleó con SANTIAGO -porque éste dijo que iba a matar a **QUINTERO**-, después escuchó quebrarse una botella y fue cuando él sacó su cuchillo y cortó a SANTIAGO; luego de esto, apareció su hermano **QUINTERO**, y entonces SANTIAGO, "le tomó pareja a mi hermano y vi que se agarraron a la lucha y vi que cayó SANTIAGO."

No obstante, **JULIO QUINTERO** sostiene una versión diferente, cuando señala:

> "... **y vi a mi hermano cerca del billar hablando con una persona que no recuerdo quien era** Santiago se vino para la calle en donde yo estaba y quebró una botella y me iba a dar con el pico de una botella y yo le amparé el golpe y allí le tiré con el cuchillo que cargaba, de ahí me fui para mi casa, ..." (F. 29). (Lo resaltado es de la Sala).

Por lo tanto, resulta una clara contradicción entre ambos testimonios, pues mientras que **ARJONA** sostiene que se encontraba con SANTIAGO al quebrar éste la botella, y que fue entonces, cuando él hirió a SANTIAGO; por otro lado, **QUINTERO** asegura que **ARJONA** estaba hablando afuera del billar con alguien que no recuerda, justo en el momento en que SANTIAGO quebró la botella y trató de cortarlo con la misma, luego de ésto él hirió al hoy occiso con el cuchillo.

En ampliación de declaración indagatoria, a fojas 200-203 del sumario, **JULIO QUINTERO** aporta nuevos elementos, como lo es la afirmación de que él no vio a su hermano **ÁNGEL ARJONA** propinarle lesiones al occiso. Este señalamiento también entra en conflicto con lo dicho por **ÁNGEL ARJONA** en su ampliación, a fojas 195-198:

> "PREGUNTADO: A qué distancia se encontraba su hermano JULIO QUINTERO MELGAR MENDOZA, de donde estaba usted peleando con Santiago Marciaga. CONTESTÓ: Señor Fiscal, creo que había una distancia de cinco a siete metros."

Resulta físicamente imposible que, estando a cinco o siete metros de distancia de donde estaba su hermano peleando, **JULIO QUINTERO** no se hubiese

percatado de lo sucedido, máxime cuando, según **ARJONA**, el occiso quebró una botella para cortarlo. E incluso, más difícil resulta entender, por qué si **ARJONA** afirma haber cortado a SANTIAGO primero que **QUINTERO**, este último no notó si **SANTIAGO** presentaba o no heridas, como indica a foja 202 del sumario.

Además, afirma **JULIO QUINTERO**, al preguntársele por la reacción de **ARJONA** cuando SANTIAGO quebró la botella para herir al primero, que:

> "Yo solo vi a mi hermano después que ya había cortado a Santiago Marciaga y éste me dijo que lo dejara." (F. 30). (Lo subrayado es nuestro).

ISIDRO QUINTERO CORRALES, tío segundo de los sindicados, manifestó a fojas 118, lo siguiente:

> "PREGUNTADO: Diga el declarante, qué le dijeron Julio y Ángel Santos cuando llegaron a su casa, CONTESTÓ: Señor Personero, cuando ellos llegaron a mi casa ellos, o sea Julio me dijo que había matado a Chaquín y yo les dije 'Julio usted para qué hizo eso' y no contestaron nada." (Lo subrayado es nuestro).

Todo lo anterior apoya la tesis de la defensa de **ÁNGEL ARJONA**, en el sentido de que éste ha aceptado una culpa que no es suya para defender a su hermano.

Resulta también de apoyo a esa tesis, el hecho de que no se hayan encontrado rastros de sangre en la rajadura hecha por **ARJONA** en la mampara ni tampoco en su propio cuchillo, luego de que supuestamente hirió a SANTIAGO. (Ver fojas 10 y 152).

En cuanto a las heridas que causaron la muerte de MARCIAGA, el Protocolo de Necropsia visible a fojas 55-67 de la encuesta penal, indica que dos (2) de las heridas producidas eran mortales, cada una por sí sola, y una tercera era grave; resultado éste que coincide con lo admitido por **QUINTERO** y lo declarado por **ARJONA**, en el sentido de que fue aquél y no éste el que produjo dichas heridas. (Ver fojas 19 y 30).

Por todo lo esbozado, esta Sala concluye que, en relación con el llamamiento a juicio del ciudadano **JULIO QUINTERO MELGAR** se encuentran cumplidos los requisitos del artículo 2222 del Código Judicial, esto es, plena prueba del hecho punible (Certificado de Defunción de SANTIAGO MARCIAGA) y graves indicios que vinculan a dicho sujeto con el aspecto subjetivo del delito (confesión de **QUINTERO**, testimonios de los presentes, etc.)

En cuanto a **ÁNGEL SANTOS ARJONA MENDOZA**, debemos concluir, de acuerdo con lo alegado por su defensor, que no aparece demostrada en el sumario la vinculación directa de éste con la muerte de SANTIAGO MARCIAGA, pues existen elementos que llevan a este Tribunal a la convicción de que **ARJONA** aceptó la culpa, buscando de alguna manera proteger a su hermano **JULIO QUINTERO**, que fue quien cometió el delito en cuestión.

En mérito de lo expuesto, la **Corte Suprema**, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: REFORMA el Auto de 12 de mayo de 1994, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, y DECRETA sobreseimiento provisional, en el presente negocio penal, a favor de ÁNGEL SANTOS ARJONA MENDOZA, de generales conocidas en autos y, por consiguiente, ORDENA su inmediata libertad; SEGUNDO: CONFIRMA en todo lo demás el Auto apelado.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A.ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AUTO CONSULTADO

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL REVERTE OLMOS CONTRA JUAN FRANCISCO CASTILLO, JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DE LA PROVINCIA DE HERRERA, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

A la Sala Penal ha ingresado, en grado de consulta, auto calendado 11 de enero de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que sobresee definitivamente en las sumarias iniciadas por razón de la denuncia interpuesta por el licenciado Manuel Reverte Olmos contra Juan Francisco Castillo, Juez Primero del Circuito de Herrera, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos.

La denuncia se hace consistir básicamente en que el funcionario judicial acusado supuestamente trató de "estorbar el derecho de defensa" de Elvira O'Callaghan de Crespo, dentro de la audiencia celebrada con ocasión del proceso de divorcio que su mandante le sigue a Dagoberto Crespo Guillén (fs. 1-4).

La Sala comparte el criterio del a-quo en cuanto a la medida de cerrar la encuesta penal con un sobreseimiento definitivo, pero arriba a esa conclusión por la vía de considerar que la denuncia presentada contra el funcionario judicial carece del sustento de la prueba sumaria que acredite el hecho punible atribuido, requisito de procedibilidad de la acción, tal como lo requiere el artículo 2471 del Código Judicial. En ese orden de ideas, vemos que el licenciado Reverte Olmos presenta como prueba sumaria de su relato "El testimonio de ELVIRA O'CALLAGHAN DE CRESPO" (f. 4), consultable a fojas 5-6 del cuaderno penal. A juicio de la Sala, se trata de un elemento procesal insuficiente para acreditar la existencia del hecho punible, así como para dar inicio a la instrucción sumarial, toda vez que esa "declaración" no fue evacuada de acuerdo con las formalidades que la ley exige.

De esa manera, por no haber cumplido el denunciante con el requisito de procedibilidad que dispone el artículo 2471 del Código Judicial, la Sala considera ajustada a derecho la medida sometida a consulta, consistente en el sobreseimiento definitivo decretado en esta causa.

Por las anteriores consideraciones la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución calendada 11 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

CONFLICTO DE COMPETENCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE JUAN MENDOZA CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia surgido entre el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial y el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro de las sumarias que investigan la muerte de JUAN MENDOZA CONCEPCIÓN.

En cuanto a los antecedentes del caso bajo estudio, según se desprende de la Vista N° 35 de 16 de marzo de 1995, emitida por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial,

> "... la presente instrucción sumarial se inició en la Personería Primera Municipal del Distrito de David, al tenerse conocimiento por vía telefónica que en la morgue del Hospital Rafael Hernández se encontraba el cadáver de una persona de sexo masculino. El Agente de Instrucción de turno, de inmediato procedió a realizar la respectiva Diligencia de Inspección Ocular y Reconocimiento del Cadáver, constatándose en la misma que el occiso respondía al nombre de JUAN MENDOZA; que presentaba una herida quirúrgica de 10 centímetros en la región media de la columna vertebral parte superior.
>
> A fojas 9 del infolio se insertó el Protocolo de Necropsia realizada al cadáver del ofendido, donde se observa que el médico forense indicó como circunstancia de su muerte lo siguiente:
>
> 'Se cayó de un árbol-Veraguas-Cañazas'.
>
> Al finalizar dicho protocolo dictaminó como causa de muerte: 'I. Transección Medular por Fractura en C7'.
>
> Al observarse que el suceso que produjo las lesiones que ocasionaron la muerte del finado Mendoza se escenificó en el Distrito de Cañazas, Provincia de Veraguas; el Personero Primero Municipal del Distrito de David; dispuso remitir las sumarias a la agencia de instrucción de esa circunscripción territorial a fin de que prosiguiese con la investigación y decidiera lo que en derecho corresponde (fs. 11). ...". (Fs. 90-91).

El Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), Licenciado Rolando A. Rodríguez Chong, mediante la Vista Fiscal N° 208 de 27 de diciembre de 1994, remite la actuación al Tribunal Superior de su esfera de colaboración, para su valoración legal y, solicita al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mencionado, "... conforme lo establece el artículo 1999, del Código Judicial, que ordene el envió (sic) de la presente encuesta sumarial, al Tribunal de la circunscripción territorial que por ley compete, ya que como se ha acreditado en Autos el deceso se suscitó en la Provincia de Chiriquí (ver fs. 69) hecho éste que imposibilita el conocimiento del negocio ya que son competentes los Tribunales del Tercer Distrito Judicial." (F. 74).

Al conocer de la presente causa, para su calificación legal, el Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, Licenciado Osvaldo Jiménez Correa, mediante el Auto de 11 de enero de 1995 (f. 81), acoge la solicitud hecha por el Fiscal Superior de la misma circunscripción territorial y, declina la competencia del presente caso al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, con fundamento en lo establecido en el artículo 1999 del Código Judicial, y en el hecho de que "... la muerte ocurrió en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí." (F. 81).

Ello dio lugar a que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante Providencia de 13 de febrero de 1995 (f. 84), ordenara la remisión de la presente actuación, al Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado Edwin Álvarez C., a fin de que realizara las diligencias pertinentes

y emitiera concepto. En este orden de ideas, concluida la etapa de investigación sumarial, la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la Vista N° 35 de 16 de marzo de 1995 (fs. 90-93), luego del estudio de las constancias procesales que integran este cuaderno penal, concluye que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial es el competente para decidir la presente causa,

> "tal como se desprende del Artículo 18 del Código Penal que a la letra dice:
>
> 'Artículo 18: El hecho punible se considera realizado en el momento y lugar de la acción u omisión, aún cuando sea otro el momento del resultado' (el subrayado es nuestro).
>
> Conviene señalar además que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha dicho de manera uniforme que respecto del lugar donde el delito debe suponerse realizado 'se acoge sin reservas el principio de la ubicuidad'; ello es así porque de manera categórica y sin discusión alguna se admite que el hecho punible se entiende cometido en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción o donde debió realizarse la acción omitida. (Crf. Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal. Parte General, XI Edición, Edit. Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p. 71 y Bacigalupo, Enrique, Manual de Derecho Penal, Parte General, Temis-ILANUD, 1984, p. 49)." (F. 92).
>
> Ante esta situación, el agente instructor antes citado, opina:
>
> "que el Tribunal de nuestra esfera de colaboración debe inhibirse de conocer de la causa que nos ocupa y remitir la actuación a su Superior Jerárquico para que dirima el conflicto de competencia que se originaría con tal decisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 703 y 2285 y siguientes de nuestra normativa instrumental; ... ." (F. 93).

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el Auto de 4 de abril de 1995 (fs. 97 a 101), comparte el criterio esbozado por su colaborador de instancia, el Fiscal Primero Superior, "... en el sentido de considerar que como las lesiones sufridas por Mendoza al caerse de un árbol en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas fueron la (sic) causante (sic) de su muerte,... ." (fs. 99-100); por lo tanto, "... las referidas sumarias en averiguación de las causas de la muerte competen al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial." (f. 100), conforme a lo establecido en el artículo 1999 del Código Judicial antes mencionado. Y, en razón de esto, se inhibe de conocer de la presente causa penal y, dispone remitir el expediente a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que dirima el conflicto de competencia que se presenta en este negocio, según lo establecido en los artículos 703-704, en relación con el artículo 2285 de la excerta legal citada.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa R., mediante la Vista N° 8 de 23 de enero de 1996 (fs. 106 a 109), solicita a esta Sala, "que al resolver el presente conflicto de competencia, lo haga adjudicando **el conocimiento del negocio al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial**." (Fs. 108-109).

También, el Jefe Máximo del Ministerio Público, en su emisión de concepto, advierte:

> "que la controversia que se ha suscitado, en esta causa penal, consiste en un conflicto de competencia negativa, que es aquél que tiene lugar cuando dos o más tribunales niegan cada uno tener competencia para conocer determinado proceso. ... .
>
> De acuerdo a las declaraciones de Eufemia Concepción Hernández (fs. 20-22), Juan Mendoza (fs. 28-29), Hipólito Mendoza Concepción (fs. 30-32) y Reyna Mendoza Jiménez (fs. 34-35), la muerte de JUAN

> MENDOZA CONCEPCIÓN tuvo lugar producto de las lesiones sufridas por éste al caerse de un árbol de aguacate, el 8 de mayo de 1994, lo que dio lugar a que fuera trasladado, en primera instancia, al hospital de Santiago y luego a Chiriquí, donde murió despues (sic) de veintidós (sic) (22) días de ocurrido el accidente." (F. 107).

En tal sentido, la Sala en Fallo de 29 de marzo de 1995, externó el siguiente razonamiento:

> "En conclusión, si se tiene en cuenta que el artículo 18 del Código Penal contempla que 'aun cuando sea otro el momento del resultado', el hecho punible se considera realizado en el momento y lugar de la acción u omisión, queda claro que es del caso fijar la competencia tomando en consideración el momento de la realización del hecho, es decir, por el evento que se desarrolló dentro de la jurisdicción del Segundo Distrito Judicial y no por el lugar donde murió Gil Rodríguez." (Sala Penal, Corte Suprema. R. J., marzo de 1995).

La Sala es de la opinión de que las diversas declaraciones de los testigos y la causa de muerte señalada en el respectivo protocolo de necropsia, comprueban que el día 8 de mayo de 1994, JUAN MENDOZA CONCEPCIÓN cayó de un árbol de aguacate ubicado en el lugar conocido como Corita, Distrito de Cañazas, Provincia de Veraguas, y posteriormente fue trasladado al Hospital Rafael Hernández en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, donde falleció el 28 de mayo de 1994. Por lo tanto, está ampliamente comprobado en autos que el hecho que le causara la muerte a JUAN MENDOZA CONCEPCIÓN, ocurrió en la Provincia de Veraguas, circunscripción territorial ésta en la que es competente el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, según el criterio antes expuesto.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE fijar la competencia para conocer de las sumarias en averiguación de la muerte de JUAN MENDOZA CONCEPCIÓN y, remitir el presente negocio, para su calificación legal al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, con sede en la Ciudad de Penonomé, Provincia de Coclé.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DEL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN DEL VEHÍCULO A MOTOR DE PROPIEDAD DE MIGUEL DÍAZ PATERNINA, EN LAS SUMARIAS SEGUIDAS A NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí, el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en La Chorrera, en el incidente de levantamiento de aprehensión de vehículo a motor propiedad de MIGUEL DÍAZ PATERNINA, dentro de las sumarias seguidas a NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ y otros, por delito contra la Salud Pública.

La Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, al emitir

concepto realiza la siguiente exposición de los antecedentes del caso:

> "El día 25 de julio del año en curso es detenido por inspectores de Aduana de Paso Canoas, provincia de Chiriquí, el ciudadano guatemalteco **NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ**, cuando intentaba cruzar la frontera, con un vehículo pick up, marca Nissan, año 1989, en el cual le fue incautada la cantidad aproximada de **cinco (5) kilos de cocaína**, con lo que se determina la existencia de un hecho punible, tipificado por la ley panameña, en el Capítulo V, Título VII, del Libro II, del Código Penal, bajo la denominación de **DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA**.
>
> En el desarrollo de la investigación sumarial se logra determinar que la sustancia ilícita incautada fue embalada en una residencia ubicada en Coronado, Distrito de Chame, Provincia de Panamá, e igualmente surge la vinculación de **ASTREA TRINIDAD ARANGO DE DÍAZ, OMAR CASÍS** y un tal **"GILBERTO"** (ayudante de la prenombrada **ARANGO DE DÍAZ** y contra quien en la actualidad pesa orden de detención preventiva, pendiente de ejecutarse, dado que no ha podido ser localizado), ...". (Fs. 10-11).

El Juzgado Cuarto del Circuito Judicial de Chiriquí, mediante Auto N° 773 de 13 de septiembre de 1995 (f. 7), se inhibe del conocimiento del presente incidente y remite la actuación al Juez del Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal de Turno, según lo establecido en el artículo 2297 ordinal 2° del Código Judicial, toda vez que,

> "... el ilícito tuvo vida jurídica en la comunidad de Coron-ado (sic) de la Provincia de Panamá, lo que indica que jurisdiccionalmente, la competencia para decidir lo solicitado por el Licdo. José Ramiro Fonseca Palacios , lo es el Juez del Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, en Turno funcionario al que se debe remitir lo anterior". (F. 7).

Al conocer del presente negocio el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, "... advierte de autos que el objeto material del delito, motivo por el cual se instruye el sumario, dentro del cual se decretó la aprehensión provisional del vehículo a motor marca Toyota, modelo Land Cruiser; fue transportado desde una residencia en Coronado, casa N° 42, frente a la entrada de Las Lajas, Distrito de Chame, en la que fue posteriormente practicada Diligencia de Allanamiento (fs. 3-20), hacia la provincia de Chiriquí, ..." (f. 13), razón por la que se inhibe del conocimiento de la presente solicitud y remite la misma, en virtud de que "El texto legal es claro, en el Artículo 149 del Código Judicial, cuando organiza los Tribunales de la República y establece que lo actuado ante circunscripción territorial del Distrito de Chame, corresponde conocerlo a los Jueces del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá".

Por su parte, el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en La Chorrera, en el Auto N° 278 de 23 de noviembre de 1995, externa las consideraciones siguientes:

> "En éste (sic) sentido, el Artículo 1999 del Código Judicial, establece que son competente (sic) en materia penal, los Tribunales de la Circunscripción Territorial en que se haya cometido el delito, en el caso que nos ocupa hay tres (3) cosas probadas:
>
> 1. La droga fue incautada en la circunscripción territorial de Chiriquí,
> 2. La droga fue embalada en la circunscripción territorial de éste Tribunal;
> 3. La droga que se embaló en ésta área y se incautó en Chiriquí, obviamente, fue transportada el día 24 de junio desde la Ciudad de Panamá, sea por el señor **OMAR CASÍS** o por el sujeto que apodan **ALLAN**. "(F. 18).

Ante tales circunstancias, el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial, concluye que el tribunal bajo su cargo no es el competente para decidir la presente causa, en razón de lo cual se inhibe de conocer el fondo del sumario, y lo remite a la Sala Penal de la Corte Suprema, para que decida lo pertinente, según lo establecido en el artículo 2287 del Código Judicial, "... al existir un conflicto de competencia entre Juzgados de diferentes Circuitos Judiciales, y de Distritos también diferentes ... ". (F. 18).

Mediante la Vista N° 10 de 31 de enero de 1996 (fs. 23 a 25), el Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa R., en la emisión de concepto,

> "... estima que corresponde al Juzgado Cuarto del Circuito Judicial de Chiriquí el conocimiento de la petición que inspira el incidente propuesto por MIGUEL DÍAZ PATERNINA, en nombre de la sociedad DIMO, S. A., en base a lo estatuido en el artículo 2,000, numeral 1°, del Código Judicial puesto que es un hecho comprobado que la sustancia ilícita fue localizada por unidades de la Dirección de Aduana de Paso Canoa, Provincia de Chiriquí, cuando el ciudadano guatemalteco, NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ pretendía cruzar la frontera con un vehículo en el cual se encontró la cantidad aproximada de cinco (5) kilos de cocaína, esto es, 'las prueba material del delito', tal como predica la norma citada contenida en el numeral 1° del artículo 2,000." (Fs. 23-25).

Luego del análisis de las piezas procesales que componen el presente negocio, la Sala entra a resolver, tomando en cuenta que la controversia que se ha suscitado en esta causa penal consiste en un conflicto de competencia negativa, en el cual tres (3) tribunales diferentes niegan cada uno tener competencia para conocer del proceso bajo estudio.

En reiterados fallos, esta Sala se ha pronunciado respecto del lugar donde el delito debe suponerse realizado, admitiéndose como válida la tesis de que el hecho punible se entiende cometido en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción o donde debió realizarse la acción omitida. Dicha tesis se fundamenta en el artículo 18 del Código Penal, cuyo texto es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 18: El hecho punible se considera realizado en el momento y lugar de la acción u omisión, aún cuando sea otro el momento del resultado".

Siendo que la sustancia ilícita incautada fue localizada por unidades de la Dirección de Aduanas de Paso Canoa, Provincia de Chiriquí -cuando el ciudadano guatemalteco NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, pretendía cruzar la frontera, en un vehículo en el cual se encontró la cantidad aproximada de cinco (5) kilos de cocaína-, circunscripción territorial ésta en la que es competente el Juzgado Cuarto de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí, según el criterio antes expuesto.

Por lo tanto, la Sala acoge el criterio emitido por el Jefe máximo del Ministerio Público, en cuanto a la adjudicación de la competencia para conocer del presente negocio, al Juzgado Cuarto de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE fijar la competencia para conocer del incidente de levantamiento de aprehensión de vehículo a motor propiedad de MIGUEL DIAZ PATERNINA, dentro de las sumarias seguidas a NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ y otros, por delito contra la Salud Pública y remitirlo, para su calificación legal, al Juzgado Cuarto de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE LA APREHENSIÓN DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR GILBERTO FLORES, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, se recibió el expediente que contiene la solicitud de devolución de dos vehículos dentro del sumario incoado contra **NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, ASTREA ARANGO DÍAZ Y OMAR CASÍS** por delito contra la salud pública, en el cual se ha suscitado un conflicto de competencia entre los Juzgados Cuarto de Circuito de Chiriquí y el Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá y el Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

Al tenor de lo que dispone el artículo 2287 del Código Judicial, los conflictos de competencia que surjan entre Jueces de Circuito que pertenecen a distintos Distritos Judiciales, deben ser resueltos por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y por ello, antes de dirimir el conflicto presentado, se corrió traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que emitiera concepto tal como lo prevé el artículo 2288 de la misma excerta.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

El licenciado José Ramiro Fonseca, en su calidad de apoderado especial de los señores **GILBERTO FLORES y TEODRO VILLARRUE PINILLA**, solicitó al Juez de Circuito de lo Penal de la provincia de Chiriquí, el levantamiento de la medida cautelar real dictada por el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con Drogas sobre dos vehículos a motor, dentro del sumario incoado contra Néstor Moreno Alvarez, Astrea Arango de Díaz y otros por supuesto delito contra la salud pública.

El Juzgado Cuarto de Circuito de Chiriquí, al conocer de dicha solicitud, tomó en cuenta las constancias de autos de las que se desprende que el ilícito investigado tuvo lugar en la comunidad de Coronado, circunscripción de la provincia de Panamá y por ello, previa inhibición del conocimiento del caso, lo remitió al Juzgado de Circuito de lo Penal de la provincia de Panamá, de turno.

Repartido el negocio al Juzgado Décimo de Circuito, mediante auto de 5 de octubre de 1995, consideró que el hecho punible se consumó en Coronado, Distrito de Chame y que en este caso prevalece la competencia territorial, por lo que remitió el expediente al Juzgado de Circuito de lo Penal, de turno, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en la ciudad de La Chorrera.

A su vez, el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial en auto de 23 de noviembre de 1995, visible fojas 19-21, considera que la droga fue incautada en Paso Canoa, en la frontera de la Provincia de Chiriquí y por ello, independientemente del lugar donde fue embalada u obtenida, hay un hecho cierto debidamente acreditado en el sumario, cual es el que la sustancia ilícita, transportada con destino a Centro América, fue incautada en la circunscripción territorial de Chiriquí y por lo tanto estima que son los Tribunales penales de ese Distrito Judicial quienes deben tomar conocimiento del caso, pero como ha surgido un conflicto sobre este aspecto, lo somete a la consideración de la Corte Suprema de Justicia.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA

Mediante la Vista N° 11 de 2 de febrero de 1996, el Jefe del Ministerio Público, expresa su opinión en torno al conflicto surgido entre los Jueces de Circuito de Panamá y Chiriquí, señalando que es el Juzgado Cuarto de Circuito de Chiriquí el que debe asumir la competencia de este negocio, basado en lo normado por el numeral I° del artículo 2000 del Código Judicial, que asigna la competencia a los jueces del lugar en el que se han descubierto pruebas materiales del delito y en este caso, los Inspectores de la Dirección de Aduanas de Paso Canoa detectaron al ciudadano Néstor Rodrigo Moreno Alvarez en el momento en que transportaba cinco kilos de cocaína en su vehículo pick up, marca Nissán, modelo 1989, cuando pretendía cruzar la frontera rumbo a los países del istmo centroamericano.

OPINIÓN DE LA SALA SEGUNDA

La Ley N° 23 de 1986 y la Ley N° 13 de 1994, refomatorias del Capítulo V del Título VII, Libro II del Código Penal, al ocuparse de las diligencias de desaprehensión de dineros, bienes y valores incautados provisionalmente con motivo de la investigación de delitos relacionados con drogas, le ha asignado tal atribución a los Tribunales jurisdiccionales competentes. Si bien es cierto que la fase instructoria de este caso la asumió la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, el lugar donde se practican las medidas cautelares reales y los allanamientos, no son determinantes de la competencia territorial del Tribunal que debe asumir el conocimiento del caso, porque en este supuesto deben seguirse las indicaciones que establece el artículo 2000 del Código Judicial, que para este negocio es determinante el lugar en que se descubrieron las pruebas materiales del ilícito, lugar que coincide con el de la aprehensión del imputado responsable del trasiego de la droga incautada.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DIRIME EL CONFLICTO DE COMPETENCIA, señalando que corresponde al JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CHIRIQUÍ asumir el conocimiento de este caso.

BASE LEGAL: artículos 2000, 2287, 2288 y concordantes del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

JUICIO SEGUIDO A JOSÉ ANSELMO GABRIEL PADILLA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CECILIO SMITH BROWN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia ha ingresado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, el proceso seguido a **ANSELMO JOSÉ GABRIEL PADILLA**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de **CECILIO SMITH BROWN**.

Un jurado de conciencia declaró culpable al precitado, imponiéndole el a-quo una pena de 17 años y 6 meses de prisión, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 8 años contados a partir de la ejecutoria del fallo, por ser encontrado culpable de homicidio con motivo fútil.

El licenciado Víctor Chan Castillo interpuso, en tiempo oportuno, recurso de apelación contra dicha sentencia, emitida el 25 de noviembre de 1994, por considerarla excesiva para el delito cometido por su representado, además de alegar una pobre defensa, en el desarrollo del sumario.

Los antecedentes del caso revelan que el 16 de enero de 1983 a las 5:30 p. m. en el barrio del Marañón, el Sr. **ANSELMO JOSÉ GABRIEL PADILLA** se encontraba orinando en vía pública frente a una habitación abandonada, ubicada en Cll. 19 de El Marañón, Corregimiento de La Exposición; entonces llegaron los agentes del orden público, Cabo **ANSELMO JOSÉ GABRIEL PADILLA** y el raso **ANTONIO MURILLO**, quienes -al parecer- le recriminaron el satisfacer su necesidad en la vía pública.

Varios testigos que presenciaron el incidente, coincidieron en que **SMITH BROWN** estaba en estado de ebriedad; también señalaron que éste no les dio a dichos agentes ningún motivo para que el justiciado le disparara, contrario a lo manifestado por ambos agentes en sus respectivas declaraciones; el sindicado afirmó que el ahora finado les resistió al arresto lanzándoles puñaladas con un cuchillo que tenía, situación que lo obligó a dispararle.

El Licdo. Chan Castillo fundamenta su apelación, principalmente, en los siguientes hechos:

Que "el occiso al recibir el impacto de bala, hizo un giro de rotación súbita de la cabeza sobre el tronco, recibiendo el impacto en la parte lateral del cuello con salida en posición opuesta de la cabeza, sin embargo, la posición del resto del cuerpo lo era en decúbito dorsal."

Que "el sólo hecho del orificio de entrada en la parte lateral del cuello, ignorando la posición del resto del cuerpo, fue motivo para la errónea interpretación de que el occiso recibió el impacto por la espalda. ..."

Que varios testigos tenían antecedentes policivos y penales "altamente censurables", pero sus testimonios influenciaron al jurado; el Magistrado que presidió la audiencia no admitió los historiales policivos de dichos testigos como prueba, por considerar que fueron presentados extemporáneamente.

Que la Policía Nacional le negó asistencia legal a su cliente por razones políticas, teniendo que recurrir a la Defensoría de Oficio, cuyo defensor no pudo prepararse debidamente para la audiencia por su proximidad, lo que incidió en la calidad de su defensa.

Manifiesta el letrado que no existe factor agravante de motivo fútil, y expone dos definiciones -literal y jurídica- de futilidad.

Para tales efectos, también incluye extractos de dos fallos de la Sala de lo Penal, que definen el motivo fútil.

Reafirma el Licdo. Chan Castillo la declaración de su defendido, en el sentido de que éste tuvo que actuar como lo hizo, como reacción al desacato manifestado por el occiso, que alcanzó un nivel de agresividad sumamente peligroso.

Como consecuencia procesal del presente recurso, se dio traslado al Fiscal Tercero Superior Encargado, Licdo. Cristóbal Arboleda, quien lo contestó en los siguientes términos.

Que sí se verifica el elemento fútil en el acto ilícito, así como también el abuso de autoridad.

Dicha futilidad está acreditada por diversas declaraciones adjuntadas al expediente, con el elemento común de que todos estaban presentes cuando se dieron los hechos, y todos manifestaron que **SMITH BROWN** estaba orinando en estado de ebriedad afuera de la casa, cuando se presentaron los dos agentes del orden

público, quienes intentaron arrestarlo por actos "inmorales", golpeándolo con los toletes; que al decirles el occiso que no iría a ningún lado por no haber hecho nada ilícito, y tratar de caminar, recibió el disparo en la nuca por parte del sentenciado.

También coinciden los testimonios en que el finado nunca agredió de ninguna forma al sentenciado.

Por lo tanto -señala el instructor-, el Sr. **CECILIO SMITH** murió por estar orinando detrás de la puerta de una casa condenada del Corregimiento de Calidonia, en estado de ebriedad, siendo ello una razón de poca monta para quitarle la vida a una persona; sobre todo, porque quien lo hizo fue una autoridad responsable por la preservación de la vida de los ciudadanos.

Vertidos los elementos más sobresalientes del presente negocio, se dispone la Sala a emitir su criterio, no sin antes externar las siguientes consideraciones.

Sostiene el apelante en el hecho tercero, que el hoy occiso, al recibir el disparo "hizo un giro de rotación súbita de la cabeza sobre el tronco, recibiendo el impacto en la parte lateral del cuello con salida en posición opuesta de la cabeza, sin embargo, la posición del resto del cuerpo lo era en decúbito dorsal."

Se entiende de esta aseveración, que sólo después de recibir el disparo, **SMITH BROWN** hizo el giro de la cabeza sobre el tronco, siendo que recibió el impacto en la parte lateral del cuello.

Con ello el letrado afirma que el impacto de bala produjo la rotación de la cabeza, siendo que el disparo no fue realizado de espaldas a la víctima, sino de lado, y que el cuerpo quedó en posición decúbito dorsal.

El protocolo de necropsia -f. 73- indica que el orificio de entrada del proyectil fue en el lado derecho de la nuca, "con collarete muy fino", lo cual significa que el disparo se realizó en el lado derecho a espaldas del occiso, y que no fue a quemarropa; mientras que el orificio de salida se localizó a nivel malar izquierdo.

Además, a foja 9 se observa una fotografía en la que aparece el occiso tendido en el suelo, y los agentes de la P. T. J. colocaron un trozo de papel en el orificio de salida de la bala; como se observa allí, dicha abertura estaba colocada debajo del ojo izquierdo del finado, por lo que la entrada del proyectil fue -como ya se dijo- en el lado derecho, pero en posición eminentemente dorsal al cuerpo de **SMITH BROWN**, y no como señala el defensor que recibió el impacto en la "parte lateral del cuello".

Lo anterior tiene relación con el hecho cuarto del recurrente, cuando afirmó que la sola posición del orificio de entrada en la parte lateral del cuello, ignorando la posición del resto del cuerpo, motivó la interpretación equivocada de que el occiso recibió el impacto por la espalda.

Se evidencia entonces que el disparo sí entró por la espalda.

Sobre este punto, se observa que los testigos son coincidentes en que **GABRIEL PADILLA** le disparó a la víctima en la nuca, por la espalda. Esas declaraciones anulan la aseveración de la defensa de **SMITH BROWN.**

En otro orden de cosas, manifiesta el actor que algunos de los testigos tenían antecedentes penales y policivos "altamente censurables", y que el Magistrado que presidió la audiencia no admitió tales historiales por considerarlos extemporánea su presentación.

No concuerda este criterio con el de la Sala, toda vez que los testimonios fueron coincidentes en los hechos que fueron determinantes para formar el criterio -Independientemente del historial de dichos testigos-, tanto del jurado de conciencia para declarar culpable al sindicado, como del Segundo Tribunal

Superior para dosificarle la pena.

Además, considera esta Superioridad que sí era extemporánea la presentación de esos records policivos en ese momento; ese argumento es atendible a través de otro recurso judicial.

En otro orden de cosas, el Licdo. Chan Castillo reitera que no hay motivo fútil en la comisión del ilícito.

Afirma que la situación fue que un agente del orden público tuvo que confrontar a un ciudadano infringiendo normas, y que al intimarlo mostró desobediencia a un nivel agresivo que obligó a dicho agente tomar la fatal medida.

Observa esta Colegiatura que esas aseveraciones no tienen ningún medio probatorio que las apoye, pero los elementos acumulados -ya comentados- en el proceso demuestran lo contrario.

No puede haber futilidad -señala el letrado-, porque la circunstancia era la de un deber legal -y cierto grado de legítima defensa- del agente del orden público.

Pero lo cierto es que las pruebas -testimoniales y protocolo de necropsia- apuntan a la existencia del elemento fútil, y por tanto no hay ninguna evidencia que desvirtúe dicha agravante en este caso.

Finalmente, manfiesta la defensa de **ANSELMO GABRIEL** que su defendido fue víctima de una serie de circunstancias, como interpretación errónea de la prueba, no admisión de pruebas documentales, declaraciones de testigos inhábiles, negación de la defensa por parte de la Policía Nacional, así como la defensa débil e improvisada que tuvo su representado por parte de la Defensoría de Oficio.

Considera la Corte que esas son situaciones circunstanciales, y no tienen validez jurídica, toda vez que no se ha evidenciado interpretación errónea de las pruebas, como él formula; la inadmisión de las pruebas por él propuestas fue procedente; las declaraciones de los "testigos inhábiles" no lo son, ya que los declarantes, en todo caso, no adolecen de inhabilidad para declarar sino que se constituirían en testigos no confiables por su dudosa reputación, cosa que no fue probada en el proceso.

La negación de la defensa por parte de la Policía Nacional, como la débil defensa de la Defensoría de Oficio, por falta de tiempo para prepararse, son elementos externos que no tienen ningún asidero en el expediente.

Por lo tanto, no le queda otro camino a la Sala que confirmar la resolución apelada.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia del 24 de noviembre de 1994, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A MIGUEL CÁRDENAS FRÍAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERASTO JULIO FRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rafael Rodríguez A., actuando en su condición de apoderado judicial de Miguel Cárdenas Frías, sustentó recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, de fecha 13 de noviembre de 1995, mediante la cual se le impone a su defendido la pena de 10 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, como reo del delito de homicidio cometido en perjuicio de Erasto Julio Frías.

Según se expresa en el libelo de la alzada, la disconformidad con el fallo que se impugna consiste básicamente en que Cárdenas Frías no actuó por motivos fútiles, sino a consecuencia de condiciones especiales, tales como la ingesta de bebidas alcohólicas. A juicio del recurrente, "no hay razón para sustentar que se trata de una situación fútil, de poca importancia de frialdad, de satisfacción, ni de instintos negativos o pasiones de baja moralización" (f. 304). Con apoyo en este criterio, solicita que la conducta de su patrocinado sea encuadrada en la figura de homicidio simple, "que se le imponga al sindicado la pena mínima ... que serían cinco años, más la aplicante de la atenuante de una sexta parte a una tercera parte, lo que sería la pena a imponer de 40 meses" (f. 304).

Por otro lado, el recurrente reclama el reconocimiento de circunstancias diversas a título de "atenuantes" (fs. 304-305). Se trata en realidad de hechos que no se encuentran previstos en el catálogo de atenuantes comunes que trae el Código Penal, de allí que quede descartada la posibilidad de proferir un dictamen al respecto.

La Sala pasa a decidir el recurso, exclusivamente sobre los puntos de la resolución a que se refiere el defensor técnico, en cumplimiento del mandato del artículo 2428 del Código Judicial.

Las piezas procesales permiten determinar que el hecho de sangre ocurrió en horas de la tarde del 26 de junio de 1992 en la comunidad de San Pablo, corregimiento de Tulú, provincia de Penonomé, cuando el inculpado Cárdenas Frías agredió con una botella a Erasto Julio Frías, ocasionándole heridas "penetrante en abdomen ... Herida superficial en la mano ... Herida superficial en tercio inferior del antebrazo" (f. 103). Según el dictamen forense, la muerte fue ocasionada por "Trauma craneal" (f. 111).

Cabe destacar que la culpabilidad del sentenciado fue declarada por jurados de conciencia (f. 271), conforme lo establece el artículo 2320 del Código Judicial, por lo que no es materia de discusión.

El tribunal a-quo determinó que el proceder del reo encuentra adecuación típica en la figura de homicidio calificado, de conformidad con el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, tras considerar que "no existía causa aparente y de haber existido, no hubiese justificado jamás la muerte de esta persona" (f. 297).

En cuanto a lo que es motivo fútil, la jurisprudencia ha sostenido que "es un elemento calificador del homicidio, conceptuado por otras legislaciones como causa nimia, o ausencia de motivo real, atendible, es el factor o móvil de poca importancia o poca seriedad que determina a la voluntad del agente para que haga o no haga alguna cosa" (Registro Judicial de noviembre de 1991, pág. 43).

En el caso que ahora nos atañe, las primeras investigaciones señalaron como presunto responsable del hecho al hoy condenado, quien días después compareció ante las autoridades policiales de la ciudad de las Tablas, a fin de entregarse (f. 32). Al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, aceptó haberle causado la muerte a Julio Frías, e indicó no recordar absolutamente nada porque el día del homicidio estaba borracho (fs. 142-148).

Constan en las sumarias las declaraciones de Balbino Domínguez Quintero y Alejandro Domínguez Quintero, quienes se encontraban en el lugar donde acaeció el hecho de sangre. Sin embargo, se observa que de sus relatos no se desprende ningún elemento fáctico probatorio relevante para dilucidar la presente causa. Así vemos que el primero de estos testigos manifestó que al momento de los acontecimientos "yo estaba de espalda que iba a ver el caballo que se habia soltado ... Yo no ví nada ... Yo no oí nada" (f. 129). En tanto, que el segundo señaló que "Yo en el momento que me dirigia a coger o amarrar el cabllo (sic) que iba como a tres (3) metros de distancia oi el ruido de la botella que se quebró y de una vez miré para atrás vi que el hombre cayó ... cuando llegué ya el hombre taba golpiao" (f. 134).

Por su parte, la cónyuge del finado, Otilia María Rodríguez Domínguez, testigo presencial del hecho, relata que Julio Frías "me dijo que matara una gallina que la gente se la iban a pagar ... MIGUEL CÁRDENAS le preguntó a ERASTO que si ellos le debían algo, ERASTO les dijo que si ... que le pagaran lo que le debían, entonces MIGUEL metió la mano al bolsillo y no tenía plata, ALEJANDRO (a) COLA, le iba a dar plata para que le pagara a ERASTO y en eso MIGUEL no esperó y le pegó a ERASTO en el pecho con la mano abierta ... MIGUEL agarró el litro y se lo desbarató en la cabeza ... hizo el intento de levantarse y lo apañó MIGUEL con el pitongo de la botella y se lo zampó en la barriga" (fs. 21-22).

Esta versión de los hechos pone de manifiesto que la reacción de Cárdenas Frías no fue proporcional al estímulo que recibió de la víctima quien, como se observa, se limitó a cobrarle las gallinas que tanto Balbino Domínguez Quintero como Alejandro Domínguez Quintero y el sindicado Cárdenas Frías le habían pedido. Por consiguiente, la Sala considera que la conducta del sentenciado se produjo sin justificación, aparente e inmediata, es decir, con ausencia de un móvil que justificara su acción, por lo que se concluye que el sentenciado actuó impulsado por un motivo fútil.

De otra parte, en cuanto al argumento externado por el recurrente en el sentido que el sindicado actuó motivado por la ingesta de bebidas alcohólicas, la Sala debe destacar que el eventual estado de embriaguez de Cárdenas Frías no es un elemento de convicción suficiente para justificar su conducta delictiva, ya que ese estado fue voluntario y no fortuito, tal como él mismo lo señala: "nosotros fuimos, y nos pusimos a tomas (sic) como a las diez de la mañana" (f. 145).

Al no ser posible acreditar la motivación del imputado en la causación de la muerte de la víctima, la Sala estima correcto calificar como fútil la conducta dolosa de Cárdenas Frías, siendo por tanto, pertinente mantener la pena impuesta por el a-quo.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 13 de noviembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se condena a 10 años de prisión a Miguel Cárdenas Frías, por la comisión del delito de homicidio cometido en perjuicio de Erasto Julio Frías.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EN PROCESO SEGUIDO A GUILLERMO ANTONIO LINDLEY LAUDEN (A) RONALD PROCESADO POR HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CARLOS ALBERTO BATISTA LÓPEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 31 de julio de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró penalmente responsable a **GUILLERMO ANTONIO LINDLEY LAUDEN (a) RONALD** como autor del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de quien en vida se llamó **CARLOS ALBERTO BATISTA LÓPEZ**, y lo condenó a la sanción de dieciséis (16) años y ocho (8) meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas y de elección popular, del derecho activo y pasivo del sufragio y de cualquier otro derecho político por el término de diez (10) años, contados a la ejecutoria del fallo (fs. 203-211).

El procesado Lindley Lauden al momento de notificarse de esa resolución anunció apelación (f. 211 vt); recurso que fue sustentado en tiempo oportuno por el licenciado Ernesto Muñoz Gamboa, abogado Defensor de Oficio y el procesado.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Muñoz Gamboa reconoce que el tribunal de primera instancia aplicó todas las atenuantes argumentadas, pero solicita en nombre de su defendido, se modifique la pena impuesta considerando que es un joven deseoso de reincorporarse a la sociedad, luego de cumplir con responsabilidad su condena como consecuencia del delito cometido. Además, que un encierro prolongado no conlleva necesariamente el grado de resocialización que la sociedad espera como el verdadero fin del Derecho Penitenciario. Señala que Lindley Lauden cuanta con sólo 21 años de edad y al tener conocimiento de la pena impuesta se ha sentido desmoralizado y apela a la benevolencia de la Corte Suprema de Justicia con la esperanza de que procedan a rebajar un poco la pena impuesta (fs. 214-216).

Por su parte el procesado Lindley Lauden, considera la pena excesiva tomando en consideración que confesó el delito aceptando plenamente su culpabilidad y facilitando el proceso jurídico al que fue sometido. Solicita se reconsidere la sentencia en su contra y le impongan una más humanitaria y justa (f. 217).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado, la Fiscal tercera Superior del Primer Distrito Judicial, licenciada Cecilia Raquel López F., recomienda se confirme la sentencia impugnada. Señala que la esencia de la apelación es aclamar benevolencia en la fijación de la pena. Opina que si bien las nuevas corrientes del derecho penal se concentran en humanizar el ejercicio del Estado en la difícil tarea de administrar justicia, dicha máxima fue debidamente considerada por el tribunal a-quo a pesar de que las atenuantes argumentadas, se encuentran en su mínima expresión (fs. 220-221).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Se refiere el presente proceso penal a la muerte violenta de Carlos Alberto Batista López el día 5 de junio de 1992 como consecuencia de herida producida con arma de fuego, luego que le fuera arrebatada una cadena de oro. Hecho ocurrido aproximadamente a las 7:15 de la noche en el parque ubicado en calle 7° y avenida Central de la ciudad de Colón, frente a la Iglesia Templo Calvario. Vinculado a ese ilícito se abrió causa criminal contra Guillermo Antonio Lindley Lauden (a) Ronald (fs. 158-167); quien solicitó ser juzgado en derecho (f. 179).

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

Se aprecia que el motivo de la impugnación no lo es la declaratoria de culpabilidad ni la subsunción del actuar ilícito dentro del tipo penal de homicidio agravado sino la pena impuesta. El delito en mención conlleva pena de 12 a 20 años de prisión.

El tribunal a-quo al individualizar la pena a imponer señaló:

"Para la dosificación de la pena base, se toma en consideración los aspectos objetivos y subjetivos del hecho punible; la importancia de la lesión o del peligro; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la calidad de los motivos determinantes; las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que haya influido en la comisión del hecho punible; la conducta del agente, anterior, simultánea o posterior al hecho punible; y, el valor o la importancia de la cosa.

Adecuando esos factores a la situación jurídica penal del proceso que nos ocupa, se hace la siguiente evaluación.

En cuanto a la personalidad del procesado GUILLERMO LAUDEN (a) RONALD, se deduce de su declaración indagatoria que al momento de ejecutar el hecho contaba con 21 años de edad, sin oficio, cursó estudio hasta segundo año secundaria; y que según el informe psiquiátrico forense que aparece a foja 151 del expediente tenía capacidad de comprender sus acciones, actuando con voluntad propia en el momento del hecho que se le atribuye.

En base a estos aspectos se fija la sanción en 20 años de prisión. Ahora bien, en cuanto a los argumentos de la defensa que se le reconozca al imputado circunstancias atenuantes que modifican la responsabilidad penal tales como, confesión espontánea y oportuna y el arrepentimiento (numerales 4° y 6° del artículo 66 del Código Penal) esta Colegiatura considera que no le asiste razón a la defensa, por cuanto el procesado LINDLEY LAUDEN rindió informativo 5 días después de suceder el hecho, para ese entonces ya existía en la investigación las declaraciones de YADIRA CORPAS ALVARADO y AURA ALVARADO ALABARCA; la primera sostiene haberlo visto cometer el ilícito y la segunda, momentos después de ocurrido, haberlo visto subir a la casa portando en el mano el arma de fuego y el collar.

Tampoco existe arrepentimiento por parte del procesado, en ningún momento auxilió a la víctima, ni se entrega a las autoridades, ni devuelve el collar de la víctima, por el contrario vende éste a tercera persona.

No obstante lo anterior, no puede dejar de reconocer el tribunal que se trata de un joven de 21 años, que no término sus estudios secundarios, sin trabajo, y el ambiente social que lo rodea permite que se le rebaje la sanción impuesta en una sexta parte en base al numeral 8° del artículo 66 del Código Penal en relación con el 69 ibidem, rebaja esta que es de 3 años y 4 meses, que deducida de la sanción base la pena a imponer queda en 16 años y 8 meses de prisión" (f. 208-209).

Como se observa el tribunal de primera instancia aplicó las normas de contenido humanitario que contempla nuestro código punitivo, ponderando eso si, las circunstancias del hecho reprochable cometido, demostrativo del desprecio a la vida humana. Por esta razón la Sala considera justa la sanción impuesta a Lindley Lauden por el homicidio de Carlos Alberto Batista López de 27 años de edad.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A EFRAÍN RIVERA MACÍAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ASTERIO MURILLO GIRÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia calendada 2 de agosto de 1995, condenó a Efraín Rivera Macías, (a) "Tito Maldad", a la pena de 16 años de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, a partir del cumplimiento de la pena principal, como responsable del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Asterio Murillo Girón (a) "Tello". Dicha condena fue apelada por el sentenciado y su defensor técnico.

El licenciado Carlos Manuel Lemm P., actuando en su condición de defensor del condenado, formula reparos en cuanto a la vinculación subjetiva de Rivera Macías con el hecho punible, ya que "Dentro del presente proceso dos pruebas fundamentales para probar la inocencia de mi representado no fueron valoradas en su justa dimensión por aspectos procesales relacionados a su presentación" (f. 428). Ante esta primera censura, la Sala llama la atención sobre el hecho de que Rivera Macías fue declarado culpable por jurados de conciencia (f. 351), decisión que no puede ser impugnada ni revisada en este momento procesal.

Por otro lado, sostiene el defensor técnico que no prospera la aplicación de la agravante específica de premeditación, pues "Si la participación de mi representado en los hechos ha estado durante todo el proceso en entredicho, cómo es que se le endilgan móviles y circunstancias no probadas en el expediente" (f. 426); por lo que solicita que la conducta de su defendido sea encuadrada en el tipo penal previsto en el artículo 131 del Código Penal.

La Sala pasa a resolver el recurso propuesto en cuanto a las cuestiones consideradas en la sentencia recurrida.

Las sumarias permiten conocer que el hecho de sangre ocurrió la noche del 20 de mayo de 1990, en los multifamiliares localizados en el sector de Curundú, Provincia de Panamá, cuando Efraín Rivera Macías, (a) "Tito Maldad", con su arma de fuego impactó varias veces la anatomía de Asterio Murillo Girón, (a) "Tello". Según las comprobaciones médico legales consignadas en el protocolo de necropsia, "Se trata del cadáver de un individuo que recibió heridas por proyectil de arma de fuego, que le produce una rápida y abundante hemorragia interna, consecuentemente un shock hemorrágico, incompatible con la vida, una muerte inevitable" (f. 35). Concluye el informe de la medicatura forense que la muerte fue consecuencia de "1).- SHOCK HEMORRÁGICO. 2).- HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO" (f. 35).

Luego que el imputado fuera declarado culpable por un jurado de conciencia, el tribunal de la causa determinó que llevó a cabo el homicidio con premeditación, toda vez que "**Rivera Macías** se asoció con sus compinches para ejecutar el hecho, de tal suerte que ese concierto ilícito previo representa premeditación" (f. 418).

Sobre este particular, la Sala debe adelantar que el delito de homicidio se considera premeditado cuando el agente ejecuta el hecho voluntariamente, precedido de una deliberación o resolución previa, es decir que transcurre un lapso de tiempo a partir de la decisión de cometer el ilícito, pasando por actos preparatorios, hasta su consumación.

En la encuesta penal aparece la deposición de Marisol Murillo Girón, quien afirma: "mi hermano subió a la multi amarilla y yo seguí para la Multi Verde ...

escuché dos disparos proveniente de la multi amarilla, la cual queda a unos cincuenta metros de la multi Verde; al llegar a la planta baja de la mencionada multi, escuché unas voces, que venían caminando bastante rápidas, entonces me escondí en un callejón, y desde allí vi pasar a los sujetos que antes viera sentados en la multi amarilla ... todos llevaban armas de fuego ... MEDE CUETO le decia a Tito Maldad ¡ESE TA MUERTO YA!, y Tito Maldad le contestó ¡CLARO QUE SI, BIEN MUERTO ESTA!, entonces los otros tres respondieron ¡ESTO HAY QUE CELEBRARLO!" (fs. 7-8). De igual manera, Yira Esther Mosquera Murillo sostuvo que "al llegar al lugar de los hechos se encontraba el ciudadano EFRAÍN RIVERA (a) TITO MALDAD, y me dijo "DÉJALO MORIR"..." (F. 15).

Si bien las citas anteriores indican que Rivera Macías fue quien ultimó a Murillo Girón, lo cierto es que estas testigos no dan cuenta de que el sentenciado haya realizado el hecho punible como resultado de una reflexión que diera ocasión a una firme y deliberada voluntad de cometer el delito.

Aunado a lo anterior, se debe advertir que la sentencia impugnada sólo se concreta a afirmar que el delito de homicidio perpetrado por el sentenciado se cometió con premeditación (f. 418), sin exponer los elementos de hecho y de derecho que sirven de sustento jurídico a tal conclusión.

Según nuestra jurisprudencia, "la premeditación, como elemento constitutivo del delito de homicidio agravado, debe estar comprobada. Y si no está acreditada fehacientemente, la duda debe favorecer al reo (indubio pro reo)" (Registro Judicial, junio de 1991, pág. 59). Toda vez que en autos no aparece esa comprobación, lo procedente es desestimar esa causa de agravación y concluir que el ilícito imputado a Rivera Macías es de **naturaleza simple** y no agravada, lo que da lugar a una reducción de la pena impuesta al sentenciado.

La sanción establecida para los infractores del tipo penal previsto en el artículo 131 del Código Penal corre de cinco a doce años de prisión. Por otra parte, los fines de la individualización de la pena aplicable deben ser considerados los factores previstos en el artículo 56 del Código Penal. Con tal fundamento se estima prudente señalar como pena base 12 años de prisión, la que no sufre modificación alguna al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Finalmente, en lo que respecta a la pena de inhabilitación para ejercer funciones públicas, se considera conveniente establecerla en 12 años, a partir del cumplimiento de la pena principal.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia del 2 de agosto de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a Efraín Rivera Macías a la pena de doce (12) años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por término similar al de la pena de prisión, contado a partir del cumplimiento de la pena principal, y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A ANACLETO TROYA RIVAS Y AMBROSIO SÁNCHEZ RIVAS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES) EN PERJUICIO DE JUAN GÓMEZ CHIRÚ (OCCISO) Y ANTONIO GÓMEZ (LESIONADO). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, ha llegado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, el proceso seguido a **AMBROSIO SÁNCHEZ RIVAS**, sentenciado por el delito de homicidio en perjuicio de **JUAN GÓMEZ CHIRÚ**, y a **ANACLETO TROYA RIVAS** por delito de lesiones en perjuicio de **ANTONIO GÓMEZ**.

El jurado de conciencia arribó a un veredicto de culpabilidad de ambos sindicados, que motivó el fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia del 26 de agosto de 1993, que condenó a **SÁNCHEZ RIVAS** a una pena de ocho (8) años y seis (6) meses de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término una vez cumplida la pena principal, y a **TROYA RIVAS** a la pena de sesenta (60) días multa, equivalente a ciento cincuenta balboas (B/.150.00).

Los antecedentes del caso revelan que aproximadamente a las 10:30 p. m. del sábado 24 de agosto de 1991, durante una actividad bailable de la tarde criolla organizada por la escuela primaria de la comunidad de Dos Aguas, Corregimiento de Cirí de los Sotos, Distrito de Capira, se encontraron los señores **ANACLETO TROYA RIVAS**, **AMBROSIO SÁNCHEZ RIVAS**, **JUAN GÓMEZ CHIRÚ**, **ANTONIO GÓMEZ** y **EPIFANIO SÁNCHEZ RIVAS**.

Manifestó el justiciado, que el asunto comenzó cuando **ANTONIO GÓMEZ CHIRÚ** peleó con **ANACLETO TROYA RIVAS** -su hermano- y como él intervino en el encuentro, también se metió el hermano de **ANTONIO** -occiso-; entonces él -**AMBROSIO**- apuñaleó a **JUAN GÓMEZ CHIRÚ** y lo mató, pero lo hizo en defensa propia. La riña se inició porque **ANTONIO GÓMEZ** quería pegarle a su hermano **EPIFANIO**.

Tanto **EPIFANIO SÁNCHEZ RIVAS** como su hermano **AMBROSIO** manifestaron que estaban bebiendo, cuando uno de los hermanos **GÓMEZ**, con quienes habían tenido problemas, empezaron a provocar a su hermano menor, **EPIFANIO**; ambos bandos sacaron cuchillos, y empezaron a pelear, causándole **AMBROSIO** la mortal herida a **JUAN GÓMEZ CHIRÚ** en el estómago.

Previamente habían acordado declarar que **EPIFANIO** fue quien mató al finado, y que **AMBROSIO** hirió a **ANTONIO GÓMEZ**.

Manifestó el sentenciado que por los efectos de la chicha fuerte no recordaba cuántas veces le enterró su cuchillo al extinto, y que dicha arma la tiró cerca del lugar de los hechos.

Rindió declaración **EPIFANIO SÁNCHEZ RIVAS**, confirmando las declaraciones de sus hermanos **AMBROSIO** y **ANACLETO**, y que durante la pelea, los observadores lo apartaron de allí, y lo dejaron dormido en la tarima de los músicos, dándose cuenta de lo sucedido el día siguiente.

Se incorporaron en el expediente testimonios como los de **GUALBERTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**, quien dijo presenciar una discusión el día y lugar de los hechos, observando a los hermanos **AMBROSIO** y **EPIFANIO** perseguir a **ANTONIO GÓMEZ** hasta una quebrada, y como creyeron que estaba muerto, lo dejaron allí tirado.

Otros testigos, como **LUCIANO ESCUDERO TUÑÓN**, **LUCÍO ALABARCA BENÍTEZ**, manifestaron que se dieron cuenta del hecho, pero que no vieron la acción punible.

Versión distinta dio a conocer **ANTONIO GÓMEZ**, quien manifestó que se encontraba con su hermano **JUAN** en el salón de baile, y éste estaba bebiendo mucho, cuando se le acercó **AMBROSIO SÁNCHEZ** a su hermano, empezaron a discutir, y éste último le sacó un cuchillo, y lo correteó por el camino que lleva a la comunidad de Las Tres Quebradas, cayendo el occiso, lo que fue aprovechado por **AMBROSIO** para apuñalearlo.

Cuando él -**ANTONIO**- iba a socorrer a su hermano, le salió al encuentro **AMBROSIO** con su cuchillo, por lo que tuvo que huir; se unió **ANACLETO**, también con su cuchillo a dicho acoso, cortándole éste en el pecho y en la parte de abajo del ombligo. Finalmente, manifestó **ANTONIO GÓMEZ** que ellos siempre habían tenido buenas relaciones con **AMBROSIO**, **ANACLETO** y **EPIFANIO**.

En otro orden de cosas, el protocolo de necropsia revela que la lesión mortal estaba colocada en la región precordial; que el instrumento para producirla penetró la cavidad torácica delante hacia atrás, ligeramente arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, ello independientemente de las otras heridas encontradas en el cadáver.

En síntesis, la causa de muerte fue por shock hemorrágico, causado por herida punzo-cortante cardíaca.

El representante de **AMBROSIO SÁNCHEZ** sustentó en tiempo oportuno, el recurso de apelación que nos ocupa, centrándose en tres aspectos, a saber:

Que todos los involucrados estaban en estado de ebriedad, no se valoró la conducta anterior y posterior al hecho punible del apelante, inobservándose el contenido del artículo 56 del Código Penal.

Que **AMBROSIO SÁNCHEZ** confesó espontánea y oportunamente su responsabilidad ante el Instructor, y que mediante actos posteriores demostró arrepentimiento, conforme al artículo 66 de la mencionada excerta.

Vertidos los elementos más importantes del presente caso, la Sala se apresta a emitir su criterio, no sin antes externar las siguientes consideraciones.

Manifestó el Licdo. Luis Carlos Arosemena que todos los involucrados estaban en estado de ebriedad; sin embargo, el examen realizado por el psiquiatra forense -f. 163- revela en su punto segundo, que el enjuiciado "Al momento de ocurrir el hecho que se le imputa no tenía alteración en sus facultades mentales que le impidieran el discernimiento y dirección de su voluntad."

El punto cuarto del mismo informe señala que el examinado es psíquicamente imputable, por lo que "no puede ser ubicado en los artículo 24 y 25 del Código Penal."

El comentario de la evaluación psiquiátrica forense -f. 165- confirma esto último, al señalar el psiquiatra que "Aunque el sindicado aceptó el consumo de bebidas alcohólicas, sus facultades mentales no sufrieron alteración que le impidera (sic) discernir y dirigir su voluntad, a pesar de las diferencias en sus versiones."

De lo anterior se desprende que no prospera la primera aserción del letrado -referente al estado de ebriedad de su representado-, toda vez que el mismo inculpado manifestó que se acordaba de lo sucedido; además, tanto el oficio N° 112-15226 del 10 de enero de 1992 -foja 163-, como el examen del psiquiatra forense, que son pruebas científicas, afirman que el reo era imputable al momento de la comisión del ilícito.

En cuanto a la conducta anterior y posterior al hecho, observa esta Corporación de Justicia que la conducta anterior del imputado a la comisión del delito no revela ninguna clase de atenuante, para ser tomada en consideración en el presente recurso.

La conducta posterior a la comisión del ilícito de **AMBROSIO SÁNCHEZ**, según su declaración -y la de otras personas- deja manifiesto que el inculpado se quedó en el lugar del hecho, esperando a que llegara la policía, y aunque acordó inicialmente con su hermano **ANACLETO** que éste se haría responsable del homicidio, antes de que se completara la investigación ambos se retractaron y dejaron en claro que fue el primero quien ultimó a **JUAN GÓMEZ CHIRÚ**; por tanto, le cabe la atenuante establecida en el numeral 5° del artículo 66 del Código Penal, -

referente al atenuante de confesión espontánea y oportuna del agente-, en virtud de lo normado en el numeral 6° del artículo 56 del mismo Código Sustantivo, relacionado con los factores a considerar por el juzgador, para fijar la pena.

Por ello, considera esta Superioridad que debe reconocérsele la mencionada atenuante al sentenciado, por lo que se le reconoce una disminución de una cuarta parte de la pena, es decir, dos (2) años y cuarenta y cinco (45) días, quedando una pena líquida de seis (6) años, cuatro (4) meses y quince (15) días.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia del 26 de agosto de 1993, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que condenó a AMBROSIO SÁNCHEZ RIVAS a la pena de ocho (8) años y seis (6) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término una vez cumplida la pena principal, por la de seis (6) años, cuatro (4) meses y quince (15) días, e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término, después de cumplida la pena principal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN QUE SE LE SIGUE AL SEÑOR ALBERT LAILA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha llegado a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema libelo en el que se solicita "se disponga lo necesario para sustituir la fianza de excarcelación consignada ... por la Fianza Hipotecaria que adjunto presentamos". Se trata de la caución constituida por la suma de B/.500.000.00, en efectivo, para que ALBERTO LAILA pueda gozar de libertad provisional.

A primera vista se advierte que la solicitud se formula con desconocimiento del mandato expreso que consigna la normativa vigente sobre la materia, toda vez que el artículo 561 del Código Judicial establece claramente que "**no podrá sustituirse con otras cauciones los depósitos efectuados en dinero**".

Por la anterior consideración, la SALA SEGUNDA de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la solicitud de sustitución de fianza formulada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS GÓMEZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE EXTRADICIÓN DE ALFREDO LÓPEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Emma Alba Tejada ha presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, escrito mediante el cual solicita se conceda fianza de excarcelación al ciudadano de nacionalidad norteamericana Alfredo López.

A los efectos de decidir sobre esta petición, resulta necesario destacar que, de acuerdo con el artículo 2516 del Código judicial, "La persona que haya sido detenida en virtud de una solicitud de extradición podrá prestar fianza de excarcelación, mientras aquella se resuelve, **en los casos en que la ley panameña conceda ese derecho**".

Se observa que Alfredo López es requerido por el gobierno de los Estados Unidos para responder por los siguientes cargos: "un cargo por conspiración para conducir y operar ilegalmente una empresa fraudulenta ... un cargo por conspiración para importar cocaína ... un cargo por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína ... y conspiración para blanquear las ganancias procedentes del narcotráfico" (Cfr. cuaderno de extradición).

Visto lo anterior, se comprueba que los ilícitos imputados a Alfredo López por las autoridades norteamericanas mayoritariamente guardan relación con conductas que en nuestra legislación penal corresponden a "delitos relacionados con drogas ilícitas", los que, de conformidad con el artículo 22 del Texto Unico de la Ley de Drogas, no son excarcelables mediante caución, lo que representa una excepción al derecho que reconoce el artículo 2516 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CONCEDE el beneficio de fianza de excarcelación impetrado por la licenciada Emma Alba Tejada a favor de Alfredo López.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE RICAURTER IVÁN VALDÉS SANTAMARÍA, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EUSTAQUIO VILLARREAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia se recibe, vía apelación, el cuadernillo de fianza que contiene el auto de fecha 7 de noviembre de 1995 que niega el derecho de excarcelación solicitada por el licenciado JAIME J. JOVANÉ a favor de **RICAURTER IVÁN VALDÉS SANTAMARÍA.**

Al ser notificado mediante edicto, el licenciado Jované presenta escrito en el cual anuncia recurso de apelación y sustenta la alzada (fs. 28-30).

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Jované estima que el tribunal de primer grado le dio mayor credibilidad a la versión señalada por Carlos Zuleta Miniel, quien no es capaz de describir qué fue lo que aconteció; en tanto, no le dio mayor importancia a

la versión del imputado, la que como medio de defensa debe ser valorada en su justa medida.

Igualmente se refiere al análisis relativo a las deposiciones juradas del licenciado Aurelio Guzmán y el Sub-Teniente César Ríos Vargas, indicando que no permiten esclarecer puntos de conexión que afirmen o nieguen la versión del imputado o de Zuleta Miniel.

Por esas razones concluye que debió concederse a su defendido el beneficio de excarcelación solicitado.

Plantea además, que no existe dolo en la actuación de su mandante lo cual se desprende de las declaraciones existentes; y que si la acción desarrollada por el imputado no reviste para los magistrados del tribunal de primera instancia, la categoría de una defensa putativa, es indiscutible que se esta frente a un homicidio culposo, siendo lo procedente declinar el negocio a la esfera municipal (fs. 28-30).

HECHOS

Se refiere la presente investigación penal a la muerte violenta del Guardia de Seguridad **EUSTAQUIO ANTONIO VILLARREAL VÁSQUEZ** por heridas producidas por arma de fuego el día 9 de agosto de 1995 aproximadamente a las 9:00 a. m. en el edificio Centro Magna ubicado en la avenida Manuel María Icaza y calle 51. Vinculado a ese ilícito se encuentra detenido **RICAURTER IVAN VALDÉS SANTAMARÍA,** guardia de seguridad y amigo del occiso, quien al igual que éste, se encontraba laborando.

ANÁLISIS DE LA SALA

Se tiene que el apelante hace dos solicitudes: revocar la resolución de primera instancia concediendo la excarcelación o previa revocatoria de lo actuado, y que esta Sala se declare inhibida de conocer el presente negocio y declinarlo ante la esfera municipal.

El tribunal a-quo luego de esbozar los antecedentes del caso, concluye que el sumario está incipiente, dado que no existe protocolo de necropsia ni diligencia de inspección ocular a fin de establecer distancia y absolver una serie de interrogantes. Pero consideró negar el derecho de excarcelación por cuanto el imputado no ha probado su versión de que se vio apuntado por una persona, lo que motivó que disparara, en tanto, existe la versión de Zuleta Miniel muy diferente a como se dieron los hechos.

De las copias allegadas del expediente principal, se observa que desde la fecha en que se dictó el auto apelado no se han aportado otras pruebas que permitan dar respuesta a lo acontecido aquel 9 de agosto de 1995.

Es así, que se tiene por un lado la versión del imputado quien manifiesta que en momentos que subía la rampa escuchó una voz masculina -con eco- que le dijo "cuidado" y al virarse rápidamente hacia los estacionamientos vio abajo, como aproximadamente a 8 metros, una silueta de una persona que le apuntaba con las dos manos, por lo que sacó su arma y disparó, pero al ir al lugar se percató que se trataba de su compañero Villarreal Vásquez que estaba tirado en el piso con su arma a la altura de la cintura (fs. 62-72).

Por otra parte, aparece lo declarado por el único testigo presencial, Zuleta Miniel quien afirma que Valdés Santamaría tenía la costumbre de jugar con el arma de fuego y no atendía los consejos a ese respecto. Señala que desde el momento en que recibió el arma de fuego del compañero que relevó, Valdés Santamaría le sacó las balas y percutió la misma contra Villarreal, por lo que incluso el señor Cecilio Pérez -aseador del edificio- le dijo que no jugara con el arma.

Sobre el hecho este testigo manifiesta que Valdés Santamaría y Villarreal Vásquez bajaron del ascensor, que éste se dirigía hacia el banco cuando Valdés

Santamaría lo llamó y le apuntó con el arma, que momentos antes observó cuando Valdés Santamaría había sacado las balas del arma; que éste disparó haciendo "click"; que Villarreal Vásquez se pasó a una columna de cemento; desde allí le dijo a él (declarante) que le prestara la radio y es así que textualmente dice:

> "... y al caminar hacia mi venía caminando con el fin de coger el radio y ya cuando se encontraba cerca Ricauter disparó y sólo sentí el olor a pólvora ya que éste todavía estaba al lado mío, luego Ricauter manifestó !lo maté¡".

También agrega que Eustaquio en ningún momento sacó el arma, que él (declarante) trató de acomodarlo bien para que respirara y el arma la tenía en la cartuchera y cuando lo movió fue que se le cayó el arma (fs. 17-20).

Se observa que se está ante un delito contra la vida, que a pesar del tiempo transcurrido -más de cinco meses- no se cuenta con las diligencias científicas y periciales que permitan esclarecer los hechos, de allí que en principio solo se advierte una conducta imprudente que omite atender el deber de cuidado, por lo que se configura un homicidio culposo que admite la libertad bajo caución.

Luego, entonces, es de justicia conceder el derecho a fianza y de conformidad con lo normado en el artículo 2166 del Código Judicial y las condiciones socio-económicas del imputado, se fijará la cuantía en tres mil balboas (B/.3,000.00).

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto apelado y en su defecto CONCEDE el derecho de fianza de excarcelación a RICAUTER IVAN VALDÉS SANTAMARÍA y fija la cuantía de la misma en TRES MIL BALBOAS (B/.3,000.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN FORMULADA POR EL LICENCIADO MOISÉS ESPINO BRAVO A FAVOR DE EMILIO FIGUEROA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE BRAULIO BARRÍA ROSARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a esta Sala la solicitud de fianza de excarcelación formulada por el licenciado **Moisés Espino Bravo**, abogado defensor del señor **EMILIO FIGUEROA BARRÍA**, sindicado por el delito de Homicidio en perjuicio de **BRAULIO BARRÍA ROSARIO**.

El recurso fue interpuesto contra el auto de 18 de enero de 1996 por medio del cual el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial le niega el beneficio fianza de excarcelación a su defendido.

Como ya señaló el tribunal, sería ilusorio pensar que no hubo intención de cometer el delito tomando en consideración algunos elementos como el uso del arma para matar y la ubicación de la herida en el cuerpo de la víctima; por otro lado

el homicidio simple conlleva una pena mínima de cinco (5) años de prisión razón por lo que la solicitud formulada por el defensor, no reúne las condiciones para concederla.

De los autos resalta que el señor **EMILIO FIGUEROA BARRÍA** está señalado como el autor del homicidio perpetrado contra el señor BRAULIO BARRÍA ROSARIO, lo cual conforme a lo dispuesto en el artículo 2181 numeral 1° del Código Judicial lo excluye del beneficio de la fianza de excarcelación, por estar este delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal que establece la pena mínima en cinco años de prisión.

El artículo 2181 citado es categórico al disponer en el numeral primero que no podrán ser excarcelados bajo fianza "los imputados por delito que la ley penal sanciona con pena mínima de cinco años de prisión;".

Considera esta Superioridad que lo decidido por el Segundo Tribunal Superior mediante la resolución de 18 de enero de 1996 se ajusta a derecho, por tal razón procede a confirmar la misma en el sentido de negar la fianza solicitada en beneficio del sindicado **EMILIO FIGUEROA BARRÍA**.

Por lo expuesto La Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto del 18 de enero de 1996, dictado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que niega el beneficio de excarcelación solicitado a favor de EMILIO FIGUEROA BARRÍA, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de BRAULIO BARRÍA ROSARIO.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

PROCESO SEGUIDO A HORACIO PINEDA AMADOR, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEJANDRO ZURDO ZURDO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado Roberto De Arco, contra el Auto proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial fechado 27 de abril de 1994.

Mediante el auto en cuestión se dicta Sobreseimiento Provisional a favor de **HORACIO PINEDA AMADOR (A) ÑAME**, **DIONISIO BONILLA CASTILLO** y **GERTRUDIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ**, investigados por el delito de homicidio en perjuicio de ALEJANDRO ZURDO ZURDO, hecho ocurrido el día 6 de diciembre de 1992, en la carretera que conduce de Finca Corredor hacia los potreros de la Chiriquí Land Company, Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí.

Según lo expuesto por el recurrente, su inconformidad con el auto radica en lo siguiente:

"...
Nuestra discordancia por la pieza procesal apelada, es decir, el Auto Penal descrito en el párrafo anterior estriba en que los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta jurisdicción, basándose en argumentaciones plasmadas en la pieza procesal apelada, consideraron la improcedencia de la dictación de

un auto encausatorio en contra de **HORACIO PINEDA AMADOR (A) ÑAME**, en contraposición a lo solicitado por el Ministerio Público mediante las vistas penales número 110 de 31 de agosto de 1993 y 18 de 8 de febrero de 1994 respectivamente." (F. 470).

Continúa diciendo el representante de la vindicta pública, que durante la etapa de investigación se evacuaron los testimonios de **RICARDO MOJICA DELGADO**, **ALFREDO SÁNCHEZ FRANCO**, **JUANA ZURDO DE ZURDO**, **JUAN ANTONIO SIREX** y **DÁMASO PÉREZ**, los cuales vinculan directamente a **HORACIO PINEDA AMADOR (A) ÑAME** y al menor **FERMÍN SÁNCHEZ GIRÓN (A) PATACÓN** con el hecho punible. Sigue diciendo el señor Fiscal, en su escrito:

"...
Consta en el expediente indicios de mala justificación cuando se analizan las declaraciones del imputado en contraposición con la de los testigos **ALCIBIADES CUBILLA MEJÍA**, **LUIS ALBERTO PEREN y JOEL SANTAMARÍA** respectivamente.

En conclusión vemos que en el expediente constan las declaraciones de **SIREX GUILLÉN** y **DÁMASO PÉREZ**, aunados a indicios de presencia, mala justificación (contradicción en la deposición del imputado en contraposición con otros testigos), indicio de capacidad delictiva, motivo que establecen los elementos mínimos para llamar a juicio criminal a **HORACIO PINEDA AMADOR**, como posible autor del delito de Homicidio perpetrado en contra de **ALEJANDRO ZURDO ZURDO**, ...". (Fs. 471 y 472).

El auto apelado, por su parte, considera que, no existen en el expediente suficientes elementos probatorios contra **HORACIO PINEDA AMADOR**, que ameriten su llamamiento a juicio,

"...
Estima el Tribunal que la inconsistencia evidenciada en las deposiciones de Sirex Guillén y Dámaso Pérez caracterizadas por retractaciones y contradicciones no permiten tampoco sostener un auto encausatorio en los términos de lo solicitado por el Ministerio Público.

Así las cosas considera este tribunal que la medida más cónsona con la realidad de autos en estos momentos es la dictación de un auto de sobreseimiento provisional a favor de cada uno de los imputados, es decir, Horacio Pineda Amador, Dionisio Bonilla Castillo y Gertrudis Sánchez González en base a lo dispuesto en el artículo 2211 numeral 2° del Código Judicial previéndose de esta manera la posibilidad de que se reabra la presente investigación cumplido el acopio de nuevos elementos probatorios. ...". (F. 463).

En cuanto a la forma como se dieron los hechos, observa esta Sala, que en horas de la noche del día 5 de diciembre de 1992 y en horas de la madrugada del día 6 de diciembre del mismo año, se produjo la muerte violenta del ciudadano ALEJANDRO ZURDO ZURDO, producto de una herida de arma blanca penetrante a tórax izquierdo con perforación del músculo cardíaco, la cual produjo la muerte por SHOCK HIPOVOLÉMICO. (Ver f. 42).

Todo parece indicar que el homicidio se produjo con el fin de robarle al difunto el dinero que traía consigo. Al respecto, su madre **JUANA ZURDO DE ZURDO** manifestó, a foja 17, que su hijo traía consigo el día fatal aproximadamente cuarenta balboas (B/.40.00), no obstante, al efectuar la diligencia de levantamiento de cadáver, éste no portaba dinero alguno y el bolsillo izquierdo, donde guardaba el dinero, estaba volteado hacia afuera (ver foja 4).

Existen testigos que manifiestan haber visto al hoy occiso el día de los hechos (ver declaraciones de **BLADIMIRO RÍOS SÁNCHEZ**, fs. 109-111; **HIDALIO SANTAMARÍA MUÑOZ**, fs. 116-118; **FRANCISCO SIREX SALINA**, fs. 120-123; **GILBERTO SIREX SALINA**, fs. 124-126) sentado frente a la tienda de abarrotes de **HIDALIO SANTAMARÍA** que está ubicada frente a la línea férrea, entre las diez (10) y la una y media de la madrugada, libando licor junto a otras personas, entre las que

se encontraba el menor **FERMÍN SÁNCHEZ GIRÓN (A) PATACÓN**, quien así lo reconoce en su declaración indagatoria a fojas 71 del sumario. Coinciden los testigos en señalar que ALEJANDRO se retiró de ese lugar con rumbo hacia los potreros; a esto se suma lo declarado por **JOSÉ ALONSO SÁNCHEZ CÁCERES**, quien relata que aproximadamente a las doce de la noche, el hoy occiso llegó a su casa (de Sánchez) con una botella en la mano y que lo invitó a tomar, que SÁNCHEZ rechazó la invitación y entonces ALEJANDRO se acostó en la hamaca donde durmió un rato, "... yo calculo que Alejandro se fue de mi casa como de tres a cuatro de la mañana, ..." (F. 83).

En este punto, no existen declaraciones que nos indiquen qué sucedió con el hoy occiso aproximadamente entre las tres o cuatro de la mañana y las siete de la mañana cuando vecinos del lugar tuvieron conocimiento de su deceso. Sin embargo existen otras declaraciones que ayudan de algún modo a aclarar lo sucedido. Reproduciremos las partes pertinentes de las que consideramos más importantes.

A fojas 10 a 13 del sumario se lee la declaración rendida por **RICARDO MOJICA DELGADO**, quien manifiesta:

> "... a eso de las 2:00 de la mañana aproximadamente, vi cuando un sujeto que no llegué a reconocer paso (sic) por el patio de mi casa y le grito a Patacón, 'hey Patacón te van a joder, éste contesto que puta yo voy pa lante', de allí se desapareció luego a las 4:40 de la mañana de nuevo observé cuando llegó Pucho de los 'MACHOS' oí cuando le habló a Patacón el cual estába (sic) escondido en la casa, entre ellos hablaron pero no llegué a escuchar lo que decían, luego a escaso 15 minutos después yo en compañía de mi señora lo vimos llegar a la casa de la vecina Gisela no recuerdo el apellido con un maletín pequeño en forma de una mochila, vajo (sic) la mochila, la habrió, (sic) no sé que sacó de la misma y se lo entregó a esta señora, a esa hora compró una soda se la tomo (sic) y se retiró a la caseta de espera, a esperar el Motor, luego vi que a las 6:15 aproximadamente de la mañana, llegó unos de los Machos el que le disen (sic) 'ÑAME', a la casa de los hermanos, los cuales viven al frente de mi casa a pie, subió al bancón (sic) de la casa llamó a Pucho que es su hermano y le pidió las llaves para sacar la bicicleta, cuando éste se las iba a entregar, Ñame le dijo a Pucho, hey mataron al Cholo Castilla, Pucho le preguntó algo pero yo no escuché, pero si escuché cuando Ñame le contestó a la pregunta, allí está al otro lado del puente, de allí bajó con las llaves sacó la bicicleta, montó en ella la andubo un poco y se cayó de ella en el patio de la casa, ...". (Fs. 11 y 12).

Por su parte, **ALFREDO SÁNCHEZ FRANCO**, relató de fojas 14 a 16 del sumario lo siguiente:

> "... yo me fui para la caseta y me reuní con unos amigos y nos pusimos a tomar unos tragos de ron, estando allí a eso de las cuatro de la mañana (4:00 A. M.), de hoy domingo seis de diciembre del año en curso, llegaron a donde estábamos reunidos, ÑAME y PATACÓN, Patacón, cargaba un maletín y Ñame una panga bicicleta, Patacón se mostraba preocupado, entre ellos se hablaban pero no se llegaba a escuchar lo que decían, a los quince minutos aproximadamente que ellos habían llegado, se corrió la noticia de que habían encontrado a una persona muerta, no pueden darme cuenta quién había dado esa noticia, fue entonces cuando el sujeto FERMÍN SÁNCHEZ (A) PATACÓN, le dijo a ÑAME que él le había tocado el pulso, entonces ÑAME le dijo que se callara la boca que no hablara, fue cuando yo les pregunté que quién era la persona muerta, contestándome el sujeto de apodo ÑAME que él no hiba (sic) hablar y yo tampoco, diciéndome que si yó (sic) hablaba o comentaba algo de lo que ellos habían dicho, también me iba a ir, refiriéndose a que también me mataba, entonces yo le conteste que si era cierto que él lo había hecho con mas razón yó (sic) iba a hablar, luego yo me retiré ..."

El auto apelado le resta importancia a esta última declaración, que fue rendida el mismo día de los hechos, 6 de diciembre de 1992; basándose para ello en los testimonios de **PEDRO FLORES ORTEGA** (fs. 422-424) y **JUAN FRANCISCO BATISTA GUERRA** (fs. 425-427) quienes no declaran sino hasta el 2 de febrero de 1994, y manifiestan no recordar muy bien lo ocurrido en la fecha, sin embargo aseguran que **ALFREDO SÁNCHEZ FRANCO** se encontraba en estado de embriaguez y además dicen no haber visto ni a **ÑAME** ni a **PATACÓN** el día en cuestión, mucho menos haber escuchado ninguna conversación como la que narra **SÁNCHEZ FRANCO.**

Observa esta Sala que, la declaración de **SÁNCHEZ FRANCO** se dio, como ya vimos, el mismo día de la muerte de ZURDO ZURDO, y por lo tanto lo manifestado por él tiene mayor credibilidad que lo indicado por los otros dos testigos, pues los hechos están más claros en la memoria de **SÁNCHEZ FRANCO** que en la de los otros que declararon más de un año después de ocurridos, sobre todo considerando que ambos reconocen haber estado ebrios el día de marras. Sobre esta materia, ya se ha pronunciado la Corte:

> "En el presente caso, si bien existen contradicciones en los testimonios de M. B., y P. F. C., ellas no son suficientes para desvirtuar la existencia de indicios de responsabilidad contra el imputado N. R. Ello es así por cuanto que el testigo B., realizó su declaración habiendo transcurrido unas cuantas horas desde la ocurrencia de los hechos, y por tanto estos se encontraban aun frescos en su memoria."
>
> M. P. FABIÁN A. ECHEVERS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. MAYO 19 DE 1992.

También consta en el sumario, la declaración rendida por **JUAN ANTONIO SIREX GUILLÉN**, quien indica haber hablado con **FERMÍN SÁNCHEZ GIRÓN (A) PATACÓN** el día 6 de diciembre de 1992, cuando éste se encontraba sentado en la escalera de la casa del primero:

> "...
> Yo entonces le pregunté qué (sic) si él estaba involucrado en la muerte de mi primo Alejandro Zurdo, que no temiera y que me dijera la verdad, que yo no le iba a hacer nada y tampoco le iba a llamar la guardia, él entonces se agachaba en la escalera y se agarraba la cara con ambas manos fuerte y movía la cabeza para los lados, entonces yo dije 'por el amor de Dios ten misericordia y dime'. Entonces me dijo que si y que había sido entre Horacio Pineda (a) Ñame y él, pero que él lo había agarrado por la camisa por la parte de atrás y que Ñame le había metido la puñalada y que se habían ido, pero no sabiendo que estaba muerto, entonces le dije 'Patacón si tu la debes la pagas' y entonces le dije que se largara de mi casa, él se fue y desde ese entonces no le he hablado más y él se encuentra libre ...". (F. 157).

De lo anterior se hace eco **DÁMASO PÉREZ SIREX**, quien estuvo presente en el momento de la anterior conversación; además agrega en su declaración, que:

> "... entonces yo intervine y le dije que si él había hecho eso, qué motivo había tenido, si ese muchacho no se metía con nadie, entonces Patacón se tiró de donde estaba sentado y me dijo 'ah' ese es mi problema y se fue y entonces mi compadre y yo nos fuimos ...". (F. 160).

Considera esta Sala, que lo manifestado por **DÁMASO PÉREZ SIREX**, en la diligencia de careo practicada con **FERMÍN SÁNCHEZ GIRÓN**, en la cual dijo no haber escuchado nada de lo que indicó en su primera declaración, no es suficiente para considerar que el testimonio inicial no sea el más acorde con la realidad de lo ocurrido, sobre todo, tomando en cuenta que casi la totalidad de los declarantes en el sumario manifiestan lo irregular de la conducta de **FERMÍN SÁNCHEZ GIRÓN (A) PATACÓN** y **HORACIO PINEDA AMADOR (A) ÑAME**, dentro de su comunidad en la cual son considerados "drogadictos", "maleantes", "ladrones", etc., en fin, personas capaces de cualquier acto delictivo. Además, algunos dicen haber recibido

amenazas de parte de los imputados y de sus familiares (ver foja 323); un testigo dijo que mucha gente conocía de los hechos pero no querían declarar por temor a represalias por parte de los imputados (ver foja 105). Tampoco puede ignorar esta Sala, el hecho de que consta en el sumario, que el señor **PINEDA AMADOR** ya ha sido sindicado y en algunos casos condenado por varios delitos a lo largo de su vida, tales como violación carnal, robo, tentativa de violación carnal, etc., lo cual contribuye a reafirmar lo dicho en el párrafo anterior sobre la conducta de este individuo en su comunidad.

Es necesario destacar que, la diligencia de careo practicada entre **FERMÍN SÁNCHEZ GIRÓN (A) PATACÓN** y **JUAN ANTONIO SIREX GUILLÉN**, arrojó como resultado que, **SIREX GUILLÉN** se mantuvo en lo declarado inicialmente, con una variación en cuanto que manifestó que **PATACÓN** en ningún momento mencionó a **ÑAME** como participante en el homicidio de ZURDO ZURDO; retractación ésta que consideramos lógica por los mismos motivos esbozados en el párrafo anterior.

Por otro lado, tenemos los testimonios que sirven de apoyo a la versión de **HORACIO PINEDA AMADOR (ÑAME)** sobre lo que hizo la noche del homicidio; estos son **ALCIBIADES CUBILLA MEJÍA**, **LUIS ALBERTO PEREN** y **JOEL SANTAMARÍA**, que manifiestan haber visto al imputado en el Bar y Restaurante Luigi, hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, estos testigos incurren en ciertas contradicciones sobre la hora en que estuvo el imputado allí, las personas con quienes estaba, el medio de transporte que utilizó para retirarse y la hora exacta en que lo hizo.

Por todo lo anterior, coincidimos con la opinión del señor Fiscal, cuando afirma que existen indicios de presencia, mala justificación, contradicciones entre los testigos e indicios de capacidad delictiva contra **HORACIO PINEDA AMADOR (A) ÑAME**. Por lo tanto, esta Sala estima que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 2222 del Código Judicial, para que el sindicado responda en juicio por el homicidio de ALEJANDRO ZURDO ZURDO, pues se encuentra probado el hecho punible a través de la diligencia de levantamiento del cadáver y el certificado de defunción de ALEJANDRO ZURDO ZURDO; existen además, como ya hemos visto, graves indicios que vinculan a **PINEDA AMADOR** con este hecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA el Auto de 27 de abril de 1994 proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y en consecuencia, dispone lo siguiente:

PRIMERO: Llamar a juicio a HORACIO PINEDA AMADOR (A) ÑAME, de generales conocidas en el proceso, por supuesto infractor de disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal;
SEGUNDO: ORDENA la detención preventiva de este imputado; y
TERCERO: CONFIRMA el auto recurrido en todo lo demás.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR EL LICENCIADO LUIS H. ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS HERIBERTO ARAGÓN, Y CONTRA DE GUSTAVO ARAÚZ RODRÍGUEZ POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vía apelación, procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito

Judicial, se recibe el cuadernillo que contiene el auto de fecha 2 de agosto de 1995, mediante el cual se admite el libelo acusatorio promovido por el señor Carlos Heriberto Aragón, debidamente asistido por un procurador judicial, contra el doctor GUSTAVO ARAÚZ RODRÍGUEZ, por el delito de tentativa de homicidio (fs. 58.59).

Sustanciado y sustentado en tiempo oportuno (f. 60), el tribunal de grado concede la alzada en el efecto que determina la ley (f. 91).

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado René C. Atencio P., en su condición de defensor técnico de Gustavo Araúz Rodríguez, solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada en virtud de lo dispuesto por los artículos 2013 y 2301 del Código Judicial y se ordene al Segundo Tribunal Superior de Justicia inhibirse del conocimiento de la acusación particular y remitirla al Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Circuito Judicial para que decida su admisibilidad y el proceso continúe su debido curso. Los puntos objetados en su extenso escrito (fs. 64-85vt) se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. **Falta de competencia del Segundo Tribunal Superior**: Indica que si éste tribunal hubiera cumplido con calificar provisionalmente el negocio se habría percatado que estaba frente a una acusación por lesiones personales y jamás por tentativa de homicidio. Señala además, que no se esta ante un sumario incipiente toda vez que el expediente principal cuenta con más de 180 páginas y tres cuadernillos; uno de los cuales era la acusación que interpuso contra quien es el causante de sus propias heridas y de las que sufriera, con carácter permanente el Dr. Araúz Rodríguez, es decir, contra el señor Carlos Aragón; que está siendo instruido por la Fiscalía Novena del Circuito un expediente por lesiones personales, donde ellos acusan al señor Aragón.

En ese sentido, estima que el tribunal a-quo debió tomar en consideración que en el expediente sólo se han acreditado lesiones y por ningún lado tentativa de homicidio.

2. **Violación de principios de trascendental importancia para el Derecho Penal y Procesal Penal**: Que al admitir la acusación particular contra su representado se ha vulnerado el principio de legalidad y los principios de presunción de inocencia, de lealtad de las partes, de tipicidad, del debido proceso e incluso de economía procesal; éste último porque se ha dilatado el proceso con las fallas jurisdiccionales.

3. **La competencia pertenece al Juzgado Séptimo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá**: Por razón del lugar donde ocurrieron los hechos y de la naturaleza de los mismos.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado del escrito de sustentación la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, licenciada Tulia Pardo R., considera que la resolución atacada debe ser confirmada. Estima que el Tribunal Superior consideró el certificado del médico forense para determinar la naturaleza del presunto ilícito, por lo que le compete el conocimiento del mismo (fs. 87-89 vt).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Efectuado el estudio de la resolución impugnada, se colige que el a-quo admitió la acusación particular contra el Dr. Gustavo Araúz Rodríguez por el delito de tentativa de homicidio, porque estimó que cumplía con los requisitos que exige el artículo 2013 del Código Judicial. Es así que menciona: que el acusador se obliga a continuar con la acusación y a probar la verdad de su relato; que el licenciado Luis H. Arias C., en ejercicio del poder conferido, actuando en nombre y representación de Carlos Heriberto Aragón Márquez, formaliza el libelo acusatorio de tentativa de homicidio en perjuicio de su poderdante; que

expresa los nombres del acusador y del acusado, el delito, el lugar y fecha en que se ejecutó; que aporta una relación de las circunstancias esenciales del hecho; y cita las disposiciones legales infringidas.

Ahora bien, el tribunal de primera instancia, no ofreció una opinión motivada de por qué se adjudicaba la competencia, sencillamente hizo alusión a la resolución de esta Sala de fecha 23 de enero de 1995 (fs. 41-45) y textualmente dice: **"En el citado fallo, la Honorable Corte considera que la vida del ofendido estuvo en peligro ..."**.

Efectivamente consta en el expediente principal, el examen médico-legal efectuado por el Instituto de Medicina Legal al señor Carlos Aragón Robleto en el que se dice que su vida estuvo en peligro, que la herida del pecho interesó el corazón, y le otorgó una incapacidad definitiva de 45 días (f. 49).

Luego entonces, el auto que admite la acusación, tiene su basamento en los requisitos de procedibilidad que establece nuestro Código Judicial. Con respecto a los otros puntos a que alude el apelante, es importante indicarle que son aspectos distinto a la materia que resuelve la resolución atacada.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHENG QUINTANA POR EL SUPUESTO HOMICIDIO DE ANTONIO PONZADA LÓPEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia se recibe el cuadernillo de solicitud de medida cautelar presentada por el licenciado **AUBREY OLIVER DAWKINGS SAMUELS** a favor de **HILARIO ENRIQUE CHENG QUINTANA**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de **ANTONIO PONZADA LÓPEZ**; el cual contiene el auto de fecha 16 de octubre de 1995 que le sustituye la detención preventiva por la de permanecer en la residencia de su madre Eva Migdalia Quintana, ubicada en el sector de Monte Oscuro, calle 8ª, casa N° 30-7, Corregimiento Victoriano Lorenzo. Lugar del que se le prohíbe ausentarse excepto para acudir a cita médica o diligencia judicial (fs. 31-36).

Al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional, anuncian recurso de apelación el licenciado **CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO**, Fiscal Superior Especial y el licenciado **GENARINO ROSAS ROSAS**, acusador particular (fs. 36-vt), quienes presentan el escrito respectivo dentro del término de ley.

DISCONFORMIDAD DE LOS IMPUGNANTES

El licenciado Arboleda Alfaro objeta las consideraciones expuestas por el tribunal de primera instancia al estimar lo siguiente:

-Que la sustitución de la detención preventiva tiene que ser el resultado de la evaluación entre hecho criminoso ejecutado y logro de los fines del proceso penal.

-Que no se contempló que Chen Quintana es un antisocial de extrema peligrosidad, quien ha sido llamado a juicio, entre otros, por varios delitos de homicidio.

-Que Chen Quintana de acuerdo a certificaciones que reposan en el expediente, ha incurrido junto a otros sujetos, actualmente prófugos, en reiterados delitos, los que sin duda, se interesan por poner a su socio criminal fuera del alcance de la ley. Además, de ser pieza importante de una asociación criminal permanente denominada "bandas criminales", la que ejecuta actos criminales como el asalto a la empresa Brins y de acuerdo a las informaciones de inteligencia criminal, Chen Quintana a pesar de su reclusión, estaba concertado.

-Que la atención que requiere Chen Quintana puede ser obtenida en el Centro de Resocialización La Joya, el cual posee una clínica, un médico permanente y un galeno itinerante que brinda sus servicios tres veces por semana, lo que implica una capacidad mínima de poder ofrecer atención al imputado, situación que el tribunal no ha explorado (fs. 39-42).

Por su parte, el licenciado Rosas Rosas hace una relación de la situación procesal de Chen Quintana, concluyendo que ya en el estado que se encuentra de salud, se le había otorgado una medida cautelar distinta a la detención preventiva, pero al realizarse una diligencia de allanamiento en su residencia se encontró a un prófugo de la justicia y armas de grueso calibre, lo que significa que sólo necesita tener el cerebro vivo para estar planeando acciones delictivas. Por lo que se le debe aplicar el artículo 2147 del Código Judicial. Indica que el delito por el cual ha sido llamado a juicio es sancionado con pena mínima de cinco años de prisión, por lo que no puede ser beneficiado con una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Además que el ilícito fue cometido con premeditación y para consumar otro delito lo que implica agravantes contenidas en el artículo 32 ordinales 2, 4 y 5 del Código Penal (fs. 44-48).

OPINIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

Al dar respuesta al traslado, el licenciado Aubrey O. Dawkins S., solicita se confirme la resolución impugnada, que las pruebas que motivaron la medida cautelar a favor de su representado se encuentran adjuntas al cuadernillo incidental, que la misma se concedió por el estado delicado de salud de Chen Quintana lo cual ha sido acreditado por el Instituto de Medicina Legal, siendo injusto mantener a una persona que no puede valerse por sí misma, dentro de un centro penitenciario que no tiene ningún tipo de salubridad sino contaminación (fs. 50-54).

FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO APELADO

El tribunal de primera instancia menciona las siguientes pruebas para motivar su decisión:

-Copia debidamente autenticada por la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia del oficio N° 58-15058 de 14 de agosto de 1995, signado por la doctora Mercedes R. De Lasso, Médico Forense Patóloga del Instituto de Medicina Legal, quien determina que el imputado Chen Quintana está paralítico por lesión de la médula espinal a nivel torácico, que no tiene control de los esfínteres anal y visecal, que presenta úlcera de decúbito, que por sí solo no puede cubrir sus necesidades de aseo diario, curación de úlcera de decúbito, movilizarse, cambio periódico de sonda vesical.

-Copia debidamente autenticada por la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia del informe rendido por el doctor Pedro Castillero, Médico General de la Clínica Hospital de la Cárcel Modelo, quien en cuanto al estado de salud de Chen Quintana afirma que no puede caminar, ni controlar sus esfínteres

(vesical y anal), que presenta úlcera de decúbito en región glútea por su posición prolongada en cama y ambiente inadecuado, que no se vale por sí mismo para realizar su aseo diario, que la Cárcel Modelo no cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades que requiere Chen Quintana, ni las condiciones de la clínica son óptimas.

-Copia de la evaluación realizada por el doctor Luis Fernando Pitty C., neurocirujano quien determina que Chen Quintana es un individuo parapléjico, sin ningún tipo de movilidad en extremidades inferiores, que es un cuadro de daño medular localizado a nivel torácico que conlleva probablemente a una situación irreversible desde el punto de vista neurológico; que la úlcera activa encontrada debe ser evaluada por un especialista en cirugía plástica. Además señala la necesidad de cuidados básicos de enfermería, incluyendo movilidad frecuente para evitar úlceras cutáneas, cuidados de catéter vesical, uso de laxantes según necesidad, estudios periódicos de laboratorios que incluyan urinálisis, hemograma y electrólitos. Recomienda ejercicios pasivos de la musculatura en miembros inferiores, para lo cual el acompañante puede recibir entrenamiento; y que la permanencia del paciente debe estar condicionada al lugar que ofrezca las facilidades para mantener las recomendaciones señaladas.

Todo lo cual lo lleva a concluir que dado el estado de salud delicado de Chen Quintana, sólo su madre le puede brindar en su vivienda los cuidados que requiere.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Efectivamente, reposan en el cuadernillo incidental las pruebas a que hace alusión el tribunal de primera instancia (fs. 21-22; 23,28-29), con las cuales se constata el estado de salud que presenta el sindicado Chen Quintana.

Si bien son ciertas algunas de las afirmaciones hechas por la representación fiscal, no menos cierto es que el artículo 2147-F del Código Judicial dispone que para la aplicación de una medida cautelar personal sólo se tomará en consideración la pena prevista por la ley para cada delito y no debe influir la continuidad, reincidencia o circunstancias del mismo.

Luego entonces, se debe obviar hacer alusión a las otras conductas ilícitas por las cuales también es sindicado (f. 391) y a los hechos ilícitos no certificables que se le endilgan a Chen Quintana.

Las normas que regulan la aplicación de las medidas cautelares establecen que éstas deben ser proporcionadas a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría se impuesta al imputado (art. 2147-D párrafo 2° del C. J.).

Se tiene que Chen Quintana es sindicado por el delito de homicidio doloso en perjuicio de Alejandro Antonio Ponzada López y si nos sujetamos a la normativa en comento, no tendría derecho a gozar de una medida cautelar distinta a la detención preventiva.

No obstante, ese articulado en párrafos posteriores señala:

"Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su propia prole, o una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad. Tampoco se decretará la detención preventiva, salvo en casos de exigencias cautelares excepcionales, cuando el imputado sea una persona tóxicodependiente o alcohodependiente, que se encuentre sometido a un programa terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado.

El Juez o funcionario de instrucción deberá comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un programa de

recuperación".

Como se observa, esta norma tiene un contenido humano que se antepone a lo grave que pueda ser la naturaleza del hecho cometido por el imputado.

Los problemas de salud que padece Chen Quintana lo obligan a tener una atención exclusiva y permanente (f. 29). La alternativa que sugiere el Ministerio Público, de que se traslade a Chen Quintana al Centro de Resocialización La Joya, no es aceptable, porque si bien tiene una clínica, sólo cuenta con un médico y reiteramos, los informes médicos determinan que requiere un cuidado exclusivo y especial por lo que la persona que se haga cargo del mismo debe tener entrenamiento previo. Ello se debe a que este tipo de pacientes presentan úlceras cutáneas y precisamente sobre este particular el médico que lo examinó refiere: **"En el glúteo derecho tiene una úlcera de decúbito profunda con exposición ósea en fase inicial de regeneración tisular"** (f. 29).

El Segundo Tribunal Superior de Justicia en resolución de fecha 4 de agosto de 1995 (fs. 1167-1210) abrió causa criminal contra Chen Quintana, entre otros y resolvió además la incidencia presentada por la acusación particular referente a la medida cautelar otorgada el 5 de abril de 1994 por la Fiscalía Segunda Superior al imputado Chen Quintana.

Concluyó que le asistía razón al petente, quien se refirió al allanamiento efectuado a la casa de Chen Quintana en momentos que gozaba medida cautelar, en la cual se encontró a un prófugo de la justicia y armas de diferentes calibres (fs. 1156-1157); criterio compartido con la representación fiscal (fs. 1161-1162). Por lo que dispuso levantar la medida anteriormente otorgada, por la detención preventiva.

En esta oportunidad, solicita la acusación particular que se aplique el artículo 2147-E del Código Judicial porque Chen Quintana violó anteriormente lo normado en el artículo 2147-B de ese mismo cuerpo de leyes; siendo que ya el tribunal de primera instancia, resolvió sobre el particular y admitió que el imputado Chen Quintana había **"demostrado poco interés en cumplir con sus deberes y máxime cuando representaba un peligro social su estado de libertad"** (f. 1201).

En el caso sub-júdice, el tribunal de primera instancia al comprobar las condiciones de salud que presenta el imputado Chen Quintana accede a los consejos médicos, los cuales reposan en datos fácticos ciertos, convirtiéndolos en un punto de apoyo importante para su decisión y cumpliendo su misión como juzgador.

Si bien desde el punto de vista humanitario, la Sala comparte la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, la opción que se ofrece en el sentido de que se le otorgue una medida cautelar de arresto domiciliario, bajo la responsabilidad de su madre, no es fiable, ya que el Ministerio Público comprobó que la residencia del imputado se convirtió en refugio de prófugos de la justicia y en depósito de armas de fuego de posesión ilícita. En esta situación corresponde al Estado asumir la responsabilidad de custodia y tutela de los imputados privados de libertad, ofreciendo a los que presentan deterioro grave de sus condiciones psico-físicas y de salud, el lugar clínico u hospitalario adecuado, sin descuidar la vigilancia y protección necesarias.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto apelado y en su defecto ordena que el imputado sea trasladado al lugar (pabellón, enfermería u hospital) que disponga el Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, que asegure su atención médica de conformidad a sus condiciones de salud.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAÚL ALFREDO MORENO MELENDE, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE FLORENCIA LAFFO DE ALEGRÍA Y NIMIA OSORIO DE GUAYLUPO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado en su propio nombre por **RAÚL ALFREDO MORENO MELÉNDEZ**, detenido en el Centro Penitenciario La Joya, contra la sentencia de 15 de febrero de 1989, dictada por la Juez Octava de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que lo condenó a la pena de cinco (5) años de prisión, por delito contra el patrimonio.

El recurrente señala en su manuscrito que el día 19 de octubre de 1988 a las 4:00 p. m. él se encontraba en Santa Cruz por una herida de arma de fuego, cuando se le apersonó un agente de las extintas Fuerzas de Defensa pidiéndole la cédula, razón por la cual fue llevado al Juzgado nocturno, donde el agente RENCE DOMÍNGUEZ lo acusó de irrespeto a la autoridad, por lo que se le puso una sanción de 40 días-multa. Narra el detenido que mientras cubría el costo de la multa, se le informó que la señora FLORENCIA LAFFO DE ALEGRÍA lo acusaba del delito de robo ocurrido el día 19 de enero de 1988, mientras ella viajaba en su automóvil en compañía de su amiga NIMIA OSORIO DE GUAYLUPO, hecho que, según el recurrente, fue cometido en una hora y día en el cual él se encontraba detenido. Por último señala el recurrente que la señora DE ALEGRÍA y la señora de GUAYLUPO no coinciden en el día en que se cometió el hecho investigado, la primera afirma que fue el 19 de enero, mientras que la segunda dice que fue el 20 de enero.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, esta Colegiatura corrió traslado de este negocio al licenciado **Rolando Marcos Hermoso**, Defensor de Oficio quien manifiesta lo siguiente:

"...

SEGUNDO: Explica **MORENO MELÉNDEZ**, en su escrito de revisión que el día en que ocurrieron los hechos él se encontraba detenido no obstante al confrontar el expediente nos percatamos según consta a fojas 62 y 63 que el mismo resultó detenido el día 20 de enero de 1988 y no el día 19 que fue cuando se cometió el ilícito según se desprende de la denuncia de las señoras Florencia Laffo de Alegría y Nimia Osorio de Guaylupo.

TERCERO: Por otro lado el imputado ha manifestado que no fue debidamente reconocido por las ofendidas. No obstante reposan en el cuaderno penal los (sic) respectivas Diligencias de Reconocimiento legibles a fojas 7 y 69, las cuales se llevaron a cabo de acuerdo al procedimiento establecido y donde se obtuvieron resultados positivos, reconociendolo (sic) como el autor del hecho punible.

CUARTO: En cuanto a la propiedad y preexistencia de lo sustraído la misma fué (sic) acreditada con testimonios y con la correspondiente Diligencia de Avaluó (sic) Prudencial (fojas 54-55)."

Observa la Sala que el licenciado **Rolando Marcos Hermoso**, al hacer el estudio del caso, no encontró causal que se adecúe a las normadas por el artículo 2458 del Código Judicial, y por esa razón, concluye en que no procede en el presente negocio el recurso de revisión.

Ante tal situación, opina esta Colegiatura que no es posible ordenar la revisión del proceso, toda vez que el mismo abogado defensor de **RODERICK ALFREDO MORENO** ó **RAÚL MORENO MELÉNDEZ** advierte que no hay causal para interponerlo; por ello, en este caso no es posible admitir el recurso de revisión que trató de impetrar el propio detenido **RAÚL MORENO MELÉNDEZ.**

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por RAÚL MORENO MELÉNDEZ y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.) FABIÁN A.ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE ENERO DE 1995, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL QUE CONDENA A RAÚL IGNACIO SOSA ABADÍA A LA PENA DE 8 MESES Y 50 DÍAS-MULTA, COMO RESPONSABLE DEL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE FELIPE N. SAAVEDRA V. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Manuel Antonio Batista L. ha interpuesto recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 23 de enero de 1995, proferida por el Juzgado Primero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Raúl Ignacio Sosa Abadía a la pena de 8 meses de prisión y 50 días multa, como responsable del delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos, cometido en perjuicio de Felipe N. Saavedra.

Como causal que sirve de fundamento al recurso, el letrado anuncia el numeral 5 de artículo 2458 del Código Judicial, ya que ha descubierto "... nuevos hechos ... que por sí mismos y combinados con las pruebas que existen en el proceso ... pueden dar lugar a la absolución de ... RAÚL IGNACIO SOSA ABADÍA" (f. 3).

En lo concerniente a los fundamentos de hecho que sirven para apoyar la solicitud, el recurrente plantea que Raúl Ignacio Sosa Abadía "jamás se enteró directa, ni indirectamente de que el cheque N° 10 girado al portador contra la cuenta corriente N° 07-17365-C-184642, por valor de OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 16/100 (B/.88.16), de fecha 28 de mayo de 1993, había sido devuelto a su tenedor por el PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A, por carecer supuestamente de fondos suficientes para satisfacer su pago" (f. 4). Agrega el letrado que Sosa Abadía no actuó en forma dolosa en la expedición del cheque N° 10, "sino quizás falta de control en el manejo de la cuenta corriente ..." (f. 5). En otra parte del libelo el recurrente expone que su patrocinado fue juzgado "en ausencia aún cuando a foja N° 44 del expediente N° 175-95 ... consta que el Primer Banco de Ahorros ... le suministró a la Fiscalía Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, los datos concernientes al domicilio de nuestro representado en la ciudad de Panamá" (f. 4).

Otro argumento del recurrente consiste en que el cheque N° 10 "jamás debió

ser devuelto por el banco" ya que en la cuenta corriente contra la cual Sosa lo giró "aún quedaban B/.234.26, que eran por demás suficientes para cubrir el importe total del cheque N° 10 que fué (sic) la base para proceder y condenar al señor RAÚL I. SOSA A." (f. 5).

Finalmente, el recurrente manifiesta que Sosa Abadía está preparado para cubrir el monto del cheque N° 10 a través del certificado de garantía N° 07340, expedido por el Banco Nacional de Panamá aunado a que está "dispuesto a cubrir los intereses y posibles daños y perjuicios que haya podido generar la devolución del cheque de marras" (f. 6).

El memorial es acompañado por elementos de prueba tales como un certificado de nacimiento de Raúl Ignacio Sosa Abadía, en el cual se acredita la relación de parentesco existente entre el sentenciado y el poderdante; certificado de garantía N° 07340, expedido por el Banco Nacional de Panamá, por el monto de B/.88.16.; Record policivo, según el cual el sentenciado no registra antecedentes penales ni policivos; copia auténtica de la sentencia atacada (fs. 9-17).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El recurrente expone **como hechos nuevos** que Sosa Abadía no tuvo la intención de causar el delito; que la entidad bancaria en la cual el sentenciado tenía la cuenta corriente es la responsable de la situación jurídica del sentenciado; que Sosa Abadía fue juzgado en ausencia, y que se encuentra dispuesto a resarcir el daño ocasionado. A juicio de la Corte los planteamientos anotados, confrontados con la documentación que adjunta al libelo de revisión, de manera alguna acreditan la existencia de hechos nuevos, descubiertos luego de la condena. Lo que en realidad hace el peticionario es invitar a la Sala a reconsiderar el valor del material probatorio de que dan cuenta las sumarias, el cual ya fue evaluado en la oportunidad correspondiente.

Siendo que los hechos fundamentales y las pruebas aportadas por el recurrente no comprueban lo previsto en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Penal, la Corte es del criterio de que la solicitud debe ser negada.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por el licenciado Manuel Antonio Batista L. contra la sentencia de 23 de enero de 1995, proferida por el Juzgado Primero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Raúl Ignacio Sosa Abadía por el delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos, cometido en perjuicio de Felipe N. Saavedra.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CARLOS H. CUESTAS GÓMEZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE ALBERTO SÁNCHEZ DELGADO, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal recurso extraordinario de revisión que, en su propio nombre, interpusiera Jorge Alberto Sánchez Delgado, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que lo condenó a la pena de 8 años y 2 meses de prisión, por el delito de violación

carnal.

A los fines de que se procediera al cumplimiento de los requisitos necesarios para la formalización del recurso, el 4 de enero de 1996 el despacho sustanciador asignó como defensora de oficio del recurrente a la licenciada Miriam Jaén de Salinas, con el propósito de que "lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto" (f. 9). En cumplimiento de este encargo, la defensora de oficio asignada, mediante oficio N° IDDO-CH-N-005-96, de 24 de enero de 1996, comunica a este despacho que "no hay causal legal para fundamentar Recurso de Revisión en favor de Jorge Alberto Sánchez Delgado" (f. 13).

Como quiera que se trata de un recurso de naturaleza eminentemente técnica, que debe ser presentado por un abogado y con el cumplimiento de formalidades legales precisas, a tenor de lo que dispone el artículo 2459 del Código Judicial, y que la licenciada Jaén de Salinas considera que no es factible su interposición, la Corte estima que en tales circunstancias no es posible acceder a la solicitud de revisión formulada personalmente por Sánchez Delgado.

En razón de lo expuesto la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por Jorge Alberto Sánchez Delgado, en su propio nombre, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR EL LCDO. EDUARDO D. CABALLERO APARICIO EN REPRESENTACIÓN DE BÁRBARA ATENCIO Y EN CONTRA DE JOSÉ DANIEL FUENTES VALDÉS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE GENEROSO SANTAMARÍA ATENCIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, ha ingresado a la Sala de lo Penal de esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, el incidente de controversia interpuesto por el Licdo. Eduardo D. Caballero en representación de **BÁRBARA ATENCIO**, acusadora particular de **JOSÉ DANIEL FUENTES VALDÉS**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de **GENEROSO SANTAMARÍA**.

El recurso de apelación es contra el auto penal del 22 de diciembre de 1995, dictado por el Tribunal ya mencionado, que ordenó la libertad provisional del sumariado; el recurso se sustenta en las siguientes razones:

Que el delito tiene pena mínima de cinco (5) años, y por tanto, la persona procesada por esa clase de conducta penal no tiene derecho al beneficio de medida cautelar, y menos fianza, ya que esa acción punible no admite fianza excarcelatoria.

Que el a-quo fundó su decisión en el argumento de que el sindicado actuó bajo causa de justificación, o sea, legítima defensa. Considera el recurrente que dicha condición no ha sido probada en el expediente, porque la reconstrucción del caso se hizo sin la asistencia de los familiares del occiso -que fueron testigos- ni de la parte acusadora.

Por ello es falso que el finado llevara una piedra y un machete, ya que los testigos dijeron que **SANTAMARÍA** dijo que "iba sin nada que pelearan sin armas".

Por ello el sumariado actuó con ventaja, colaboración de la mujer -a juicio del actor-, y le percutó dos disparos.

Que "Bajo ningún concepto cabe que a un homicida confeso se le pueda aplicar una libertad provisional, luego de solamente estar 22 días detenido."

Que por estar la investigación en su fase inicial, no es justificable esa decisión, máxime que la acusación particular todavía no ha intervenido.

Por su parte, el Licdo. Rotman Tristán R. Fiscal Primero Superior, Interino, presentó oportunamente su oposición a la apelación que nos ocupa, argumentando que las apreciaciones expuestas por el incidentista son "muy subjetivas", porque en la investigación sí se acredita que los hechos se produjeron en legítima defensa de **FUENTES VALDÉS** y su familia.

Considera esta Corporación de Justicia que le asiste la razón al incidentista, toda vez que el Funcionario Colaborador se refiere solo a la circunstancia de la acreditación de la legítima defensa en la que actuó el acusado, alegando la veracidad de los hechos que -a su juicio- la justificaron.

El artículo 2147-A del Código Judicial señala -en primer lugar- que la libertad personal del imputado solo podrá ser limitada mediante la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en ese Capítulo, de las cuales la detención preventiva es la más grave; también dice -en segundo lugar- que dichas medidas no podrán ser aplicadas si no hay graves indicios en contra del sindicado, y que tampoco podrán ser aplicadas si concurren causas de justificación, eximentes de punibilidad, o causas de extinción del delito y de la pena.

Advierte la Sala que la norma expuesta establece los requisitos específicos que permiten su aplicación, pero tiene sus limitantes.

Una de ellas la establece el artículo 2181 de la misma excerta, que señala que no podrán ser excarcelados bajo fianza, los delitos que la ley penal sanciona con pena de prisión de cinco (5) años.

Del cuaderno de incidente de controversia no se observa en ninguna parte, que se discuta la calificación del delito, en el sentido de su naturaleza culposa o dolosa; la legítima defensa esgrimida por el Instructor no entra a dilucidar el elemento dolo en la acción delictual; por ello el hecho punible está calificado como homicidio simple.

Ello excluye a este tipo de delito del derecho de excarcelación, aunque se presenten las circunstancia de legítima defensa manifestada por el Señor Fiscal Primero Superior, Interino, ya que el también citado artículo 2181, numeral primero del Código Adjetivo, sencillamente excluye el tipo de delito, de ese beneficio; por tanto, las circunstancias por él expuestas carecen de relevancia jurídica en este caso.

Por todo lo anterior, considera esta Superioridad que debe concederse el presente incidente.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el incidente de controversia interpuesto por el Licdo. Eduardo Caballero en representación de BÁRBARA ATENCIO; en consecuencia, REVOCA el auto emitido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 22 de diciembre de 1995, y MANTIENE la detención preventiva de JOSÉ DANIEL FUENTES VALDÉS.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO DE SUMARIAS SEGUIDAS A PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ, SINDICADO POR HOMICIDIO DE ZAK HERNÁNDEZ Y LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE RONALD TARREL MARSHALL Y OTRO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución del 31 de agosto de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia desestimó el incidente de controversia propuesto por el licenciado **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA** en contra de la resolución de 6 de marzo de 1995, expedida por el señor **FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL** (fs. 80-83).

Al notificarse de esa decisión jurisdiccional, el licenciado Carrillo Gomila apela de la misma y dentro del término de ley sustenta el recurso anunciado.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Carrillo Gomila solicita que se acoja la incidencia presentada, se revoque la resolución apelada y se declare que no procede la orden del Ministerio Público impugnada, en virtud de que el peritaje imputado supuestamente al Federal Bureau Investigation (FBI) no posee valor alguno para ser apreciado.

Los nueve hechos en que fundamenta el incidente se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. Que el peritaje balístico N° 217-92 realizado por los peritos Darío Herrera, David Villarreal y José Chavarría determinó que el fusil AK-57, calibre 7.62 mlm serie 482361 no fue el que percutó ni disparó los casquillos o vainas y proyectiles remitidos incriminados (fs. 1300).

2. Que ese informe fue ratificado (f. 1343).

3. Que dicho informe no fue incorporado en autos hasta folio 1295, previa advertencia de la defensa, cuya finalidad era justificar una prueba en el extranjero realizada por el Federal Bureau Investigation (F. B. I.); y no procedía ordenar la experticia en el extranjero porque los técnicos especializados de la Policía Técnica judicial ya habían determinado que dicha arma no fue la que percutó las balas incriminadas.

4. Que el perito del Ministerio Público Rogelio Salinas también presentó informe en donde afirma que las evidencias ya señaladas no fueron producto de disparos por el fusil AK-47; informe que también fue omitido sin causa justificada y ratificado por el perito; que éste era el tercer peritaje que se realizaba.

5. Que el perito químico César Elías Monteza Márquez certificó que no existía la presencia de pólvora, nitrito o plomo (f. 1352); también fue omitido este peritaje por actos administrativos no justificados e incorporados a solicitud de la defensa; que el supuesto peritaje del FBI es el único que se contrapone a lo determinado por el perito químico.

6. Que el perito Álvaro Krasni Menéndez, de la defensa, practicó peritaje balístico concluyendo igualmente que el arma examinada no percutó ni disparó la evidencia presentada.

7. Que seis peritos nacionales han concluido en forma coincidente que las evidencias no fueron disparadas por el arma fusil AK-47.

8. Que el único peritaje contrario a los resultados señalados, se provocó mediante usos administrativos dolosos, consistente en omitir los peritajes citados, con el propósito de tratar de involucrar al señor Pedro Miguel González Pinzón; que ello deja sin valor la prueba remitida, misma que no ha sido firmada ni se conocen las generales, experiencia pericial del firmante, no fue autenticada por nuestra embajada en Washington como lo preceptúa el artículo 864 del Código Judicial, no se puede repreguntar al perito ni se incorporó el método científico utilizado para la pericia.

9. Que esta práctica de prueba excede los términos de la ampliación ordenada y perjudica a la defensa con la dilación; que en es un hecho insólito en nuestra historia jurisprudencial penal nacional que se trata de un quinto peritaje balístico con el mismo objeto sobre las mismas evidencias.

Como fundamento de derecho de su pretensión estima que con la actuación del FiscaL Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial se han infringido artículos de la Ley 16 de 9 de julio de 1991 (Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial) tales como: artículo 2 numeral 4 referente a las funciones de la Policía Técnica Judicial y el artículo 2096 del Código Judicial.

Reitera su argumento sobre el ocultamiento sistemático de las pruebas periciales e indica que frente a los cuatro dictámenes periciales balísticos de cinco peritos panameños y no se sabe de qué perito norteamericano, se pretende realizar un quinto peritaje en SCOTLAND YARD por lo que está agotando los recursos legales para impugnar dicha prueba. Añade que no existe peritaje válido alguno que relacione el arma investigada con los hechos relacionados con el homicidio de ZAK A. HERNÁNDEZ.

Luego se refiere a la violación de las formalidades legales del peritaje supuestamente atribuido al Federal Bureau Investigation (FBI), haciendo mención del artículo 864 del Código Judicial.

Finalmente hace un análisis de las consideraciones del fallo de primera instancia, señalando que el considerando toma como válido el peritaje del FBI, lo cual es contrario a derecho, porque éste carece de las formalidades legales y por ello no puede sustentar una prueba en el extranjero, que aunque ya realizada, pudiera pretender justificar otras pericias en otros países del mundo.

Por otra parte, indica que no existe un Agente Especial -como lo dice la resolución censurada- sino un supuesto informe que se le imputa al FBI, sin que se exprese quien es el agente especial que firmó el mismo.

Anota además, que no se especifican los tratados internacionales a que se refiere, aún así, la Ley N° 16 de 1991 es clara y en concordancia con todos los conceptos del proceso penal panameño. Concluye que se está valorando como válida una actuación nula formalmente y sustancialmente (fs. 86-104).

Mediante providencia del 18 de octubre de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia corrió traslado del escrito que sustenta la apelación al Ministerio Público, a la Acusación Particular y al resto de las partes por el término de tres días (f. 105). En autos sólo aparece la respuesta del Fiscal Superior.

OPINIÓN FISCAL

El licenciado Dimas E. Guevara G., Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, manifiesta que la alzada está dirigida a cuestionar la validez a nivel probatorio de la experticia balística practicada en el Federal Bureau investigation (FBI), cuando evidentemente no fue ese el objeto de la incidencia desestimada.

Señala que al momento de objetar la resolución de 6 de marzo de 1995,

dictada por esa agencia de instrucción, el licenciado Carrillo Gomila no se refiere a la validez del examen pericial cuestionado, sino a la disposición que sustenta la práctica de una experticia en la sede del Scotland Yard, en Londres, Inglaterra; y por ello no puede pretender el impugnante que el Superior emita consideraciones de valor sobre dicha conclusión pericial, aspecto que ni siquiera fue contemplado en la resolución impugnada.

Sostiene el representante del Ministerio Público que ante la evidente contradicción que existía entre las conclusiones periciales incorporadas al sumario, se imponía la necesidad de aclarar el punto debatido; que la orden del examen en otro país no implica violación al principio de soberanía jurisdiccional; que se trata de un auxilio técnico internacional tramitado por la vía diplomática ordinaria y autorizado por la Ley; que el examen ya practicado en Londres, Inglaterra, no viola la Ley N° 16 de 1991, misma que permite la práctica de peritajes con participación de técnicos foráneos; que por el avanzado equipo a utilizar la peritación debía ser practicada en Londres; que se hizo posible la presencia de los peritos nacionales, del acusador particular, del despacho y del defensor, quien después de haber gestionado su asistencia a la misma, incidenta la orden que la dispone.

Concluye, que si bien ya se verificó la práctica de la experticia in comento, solicita se confirme en todas sus partes la resolución impugnada (fs. 106-109).

Concedido el recurso en el efecto diferido (f. 111), fue remitido a esta superioridad el cuadernillo de la incidencia. Así, con fundamento en los artículos 2009 y 2276 del Código Judicial, mediante providencia del 18 de diciembre de 1995 se corrió traslado al señor Procurador de la Nación (f. 115) quien emitió concepto el 14 de febrero del año en curso.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., solicita en su Vista N° 16, que al entrar a resolver el incidente de controversia incoado, se haga desestimando el mismo (cfr. fs. 116-124).

Basa su solicitud al opinar que el incidentista en un inicio no estaba en desacuerdo con lo actuado por el Fiscal Cuarto Superior y estaba anuente a participar a través del perito en balística aducido por él (fs. 9-14); que el Fiscal Cuarto Superior en ejercicio de sus facultades y dentro del marco de la ley, le está permitido practicar y ordenar se realicen todas aquellas pruebas que, a su juicio y con base al principio de la sana critica, sean conducentes a objeto de descubrir la verdad material (fs. 116-124).

FUNDAMENTO DEL A-QUO

El tribunal de primera instancia en sus consideraciones señala:

> "El proceso penal tiene como objetivo esencial descubrir la verdad sobre la hipótesis delictiva, por medio de la prueba. En el caso subjúdice, el Agente del Ministerio Público ha dispuesto el peritaje de balística con el firme propósito que todo el caudal probatorio allegado, sirva al juzgador a formar su convicción acerca del hecho que le va a ser sometido a la evaluación calificatoria.
>
> Como dentro de este sumario existe una prueba en contraposición de otra, es necesario buscar la tercera que esclarezca esa situación, y es deber del funcionario de instrucción ordenarla, como bien lo ha hecho por medio de la resolución de 6 de marzo de 1995.
>
> Es importante enfatizar que la prueba de balística tiene su aceptación puesto que el informe del Agente Especial, Negociado Federal de Investigaciones (F. B. I.), del folio 764 del sumario establece "que las balas QL y Q7 y las vainas Q2 y Q5 fueron disparadas del cañón del rifle KL ...", luego es procedente

desestimar la incidencia impetrada por el Licdo. Carrillo Gomila, a fin que el investigador cumpla con el objeto del proceso.

En cuanto a la objeción de la prueba en el extranjero por la existencia de Laboratorios en la Policía Técnica Judicial, ello no vulnera la Ley N° 16 de 1991, porque en la presente causa se está conforme a los convenios internacionales de ayuda en las investigaciones, en la cual se acude a países con técnicas más sofisticadas, que el incidentista, como auxiliar de la justicia no debe desechar a fin de establecer la verdad material que es la que nos interesa a todos" (fs. 80-83).

FUNDAMENTO DE LA SALA

El Incidente de Controversia "**es un medio de defensa procesal que la ley provee al imputado en la etapa del sumario para impugnar las actuaciones del Ministerio Público que estime lesivas a sus intereses, y está regulada en el artículo 2009 del Código Judicial, subrogado por el artículo 6 de la ley 3 de 1991**" (Adolfo Montero. Derecho Procesal Penal (Parte Segunda). Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Publicación del Centro de estudiantes de Derecho. 1993. pág. 121).

En el proceso penal, la prueba tiene como fin demostrar la existencia del hecho punible y la culpabilidad o inocencia del imputado. Para alcanzar la verdad real se pueden utilizar todos los medios lícitos que contribuyan de algún modo a esclarecer los hechos. En esa búsqueda, los medios de investigación con los adelantos de la ciencia y la tecnología han mejorado, se encuentran métodos modernos que operan con mayor precisión.

En el caso sub-júdice, el funcionario de instrucción, respaldado por la finalidad del sumario **-artículo 2058 del Código Judicial-** y sin violentar los preceptos contemplados en la Ley N° 16 de 1991, estimó necesario una tercera prueba pericial, para resolver las discrepancias surgidas (fs. 15-18).

Si bien se determinó que la pericia en comento se realizara en el extranjero, no es una situación antojadiza sino para aprovechar las avanzadas técnicas de las cuales se carece en nuestro medio.

Ciertamente que estas diligencias consumen tiempo, pero lejos de perjudicar a la defensa, permitirá clarificar la prueba que será valorada en el momento procesal oportuno.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

INVESTIGACIÓN ORDENADA POR EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (ARTÍCULOS 33 DE LA C. N. Y 202 DEL CÓDIGO JUDICIAL). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rafael Rodríguez ha presentado recurso de reconsideración contra la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de 13 de febrero de 1996, mediante la cual se le impone 5 días de arresto al licenciado Rodrigo Miranda por ultraje y grave falta de respeto cometidos contra los magistrados que componen esta Sala.

TESIS A CONSIDERAR

A juicio del recurrente: a) este ofensor contumaz "sólo podía ser acusado de los supuestos delitos de calumnia o injuria", lo que le permitiría "probar la verdad de sus acusaciones y quedar exento de pena" (f. 16); b) el artículo 33 de la Constitución Nacional "exige que (la ofensa) se les irrogue (a los magistrados) personalmente o en presencia de ellos" (f. 16); c) "Es por ello que el Artículo 202 del C. J., que desarrolla el precepto constitucional antes mencionado y consagra el derecho a sancionar sin juicio previo, no tiene absolutamente ningún fundamento jurídico ni ético" (f. 16); d) en la sentencia se "ha acudido a la analogía", al reemplazar la certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o la prueba testimonial sumaria con una transcripción de una grabación magnetofónica (f. 18).

OPINIÓN DE LA SALA

Para garantizar la eficaz salvaguarda de las instituciones y del normal desempeño de sus personeros, a renglón seguido del artículo 32 y de la consagración que hace del principio del debido proceso legal, la Carta Magna instituye una jurisdicción disciplinaria que corre, paralela e independiente, de la jurisdicción penal. Se trata de dos jurisdicciones que coexisten, concurrentes, que pueden ser simultáneamente excitadas por una sola conducta desviada. Esto no solo se prevé en la normativa judicial, sino también en otras materias como la fiscal, sanitaria y mercantil, en las que, sin perjuicio de la responsabilidad penal, se aplica la sanción disciplinaria que corresponda. Así lo consigna el artículo 1321 del Código Fiscal:

> "ARTÍCULO 1321. Las sanciones por infracciones de carácter fiscal que se impongan de conformidad con las disposiciones de este Código serán sin perjuicio de la aplicación de otras penas por la autoridad judicial, cuando dichas infracciones impliquen además hechos delictuosos".

Esa realidad, que la ley consagra y que es ampliamente reconocida por la jurisprudencia, explica el hecho corriente de que en instituciones tales como la Fuerza Pública, en diversas dependencias del Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General, entre otras, las infracciones cometidas por sus funcionarios sean a diario objeto de medidas correccionales, sin perjuicio del traslado de su conocimiento a las autoridades judiciales para la imposición de las sanciones correspondientes. La coexistencia de ambas jurisdicciones también es atestiguada por el texto del artículo 1970 del Código Judicial:

> "ARTÍCULO 1970. Por los hechos punibles previstos en la ley penal ordinaria, toda persona será investigada, acusada y juzgada por los órganos y mediante el procedimiento establecido en este Libro. **Se exceptúa lo relativo a las sanciones correccionales y disciplinarias que pueden imponer las autoridades judiciales** y las penas y sanciones cuya imposición corresponda a jurisdicciones especiales que tengan establecido un procedimiento especial".

La argumentación que se plantea en este recurso ya fue presentada y desestimada dentro de procedimiento disciplinario seguido contra el propio apoderado recurrente, quien también resultara condenado por irrespeto irrogado a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

De otra parte, la tutela, **con rango constitucional**, instituida a favor de

los valores institucionales y personales antes indicados, exige de todos los asociados un respeto distintivo a causa de la función que ejercen en un Estado de Derecho, salvaguarda que se encuentra organizada a partir de las dos modalidades o circunstancias como puede tener lugar la ejecución del acto de irrespeto: **1ª** que el ultraje o falta de respeto a los funcionarios ocurra "en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo", y **2ª** que el ultraje se cometa "con motivo del desempeño" de tales funciones.

Se trata de dos supuestos revestidos de características diferentes. El primero requiere de la concurrencia del factor **inmediación** entre el ofensor y el ofendido (en el acto del desempeño del cargo), de donde resulta la posibilidad de la presencia de testigos, mientras que el segundo -donde no se requiere de inmediación-, admite la posibilidad de que el ultraje sea inferido hasta por teléfono, a través de un medio de comunicación social y, por consiguiente, sin la presencia "de un empleado de la oficina". La norma de rango legal (a. 202 del C. J.) aplicable sólo contempla y reglamenta el primero de estos supuestos, el que requiere de la existencia de testigos. Ello, sin embargo, en modo alguno puede interpretarse como la derogación tácita, por una ley, de la tutela de la integridad de los funcionarios que la Constitución organiza, en el supuesto de que el ultraje tenga lugar **con motivo** del desempeño de sus funciones.

La ausencia de testigos en esta segunda modalidad de producción de la conducta incriminable, como es la que dio lugar a la resolución de 13 de febrero de 1996, en forma alguna impide satisfacer la exigencia de acreditar la conducta por los medios ordinarios de prueba, lo que hecha por tierra el insistente cargo, jurídicamente inadmisible, de la supuesta utilización del procedimiento analógico en este trámite. El argumento de la analogía no tiene asidero jurídico porque la resolución recurrida se fundamenta en la facultades disciplinarias que la ley confiere a Magistrados y Jueces, y, por la gravedad de la ofensa, la Constitución autoriza que la conducta desviada de ultraje e irrespeto por cualquier persona a los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción puede ser sancionada sin juicio previo. Por lo tanto, no se está aplicando en este momento norma alguna del Código Penal, y menos subsumiendo la conducta del sancionado en un tipo penal determinado, pues ello corresponderá al tribunal competente. El planteamiento de la analogía no guarda relación alguna con la situación planteada, lo que conoce el recurrente, demostrando así la falta de seriedad jurídica de sus argumentos.

La Sala coincide con el recurrente en una sola de sus apreciaciones, cual es la de que esta nueva conducta desviada del ofensor, que ahora lo hace pasible de otra sanción de la misma naturaleza, además de merecer el repudio de la propia Constitución, también tiene consecuencias en el orden penal y debe ser investigada dentro de esa jurisdicción para dirimir las responsabilidades que correspondan.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la solicitud que se formula, en el sentido de que se deje sin efecto la sentencia mediante la cual se condena al licenciado Rodrigo Miranda a la pena de cinco días de prisión.

Impártanse las medidas conducentes al cumplimiento de la sentencia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL MAGISTRADO SUPLENTE DR. CARLOS H. CUESTAS

DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR AIDELENA PEREIRA CONTRA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del incidente de nulidad de lo actuado, por notificación testifical en violación al procedimiento, interpuesto por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY en el proceso penal que se instruye por razón de la acusación particular interpuesta por la licenciada AIDELENA PEREIRA en su contra, por delito de tentativa de homicidio, el licenciado **Virgilio Vásquez Pinto**, en nombre y representación de la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, ha promovido incidente de recusación para que se separe de su conocimiento al Magistrado Suplente **CARLOS H. CUESTAS G.**, a quien supuestamente le fue repartido dicho negocio penal en el mes de diciembre de 1995.

El incidentista en la parte medular de su escrito, plantea que:

> "El día 10 de octubre de 1995, ante la Asamblea Legislativa, OMAYRA GARCÍA DE BERBEY interpuso Acusación Particular contra el Magistrado Suplente CARLOS CUESTAS y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de Delitos contra la Administración de Justicia y la Seguridad Colectiva."

Conforme se observa en el escrito contentivo del incidente de recusación, la razón fundamental que sustenta la pretensión consiste en el hecho de que el día 10 de octubre de 1995, ante la Asamblea Legislativa, **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** interpuso acusación particular contra el Magistrado Suplente **CARLOS CUESTAS** y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de delitos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia y la Seguridad Colectiva. Se desprende de dicho escrito de recusación, que el proceso penal pendiente contra el Magistrado Suplente **CARLOS CUESTAS** y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue interpuesto por **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** el día 10 de octubre de 1995; y posteriormente, el incidente de nulidad dentro de la causa penal contra la misma, fue repartido al Magistrado Suplente en el mes de diciembre de 1995, luego de que se separó del conocimiento de dicho negocio al Honorable Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS, por estar comprendido dentro de la causal de impedimento a que se refiere el ordinal 11 del artículo 749 del Código Judicial; pese a ello, el citado funcionario judicial no ha manifestado impedimento para seguir conociendo del presente proceso.

También, el licenciado **Virgilio Vásquez Pinto** argumenta que el Magistrado **CUESTAS** no ha conocido hasta el presente de la causa penal que se le sigue a **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** ni ésta ha hecho gestión alguna en dicho proceso que haya sido de conocimiento del Magistrado Suplente recusado; por lo que no son aplicables los artículos 751, ordinal 3, y 755, párrafo segundo, del Código Judicial.

Tras haberse surtido el correspondiente trámite de traslado establecido en el artículo 758 del Código Judicial, el Doctor **CARLOS H. CUESTAS G.**, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia y Suplente personal del Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS de la Sala Segunda de lo Penal, al contestar el incidente enunciado en su contra, niega la verdad de los hechos en que se funda la recusación, es decir, el hecho de que "el negocio penal le fue repartido al Magistrado Suplente CARLOS CUESTAS el día de Diciembre de 1995". (f. 5 del expediente de recusación). Y a falta de autorización legal para conocer y juzgar del proceso objeto de recusación, se abstiene de entrar a considerar el fondo de la materia expuesta en el incidente contra él promovido.

En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 758 del Código Judicial, lo procedente hubiera sido fijar un término de ocho días para practicar las pruebas aducidas; sin embargo, dicho trámite no fue necesario, toda vez que

el Magistrado Suplente **CARLOS H. CUESTAS G.**, el día 5 de febrero de 1996, al ser notificado de su designación como Magistrado Sustituto para integrar la Sala Penal dentro del incidente de nulidad antes mencionado -según lo dispuesto en el artículo 37 del Código Judicial-, se declaró impedido para conocer de esta causa, por lo que solicitó su separación de la decisión de la misma, con fundamento en la causal contenida en el numeral 11 del artículo 749 del Código Penal.

Según lo expuesto, el incidente de recusación resultó impropio y extemporáneo, por fundamentarse en el hecho falso de que el negocio penal bajo estudio, había sido repartido al Magistrado **CARLOS H. CUESTAS** en el mes de Diciembre de 1995; designación ésta que no se notificó al Magistrado Suplente sino hasta el 5 de febrero de 1996, según se desprende del expediente principal.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el presente incidente de recusación, por extemporáneo, y ORDENA que el mismo sea agregado al expediente principal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA

QUEJA PRESENTADA POR EL LCDO. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA EN REPRESENTACIÓN DE JOSUÉ LEVY LEVY CONTRA LA JUEZ OCTAVA DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LCDA. MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente que contiene la queja promovida por el licenciado **Darío Eugenio Carrillo Gomila**, en representación del señor **JOSUÉ LEVY LEVY**, contra la señora **Juez Octava del Circuito Penal**, **del Primer Circuito Judicial de Panamá**, Licenciada **MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI**, por supuestas faltas a la ética judicial.

El licenciado **Carrillo** justifica la interposición del presente reclamo, en virtud de los supuestos perjuicios causados a su poderdante con la emisión de la Resolución de 27 de octubre de 1995, mediante la cual se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación anunciado contra el auto fechado 14 de septiembre de 1995, proferido en el curso de las sumarias seguidas a JOSUÉ LEVY LEVY, RUBÉN LEVY LEVY, DOV BINDER, CRISTINA HERNÁNDEZ, ELIE COHEN y LEONEL SOLÍS, por supuestos delitos contra la Fe Pública, el patrimonio y la Seguridad Colectiva.

Como argumentos fundamentales el quejoso alega que:

"1) Que la resolución del 27 de diciembre de 1995 antes citada, es claramente violatoria de normas legales vigentes.
2) Que la violación tiene su origen en ignorancia inexcusable de la Ley.
3) Que la funcionaria es responsable de los perjuicios que ha sufrido nuestro mandante por esta causa." (F. 4).

Por encontrarse este negocio en etapa de admisibilidad la Sala considera oportuno adelantar las siguientes consideraciones.

Los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público están obligados a observar y cumplir las reglas de ética judicial que consagra el artículo 440 del Código Judicial. Y en tal sentido, el artículo 285 del Código Judicial establece los casos en que los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pueden ser sancionados disciplinariamente. La regulación legal de los Magistrados y Jueces se encuentra contenida en el Título VIII del Libro Primero del Código Judicial.

En este orden de ideas, el artículo 288 del Código Judicial dispone que: "La jurisdicción disciplinaria sobre Jueces y Magistrados será ejercida por el respectivo superior jerárquico." Y, para los efectos de identificar al superior jerárquico corrrespondiente, se sigue lo establecido en el Capítulo III del Título XII del Libro Primero del Código Judicial, concerniente a la Carrera Judicial. Según el artículo 277: "El escalafón comprende las categorías que van de Jueces Municipales de 2ª, a Magistrados del Distrito Judicial".

Según el criterio jurisprudencial seguido por la Corte Suprema de Justicia, el Órgano Judicial sigue un sistema vertical de gobierno establecido en la Constitución y desarrollado en el Libro Primero del Código Judicial, de acuerdo con el cual los Jueces y Magistrados y los Agentes del Ministerio Público, son nombrados por sus superiores jerárquicos y es a éstos a quienes compete sancionarlos disciplinariamente.

En base a este criterio, la competencia para conocer y juzgar las faltas a la ética judicial debe regirse por el principio de jerarquía que impera en el sistema judicial. En el caso particular que ahora se considera, por tratarse de una funcionaria con mando y jurisdicción en un Circuito Judicial de una Provincia de Distrito Judicial, nombrada por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Ramo Penal, es a esta autoridad jurisdiccional a quien corresponde el conocimiento de esta causa disciplinaria.

Por lo tanto, la Sala considera prudente no adentrarse al análisis de la responsabilidad disciplinaria que le cabría en el siguiente sumario a la **Juez Octava del Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal**, puesto que la misma, pertenece a la esfera circuital penal, situación ésta que inmediatamente nos separa del conocimiento de la causa por no ser competentes, de modo que el presente negocio debe ser ventilado por los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento del presente negocio; y en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA en la presente causa ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR LA LICDA. AIDELENA PERERIRA, CONTRA EDUARDO BERBEY POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del incidente de nulidad de lo actuado, por notificación testifical en violación al procedimiento, interpuesto por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY en el proceso penal que se instruye por razón de la acusación particular interpuesta por la licenciada AIDELENA PEREIRA en su contra, por delito de tentativa de homicidio, el Magistrado Suplente **CARLOS H. CUESTAS G.**, el día 5 de febrero de 1996, al ser notificado de su designación como Magistrado Sustituto para integrar la Sala Penal dentro del incidente de nulidad antes mencionado -según lo dispuesto en el artículo 37 del Código Judicial-, se declaró impedido para conocer de esta causa, por lo que solicitó su separación de la decisión de la misma, con fundamento en la causal contenida en el numeral 11 del artículo 749 del Código Penal, cuyo texto es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el Juez o Magistrado, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos; ...".

El Magistrado **CUESTAS** sustenta su manifestación de impedimento, en el hecho de que:

> "... la incidentista Omayra García de Berbey me incluyó en una Acusación Particular presentada ante la Asamblea Legislativa contra varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la supuesta comisión de varios títulos del Código Penal, a pesar de que este Órgano del Estado no tiene competencia para juzgarme por mis actuaciones como Secretario General de la Corte Suprema de Justicia".

En tales circunstancias, considera la Sala que se sí se justifica la separación del Magistrado Suplente **CARLOS H. CUESTAS G.**, para conocer del presente negocio, en virtud de la declaración de impedimento por él manifestada.

Por lo tanto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Suplente CARLOS H. CUESTAS G.; y en consecuencia, lo declara IMPEDIDO y lo separa del conocimiento del presente caso; y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, que le siga en turno, para que lo reemplace e integre esta Sala de decisión, conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LA MAGISTRADA AURA G. DE VILLALAZ EN EL INCIDENTE DE OBJECIONES PROPUESTO EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz se ha declarado impedida para conocer del incidente de objeciones propuesto en el proceso de extradición de **Fernando Hernández Arias** solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

En apoyo de su solicitud, la Magistrada de Villalaz aduce que a una de las firmas forenses que representan a Hernández Arias, Villalaz y Asociados "me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, con alguno de los socios que la componen", lo que configura la causal contemplada en el numeral 1° del artículo 749 del Código Judicial.

Como quiera que el fundamento de la solicitud tiene efectivamente por efecto la inhabilitación del funcionario judicial para intervenir en la causa, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACCEDE a lo solicitado y, en consecuencia, DECLARA impedida a la Magistrada Guerra de Villalaz para conocer de este negocio y se CONVOCA para que la reemplace al Magistrado en turno en la Sala Tercera.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, DENTRO DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN QUE SE LE SIGUE A FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz ha manifestado impedimento para conocer de solicitud de fianza de excarcelación propuesta dentro del proceso de extradición que se le sigue a FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS, y solicita se le separe del conocimiento del negocio.

El fundamento de la solicitud radica en el hecho de que Hernández Arias ha acreditado como su representante judicial a la firma forense Villalaz y Asociados, con algunos de cuyos integrantes la unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad.

La solicitud formulada invoca como apoyo la causal prevista en el numeral primero del artículo 749 del Código Judicial.

Por considerar debidamente fundada la petición, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA IMPEDIDA a la Magistrada Guerra de Villalaz para conocer de este asunto y la separa de su conocimiento.

Provéase por Secretaría lo conducente para que intervenga en la sustanciación de la causa el Magistrado a quien corrresponda.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SEÑORA CLOTILDE ESTHER VERGARA DE AROSEMENA, CONTRA

LA LICENCIADA NELLY CEDEÑO DE PAREDES, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación ha ingresado a la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, el expediente que contiene la denuncia promovida por la firma forense **AROSEMENA Y AROSEMENA** contra la licenciada **NELLY CEDEÑO DE PAREDES** por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos que se dice fue cometido en perjuicio de la señora **CLOTILDE VERGARA DE AROSEMENA.**

A juicio del Procurador General de la Nación el sumario debe decidirse con un sobreseimiento definitivo, de carácter impersonal, toda vez que la firma denunciante no ha aportado pruebas que permitan apreciar el supuesto hecho punible denunciado.

En su Vista Fiscal, visible a fs. 100-104, el Procurador General de la Nación señala que la funcionaria denunciada, en su carácter de Juez de Circuito del Ramo Civil, quien hoy día ostenta el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso promovido contra la señora VERGARA DE AROSEMENA por el señor GABRIEL OMAR CASTRO procedió a instruir a la autoridad de policía del corregimiento de Betania para que procediera al lanzamiento por intrusa de la señora CLOTILDE VERGARA DE AROSEMENA, hecho que fue ordenado por la autoridad dentro del proceso civil correspondiente.

A criterio del Procurador, la funcionaria denunciada no ha cometido el delito imputado toda vez que su actuar ha estado enmarcado dentro de las formalidades establecidas para los procesos de lanzamiento.

La Sala para resolver observa que la firma forense AROSEMENA Y AROSEMENA promovió la denuncia contra la servidora pública denunciada, en su carácter de apoderada especial de CLOTILDE VERGARA DE AROSEMENA, pero no aportó el poder correspondiente.

Si bien es cierto que estamos en presencia de un delito que no requiere querella ni acusación particular, por lo que basta la simple denuncia para que se tramite la investigación correspondiente, en el caso que nos ocupa la denuncia promovida a nombre de una persona natural no ha sido presentada en debida forma dada la deficiencia antes señalada.

Por otra parte, los hechos que se le imputan a la licenciada NELLY CEDEÑO DE PAREDES no configuran ilícito penal alguno, toda vez que la actuación atribuida a dicha autoridad se realizó dentro de los parámetros legales correspondientes.

El simple hecho de remitir copia o instruir a la autoridad de policía para que ejecute el lanzamiento de quien se reputa como intruso no puede constituir delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, puesto que ese es uno de los deberes que debe realizar la autoridad judicial del ramo civil dentro del proceso de lanzamiento.

No está comprobado, por tanto, el delito denunciado que se atribuye a la licenciada NELLY CEDEÑO DE PAREDES, quien solamente ha actuado en acatamiento a las normas procesales previstas en el proceso tramitado ante su despacho. Procede, en consecuencia, acoger la recomendación del Procurador General de la Nación y concluir la causa en los términos recomendados por el funcionario de instrucción.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, de manera impersonal, en las presentes sumarias.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ EN CONTRA DE JUAN RAMÓN PORRAS, GERENTE GENERAL DEL INTEL, POR DELITO CONTRA EL HONOR, EN PERJUICIO DE GILBERTO PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, actuando en representación de International Telephone & Fax -IT&F-, presentó ante el Procurador General de la Nación **"querella por los delitos de calumnia e injuria"**, contra el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, con la solicitud de que "se le juzgue y condene".

El funcionario de instrucción aprehendió el conocimiento de la iniciativa procesal y dispuso remitirla en comisión a la Fiscalía Segunda Delegada, para "que se practiquen todas las diligencias útiles y pertinentes".

Por cumplida la comisión, la causa llega ahora a conocimiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema, remitida con extensa Vista Fiscal en la que se solicita la decisión de la encuesta con un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal y se ordene el archivo de las sumarias.

Además de las pruebas presentadas por la querellante con su libelo, durante la instrucción sumarial fue recabado un cúmulo de pruebas diversas atinentes a la causa. En relación con las aportadas por el querellante, la Vista destaca que:

> "Lo cierto es que, la única prueba documental aportada comentada y analizada por VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ en el libelo de la querella que hace referencia en forma directa a expresiones vertidas por la Gerencia General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones a cargo del Dr. JUAN RAMÓN PORRAS, a la empresa INTERNATIONAL TELEPHONE & FAX -IT&F- (antes TELENATIONAL COMMUNICATION, S. A. -TNC-), resulta ser la nota N° 5.94.333 de 27 de diciembre de 1994, dirigida por el señor Gerente General del INTEL, Dr. JUAN RAMÓN PORRAS al Licenciado Juan Materno Vásquez de la firma Forense Vásquez y Vásquez, por medio de la cual aquél le informa a éste lo concerniente a la actuación de la Gerencia Ejecutiva Internacional del INTEL respecto al corte del servicio telefónico de los números 27-1617 y 27-0477".

El examen de la documentación aportada por el querellante permite establecer que, en efecto, el único documento que contiene alusión directa a la empresa querellante es la nota de la referencia. Ese documento lleva por fecha 27 de diciembre de 1994, y la querella fue presentada el 3 de marzo de 1995.

Esta simple verificación permite comprobar que es fundada la opinión del representante del Ministerio Público, cuando apoya su solicitud de que se decrete un sobreseimiento definitivo y se ordene el archivo de las sumarias sobre la extemporaneidad en que incurre la querellante al anunciar su pretensión procesal y releva a la Sala de cualquiera otra consideración en este caso.

Por las consideraciones anteriores, la SALA SEGUNDA, DE LO PENAL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad

de la ley, DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de carácter objetivo e impersonal, en esta causa y ORDENA el archivo de las sumarias.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA G., EN REPRESENTACIÓN DE RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERIO, CONTRA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, MEDIANTE LA CUAL SE NIEGA PETICIÓN DE DESERCIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la apelación anunciada por el Licenciado **José Luis Varela G.**, en representación de **RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERO**, contra la Resolución de 19 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se niega la petición de deserción de la acusación particular.

Atendiendo a solicitud hecha por el recurrente, advierte la Sala que, en el negocio en cuestión, el Tribunal Superior al conceder, en el efecto devolutivo, la presente apelación y, la consecuente remisión de la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema, obvió los trámites de rigor, toda vez que dentro del término de ejecutoria de la resolución que decidió el incidente mencionado, el abogado de la defensa anunció apelación, por lo que cumplido el término de ejecutoria de dicha resolución, debió fijarse en lista el negocio, a fin de que el recurrente sustentara la apelación anunciada; y, vencido el término concedido al recurrente para la sustentación del recurso, debió corrérsele traslado del mismo al Ministerio Público, es decir a la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

En virtud de lo expuesto y a fin de subsanar los trámites correspondientes, se fija en lista el presente negocio por el término de tres (3) días, a fin de que el licenciado José Luis Varela sustente la apelación anunciada contra la Resolución de 19 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se niega la petición de deserción de la acusación particular.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GILBERTO PÉREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AMERICAN TELEPHONE & FAX (AT&F), EN CONTRA DEL DR. JUAN RAMÓN PORRAS, GERENTE GENERAL DEL INTEL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresaron a la Sala Penal de la Corte Suprema las sumarias instruidas con motivo de querella presentada **el 9 de marzo de 1995** por Vásquez y Vásquez contra el Director General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, "por los delitos de calumnia e injurias", supuestamente cometido en perjuicio de American Telephone & Fax -AT&F-, con la solicitud de que se le juzgue y condene a la pena de prisión señalada en el artículo 173-A del Código Penal, y a la indemnización de daños y perjuicios "en cuantía no menor a los B/.2,000,000.00".

Según afirman los apoderados legales de la querellante, a su patrocinada le ha sido imputada la comisión de diversos hechos tipificados como delitos en los códigos Penal y Fiscal, como lo son el de Hurto, derivado del cargo de piratería, el de defraudación fiscal y el de ejercicio ilegal del comercio (fs. 6-7).

En la Vista remisoria de la encuesta se solicita poner término al proceso con un sobreseimiento definitivo, de carácter objetivo e impersonal, y el archivo del negocio, por considerar que la querella es extemporánea, "amén de que se ha demostrado que el hecho motivo de la investigación no ha sido ejecutado".

Con el libelo de la querella fueron presentadas pruebas documentales diversas, y aducidas para su práctica otras, tanto documental como testimoniales.

Entre las documentales que fueron aportadas, en su mayoría consistentes en publicaciones aparecidas en diarios de la localidad, debidamente autenticadas, la última fue hecha el 24 se enero de 1995.

A juicio del agente de instrucción, "las pruebas documentales presentadas por la parte acusadora para acreditar el hecho punible atribuido ... no hacen referencia, mencionan, identifican o vinculan a la empresa AMERICAN TELEPHONE 7 FAX, INC -AT&F- con la información periodística publicada" (fs. 238-239).

El examen de las sumarias le permite a la Sala Penal confirmar el aserto anterior y, del mismo modo, comprobar que, de las pruebas documentales aportadas, en la única -ésta sin autenticación y, por tanto, sin eficacia probatoria- en la que supuestamente se hace referencia a persona o entidad determinada ("La empresa TNC se ha dedicado a revender servicio telefónico mediante el `Call-Back ..."), no se configura alusión alguna a la querellante, ni por su nombre ni por sus siglas -que son AT&F- (fs. 48-49), siendo que las iniciales que se utilizan no corresponden a persona, natural o jurídica, conocida.

Por otra parte, e íntimamente relacionado con el concepto de reventa del servicio telefónico a que alude el documento en cita, aparecen dos comprobaciones hechas durante la instrucción sumarial y resaltadas en la Vista Fiscal (fs. 236-238). Según la primera de ellas, el contrato de prestación de servicio telefónico suscrito por el INTEL con la querellante "no le transfiere al SUSCRIPTOR, derecho, concesión o facultad alguna para explotar el servicio telefónico en su provecho personal o de terceras personas ...", mientras que, de conformidad con la segunda, la querellante opera con una licencia comercial Tipo A, que solamente la faculta para la "**compra y venta al por mayor de mercancía seca en general** tales como: Fax, teléfonos, centrales telefónicas, UPS, exceptuando aquellas que requieran de servicios especiales ...", lo que en forma alguna la autoriza para dedicarse a la explotación de servicio telefónico.

La querellante no niega haber incurrido en la actividad denunciada por el INTEL, y su empeño en sentirse aludida por las generalizaciones que caracterizan las publicaciones que fueron aportadas como prueba, pareciera una admisión tácita de que se considera comprendida entre las empresas denunciadas por haber comercializado las llamadas ilegales de larga distancia, lo que habría hecho en franca violación de la autorización que tiene para el ejercicio del comercio. Valga destacar a este respecto que, a juicio de los apoderados judiciales de la querellante, "Quien realice un comercio ilegal, no obstante estar amparado con una Licencia Comercial, como lo está nuestra representada, se hace merecedora (sic) de la sanción de la cancelación de su Licencia Comercial y a las sanciones señaladas en los artículos 27 y 30 del Decreto de Gabinete N° 90 de 25 de marzo

de 1971 ..." (f. 7).

Finalmente, en cuanto al criterio externado en la Vista Fiscal, sobre la extemporaneidad de la querella, es de advertir que, de las pruebas documentales aportadas, la más reciente es una publicación de **27 de diciembre de 1994**, en la que, como viene dicho, no se alude en forma alguna a la querellante. De allí que, por haber sido presentada el **9 de marzo de 1995**, la iniciativa procesal de que ahora se conoce resulta a todas luces extemporánea.

Por las razones que se dejan expuestas, la SALA SEGUNDA de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO E IMPERSONAL, en esta causa.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE LIBERTAD A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHENG QUINTANA SINDICADO POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, SECUESTRO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BOLÍVAR ECHEVERRÍA Y MARCOS RESTREPO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante proveído de 10 de enero del año en curso, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, concedió en efecto diferido el recurso de apelación anunciado y sustentado por la **FISCAL SEGUNDA SUPERIOR** contra el auto calendado el 23 de noviembre de 1995, mediante el cual se revoca la orden de detención decretada contra **HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA**.

A fin de surtir la alzada, ingresó el caso a la Sala Segunda y cumplidos los trámites de reparto, se procede a resolver con base a los puntos objetados por la recurrente.

Según las constancias de autos, el incidente propuesto por la defensa del imputado Hilario Enrique Chen Quintana pretendía que las autoridades correspondientes le den cumplimiento a la orden de libertad que le fuera concedida a su defendido inicialmente, ya que la Fiscalía Superior se niega a acatar dicha orden y por el contrario, ha dispuesto su privación de libertad. Tal incidencia fue resuelta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante auto de 23 de noviembre de 1995, en el que revoca la orden de detención decretada por la Fiscal Segunda Superior.

La parte motiva de la decisión impugnada señala que una recta interpretación del artículo 2147-J del Código Judicial, compatible con la situación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 3 de 1991, no justifica convertir los sustitutivos o alternativas de la detención preventiva a una forma más grave, si no median causas que lo justifiquen y si no se solicita ese cambio al Tribunal jurisdiccional que emitió la resolución concediendo dicha medida. El cumplimiento del principio dispositivo así lo exige.

La recurrente en su escrito de sustentación de la impugnación presentada, sostiene que el expediente se encontraba en el Ministerio Público para darle cumplimiento a una ampliación del sumario ordenada por el Tribunal y a partir de ese momento, el imputado se encontraba a órdenes de la agencia de instrucción; agrega que fue con motivo de la práctica de esas diligencias de ampliación cuando surgieron otros elementos concretos que revelan "la proclividad delictiva de Chen

Quintana", ya que se le siguen varios procesos penales por homicidio, robo a mano armada, asociación ilícita y varios delitos contra el patrimonio, que al tenor de la ley vigente no permiten ni siquiera la libertad bajo caución y menos aún medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Por otra parte, sostiene, que en las constancias procesales se ha podido establecer que si bien es cierto que el imputado padece de paraplejia y otros deterioros de la salud, la medida alternativa otorgada fue violada porque en su residencia se encontraron armas de grueso calibre, de posesión ilícita, y en otro expediente se acreditó que simultáneamente al goce de esa medida, su residencia servía de refugio a un prófugo de la justicia.

La defensa, por su parte, ha indicado que Chen Quintana fue favorecido con una medida sustitutiva de la detención preventiva, otorgada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que le permite permanecer en la residencia de su madre, ya que sus condiciones vitales son bajas y requiere de la asistencia y atención directa de otra persona hasta para llevar a cabo sus funciones fisiológicas elementales de excreción.

La Sala para resolver considera que no hay duda alguna sobre el grave padecimiento de salud que sufre el procesado y por ello la medida cautelar adecuada que cabe adoptar es la de ordenar su traslado a un lugar en el que se le pueda prestar atención médica, el cual debe ser suministrado por el Estado y que bien puede ubicarse en un hospital, enfermería carcelaria o pabellón en el que se asegure su vigilancia, en virtud de que en los distintos procesos penales que se le siguen hay evidencias claras de que sus padecimientos parapléjicos no han sido obstáculo para vincularse a otros hechos delictivos.

Por razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución calendada el 23 de noviembre de 1995, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en este caso y en su defecto decreta como medida sustitutiva de la detención preventiva la obligación de HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA de mantenerse en un establecimiento, pabellón o centro de salud bajo la responsabilidad del Estado, debidamente custodiado, hasta tanto se prolonguen sus condiciones actuales de deterioro físico, según el dictamen pericial correspondiente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EDUARDO SILVESTRE LUGO CONTRA CHIRSTIAN V. ARHEINTER POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS; ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PÚBLICO; VIOLACIÓN DE SELLOS, Y SUSTRACCIÓN EN OFICINAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para que decida sobre su mérito legal, la Procuraduría General de la Nación ha remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema las sumarias iniciadas por denuncia que presentara Eduardo Silvestre Lugo contra Christian V. Arnheiter, Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, violación de sellos y sustracción en oficinas públicas.

ANTECEDENTES DEL CASO

Según refiere el denunciante, el 15 de marzo de 1995, mediante Orden General N° 10, Christian V. Arnheiter ordenó "Remover" a Eduardo Silvestre Lugo del cargo de Director de la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de Panamá (f. 40). Disconforme con la medida administrativa, Silvestre Lugo otorgó poder especial al licenciado Elías Morón Arosemena para que interpusiera recurso de reconsideración con apelación en subsidio. Mediante resolución N° 18 de 8 de mayo de 1995, la comandancia de la institución declaró extemporáneo el recurso interpuesto, por considerar que el recurso fue presentado "el día 23 de marzo de 1995, es decir al sexto (6to.) día útil", lo que indicaba que "el acto que se intentaba impugnar ya estaba en firme o ejecutoriado" (f. 42).

LA DENUNCIA

Eduardo Silvestre Lugo denuncia a Christian V. Arnheiter afirmando que la fecha de recepción del libelo del recurso de reconsideración fue "falsificada o alterada" (f. 2), y que el funcionario acusado, "a sabiendas" de ese hecho, "... optó por incluir en ... la resolución N° 18 de 8 de mayo de 1995, una declaración falsa ..." (f. 2). Por tal motivo el denunciante considera que Arnheiter ha incurrido en la comisión de los delitos tipificados en los artículos "265, 266, 268, 271, 342 y 348 del CÓDIGO PENAL" (f. 1). Con la denuncia acompaña el poder especial otorgado al licenciado Morón Arosemena, copia del libelo de reconsideración con apelación en subsidio y copia de la resolución N° 18 de 8 de mayo de 1995 (fs. 4-9; 16-19).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 83 de 29 de diciembre de 1995, recomienda se cierre la encuesta penal con un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, por considerar que el funcionario denunciado "nada tiene que ver" con la irregularidad que se suscitó con el documento contentivo del recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto contra la Orden General N° 10 de 15 de marzo de 1995 (f. 155). En cuanto a esa irregularidad, Walter Rafael Espinosa Lee, funcionario de la Comandancia que intervino en la recepción y manejo del libelo del recurso anunciado, admite fue el producto de una equivocación, de "un error involuntario", como se destaca en la Vista comentada (f. 158).

A juicio del agente del Ministerio Público, la resolución N° 18 de 8 de mayo de 1995, suscrita por el funcionario investigado, estuvo "dentro del marco de la legalidad" toda vez que tuvo la "creencia" de que Eduardo Lugo había presentado el libelo de impugnación "de manera tardía" (f. 156).

PRUEBAS ALLEGADAS AL CUADERNO PENAL

Entre las pruebas más relevantes allegadas al cuaderno penal figura precisamente la declaración de Walter Rafael Espinosa Lee, quien, como ya se indicara, fue el funcionario que recibió la documentación en la secretaría de la Comandancia, y la de Elías Morón Arosemena quien, al ocurrir el hecho que ahora se denuncia, fungía como apoderado judicial de Eduardo Lugo.

Explica Walter Rafael Espinosa Lee que la marcación del día y del mes en el sello de recibido, ocurrió porque que "me equivoqué y remarqué el número" (f. 47). Por su parte, Elías Morón Arosemena sostiene que "la anomalía consiste en que en una copia se puso la fecha correcta del día de recibo y la hora, esto es dentro de los términos o sea el 22 de marzo de 1995. En otra fotocopia aparecen fechas super puesta (número) que no permite determinar la veracidad de la citada fecha" (f. 123).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Corte es del criterio de que las pruebas allegadas al cuaderno penal no permiten establecer que el funcionario acusado haya incurrido en responsabilidad penal, como tampoco que lo actuado por quien admite la autoría del error tenga una motivación dolosa.

En conclusión, esta Corporación considera que las acusaciones formuladas contra Christian V. Arnheiter carecen de fundamento jurídico, toda vez que las sumarias no acreditan la comisión de los hechos punibles alguno, razón por la que comparte el criterio del Procurador General de la Nación, en el sentido de que esta encuesta debe ser cerrada con un sobreseimiento definitivo, de carácter objetivo e impersonal, de conformidad con el numeral 2, del artículo 2210 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de carácter objetivo e impersonal, en las presentes sumarias.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PENALIZACIÓN IMPUESTA AL LICENCIADO RODRIGO MIRANDA MORALES, POR INCURRIR EN ULTRAJE Y GRAVE FALTA CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

Mediante resolución calendada el 7 de febrero de 1996, los magistrados integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispusieron iniciar una investigación, con el propósito de establecer la veracidad de información según la cual el licenciado Rodrigo Miranda Morales, en el segmento de comentarios del noticiero matinal de Radio Mía de esa misma fecha, había proferido expresiones ofensivas contra los integrantes del Pleno de la Corte Suprema y, en particular, contra los integrantes de la Sala Penal de esta Corporación.

Con tal objeto se comisionó al Departamento de Relaciones Públicas del Órgano Judicial para que obtuviera copia de la cinta del programa en cuestión y efectuara la transcripción de la parte pertinente. Tanto la transcripción como la cinta fueron remitidos al Departamento Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia, donde fueron debidamente autenticadas.

De esta manera se pudo comprobar que, en efecto, el citado abogado había proferido graves ofensas, tanto contra los integrantes del Pleno de la Corte Suprema como, en particular, contra los magistrados de la Sala Penal, acusándolos de mantener relaciones con narcotraficantes, ofensas que fueron irrogadas contra los magistrados en el ejercicio de sus funciones y por razón de ellas.

El artículo 33, numeral primero, de la Constitución Nacional, autoriza la penalización de esta conducta con multa o arresto, sanción que podrá ser impuesta sin juicio previo, mientras que el artículo 202 del Código Judicial establece que, por comprobada la falta, procede la imposición de pena de arresto hasta por cinco días.

Por las anteriores consideraciones, el suscrito Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, IMPONE LA PENA DE CINCO DÍAS DE ARRESTO al licenciado Rodrigo Miranda Morales, por haber incurrido en ultraje y grave falta de respeto contra los magistrados integrantes de esta Sala.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, A FAVOR DE GATEWAY COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION, EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL DEL INTEL, DR. JUAN RAMÓN PORRAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce en esta oportunidad la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de otra querella presentada por la firma forense Vásquez y Vásquez contra el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, actuando en esta ocasión en nombre de la sociedad mercantil Gateway Communication Services Corporation, S. A. -Gateway-, por "el delito contra la Administración de Justicia de calumnia en actuaciones judiciales", con la solicitud de que se condene al querellado a la pena de prisión que señala el artículo 353 del Código Penal y al pago de B/.2,000,000.00 en concepto de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el delito.

Según manifestación del querellante, **"El delito se ejecutó el día 29 del mes diciembre del año 1994"** (f. 5), y se hace consistir en que el querellado "confirió poder especial al abogado, Licenciado **ROGELIO ÁVILA**, para que mediante formal denuncia ante la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, inculpara a la Sociedad Mercantil **CATEWAY COMMUNICATION CORPORATION - CATEWAY-** y otras, del delito fiscal de defraudación fiscal al no pagar, o evadir el pago, del gravamen por las llamadas telefónicas al exterior, creado por medio de la Ley N° 88 de 28 de diciembre de 1961" (f. 5). El libelo indica que, en ejercicio de tal poder, fue efectivamente presentada la denuncia contra la querellante y dos otras empresas, circunstancia ésta que diera lugar a solicitud de suspensión del proceso, "hasta tanto se dicte la Resolución en la denuncia por defraudación fiscal, que se surte ante la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, la cual constituye el hecho punible de la calumnia en actuaciones judiciales que se imputa al acusado" (f. 14).

Tras aprehender el conocimiento de la querella, el Procurador General de la Nación dispuso comisionar al Fiscal Segundo Delegado de esa dependencia para que asumiera la instrucción de las sumarias, encargo que fue cumplido, según se comprueba a partir del folio 95 del cuaderno.

Coincidiendo con el inicio de la investigación, la firma forense Vásquez y Vásquez, nuevamente en representación de Gateway Communication Services Corporation -GATEWAY-, formalizó una **acusación particular** contra el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), en términos sustancialmente iguales a los de la querella inicialmente presentada (fs. 384-396), reiterando la solicitud de suspensión del proceso hasta tanto se resolviera la denuncia pendiente de decisión en la Administración Regional de Ingresos de la provincia de Panamá. La acusación particular interpuesta fue admitida por esta Sala (fs. 411-412) y de ese acto se dio por notificado el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (f. 323).

La denuncia fiscal que contra la querellante presentara el Gerente General del INTEL resultó finalmente **DESESTIMADA** por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, mediante resolución de 11 de mayo de 1995 (fs. 325-330). El argumento central utilizado por la jurisdicción fiscal para desatar la encuesta de esa manera, consistió en que "como se ha podido determinar en la presente investigación, el sistema de "Call Back" no concluye la llamada, o sea que no estamos en presencia de una "llamada fructuosa", de acuerdo a las definiciones anteriores, por lo tanto no se estaría causando el gravamen que establece el Artículo 1° de la Ley 88 de 28 de diciembre de 1961, por llamadas

al exterior. En consecuencia el fundamento de la acción considerada no se ha dado, pues no estamos ante la presencia de evasión de defraudación fiscal alguna".

Una vez concluida la investigación, el agente de instrucción delegado envió el expediente al despacho del Procurador General de la Nación, quien ahora lo remite a la Sala Penal con extensa Vista (fs. 478-518) en la que "solicito a los Honorables Magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, **ARCHIVAR** la presente encuesta sumarial, dictado (sic) un **Sobreseimiento Definitivo de carácter objetivo e impersonal**, de conformidad con lo estipulado por el artículo 2210 del citado cuerpo de normas adjetivas".

En opinión del Fiscal Colaborador:

1° "las pruebas documentales aportadas con la querella "no mencionan, identifican y/o vinculan a la empresa GATEWAY COMMUNICATION SERVICES CORPORATION, -GATEWAY-, con su información publicada" (fs. 498-499);

2° "llegamos a la inequívoca conclusión de que VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ no está facultada para denunciar al Gerente General del INTEL, Dr. JUAN RAMÓN PORRAS,, como infractor de las figuras delictivas reguladas en los artículos 172 y 173-A del Código Penal, tal como lo hizo y es visible a foja once (11) de la causa" (f. 501). En sustento de esta afirmación, en la Vista se expresa:

> "a nuestro juicio, la identificada carga probatoria no guarda relación con el hecho punible (Contra la Administración de Justicia de calumnia en actuaciones judiciales) el cual, que de conformidad al poder conferido, el poderdante autorizó a la prenombrada firma forense para que denunciara al Dr. PORRAS ante las autoridades competentes.
> ...
> Esta observación jurídica cobra relevancia por las razones doctrinales y legales que a continuación señalamos:
>
> 1° Respecto a su naturaleza, el delito de falsa denuncia (contra la Administración de Justicia), tiene gran semejanza con el delito de calumnia (Contra el Honor); toda vez que ambas infracciones consisten en la falsa imputación de un delito, pero se diferencian en que mientras la calumnia existe aun cuando la falsa imputación tenga lugar ante cualquiera, la falsa denuncia ha de tener lugar ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su oficio deba proceder a su investigación y castigo. La Calumnia es una ofensa contra el honor personal (subjetivo u objetivo), mientras que el otro delito es un atentado contra la administración de justicia.
>
> 2° Procedimentalmente, la investigación sumarial del delito de denuncia falsa (contra la (Administración de Justicia) es oficiosa, por lo tanto, nuestra legislación no exige el acatamiento de requisitos especiales para la formulación y presentación de la misma; sin embargo, las normas adjetivas (Código Judicial) y sustantivas (Código Penal) establecen que para la persecución de los delitos contra el Honor (Calumnia e Injuria), no se instruirá sumario sino por querella de la persona agraviada, la cual debe estar acompañada de la prueba sumaria de su relato (Ver. art. 180 Código Penal c. c. art. 1978 y 2030 del Código Judicial".
>
> 3° "De esta manera y sin considerar aspectos relativos a la presentación de la querella, debemos restarle el valor acusatorio a la denuncia por el delito Contra el Honor" (fs. 501-502).

La Sala Penal de la Corte Suprema comparte los criterios externados en la Vista remisoria del proceso, relativos a la valoración del mérito de las sumarias, a los que estima necesario agregar algunas consideraciones omitidas en el punto 3° antes indicado ("... y sin considerar aspectos relativos a la

presentación de la querella ...".

La investigación sumaria de esta causa fue iniciada en virtud de la "querella" inicialmente presentada a nombre de la empresa Gateway Communication Services Corporation -Gateway-. De modo que es esa modalidad de iniciativa procesal la que preside el estudio de la oportunidad en que tiene lugar el acceso a la jurisdicción, a los fines de determinar lo concerniente al cumplimiento de las formalidades que a tales fines establece la normativa legal pertinente. Valga llamar la atención sobre el hecho de que el presupuesto así establecido no se ve modificado por la constitución posterior de la acusación particular, la que sólo tiene el efecto de sustituir el mecanismo procesal de la denuncia y convertir en sujeto procesal, en "parte", a la denunciante original.

En ese orden de ideas, es preciso recordar el mandato del artículo 2035 del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 2035. **La querella se presentará dentro del término de dos (2) meses**, contados a partir de la comisión del hecho punible instantáneo o de la realización del último acto si se tratare de un delito continuado, salvo que la ley establezca un término distinto para casos especiales.
>
> Cuando el agraviado u ofendido se encontrare en el extranjero tendrá el término de un año para presentar su querella, en la forma indicada anteriormente".

Como fuera destacado desde el inicio de esta resolución, el libelo de la querella precisa que "**El delito se ejecutó el día 29 del mes de diciembre del año 1994**" (f. 5). Confrontada esa afirmación categórica con la fecha de presentación de la querella, **lo que ocurrió el 9 de marzo de 1995** (f. 14 vuelta), la comprobación resultante es que **la querella fue presentada dos meses y nueve días después de ejecutado el delito**, término que excede el que la ley concede, con lo que se refuerza del sustento de la solicitud de sobreseimiento definitivo que hace el Procurador General de la Nación.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, en esta causa.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DILIGENCIA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO ENTRE EL LCDO. JOSÉ AGUSTÍN DELGADO PÉREZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA Y EL SEÑOR ALDO GABRIEL WHITEHEAD BAZÁN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Por imperativo legal, compete a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las infracciones de tránsito en las que aparezcan involucrados Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y como quiera que el presente caso registra como protagonista del accidente de tránsito ocurrido el 9 de octubre de 1995, al licenciado **JOSÉ AGUSTÍN DELGADO PÉREZ**, actual Magistrado del Tribunal Superior de Familia, mediante providencia de 27 de noviembre de 1995 se dispuso el inicio de la investigación correspondiente.

LOS HECHOS

Según el informe de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, N° 69243, emitido por el Inspector N° 12477, señor Walter Hernández, a las 2:15 de la tarde, en la calle 55, Bella Vista, frente al edificio Esther, el señor **ALDO GABRIEL WHITEHEAD BAZÁN**, quien conducía un bus amarillo, marca Ford, de 1984, destinado al transporte de colegiales, de propiedad del Colegio Las Esclavas, con placa N° 8BC-227, colisionó el auto marca Mitsubishi, tipo sedán, del año 1987, con placa N° E-199, color dorado, conducido por el licenciado **JOSÉ AGUSTÍN DELGADO PÉREZ**, al momento en que este último se encontraba estacionado en la calle, en mano contraria.

El conductor del autobús dio como versión de los hechos, el mal estacionamiento del auto Mitsubishi, lo que dio lugar a que la defensa de atrás lo tocara. Por su parte, el licenciado Delgado expresó que si bien es cierto que él estaba estacionado en la mano contraria porque no encontró estacionamiento al borde del paño que le correspondía, en esa vía se permite estacionar a ambos lados y él estaba correctamente ubicado.

Para completar la investigación se citó al inspector de tránsito que hizo el informe de la colisión y en diligencia que aparece a folios 11-12 del expediente, se ratificó en el contenido de su versión, señalando que dada su experiencia y conocimiento en esta materia, el culpable del accidente de tránsito ocurrido el 9 de octubre de 1995 lo es el señor Aldo Gabriel Whitehead Bazán porque al pasar por el lugar en el que se encontraba estacionado el automóvil del señor Delgado, "no calculó el espacio que tenía para pasar" y tal omisión fue la causa de la colisión.

También se ordenó incorporar a los autos las declaraciones de los dos conductores, pero el señor Whitehead no acudió a las citas en las fechas programadas por la Sala para recibir su versión de los hechos. El licenciado Delgado Pérez, respondió el interrogatorio que se le remitió en los términos siguientes:

> "En atención a las preguntas formuladas mediante Oficio N° 312-S. P. de 27 de noviembre de 1995, procederé a dar respuesta a cada una de ellas de la siguiente manera:
>
> a) El día 9 de octubre de 1995, operaba el vehículo de mi propiedad, marca Mitsubishi Lancer, color dorado con matrícula E-199 del año de 1987.
>
> b) Cuando se suscitó la colisión, yo me encontraba estacionado frente al Edificio Esther, ubicado en Calle 55 Bella Vista.
>
> c) El accidente ocurrió en el paño izquierdo de la vía, es decir, en ambos lados de la vía uno se puede estacionar. Yo tuve que estacionarme al lado contrario de la vía, porque era el único espacio que había y debidamente aliniado (sic) con respecto a los otros vehículos que estaban por delante. Hacia atrás de mi vehículo había un espacio que es el acceso de entrada de vehículos a un edificio colindante con el Edificio Esther.
>
> d) Mi vehículo recibió el impacto en la parte trasera derecha, es decir desde la segunda puerta lateral derecha hacia atrás.
>
> e) La otra persona manejaba un bus colegial de aproximadamente 60 pasajeros. El subía por esa vía, yo estaba distraído leyendo unos documentos, mientras esperaba a mi esposa, que iba a buscar un maletín. En el (sic) había transcurrido unos 20 minutos de estar estacionado y los vehículos subían y bajaban sin dificultad. De pronto sentí un ruido que en primer lugar no supe de dónde provenía. Un transeúnte me indicó que me habían chocado, cosa que al bajarme del vehículo comprobé que era cierto, pues, el bus que me había chocado había seguido de largo, y si no es por los gritos de los

niños que iban en el bus y señas que yo le hacía al conductor del bus, fue que se vino a parar.

f) El informe N°69243 del inspector **WALTER L. BERMÚDEZ**, de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, está correcto. Así nos preguntó a los dos (2) al dibujar la colisión y donde siempre mi carro permaneció estacionado por espacio de dos (2) horas hasta que él llegara, sólo que en la parte final, debe corregirse el número del vehículo, decir, vehículo N° 1.

g) Creo que el conductor del bus iba a exceso de velocidad, ya que éste llegó a parar a unos 50 metros del lugar del impacto. Además se cerró hacia su derecha para impactar el lado trasero de su vehículo contra el lado trasero de mi vehículo. Si no hubiese cabido en la vía, el conductor del bus pudo haberme chocado con la parte frontal de su vehículo, cosa que no ocurrió".

En autos consta que la Secretaría de la Sala Segunda llevó a cabo varias diligencias con miras a lograr que el conductor del autobús se apersonara para tomarle la declaración jurada del caso y consta también que se le fijó una nueva fecha que se notificó por edicto, sin lograr la comparecencia de Whitehead Bazán, por lo que tratándose de un accidente de tránsito en el que ya existe un informe debidamente ratificado y la declaración de la parte afectada, es posible decidir con las constancias de autos.

De conformidad con el diagrama de la ubicación final de los automóviles y la versión dada por el inspector de tránsito y uno de los conductores, hay elementos de juicio suficientes para establecer que la falta del deber de cuidado, en tomar las precauciones y calcular el espacio para conducir el autobús por la calle 55 de Bella Vista, es imputable al señor Aldo Gabriel Whitehead Bazán.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CULPABLE al señor ALDO GABRIEL WHITEHEAD BAZÁN, varón, panameño, casado, de 29 años de edad, con cédula de identidad personal N° 8-252-723, residente en Santa Librada, 6ª etapa, casa N° 676, conductor, localizable en el teléfono 231-0763 y quien trabaja como conductor en el Colegio Las Esclavas, de la colisión ocurrida el día 9 de octubre de 1995, en infracción del reglamento de tránsito y lo sanciona a B/.25.00 (veinticinco balboas) de multa y al pago de los daños ocasionados al vehículo del licenciado JOSÉ AGUSTÍN DELGADO 301"I]D-D.

Fundamento legal: artículo 95 del Código Judicial y artículos 48, 70, 78, 92 y 160 numeral 68 del Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA PRESENTADA POR EL LCDO. LUIS A. VÁSQUEZ, EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL DEL INTEL, DR. JUAN RAMÓN PORRAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Lo que ahora llega a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema es otra **querella** interpuesta por la firma forense Vásquez y Vásquez contra el Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), por los

delitos de calumnia e injurias, esta vez actuando en representación de la sociedad mercantil Communication Network Services, Inc. -Panamá C. N. S.- Panamá.

La Sala ha debido distraer su atención en fechas recientes para pronunciarse sobre el mérito de otras querellas del mismo tenor, en las que sólo ha variado la identidad de la persona jurídica que actúa como mandante. Como en las anteriores, las sumarias han llegado acompañadas de recomendación que formula el Ministerio Público, en el sentido de que se desate la encuesta con un sobreseimiento definitivo, de carácter objetivo e impersonal.

Lo particular en este caso es que, luego de presentada y admitida la iniciativa procesal en la Procuraduría General de la Nación, fue traida en la forma de **acusación particular** a esta Sala Penal. Ello hizo necesario su estudio preliminar con el propósito de resolver sobre la admisibilidad, con el resultado de que fue declarada su improcedencia, según da cuenta resolución proferida el 19 de mayo de 1995 cuya copia aparece agregada al cuaderno a folios 218-219.

La decisión proferida por la Sala en aquella oportunidad se funda en dos consideraciones de naturaleza formal determinantes, cuyo valor no ha sido desvirtuado ni menguado a lo largo de la instrucción sumarial. La primera de ellas, de índole probatoria, se expresa en los siguientes términos:

> "De las pruebas aportadas en el libelo, observa que sólo el recorte de periódico calendado 21 de octubre de 1994, publicado por el diario La Prensa con el título "INTEL pierde 30 millones por piratería en llamadas" (f. 19), se encuentra debidamente autenticado, en tanto que los demás documentos carecen del cumplimiento de esta exigencia (artículo 820 del Código Judicial), por lo que se encuentran desprovistos de eficacia probatoria". (F. 219).

La segunda consideración se encuentra relacionada con el concepto de oportunidad en el ejercicio de la acción penal por la querellante:

> "Por otra parte, según lo dispone el artículo 180 del Código Penal, para proceder en los delitos contra el honor (calumnia e injuria), se requiere querella de la parte ofendida. No obstante, la Sala advierte que la última de las supuestas imputaciones calumniosas según el único documento que posee eficacia probatoria (recorte de periódico del Diario "La Prensa"), habría tenido lugar el 21 de octubre de 1994 (f. 19), mientras que la acusación fue presentada el 31 de marzo de 1995, es decir, 5 meses después de publicada la nota periodística; plazo que excede el término de dos meses para la formalización de la querella, contados a partir de la realización del último acto, según el texto del artículo 2035 del Código Judicial".

En cuanto a la oportunidad de la presentación de esta nueva querella, se encuentra debidamente acreditado (f. 18) que fue recibida en la Procuraduría General de la Nación el 13 de marzo de 1995, es decir **cuatro meses y 22 días** después de la realización del último acto delictivo cuya comisión se imputa al querellado.

Estos dos defectos formales constituyen un vicio de origen común a las acciones que con igual contenido fueron presentadas en sucesión, según se expresara anteriormente.

Por las anteriores razones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de carácter objetivo e impersonal, en esta causa.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA INTERPUESTA POR JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS ROJAS, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, FORTUNATO MANGRAVITA, RICARDO BLAS MANGRAVITARA, ULISES PITTÍ Y OTROS POR LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE QUE FUERA VÍCTIMA POR MÁS DE 48 HORAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Reingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, después de cumplida la ampliación decretada mediante auto de 25 de septiembre de 1995, el expediente que contiene la investigación llevada a cabo con motivo de la querella interpuesta por el ciudadano **JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS ROJAS** contra el licenciado **CARLOS AUGUSTO HERRERA**, Fiscal Auxiliar de la República y el Dr. **GABRIEL CASTRO**, Director de la Policía Técnica Judicial y los señores **FORTUNATO MANGRAVITA, RICARDO BLAS MANGRAVITA RAGO, ULISES PITTÍ** y otros, a fin de que se determine la responsabilidad penal que pudiera caberles por la privación de libertad de que fuera víctima por más de 48 horas.

En la resolución de 25 de septiembre se especificaron las diligencias y medios probatorios que debían incorporarse al expediente, a fin de aproximarse a la verdad material de los hechos denunciados y deslindar con mayor claridad la situación procesal de los querellados.

En la vista N° 2 de 24 de enero de 1996, remisoria del expediente, el Procurador General de la Nación externa su opinión en los términos siguientes:

> "Tras considerar que hemos reunido las constancias conforme se ha ordenado en esta causa, queda entendido que las irregularidades cometidas en torno al procedimiento dado al proceso incoado al señor AGRIOYANIS ROJAS, no existe en esas acciones intención dolosa por parte de los señores CARLOS AUGUSTO HERRERA Y GABRIEL CASTRO, como Jefes de los despachos de la Fiscalía Auxiliar de la República y Policía Técnica Judicial, respectivamente.
>
> Respecto a al calidad funcional del denunciado GABRIEL CASTRO, es de indicarse que si bien el mismo no ostenta el cargo del Director General de la Policía Técnica Judicial, es un hecho público y notorio que el mismo ha pasado a ocupar otra posición con mando en toda la República lo cual indica que no ha variado la competencia de ese Alto Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre el mérito legal.
>
> Habida consideración que en el presente negocio jurídico penal también ha transcurrido en exceso el tiempo estipulado por ley, es por lo que procedemos devolver el mismo a esa Corporación de Justicia, reiterando nuestro concepto vertido en la Vista Fiscal N° 65 de 8 de septiembre de 1995, salvo las aclaraciones expresadas en torno a compulsar copias y declinar el conocimiento a ala autoridad competente respecto a aquellos imputados a los cuales su juzgamiento no corresponda a esa Superioridad" (fs. 70-71).

La situación planteada en el presente caso, está íntimamente vinculada a la tutela de la libertad y a las prácticas en el manejo de los cheques post fechados, con acciones paralelas en lo civil y lo penal, a voluntad de los beneficiarios. Como es sabido, este tipo de conducta no puede encuadrarse en dos tipos penales simultáneos: falsedad y estafa, pues sus consecuencias jurídico

penales y procesales son distintas, incluso en lo que se refiere a la adopción de medidas cautelares personales. Por otro lado, la Sala no pierde de vista el hecho de que los funcionarios de instrucción y de policía han interpretado el lapso de 24 horas para poner a la persona aprehendida a órdenes de la autoridad competente, como un mecanismo de investigación que les permite ordenar la privación de libertad temporal hasta 24 horas, sin que se genere responsabilidad de ninguna índole.

Del informe presentado por el Fiscal Auxiliar se deduce, que el volumen excesivo de casos que provienen de diversas agencias de la Policía Técnica Judicial y los que se presentan directamente a través de las 26 Secretarías distribuidas en diversos turnos, les impide hacer un examen más detenido de cada expediente particular dentro del término angustioso que la ley les ofrece y por ello, en el presente negocio penal, al percatarse de la naturaleza de los cargos que se le imputaban al querellante, dejó sin efecto la aprehensión corporal decretada.

Tampoco se puede ignorar que el Pleno de la Corte al conocer de una acción de habeas corpus, con motivo de la detención preventiva de José Gabriel Agrioyanis Rojas, en resolución de 7 de abril de 1995, decretó la nulidad de lo actuado porque se percató de la omisión de formalidades legales esenciales. En un Estado de Derecho, la tutela de la libertad ocupa un lugar prominente, que debe ser una advertencia constante para todos los servidores públicos que laboran en el sistema de justicia del país, a fin de tomar en cuenta todas las previsiones legales que evitan incurrir en un acto excesivo o arbitrario, lesivo de la libertad de los ciudadanos.

Tanto del informe del Fiscal Auxiliar como el del ex Director de la Policía Técnica Judicial, ahora Director de Seguridad del Estado, cabe colegir que la detención preventiva la fundaron en la calificación del delito hecho en la denuncia presentada y por ello no se deduce una conducta dolosa en infracción de la ley.

La Sala Segunda, con fundamento en lo normado por el numeral 1° del artículo 95 del Código Judicial solo conoce de la denuncia presentada contra el Fiscal Auxiliar de la República y el Director de Seguridad del Estado, no así en cuanto se refiere a los señores FORTUNATO MANGRAVITA, RICARDO BLAS MANGRAVITA RAGO, ULISES PITTÍ, el detective ARANDA y los detectives que participaron en la detención y conducción del denunciante, cuya situación procesal compete a otra instancia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, con base en lo normado por el artículo 2210 del Código Judicial SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en este caso a favor de CARLOS AUGUSTO HERRERA y GABRIEL CASTRO y declina el conocimiento para ante los Tribunales de la esfera circuital con relación a los otros querellados, para lo cual ordena que se compulsen las copias correspondientes.

Fundamento legal: artículos 2148, 2158, 2159, 2115 y 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO ENTRE EL FISCAL SUPERIOR, CRISTÓBAL ARBOLEDA Y LOS SEÑORES IGNACIO CARRERA Y LEONARDO LEMUZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se recibe el expediente de las sumarias en averiguación del accidente de tránsito en que son parte el Fiscal Superior, licenciado **CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO** y los señores **IGNACIO CARRERA SÁNCHEZ** y **LEONARDO LEMUZA MARTÍNEZ.**

HECHOS

En horas de mediodía del 30 de octubre de 1995 en la vía Ricardo J. Alfaro a la altura de los edificios Libertadores con dirección hacia el paso elevado de San Miguelito se dio una colisión entre tres vehículos, cuyos conductores son Arboleda Alfaro, Carrera Sánchez y Lemuza Martínez.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Dada la calidad funcional del señor Arboleda Alfaro, corresponde a esta Sala el conocimiento de esta causa de tipo correccional, de conformidad con lo normado en el artículo 95 del Código de procedimiento.

Como pruebas de la calidad del funcionario, aparece en autos copia autenticada del Decreto y del Acta de Nombramiento N° 1035 del licenciado Cristóbal Arboleda Alfaro como Fiscal Superior a partir del 19 de septiembre de 1995 (fs. 8-9).

También forma parte de este cuaderno el parte policivo N° 89472 y N° 89473 (fs. 2-3) signados por el agente José D. Garibaldo, el cual se refiere a los protagonistas de la colisión y designa como conductor N° 1 (Arboleda Alfaro), conductor N° 2 (Carrera Sánchez) y conductor N° 3 (Lemuza Martínez) y al dar la versión respectiva como Inspector del Tránsito, manifiesta:

> ... "los tres vehículos transitaban por la vía Ricardo J. Alfaro con dirección de la avenida de la Paz hacia la USMA, al llegar frente de los edificios Los Libertadores, el vehículo # 3 se colisionó con su parte delantera a la parte trasera del vehículo # 2. Debido al impacto, el vehículo # 2 se colisionó con el vehículo # 1. No se observó huellas de freno".

En oficio N° 22 del 17 de enero de 1996, el Fiscal Superior, Arboleda Alfaro, da respuesta al oficio N° 13-S. P del 15 de enero de 1996 en el cual se le solicita informe sobre los hechos (fs. 11-12).

Manifiesta en su informe que conducía un auto marca Hyundai, sedán cuatro puertas, color azul, del año 1993, con matrícula 127264; que su vehículo al momento del accidente se encontraba en el paño interno de la vía que conduce hacia el puente de San Miguelito, frente a los edificios Los Libertadores; que el accidente ocurrió exactamente en ese lugar, o sea, en el paño interno de la vía Ricardo J. Alfaro que conduce hacia el puente de San Miguelito, frente a los edificios Los Libertadores; que su vehículo recibió el golpe en la defensa trasera o posterior; que el carro que le colisionó directamente es un Nissán Pick-Up, color rojo, del año 1990, con placa N° 104569, el cual había sido colisionado a su vez por el auto marca BMW, tipo Coupé, placa N° 064827, color negro, del año 1978. Manifiesta estar de acuerdo con los partes policivos identificados con los números 89472 y 49473, con fecha de 30 de noviembre de 1995. Explica que en el lugar de la colisión, hay una parada de autobuses colectivos y que en momentos que transitaba frente a la misma, un bus que se encontraba en la parada ingresó a la vía, en el paño interno, hacia San Miguelito, por lo que tuvo que disminuir la velocidad, escuchando casi de manera simultánea los golpes, uno de los cuales fue el de su vehículo. Además, indica que el golpe a su vehículo fue de poca magnitud (fs. 11-12).

En declaración jurada rendida por el agente de tránsito, José D. Garibaldo, el día 31 de enero de 1996 ante esta Sala, explica que los tres vehículos iban

en la misma dirección y al momento de llegar al lugar de los hechos estaban los tres vehículos unos detrás del otro; que el licenciado Arboleda se detuvo debido a que se le tiró un bus, luego se detuvo el vehículo conducido por el señor Carrera y fue en esos momentos que el vehículo conducido por el señor Lemuza impactó al vehículo del señor Carrera y éste colisionó el auto del licenciado Arboleda.

El agente de tránsito considera **-según el reglamento de tránsito-** que el culpable del accidente pudo haber sido el conductor del auto N°3 el señor Leonardo Lemuza, posiblemente por distracción (fs. 14-15).

Al declarar Carrera Sánchez quien conducía el segundo vehículo, manifiesta estar de acuerdo con el reporte de tránsito (fs. 16-17).

Por su parte, Lemuza Martínez, señala no estar de acuerdo con el reporte del tránsito porque en el mismo se afirma que él colisionó ambos carros. Explica que en realidad el pick-up colisionó con el vehículo sedán del licenciado Arboleda y posteriormente él (declarante) colisionó con el pick-up; por lo que no se dio el doble impacto (fs. 18-20).

El análisis del presente caso, nos lleva a concluir que el señor Lemuza Martínez al no guardar la distancia respectiva fue el responsable de la colisión en donde resultaron con daños los vehículos conducidos por el Fiscal Superior Arboleda Alfaro y el señor Carrera Sánchez.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CULPABLE del accidente de tránsito a LEONARDO LEMUZA MARTÍNEZ y lo CONDENA al pago de la multa de diez balboas (B/.10.00) por no guardar la distancia al conducir y al pago de los daños ocasionados a los vehículos conducidos por el Fiscal Superior CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO y el señor IGNACIO CARRERA SÁNCHEZ, a quienes ABSUELVE de responsabilidad.

Fundamento Legal: artículo 160, numeral 26 del Reglamento de Tránsito (Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993) y artículo 95 del Código Judicial).

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LUIS ANTONIO CÁRDENAS MEDINA CONTRA DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Reingresa procedente de la Procuraduría General de la Nación para la valoración legal respectiva el expediente contentivo de la denuncia penal presentada por el señor **LUIS ANTONIO CÁRDENAS MEDINA**, a través de su representante legal la firma Consorcio de Juristas, contra varios servidores públicos del Instituto de Recursos Naturales Renovables, por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, contemplados en el capítulo IV, Título X, del Libro II del Código Penal.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante vista N° 13 del 8 de febrero de 1996, el Procurador general de la Nación estima que la situación jurídica de los sumariados no ha variado, a pesar de que se han reunido las constancias conforme se ordenó; y que las irregulares denunciadas, dada la omisión, rehuso, retardo y negación de entregar documentos relacionados con una certificación solicitada acerca de un terreno de aproximadamente 80 hectáreas, ubicado en la Arenosa de Guánico, Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, no existe en esas acciones intención dolosa por parte del señor Rolando Guillén y los demás funcionarios de INRENARE, quizás no ha mediado la comunicación necesaria entre las partes que concurren en este caso.

Por esas razones, reitera el concepto emitido en la Vista Fiscal N° 70 de 20 de octubre de 1995, salvo las aclaraciones en torno a compulsar copias y declinar el conocimiento a la autoridad competente respecto a aquellos imputados a los cuales su juzgamiento no corresponda a esta superioridad (fs. 69-70).

INFORME DEL FUNCIONARIO DENUNCIADO

Mediante nota DIRG-068-96 del 12 de enero de 1996, el Director General del INRENARE, ingeniero Rolando Guillén S., a solicitud del Procurador General de la Nación (fs. 30-31) rinde informe sobre los hechos en que se fundamenta la denuncia en su contra.

Manifiesta que la Ley N° 6 del 17 de mayo de 1994 faculta al Inrenare para que realice una nueva demarcación de las Reservas Forestales de Tonosí, La Tronosa y Chepigana; que para ello el Inrenare creó una comisión integrada por algunos de sus funcionarios y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la cual está trabajando en las estrategias de gestión, pero que esta comisión está pendiente de presupuesto para su funcionamiento; que se incluyó en el presupuesto de 1996 una partida de cien mil balboas (B/.100.000.00) para dar inicio a las nuevas demarcaciones, pero dicha partida fue recortada por el Ministerio de Planificación y Política Económica; que a pesar de la limitación presupuestaria, en razón de la solicitud del señor Cárdenas Medina, los técnicos del INRENARE realizaron la inspección ocular al área de su finca; que la Ley faculta a esa institución para que realice nuevas demarcaciones y no para que emita certificaciones como lo solicita el señor Cárdenas Medina; que no se ha incurrido en delito de abuso de Autoridad o de Infracción de los Deberes Públicos porque legalmente no es factible entregar la certificación solicitada por el señor Cárdenas Medina, sin antes realizar la demarcación de las áreas; que los funcionarios de la institución en ningún momento han actuado de mala fe o en contra del denunciante y que han realizado todas las diligencias necesarias a fin de que una vez se concluya con la demarcación respectiva, tanto el señor Cárdenas Medina como otros agricultores que tienen impedimento para la titulación de sus fincas, se les resuelva la situación si técnica y científicamente es factible y sin que se atente en contra de la protección de los Recursos Naturales (fs. 32-24). Adjunta copias autenticadas del expediente (fs. 35-68).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Mediante auto del 17 de noviembre de 1995 esta sala ordenó la ampliación del presente sumario en el sentido de que el funcionario de instrucción oficiara copias al INRENARE sobre el peritaje practicado y del expediente que ha originado la solicitud hecha por el señor Luis Antonio Cárdenas Medina, tal como lo solicita el denunciante en el apartado correspondiente a pruebas (fs. 24-26).

Se aprecia que el fundamento de la denuncia presentada consiste en que no se dio respuesta a la solicitud presentada el 22 de mayo de 1995 al INRENARE, en el sentido que certificara si el terreno propiedad del señor Cárdenas Medina, ubicado en la Arenosa de Guánico, Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, se encuentra fuera de toda reserva forestal; solicitud que fue reiterada el 4 de julio de 1995.

De las copias allegadas con la ampliación ordenada, se tiene el informe de Inspección Ocular realizada el 10 de agosto de 1995, realizada por el dasónomo Bolívar Domínguez (fs. 51) de la cual hace alusión el funcionario denunciado; al igual que el informe respectivo de fecha 14 de agosto de 1995 en el cual se

señala:

> "Dadas las evaluaciones hechas en la gira consideramos que esta finca no debe ser desafectada de la Reserva Forestal de Tonosí por las razones siguiente:
>
> 1. Se sentaría un precedente para que otros campesinos con derechos posesorios en las comunidades de Pedregalito, Portobelo, Sierra y otros procedan a tramitar sus titulaciones.
>
> 2. Si el criterio que predomina para otorgar los títulos es que la finca debe ser potrero, entonces las zonas boscosas que quedan en el área serían taladas por los campesinos para volverlas potreros y así poder obtener un título de propiedad" (f. 50).

Lo anterior es contrario a lo que se afirma en el punto séptimo de la denuncia (f. 4).

Ahora bien, de las copias del expediente se observa que se le dio seguimiento a la situación planteada, es así que consta: Nota DERLS-228-95 del **16 de agosto de 1995** en la cual el agrónomo Iturbide Benavides, Director Ejecutivo Regional informa al licenciado Aristides Lorlesses, Director Nacional de Cuencas Hidrográficas, sobre la inspección ocular realizada indicando que comparte el informe presentado y que la desafectación de terrenos de las Reservas Forestales Tonosí y La Tronosa debe hacerse bajo criterios técnicos que no sea solamente por el hecho que ya están convertidos en potreros (f. 49); Nota DMBN-148-95 del **18 de septiembre de 1995** dirigida al ingeniero Carlos Vargas Lombardo, Director de Administración Forestal, en la cual el ingeniero Joaquín Díaz, del departamento de Manejo de Bosques Naturales, manifiesta que es necesario que la Dirección de Asesoría Legal del INRENARE emita criterio legal (fs. 47-48); Nota DINACH-412-95 del **26 de septiembre de 1995** en el cual el licenciado Aristides Lorlesse Gómez, Director Nacional de Cuencas Hidrográficas, remite al licenciado Marco Tulio Hernández, Director Nacional de Asesoría Legal, para su revisión, el expediente del caso Cárdenas Medina, señalando que aún cumpliendo con la Ley 6 del 17 de mayo de 1994 es muy probable que los terrenos no le sean desafectados y de ser desafectados los mismos serían condicionados a actividades agrosilvopastorial o forestales (f. 41); nota DNAL-760 del **9 de octubre de 1995** dirigida al ingeniero Carlos Vargas Lombardo, Director Nacional de Administración Forestal, en la cual el licenciado Marco Tulio Hernández, Director Nacional de Asesoría Legal, señala que si las Direcciones Técnicas normativas correspondientes junto con la Dirección Ejecutiva de los Santos certifica o acredita que las tierras del señor Cárdenas Medina están siendo usadas con fines agropecuarios y ello data de antes del 31 de diciembre de 1994, le asiste derecho, según la Ley 16 de 1994, para su solicitud, correspondiendo a esas direcciones determinar los mecanismos para realizar la segregación (f. 39).

En respuesta a lo anterior, el ingeniero Vargas Lombardo, en nota del **20 de octubre de 1995** manifiesta que se han establecido los mecanismos para el cumplimiento de la Ley N° 6 de 17 de mayo de 1995, pero se encuentra limitada por falta de presupuesto (fs. 37-38).

Finalmente, en mediante nota DNAL-791-95 del **19 de diciembre de 1995** el Director Nacional de Asesoría Legal, licenciado Marco Tulio Hernández informa al Director Nacional de Cuencas Hidrográficas, licenciado Aristides Lorlesse, que hasta tanto la Comisión conformada por el MIDA y el INRENARE no cuenten con el presupuesto adecuado no es posible atender la petición del señor Cárdenas Medina (f. 36).

Lo anterior es demostrativo de que no ha existido actuar doloso por parte del ingeniero Rolando Guillén, Director General del INRENARE ni los demás funcionarios de esa institución.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en estas sumarias de manera objetiva e impersonal, con base en el numeral 2° del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

FEBRERO 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 713 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA MINISTRA DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Antonio Bernal V. actuando en representación de **YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, la Resolución N° 713 de 18 de septiembre de 1995 emitida por la Ministra de Salud, y para que se hagan otras declaraciones.

Dentro del libelo antes descrito se aprecia que la parte actora ha incluido una petición de suspensión del acto administrativo impugnado, en atención a que "la señora de AVILA vivía de su salario, el cual no recibe desde el 18 de septiembre de 1995".

No obstante, el Magistrado Sustanciador por motivos de economía procesal procede previamente a revisar la Demanda de Plena jurisdicción interpuesta, con la finalidad de verificar si la misma cumple con los requisitos formales indispensables para su admisibilidad ante esta Corporación.

En este orden de ideas se aprecia que la demandante omite incorporar al expediente la resolución recurrida, debidamente autenticada y con la respectiva constancia de notificación.

Ahora bien, se observa que la demandante ha suministrado una declaración jurada en la cual se sostiene que el original del documento precitado reposa en la secretaría de la Ministra de Salud, el cual les ha sido imposible recuperar a pesar de las gestiones efectuadas.

A estos efectos es necesario advertir a la interesada, que solamente era indispensable presentar un escrito ante la secretaría de la Ministra de Salud solicitándole con el suficiente margen de tiempo, que le devolviese el acto impugnado con la constancia de notificación, así como que certificara si se había pronunciado o no sobre la peticiones ínsitas en el recurso de reconsideración presentado a su consideración y decisión.

Dicho escrito con la constancia de recibido era el fundamento para que dada la negativa o inactividad de la administración en acceder a lo pedido, el actor le solicitara a esta Superioridad su auxilio en base a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943. El apoyo judicial que se brindaría, previo esfuerzo del demandante y petición expresa de éste en el libelo de la demanda, consistiría en la solicitud de este ente jurisdiccional al Ministerio de Salud para que se enviará a la Corte a la brevedad posible la documentación e información requerida.

Debido a que este procedimiento no se verificó, se evidencia que el petente ha incumplido con la obligatoriedad de suministrar el acto administrativo impugnado en original o debidamente autenticado con su constancia de notificación, como lo exige el artículo 44 de la mencionada Ley 135 de 1943; y que además, no ha comprobado la configuración del silencio administrativo o negativa tácita de la pretensión. Este último presupuesto es primordial para evaluar el agotamiento de la vía gubernativa y el término de prescripción consagrado en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943 para acudir ante esta jurisdicción.

Por otro lado también se pone de manifiesto que la petente incumple con el

precepto consagrado en el artículo 43 numeral 3 de la prenombrada excerta legal, en virtud que no individualiza las normas que estima transgredidas, así como tampoco enuncia y motiva el concepto de la violación por el cual colige que dicha disposiciones han sido conculcadas.

Aunado a lo expresado, no comprueba la demandante prima facie y atención al principio de economía procesal, estar protegida o amparada por Ley especial, carrera o concurso de mérito que le conceda estabilidad o inamovilidad relativa en su cargo, ya que de lo contrario, posición de la señora Solano de Villalaz pertenece a la categoría de libre nombramiento y remoción. Este criterio ha sido sostenido en los recientes Autos de 24 de enero, 3 de agosto y 10 de octubre de 1995, entre otros.

Finalmente se observa que la recurrente no menciona que la señora Procuradora de la Administración interviene en el presente proceso en defensa del acto impugnado, tal como lo contempla y ordena el artículo 348 numeral 2 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado que suscribe en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción propuesta por el licenciado Miguel Antonio Bernal V. actuando en representación de YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE GIANELLA DEL CARMEN CARREIRO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 24-95-F. DE C DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 1, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala, actuando en nombre y representación de Gianella del Carmen Carreiro, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 24-95-F. de C. de 4 de septiembre de 1995, emitida por la Comisión de Vivienda N° 1, y para que se hagan otras declaraciones.

Antes de admitir la demanda, la Sustanciadora procede a estudiar la presente demanda, a fin de verificar si la misma cumple con los requisitos de Ley para su presentación.

El apoderado judicial de la demandante se notificó de la Resolución N° 24-95-F. de C. de 4 de septiembre de 1995, que es el acto impugnado, el 26 de septiembre de 1995 y sustentó su recurso de apelación el día 5 de octubre de 1995. El recurso de apelación fue declarado desierto por la Dirección General de Arrendamientos porque fue sustentado extemporáneamente. Esta decisión le fue notificada al apoderado judicial del demandante el 14 de noviembre de 1995 y la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción fue presentada el 26 de enero de 1996.

Como la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción prescribe en dos meses a partir de la notificación del acto impugnado o el acto

confirmatorio tal como lo establece el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, debe concluirse que cuando se ejerció la misma estaba prescrita.

Ante esta realidad la demanda no debe admitirse porque la prescripción extingue la acción y la vigencia de ésta es uno de los requisitos cuya falta impide que se le dé curso a la demanda tal como lo ordena el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, representada por la Magistrada que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Carlos R. Ayala, en representación de Gianella Carreiro, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 24-95-F. de C. de 4 de septiembre de 1995, dictada por la Comisión de Vivienda N° 1, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ENITH ESTHER ARAÚZ ALMENGOR, EN REPRESENTACIÓN DE GERARDO VILLAGRA MORA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, RESULELTO N° 0081 DE 3 DE MARZO DE 1995, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MARINOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licda. Enith Esther Araúz, quien actúa en representación de Gerardo Villagra M., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 0081 de 3 de marzo de 1995, emitido por la Dirección General de Recursos Marinos del Ministerio de Comercio e Industrias.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma reúne los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que el demandante no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 135 de 1943, que establece que para poder interponer una demanda contencioso administrativa se debe presentar el comprobante de la consignación del depósito del "crédito definitivamente liquidado a favor del Estado" para poder demandar la ilegalidad del mismo. En este caso el recurrente no acompaña su demanda con el comprobante de consignación de la multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) impuesta por la Dirección General de Recursos Marinos, mediante resolución N° 0081 de 3 de marzo de 1995, que tal y como lo establece el artículo 4 ordinal 6 del Código Fiscal, constituye parte del dinero que ingresa al Estado y compone parte del Tesoro Nacional, infringiendo así el artículo antes mencionado.

Por todo lo antes expuesto, lo procedente es, pues, no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la Licda. Enith Esther Araúz, en representación de Gerardo Villagra M., con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 0081 de 3 de marzo de 1995, emitido por la Dirección General de Recursos Marinos del Ministerio de

Comercio e Industrias.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° GG-26-95 DE 16 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Morgan y Morgan actuando en representación de la empresa **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A.** (Tecnasa, S. A.) ha solicitado nuevamente ante esta Superioridad, la suspensión de los efectos de la Resolución Administrativa N° GG-25-95 de 16 de agosto de 1995 mediante la cual, el Banco Nacional de Panamá resolvió administrativamente el Contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994, suscrito entre dicha entidad bancaria y la sociedad recurrente.

PETICIÓN DE SUSPENSIÓN:

Esta nueva solicitud de suspensión del acto impugnado es fundamentada por la petente básicamente esgrimiendo los siguientes argumentos:

1. Que los perjuicios que se le han causado y que se le seguirán causando, sino se accede positivamente al requerimiento de suspensión provisional del acto impugnado son palpables, evidentes y por ende de urgente amparo.

2. El hecho de que se les ha solicitado el retiro de los equipos inicialmente contratados con el Banco Nacional de Panamá de esta entidad bancaria.

3. Reiteran que los equipos proporcionados son aquellos ciertamente solicitados en el pliego de cargos elaborado para tales efectos por el Banco Nacional de Panamá, agregando que los equipos en mención responden a una estructura computacional adquirida especialmente para cubrir las necesidades del demandado en el acto público celebrado, tomándose en consideración las garantías suficientes en el mercado local para su compra. Por lo que en su concepto, no puede el Banco Nacional de Panamá contratar la compra de determinados equipos para después concluir que no eran los que realmente necesitaba, ya que en adición a lo expuesto, estos equipos difícilmente se podrán colocar en otro ente privado o estatal por sus especiales especificaciones.

4. Seguidamente expresan que la mayoría de los contratos que suscriben son con el Estado panameño, citando a continuación tres actos públicos en los que a consecuencia de su inhabilitación como postor del Estado Panameño no podrá participar; indicando que inclusive, no se le adjudica definitivamente la Solicitud de precio N° 04-95 para la adquisición e instalación de controladores de comunicaciones para diferentes dependencias del Banco Nacional de Panamá, "cuyo acto fue adjudicado provisionalmente y fue la propuesta con mayor puntaje de evaluación, según consta en el Dictamen (sic) de la Comisión evaluadora de dicha solicitud de Precios (sic)."

DECISIÓN DE ESTA CORPORACIÓN DE JUSTICIA:

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, entran a resolver la nueva solicitud de suspensión provisional del acto impugnado, sometida a consideración de esta Corporación.

Tal como se ha indicado en oportunidades anteriores, la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado como medida cautelar requiere del demandante un sustancial esfuerzo previo en el sentido de que suministre las constancias procesales indispensables para que, como prueba preconstituida, el Juez concluya efectivamente, y prima facie, que el recurrente cuenta en lo medular con la apariencia de buen derecho a su favor, ya que la suspensión del acto impugnado como medida cautelar depende de los elementos del juicios proporcionados para valorar y ponderar en esta etapa inicial del proceso, la viabilidad de la suspensión de las resoluciones impetradas de ilegal; ya que debe recordarse que en esta etapa procesal no se practican pruebas.

Siguiendo esta línea de pensamientos es indispensable advertir, que el concurso de precios N° 01-94 de 22 de abril de 1994 se efectuó para el suministro y la instalación de una unidad DATA CARTRIDGE compatible con los equipos 370, CPU 43XX y el sistema operativo MVS-XA con los cuales trabaja el Banco Nacional de Panamá. La intención de la celebración del Concurso de precio en referencia no era la de comprar un equipo con especificaciones altamente sofisticadas y de avanzada tecnología que no funcionara con lo ya existente; ya que tal como lo indica la entidad demandada en la resolución N° GG-31-95 de 21 de septiembre de 1995, la intención del ente bancario estatal era la de conectar los nuevos equipos que se adquirían, con la arquitectura y software existente, para de esta manera modernizar la captación y almacenamiento del procesamiento de datos del sistema computarizado del Banco.

Por otra parte es indispensable recalcar que el proponente tenía la responsabilidad de inspeccionar y examinar toda la documentación necesaria para participar en este acto público, tal como se deduce del artículo 5 de las condiciones generales del pliego de cargos, que tal como se reprodujera en la resolución de 5 de enero de 1996, nuevamente se trabscribe a continuación, para mayor ilustración:

> "... que es responsabilidad de todo proponente, antes de someter su propuesta, el haber obtenido la información necesaria y suficiente en cuanto a la forma y naturaleza de este acto, **y en general, haber obtenido la información necesaria, local o de otro origen en cuanto a los riesgos, contingencias u otras circunstancias que pudiesen en cualquier momento afectar su propuesta, y la solo presentación de la propuesta es señal de que se ha realizado la inspección** y examinado toda la documentación requerida para este acto público."

De lo anterior se infiere que el Banco Nacional de Panamá estaba en la obligación de permitirle y en lo necesario prestarle su apoyo para que la empresa concursante pudiese inspeccionar los equipos con la finalidad de que la misma ofreciera los sistemas que se requerían exactamente. Otra situación se hubiese presentado si ello no les hubiese sido permitido por el ente bancario y aun así, la concursante estaría tomando un riesgo tal excesivamente alto que no justificaría su participación en la licitación; no solamente por la aceptación tácita de los riesgos que aquello implicaba sino por las consiguientes consecuencias de una resolución administrativa del contrato que se suscribiera para suministrar e instalar en caso de incumplimiento, porque el equipo ofertado era compatible en principio, pero no conectable o identificable con los equipos del Bancos, por la falta de concretización del tipo o modelo de la serie de los equipos existentes.

No debe olvidarse que la arquitectura solicitada en el pliego de cargos correspondía a la familia o serie de equipo IBM actualmente instalado y funcionando en el Banco, más no al tipo específico dentro de dicha familia, por lo que la empresa **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A.** con amplia experiencia en el mercado computacional, debía estar en pleno conocimiento de que los equipos que estaba ofertando eran genéricamente compatibles, más específicamente podían o no conectarse o identificarse ya que son varios los modelos específicos dentro de

la familia o serie de equipo solicitado. Por lo tanto, el no efectuar la correspondiente inspección implicaba una situación de completa aleatoriedad con respecto a la funcionabilidad de los equipos; presupuesto éste indispensable para que se procediera a aceptar los nuevos equipos.

El no practicar la referida inspección al Banco Nacional de Panamá trajo como consecuencia que los equipos se instalaron pero no se comunicaron por falta de identificación, y por consiguiente, el Banco Nacional de Panamá procedió a resolver el contrato administrativo N° 90021-10-258 del 29 de junio de 1994.

Por otro lado hay que resaltar que de acuerdo a los artículos 1 y 3 del pliego de cargo aceptado por la empresa concursante, la entrega e instalación debía realizarse en condiciones óptimas de funcionamiento y uso de los funcionarios del Banco Nacional de Panamá; y además, el Banco se reservaba "el derecho de rechazar inmediatamente los equipos que no reúnan los requisitos técnicos exigidos ..." y que "LA CONTRATISTA deberá reemplazar en un término mayor de siete (7) días calendarios, con otros equipos nuevos, todo o en parte de los equipos que resulten defectuosos y deficientes." Esta información se observa a foja 8 dentro de la resolución N° GG-31-95 de 21 de septiembre de 1995, aportada como prueba ante esta Superioridad por la demandante.

De lo anterior se colige claramente que no necesariamente la orden de proceder obliga al Banco a admitir los equipos que se le proporcionen, ya que es contraprestación de la adjudicataria definitiva cumplir con los parámetros del concurso de precio, y es a riesgo de la misma traer equipos que no funcionen en el ente estatal y que después no pueda colocarlos en el mercado local.

La instalación lleva consigo de manera inherente la funcionabilidad, ya que no tiene el menor sentido contratar equipos que no brinden sus servicios o llenen la finalidad para la cual fueron adquiridos, lo cual en si no era más que la conexión o enlace automático de los equipos que se adquirieran con los ya existentes (cfr. pág. 13).

La sociedad recurrente insiste que "ha evidenciado a lo largo del Recurso presentado, que el Banco Nacional de Panamá puede perfectamente operar con el equipo suministrado, ya que además de lo requerido en compra, **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A.** le suministró un equipo que permite el funcionamiento del Banco óptimamente." Sin embargo, la peticionista indicó en inumerables oportunidades en el recurso de plena jurisdicción presentado, que los equipos ofertados no funcionaban con los ya existentes (ejem. cfr. fojas 52, 54, 58 y 59) y además, la resolución GG-25-95 de 16 de agosto de 1995 presentada por el mismo recurrente, señala que "una vez entregado el equipo por parte de la empresa **Tecnasa, S. A.** toda gestión efectuada por ésta para conectarlo al sistema del Banco y ponerlo en operación fue infructuosa, por lo que el proveedor optó por traer un técnico de Puerto Rico quien certificó que el equipo no era posible conectarlo ya que el nivel de ingeniería del Sistema Operativo del Banco (MVS-XA) no es el requerido por el equipo ofertado."

Finalmente se observa que el mismo actor admite en el libelo de su demanda que la alternativa de **Tecnasa, S. A.** de regalar un sistema de 18 pistas no era la solución adecuada para el Banco Nacional de ya que las unidades de 18 pistas no pueden ser actualizadas para gravar en un futuro a 36 pistas, por lo que adquirirlas no ofrece garantía de una futura expansión del sistema del Banco a 36 pistas, ya que para ello se requiere la actualización de dichos sistemas en cuanto a su nivel de ingeniería, a un costo de B/.126,000.00. Por otro lado, el sistema de grabación de 18 pistas no fue el equipo concursado, por lo que su aceptación como solución contravendría el principio de igualdad en cuanto a las exigencias planteadas a las empresas concursantes y a la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el parámetro del establecido pliego de cargos.

Una vez expuestos los planteamientos que anteceden, debemos concluir que la recurrente que solicita el auxilio discrecional de la suspensión del acto impugnado, no ofrece nuevos elementos de juicio que conduzcan a esta Corporación a colegir prima facie una justificación que avale la adopción de esta medida cautelar. Nuevamente reiteramos que la no participación de **Tecnasa, S. A.** en las

licitaciones futuras que indica en la petición de suspensión no es mas que producto de una sanción administrativa, fijada por el Código Fiscal, (artículo 20 literal f del Código Fiscal en concordancia con el artículo 68 A) numeral 7 de la misma excerta legal), ante el supuesto incumplimiento de la misma frente a la entidad concursante; y los resultados que se deriven de cada una de dichas licitaciones, no son mas que meras expectativas que aun no configuran derechos reclamables.

En atención a las circunstancias puestas de manifiesto, lo procedente es negar la pretensión del actor consistente en la suspensión provisional del acto administrativo impugnado.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDEN A LA SUSPENSIÓN de los efectos de la Resolución Administrativa N° GG-25-95 de 16 de agosto de 1995 mediante la cual el Banco Nacional de Panamá resolvió administrativamente el Contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4550 DE 9 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR EL TESORO MUNICIPAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Sixto Ábrego Camaño, actuando en representación de DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES, S. A., anunció recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 24 de noviembre de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 4550 de 9 de agosto de 1993, emitida por el Tesoro Municipal de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda en vista que la misma no cumple, a su juicio, con los requisitos necesarios para su admisión.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El licenciado Sixto Ábrego Camaño, sustenta su apelación en los siguientes términos:

> "... Esta Resolución final, es del 21 de agosto de 1995 y fué (sic) notificada, a la demandante el día 8 de septiembre de 1995, así consta en autos así como en el expediente administrativo que adujimos como prueba; por lo que está claro que la vía gubernativa se habría y nos habilita hasta el ocho de octubre para presentar ante Ustedes, los Magistrados ..., la demanda contencioso

administrativa de Plena Jurisdicción que planteara nuestra inconformidad con el aforamiento del Tesorero del Distrito de Panamá.

En resumen, la notificación del último acto confirmatorio lo fue el día ocho de septiembre de 1995, motivo por el cual, estábamos (sic) plenamente legitimados para presentar, hasta el ocho de octubre, cosa que hicimos, la correspondiente acción contenciosa administrativa ...

LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL:

... Si no fuera por el Membrete de la primera página del libelo no se plantearía en ningún lado la aparición de esa Sociedad. Es más, regular y corrientemente, las propias firmas forences (sic) son constituidas por un solo abogado. Hay incluso, abogados que se refieren a si mismos con el calificativo de `nuestra firma , y no cabe duda de que se están refiriendo al abogado que a fin de cuentas firmo tanto la demanda como el poder, o al menos al que aparece mencionado en el poder y en la demanda. ...

3. Por último, el libelo lo firmó yo, SIXTO ÁBREGO C., claro como apoderado de Distribuidora de Gases Industriales, S. A.; pero en calidad de abogado individualmente constituido. No se menciona de manera expresa ni tácita, que actuamos como miembros de TOVARES Y ÁBREGO.

Es evidente que al firmar el libelo en nuestra calidad de únicos abogados de la empresa mencionada, en la presente acción o demanda; actuábamos a título individual. ...

En otros términos, no justificamos lo alegado por la Ponente por cuanto que las pretensiones principales que cimentan nuestra acusación ... lo es que la Sala con su criterio jurídico, rectifique la calificación de la carga tributaria impuesta a nuestra defendida, para que a futura, esta vez sí, tenga que pagar dichos impuestos. ...

Una lectura integral del libelo nos revela sin lugar a dudas que todo el esfuerzo jurídico nuestro está dirigido a lograr una ubicación justa y legal, de nuestra representada, en la tabla de impuesto municipal, esa es la verdadera pretensión de nuestra demanda. Aparentemente se ha producido una confusión en la Resolución que impugnamos ya que confunde y asimila como una sola, las diferentes pretensiones expuestas en la demanda.

Nada obsta para que en una demanda se presenten diferentes pretensiones, siempre y cuando todas estén en la categoría y calidad que la Ley prevée (sic), para que se produzca esa concurrencia."

Por su parte, el Procurador de la Administración (Suplente), se opone al recurso de apelación, mediante Vista N° 38 de 18 de enero de 1996, en la cual señala que:

"En efecto, tal como se aprecia en las constancias procesales, el recurrente no ha cumplido con la formalidad señalada ... toda vez que no reposan en el expediente, comprobantes que demuestren que se consignó el pago en calidad de depósito de la suma adeudada en la oficina de la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, por lo que definitivamente se ha dejado de cumplir con lo normado en el artículo 49 citado. ...

Por otro lado, en cuanto a la notificación de la Resolución atacada, no compartimos los argumentos expuestos por el apelante, toda vez que del examen de este expediente observamos que esta contienda

> judicial tiene su génesis con la Resolución N° 4550 de 9 de agosto de 1993, la cual es objeto de reconsideración por Distribuidora de Gases Industriales, S. A., la cual es denegada mediante la Resolución N° 270 VF. de 3 de marzo de 1994 emitido por la Dirección de Administración Tributaria del Departamento de Vigilancia Fiscal del Municipio de Panamá. Posteriormente, se interpone recurso de apelación ante la Junta Calificadora Municipal, la cual expide la Resolución N° 22 (JCM) CMP de 26 de mayo de 1995, en cuya parte Resolutiva, revoca la Resolución anterior y disminuye la cuantía del impuesto municipal (v. fs. 4 a 8).
>
> ... De la última resolución que se produjo en este proceso sólo se tiene la fecha cierta de su emisión, que fue el día 26 de mayo de 1995, pero no consta la fecha de su notificación, por lo cual puede haber transcurrido en exceso la oportunidad para presentar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. ...
>
> Aunado a las anteriores deficiencias formales, se encuentra que el apoderado judicial de la empresa Distribuidora de Gases Industriales, S. A., si bien posee un Poder Especial otorgado por el Presidente y Representante Legal de la empresa demandante, en el libelo de la demanda al designar a las partes expresa que ésta empresa está `representada judicialmente por nuestra firma forense (v. fs. 12); sin embargo, el poder no fue otorgado a la sociedad civil Tovares y Ábrego, sino a la persona del Licdo. Sixto Ábrego Camaño, de lo cual se infiere que la firma forense carece de legitimación procesal para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa."

Una vez analizado el recurso de apelación que nos ocupa, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, coinciden con los criterios expuestos por la Magistrada Sustanciadora, dado que, efectivamente, la demanda adolece de varias deficiencias formales que la hacen inadmisible.

En primer lugar, observan el resto de los Magistrados que integran la Sala que, tal como lo señaló la Magistrada Sustanciadora y el Procurador de la Administración, la Ley 135 de 1943 (Contencioso Administrativa), es clara, cuando señala en su artículo 49 que, cuando la demanda versa sobre un acto administrativo relativo al pago de impuestos a favor del Tesoro Público, se hace necesario que ésta, se acompañe del comprobante que demuestre que efectivamente, se consignó el pago, en calidad de depósito de la suma adeudada en "la oficina recaudadora." A este respecto, la Sala ha señalado en innumerables ocasiones, tal como lo hizo recientemente en Resolución de 17 de septiembre de 1995, que el sólo hecho de no cumplir con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 135 de 1943, hacen que la demanda sea inadmisible.

En segundo lugar, al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, debido a que, no existe constancia que el acto confirmatorio que resuelve el recurso de apelación, es decir, la Resolución 22 (JCM) CMP de 26 de mayo de 1995, emitida por la Junta Calficadora Municipal se encuentra debidamente notificada.

Esta Sala ha sido constante en mantener el criterio que, todo acto administrativo impugnado, requiere no sólo su autenticación, sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa. En este mismo orden de ideas, como señaló esta Sala en Resolución de 25 de octubre de 1995, se hace necesario que el libelo de la demanda se acompañe de estas constancias, pues de no ser así, "la misma se encontrará deficientemente propuesta." Incluso, estipula el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que, de encontrarse imposibilitado de cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la ley en mención, el demandante podrá optar por enunciar las oficinas donde se encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien las solicite previamente a la admisión de la demanda. En este caso, no se acreditó la notificación ni se formula la petición expresa a que se refiere el artículo

46 antes mencionado, por lo que, tal como lo señaló la Magistrada Sustanciadora "no es posible determinar la fecha en que quedó agotada la vía gubernativa y menos aún, si la demanda fue presentada oportunamente ante esta Sala."

Por último, se aprecia claramente, a fojas 10 y 11 del expediente, que al apoderado judicial de la parte actora, se le otorga un poder especial para representar a la empresa Distribuidora de Gases Industriales, S. A., por lo que, al señalar en la demanda en el renglón denominado "LAS PARTES," que la mencionada empresa estará "representada judicial por nuestra firma forense," se incumple lo que señala el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, puesto que, la firma de abogados Tovares y Ábrego, no goza de legitimación procesal para concurrir en este caso, ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya que, no existe ningún documento que indique esa situación.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es, pues, confirmar la resolución recurrida.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 24 de noviembre de 1995 que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Sixto Ábrego Camaño, actuando en representación de DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TAPIA, LINARES Y ALFARO, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA VIOPAG, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 8549-93 JD DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Tapia, Linares y Alfaro, actuando en representación de Distribuidora Viopag, S. A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 8549-93 JD de 18 de noviembre de 1993, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y la Resolución de 1 de julio de 1995 en la que se declara extemporáneo el recurso interpuesto y se declara ejecutariada el acto administrativo contenido en la Resolución N° 8549-93-JD de 18 de noviembre de 1993.

En el acto impugnado la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó la adquisición de 121,000 docenas de frascos plásticos de 15 dragmas de poliestireno cristal, con sus tapas puestas a presión, marca Salvaplastic, con un precio de B/.0.6635 x docena, para un monto total de ochenta y cuatro mil doscientos noventa y siete balboas con 68/1000 (84,297.68), incluido el I. T. B. M. (5%), amparada en la Requisición N° 12537, a favor de la empresa SUPLIDORA CENTRAL, S. A. A foja 8 del expediente, consta la resolución fechada el 1° de julio de 1995 y en la que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social estimó que había transcurrido el término legal para sustentar recurso de apelación por lo que se declara su extemporaneidad, y a su vez, se declara ejecutariada la Resolución N° 8549-93 J. D. de 18 de noviembre de 1993.

La parte actora estima como violados los artículos 24 y 39 de la Ley 3 de 20 de marzo de 1986, el artículo 32 del Decreto de Gabinete N° 33 de 3 de mayo de 1985 y los artículos 29, 32 y 34 de la Ley 135 de 1943.

La firma Tapia, Linares y Alfaro sostiene que el día 24 de agosto de 1993, se realizó el acto de Licitación Pública N° 29-93 para la adjudicación de frascos plásticos de 5, 9, 15 y 30 dragmas y 3,360,000 esponjas de casa simple, destinados al Depósito General de Medicamentos. El renglón tercero de dicha licitación correspondía a la adjudicación de 121,000 docenas de frascos plásticos de 15 dragmas con sus tapas puestas, que fue adjudicado provisionalmente a la empresa Suplidora Central, S. A. A ello añade la firma recurrente, que la oferta de su poderdante, Distribuidora Viopag, S. A., fue de 121,000 docenas de frascos plásticos de 15 dragmas con sus tapas de presión a B/.068 x docena, que asciende a la suma de ochenta y dos mil doscientos ochenta balboas (B/.82,280.00) y que al sumarle el I. T. B. M. ésta aumenta a ochenta y seis mil trescientos noventa y cuatro balboas (B/.86,394.00). de lo que se deduce que la oferta de su poderdante excede el valor CIF del producto extranjero en mil novecientos noventa y seis balboas con cincuenta centavos (B/.1,996.50), es decir, en menos del 3%. Mediante Resolución N° 8549-93-J. D. de 18 de noviembre de 1993, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó la adjudicación definitiva del renglón tercero de la licitación en mención. No obstante, aduce la parte actora que su representada no fue notificada de la resolución, por lo que Distribuidora Viopag, S. A. presentó el 26 de noviembre de 1993 ante la Secretaría de la Caja de Seguro Social, una carta en la que solicita copia de los documentos relacionados con la Licitación Pública N° 29-93, entre ellos la Resolución N° 8549-93-J. D. de 18 de noviembre de 1993. Afirma la parte demandante, que los esfuerzos a fin lograr la notificación de la anterior resolución fueron infructuosos, por lo que su representada presentó el 3 de diciembre de 1993, recurso de reconsideración el cual fue resuelto el 1° de julio de 1994, es decir, siete meses después y fue rechazado de plano por la propia Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Dicha resolución les fue notificada personalmente el 15 de julio de 1994, por lo que, a su juicio, se agota de esa forma la vía gubernativa.

En cuanto a las disposiciones legales alegadas como infringidas por la parte actora, figuran los artículos 24 y 39 de la Ley 3 de 20 de marzo de 1986 "por la cual se adopta un régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones", cuyos textos son los siguientes:

> "ARTÍCULO 24: No se permitirá la importación exonerada o en tarifa arancelaria preferencial de maquinaria, equipos, repuestos, materias primas, productos semielaborados, envases, empaques y demás insumos destinados a la producción para el consumo doméstico, cuando los mismos se produzcan en el país en cantidad suficiente, calidad aceptable y precio competitivo.
>
> Para efectos de lo dispuesto en este artículo se considerarán competitivos los precios que no superen en más del porcentaje de su tarifa de protección, el valor CIF de los productos extranjeros similares a los nacionales o sustitutos de éstos."
>
> "ARTÍCULO 39: Los organismos oficiales y semioficiales, las instituciones autónomas y semiautónomas, los municipios, las empresas estatales y demás instituciones públicas y privadas que reciban ayuda económica del Estado o que tengan participación de fondos públicos, están en la obligación de comprar las materias primas, envases, empaques, combustibles, lubricantes, productos terminados y demás artículos producidos en el país, en la medida en que cuando los necesiten haya oferta de los mismos y sean de calidad aceptable y precio competitivo, en los términos señalados en el artículo 24 de esta Ley. En todo caso, la importación de dichas materias primas, envases, empaques, combustibles, lubricantes, productos semielaborados, productos terminados y demás artículos extranjeros estará sujeta a las disposiciones contenidas en los artículos 535 y siguientes del Código Fiscal.

> Las personas naturales y jurídicas que realicen proyectos y obras mediante contratos celebrados con el Estado o con alguna de las instituciones señaladas en el párrafo anterior, estarán sometidas a las mismas condiciones previstas en este artículo."

La firma Tapia, Linares y Alfaro, estima que al afectuar una análisis de las normas antes citadas se colige que la Caja de Seguro Social está obligada a comprar envases, específicamente los frascos de poliestireno que sean producidos en la República de Panamá siempre y cuando "haya oferta de los mismos, que sean de calidad aceptable y que su precio sea competitivo", es decir, que no superen en más el porcentaje de su tarifa de protección, el valor CIF de los productos extranjeros similares a los nacionales. En relación a los anteriores requisitos, sostiene la parte actora que Distribuidora Viopag, S. A. produce frascos plásticos de poliestireno cristal de 15 dragmas con sus tapas puestas a presión en cantidades suficientes, de calidad igual o mejor que los extrajeros y, en cuanto al precio, afirma que el arancel de importación o tarifa de protección de dichos envases es de 27.5%. Para que la Caja de Seguro Social se encuentre en la obligación de comprar esos frascos, es necesario que su precio local no supere en más de un 27.5% el valor CIF de los frascos de poliestireno extranjeros que sean similares a los nacionales, y en este caso, la oferta de su poderdante excede el valor CIF del producto extranjero en mil novecientos noventa y seis balboas con cincuenta centavos (B/.1,996.90), o sea, en menos del 3%.

La parte demandante considera igualmente como violado el artículo 32 del Decreto de Gabinete N° 33 de 3 de mayo de 1985 por el cual se reglamenta el Capítulo IV, del Título I, del Libro I del Código Fiscal, sobre Licitación Pública, Concurso de Precios, Solicitud de Precios y los respectivos contratos con el Estado. El artículo 32 es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 32: Las personas que se consideren agraviadas con la decisión final podrán interponer recurso de reconsideración ante el funcionario o corporación administrativa que expidió la resolución o el de apelación para ante el superior, o ambos, entendiéndose que los mismos serán en el efecto devolutivo. De uno u otro recurso, o de ambos, podrá hacerse uso dentro del término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la expresada resolución ..."

De lo antes citado, observa la parte actora que la violación es directa, toda vez que la Caja de Seguro Social tenía la obligación de notificar la Resolución N° 8549-93-J. D. a todas la personas naturales o jurídicas que participaron como postores en la Licitación Pública 29-93, a fin de poder hacer uso de los recursos respectivos dentro del término de cinco a partir de la notificación, en caso de sentirse agraviados por la medida adoptada.

Finalmente, la firma Tapia, Linares y Alfaro aduce como violados los artículos 29, 32 y 34 de la Ley 135 de 1943 que señalan lo siguiente:

> "ARTÍCULO 29: La resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."
>
> "ARTÍCULO 32: Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales."
>
> "ARTÍCULO 34: De uno u otro recurso o de ambos podrá hacerse uso dentro de cinco días útiles a partir de la notificación personal o dentro de los cinco días de la fijación del edicto, cuando hubiere

lugar a ello."

A criterio de la parte actora, la violación a las antes citadas disposiciones legales es directa, pues, en ninguna de las resoluciones impugnadas se expresan los recursos que por la vía gubernativa proceden ni el término dentro del cual deben interponerse. A ello añade, que el artículo 32 de la Ley 135 de 1943 se refiere a los efectos similares a una notificación y se encuentra relacionado con el artículo 31 de la misma ley que prevé la fijación de un edicto en caso de no efectuarse la notificación personal, y en relación a ello, afirma que la Caja de Seguro Social nunca notificó formalmente a su representada. Finalmente, opina la parte demandante en torno al artículo 34 de la ley en mención, que la Caja de Seguro Social al no notificar formalmente a su representada, no pudo haber comenzado a correr el término pata presentar y sustentar su recurso de reconsideración.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo de conducta sin número ni fecha visible de fojas 35 a 39 del expediente que dice:

> "Mediante Resolución N° 8549-93 J. D. de 18 de noviembre de 1993, proferida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social se decidió "APROBAR la adquisición de 121,000 DOCENAS DE FRASCOS PLÁSTICOS DE 15 DRAGMAS DE POLIESTIRENO CRISTAL CON SUS TAPAS PUESTAS A PRESIÓN, MARCA SALVAPLASTIC, con un precio de B/.0.6635 x docena por un monto total de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 68/100 (B/.84,297.68) incluido el I. T. B. M. (5%) amparada en la Requisición N° 12537, a favor de la empresa SUPLIDORA CENTRAL, S. A."
>
> La anterior Resolución obedece a que según lo dispuesto por el Artículo 17, literal g) del Decreto Ley N° 14 de 1954, es facultad de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, autorizar en cada caso los gastos de la Institución que excedan de A VEINTE MIL BALBOAS (B/.20,000.00). En vista de que el acto de adquisición supracitado excedía la suma señalada en la ley, y aún cuando la adjudicación definitiva la hizo el Director General, este acto se subsume a la ya mencionada aprobación de la Junta Directiva por propia voluntad legal en cuanto al perfeccionamiento del acto administrativo. Para la adjudicación definitiva de ésta o cualquiera Licitación debe considerarse el criterio técnico, así como aspectos de calidad, experiencia en el uso del producto y demás consideraciones de mérito y conveniencia para salvaguardar el interés público, por lo que el precio no es el único elemento a considerar en la adjudicación, tal y como se desprende del Artículo 50 del Código Fiscal y el Artículo 28 del Decreto N° 35 de 3 de mayo de 1985 ...
>
> La parte demandante sostiene reiteradamente que "nunca fue notificada legalmente", ya que no se le notificó la resolución de adjudicación por la Subdirección General y tampoco se le notificó de la Resolución N° 8549-93-J. D.
>
> La notificación de los actos administrativos es un requisito de eficacia de éstos, no puede entonces argumentarse que la falta de notificación o la notificación defectuosa es una causal de nulidad o de impugnación del acto administrativo ...
>
> La jurisprudencia nacional ha sostenido igual criterio y ha señalado que la notificación no es un acto administrativo y por tal razón no se puede impugnar con la misma categoría jurídica que el acto o la resolución o disposición al cual pertenece, tal y como consta en los fallos de 27 de septiembre y 25 de octubre de 1973, proferidos por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ...
>
> Por esta razón, cuando un acto administrativo no ha sido notificado

> o su notificación ha sido defectuosa, pueden ocurrir una de las siguientes situaciones, o el acto administrativo se entiende ineficaz debido a la pretermisión de la notificación o el afectado (parte interesada) se da por sufientemente enterado de la resolución o del acto administrativo, o utilice en tiempo y forma el recurso procedente, ésto último fue lo que hizo la demandante en el caso que nos ocupa, por lo que se acogió a lo que la doctrina procesal-administrativa denomina "notificación por conducta concluyente", la cual se encuentra regulada para efectos fiscales en el artículo 1237 del Código Fiscal.
>
> Los productos ofrecidos por la empresa **SUPLIDORA CENTRAL, S. A.**, están amparados por el Artículo 7 del Tratado de Libre Comercio, suscrito entre las Repúblicas de El Salvador y Panamá, el cual señala que los productos objeto de comercio bilateral gozarán de tratamiento nacional (nomenclatura arancelaria N° 39.07.02.02 N. C. C. C. A. Panamá 39.07.01.99 envases plásticos para productos farmacéuticos medicinales ..."

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista N° 434 de 16 de octubre de 1995, se opone a las pretensiones de la parte actora, pues, a su criterio el acto impugnado contenido en la Resolución N° 8549-93 JD de 18 de noviembre de 1993 emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, se ajusta a derecho. Destaca la Procuradora de la Administración, que la adjudicación del renglón 3 de la Licitación Pública N° 29-93 se efectuó dentro de los parámetros establecidos en el Código Fiscal, sobre Contratación Pública, el Decreto-Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 que es la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y el Decreto N° 33 de 3 de mayo de 1985, referente a las contrataciones públicas. En cuanto a la notificación del acto, estima que no se efectuó en la forma que generalmente debe darse. No obstante, aclara que la parte actora se dio por notificada por una serie de manifestaciones como lo son la presentación del recurso de reconsideración y tal cual se deduce de los hechos números séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero en que se fundamenta la demanda. Finalmente, en cuanto a la violación de los artículos 29, 32 y 34 de la Ley 135 de 1943, la Procuradora de la Administración argumenta que la parte demandante se contradice en sus aseveraciones, pues, por un lado afirma que no hubo notificación y, por otro lado, hace severas críticas al contenido de la Resolución de 1° de julio de 1994 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto.

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a examinar los cargos que se le imputan al acto acusado contenido en la Resolución N° 8549-93 JD de 18 de noviembre de 1993, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, previa las siguientes consideraciones.

Observa la Sala que la controversia que nos ocupa radica en que la empresa VIOPAG, S. A. estima que el acto expedido por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social es nulo, pues, no aplicó la Ley N° 3 de 20 de marzo de 1986 por la cual se adopta un régimen especial de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones, al adjudicar definitivamente el renglón tercero de la Licitación Pública N° 29-93 a la empresa Suplidora Central, S. A., que suministra productos extranjeros. A ello se añade el hecho que la parte demandante considera que no fue formalmente notificada del acto en cuestión.

En cuanto a la violación endilgada a los artículos 24 y 39 de la Ley N° 3 de 20 de marzo de 1986, no coincide la Sala con los argumentos expuestos por la parte actora, toda vez que si bien es cierto que mediante dicha ley se promueve la industria nacional mediante incentivos otorgados, no es menos cierto que para las adjudicaciones de los actos públicos como lo son las licitaciones públicas, concurso y solicitudes de precio, priman otros factores que las entidades estatales deben tener presente para la adjudicación definitiva de los mismos, en aras de los mejores intereses de la institución, y, por ende, del Estado panameño.

En efecto, en estos casos la entidad pública contratante debe atender preferentemente las normas jurídicas sobre contratación pública contenidas en el Código Fiscal y leyes especiales al respecto. En relación a lo anterior, se observa que en el informe explicativo de conducta visible de fojas 36 a 39 del expediente, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social explica claramente los motivos de hecho y de derecho contenidos en el artículo 50 del Código Fiscal y el artículo 28 del Decreto N° 33 de 3 de mayo de 1985 sobre contratación pública, en los cuales se fundamentó para dictar el acto acusado. Las anteriores disposiciones facultan al Ministro o Titular de una entidad pública, a adjudicar definitivamente la licitación pública o concurso de precios siempre que se procure el mayor beneficio para el Estado mediante la adjudicación que represente mayor calidad al menor precio, sin soslayar la conveniencia económica de las propuestas y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los proponentes. El precio, pues, no es el único elemento a considerar en una adjudicación y al respecto esta Sala se ha manifestado en reiteradas ocasiones. Finalmente, la Sala estima que la parte actora no la ha dado una interpretación amplia al artículo 39 de la Ley N° 3 de 20 de marzo de 1986 alegado como infringido, toda vez que el mismo prevé condiciones que en un momento dado permiten a las entidades en caso de contratación pública, no verse compelidas a adquirir el producto nacional cuando expresamente señala: "... las empresas estatales y demás instituciones públicas y privadas que reciban ayuda económica del Estado o que tengan participación de fondos públicos, están en la obligación de comprar las materias primas, envases, empaques, combustibles, lubricantes, productos terminados y demás artículos producidos en el país, **en la medida en que cuando los necesiten haya oferta de los mismos y sean de calidad aceptable y precio competitivo, en los términos señalados en el artículo 24 de esta Ley.**". En razón lo de antes expuesto, se desestima este cargo.

Por otro lado, en cuanto al artículo 32 del Decreto N° 33 de 3 de mayo de 1985 y los artículos 29, 32 y 34 de la Ley 135 de 1943 que a juicio de la parte demandante han sido violados directamente dado que la entidad demandada no notificó las resoluciones impugnadas, los veremos en conjunto por estar relacionados con el concepto de la infracción. No coincide la Sala con los argumentos expresados, toda vez que para los efectos legales sí hubo notificación del acto original, aunque ésta no se efectuó formalmente. Efectivamente, el artículo 1007 del Código Judicial prevé esta situación cuando señala:

> ARTÍCULO 1007: Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, **dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal ...**"

Lo anterior se evidencia, en los hechos y manifestaciones del demandante expresados claramente en el libelo de la demanda y en la interposición del recurso de reconsideración el cual fue resuelto mediante resolución fechada el 1° de julio de 1994 y notificado formalmente el 15 de julio del mismo año, tal como consta a foja 8 del expediente. En virtud de lo anterior, la Sala desestima, pues, esos últimos cargos.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 8549-93 JD de 18 de noviembre de 1993, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ni tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. ADEMIR MONTENEGRO EN REPRESENTACIÓN DE ADELIA C. DE CARDOZE, PARA QUE SE DECLARE NULA LA RES. N° 4/95 DE 17 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BOLOS DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ademir Montenegro, actuando en representación de Adela Cardoze, Elia de Bennett, Karen J. Holder y Nereida Mock, ha interpuesto demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 4/95 de 17 de marzo de 1995, dictada por la Comisión Nacional de Bolos de Panamá. Dichas demandas fueron acumuladas mediante resolución de 2 de agosto de 1995.

Dentro de las pretensiones de las demandas, las recurrentes solicitan la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado.

I. PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Las demandas fundamentan la petición de esta medida cautelar en que, la misma evitaría los perjuicios graves y notorios que dicho acto causaría a las demandantes, pues violenta de forma manifiesta y ostensible, los reglamentos y normas jurídicas deportivas. Además sostiene el apoderado judicial de las recurrentes que las mismas son atletas de alto rendimiento o de alta competencia y su condición competitiva podría resultar afectada, poniendo en peligro su carrera deportiva.

II. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que se trata de una Resolución N° 4/95 dictada por la Comisión Nacional de Bolos el 17 de marzo de 1995, mediante la cual se suspende por el término de dos (2) años a las demandantes de la "participación en los Campeonatos Nacionales, Torneos Nacionales e Internacionales, Torneos de Invitación, Campeonatos de Zona Americana, Juegos Regionales Centro Americanos (sic) y Panamá, Centroamericanos y del Caribe, Campeonatos Mundial (FIQ), Copas del Mundo ...". que fue dictada en base al Decreto Ejecutivo N° 112 de 17 de junio de 1980 reformado por el Decreto Ejecutivo N° 139 de 1981. Según el artículo 56 del Decreto 139 de 1981, para que poder participar en Juegos Olímpicos y regionales, en este caso los Juegos Panamericanos, como miembro de la delegación panameña es necesario cumplir con una serie de requisitos, a saber:

> ... "Para la participación de un atleta en los Juegos Olímpicos, Regionales, Campeonatos Mundiales y de Zona, en representación de Panamá y con derecho al uso de los símbolos patrios, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
>
> a) Haber sido preseleccionado por el Comité Olímpico de Panamá, en base a recomendaciones de las Federaciones Deportivas o por recomendación de estas, según sea el caso, con 180 días de anticipación a la celebración del respectivo evento.
>
> b) Haber cumplido con el proceso de preparación y evaluación técnico-científico, programado previamente por el Instituto Nacional de Deportes, el cual remitirá el Comité Olímpico de Panamá o a la Federación respectiva, según sea el caso, el informe concerniente a esta preparación y al cual se adjuntará la certificación de los atletas que hayan obtenido una evaluación positiva al final, para seleccionar de estos atletas a los que habrán de representar a Panamá y,

c) Obtener del Comité Olímpico de Panamá o la Federación respectiva, según sea el caso, la inclusión definitiva en la selección que representará a nuestro país y la inscripción correspondiente, una vez cumplidos los requisitos anteriores".

Siendo los Juegos Panamericanos torneos a nivel internacional, cuya competencia es privativa del Comité Olímpico de Panamá, es decir,es éste el que debe dar el aval correspondiente para la participación o no en los mismos, en base a las recomendaciones de las Federaciones o Comisiones y tomando en consideración los documentos que se encuentran a fojas 16, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32 del expediente, la Sala estima, prima facie, que las demandantes parecieran haber cumplido con los requisitos del artículo antes mencionado, para poder participar en los Juegos Panamericanos como parte de la delegación de Panamá. Ello lleva a la conclusión de que el referido acto administrativo en un examen preliminar pareciera contradice lo previsto en el Decreto Ejecutivo N° 139, por lo que procede a decretar la suspensión. Independientemente de la conclusión final a la que llegue la Sala en la sentencia, lo cierto es que las demandantes tienen apariencia de buen derecho (fumus bonus iuris) y pueden sufrir perjuicios de difícil reparación.

En consecuencia la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Cortes Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE, los efectos de la Resolución N° 4/95 de 17 de marzo de 1995, emitida por la Comisión Nacional de Bolos mediante la cual se suspende por el términos de dos (2) años a Adela Cardoze, Elia de Bennett, Karen J. Holder y Nereida Mock.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. TOMÁS TRISTÁN BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CRISTINO CORRALES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 026 DE 7 DE MARZO DE 1994, EXPEDIDA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, de la Demanda de Plena Jurisdicción presentada por el licenciado Tomás Tristán Barrios actuando en representación de **CRISTINO CORRALES**, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 026 de 7 de marzo de 1994, expedida por el Alcalde del Distrito de Santiago, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Argumentos de la apelación:

La alzada ha sido promovida ante esta Superioridad por la señora Procuradora de la Administración, alegando básicamente que en su criterio, "el caso subjúdice no es competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino por el contrario lo es de la Jurisdicción Ordinaria, por lo que no es viable la presente demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia." Este señalamiento lo fundamenta la recurrente en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943, que excluye los casos de policía civil del ámbito de aprehensión de competencia de esta Corporación. A estos efectos, la recurrente señala que los artículos 1741 y 258 numeral 5 del Código Judicial, le confieren esta facultad

cognoscitiva a la justicia ordinaria en lo que respecta a los negocios originados por causa de servidumbres.

Decisión de esta Superioridad:

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, entran a resolver la controversia instaurada.

Sobre el particular manifiesta este Tribunal colegiado que coincide con la posición jurídica vertida por la Procuradora de la Administración, en virtud de que los artículos 1741 y 1744 del Código Administrativo califican como negocios de naturaleza policía civil a aquellos casos relacionados con servidumbres rurales y urbanas que se ventilen ante las autoridades de policía; e igualmente las contiendas que surjan de las cercas puestas en lugares públicos o sitios que den acceso a ellos, que perjudiquen la comodidad de los usuarios de dichas vías, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Veamos lo estatuido en los artículos en comento:

> "Artículo 1741. Las resoluciones que dicte la Policía son transitorias y tienen por objeto, solamente, reponer las cosas al estado que tenían antes del hecho que haya dado motivo al juicio de Policía. Estas resoluciones, cuando sean aceptadas por todas las partes, tendrán el carácter de definitivas y permanentes. **La resolución definitiva y permanente en materia de servidumbres rurales y urbanas y de juicios posesorios, corresponde al Poder Judicial, cuando las partes no se conformen con la Policía; pero la de ésta se cumplirá en tanto el Poder Judicial no la revoque.** (La Corte resalta).
>
> "Artículo 1744. **No es permitido poner bajo cerca** la parte de los ríos, arroyos y quebradas, ni los pozos o fuentes que sirvan de abrevaderos o para proveerse de agua los vecinos de una localidad, a menos que puedan reemplazarse cómodamente por otros de igual condición, a costa del que pretenda utilizarlos y a juicio de la autoridad política de la Provincia, fundada en el dictamen de peritos; **ni las vías públicas y lugares que den acceso a ellas, o donde la construcción de la cerca perjudique a la comodidad y ornato de la población o caserío.**" (La Corte Subraya).

Tal como se establece en las disposiciones pretranscritas, las resoluciones de policía en materia de servidumbres no son definitivas ya que esta potestad es esencialmente del poder judicial y específicamente de la justicia ordinaria.

Las contiendas sobre servidumbres se surtirán ante la mencionada justicia ordinaria a través del proceso sumario, tal como lo preceptúa el artículo 1335 numeral primero del Código Judicial, y los artículos 1343, 1344, 1345 y 258 numeral 5 de la misma excerta legal.

Frente a las circunstancias puestas de relieve, se colige que efectivamente la Demanda de plena jurisdicción descrita en párrafos superiores no debe ser admitida por esta Sala de la Corte, ya que el acto impugnado se enmarca dentro del carácter de policía civil, cuya competencia corresponde a la justicia ordinaria en caso de inconformidad de alguna de las partes con lo resuelto.

Siendo ello así, es evidente que a tenor del artículo 28 numeral 2 de la Ley 135 de 1943, es dable acceder a la petición de la recurrente, debido a que la Sala Tercera carece de competencia para decidir sobre estas controversias.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 16 de noviembre de 1994, DECLARAN QUE NO ADMITEN la Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción presentada por el licenciado Tomás Tristán Barrios actuando en

representación de CRISTINO CORRALES.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE COTTER & COMPANY PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 261 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1990, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, actuando en nombre y representación de **COTTER & COMPANY**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 261 de 13 de septiembre de 1990, dictada por la Directora General de Comercio Interior, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Mediante la Resolución impugnada se resuelve **NEGAR** las demandas de cancelación de registros de la marca de fábrica **TRUE VALUE**, certificados N° 030753, 030754 y 030758, promovidas por la sociedad **COTTER & COMPANY** en contra de la sociedad **GIGANTE, S. A.**

Admitida la demanda se corrió traslado al señor Procurador de la Administración, y se le solicitó a la funcionaria demandada que rindiera el informe explicativo de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

En su informe de conducta la Directora General de Comercio Interior expuso lo siguiente:

> "...
> Mediante Resolución N° 261 de 13 de septiembre de 1990, esta Dirección General de Comercio Interior resolvió negar las demandas de cancelación de los registros de la marca de fábrica TRUE VALUE, básicamente en virtud de que, a criterio de esta Autoridad, en el juicio de cancelación correspondiente, no existía la legitimación pasiva toda vez que la demandada, GIGANTE, S. A., tal como fue probado en el proceso, no es la propietaria, de los certificados de registro impugnados por la parte actora.
>
> En tal sentido, el funcionario de segundo instancia, mediante Resolución N° 124 de 4 de septiembre de 1991, al confirmar en todas sus partes la Resolución N° 261 en comento, comparte el criterio que sustentó la decisión adoptada en primera instancia, sustentando, entre otras cosas, que en el caso que nos ocupa no se llegó a integrar nunca la relación procesal, toda vez que fue probado plenamente en el expediente que los certificados de registro cuya cancelación se demandó no pertenecen a GIGANTE, S. A., sino a la sociedad PLASTIC WORLD, S. A."

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La parte demandante estima violados por los actos administrativos

impugnados en concepto de violación directa, por omisión, los artículos 199 numerales 10) y 11), 685, 667, 1136, 722 numeral 5 y 601 del Código Judicial; los artículos 14 literal e) y 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939; y el artículo 3 de la Ley N° 64 de 28 de diciembre de 1934.

Los artículos del Código Judicial que estima la parte actora como violados, son del siguiente tenor literal:

"Artículo 199: Son deberes en general de los Magistrados y Jueces:

10. Ejercer de oficio las funciones de saneamiento previstas en este Código;

11. Disponer de oficio las diligencias conducentes a evitar nulidades procesales, a conformar adecuadamente el litis consorcio necesario y eliminar los otros motivos de sentencias inhibitorias".

Artículo 685: El Juez deberá determinar, vencido el término de traslado de la contestación de la demanda, si la relación procesal adolece de algún defecto o vicio que, de no ser saneado, producirá un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso.

En tal supuesto, el juez ordenará a la parte corrija su escrito, aclare los hechos o las pretensiones, que se cite de oficio a las personas que deban integrar el contradictorio en casos de litis consorcio, que se escoja la pretensión en casos en que se haya de seguir procedimientos de distinta naturaleza, que se integre debidamente la relación procesal o que se le imprima al proceso el trámite correspondiente en caso de que se haya escogido otro o cualquiera otra media necesaria para su saneamiento.

Si el demandante no cumpliere con lo ordenado por el Juez dentro del término de cinco (5) días, se decretará el archivo del expediente, levantando las medidas cautelares y se condenará en costas. Si debe intervenir el Ministerio Público bastará que el Juez le de el curso respectivo.

En caso de que se decrete saneamiento la respectiva resolución será únicamente susceptible de recurso de apelación, el cual se concederá en el efecto suspensivo.

Artículo 667: Cuando la demanda recaiga sobre actos o relaciones jurídicas a cuya formación hayan contribuido varias personas, o que por su naturaleza o por disposición legal no sea posible resolver en el fondo sin que al proceso comparezcan las personas que intervinieron en dichos actos o relaciones, la demanda deberá promoverse o dirigirse en contra de todas ellas.

En caso de que el demandante no promueva la demanda con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Juez, de oficio o a solicitud del demandado, ordenará la corrección de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título V de este Libro sobre saneamiento.

Artículo 1136: Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las actuaciones y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso. En caso de que sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al Juez del conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que imponga si hubiere mérito.

> Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requiere este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que éste indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente.
>
> Artículo 722: Son causales de nulidad comunes a todos los procesos:
>
> 5. La falta de notificación o emplazamiento de las personas que deban ser citadas como parte aunque no sean determinadas o de aquellas que hayan de suceder en el proceso o cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordene expresamente.
>
> Artículo 601: El cesionario o el adquirente por acto entre vivos de la cosa o el derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del enajenante o cedente. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.
>
> El auto que admita o rechace a un sucesor procesal es apelable en el efecto devolutivo.

Con relación al artículo 199 numerales 10 y 11 del Código Judicial el demandante considera que el mismo ha sido infringido por la Directora General de Comercio Interior, porque si en el presente juicio existía algún defecto procesal, la obligación de dicha funcionaria era tomar las medidas tendientes a evitar fallos inhibitorios, procediendo para ello a sanear faltas o defectos en el momento oportuno.

El demandante explica el concepto de la violación del artículo 685 manifestando, que dicho artículo "exige al funcionario determinar si hay o no defecto en la relación procesal y, en caso afirmativo, que ordene la corrección de dicho defecto, señalando el procedimiento para ello" (fs. 30), por lo tanto, en opinión del demandante la funcionaria de primera instancia debió, si consideraba que existía algún defecto en la relación procesal, ordenar que se saneara dicho defecto dentro del término del traslado de las contestaciones de las demandas, antes de proseguir con el trámite del proceso.

En relación al artículo 667 del Código Judicial, que le impone al Juzgador el deber de sanear el proceso de manera que comparezcan todas las partes cuya presencia sea requisito para resolver en el fondo de la controversia, el demandante consideró que "la Directora General de Comercio Interior estaba obligada a aplicar dicha norma al presente caso, a objeto de integrar a PLASTIC WORLD, INC., al proceso y de esa forma resolver el fondo de las demandas de cancelación contra las marcas TRUE VALUE" (fs. 31). Con respecto a la violación del artículo 1136 ibídem, el recurrente manifestó que le correspondía al señor Ministro de Comercio e Industrias adoptar las medidas de saneamiento que la ley le otorga a fin de corregir el defecto de la relación procesal dentro del caso que nos ocupa, y así poder evitar una sentencia inhibitoria.

A su vez, el artículo 722 numeral 5 del Código Judicial ha sido violado, porque "la omisión de esta notificación ha causado indefensión a PLASTIC WORLD, INC., quien no tuvo la oportunidad de comparecer al proceso para hacer valer sus derechos dentro del mismo; y también, dicha omisión ha ocasionado un estado de indefensión en perjuicio de nuestra representada, COTTER & COMPANY, en la medida en que ésta no ha podido hacer valer sus derechos respecto de la propietaria de los registros de las marcas de fábrica cuya cancelación se solicita" (fs. 34).

El demandante señala también como infringido el artículo 601 ibídem, en el sentido de que, "PLASTIC WORLD, INC., debió ser integrada al proceso, porque, además de todas las razones antes explicadas, respecto del Certificado de Registro de la Marca de Fábrica "TRUE VALUE" No. 030753, **existía entre GIGANTE, S. A., y PLASTIC WORLD, INC., un litis consorcio de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 601 del Código Judicial**". (Fs. 35).

El actor señala también como infringidos los artículos 14 literal e) y 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, los cuales son del siguiente tenor:

> "Artículo 14: No podrán registrarse marcas de fábrica que se encuentren en los siguientes casos:
>
> f) Las Marcas de Fábrica que sean idénticas a otra marca registrada o conocida y usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales o similares o de las mismas propiedades de los que se desea amparar con la nueva marca".
>
> Artículo 15: La persona natural o jurídica que primero haya hecho uso de una Marca de Fábrica en el país, es la única que tiene derecho a registrar tal Marca de Fábrica, en el país aún cuando esa persona esté domiciliada en el exterior. La persona natural o jurídica que haya registrado una Marca de fábrica en el exterior, es la única persona que tiene derecho a registrar la Marca de Fábrica en el país, como marca extranjera".

El demandante manifiesta con respecto a la primera norma, que al dictarse los actos administrativos impugnados se ha infringido el precitado artículo 14 Del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939, porque la marca **TRUE VALUE** ha sido previamente registrada en los Estados Unidos y usada con mucha anterioridad en Panamá y en el comercio internacional por la sociedad **COTTER & COMPANY**; y además, la marca **TRUE VALUE** registrada por la sociedad **GIGANTE, S. A.**, es idéntica a los productos registrados por la sociedad demandante. En cuanto al segundo artículo manifestó que las resoluciones atacadas desconocen los derechos exclusivos que tiene la sociedad **COTTER & COMPANY** sobre la marca de fábrica **TRUE VALUE** porque dicha marca ha sido usada y registrada en los Estados Unidos desde 1980 y 1981 respectivamente.

Por último se considera infringido el artículo 3 de la Ley N° 64 de 1939 cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 3: Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.
>
> Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:
>
> 1. Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.
>
> 2. Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique lo pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.
>
> Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.
>
> 3. Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público.

4. Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5. Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distintos al de origen de la marca.

6. Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases o nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás contratantes".

El demandante señala con relación a la norma antes citada, que la misma fue infringida desde el momento que mediante un fallo inhibitorio, se negaron las demandas de cancelación de los registros de las marcas de **TRUE VALUE** interpuestas por la sociedad demandante contra la sociedad **GIGANTE, S. A.**, porque conforme a derecho lo procedente era conocer el fondo de dichas demandas, ordenando la cancelación de los registros de las marcas **TRUE VALUE.**

El señor Procurador de la Administración, por su parte, al contestar la demanda mediante su Vista Fiscal N° 495 de 24 de septiembre de 1992, manifestó su conformidad con el criterio adoptado por el demandante, toda vez que corresponde a la Directora de Comercio Interior y al señor Ministro de Comercio e Industrias, "como jueces encargados de dirimir la controversia de la marca en conflicto, ejercer de oficio las funciones de saneamiento por algún defecto o vicio que por no sanearse pudiera producir un fallo inhibitorio" (fs. 60). Esta deficiencia continúa explicando el señor Procurador, era de conocimiento de la Directora General de Comercio Interior, puesto que dicha situación fue resaltada por el recurrente, y le correspondía a dicha funcionaria, la corrección de la demanda a fin de continuar el trámite correspondiente.

OPINIÓN DE LA SALA

Evacuados los trámites de Ley, y encontrándose el negocio en estado de resolver la Magistrada Sustanciadora considera que si bien el objeto de la presente demanda ha desaparecido del mundo jurídico después de presentarse la demanda, no ha desaparecido el objeto del proceso. Esto es así porque el demandante pretende que se cancele los certificados de registro de la marca TRUE VALUE números 030753, 030754 y 030758 expedidos a favor de la sociedad GIGANTE, S. A., y estos certificados fueron cancelados mediante sentencia de 18 de enero de 1996, dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró **LEGAL** la Resolución N° 166 de 11 de diciembre de 1991, expedida por la Directora General de Comercio Interior, en la que se negó la cancelación de la marca **TRUE VALUE** certificados de registro N° 047105, y N° 047106, N° 047137, N° 047108, y No. 047104 expedidos a favor de **COTTER AND COMPANY**, y se **ORDENÓ** la cancelación de los certificados de registro No. 030753, N° 030754, N° 030758 de 30 de marzo de 1983, expedidos a favor de la sociedad **GIGANTE, S. A.** Al ejecutoriarse esta sentencia la pretensión dejó de existir, sin embargo el objeto del proceso es la impugnación de la Resolución N° 261 de 13 de septiembre de 1990 que aún está vigente.

Por lo antes expuesto, la Sala debe pronunciarse sobre el fondo del presente proceso.

En la demanda se consideran infringidos varios artículos del Código Judicial, cargos que serán examinados conjuntamente por la Sala en virtud de su estrecha vinculación.

Como se indicó en los cargos de violación de estas disposiciones, el demandante las considera infringidas porque en las resoluciones acusadas de ilegales, la Directora de Comercio Interior y el señor Ministro de Comercio e Industrias, como jueces encargados de dirimir la controversia en la marca de

conflicto, debieron ejercer de oficio las funciones de saneamiento y corrección que por algún defecto tuvieran las demandas para poder evitar de esta manera un fallo inhibitorio, notificando a las personas que deban ser citadas como partes, como es el caso de la sociedad **PLASTIC WORLD, INC.**, puesto que a su parecer entre **GIGANTE, S. A.**, y **PLASTIC WORLD, INC**, existía un litis consorcio.

La Sala observa que, tal como lo estipulan los artículos del Código Judicial sobre la materia, el juez está obligado a llamar al juicio a las personas que hayan contribuido a la formación de los actos o relaciones jurídicas objeto del litigio, cuya comparecencia es necesaria para resolver en el fondo el proceso, pero en este caso, la sociedad **PLASTIC WORLD, INC.** no es parte interesada en el proceso, puesto que al serle traspasada la marca de fábrica en disputa, dicha sociedad se convirtió en única dueña, y no se da en el caso en estudio, como afirma la actora, un litis consorcio necesario. Si podrá darse un litisconsorcio voluntario, pero el mismo no obliga al funcionario del conocimiento a llamar como parte demandada al anterior dueño de la marca.

El jurista Eduardo Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil define el litisconsorcio en los siguientes términos: "Litisconsorcio, en general, es una de las modalidades del proceso que consiste en la pluralidad de actores o demandados. Por lo tanto, hay litisconsorcio, cuando varias personas ejercitan una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias, y cuando dos o más demandan a dos o más personas. También se produce el litisconsorcio en los casos de adhesión y de intervención. El litisconsorcio puede ser voluntario o necesario. Es voluntario si se lleva a cabo en uso de una facultad que otorgue la ley para promoverlo; es necesario u obligatorio, cuando el proceso no puede iniciarse validamente, sino en la forma de litisconsorcio porque las cuestiones jurídicas que en él se ventilan afectan a más de dos personas, de tal manera que no sea posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas". (Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, sexta edición, México, página 542).

En el caso bajo estudio, no existe litisconsorcio necesario ya que no hay pluralidad de partes en sentido material porque lo que se pretende en el proceso concierne a quien era propietario de la marca registrada **"TRUE VALUE"** cuando se inició el procedimiento y no a quien había sido su anterior propietario, cuya comparecencia no es necesaria para resolver el fondo del negocio.

La sociedad demandante no demandó al propietario de la marca y en ese caso tampoco procedía que el funcionario del conocimiento ordenara la corrección de la demanda porque en la misma se indicó, aunque erradamente el nombre de la parte demandada, tal como lo estipulan los numerales 1 y 4 del artículo 654 del Código Judicial, "1. Nombre y apellido de las partes, con expresión de la clase de proceso a que se refiere, puestos en el margen superior de la primera plana", y "Nombre y apellido del demandado, si es persona natural, y en otro caso, su nombre y el de su representante legal ...".

En cuanto a los cargos de violación de los artículos 14 literal e) y 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, y el artículo 3 de la Ley N° 64 de 1939, la Sala considera que no debe pronunciarse acerca de si han sido infringidos o no, porque en la resolución que se impugna no hubo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Como ya lo hemos manifestado la pretensión del demandante ha desaparecido del mundo jurídico, porque en sentencia de 18 de enero de 1996, esta Sala resolvió CANCELAR los certificados de registro N° 030753, 030754 y 030758 expedidos a favor de Gigante, S. A. cuya cancelación se pretendía mediante el presente proceso. (Cfr. sentencia de 18 de enero de 1996, emitida por la Sala Tercera en la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Vásquez y Vásquez, actuando en nombre y representación de la sociedad **PLASTIC WORLD, INC.**, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 166 de 11 de diciembre de 1991, expedida por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias).

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 261 de 13 de septiembre de 1990, dictada por la Directora

General de Comercio Interior Y NIEGA el resto de las declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA NURCY PERALTA NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN CASTRO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO N° 552 DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Nurcy Peralta Núñez, actuando en nombre y representación de SEBASTIÁN CASTRO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos 1 y 2 del Decreto N° 552 de 31 de octubre de 1995, dictado por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

En su demanda la licenciada Peralta solicitó a la Sala la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, alegando de que los actos acusados le causaron, le causan y le continuarán causando graves e irreparables perjuicios pecuniarios a su representado. Agrega que, los actos causados desconocieron la estabilidad del señor Sebastián Castro durante el período de su asignación, sin que los mismos se fundaran en razones de competencia, lealtad y moralidad en el servicio por parte del recurrente.

A foja 14 la licenciada Nurcy Peralta afirma que los actos acusados violan "el numeral 18 del único inciso del artículo 629, los artículos 794 y 211o (modificado este último por el artículo 1° de la Ley 53 de 1961) del Código Administrativo; los artículos 12 y 36 del Código Civil; el artículo 1°, los párrafos donde se definen los términos "Destitución", "Competencia", "Lealtad" y "Moralidad", en el glosario de términos contenidos en el artículo 2 y los artículos 5 y 197 de la Ley N° 9, de 20 de junio de 1994 (G. O. N° 22,562 de 21 de junio de 1994)".

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición demandada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Dentro de los requisitos establecidos por la doctrina y la jurisprudencia para que sea viable la aludida medida, se encuentra la existencia de un perjuicio notoriamente grave (**periculum in mora**) de difícil o imposible reparación y la apariencia de buen derecho (**fumus bonus iuris**) a favor del demandante. Se trata sin duda de requisitos de evidente vinculación, porque aún cuando del acto o resolución acusada puedan derivarse determinados perjuicios en detrimento del demandante, la suspensión provisional de sus efectos procedería siempre que el mismo sea ostensiblemente ilegal.

En el presente caso la Sala considera que aún cuando la medida cautelar solicitada está permitida en las acciones referentes al personal nombrado por período fijo, del examen preliminar que se ha hecho de los cargos para resolver la solicitud de suspensión provisional no se desprende, prima facie, violaciones

manifiestas o evidentes a las normas que se cita como violadas en la demanda. Esto es así porque los problemas jurídicos planteados por la licenciada Peralta al exponer el concepto en que el acto impugnado viola diversas disposiciones del Código Administrativo, cuya vigencia cuestiona al examinarlas a la luz de algunas normas de la Constitución Nacional, no pueden ser examinados en esta etapa del proceso, ya que ello corresponde hacerlo en el momento en que se resuelva el fondo de la presente controversia.

Reiteradamente la Sala ha expresado, que para que proceda la medida cautelar requerida es necesario que concurran, entre otros requisitos, la apariencia del buen derecho a favor del demandante, lo que significa que las violaciones al ordenamiento jurídico que se alega deben ser claras, evidentes o notorias. Tal fue el criterio seguido por la Sala en su fallo de 17 de noviembre de 1993 (Véase el Registro Judicial de noviembre de 1993, págs. 144-145), en el que se negó la solicitud de suspensión provisional hecha por un funcionario público nombrado para un período fijo, por considerar que a favor del mismo no existía, a prima facie, la apariencia de un buen derecho.

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados hecha por la licenciada Nurcy Peralta Núñez, en nombre y representación de SEBASTIÁN CASTRO.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MAXIMINO ALEJANDRO HIDALGO ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME ALBERTO MITROTI QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 60 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1994, PROFERIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Maximino Alejandro Hidalgo Alvarado, actuando en nombre y representación de **JAIME ALBERTO MITROTI**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 60 de 2 de septiembre de 1994, proferida por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

La parte actora solicita además el pago de los salarios, gastos de representación y demás remuneraciones dejadas de percibir a causa de la remoción ilegal de que fue objeto.

Por medio del acto impugnado, el Consejo Municipal de Panamá resolvió nombrar Secretario General del Consejo Municipal, para el período que se inició el 2 de septiembre de 1994 y que termina el 31 de agosto de 1999, al señor Alcibiades Vásquez Velásquez con cédula de identidad personal N° 7-99-689.

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 262 de 26 de junio de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 88-95); además, se solicitó al Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Panamá que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33

de 1946, lo que hizo oportunamente. (Fs. 84-87).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 29 de la Ley N° 106 de 1973; 10 y 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 27 de marzo de 1979, por el cual se dicta el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Panamá; el artículo 210 del Código Electoral y 70 de la Constitución Nacional.

En cuanto a este último cargo de violación, la Sala comparte el criterio de la señora Procuradora de la Administración, en el sentido de que es improcedente el examen de la violación del artículo 70 de la Constitución Nacional porque ante la jurisdicción contencioso administrativa no es posible el examen de la constitucionalidad del acto administrativo impugnado, toda vez que es competencia privativa del pleno de la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución.

El tenor literal de las normas que el demandante estima violadas es el siguiente:

Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 12 de diciembre de 1984.

"**Artículo 29.** Los Secretarios de los Consejos Municipales tendrán un período de cinco (5) años y sólo podrán ser destituídos por la Corporación respectiva en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de sus deberes, competencia y lealtad como servidores públicos;
2. Condena por falta cometida en el ejercicio de sus funciones o por delito común; y
3. Mala conducta en el ejercicio de sus funciones.

El Reglamento Interno de los Consejos Municipales establecerá el procedimiento para la comprobación de los hechos y la determinación de las responsabilidades de los servidores públicos mencionados."

Acuerdo Municipal N° 8 de 27 de marzo de 1979, "Por el cual se dicta el Reglamento Interno del Consejo Municipal".

ARTÍCULO 10. Los Funcionarios Municipales a saber: Tesorero Municipal, Ingeniero Municipal, Abogado Consultor del Consejo, Secretario General y Sub-Secretario General, sólo podrán ser destituído de sus cargos por el Consejo, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de sus deberes como servidores públicos;
2. Condena por falta cometida en el ejercicio de sus funciones o por delito común, fundada en sentencia ejecutoriada dictada por las autoridades judiciales competentes;
3. Mala conducta.

Las acusaciones o denuncias contra los funcionarios en mención, basada e algunos de los casos señalados en el ORDINAL 1° y 3°, corresponderán a una Comisión Judicial nombrada para tal efecto por el Consejo, la cual deberá rendir un informe en un plazo no mayor de 30 días calendarios.

Una vez rendido el informe de la Comisión, el Consejo decidirá por el voto secreto de dos terceras partes (2/3) de sus miembros la destitución. ...

ARTÍCULO 57. Cuando el Concejo haya de elegir nuevos dignatarios, miembros de Comisiones y Funcionarios Municipales, señalará la fecha en que se verificará la elección por medio de una resolución aprobada en Sesión Ordinaria por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha señalada para su elección."

Código Electoral

"**ARTÍCULO 210**. Ninguna persona que opte a cargo de representación popular podrá ser despedida, trasladada o desmejorada en cualquier forma de su cargo o puesto de trabajo, público o privado, desde el momento de su postulación hasta tres (3) meses después del cierre del proceso electoral. El Tribunal Electoral garantizará el cumplimiento de la presente norma. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio del despido fundado en causa justificada, autorizada conforme al procedimiento fijado para el fuero sindical, en el caso de trabajadores amparados por el Código de Trabajo; o previa autorización del Tribunal Electoral, en el caso de servidores públicos.

El Tribunal Electoral levantará un registro de las candidaturas y estará obligado a dar certificación de las candidaturas, cuando le sean requeridas por los particulares o por los propios partidos políticos.

El despido sin el cumplimiento de los requisitos anteriores da derecho a reclamar el reintegro ante los Tribunales de Trabajo o ante el Tribunal Electoral según se trate respectivamente, de trabajadores amparados por el Código de Trabajo o de servidores públicos. El reintegro deberá solicitarse dentro de los sesenta días calendario siguientes a la notificación del despido o a la fecha en que se dejó de asistir al trabajo, sino mediase notificación escrita. De proceder al reintegro del trabajador o del servidor público, éstos tendrán derecho al pago de los salarios caídos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los delegados electorales, por el mismo período."

Al exponer el concepto de la infracción de las normas citadas el demandante indicó que las mismas se han violado por omisión, ya que el Consejo Municipal no respetó el nombramiento del señor **MITROTI** como Secretario General del Consejo Municipal de Panamá quien le correspondía ejercer el cargo por cinco (5) años contados desde el 20 de octubre de 1992, fecha de su designación, hasta el 20 de octubre de 1997; que las únicas causales por las que podía ser destituído el demandante, las consagran los artículos 29 de la Ley N° 106 de 1973 y 10 del Acuerdo Municipal N° 8 de 1979; y que no se le instruyó ningún proceso disciplinario tendiente a comprobar estos hechos, a pesar de lo cual fue removido de su cargo de Secretario General del Concejo, lo que en términos prácticos equivale a una destitución. Agrega el demandante, que la elección del licenciado Alcibiades Vásquez Velásquez como nuevo Secretario General del Consejo, fue hecha en la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 de la Ley 106 de 1973, el 2 de septiembre de 1994, por lo que la convocatoria a esa elección no cumplió con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 1979. Al referirse al Acuerdo Municipal N° 8, el recurrente señala que el mismo fue debidamente promulgado conforme el artículo 39 de la Ley 106 de 1973, porque se fijó en las tablillas ubicadas en la Secretaria del Concejo por los diez días calendarios exigidos.

A estos cargos se opuso la señora Procuradora de la Administración expresando en relación con el cargo de violación del artículo 29 de la Ley N° 106 de 1973, lo siguiente:

"El acto de elección del Licenciado MITROTI QUINTERO como Secretario General del Consejo Municipal, tuvo lugar al producirse la destitución del señor MOISÉS JOEL BARTLETT el día 13 de octubre de 1992 (ver prueba adjunta), quien había asumido el cargo el 3 de abril de 1990, al instalarse el Consejo Municipal cuyos miembros habían sido electos el 7 de mayo de 1989, para el período comprendido del 2 de septiembre de 1989 al 31 de agosto de 1994.

Es conveniente comentar que, por razón de la anulación de las

> elecciones de 1989 y la invasión militar de diciembre del mismo año, el período constitucional de gobierno se vio trastocado, y ello trajo consigo la retrasada instalación del Consejo Municipal el día 1° de abril de 1990, es decir, siete (7) meses más tarde de lo ordenado en el artículo 30 de la Ley 106 de 1973.
>
> La legislación del Régimen Municipal -Ley 106 de 1973- prevee la eventualidad, de que el Consejo Municipal no pudiera instalarse en la fecha indicada. Al efecto, en forma diáfana expresa que: "En este caso la nueva Directiva desempeñará sus funciones por el resto del período respectivo" (ver art. 31).
>
> Por disposición expresa del artículo 29 de la Ley 106 de 1973 -considerado infringido-el período en el cargo del Secretario General del Consejo Municipal es de cinco (5) años. De tal forma, que en estricto derecho el período del anterior Consejo, debió comprender del 2 de septiembre de 1989 al 31 de agosto de 1994. Sin embargo, la situación fue distinta y la Junta Directiva del Consejo Municipal, inició su período el 1° de abril de 1990.
>
> Al elegir el Consejo Municipal a su Secretario General el día 3 de abril de 1990, se entiende -como bien lo expresa el artículo 31 de la Ley 106 de 1973, en su parte final- que este servidor público ejercerá sus funciones por el resto del período respectivo; es decir, por el período que concluía el 31 de agosto de 1994. En otras palabras, cuando se produjo el 13 de octubre de 1992 la destitución del señor BARTLETT, el Consejo Municipal realizó una nueva elección para llenar la vacante, por el resto del período. De ninguna manera debe entenderse que la elección del nuevo Secretario General significaba o determinaba el inicio de un nuevo período de cinco (5) años, como pretende hacer ver el demandante."

En cuanto al cargo de violación de los artículos 10 y 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 1979, señala la señora Procuradora de la Administración que en la fecha en que se emitió el acto acusado dicho Acuerdo no había sido publicado, y por tanto no tenía eficacia jurídica. En cuanto al cargo de violación del artículo 210 del Código Electoral, señala que el mismo no se aplica al caso que nos ocupa, porque la norma se refiere expresamente al despido, mientras que al señor **JAIME MITROTI** se le venció el período para el cual había sido nombrado, como lo expresa el Tribunal Electoral en sus Resoluciones N° 286 de 10 de octubre de 1994 y N° 11 de 31 de enero de 1995. Agrega que, es "conveniente anotar además, que la extinción de la relación de empleo público, en el caso particular del Secretario del Consejo Municipal se produce "ipso jure", de pleno derecho, en forma automática, el mismo día de vencimiento de plazo. De allí podemos colegir que la permanencia en este cargo más allá de su vencimiento, por el Secretario General, implica el delito de usurpación de funciones públicas." (Fs. 94).

En cuanto al artículo 210 del Código Electoral, esta Superioridad desea advertir que no corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo conocer de las infracciones a esta norma, cuyo cumplimiento deberá garantizar el Tribunal Electoral. Además consta que esta pretensión ya fue resuelta por el Tribunal competente mediante las Resoluciones N° 286 de 10 de octubre de 1994, emitida por los Magistrados del Tribunal Electoral y N° 11 de 31 de enero de 1995, de la Sala de Acuerdos N° 2, en las que se resolvió negar "la solicitud presentada por el señor **JAIME ALBERTO MITROTI QUINTERO**, para que sea reintegrado al puesto de Secretario General del Consejo Municipal del Distrito de Panamá". (Fs. 79 a 82).

A continuación los Magistrados de la Sala proceden a analizar conjuntamente los cargos de violación de los artículos 29 de la Ley N° 106 de 1973 y 10 y 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 27 de marzo de 1979. El artículo 29 dispone que los Secretarios de los Consejos tendrán un período de cinco (5) años y que sólo podrán ser destituidos por alguna de las tres causales que señala esa norma. Esta disposición la reproduce el artículo 10 del Acuerdo Municipal, señalando además el procedimiento que debe seguirse en estos casos.

A juicio de la Sala, es importante examinar las circunstancias en que fue nombrado el señor **JAIME MITROTI** como Secretario General del Consejo Municipal de Panamá y las razones por las que fue dictado el acto impugnado, a fin de poder resolver el caso que nos ocupa e interpretar el sentido y alcance de los artículos que se cita como violados.

Tal como lo afirma la autoridad demandada el señor **Moisés Joel Bartlett** fue designado Secretario General del Consejo Municipal de Panamá desde el 1° de abril de 1990, mediante la Resolución N° 30 de 3 de abril de 1990, con la finalidad de llenar la vacante del cargo respectivo. (Fs. 49). Posteriormente, mediante la Resolución N° 58 de 13 de octubre de 1992, fue destituído el señor **Moisés Joel Bartlett** con base en las causales 1 y 3 del Artículo 10 del Reglamento Interno del Municipio, por existir suficientes pruebas que demostraban la falta de cumplimiento de sus deberes como servidor público. Como consecuencia de la destitución del señor **BARTLETT**, se designó al señor **MITROTI** Secretario General del Consejo Municipal de Panamá, mediante la Resolución N° 64 de 20 de octubre de 1992, y para hacer este nuevo nombramiento el Consejo Municipal dio cumplimiento al artículo 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 1979, el cual exige que por medio de Resolución aprobada en sesión ordinaria, se indique, con no menos de 48 horas de anticipación, la fecha en que se verificará la elección del nuevo dignatario (fs. 8-9).

Según consta en autos, el señor **MITROTI** fue designado Secretario General del Consejo Municipal de Panamá, a partir del 20 de octubre de 1992 (fs. 9), y el período del Consejo que lo eligió terminaba el 31 de agosto de 1994. El demandante alega que por haber iniciado su período como Secretario General el 20 de octubre de 1992, debe ejercer sus funciones hasta el 20 de octubre de 1997 (fs. 14). A juicio de la Sala, no le asiste la razón al demandante, porque el artículo 30 de la Ley N° 106 de 1973 modificada por la Ley N° 52 de 1984, preceptúa que los Consejos Municipales se instalan por derecho propio el 2 de septiembre siguiente a la elección de sus miembros, y ese día ejercerá el cargo de Presidente Interino el Concejal de mayor edad y el cargo de Secretario Interino lo ejercerá el más joven de los Concejales, y si por alguna razón falta algún principal, puede concurrir a la instalación su suplente. La sesión en la que fue nombrado el señor Alcibiades Vásquez Velásquez como Secretario General del Consejo, nombramiento impugnado en esta demanda, es justamente la sesión de instalación del Consejo Municipal que inició su período el 2 de septiembre de 1994 y que terminará su ejercicio el 31 de agosto de 1999 (fs. 51 y 65). En esta sesión de instalación ejerció funciones como Secretario interino el señor Nelson Vergara (fs. 52), tal como lo dispone la Ley, siendo el más joven de los Concejales electos, y en el Orden del Día aprobado se acordó elegir a todos los dignatarios del Consejo Municipal recién instalado: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Subsecretario.

Conforme el artículo 25 de la Ley N° 106 de 1973, cada Consejo Municipal tendrá: un Presidente designado por el Concejo, un Vice-presidente quien reemplazará al Presidente en sus ausencias y un Secretario que no será Concejal, y estos tres servidores públicos serán elegidos por el seno del Concejo. El día en que se instala un nuevo Consejo Municipal termina el período del Secretario anterior, e incluso en la sesión de instalación participa un nuevo Secretario, que en ese momento es interino, y corresponderá al Consejo elegir al nuevo Secretario y al resto de los dignatarios. Aunado a lo expresado, el artículo 792 del Código Administrativo, del Capítulo Tercero sobre el "Período de duración de los empleados", dispone lo siguiente: "Siempre que se haga una elección después de principiado un período, se entiende hecho sólo para el resto del período en curso." Adicionalmente, el artículo 31 de la Ley N° 106 de 1973 preceptúa que, cuando por cualquier motivo o circunstancia no pudiera instalarse un Consejo en la fecha indicada, continuará funcionando el Concejo del período anterior hasta que la instalación tuviere lugar; y "en este caso la nueva Directiva desempeñará sus funciones sólo por el resto del período respectivo". La única circunstancia por la cual la Junta Directiva de un Consejo continúa en funciones después de terminado su período está prevista en la Ley, y es el caso en que no pudiese instalarse el nuevo Consejo Municipal, y cuando ésto ocurre la junta directiva del nuevo Consejo que se ha instalado tarde, sólo ejerce sus funciones por el resto del período respectivo. Por tanto, no se han violado ni el artículo 29 de

la Ley N° 106 de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 1984, ni el artículo 10 del Acuerdo Municipal No. 8 de 1979, acto de carácter general que fue convalidado al publicarse en la Gaceta Oficial N° 22781 fechada el 12 de mayo de 1995.

Finalmente, en cuanto a la alegación del demandante de que no se cumplió con el artículo 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 1979, considera la Sala que con base en el análisis de las normas de la Ley N° 106 de 1973, a las que nos hemos referido, podemos concluir que la convocatoria exigida por el artículo 57, no se aplica al caso en que el Consejo Municipal se está instalando de pleno derecho, acto en el cual los nuevos Concejales electos tienen pleno derecho de postular y elegir los dignatarios que ejercerán las funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario, por los períodos correspondientes.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 60 de 2 de septiembre de 1994, proferida por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL RODRÍGUEZ C., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 124 DE 29 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista Fiscal N° 545 de 21 de diciembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 20 de noviembre de 1995, por la cual se admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, promovida por el licenciado Roberto Enrique Fuentes, en representación de ÁNGEL E. RODRÍGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, la negativa tácita por silencio administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

De acuerdo a la señora Procuradora de la Administración, la demanda presentada no debe admitirse porque el recurrente no llenó las formalidades legales indispensables para la admisión de este tipo de proceso. Esto es así, porque "La jurisprudencia de la Sala Tercera, al momento de interpretar el artículo 46 de la Ley Contencioso Administrativa ha decantado uno de los requisitos formales que deben cumplir las demandas contencioso administrativas, al señalar que quien plantea una demanda de Plena Jurisdicción debe solicitar al Magistrado que sustancia la causa, que le requiera a la autoridad administrativa demandada, la certificación referente a la decisión del recurso interpuesto (en el actual caso, de reconsideración), o si por el contrario, existe silencio administrativo. Esto es, que si bien puede probar, el demandante que requirió al Ente de la Administración, una certificación sí sobre su recurso de reconsideración hay una resolución; ha debido solicitarle al Magistrado Ponente del caso, que requiere dicha certificación. Esto es así por una razón elemental: los Magistrados deben saber con certeza, si efectivamente, el demandante ha agotado la vía gubernativa; y por ello, deben contar con la constancia de que se

ha producido el silencio administrativo por falta de resolución formal, en la que se decide el recurso de reconsideración". (Fs. 38-39).

A este recurso se opuso oportunamente el apoderado judicial de la parte actora quien alegó, que la Procuraduría de la Administración dejó de observar que "en la página 6 de su recurso de plena jurisdicción, en el punto referente a la "pruebas", pedimos a la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se sirva solicitar al Ministerio de Hacienda y Tesoro, previa la admisión de la demanda, la correspondiente contestación a la solicitud de certificación que presentó mi representado el 6 de noviembre del año pasado, y que tenía como finalidad comprobar el **silencio administrativo** respecto a la resolución de un recurso de reconsideración que ante este Ministerio había promovido mi representado". (Fs. 47-48).

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

La Sala ha expresado reiteradamente que para ocurrir a la Sala es necesario acompañar la demanda con la prueba de que se ha agotado la vía gubernativa, que es uno de los presupuestos procesales de las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción como la que nos ocupa, y en caso de que ésta prueba haya sido pedida y el funcionario que expidió el acto no la hubiere expedido, deberá presentarse esa petición negada y solicitarse al Magistrado Sustanciador que requiera a ese funcionario la prueba negada, antes de admitir la demanda.

En el caso en estudio el demandante solicitó la certificación necesaria para establecer que se había producido el silencio administrativo (foja 24) y solicitó al Magistrado Sustanciador que solicitara antes de admitir la demanda, al Ministerio de Hacienda y Tesoro que extendiera la certificación pedida (fojas 5 y 6).

La demanda fue admitida sin requerir esta prueba al funcionario demandado y este, al rendir su informe de conducta manifiesta que el recurso de reconsideración fue decidido mediante Resolución N° 125 de 12 de agosto de 1995 confirmando el Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio de 1995, que es el acto impugnado. Además, informó el señor Ministro que la resolución confirmatoria está pendiente de notificación.

Por tanto, en el presente proceso, se ha probado que se agotó la vía gubernativa y que la acción fue interpuesta oportunamente. Ante estos hechos, el resto de los Magistrados de la Sala deben confirmar el auto que admite la demanda.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la providencia 20 de noviembre de 1995, mediante la cual SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Roberto Enrique Fuentes, en representación de ÁNGEL E. RODRÍGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ

CASTEBLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Norberto Castillo, actuando en nombre y representación de RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTEBLANCO, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 14 de diciembre de 1995, dictada por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual **no se admite** la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

En dicha resolución el Magistrado Sustanciador consideró lo siguiente:

> "La parte actora no ha aportado el acto acusado de ilegal que consiste en el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, el cual debe estar debidamente autenticado, tal como lo exigen los artículos 44 y 45 de la Ley 135 de 1943 ...
>
> Ya la Sala ha manifestado reiteradamente la importancia de aportar debidamente autenticado el acto que se acusa de ilegal, y en caso de que le imposibilite obtener la documentación requerida previa comprobación de que se llevaron a cabo las correspondientes diligencias para su consecución, el interesado dentro de la demanda, expondrá el hecho y solicitará al Magistrado sustanciador, que éste requiera a la oficina respectiva el documento que es motivo de controversia".

La apelante fundamenta su petición alegando que, si bien es cierto la demanda no fue acompañada con copia del Decreto Ejecutivo N° 204, de 14 de agosto de 1995, esto fue porque el acto impugnado jamás ha sido notificado en debida forma al señor DÍAZ CASTEBLANCO y mucho menos se le ha entregado copia del mismo; sin embargo, "la omisión de acompañar el acto impugnado a la demanda lo previó el Legislador dándole a esta situación un carácter de remediable", permitiendo que se subsane cuando ello se anuncia en la demanda y se informa en la misma donde está el original, a efecto de que el Sustanciador la solicite, antes de entrar a decidir sobre la admisión o no de la misma. Afirma el demandante que esa advertencia y señalamiento se hizo en la Demanda, cuando en el aparte probatorio expuso:

> PRUEBAS. Se adjunta.
>
> ... 14 de agosto de 1995. Adicional a esta documentación y en consideración a que a mi Mandante se le ha negado personalmente la posibilidad de autenticar la documentación arriba relacionada, así como de obtener otras, solicito al Honorable Magistrado requerir del Ministerio de Educación el envío de sendas copias autenticadas de cada uno de estos documentos, DEL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DEL 14 DE AGOSTO DE 1995." (FS. 25-26).

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración, en la Vista Fiscal N° 52 de 25 de enero de 1996, manifiesta que el demandante no ha cumplido con el requisito de aportar copia del acto acusado, o con el requerimiento en caso de no haber obtenido copia del mismo, conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1946, omisión que causa la inadmisibilidad de la demanda, según abundante jurisprudencia de este tribunal colegiado.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes

consideraciones.

Del examen de los autos se desprende que si bien el demandante no aportó copia del acto impugnado, solicitó al Magistrado Sustanciador, después de indicar las pruebas que presentaba con la demanda, que requiriera al Ministerio de Educación, entre otras pruebas documentales, el envió de copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, que es el acto impugnado, porque se le había negado personalmente obtener este y otros documentos.

Si el Magistrado Sustanciador no se percató de la existencia de esta solicitud fue porque la misma no se hizo ni en la forma ni en el lugar adecuado.

A pesar de ello, a juicio del resto de los Magistrados de la Sala es procedente atender la petición hecha por el demandante, previa la revocatoria de la providencia dictada, tomando en consideración lo preceptuado en el artículo 469 del Código Judicial.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, REVOCAN la resolución de 14 de diciembre de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el doctor Norberto Castillo, en representación de RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTEBLANCO, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones, y ORDENAN que antes de admitir la demanda, por Secretaría se solicite al Ministro de Educación que, en el término de cinco (5) días, expida y envíe a la Sala copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS MANUEL MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELECTRÓNICA STANDARD, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, EL RESUELTO N° 408-93 DE 9 DE DICIEMBRE DE 1993, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Manuel Méndez, actuando en nombre y representación de la sociedad ELECTRÓNICA STANDARD, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 408-93 de 9 de diciembre de 1993, expedido por el Director General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones.

La parte actora pretende además, que la Sala declare que son nulas las resoluciones N° 189-93 de 27 de mayo de 1994, y la N° 19-94 de 14 de julio de 1994, dictadas por el Gerente General y por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones respectivamente, las cuales confirman la resolución originaria impugnada en el presente recurso, y que le sea adjudicada definitivamente la solicitud de precios N° 0206-93 para el suministro de un Analizador de Espectro Portable de Alto Rendimiento.

La demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración y se requirió un informe de conducta al funcionario demandando, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

La resolución demandada resolvió aceptar la recomendación del Comité Evaluador y adjudicar a la empresa EXECUTIVE MARKETING CORP. en forma definitiva, la Solicitud de Precios N° 0206-93 para el suministro de un Analizador de Espectro Portable de Alto Rendimiento por un monto total CIF de B/.39,500.00, más los impuestos de ITBM (5%) y el de introducción.

II. HECHOS DE LA DEMANDA

El apoderado judicial de la empresa demandante expresó en los hechos de su demanda lo siguiente:

"...

TERCERO: Mediante resolución N° 408-93 del 9 de Diciembre de 1993, emitida por el Director General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (I. N. T. E. L.), se adjudicó, de manera definitiva, la Solicitud de Precios N°.E-0206-93, antes mencionada, a la empresa EXECUTIVE MARKETING CORP.

CUARTO: Uno de los requisitos exigidos dentro de las descripciones del pliego de cargos es del tenor siguiente:

"El equipo debe ser portable, que opere con batería VCA e incluir maletín de transporte" (lo subrayado es nuestro).

QUINTO: Si bien es cierto, EXECUTIVE MARKETING CORP. presentó la oferta más económica para el Estado, esta no se ajustó a los requisitos exigidos dentro del pliego de cargos, ya que presentó en su propuesta ESTUCHE SUAVE DE VINYL, y el pliego de cargos exigía, claramente, maletín de transporte. (Lo subrayado es nuestro.)

SEXTO: Como podemos observar, la propuesta hecha por EXECUTIVE MARKETING CORP. tachó, de manera irregular, el pliego de cargos exigido para la presente solicitud de precios, alterando las palabras incluir maletín de trasporte, por las palabras incluye estuche suave de vinyl, con lo cual se aprecia claramente que la propuesta de EXECUTIVE MARKETING CORP. no se ajustó al pliego de cargos y además, de manera irregular, lo tachó. (Lo subrayado es nuestro). ..." (Fs. 48 y 49).

III. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN

Afirma la parte demandante que el acto impugnado viola, en forma directa por comisión, la parte pertinente del artículo 38 y el numeral 3 del artículo 47 ambos del Código Fiscal, los cuales son del siguiente tenor literal:

"Artículo 38: En los pliegos de cargos se consignarán necesariamente; ...

El Estado elaborará las Condiciones Generales y especificaciones técnicas de carácter general que sirvan de base en todas las licitaciones públicas, de acuerdo con el objeto del contrato de que se trate.

Estas especificaciones serán aprobadas por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y serán de obligatorio cumplimiento en todos los actos de licitación que celebren todas las instituciones y dependencias públicas, incluyendo en ellas las descentralizadas y municipales. ..."

"Artículo 47. En la celebración de la licitación se observarán las

siguientes reglas:
...
3. Cada propuesta será presentada en sobre cerrado, que contendrá la proposición ajustada al pliego de cargos, la fianza provisional, los documentos que se solicitan en el pliego de cargos o especificaciones, el precio propuesto y el certificado de idoneidad a que se refiere el artículo 40-A de este Código. ..."

La parte actora manifiesta que estas normas contentivas de los requisitos para la participación en licitaciones son aplicables a las solicitudes de precio. Considera además que el artículo 38 establece los parámetros generales de los pliegos de cargos e impone obligatoriamente el cumplimiento de estos requisitos que fueron desconocidos por el acto impugnado, en el cual se adjudicó una solicitud de precios a un proponente que no se ajustó al pliego de cargos y que al tacharlo de manera irregular, limitó los requisitos exigidos en él, haciendo ilegal la adjudicación. La parte actora señala que para la solicitud de precios N° E-0206-93 el I. N. TEL. presentó un pliego de cargos en donde se establecía que el proveedor debía cumplir con todas las condiciones especiales solicitadas en el formato, sin lo cual se rechazaría la oferta durante el período de evaluación, y que a pesar de ello, se adjudicó ilegalmente a un proponente que no cumplía con lo exigido.

Manifiesta el apoderado judicial de la empresa Electónica Standard, S. A. que el Artículo 47 del Código Fiscal exige que las propuestas se ajusten al pliego de cargos, confirmando lo establecido en el artículo 38 del Código Fiscal y lo especificado en el pliego de cargos entregado por el I. N. TEL. para la celebración de la solicitud de precios N° E-0206-93, por lo que la parte actora conceptúa la infracción de dicha norma expresando que "permitirle a un postor cotizar un artículo de inferior calidad y precio exigidos en los pliegos de cargos, representa, además de lo ilegal, poner a los demás postores en desventaja frente a su propuesta; limitando de esta manera la libre competencia y participación."

IV. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LA SALA

Con referencia a la alegada infracción de los artículos 38 y 47 numeral 3 del Código Fiscal, la Sala conceptúa que no le asiste la razón a la demandante porque la propuesta de la empresa EXECUTIVE MARKETING CORP. se ajustó a las especificaciones técnicas y generales exigidas en el pliego de cargos, tal como lo confirmó el Comité Evaluador encargado de analizar las propuestas presentadas por las diferentes empresas participantes en la Solicitud de precios N° E-0206-93, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 47 numeral 9 del Código Fiscal.

El artículo 47 del Código Fiscal establece que corresponde a la Comisión Evaluadora la evaluación de todas las propuestas, observar si las mismas cumplen los lineamientos establecidos en la Ley, los reglamentos y el pliego de cargos, que es el conjunto de información y documentos que se exigen antes de la celebración del Concurso, Licitación o Solicitud de precios respectivo, a los cuales deben ajustarse los participantes.

Al respecto del análisis hecho por el Comité Evaluador, la Sala observa que el funcionario demandado adjuntó al informe de conducta copia de documentos administrativos que sustentan dicho informe, entre los cuales se encuentra el "Resumen de Evaluación de Ofertas de Materiales Equipos y/o Herramientas" elaborado por el Comité de Evaluación del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, relativo a la solicitud de precios N° E-0206-93, en el cual se expresó lo siguiente:

"ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

EXECUTIVE MARKETING CORP.: Cumple con los solicitado por el INTEL. Su precio es 14.13% más bajo que el precio oficial.

ELECTRÓNICA STANDARD, S. A.: Cumple con lo solicitado por el INTEL.

Su precio es 13.27% más bajo que el precio oficial.

RADIO Y ANTENAS, S. A.: Cumple con lo solicitado por el INTEL. Su precio es 6.59% más bajo que el precio oficial.

ELECTRÓNICO BALBOA, S. A.: Cumple con lo solicitado por el INTEL. Su precio excede 3.91% el precio oficial.

RING RING CORPORATION: Cumple con lo solicitado por el INTEL. Su precio es 13.06% más bajo que el precio oficial.

THE C GROUP, INC.: Cumple con lo solicitado por el INTEL. Su precio es 13.04% más bajo que el precio oficial.

OBSERVACIÓN:

El precio oficial se obtuvo de la Solicitud de Compra N° 128711.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Por cumplir con lo solicitado por el INTEL, y ofrecer Mejor precio a la Institución **Recomendamos Adjudicar la Solicitud de Precios N° E0206-93 EXECUTIVE MARKETING CORP. por B/.39,500.00. ..."** (Fs. 8 y 9 expediente administrativo).

El Pliego de Cargos para la solicitud de precios N° E-0206-93, establece en la descripción del equipo que "debe ser portable, que opere con batería, VCA e **incluir maletín de transporte**" (el acentuado es de la Sala), pero no especifica qué material o qué forma debe tener el maletín de transporte, sino simplemente que el equipo pueda ser trasladado en él, o sea que el pliego de cargos no exige características específicas que deba reunir el maletín para transportar el equipo objeto de la solicitud de precios, y en virtud de que la empresa a la cual se le adjudicó la solicitud de precios N° E-206-93 proporcionó un maletín de transporte para el equipo, no se produjo la violación de las normas que señalan que las ofertas deben ceñirse al pliego de cargos.

Con relación a la afirmación de la demandante de que se limitó la libre competencia y participación de los demás postores, no le asiste la razón porque la Solicitud de Precios N° E-0206-93, fue debidamente convocada y se le dio oportunidad por igual a los posibles solicitantes para cumplir con los requisitos legales, entre los que están los requisitos expresados en el Pliego de Cargos, el cual claramente preceptúa entre las especificaciones del equipo que debe suministrarse un maletín de transporte.

La empresa a la cual se le adjudicó la solicitud de precios propuso un precio de B/.39,500.00 que es inferior al precio oficial determinado de B/.46,000.00, y B/.394.00 más bajo que el precio de Electrónica Standard, S. A.

Conforme al artículo 27 del Decreto N° 33 de 1985, el valor oficial estimado servirá de **referencia** a la Comisión para determinar si las propuestas admitidas son gravosas o riesgosas para el Estado, pero este es tan sólo uno de los factores que pueden incidir y son analizados al momento de evaluar las distintas ofertas, y en el presente caso la empresa favorecida no sólo ofreció el precio más económico para el Estado, sino que cumplió con los requisitos ordenados en el Pliego de Cargos, incluyendo el maletín de transporte para el equipo. En esta circunstancia, el artículo 49 del Código Fiscal al igual que el 29 de Decreto 33 de 1985, reservan al Estado la potestad de rechazar una o todas las propuestas o de **aceptar** la que más convenga a sus intereses.

En mérito de lo expuesto, la Sala considera que el resuelto impugnado no es violatorio de los artículos 38 ni 47 numeral 3 del Código Fiscal, que la parte actora considera infringidos, y así debe declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 408-93, 9 de diciembre de 1993, emitido por el Director General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERIC E. PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO JAVIER CHIU, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° DRH-539 DE 14 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric E. Prado, actuando en representación de FRANCISCO JAVIER CHIU, ha presentado recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 30 de noviembre de 1995, mediante la cual no se admite y se ordena el archivo de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Nota N° DRH-539 de 14 de junio de 1995, emitida por la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda en vista que la misma no cumple, a su juicio, con los requisitos necesarios para su admisión.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El licenciado Eric Prado Izquierdo, sustenta su apelación en los siguientes términos:

> "SEGUNDO: Con todo respeto discrepamos del criterio anterior ya que según nuestro humilde parecer al respecto la acción es viable toda vez que las solicitudes de certificación e impulso del recurso de RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO que reposan en el expediente, en forma de copia auténticas, muestran la inefectividad del precitado recurso por lo que el término se encuentra vigente, al momento de interponer la demanda, si tomamos en consideración la fecha consignadas en las referidas solicitudes de certificación e impulso."

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, consideran que no le asiste la razón a la parte actora, pues, la demanda que nos ocupa, ha sido interpuesta fuera del término legal correspondiente. Efectivamente, se observa que en el caso que nos ocupa, el término para concurrir ante esta Sala vencía el 21 de octubre de 1995, por lo que, al presentarse la presente demanda el 7 de noviembre de 1995, ha operado la prescripción de la acción, pues, ya había transcurrido en exceso el término de los dos meses que señala el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera

(Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 30 de noviembre de 1995 mediante el cual no se admite la demanda presentada por Francisco Javier Chiu contra el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS J. GEORGE B., EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA AGUIRRE DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3575 DE 19 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), el 24 de noviembre de 1995 y mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos J. George B., actuando en representación de MARÍA AGUIRRE DE HERRERA con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 3575-95 de 19 de mayo de 1995, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración solicita la revocatoria de la resolución impugnada debido a que, a su juicio, la demanda "no cumplió con un requisito indispensable para concurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, estatuido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943."

En este caso, le asiste la razón a la Procuradora de la Administración ya que, efectivamente, el apoderado judicial de la parte demandante presentó ante esta Sala Tercera demanda mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 1995, por haberse agotado a su modo de ver, la vía gubernativa.

Estima el resto de los Magistrados que integran la Sala que, el apoderado judicial de la parte demandante incurre en un grave error al considerar agotada la vía gubernativa, pues no se ha comprobado el silencio administrativo, requisito esencial para poder recurrir en demanda contencioso administrativa ante esta Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943. Si bien es cierto que, la parte actora utilizó tanto el recurso de reconsideración como el de apelación, del cual no recibió respuesta, no es menos cierto que, dentro de la demanda no se le ha solicitado al Magistrado Sustanciador, tal como lo establece el artículo 46 de la mencionada ley, que sea éste funcionario quien solicite a la autoridad demandada, la certificación que compruebe este hecho, antes de admitir la demanda. Es por ello, que el silencio administrativo no ha sido debidamente comprobado, en el presente caso. Ha sido jurisprudencia constante de esta Sala, que el silencio administrativo debe comprobarse mediante certificación o constancia en que se indique que dicho recurso no ha sido resuelto, o copia de un escrito en que se pida esa certificación.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 24 de noviembre de 1995, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Carlos J.

George B., actuando en representación de MARÍA AGUIRRE DE HERRERA con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 3575-95 de 19 de mayo de 1995, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA MARTIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 95-06-0008 DE 23 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), el 30 de noviembre de 1995 y mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Arrocha, Blandón, Castro y Young, en representación de MARÍA ALEJANDRA MARTIN con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 95-06-0008 de 23 de junio de 1995, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración solicita la revocatoria de la resolución impugnada debido a que, a su juicio, la demanda "no cumplió con un requisito indispensable para concurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra establecido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943."

En este caso, le asiste la razón a la Procuradora de la Administración ya que, efectivamente, el apoderado judicial de la parte demandante presentó ante esta Sala Tercera demanda mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 1995, por haberse agotado a su modo de ver, la vía gubernativa.

Estima el resto de los Magistrados que integran la Sala que, el apoderado judicial de la parte demandante incurre en un grave error al considerar agotada la vía gubernativa, pues no se ha comprobado el silencio administrativo, requisito esencial para poder recurrir en demanda contencioso administrativa ante esta Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943. Si bien es cierto que, la parte actora utilizó el recurso de reconsideración con apelación en subsidio, y no recibió respuesta, no es menos cierto que, dentro de la demanda no se le ha solicitado al Magistrado Sustanciador, tal como lo establece el artículo 46 de la mencionada ley, que sea éste funcionario quien solicite a la autoridad demandada, la certificación que compruebe este hecho, antes de admitir la demanda. Es por ello, que el silencio administrativo no ha sido debidamente comprobado, en el presente caso. Ha sido jurisprudencia constante de esta Sala, que el silencio administrativo debe comprobarse mediante certificación o constancia en que se indique que dicho recurso no ha sido resuelto, o copia de un escrito en que se pida esa certificación.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 30 de noviembre de 1995, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma forense Arrocha,

Blandón, Castro y Young, en representación de MARÍA ALEJANDRA MARTIN con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 95-06-0008 de 23 de junio de 1995, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ANALIDA ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Norberto Castillo, actuando en representación de ANALIDA ORTEGA RÍOS, ha presentado recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 15 de diciembre de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta con la finalidad que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda en vista que la misma no cumple, a su juicio, con los requisitos necesarios para su admisión.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El Doctor Norberto Castillo, sustenta su apelación en los siguientes términos:

> "... La resolución recurrida se funda en dos aspectos formales que, al parecer de la Magistrado Sustanciadora de Primera Instancia, no se han tenido encuenta (sic), dejándose de cumplir así, con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 y en el numeral primero del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 ...
>
> Aduce, pues, la resolución impugnada la falta de la **'copia del acto acusado'**. Si bien es cierto que no fue acompañada a la demanda la copia del Decreto Ejecutivo N° 204 del 14 de agosto de 1995 que acusamos por ilegal, es precisamente porque el mismo jamas ha sido notificado en debida forma a mi Representada y mucho menos se le ha entregado copia del mismo. Estos hechos precisamente constituyen parte de la ilegalidad que vicia su ejecución, a cargo del Órgano Ejecutivo, através (sic) del Ministerio de Educación. ...
>
> Nada de lo anterior se hizo con mi Representada y ello se dejó así evidenciado y advertido, cuando ésta, en su Recurso de Reconsideración se expresó de la siguiente manera:
>
> **'..., por este medio hago de su conocimiento que en el día de hoy (11 de septiembre de 1995) me doy por NOTIFICADA del Decreto N° 204**

de 14 de agosto de 1995 ...'

Por otra parte ..., la misma Ley 135 de 1943, en su artículo 46 prevee (sic) como aportar el acto impugnado, antes de entrar a decidir sobre la admisión o no de la Demanda ...

... la omisión de acompañar el acto impugnado a la demanda lo previó el Legislador dándole a esta situación un carácter de `remediable`, cuando nos hace entender en ella que, la no aportación de la copia autenticada del acto demandado a que hace referencia el artículo 44 de esta misma Ley, se subsana cuando ello se anuncia en la demanda y se informa en la misma donde está el original, a efecto de que el Sustanciador la solicite, antes de entrar a decidir sobre la admisión o no de la misma ...

Por otra parte, señala el Despacho Sustanciador como razón para no admitir la Demanda de este caso, que 'tampoco designó en la demanda las Partes y sus representantes como lo exige el artículo 28 de la Ley 33 de 1946.'

A este respecto sólo nos resta manifestarles que, la propia Ley 135 de 1943 en su artículo 57 C establece la aplicación del Código Judicial en cuanto al procedimiento se refiere, y éste en su artículo 654, numeral 3, inciso segundo dice:

'Las generales no serán necesarias cuando la información aparezca en el poder otorgado, en el caso de que la demanda se formule a continuación del poder y se presente copia del mismo para el traslado.'"

Por su parte, el Procurador de la Administración (Suplente), se opone al recurso de apelación, mediante la Vista N° 61 de 31 de enero de 1996, en la que señala que, efectivamente, la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema consideran que le asiste la razón a la parte actora, puesto que, si bien es cierto, como se colige del examen del expediente, que no existe dentro de éste, copia auténtica del acto administrativo acusado, como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, no es menos cierto que, tal como lo prevé el artículo 46 de la mencionada ley, el apoderado judicial de la parte actora, solicita al Magistrado Sustanciador en el renglón denominado "PRUEBAS" que requiera "del Ministerio de Educación el envío de sendas copias de cada uno de estos documentos, del Decreto Ejecutivo N° 660 del 30 de diciembre de 1992 y del Decreto Ejecutivo N° 204 del 14 de agosto de 1995, que es el acto impugnado," porque se le ha negado personalmente la posibilidad de autenticar dicha documentación.

Cabe señalar, tal como lo hizo la Sala en Resolución de 7 de febrero de 1996 que: "si el Magistrado Sustanciador no se percató de la existencia de esta solicitud fue porque la misma no se hizo en la forma, ni en el lugar adecuado." (Subraya el resto de la Sala).

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN la Resolución de 15 de diciembre de 1995 mediante la cual no se admite la demanda presentada por ANALIDA ORTEGA RÍOS contra el Ministerio de Educación y ORDENAN que antes de admitir la demanda, por Secretaría se solicite al Ministro de Educación que, en el término de cinco (5) días, expida y envíe a la Sala copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LUSVI HIDIS NIETO TROYA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Norberto Castillo, actuando en representación de LUSVI NIETO TROYA, ha presentado recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 15 de diciembre de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta con la finalidad que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda en vista que la misma no cumple, a su juicio, con los requisitos necesarios para su admisión.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El Doctor Norberto Castillo, sustenta su apelación en los siguientes términos:

> "... La resolución recurrida se funda en dos aspectos formales que, al parecer de la Magistrado Sustanciadora de Primera Instancia, no se han tenido encuenta (sic), dejándose de cumplir así, con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 y en el numeral primero del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 ...
>
> Aduce, pues, la resolución impugnada la falta de la **copia del acto acusado** . Si bien es cierto que no fue acompañada a la demanda la copia del Decreto Ejecutivo N° 204 del 14 de agosto de 1995 que acusamos por ilegal, es precisamente porque el mismo jamas ha sido notificado en debida forma a mi Representada y mucho menos se le ha entregado copia del mismo. Estos hechos precisamente constituyen parte de la ilegalidad que vicia su ejecución, a cargo del Órgano Ejecutivo, através (sic) del Ministerio de Educación. ...
>
> Nada de lo anterior se hizo con mi Representada y ello se dejó así evidenciado y advertido, cuando ésta, en su Recurso de Reconsideración se expresó de la siguiente manera:
>
> ' ..., por este medio hago de su conocimiento que en el día de hoy (11 de septiembre de 1995) me doy por NOTIFICADA del Decreto N° 204 de 14 de agosto de 1995 ...'
>
> Por otra parte ..., la misma Ley 135 de 1943, en su artículo 46 prevee (sic) como aportar el acto impugnado, antes de entrar a decidir sobre la admisión o no de la Demanda ...
>
> ... la omisión de acompañar el acto impugnado a la demanda lo previó

> el Legislador dándole a esta situación un carácter de `remediable , cuando nos hace entender en ella que, la no aportación de la copia autenticada del acto demandado a que hace referencia el artículo 44 de esta misma Ley, se subsana cuando ello se anuncia en la demanda y se informa en la misma donde está el original, a efecto de que el Sustanciador la solicite, antes de entrar a decidir sobre la admisión o no de la misma ...
>
> Por otra parte, señala el Despacho Sustanciador como razón para no admitir la Demanda de este caso, que `tampoco designó en la demanda las Partes y sus representantes como lo exige el artículo 28 de la Ley 33 de 1946.
>
> A este respecto sólo nos resta manifestarles que, la propia Ley 135 de 1943 en su artículo 57 C establece la aplicación del Código Judicial en cuanto al procedimiento se refiere, y éste en su artículo 654, numeral 3, inciso segundo dice:
>
> `Las generales no serán necesarias cuando la información aparezca en el poder otorgado, en el caso de que la demanda se formule a continuación del poder y se presente copia del mismo para el traslado. "

Por su parte, el Procurador de la Administración (Suplente), se opone al recurso de apelación, mediante la Vista N° 62 de 31 de enero de 1996, en la que señala que, efectivamente, la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema consideran que le asiste la razón a la parte actora, puesto que, si bien es cierto, como se colige del examen del expediente, que no existe dentro de éste, copia auténtica del acto administrativo acusado, como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, no es menos cierto que, tal como lo prevé el artículo 46 de la mencionada ley, el apoderado judicial de la parte actora, solicita al Magistrado Sustanciador en el renglón denominado "PRUEBAS" que requiera "del Ministerio de Educación el envío de sendas copias de cada uno de estos documentos, del Decreto Ejecutivo N° 660 del 30 de diciembre de 1992 y del Decreto Ejecutivo N° 204 del 14 de agosto de 1995, que es el acto impugnado," porque se le ha negado personalmente la posibilidad de autenticar dicha documentación.

Cabe señalar, tal como lo hizo la Sala en Resolución de 7 de febrero de 1996 que: "si el Magistrado Sustanciador no se percató de la existencia de esta solicitud fue porque la misma no se hizo en la forma, ni en el lugar adecuado." (Subraya el resto de la Sala).

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN la Resolución de 15 de diciembre de 1995 mediante el cual no se admite la demanda presentada por LUSVI NIETO TROYA contra el Ministerio de Educación y ORDENAN que antes de admitir la demanda, por Secretaría se solicite al Ministro de Educación que, en el término de cinco (5) días, expida y envíe a la Sala copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA TERESA ESCOBAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL OFICIO N° 1062-94 DE 21 JULIO DE 1994, EMITIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL OFICIO N° 95-253 DE 27 DE ENERO DE 1995, SUSCRITA POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Shirley y Díaz, actuando en representación de MARÍA TERESA ESCOBAR, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nulo por ilegal el Oficio N° 1062-94 de 21 de julio de 1994, emitido por el RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, y el Oficio N° 95-253 de 27 de enero de 1995, suscrito por el VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, y para que se hagan otras declaraciones.

A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el acto que se acusa expedido por el Rector de la Universidad de Panamá es nulo, dado que vulnera el artículo 48 numeral 4 de la Ley 11 de 1981. Adicionalmente, considera que se han violado los artículos 109 del Capítulo 5°, 115 ordinal "b" y 120 del Estatuto Universitario.

En cuanto al artículo 48 numeral 4 de la Ley 11 de 1981, en que se señala que "la estabilidad" en el cargo es uno de los derechos que gozan los profesores e investigadores universitarios, "en tanto cumplan los requisitos y condiciones que la Ley, el Estatuto y los reglamentos señalen para el mismo." Estima el apoderado judicial de la parte demandante que se ha violado en forma directa por omisión, puesto que "la profesora **MARÍA TERESA ESCOBAR** no sólo ha cumplido hasta la fecha con la Ley Universitaria, con el Estatuto y con los reglamentos, sino que también su vida docente se ha ajustado en todo tiempo a la cátedra y a las exigencias pedagógicas que el país demanda." En relación al artículo 109 del Capítulo 5° del Estatuto Universitario, en el que se señala de manera clara el status y la vigencia que adquiere tanto un Profesor Especial, como un Profesor Regular cuando se le concede la condición de Profesor por Tiempo Completo, alega la parte demandante que se ha violado de forma directa por omisión, pues no existe causa alguna para que se le desconozca a la señora Escobar su condición de Profesora por Tiempo Completo, "ni para que se le rebajara su clasificación y mucho menos para que se rebajara su salario."

Adicionalmente, considera la parte demandante que se ha violado el artículo 115, ordinal "b" del Estatuto Universitario, en el que se contempla que uno de los derechos que goza el profesor universitario, es el "disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categorías académicas, de adecuada remuneración de acuerdo a su responsabilidad y dedicación, y de apropiadas medidas de bienestar y seguridad sociales." Estima el apoderado judicial del parte actora, que se ha violado en forma directa por omisión, puesto que, esta disposición la protege "contra los abusos de la Rectoría," y se consagra en ésta, el derecho a que no se le desmejore su remuneración. La parte actora considera también, que se ha violado en forma directa por omisión el artículo 120 del Estatuto Universitario, pues según esta "norma ... debe haber causa legal y justificada para remover o desmejorar a los profesores universitarios," situación, que según el apoderado judicial de la parte actora, no ocurre en este caso.

El Vicerrector Académico rindió el respectivo informe explicativo de conducta mediante la Nota N° 95-1,201 de 28 de abril de 1995. En dicha nota el funcionario fundamenta su actuación de la siguiente manera:

> "... En septiembre de 1985 celebra contrato por los dos (2) años, como Profesora Adjunto IV a Tiempo Completo, del 1° de septiembre de 1985 hasta el 30 de agosto de 1987. En 1987 celebró nuevo contrato de Profesor Adjunto IV hasta el 29 de agosto de 1989. Este contrato

fue anulado en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 4-88, expedido por el Consejo Administrativo el 15 de julio de 1988, entonces celebró nuevo contrato con la Universidad de Panamá y entró a la categoría de Profesor Contratado. Contra ese acto la Profesora Escobar no presentó recurso alguno, como lo hicieron otros miembros del personal docente de la Universidad de Panamá, por lo que en el caso de aquella, el acto surtió todos los efectos legales sin ninguna acción impugnativa de su parte.

Posteriormente, al anular la Corte Suprema de Justicia el Acuerdo 4-88 de 15 de julio de 1988, la Administración dispuso designar a la Profesora Escobar de Asistente de Tiempo Completo, mediante contrato y posteriormente mediante nombramiento temporal hasta enero de 1994. Últimamente la Decana ha solicitado su nombramiento por resolución con carácter indefinido.

Por otra parte, de lo pedido en la demanda, se deduce que el Señor Rector, en el Oficio N° 1062-94 de 21 de julio de 1994, negó la petición de la Profesora María Teresa Escobar, decisión contra la que no se interpuso recurso alguno ...

En cuanto a las violaciones que se señalan del artículo 48, numeral 4 de la Ley 11 de 1981, éste se refiere a los profesores universitarios que han alcanzado la regularidad en los términos del artículo 44 de la misma Ley. Lo mismo puede decirse de las violaciones señaladas en el literal b) del artículo 115 y del artículo 120 del Estatuto Universitario, que se refieren precisamente a los profesores que han alcanzado su estabilidad, status que nunca tuvo la demandante, ya que ésta fue objeto de contrataciones a plazo y de nombramiento temporal, por lo que obviamente no ha accedido a la regularidad docente en la Universidad de Panamá.

En cuanto a los efectos que se pretenden con la nulidad de las notas aludidas, de que `se le pague o reintegren las sumas deducidas de su salario ...`, cabe considerar que los salarios caídos no pueden ser pagados en forma alguna, ya que para ello debieron haber hecho el reclamo en los plazos que señala el artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946 y haber obtenido sentencia condenatoria en ese sentido." (Subraya la Sala).

Al corrérsele traslado a la Procuradora de la Administración, ésta contestó mediante Vista N° 223 de 29 de mayo de 1995, en la que, solicita "denegar las pretensiones de la demandante, ya que a nuestro juicio son infundadas."

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 48, numeral 4 de la Ley 11 de 1981, observa la Sala, que no le asiste la razón a la parte actora, puesto que, el nombramiento de la señora Escobar, está sujeto a un contrato, y este artículo, sólo se aplica a aquellos profesores que han logrado la permanencia en sus cargos, mediante concurso convocado para tal efecto, tal como lo establece el artículo 104 del Estatuto Universitario.

Aunado a lo anterior, se aprecia que no le asiste razón a la parte demandante, cuando señala que el Rector de la Universidad de Panamá, ha desconocido el pronunciamiento de esta Sala, que el 11 de octubre de 1995, declaró nulos por ilegales los Acuerdos 4-88 de 9 de junio de 1988 y 5-88 de 15 de julio de 1988, dictados por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, ya que, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 de la Ley 135 de 1943, sólo podrá aprovecharse del restablecimiento del derecho, al efectuarse la revocatoria de un acto administrativo, la persona o personas que hayan intervenido como partes y que hubiesen obtenido esta declaración a su favor; situación, que no se configura en este caso, pues la señora Escobar no figura

como parte en aquel proceso. Se desestima pues, este cargo.

Por otro lado, considera la Sala, que no se ha producido la infracción al artículo 109 del Estatuto Universitario, pues, si bien es cierto que, como consta en el Certificado de Docencia, que obra a fojas 5 y 6 del expediente, la señora Escobar ha laborado como profesora en la Universidad de Panamá desde 1972, no es menos cierto que, la relación laboral existente con esa institución fue a base de contratos por tiempo definido, en los que se señalaba específicamente la categoría de profesor y la cantidad de horas en que se impartiría la asignatura específica, por lo que, se demuestra que la demandante no gozaba de la regularidad en el puesto, presupuesto necesario para que se configure la transgresión legal imputada. Por ello, se desestima también este cargo.

Es igualmente improcedente la violación relacionada con el artículo 115 ordinal "b" del Estatuto Universitario, porque tal lo señala el artículo 104 de la mencionada excerta legal: "el ingreso al profesorado regular se hará mediante concurso convocado al efecto," y, sólo se considerará permanente y estable en su cargo a quien cumpla con este requisito. De lo que se colige, que como la señora Escobar, no ha aportado pruebas en las que se certifique de manera inequívoca, que ha participado en concursos para ocupar la plaza de profesor regular y que ha obtenido ésta, no puede de ninguna forma considerarse que goza de estabilidad en el puesto. Es por ello, que no se puede aplicar este artículo al presente caso. Se desestima, pues este cargo.

Finalmente, no coincide la Sala con los cargos que se le endilgan al acto administrativo en relación al artículo 120 del Estatuto Universitario, ya que, a la señora Escobar no se la ha removido "por mala conducta", ni se le ha destituido del cargo que ocupaba. Por el contrario, tal como lo señala el Vicerrector Académico en su informe de conducta, que obra de fojas 29 a 31 del expediente, la relación laboral de la mencionada profesora y la Universidad de Panamá, estuvo basada en contratos de tiempo definido, lo que demuestra de manera fehaciente que no existía permanencia en el cargo, por lo que, se aprecia claramente que, la actuación del Rector de la Universidad de Panamá, no es ilegal.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Oficio N° 1062-94 de 21 de julio de 1994, emitido por el RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, y el Oficio N° 95-253 de 27 de enero de 1995, suscrito por el VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARELLANO, CHALHOUB & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JESÚS PIZARRO MIRONES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 48-95 DE 24 DE ABRIL DE 1995, DICTADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal N° 470 de 2 de noviembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 12 de julio de 1995, por la cual se admite la demanda conten-

ciosa administrativa de plena jurisdicción, promovida por la firma Arellano, Chalhoub & Asociados, en representación de JESÚS PIZARRO MIRONES, para que se declare nula, por ilegal, la resolución N° 48-95 de 24 de abril de 1995, emitida por el Ministerio de Vivienda y para que se hagan otras declaraciones.

De acuerdo a la señora Procuradora de la Administración, la demanda presentada no debe admitirse porque a su juicio el demandante carece de legitimidad para intervenir en proceso judicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 654 del Código Judicial. Señalando además lo siguiente:

> "Al realizar un estudio detallado de toda la documentación aportada en este proceso, observamos que el demandante, fungía como representante legal de MANUFACTURA ANI, S. A., que ampara el nombre comercial IMPRENTA RICARDO, toda vez que la sociedad anónima LIDI, S. A., quien es la arrendadora, suscribió sendos contratos de arrendamientos donde daba en arriendo el Local N° 7 (Sótano) a IMPRENTA RICARDO, que es el establecimiento comercial de propiedad de la Sociedad Anónima MANUFESTORA ANI, cuyo, representante legal es JESÚS PIZARRO MIRONES, pues así se ha verificado de fojas 1 a 3 de este expediente.
>
> De lo anterior, apreciamos que el señor JESÚS PIZARRO se constituyó en fiador solidario del Arrendatario denominado comercialmente IMPRENTA RICARDO, siendo ilógico que sea arrendatario y fiador solidario de la obligación una misma persona, por tanto, somos del criterio que los derechos y obligaciones emanados del contrato de arrendamiento que pesa sobre el Local N° 7 (Sótano), recae sobre la sociedad anónima que respalda el nombre comercial, en este caso MANUFACTURA ANI, S. A., no así sobre el demandante, ya que éste es el representante legal y fiador solidario del arrendatario.
>
> Apreciamos también, que el demandante al otorgarle poder especial a la firma Arellano, Chalhoub y Asoc. para que los representara ante la Dirección General de Arrendamientos, en vía gubernativa, lo hizo a nombre propio, y a nombre y representación de MANUFACTURA ANI, S. A. (V. fs. 67) a 69 exp. adm.), acompañándose con el libelo de la demanda certificación del Registro Público, que acredita la existencia de la sociedad anónima MANUFACTURA ANI, S. A., quien es la propietaria del establecimiento comercial denominado IMPRENTA RICARDO. (V. f. 73) exp. adm.).
>
> En virtud de todo lo explicado en párrafos anteriores, es evidente que IMPRENTA RICARDO es el inquilino arrendatario del Local N° 7 y no lo es el señor JESÚS PIZARRO MIRONES, quien ostenta la representación legal de la Sociedad Anónima que es su propietaria, de forma tal que si Jesús Pizarro M. ejercía la representación legal de MANUFACTURA ANI, S. A. cuya razón comercial es IMPRENTA RICARDO, para recurrir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, **debió otorgarle poder a sus abogados en nombre del arrendatario y no como lo hizo, a nombre propio**, así como también era necesario que acreditara la existencia de la sociedad anónima que respalda la razón comercial, IMPRENTA RICARDO presentado con el libelo de la demanda una certificación del Registro Público, tal como lo exige el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, y el artículo 626 del Código Judicial ..." (Fs. 31-33).

A este recurso se opuso oportunamente el apoderado judicial de la parte actora quien alegó, en primer lugar, que lo que pretende la señora Procuradora de la Administración mediante el presente recurso de apelación, ya fue objeto de controversia en la vía administrativa, en la cual quedó plenamente decidido que JESÚS PIZARRO, es el arrendatario y como tal, la pretensión iniciada por su persona debía conocerla la Dirección General de Arrendamientos, puesto que las decisiones que por esta vía se tomaran beneficiaban o afectaban al señor JESÚS PIZARRO y no a MANUFACTURAS ANI, S. A. (Cfr. Resolución N° 145-94 de 13 de

octubre de 1994 visible a foja 95 del expediente administrativo).

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta previas las siguientes consideraciones.

Del examen de los autos se desprende que en el Proceso administrativo se ha discutido y resuelto acerca de la legitimidad del demandante; y que **JESÚS PIZARRO MIRONES** promovió en su propio nombre, mediante apoderado judicial, la demanda mediante la cual se inició el proceso que terminó con la Resolución N° 48-95 de 24 de abril de 1995 aquí impugnada, y al apoderado judicial del demandante **JESÚS PIZARRO MIRONES** le fue notificada esta decisión, así como también se le notificó la resolución de primera instancia N° A-I-22-94 D. G. H. Siendo estos los hechos la demanda contencioso administrativa debe admitirse y este asunto debe dilucidarse dentro del proceso.

En mérito de lo expuesto, la demanda debe admitirse y tramitarse, sin perjuicio de lo que en el proceso aleguen las partes.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la providencia de 12 de julio de 1995, por la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Arellano, Chalhoub & Asociados en representación de JESÚS PIZARRO MIRONES, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 48-95 de 24 de abril de 1995, emitida por el Ministerio de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EUFROSINIO TROYA TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE FRANKLIN JURADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 024-95 DE 14 DE MARZO DE 1995, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LOS CASINOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista Fiscal N° 555 de 29 de diciembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 24 de noviembre de 1995, mediante la cual se admite la corrección de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, promovida por el licenciado Eufrosinio Troya Torres, en representación de FRANKLIN JURADO para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 024-95 de 14 de marzo de 1995, emitida por el Gerente General de los Casinos Nacionales, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

De acuerdo a la señora Procuradora de la Administración la demanda presentada no debe admitirse porque el apoderado de la parte actora no ocurrió en el término de dos meses, exigido por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, a presentar su demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esto es así, porque como el Magistrado Sustanciador, mediante auto de 15 de septiembre de 1995, no admitió por defectuosa la primera demanda presentada por el recurrente, esta no interrumpió la prescripción y cuando se presentó la demanda correcta, ya la acción estaba prescrita.

A este recurso se opuso oportunamente el apoderado judicial de la parte actora quien alega, en lo medular, lo siguiente:

> "SEGUNDO: Se impugnó el acto que aparecía como Resolución de destitución, por cuanto que el mismo le fue notificado a mi poderdante mediante la nota ARP-82-1-39 fechada 14 de marzo de 1995 y en la cual, se le informaba que mediante Resolución N° 024-95 de 14 de marzo de 1995, el Gerente de los Casinos Nacionales le había destituido, Resolución esta que nunca se le entregó ni llegó a conocer mi representado.
>
> TERCERO: Lo anterior nos obligó a presentar como prueba del acto impugnado la nota ARP-82-1-39 fechada 14 de marzo de 1995, notificada el 16 de marzo de 1995, por ser esta nota la que real y efectivamente produjo la destitución de mi poderdante, de allí que el Magistrado Sustanciador ordenara la Corrección de la Demanda a fin de que se aportara la Resolución de destitución, a pesar de no ser ésta la que le fue notificada a mi representado, tal cual lo dispone la Ley.
>
> CUARTO: Si la notificación de la Resolución fuese la que produjese efectos y hubiese sido necesario aportarla entonces, no estando ella notificada, sino mediante la nota que nosotros aportamos, no ha habido tal destitución del señor JURADO, por la cual se le deberá pagar todos sus salarios hasta la efectiva notificación de dicha Resolución".

Evacuados los trámites de Ley, al resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

La primera demanda se presentó el 4 de septiembre de 1995, en tiempo, y no fue admitida por defectos formales (Cfr. fojas 18-19), por tanto, esta demanda no interrumpió la prescripción, tal como lo estipula el artículo 27 de la ley 33 de 1946.

La demanda corregida se presentó el 20 de noviembre de 1995 (fs. 22-28) cuando ya la acción había prescrito.

Al examinar el proceso se observa que efectivamente la acción había prescrito cuando se presentó la demanda corregida el 20 de noviembre de 1995. La Sala llega a esta conclusión porque el 10 de mayo de 1995 el actor sustentó el recurso de apelación promovido contra la Resolución N° R-027-95 de 28 de abril de 1995, confirmatoria de la Resolución N° 025-95 de 14 de marzo de 1995 por medio de la cual se destituyó al demandante del cargo que ocupaba en los Casinos Nacionales. Como este recurso no fue resuelto, el silencio administrativo se produjo a los dos meses, o sea el 10 de julio y en esa fecha empezó a correr el término de dos meses de la prescripción de la acción, el cual venció el 10 de septiembre de 1995.

Por todo lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia consideran que debe revocarse la resolución de primera instancia que admite la demanda.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 24 de noviembre de 1995, NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Eufrosinio Troya Torres, en representación de FRANKLIN JURADO, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 024-95 de 14 de marzo de 1995, emitida por el Gerente de los Casinos Nacionales, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARSENIO GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE ALFONSO BÓSQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20 DE 7 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista Fiscal N° 323 de 1° de agosto de 1995, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 2 de mayo de 1995, por la cual se admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, promovida por el licenciado Arsenio García, en representación de ALFONSO BÓSQUEZ, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 20 de 7 de febrero de 1995, dictada por el Alcalde del Distrito de Santiago.

De acuerdo con la señora Procuradora de la Administración, la demanda presentada no debe admitirse porque nuestra legislación contenciosa administrativa señala en el artículo 17 de la Ley 33 de 1946 los actos administrativos excluidos de acusación ante la jurisdicción contencioso administrativa, entre los cuales están los procesos de policía tanto de naturaleza civil como penal, como el caso que nos ocupa. El recurrente pretende impugnar una decisión dictada por el Corregidor de Policía de San Pedro del Espino, Distrito de Santiago, la cual fue apelada ante la Alcaldía Municipal del Distrito de Santiago, quien resolvió el curso por medio de la Resolución N° 20 de 7 de febrero de 1995.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

Del examen de los autos se desprende que se trata de un juicio de policía de naturaleza civil en el cual se resuelve, mediante el acto impugnado, un conflicto entre particulares relacionado con una servidumbre rural cuya impugnación debe ser resuelta por los tribunales de justicia civiles, y no por la jurisdicción contencioso administrativa de acuerdo con el artículo 1741 del Código Administrativo y el ordinal 2° del artículo 17 de la Ley 33 de 1946.

Preceptúa el artículo 1741 del Código Administrativo que cuando las partes no se conforman con lo que decide la autoridad de policía en los juicios civiles sobre servidumbres rurales y urbanas, corresponde al Órgano Judicial dictar la resolución definitiva y permanente. En el Órgano Judicial el conocimiento de los conflictos sobre servidumbres compete a los Jueces civiles. Además, el artículo 17, ordinal 2° de la Ley 33 de 1946 expresamente excluye de la jurisdicción contencioso administrativa: "Las resoluciones que se dicten en materia de Policía de naturaleza penal o civil".

Por todo lo expuesto, la demanda presentada es inadmisible y así debe declararse, previa revocatoria la resolución de primera instancia que la admite.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 2 de mayo de 1995, NO ADMITEN la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Arsenio García, en representación de ALFONSO BÓSQUEZ para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 20 de 7 de febrero de 1995, emitida

por el Alcalde del Distrito de Santiago.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. EDUARDO LOMBANA ACHURRA, EN REPRESENTACIÓN DE FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES PARTE DEL ARTÍCULO 5° Y EL ARTÍCULO 6° DEL DECRETO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Dr. Eduardo Lombana Achurra, actuando en representación de Félix Alberto Pérez Espinosa, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declaren nulas, por ilegales, partes del artículo 5° y 6° del Decreto Ejecutivo N° 413 de 1° de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Conjuntamente con las pretensiones del demandante, el apoderado judicial de la parte actora solicita a la Sala la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, contenido en parte de los artículos 5° y 6° del Decreto N° 413 1° de agosto de 1995.

Por un lado, el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala para suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. A su vez, el artículo 74 de la misma ley es claro al señalar en su numeral 1, que no habrá lugar a la suspensión provisional de los efectos de un acto en "las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo en los casos de empleados nombrados para períodos fijos".

La Sala estima que la petición antes mencionada no cabe en este caso ya que el apoderado judicial del demandante no ha demostrado que los perjuicios que estos podrían sufrir a consecuencia de los actos impugnados, son de muy difícil o imposible reparación. A este respecto, la Sala considera que los perjuicios alegados por el representante judicial del demandante, en su mayoría de carácter pecuniario, no son de imposible reparación. En torno a uno de los perjuicios alegados por el apoderado judicial del demandante la Sala considera importante señalar que si bien es cierto que los notarios carecen de un salario fijo, los honorarios percibidos en ejercicio de sus funciones notariales pueden ser calculados posteriormente una vez se resuelva el fondo del presente negocio, de resultar la sentencia favorable a la parte actora, en base al movimiento de trabajo que usualmente lleva la notaría en cuestión, cuyos ingresos deben estar debidamente registrados y pueden ser acreditados por los medios probatorios ordinarios.

La Sala considera necesario destacar que en este momento no es posible hacer referencia a la alegada estabilidad del notario, ni al período fijo para el cual ha sido nombrado, ni los efectos que el artículo 794 del Código Administrativo y demás normas que regulan la materia tienen en el presente caso por tratarse de aspectos de fondo que no corresponde decidir en esta etapa del proceso. El análisis del fondo de la pretensión debe hacerlo la Sala en la etapa procesal prevista en la Ley porque en esta etapa no se aprecia prima facie una violación palmaria, evidente e indiscutible del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la petición de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado en la demanda contencioso administrativas de plena jurisdicción interpuesta por el Doctor Eduardo Lombana, en representación de FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE HOMAB, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 052 DE 26 DE ABRIL DE 1994 Y LA RESOLUCIÓN N° 107 DE 28 DE JULIO DE 1994, EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Infante, Garrido y Garrido**, en representación de **HOMAB, S. A.**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994, y la Resolución N° 107 de 28 de julio de 1994, emitidas por el Ministerio de Salud, y para que se hagan otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración al notificarse de la Providencia de 23 de marzo de 1995, que **ADMITIÓ** la presente demanda, mediante la Vista Fiscal N° 505 de 22 de noviembre de 1995, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la misma, en los siguientes términos:

> "... Este Despacho, estima que no es posible emitir criterio jurídico sobre la presente demanda contencioso administrativa, toda vez que la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994 versa sobre la revocación de una adjudicación definitiva la cual se encontraba debidamente formalizada mediante la Resolución N° 038 de 29 de marzo de 1994, mientras que en la Resolución N° 107 de 28 de julio de 1994 expedida por el Ministro de Salud se debate la potestad que posee dicho Ministerio en cuanto a los Registros Sanitarios. Si bien la Resolución N° 107 de 1994 está íntimamente relacionada con el Renglón N° 43 de la Licitación Pública N° 002-DP-93, ya que en la parte resolutiva el Ministerio de Salud procedió a Dejar sin efecto la Adjudicación del Renglón N° 43 del Artículo Primero de la Resolución N° 038 del 29 de Mayo (Sic) de 1994, y modificada mediante Resolución N° 052 del 26 de abril de 1994' (Cfr. f. 13 del expediente de marras), no podemos soslayar la importancia que reviste el control de los Registros Sanitarios para la venta de medicamentos en el territorio nacional.
>
> Por tanto, la presente demanda contencioso administrativa debió encauzarse por dos vías: por un lado, lograr la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994, y por el otro, determinar la atribución que posee el Ministerio de Salud con respecto a los Registros Sanitarios, aspecto principal de la Resolución N° 107 de 28 de julio de 1994."

El demandante por su parte, se opuso a lo pretendido por la Procuradora de la Administración argumentando que las observaciones vertidas por ésta, "...

parten del error de considerar que en la Resolución N° 107 de 28 de julio de 1994, se debate la potestad que posee el Ministerio de Salud en cuanto a los Registros Sanitarios. La resolución de marras lo que resuelve es dejar sin efecto la adjudicación del Renglón N° 43 del artículo primero de la Resolución N° 38 de 29 de mayo de 1994, y modificada mediante Resolución N° 52 de abril de 1994. Es decir, agota la vía gubernativa del actor, quien la impugna de ilegal para que le sea restablecido su derecho subjetivo lesionado, lo que sería la adjudicación definitiva del Renglón N° 43 concerniente a Licitación Pública N° 002-DP-93 celebrada por el Ministerio de Salud, en virtud del ejercicio de la plena jurisdicción."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados proceden a emitir las siguientes consideraciones finales.

Estima este Tribunal de segunda instancia que efectivamente, nos encontramos en presencia de una demanda donde se impugnan varios actos administrativos de naturaleza diferente.

Primeramente, observa este Tribunal de segunda instancia que el recurrente ha encausado la presente acción contra la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994, por medio de la cual el Ministerio de Salud "Resolvió DEJAR SIN EFECTO el Renglón N° 43 del Artículo Primero de la Resolución N° 038 del 29 de mayo de 1994, concerniente a la Licitación Pública N° 002-DP-93 a favor de la CASA HOMAB, S. A."

A fs. 14-22 del expediente, consta copia debidamente autenticada de la Sentencia de Amparo de Garantías Constitucionales de 5 de julio de 1994 que el recurrente, la sociedad anónima HOMAB, S. A., promoviera contra la precitada Resolución N° 052 de 1994. Mediante dicha Sentencia el Pleno de la Corte Suprema, **CONCEDIÓ** el Amparo y **REVOCÓ** la resolución impugnada.

Por lo tanto, al ser revocada, dicha resolución dejó de surtir efectos, es decir desapareció del mundo jurídico, razón por la cual no podía ser objeto de demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En segundo lugar, se observa que el demandante ha enervado coetáneamente con la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994, en una misma demanda de plena jurisdicción, la Resolución N° 107 de 28 de julio de 1994, mediante la cual el Ministerio de Salud resolvió "Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón N° 43 del Artículo Primero de la Resolución N° 038 del 29 de mayo de 1994, y modificada mediante Resolución N° 052 del 26 de abril de 1994." En dicha resolución si bien se hace referencia a la adjudicación definitiva del Renglón N° 43 del Artículo Primero de la Resolución N° 038 del 29 de mayo de 1994, concerniente a la Licitación Pública N° 002-DP-93 a favor de la CASA HOMAB, S. A., también se establece que la decisión a adoptarse en la misma, se da en virtud de la resolución que fuera expedida un día después de la emisión de la precitada Resolución N° 052 de 1994, esto es, la Resolución N° 053 del 27 de abril de 1994, "Por la cual se cancelan ciertos Registros Sanitarios", y que por consiguiente, al comprobarse que la CASA HOMAB, S. A., en la actualidad no tenía vigente su Registro Sanitario, es por lo que no se puede proceder a adjudicar tal producto a dicha Casa.

Esta Resolución, la N° 107 de 28 de julio de 1994, más que constituir un acto confirmatorio de la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994, constituye un acto con características y motivaciones propias que no proceden de la adjudicación definitiva de la licitación propiamente tal, sino que su origen respondió a la falta de uno de los requisitos indispensables para proceder a la contratación final de la Licitación Pública N° 002-DP-93.

Tales circunstancias hacen imposible que la Sala emita algún pronunciamiento de fondo, ya que de conformidad con el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, los actos administrativos deben individualizarse categóricamente en la demanda. Máxime cuando el primero de los actos demandados, consistente en la Resolución N° 052 de 26 de abril de 1994, dejó de surtir efectos al ser Revocada por el Pleno de la Corte Suprema, mediante Sentencia de 5 de julio de 1994.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia de 23 de marzo de 1995, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Infante Garrido y Garrido, en representación de HOMAB, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. DEMÓSTENES VERGARA ROSANÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN PANAMEÑA DE AJEDREZ (FEPA) Ó FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FENAP), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 59-94 D. G. DE 11 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Demóstenes Vergara Rosanía**, en representación de la **FEDERACIÓN PANAMEÑA DE AJEDREZ (FEPA) ó FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FENAP)**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 59-94 D. G. de 11 de mayo de 1994, emitida por el Director General del Instituto Nacional de Deportes, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Esta Sala se percata que posterior al trámite de admisión de la demanda, el apoderado judicial de la recurrente ha presentado una solicitud de previo y especial pronunciamiento, a fin de sean suspendidos los efectos del acto acusado, conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.

La parte demandante solicita que sean suspendidos provisionalmente los efectos de la Resolución N° 59-94 D. G. de 11 de mayo de 1994, emitida por el Director General del Instituto Nacional de Deportes, por medio de la cual se crea la COMISIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ como única autoridad del deporte de ajedrez legalmente constituida en la República de Panamá, y que en todas las invitaciones y comunicaciones sobre torneos, eventos y actividades internacionales de ajedrez deberán ser dirigidas a ella, por razón de que con la expedición de la misma se lesionan gravemente los derechos subjetivos que ésta ostenta, ya que se desconocen casi 60 años de arduo trabajo ajedrecístico de la FEDERACIÓN PANAMEÑA DE AJEDREZ, también conocida como FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ como la máxima autoridad del ajedrez panameño.

Argumentando además, que al habérsele sustituido como organismo de ajedrez con personería jurídica la cual le fuera debidamente reconocida por el Órgano Ejecutivo Nacional, mediante la Resolución N° 159 de 8 de septiembre de 1939, de la Secretaría de Gobierno y Justicia, promulgada en la Gaceta Oficial N° 7864 de 12 de septiembre de 1938, se le está desconociendo su personalidad jurídica a nivel nacional, pasándose por alto también, que la misma le ha sido reconocida a nivel internacional por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ (FIDE). Lo cual es manifiestamente violatorio de nuestro ordenamiento jurídico.

Para mayor ilustración la presente solicitud, legible a fs. 104-106, ha sido presentada en los siguientes términos:

"1. El día 16 de agosto de 1995, la FEDERACIÓN PANAMEÑA DE AJEDREZ (FEPA), también conocida como FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FENAP), interpuso, mediante apoderado especial en la figura de mi persona, formal demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en vuestro despacho, en la que denunciamos, entre otras cosas, las graves lesiones a los derechos subjetivos de mi representada, originadas por la Resolución N° 59-94 D. G. de 11 de mayo de 1994, del Director General del Instituto Nacional de Deportes (INDE), por medio de la cual se crea la COMISIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ, y por la Resolución N° 3, de 28 de marzo de 1995, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Deportes (INDE), que revoca la Resolución N° 78-94 D. G. de 9 de junio de 1994, del Director General del Instituto Nacional de Deportes (INDE), y mantiene en todas sus partes la Resolución N° 59-94 D. G., de 11 de mayo, que crea la Comisión Nacional de Ajedrez de Panamá.
...
3. Hasta el día de hoy, la mencionada Comisión Nacional de Ajedrez de Panamá continúa usurpando a mi representada en su carácter de máximo organismo rector del ajedrez en Panamá, al querer duplicar el Campeonato Nacional de Ajedrez de Panamá, mediante la organización de un supuesto 'Torneo Nacional de Ajedrez', cuando es a la FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FENAP) la que le corresponde, como tradicionalmente ha sido, a lo largo de 35 campeonatos nacionales realizados, otorgar el título de CAMPEÓN NACIONAL DE AJEDREZ al jugador que gane dicho evento, el cual cuenta con el reconocimiento de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ (FIDE).

4.- Los motivos complementarios para solicitar esta suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos impugnados son de carácter moral y social, ya que con la organización de un supuesto 'Campeonato Nacional de Ajedrez 1996', el cual carece del reconocimiento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), la Comisión Nacional de Ajedrez de Panamá intenta usurpar un evento y un título que es de tradicional y exclusiva competencia de la Federación Nacional de Ajedrez de Panamá (FENAP), que data de 1938; promoviéndose además el desconcierto y confusión ante la creciente afición de ajedrez en Panamá, causando de esta manera un perjuicio notorio y grave a mi representada al restarle importancia como único organismo rector del ajedrez panameño que puede otorgar el título de Campeón Nacional de Ajedrez con carácter oficial, con el respaldo y reconocimiento internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)."

Dado que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que esta medida se caracteriza por ser de previo y especial pronunciamiento, y que a su vez, dicha medida puede ser solicitada en cualquier etapa, antes de que se decida el fondo del proceso, esta Superioridad procede a resolver la presente solicitud de suspensión provisional.

Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala sólo tiene potestad para suspender los efectos del acto administrativo impugnado cuya ilegalidad se demanda, si a su juicio, ello es necesario para evitar un **perjuicio notoriamente grave** y de difícil reparación que se pudiera ocasionar por razón del acto recurrido. De igual manera, cuando la parte actora tiene el **fumus bonis juris o apariencia de buen derecho**, es decir, cuando el acto acusado puede producir manifiestamente una lesión a la integridad del ordenamiento jurídico.

En el presente caso, el Pleno de esta Sala estima que la parte demandante no tiene dicho beneficio, ya que a primera vista no se observa una clara violación al ordenamiento jurídico vigente. Las alegaciones expuestas por la parte recurrente serán objeto de un exhaustivo examen al momento de decidir el fondo del negocio, a fin de determinar si la actuación llevada a cabo por el Director del Instituto Nacional de Deportes, al desconocer a la FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FENAP), como organismo adscrito al INDE, y en su

defecto, proceder a reconocerle personería jurídica a la COMISIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMÁ, como única autoridad del deporte de ajedrez legalmente constituida en la República de Panamá, se ajusta o no a lo preceptuado en la Ley.

Por las razones expuestas, no es procedente acoger tal solicitud, ya que esta situación conllevaría a aceptar anticipadamente que se han producido las cargos de violación endilgados, lo cual equivaldría a emitir un pronunciamiento de fondo que resolvería la presente controversia sin que se surta el proceso contencioso administrativo.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la Solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución N° 59-94 D. G. de 11 de mayo de 1994, emitida por el Director General del Instituto Nacional de Deportes y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS LEOTEAU RUIZ PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor José J. Ceballos, hijo, Procurador de la Administración (Suplente), ha presentado recurso de apelación contra la Resolución de 11 de diciembre de 1995, emitida por la Magistrada Sustanciadora, en la que admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Doctor Rolando Murgas Torraza en representación de DAMARIS LEOTEAU RUIZ, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministro de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda, pues, a su juicio, la misma cumple con todos los requisitos establecidos por ley para ello.

El Procurador Suplente señala en su escrito, que la presente demanda "no debió ser admitida ya que al momento de su presentación la demandante no había agotado la vía gubernativa, al encontrarse pendiente de resolver el recurso de reconsideración que interpuso el día 1° de septiembre de 1995, contra el Decreto de Personal N° 187 del 25 de julio de 1995."

El resto de los Magistrados que integran la Sala, concuerdan con los argumentos señalados por el Procurador, toda vez que se aprecia claramente de la lectura del expediente, que el apoderado judicial de la parte demandante incurre en un grave error al considerar agotada la vía gubernativa, pues no se ha comprobado el silencio administrativo, requisito esencial para poder recurrir en demanda contencioso administrativa ante esta Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943. Si bien es cierto que, que obra de fojas 25 a 27 del expediente, copia del recurso de reconsideración presentado ante el Ministro de Educación, no es menos cierto que, dentro de la demanda el silencio administrativo no ha sido debidamente comprobado. Ha sido jurisprudencia constante de esta Sala que el silencio administrativo debe comprobarse mediante

certificación o constancia en que se indique que dicho recurso no ha sido resuelto, o copia de un escrito en que se pida esa certificación. Aunado a lo anterior, el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, establece que en el caso, en que la parte demandante no pueda aportar copia autenticada del acto impugnado, debe ésta señalarlo claramente en la demanda y además debe solicitar al Magistrado Sustanciador que sea éste quien requiera de las oficinas administrativas, el original del acto impugnado, previa admisión de la demanda. En este caso específico, ninguna de estas situaciones ha sido debidamente acreditada dentro del expediente, por lo que, lo procedente es revocar el auto impugnado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN la Resolución emitida por la Magistrada Sustanciadora el 11 de diciembre de 1995 mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Doctor Rolando Murgas Torraza en representación de Damaris Leoteau Ruiz, para que se declare nulo por ilegal el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Educación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE OLGA MARTÍNEZ, Y PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 1061-94 DE 21 DE JULIO DE 1994, SUSCRITA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y LA NOTA N° 95-230 DE 25 DE ENERO DE 1995, EMITIDA POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Shirley y Díaz, actuando en nombre y representación de **OLGA MARTÍNEZ**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 1061-94 de 21 de julio de 1994, suscrita por el Rector de la Universidad de Panamá, y la Nota N° 95-230 de 25 de enero de 1995, emitida por el Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá.

La parte actora solicita además que se le pague o reintegren las sumas deducidas de su salario por razón de la ejecución de las medidas aprobadas por el Acuerdo N° 4-88 de 9 de junio de 1988, desde la fecha de la rebaja de sus emolumentos, es decir, desde el 9 de junio de 1988.

Por medio del primer acto impugnado, Nota N° 1061-94 de 21 de julio de 1994, el Rector de la Universidad de Panamá, Dr. Carlos Iván Zúñiga, remitió a la demandante copia del oficio N° 505-94 de 18 de julio de 1994, en respuesta a su solicitud de reconocimiento de algunos derechos con base en las sentencias de 11 de octubre de 1991 y 26 de octubre de 1993 de la Corte Suprema de Justicia. Mientras el segundo acto impugnado, N° 95-230 de 25 de enero de 1995, suscrito por el Vicerrector Académico, le remite la profesora **OLGA MARTÍNEZ** copia de la nota CJ-40-95 de la Dirección de Consultoría Jurídica, para comunicarle la opinión jurídica sobre la petición hecha a dicha entidad, y que es reiterativa de la primera respuesta. (Fs. 1-5).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 215 de 25 de

mayo de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 23-42); además, solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 20-22).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 48 numeral 4 de la Ley N° 11 de 1981 y 115 literal b) y 120 del Estatuto Universitario, cuyo texto transcribimos a continuación:

LEY N° 11 DE 8 DE JUNIO DE 1981.

"Artículo 48. Son derechos de los profesores y de los investigadores universitarios, además de los que les confieran el Estatuto y los reglamentos, los siguientes:
...
4. Estabilidad en su cargo, en tanto cumpla los requisitos y condiciones que la Ley, el Estatuto y los reglamentos señalen para el mismo ..."

ESTATUTO UNIVERSITARIO (Sancionado por el Consejo Directivo el 16 de junio de 1970).

"Artículo 115. En complemento de los derechos fundamentales que la Ley Orgánica de la Universidad señala al profesor universitario, el presente Estatuto le reconoce los siguientes:
...
b) Disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categorías académicas, de adecuada remuneración de acuerdo a su responsabilidad y dedicación y de apropiadas medidas de bienestar y seguridad sociales;
...
Artículo 120. Los profesores solamente podrán ser removidos por mala conducta, incompetencia o incumplimiento de los deberes, funciones y requisitos que establecen la Ley Orgánica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos universitarios."

En el concepto de la infracción de las normas transcritas el demandante indicó que las mismas se han violado por omisión, porque la profesora **OLGA MARTÍNEZ** ha cumplido hasta la fecha con la ley universitaria y demás reglamentaciones; como docente se ha ajustado en todo tiempo a su cátedra y a las exigencias pedagógicas que el país demanda; que no ha incurrido en causa legal que justifique el desconocimiento de sus derechos por parte de la Universidad de Panamá, toda vez que los actos que sirvieron de fundamento al Rector para disminuirle su salario, fueron declarados nulos por la Corte Suprema de Justicia; que la profesora **OLGA MARTÍNEZ** no sólo está amparada por su estabilidad, sino que también tiene derecho a que no se le desmejore su remuneración; y que las causas por las cuales se podía remover o desmejorar las condiciones de trabajo de la profesora **OLGA MARTÍNEZ**, están señaladas expresamente en el artículo 120 del Estatuto Universitario, y no le fue probada ninguna de ellas.

A estos cargos se opuso la señora Procuradora de la Administración, expresando que los artículos 48 numeral 4 de la Ley 11 de 1981 y 120 del Estatuto Universitario,no son aplicables al caso de la profesora **OLGA MARTÍNEZ** porque su nombramiento es temporal, por contrato y no regular; que a la profesora **OLGA MARTÍNEZ** se le ha respetado su estabilidad en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá como Profesora Asistente Temporal, y no ha sido separada o removida del mismo; que la profesora **OLGA MARTÍNEZ** fue contratada por el año lectivo y su contrato está sujeto a variaciones en la cantidad de horas. Señala además la Procuraduría que, si bien la Corte Suprema de Justicia declaró nulos los Acuerdos del Consejo Administrativo N° 4-88 de 9 de junio de 1988 y N° 5-88 de 15 de julio del mismo año, y en consecuencia restableció en sus puestos académicos y el salario correspondiente a un grupo de profesores (los demandantes), este fallo no le es aplicable a la profesora **OLGA MARTÍNEZ**, porque ésta no fungió como demandante y mal puede ahora solicitar el restablecimiento de sus derechos subjetivos, tal como lo dispone el artículo 27 de la Ley 135 de

1943; y que además, la posición que ocupaba la profesora **OLGA MARTÍNEZ** no fue obtenida por concurso.

Evacuados los trámites legales, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

Según se expresa en la Nota N° CJ-505-94 de 18 de julio de 1994, adjunta a la Nota N° 1061-94 de 21 de julio de 1994, impugnada en esta demanda, la profesora **OLGA MARTÍNEZ** invocó como fundamento de su solicitud, las sentencias de 11 de octubre de 1991 y de 26 de octubre de 1993. En la primera sentencia, se declara nulos, por ilegales, los Acuerdos N° 4-88 y 5-88 de 1988 en la parte que dispone que, "Los profesores asistentes e investigadores que estén jubilados, pensionados o sean supernumerarios y que en la actualidad presten servicios en la Universidad, solamente podrán ser contratados en atención a la escala salarial horaria que les corresponde, a tiempo parcial, hasta por un máximo de doce (12) horas, de acuerdo con las necesidades de las unidades académicas debidamente comprobadas." Esta sentencia ordena, además, restablecer a los demandantes **SUSANA R. DE TORRIJOS, LAURA ARANGO, JOAQUINA P. DE PADILLA, CARLOS GARCÍA, CARNIOLA GARCÉS, LUISA N. DE SANTOS, ELIA DE BIM, ELEUSIPIO HERRERA Y ALEJANDRO HERNÁNDEZ,** en sus respectivas categorías académicas de profesores titulares a tiempo completo, obtenidas mediante ascensos autorizados por el Consejo Académico; y ordena que a éstos se les reintegre las sumas deducidas de su sueldo por razón de la ejecución de las medidas aprobadas por el Acuerdo N° 4-88, desde el momento en que éstas se hicieron efectivas hasta la fecha en que fueran restituidos en sus cargos de profesores titulares de tiempo completo, con los incrementos salariales que se les ha reconocido, como compensación por el tiempo que haya sido efectivamente trabajado; a cuyo pago se condena a la Universidad de Panamá. (Negrita de la Sala) (Sentencia de 11 de octubre de 1991, en Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Julio Barba, en representación de Susana R. de Torrijos, Laura Arango, Joaquina P. de Padilla, Carniola B. de Garcés, Luisa A. de Santos, Elia V. de Bim, Carlos García, Eleucipio Herrera y Alejandro Hernández, contra los Acuerdos 4-88 y 5-88 de 1988, dictados por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá).

La segunda sentencia de 26 de octubre de 1993, "DECLARA que es ILEGAL la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por la Directora del Departamento de Español de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, al no responder a la solicitud formulada mediante memorial de 17 de octubre de 1991 y por ende, DECLARA que la Universidad de Panamá está obligada a restablecer al **Doctor Diógenes Cedeño Cenci** en su respectiva categoría académica de profesor titular, a tiempo completo, en la misma Cátedra que ocupaba cuando se hicieron efectivos los acuerdos 4-88 y 5-88 y que se le reintegre las sumas deducidas de su sueldo por razón de la ejecución de las medidas aprobadas por el acuerdo 4-88, desde la fecha en que las rebajas de sus emolumentos se hicieron efectivas, hasta la fecha en que sea restituido a su cargo como profesor titular, tiempo completo, con el incremento salarial correspondiente como compensación por el tiempo que haya sido efectivamente trabajado, a cuyo pago se condena a la Universidad de Panamá." (Negrita de la Sala) (Sentencia de 26 de octubre de 1993, en demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Shirley y Díaz en representación del Dr. Diógenes Cedeño, para que se declare nula, por ilegal, el silencio administrativo incurrido por la Directora del Departamento de Español de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, al no responder la solicitud formulada mediante memorial de 17 de octubre de 1991.)

La solicitud hecha por la profesora **OLGA MARTÍNEZ** a la Universidad de Panamá, demanda el reconocimiento y pago "de las sumas deducidas de su salario" por razón de la ejecución de las medidas aprobadas en el Acuerdo 4-88 de 9 de junio de 1988 y 5-88 de 15 de julio del mismo año. Estos acuerdos fueron declarados nulos, y como consecuencia de esa resolución se ordenó restablecer los derechos subjetivos violados de varios profesores, entre los cuales no está la demandante **OLGA MARTÍNEZ.** Tal como lo afirma la autoridad demandada, "el hecho de haberse declarado judicialmente la nulidad del Acuerdo 4-88 de 9 de junio de 1988, no beneficia a la Profesora OLGA MARTÍNEZ en cuanto a recibir el salario deducido por la ejecución de los mismos, pues, como ella no presentó demanda ni

intervino juicio, no obtuvo declaración a su favor ni puede considerarse reclamación alguna por estar prescritos los términos para recurrir contra dichos actos." (Fs. 5) Observa la Sala que, el reclamo de la profesora **OLGA MARTÍNEZ** fue interpuesto en el año de 1994, seis años después de ejecutados tales actos. Por tanto, mal puede ahora la demandante invocar como derecho las sentencias citadas, cuando a la profesora **OLGA MARTÍNEZ** no se le reestablece derecho alguno mediante las mismas.

En cuanto a los efectos de la sentencia de lo Contencioso Administrativo, el artículo 27 de la Ley 135 de 1943, preceptúa lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 27.** La revocatoria del un acto, resolución o disposición en vía contencioso-administrativa produce efecto general contra todos; pero el restablecimiento del derecho sólo aprovechará a quien hubiere intervenido en el juicio y obtenido esta declaración en su favor." (Subraya la Sala).

En cuanto a la violación de los artículos 48 numeral 4 de la Ley N° 11 de 1981 y 115 ordinal b) del Estatuto Universitario, que se refieren al derecho a la estabilidad que tienen los profesores e investigadores universitarios, cabe resaltar que este derecho está supeditado a que los mismos cumplan con los requisitos y condiciones que la Ley, el Estatuto y los reglamentos señalan, es decir, que tienen derecho al disfrute de la estabilidad consagrada **para la correspondiente categoría académica** a que pertenezcan. Según consta a foja 21, la profesora **OLGA MARTÍNEZ** labora en la Universidad de Panamá por contratos anuales desde el 22 de abril de 1982, y no ha probado haber ingresado al profesorado regular a través de concurso convocado al efecto, mediante el cual la clasificación y ascenso del profesor en una de las categorías se hace de acuerdo con la puntuación que obtiene, con base en el Cuadro de Evaluación del Capítulo V del Estatuto Universitario (art. 104). El profesorado de la Universidad se divide en dos grupos: los Profesores Regulares y los Profesores Especiales. La profesora **OLGA MARTÍNEZ** es por tanto, una Profesora Especial, es decir, ejerce la docencia universitaria en posiciones **no permanentes**, por lo que no le son aplicables las normas mencionadas.

Finalmente, al confrontar el cargo de violación del artículo 120 del Estatuto Universitario con los actos impugnados, la Sala considera que éste tampoco es aplicable al caso, toda vez que la profesora **OLGA MARTÍNEZ** no fue removida por ninguna de las causales mencionadas en esa norma, sino que le fueron aplicadas las medidas aprobadas en el Acuerdo 4-88 de 15 de julio de 1988, expedido por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, cuyos efectos se trata de impugnar extemporáneamente en la demanda que nos ocupa. (Fs. 21).

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que los actos impugnados no han violado el artículo 120 del Estatuto Universitario y deben negarse las pretensiones de la demandante.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Nota N° 1661-94 de 21 de julio de 1994, suscrita por el Rector de la Universidad de Panamá, y la Nota N° 95-230 de 25 de enero de 1995, emitida por el Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS ALBERTO JAIME DE FREITAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR

MANUEL SÁNCHEZ VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 43 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1994 Y N° DG-017 DEL 2 DE FEBRERO DE 1995, EXPEDIDAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Jaime De Freitas, actuando en nombre y representación del señor MANUEL SÁNCHEZ VARGAS, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución del 9 de noviembre de 1995, mediante la cual, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera revocaron la Resolución del 20 de junio del mismo año, que admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el recurrente contra la Resolución N° 43 del 15 de octubre de 1994, dictada por el Director de la Policía Técnica Judicial, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En el libelo de sustentación del recurso, el apoderado del actor indicó que la resolución impugnada debe revocarse, porque el recurso de apelación interpuesto contra la resolución mediante la cual se destituyó a su representado, está dentro de los medios de impugnación que pueden utilizarse en este tipo de procesos. El licenciado De Freitas se mostró contrario al criterio expuesto por el resto de los Magistrados de la Sala en el sentido de que la interposición de un recurso improcedente no interrumpe la prescripción de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción, pues, a su juicio, mientras se encuentre en trámite un recurso administrativo no corre el término de prescripción de la acción por estar la misma en ejercicio (fs. 48-49).

II. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N° 59 del 30 de enero de 1996, el señor Procurador de la Administración Suplente se opuso al recurso de reconsideración, manifestando que la Ley N° 16 de 1991, Orgánica de la Policía Técnica Judicial, en ninguno de sus artículos indica que el Procurador General de la Nación actúa como organismo de segunda instancia en los casos relativos a las destituciones de los funcionarios de esa institución. Por tanto, la tesis de que la interposición de los recursos inapropiados suspende la prescripción de la acción, es errónea, tal como indicó la Sala en sus fallos del 24 de agosto de 1994 y 20 de marzo de 1995.

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

En el presente caso se discute si la interposición de un recurso improcedente contra un acto administrativo, específicamente, un acto de destitución dictado por el Director de la Policía Técnica Judicial, interrumpe o no el término de prescripción para la interposición de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción.

Tal como expone el señor Procurador de la Administración Suplente, el punto que se discute en el presente recurso ya ha sido resuelto por el resto de los Magistrados de la Sala en oportunidades anteriores. En efecto, en los fallos del 24 de agosto de 1994 y 20 de marzo de 1995, se indicó que los actos de destitución dictados por el Director de la Policía Técnica Judicial no eran susceptibles de impugnarse por medio del recurso de apelación ante el Procurador General de la Nación, toda vez que la Ley N° 16 de 1991 no faculta a este último funcionario para resolver, como organismo de segunda instancia, las apelaciones de los funcionarios de la Policía Técnica Judicial que fuesen destituídos. En el último de los mencionados precedentes se indicó, que la interposición de un recurso improcedente contra dichos actos no suspende el término de prescripción de dos meses al que hace referencia el artículo 27 de la Ley N° 33 de 1946, ya que, de lo contrario, nos encontraríamos ante la constante utilización recursos improcedentes con el único propósito de extender el término establecido en dicha

norma y la consecuente dilatación de estos procesos.

A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, no existen motivos para variar el criterio sostenido en los precedentes citados, por lo cual debe confirmarse el fallo impugnado.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución del 9 de noviembre de 1995, mediante la cual se revocó la Resolución del 20 de junio de 1995, expedida por el Honorable Magistrado Sustanciador y no se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el señor MANUEL SÁNCHEZ VARGAS para que se declare nulas, por ilegales, la Resolución N° 43 del 15 de octubre de 1994, dictada por el Director de la Policía Técnica Judicial, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ZAMBRANO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 24 DE 14 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Genarino Rosas Rosas, quien actúa en representación de Luis Alberto Zambrano Rodríguez, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 24 de 14 de febrero de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Dentro de la demanda, el apoderado judicial de la parte actora ha solicitado a la Sala Tercera que suspenda provisionalmente los efectos del Decreto de Personal N° 24 de 14 de febrero de 1995, mediante el cual se destituye al señor Luis Zambrano del cargo de Subdirector Provincial de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas.

El artículo 74 de la Ley 135 de 1943, es muy claro al señalar que no habrá lugar a suspensión provisional en las acciones referentes a la destitución o cambios en el personal administrativo, salvo en los casos de empleados nombrados para períodos fijos. En este caso, el recurrente no ha logrado probar que su nombramiento era por un período fijo y que los perjuicios que sufriría con el acto son de muy difícil reparación, requisitos **sine qua non**, para que pueda suspenderse el acto administrativo y por lo tanto, debe negarse la petición arriba señalada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la petición de suspensión provisional formulada por el licenciado Genarino Rosas Rosas, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por el señor Luis Alberto Zambrano Rodríguez.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤==¤==¤==¤==¤==¤==¤==¤==¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ, AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD PRESENTADA EL 27 DE JUNIO DE 1994 (TÍTULOS PRESTACIONALES), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Arrocha, Blandón, Castro y Asociados,** en representación de **LUIS ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ,** ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por el Director General del Ferrocarril de Panamá, al no contestar la solicitud presentada el 27 de junio de 1994 (títulos prestacionales), y para que se hagan otras declaraciones.

El apoderado judicial de la parte demandante pretende que esta Sala declare nula, por ilegal, la negativa tácita de la Dirección General del Ferrocarril de Panamá, al no contestar dentro del término requerido la solicitud de títulos prestacionales por cambio de categoría presentada por su poderdante el 27 de junio de 1994. De igual manera, que se restituya el derecho afectado con dicha negativa tácita, así como también, que se declare que el mismo tiene derecho a una indemnización que cifra en el orden de los **DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00),** salvo mejor tasación pericial, en concepto de los daños y perjuicios ocasionados con el rechazo tácito por parte de la Administración del Ferrocarril de Panamá de la solicitud hecha por el señor **LUIS ARÉVALO.**

De la acción encausada se le corrió traslado a la entidad demandada, quien procedió a rendir su informe de conducta argumentando lo siguiente:

> "La Dirección General del Ferrocarril de Panamá no se ha pronunciado con respecto a la solicitud del 27 de junio de 1994, efectuada por el Sr. Luis Alberto Arévalo Rodríguez.
>
> No obstante lo arriba expresado mediante Resolución DGFP N° 008-93 del 8 de noviembre de 1993,se reconoció a los funcionarios del Ferrocarril de Panamá la reclasificación de los puestos realizada en 1981 por el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional, conforme a lo establecido en el Decreto N° 50 de 25 de noviembre de 1992 reglamentado por el Decreto Ejecutivo N° 34 del 9 de marzo de 1993 el cual se refiere al pago de Títulos Prestacionales."

La señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 359 de 24 de agosto de 1995, que corre a fojas 64-69 del expediente, solicitó a esta Superioridad que desestime las pretensiones de la parte actora, pues las mismas han sido satisfechas por la entidad demandada, y por tanto, carecen de asidero jurídico. Veamos lo que sobre el particular señalara la precitada funcionaria:

> "Resultan improcedentes los cargos que se dirigen contra las disposiciones citadas, toda vez que la Administración no negó la solicitud del demandante al reconocimiento y pago del aumento por cambio de categoría. Por el contrario, el 8 de noviembre de 1993 la

> Dirección General del Ferrocarril de Panamá, dicta la Resolución DGFP N° 008-93 por medio de la cual se reconoció a los funcionarios de esa Institución la reclasificación de puesto que realizara el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria Nacional en 1981. Para dar cumplimiento a esta obligación se procedió de conformidad con lo establecido precisamente en el Decreto de Gabinete N° 50 de 25 de noviembre de 1992, reglamentado por el Decreto Ejecutivo N° 34 del 19 de marzo de 1993; que ordenaban la cancelación de las obligaciones por servicios personales prestados al Estado, a través de los Títulos Prestacionales.
> ...
> No obstante lo dicho, ya hemos mencionado que se ha emitido la Resolución Administrativa N° 002-95 de 15 de febrero de 1995, por medio de la cual la Dirección General del Ferrocarril de Panamá acepta los derechos adquiridos por el ex-funcionario LUIS ARÉVALO R. con cédula de identidad personal N° 3-54-706, en torno al reconocimiento de la clasificación de puestos creada por la Autoridad Portuaria Nacional entre los años 1981-1992 y luego de realizadas las evaluaciones administrativas en torno a la clasificación de puestos, así como la evaluación económica que corresponde a fin de definir el status del funcionario considerando las categorías así como los niveles de etapa que le corresponde;' de manera que con este acto de la administración se ha satisfecho la solicitud presentada el día 27 de junio de 1994, ante las autoridades de Ferrocarril de Panamá."

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala procede a emitir las siguientes consideraciones finales.

La Sala observa que consta tanto en el expediente gubernativo, como en el contentivo del presente proceso, copia debidamente autenticada de la Resolución Administrativa N° 002-95 de 15 de febrero de 1995, mediante la cual la Dirección General del Ferrocarril de Panamá decidió:

> "... Que mediante el Decreto N° 31, del 5 de mayo de 1989, en su artículo Tercero establece que la Autoridad Portuaria Nacional será responsable por el funcionamiento, manejo y mantenimiento del Ferrocarril de Panamá en virtud de los Tratados Torrijos Carter, y la Resolución N° 134-81, del 30 de julio de 1981 del Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional establece que el Ferrrocarril de Panamá es una Dirección Especial de la Autoridad Portuaria Nacional; reconoce a los funcionarios del ferrocarril el pago de reclasificación de puestos realizada en 1981, por la Dirección de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria Nacional deberá ser conforme al Decreto N° 50 del 25 de noviembre de 1992, reglamentado por el Decreto Ejecutivo N° 34 del 9 de marzo de 1993, el cual se refiere al pago de Títulos Prestacionales.
>
> RESUELVE:
>
> ARTÍCULO PRIMERO: La Dirección General del Ferrocarril de Panamá acepta los derechos adquiridos por el ex funcionario LUIS ARÉVALO R. con cédula #3-54-706, seguro social #91-4310, en torno al reconocimiento de la reclasificación de puestos creada por la Autoridad Portuaria Nacional entre los años 1981-1992 y luego de realizadas las evaluaciones Administrativas en torno a la clasificación de puestos, así como la evaluación económica que corresponde a fin de definir el status del funcionario considerando las categorías que establece la clasificación de puestos así como los niveles de etapa que le corresponde."

De la resolución transcrita, se desprende que la Dirección General del Ferrocarril de Panamá al proceder a reconocer los derechos adquiridos por el recurrente, aprobó la solicitud de títulos prestacionales que presentara el señor **ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ**, el día 27 de junio de 1994, en torno al reconocimiento

de la reclasificación de puestos que fuera realizada por la Autoridad Portuaria Nacional, mediante la Resolución DGFP N° 008-93 de 8 de noviembre de 1993. Resolviéndose de esta manera la negativa tácita acusada de ilegal por el recurrente, objeto de la presente acción.

En estas circunstancias, la Sala debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones del recurrente, ya que a juicio de este Tribunal, en el presente caso, ha operado el fenómeno jurídico conocido como Sustracción de Materia, que constituye un medio de extinción de la pretensión, que se produce en razón de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de tener existencia por razones extrañas a la voluntad de las partes.

En este sentido, y como lo señaláramos en líneas anteriores, al proceder la Dirección General del Ferrocarril de Panamá al reconocimiento de los derechos adquiridos por el señor **ARÉVALO**, los cuales eran objeto de la presente solicitud de títulos prestacionales cuya negativa tácita se demandaba, estima la Sala que se pone de manifiesto la desaparición del objeto procesal.

También se observa que el demandante solicita que de ser declarada la nulidad por ilegal, de la negativa tácita de la Dirección General del Ferrocarril de Panamá, al no contestar dentro del término requerido, la solicitud de títulos prestacionales por cambio de categoría que presentara ante dicha institución, el 27 de junio de 1994, este Tribunal se sirva declarar que tiene derecho a una indemnización en concepto de daños y perjuicios ocasionados con el rechazo tácito por parte de la Administración del Ferrrocarril de Panamá de la referida solicitud, que oscila en el orden de **DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00).**

A juicio de la Sala Tercera no es dable acceder a dicha pretensión, ya que al no haber pronunciamiento de fondo sobre la pretensión del demandante, es decir, acerca de la legalidad o ilegalidad del acto acusado, no sería procedente resolver sobre este punto, en virtud de que tendría que entrar a determinarse la ilegalidad de la actuación administrativa, en este caso la negativa tácita de la Administración, para precisar si le asistía o no razón a la parte actora, y sólo entonces podría decretarse el pago de la indemnización por daños y perjuicios solicitada por el demandante, dado que la sustracción de materia entraña la extinción de la **pretensión** y esta cubre cualquier **prestación sustitutiva** vinculada con la causa a pedir.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Arrocha, Blandón, Castro y Young, en representación de LUIS ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por el Director General del Ferrocarril de Panamá, al no contestar la solicitud presentada el 27 de junio de 1994, (títulos prestacionales), y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE MIRATEX, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 214-04-0187 DE 16 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN, ACTOS CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Francisco Espinoza Castillo** en nombre y representación de **MIRATEX, S. A.** ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 214-04-0187 de 16 de febrero 1995, emitida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Colón, y actos confirmatorios.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos que exige la ley, para que la misma pueda ser admitida.

Observa el suscrito que el libelo carece de una formalidad, que sin el mismo no podría ser admitido.

La parte actora no presenta el acto acusado de ilegal debidamente autenticado, que consiste en la Resolución N° 214-04-0187 de 16 de febrero de 1995, tal como lo exigen los artículos 44 y 45 de la Ley 135 de 1943, los cuales dicen lo siguiente:

> "ARTÍCULO 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."
>
> "ARTÍCULO 45. Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicaciones en los periódicos oficiales, debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes."

Ya la Sala ha manifestado reiteradamente la importancia de aportar debidamente autenticado el acto que se acusa de ilegal, y en caso de que se le imposibilite obtener la documentación requerida previa comprobación de que se llevaron a cabo las correspondientes diligencias para su consecución, el interesado dentro de la demanda, expondrá el hecho y solicitará al Magistrado Sustanciador, que éste requiera a la oficina respectiva el documento que es motivo de controversia.

Por las anteriores consideraciones el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Francisco Espinoza Castillo en nombre y representación de MIRATEX, S. A.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, EN REPRESENTACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-060 DE 7 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Rivera, Bolívar y Castañedas, actuando en nombre y representación de **TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A. (antes CASA DE CAMBIO ESTRELLAMAR, S. A.)**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 213-060 de 7 de febrero de 1994, expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

El Magistrado Sustanciador, al examinar la demanda ha constatado que no cumple con los requisitos mínimos de Ley, ya que la designación de la parte demandada y de su representante no se hizo en forma correcta y se señaló al Ministerio de Hacienda y Tesoro como demandado y al Ministro respectivo como su representante, autoridad distinta a la que dictó el acto acusado de ilegal. El acto impugnado fue expedido por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro y en este sentido se ha omitido designarlo como la autoridad demandada. Por estas razones, el apoderado del actor no cumplió con lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 28 de la Ley N° 33 de 1946.

Como la demanda no cumple con las formalidades de Ley, no debe dársele curso a la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por el Magistrado que Suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS (antes RIVERA Y BOLÍVAR), en representación de TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A. (antes Casa de Cambio Estrellamar, S. A.), para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 213-060 de 7 de febrero de 1994, expedida por la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALCIBIADES GOVEA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 27 DEL MES OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE HERRERA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Luis Varela, actuando en nombre y representación del señor ALCIBIADES GOVEA, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 27 del mes de octubre de 1995, expedida por el señor Gobernador de la Provincia de Herrera.

Antes de admitir la demanda y por razones de economía procesal, el Magistrado Sustanciador estima necesario examinar si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En este sentido, se observa que el acto impugnado lo constituye una resolución dictada por el Gobernador de la provincia de Herrera dentro de un proceso correccional de policía (accidente de tránsito) en el que figuran como

partes ALCIBIADES GOVEA, Lina García, Ramón Elías Ruiz e Ilka Santos de Pinzón. Siendo lo anterior así, no es posible admitir la presente demanda, ya que de acuerdo con el numeral 2° del artículo 28 de la Ley N° 135 de 1943, las resoluciones que se dicten en los juicios de policía de naturaleza penal o civil no son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Luis Varela, en nombre y representación de ALCIBIADES GOVEA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 27, del mes de octubre de 1995, dictada por el señor Gobernador de a Provincia de Herrera.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARDS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 76-95 DE 17 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR EL COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alberto Lázaro Ramos, quien actúa en representación de Leeman Edward Davis Graham Leeman, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 76-95 de 17 de agosto de 1995, dictada por la Comisión de Vivienda N° 4, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Dentro de la demanda, el apoderado judicial de la parte actora ha solicitado a la Sala Tercera que suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución N° 76-95 de 17 de agosto de 1995, mediante el cual se resuelve, entre otras cosas, "desestimar por improcedente el incidente de nulidad interpuesto por Leeman Edward Davis Graham Leeman," así como también, "decretar el lanzamiento por morosidad" del mencionado señor.

Al examinar el criterio sustentado por el apoderado de la parte actora, la Sala, considera que no se da el supuesto alegado que amerite la suspensión provisional del efecto de la resolución impugnada. A juicio de quienes suscriben, y como consta a foja 1 del expediente, el recurrente se encuentra moroso en el pago del canon de arrendamiento, sin causa justificada que acredite el incumplimiento de esa obligación, por el término de "13 meses desde agosto de 1994, con la mensualidad de Doscientos Balboas (B/.200.00)," lo que hace un "total de B/.2,600.00."

De lo anterior, se colige que no puede accederse a la presente petición, toda vez que se cumple con uno de los requisitos esenciales para acceder a la misma, que establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, cual es, que exista "perjuicio notoriamente grave," que debe ser de difícil o imposible reparación.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la petición de suspensión provisional formulada por el licenciado Alberto Lázaro Ramos, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por el señor Leeman Edward Davis Graham Leeman contra la Comisión de Vivienda N° 4.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. GIOVANI A. FLETCHER, EN REPRESENTACIÓN DE GILMA Y. REYES N. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE SALUD DE PARQUE LEFEVRE DE 1995-1996, EMITIDO POR EL DIRECTOR MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD DE PARQUE LEFEVRE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Giovanni A. Fletcher, actuando en representación de **GILMA Y. REYES N.**, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto que se declare nulo, por ilegal, el Reglamento para la elección de la nueva junta directiva del Comité de Salud de Parque Lefevre de 1995-1996, emitido por el Director Médico del Centro de Salud de Parque Lefevre.

En la demanda, se solicita que se declare nulo el acto administrativo, "por medio del cual, el Director Médico del Centro de Salud de Parque Lefevre, dictó el `REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE SALUD DE PARQUE LEFEVRE (AÑO 1995-1996) ."

Sostiene el apoderado judicial de la parte demandante que, el acto impugnado ha infringido el artículo 1° del Decreto Ejecutivo 708 de 1992 y los artículos 7, 9 (literales "d" y "j") y 10 (número literal 1) del Decreto de Gabinete 401 de 1970.

El licenciado Giovanni Fletcher fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Que el Director Médico del Centro de Salud del Corregimiento de Parque Lefevre, en clara extralimitación de sus funciones legales y/o Administrativas expidió sendo `Reglamento para la Elección de Nueva Junta Directiva del Comité de Salud de Parque Lefevre (Año 1995-1996) . Acto seudo-Reglamentario que degeneró en un conjunto de Disposiciones de derecho público, que al no tener el funcionario motivador del mismo, la calidad Funcional para ejecutarlo: Pone en peligro la **JURICIDAD** y legalidad de los actos que se desprenden de aquel, Pudiendo hacer perecer las acciones, que en cumplimiento del mandato extrictamente (sic) legal y del querer popular motiven los habitantes del Corregimiento de Parque Lefevre.
>
> SEGUNDO: Que aún presumiendo la utópica capacidad del Funcionario Demandado, para emitir el demandado `Acto ; se deja ver fácilmente, en el artículo 23 del referido `**REGLAMENTO** , la clara omisión que sufre esta `norma en relación con el contenido expreso del artículo 5, del Decreto Ejecutivo N° 708 (De 7 de Septiembre de 1992) que reglamenta el Decreto de Gabinete N° 401 de 1970, al establecer dicho Decreto Ejecutivo la **OBLIGATORIEDAD** de que **GANARA LA NÓMINA** con mayor número de votos, siempre y cuando concurran a los comicios, Por lo menos, la mitad más uno de las personas inscritas en los libros de registros. Situación que acarrea inequibocamente (sic) un motivo de ilegalidad del Artículo 23 del mencionado `Acto Reglamentario del Director Médico de Parque Lefevre, puesto que el

> mismo OTORGA EL PODER DE DECRETAR LIBREMENTE EL TRIUNFO DE CUALQUIERA DE LAS PRESUNTAS NÓMINAS SIN VERIFICAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS, que efectivamente participaron en el referido sufragio."

El Director Médico del Centro de Salud de Parque Lefevre, envió el respectivo informe explicativo de conducta, mediante la Nota presentada ante la Secretaría de esta Sala el día 17 de octubre de 1995. En dicha nota, se expresa de fojas 18 y 19, lo siguiente:

> "El Reglamento utilizado para las elecciones del Comité de Salud del Centro de Salud de Parque Lefevre, nunca viola los artículos del Decreto 708, sino más bien, es un instrumento de guía a las elecciones que se llevarán a cabo, y en la cual se establecen algunos puntos necesarios que el Decreto 708 no contempla, tales como la fecha de votación, hora de inicio y terminación de las elecciones, período de fecha de reinscripción en el libro de registro de los residentes del Corregimiento, cantidad de miembros que compondrían el Tribunal de Elección, procedimiento para la escogencia del color de la papeleta de las nóminas, condiciones que debe tener la papeleta a fín (sic) de tener la validez requerida; puntos éstos que no son desarrollados o contemplados en el Decreto Ejecutivo 708, y que no violan el espíritu ni la letra del mismo, más bien, son fundamentales a fín (sic) de llevar a cabo las elecciones de cualquier Comité de Salud;
>
> Que las autoridades de Salud, están facultadas para llamar a elecciones, según el Artículo 4° del Decreto Ejecutivo 708 ...
>
> Que el recurrente manifiesta que el conteo de votos fue realizado por personas distintas a las que componían el Tribunal de Elecciones, órgano éste encargado de realizar dicha función de acuerdo al reglamento elaborado para las respectivas elecciones; no obstante, el Ministerio de Salud, observa que las actas levantadas, una vez contados los votos, fueron firmadas por las personas que representaban a las autoridades de salud del Centro de Salud, y que según el reglamento son las que componen el Tribunal de Elecciones, además avalan la legalidad de las actas, y en consecuencia, las elecciones;
>
> Que el Reglamento, que se dice ser ilegal y que no ha sido demandado fue debidamente firmado por ambas nóminas que participarón (sic) en la contienda electoral, y antes de ser firmado fue discutido y aprobado por los participantes, y si, esto es así no veo la razón por la cual sea ahora que se esté demandando la ilegalidad de dicho Reglamento."

El Procurador de la Administración (Suplente), contestó la demanda mediante la Vista N° 473 de 8 de noviembre de 1995, en la cual apoya las pretensiones de la parte demandante, por considerar que el acto administrativo citado es ilegal.

La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) pasa a resolver la presente controversia.

Observa la Sala, que la demanda de nulidad que nos ocupa, se centra en que el Director Médico del Centro de Salud de Parque Lefevre dictó sin tener facultad para ello, el Reglamento para las Elecciones de la Nueva Junta Directiva del Comité de Salud de Parque Lefevre para el período 1995-1996 y que, además, en el aspecto formal del mencionado reglamento, no se desarrolló de acuerdo con lo que establece el Decreto Ejecutivo 708 de 1992.

Concuerda la Sala, con los señalamientos del Procurador de la Administración (Suplente), pues, se deduce del expediente administrativo, que efectivamente, el Director Médico del Centro de Salud de Parque Lefevre, al anunciar la celebración de elecciones y además, dictar, sin tener competencia

para ello, el Reglamento para la elección de la nueva Junta Directiva del Comité de Salud de Parque Lefevre para el período comprendido entre los años 1995 y 1996. Lo anterior se fundamenta en lo que establece el número ordinal 11 del artículo 629 del Código Administrativo, es claro al señalar que "le corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: ... 11. Expedir los reglamentos convenientes para la ejecución de las leyes cuando sea necesario."

Aunado a ello, se aprecia que, si bien es cierto que, como lo señala la autoridad demandada en este caso, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 708 de 1992 establece que serán "las autoridades de salud", quienes anunciarán, la celebración de elecciones para escoger la Junta Directiva, no es menos cierto que un Director Médico de un Centro de Salud no es considerado como un miembro del Comité de Salud. Por el contrario, forma parte de un grupo que le brinda orientación funcional y técnica a los miembros de dicho comité, tal como se infiere de los artículos 11 del Decreto de Gabinete 401 de 1970 y 14, 15 y 16 del Decreto Ejecutivo N° 708 de 1992. Además, cabe señalar que tal como lo señala el número literal 1 del artículo 10 del Decreto de Gabinete N° 401 de 1970, la Asamblea General de los Comités de Salud, es el órgano competente para nombrar a la Junta Directiva de dicha comunidad de salud. Proceden, pues, los cargos alegados por el demandante.

Adicionalmente, se observa que en el mencionado reglamento se establece en el artículo 23 que, la nómina triunfadora en las elecciones, será aquella que "resulte con el mayor número de votos emitidos" lo que, a todas luces contradice lo que establecen los artículos 9 (ordinal d) del Decreto de Gabinete N° 401 de 1970 y el 5 del Decreto Ejecutivo N° 708 de 1993, puesto que en ellos se señala que se hace necesario que exista quórum de la Asamblea General, es decir, la mitad más uno de los miembros de sus miembros, para escoger la nueva Junta Directiva del Comité, por lo que, se ha producido la infracción aducida por la parte actora.

Por todas las anteriores consideraciones, esta Sala arriba a la conclusión de que lo procedente es, declarar la nulidad del acto impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES ILEGAL el Reglamento para la elección de la nueva junta directiva del Comité de Salud de Parque Lefevre de 1995-1996, emitido por el Director Médico del Centro de Salud de Parque Lefevre.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO N° 232-94 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Ana Belfon**, actuando en su calidad de apoderada judicial del **MUNICIPIO DE PANAMÁ** conforme a poder otorgado por la Alcaldesa del Distrito Capital, presentó demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nulo por ilegal el Contrato N° 232-94 suscrito entre el Municipio de Panamá y la Empresa **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.**

Posteriormente se sustituyó el poder otorgado a la licenciada **BELFON**, mismo que fue otorgado al licenciado **DIONISIO SÁNCHEZ** para representar al Municipio de Panamá en esta controversia.

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado resulta violatorio de los artículos 75 y 50 del Código Fiscal, así como del artículo 11 de la Ley 106 de 1973.

De la demanda instaurada se corrió traslado a la Señora Alcaldesa del Distrito de Panamá para que rindiese un informe explicativo de actuación en este caso, mismo que reposa a folios 27-29 del expediente (cfr. Nota N° 644-95-DC y J de 26 de junio de 1995).

También se corrió traslado de la demanda presentada a la empresa **PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A.** por ser parte interesada en la controversia.

De igual forma se dio traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien mediante Vista Fiscal N° 482 de 14 de noviembre de 1995 que obra a folios 110-127 del expediente, ha solicitado al Tribunal que se conceda la pretensión de la parte actora, al considerar que la celebración del contrato 232-94 efectivamente se realizó con la pretermisión de requisitos legales, produciéndose las transgresiones invocadas por el demandante.

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para este tipo de negocio, procede la Sala Tercera a desatar el litigio.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ACUSADO

Posterior al acto de interposición de la demanda, el recurrente presentó una solicitud especial con el fin de que fueran suspendidos, provisionalmente, los efectos del acto acusado. La parte actora sustentó básicamente la petición de suspensión con fundamento en dos argumentos básicos:

1. Los perjuicios que el acto ocasionaba:

Indicó el actor que el Municipio de Panamá bajo la Administración de la señora Mayín Correa concibió el proyecto Mi Pueblito (constituido por un complejo de tres bloques de edificios con un costo de construcción de B/.470,395.53) como una empresa turística municipal autofinanciable, con el objetivo de servir como Centro Nacional de las distintas expresiones del Folklore Nacional, y que la Administración Municipal a cargo de la señora **Mercedes García de Villaláz**, decidió adjudicar directamente, mediante Resolución Alcaldicia N° 43 de 8 de agosto de 1994 a la empresa **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.** por espacio de cinco (5) años la concesión de la explotación del restaurante bar de dicho Proyecto, ubicado en el bloque B del Complejo Turístico y Cultural, en perjuicio de los intereses municipales.

Que este perjuicio se debía, a que en el contrato celebrado se estipuló que el concesionario pagaría al Municipio de Panamá la suma de B/.475.00 mensuales, mientras que en avalúo del local del bar y restaurante efectuado más recientemente se determinó que el canon de alquiler real de dicho local oscilaba entre B/.1,000.00 y B/.1,500.00 balboas mensuales, lo que dejaba en evidencia el canon ínfimo que se estableció y el perjuicio económico que se le ha ocasionado al Municipio de Panamá.

2. Ilegalidad de la actuación de la Alcaldía Municipal

Según el actor, se cambió en forma ilegal el término de duración del contrato de concesión de dos (2) años estipulado en el pliego de cargos que sirvió de base para la contratación del arrendamiento a cinco (5) años, y con la autorización concedida por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, por medio de la Resolución N° 944 de 30 de agosto de 1994, la administración municipal de ese momento procedió a suscribir el contrato N° 232-94 con la empresa **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.**, para la concesión comercial del bar y restaurante ubicado en el Proyecto Turístico y Cultural, sin haber obtenido dicho contrato

la autorización del Consejo Municipal, tal como lo exige el artículo 17, numeral 11 de la ley 106 de 1973.

Sobre los puntos invocados, la Sala Contencioso Administrativa, en resolución de 31 de agosto de 1995 señaló lo siguiente:

> "En primer lugar en lo que respecta a que ha quedado demostrado que el Contrato N° 232-94, acusado de ilegal le está causando perjuicios económicos irreparables al Municipio de Panamá, es importante indicarle al peticionario que no se evidencia de manera palmaria que se esté causando dichos perjuicios tal como lo aduce. Esto lo afirmamos, dado que al encontrarnos frente a una solicitud de suspensión, esta Corporación Judicial sólo puede entrar valorar aquellos elementos que hayan sido presentados y probados por el demandante, situación ésta que no se ha verificado dentro de este caso que nos ocupa.
>
> Efectivamente no basta aseverar que el alquiler actual del local que asciende a B/.475.00 mensuales, es un canon irrisorio en comparación con lo que debía cobrarse que se eleva de B/.1,000.00 a B/.1,500.00 mensuales. Este último avalúo se estimó luego de celebrado el contrato que es motivo de controversia, es decir el 29 de junio del año que decurre, al igual que el que consta en el informe expedido por la Contraloría General de la República que tiene la misma fecha. (Ver fojas 34 y 52 respectivamente).
>
> Dada la especialidad de la medida precautoria solicitada bajo estudio, el **MUNICIPIO DE PANAMÁ** no ha demostrado que el canon de arrendamiento de B/.475.00 le ha causado gravísimos perjuicios económicos; ni siquiera menciona en qué consisten esos perjuicios, por lo que debemos indicar que lo afirmado por el petente carece de fundamento.
> ...
> Por último, ya este Tribunal de lo Contencioso Administrativo en reiteradas ocasiones ha manifestado que al no constatarse fehacientemente el perjuicio alegado, no puede la Sala adoptar una Suspensión Provisional basándose sólo en apreciaciones de la parte recurrente. En este caso, el actor señala que el Contrato N° 232-94 fue adjudicado en abierta arbitrariedad. No está de más mencionarlo, sin que se considere como adelanto de un juicio valorativo del presente caso, que a prima facie y de acuerdo a las normas que se consideran violentadas por el petente, no se observa una transgresión flagrante del ordenamiento jurídico para que proceda por esta causa la suspensión del contrato administrativo como medida precautoria."

De esta manera, la Sala Tercera puntualizó en la resolución pretranscrita, que al menos al momento de presentada la demanda, sin que se contase con el material probatorio necesario y en un análisis muy general de la situación, no se vislumbraba **prima facie** la urgencia de suspender los efectos del acto demandado.

En esta etapa del proceso, una vez cumplidos todos los trámites procesales, este Tribunal está en condiciones de examinar el fondo de la controversia planteada, a lo que se procede de seguido:

ANTECEDENTES A LA EMISIÓN DEL ACTO ACUSADO

Para un mejor entendimiento de la controversia jurídica que subyace en el negocio sometido al conocimiento de esta Sala, es preciso realizar un análisis de las circunstancias que acontecieron previas la emisión del acto de celebración del contrato administrativo cuya ilegalidad se acusa.

Los hechos que condujeron a la celebración del contrato 232-94 pueden subsumirse de la siguiente manera:

1. el Consejo Municipal del distrito de Panamá mediante Acuerdo N° 113 de 5 de noviembre de 1993 autorizó a la Administración del Municipio para que mediante Licitación Pública otorgara en concesión unos bienes municipales, entre ellos, los del Restaurante bar del proyecto "Mi Pueblito".

2. Se efectuaron dos llamados a Concurso de Precios para recibir propuestas para otorgar la Concesión del Restaurante Bar, pero tales llamados fueron declarados desiertos, al haberse presentado sólo una propuesta válida.

3. Al ser declarados desiertos estos actos, la Alcaldía solicitó al Ministerio de Hacienda y Tesoro la autorización para contratar directamente con el señor VERNON SALAZAR, autorización que le fue concedida por dos años, mediante Resolución N° 633 de 1994 (cfr. foja 91 del cuaderno de pruebas). Sin embargo, el prenombrado señor, por razones que tuvo a bien explicar, declaró su desistimiento de la adjudicación de la concesión.

4. En estas circunstancias, la Alcaldesa Mercedes García de Villaláz resuelve adjudicar directamente a una empresa que se mostró interesada en el proyecto: **Proveedora Atlántico Pacífico S. A.**, la concesión de la explotación del restaurante bar por el término de cinco años, mediante Resolución Alcaldicia N° 43 de 8 de agosto 1994. (Cfr. foja 109 del cuaderno de pruebas).

5. De inmediato la Alcaldía solicitó al Ministerio de Hacienda y Tesoro que se modificara la Resolución N° 633 que había autorizado la contratación por dos años con el señor SALAZAR, para que en su defecto se autorizara contratar directamente con la empresa **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.** la concesión de la explotación del restaurante bar por el término de cinco años, lo cual se concede mediante Resolución N° 944 de 30 de agosto de 1994 (visible a foja 113 del cuaderno de pruebas).

5. Posterior a este acto, se celebra el contrato N° 232-94 entre la empresa antes mencionada y la Alcaldía Municipal del Distrito de Panamá., contrato que reposa a folios 1-4 del cuaderno principal.

CARGOS DE ILEGALIDAD ADUCIDOS

Según se desprende de los cargos presentados por el demandante, el contrato N° 232-94 resulta contrario al ordenamiento legal, básicamente, porque nunca quedó perfeccionado, y sin embargo, la Empresa concesionaria ha venido ejerciendo los derechos de concesionaria desde la fecha de celebración del contrato, y lo seguirá haciendo por el término de cinco años que vence en el año 1999.

El actor en este punto sustenta la acusada ilegalidad de la actuación de la administración municipal, invocando dos situaciones medulares:

a. que en las condiciones del Pliego de cargos de la solicitud de precios se establecía un término de duración de la concesión de dos años, mientras que al momento de contratarse directamente con la empresa **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.** el tiempo de concesión se aumentó a cinco años; y

b. que el Consejo Municipal nunca autorizó el Contrato N° 232-94, procedimiento legal que es de imperativo cumplimiento para perfeccionar este tipo de actos de la administración municipal, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal y la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal.

El primer cargo de ilegalidad aducido por el actor descansa en el texto del artículo 75 del Código Fiscal, cuyo contenido se reproduce de seguido:

> "Artículo 75. Son absolutamente nulos los contratos en que tengan interés la Nación y que se hayan celebrado contraviniendo las disposiciones de este Código.
>
> Cualquiera persona podrá demandar ante el Tribunal competente la declaratoria de nulidad de que se trata y el Fiscal respectivo tiene la obligación de hacerlo a requerimiento de persona interesada o del

Órgano Ejecutivo."

El demandante ha señalado que la norma **ut supra** resulta violada, toda vez que en el proceso de contratación entre **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.** y el Municipio de Panamá fueron transgredidas las disposiciones que en esta materia contiene el Código Fiscal.

Pese a que el recurrente no conecta la acusada violación del artículo 75 con ninguna otra norma del Código Fiscal de manera específica, la Sala procede a examinar el siguiente cargo de violación que recae en el artículo 50 del referido cuerpo legal en asocio con el artículo 75, dada la estrecha vinculación que existe entre ambas normas.

La actual Administración Municipal considera que el artículo 50 del Código Fiscal ha sido violado por falta de aplicación en este caso, toda vez que el contrato N° 232-94 no contó con la aprobación del organismo o autoridad que debía autorizar dicho contrato: el Consejo Municipal de Panamá.

El texto legal cuya violación se acusa, en su parte pertinente, es del tenor siguiente:

"Artículo 50 ...

Cuando la celebración del Contrato está sujeta a autorización o aprobación del Consejo de Gabinete, Consejo Nacional, la Junta Directiva, Comité Ejecutivo o cualquier otro organismo o autoridad, la adjudicación definitiva de la Licitación no se considerará perfeccionada hasta que tales autorizaciones o aprobaciones se hayan obtenido ...

La Sala Tercera deberá determinar en consecuencia, si la normativa de Régimen Municipal efectivamente compele a la administración Municipal para que todo contrato celebrado cuente con la aprobación de la Cámara Edilicia en vías de que la contratación quede perfeccionada.

El artículo 17 de la Ley 106 de 1973, en su numeral 11, fija entre la competencia del Consejo Municipal "**autorizar y aprobar la celebración de contratos sobre Concesiones y otros modos de prestación de servicios públicos municipales y lo relativo a la construcción y ejecución de obras públicas.**"

El demandante acusa la violación directa por falta de aplicación del texto citado, toda vez que la Administración Municipal no presentó ante el Consejo Municipal el Contrato N° 232-94 suscrito entre **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A. y la Administración Municipal.**

INFORME DE CONDUCTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Si bien fue la señora Alcaldesa MAYÍN CORREA quien en representación del Municipio instauró la demanda que nos ocupa, se le solicitó el informe de actuación que por exigencia de la Ley debe rendir el funcionario que representa a la entidad demandada.

La actual Alcaldesa del Distrito Capital, en el referido informe, realiza una sinopsis de los hechos que antecedieron a la suscripción del contrato N° 232-94, manifestando que ante las irregularidades en el proceso de contratación, y habida cuenta de que tal como el propio Consejo Municipal ha certificado no se sometió a su aprobación dicho contrato, se autorizó a la Alcaldesa para que ejerciera las acciones legales en lo relativo a la nulidad del contrato.

En efecto, la Alcaldesa Municipal, autorizada por el Consejo Municipal mediante Resolución N° 38 de 24 de abril de 1995 ejerce la acción legal que nos ocupa, con el fin de que se anule la contratación administrativa, que según los estudios de la Dirección de Asesoría Legal del Municipio nació viciada, por las razones ampliamente expuestas en la demanda.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA EMPRESA PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A.

La empresa **Proveedora Atlántico Pacífico, S. A.**, mediante su apoderado judicial, licenciado Eusebio Marchosky interviene como parte interesada en el proceso contencioso entablado por la actual Administración Municipal, y en escrito visible a folios 97-108 del expediente principal solicita que se niegue la declaratoria de nulidad pedida, al considerar que dicha petición carece de fundamento legal.

La razón fundamental que soporta jurídicamente la oposición del letrado a la declaratoria de nulidad del contrato N° 232-94 se centra en la circunstancia de que un estudio detenido del numeral 11 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973 permite inferir que sólo requieren la aprobación de del Consejo Municipal aquellos contratos sobre concesiones de servicios públicos, y no cualesquiera otros que celebre la autoridad ejecutiva de la administración municipal, como acontece en el negocio sub-júdice, en que la naturaleza del contrato suscrito evidencia que se trata de un arrendamiento o concesión de tipo comercial.

Entre los puntos más relevantes del extenso escrito, el apoderado de la empresa concesionaria ha vertido los siguientes conceptos:

> "En primer lugar el Contrato N° 232-94, celebrado entre la Alcaldía del Distrito de Panamá y la sociedad anónima Proveedora Atlántico Pacífico, S. A. no se celebró para la construcción ni la ejecución de una obra pública municipal. Luego de esta exclusión, el examen por hacer se reduce al resto de la disposición transcrita, es decir, a la competencia exclusiva de los Consejos Municipales en la función de "Autorizar y aprobar la celebración de Contratos sobre concesiones y otros modos de prestación de servicios públicos municipales."
>
> Lo que está sujeto a la autorización (en este caso la autorización es previa al otorgamiento de la concesión) y a la aprobación (en este caso la aprobación se hace con posterioridad al acto de otorgamiento), son los contratos mediante los cuales se hacen concesiones para la prestación de servicios públicos y a los otros medios, distintos de los contratos, mediante los cuales se hagan esta misma clase de concesiones, como por ejemplo, la concesión para la prestación de un servicio público municipal que fuese hecha mediante una simple resolución administrativa. ...
>
> La explotación comercial de un restaurante bar no constituye ni puede constituir la prestación de un servicio público municipal, y que por tal motivo, un contrato mediante el cual se hace esa mal llamada concesión, si es que se le quiere llamar así (concesión comercial), requiera tanto autorización previa como aprobación posterior por parte del Consejo Municipal respectivo, cuando ni siquiera requiere de una sola de ellas. ...
>
> Pero aún en el remoto evento de que se pueda considerar que se está en presencia de una verdadera concesión comercial, ésta jamás puede considerarse ni asimilarse a una concesión para la prestación de un servicio público municipal, porque la realización de actividades comerciales, jamás puede considerarse comprendida dentro de la prestación de servicios públicos municipales."

OPINIÓN EMITIDA POR LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Señora Procuradora de la Administración, al adelantar su examen en relación a la supuesta violación del artículo 17 de la Ley 106 de 1973 coincide con lo expuesto por la parte demandante, indicando:

> "Es preciso indicar que el artículo 17, de la Ley 106 de 1973, que señala la Competencia Exclusiva del Consejo Municipal sobre las

funciones que allí se enumeran, exige -en el numeral 11- **la autorización y aprobación** de los contratos sobre concesiones. Señalamos ésto, porque en este caso es importante el papel que juega la conjunción copulativa "y", cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Ello implica que debe dársele cumplimiento a uno y otro requisito; es decir, a **la autorización y a la aprobación** de los contratos de concesiones.

Observamos que el Lic. Eusebio Marchosky, al contestar la demanda señala que:

... el Contrato N° 232-94, celebrado entre la Alcaldía del Distrito de Panamá y la sociedad anónima Proveedora Atlántico-Pacífico, S. A. no se celebró para la construcción ni la ejecución de una obra pública municipal" ...

Sobre ese particular, debemos señalar que el artículo 17, numeral 11, de la Ley 106 de 1973 se refiere a la aprobación y autorización de la celebración de contratos sobre:

1. Concesiones
2. Otros modos de prestación de servicios públicos municipales.
3. Lo relativo a la construcción y ejecución de obras públicas.

Decir que este numeral trata exclusivamente de construcción y ejecución de obra pública municipal, es desconocer el resto del texto que conforma el numeral 11, y que se refiere a los Contratos sobre Concesiones (en general) y de otros modos de prestación de servicios públicos municipales.

No es cierto, que la autorización (primero) y la aprobación (posterior) únicamente deba aplicarse a los contratos mediante los cuales se hacen concesiones para la prestación de servicios públicos, como lo indica el Lic. Marchosky, porque nuevamente omitiría parte del texto del numeral 11, del artículo 17 de la Ley 196 de 1973, al que nos hemos venido refiriendo.

La concesión del Restaurante Bar se fundamenta en esta norma, porque la misma contempla -en principio- la autorización y aprobación de la celebración de contratos de concesiones en términos generales, por lo que una concesión comercial, como lo es ésta no puede ni debe escapar al cumplimiento de los requisitos que en esta norma se señalan."

En estas circunstancias, una vez atendidas las consideraciones de las partes en el proceso, la Sala Tercera entra a decidir la controversia jurídica planteada y a externar lo siguiente:

DECISIÓN DE LA SALA

Esta Superioridad advierte que el punto medular de la controversia que nos ocupa descansa en determinar:

1. Si la Alcaldesa del Distrito de Panamá al momento de suscribir el contrato N° 232-94 tenía la obligación de presentarlo al Consejo Municipal para su aprobación y perfeccionamiento. Para ello, es necesario deslindar:

a) qué tipo de contrato administrativo suscribió la administración Municipal con la empresa Proveedora del Atlántico Pacífico, S. A., toda vez que los distinguidos letrados que intervienen en la controversia ponen en tela de duda si se trata de un contrato de arrendamiento, o de concesión;

b) si el contrato suscrito, por su naturaleza y el fin perseguido, se encontraba comprendido entre aquellos mencionados en el numeral 11 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973 que exigen la aprobación del Consejo Municipal de Panamá.

2. Será preciso para tales fines, realizar un rápido bosquejo de la legislación sobre Régimen Municipal vigente, desarrollado por la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984.

EL MUNICIPIO COMO PERSONA JURÍDICA

La doctrina administrativista más aceptada, representada entre otros por Alberto Elquera señala que "El Municipio es, jurídicamente, una persona de Derecho Público, constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio determinado, que administra sus propios y peculiares intereses y que depende siempre, en mayor o menor grado, de una entidad pública superior, el Estado Provincial o Nacional."

En la legislación positiva panameña, el Municipio es la entidad administrativa del distrito y presenta las características propias de un gobierno local tal como lo concibe la Constitución Nacional: con representación popular partidista; flexibilidad para su organización administrativa; patrimonio y poder tributario propios; capacidad de ejecución y la separación de poderes dentro de la misma administración municipal, con lo que sus organismos de gobierno y administración están bien definidos.

Esta separación de poderes significa que el poder de administración está compartido entre el cuerpo deliberante que es el **Consejo Municipal** y el ejecutivo, representado por el **Alcalde Municipal**.

I. EL CONSEJO MUNICIPAL

Esta Corporación o Cámara Edilicia, integrada por los representantes de corregimiento, está facultado, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 106 de 1973 para "regular la vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos".

Con base a la referida disposición, los Consejos Municipales tienen competencia exclusiva para el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas por el artículo 17 de la Ley 106 de 1973.

Entre estas atribuciones se advierte que el Consejo Municipal tiene amplio control sobre el punto medular que constituye la base y finalidad de la administración municipal: la formulación de políticas que contribuyan al desarrollo **integral** del distrito; la creación de empresas municipales para la explotación de bienes y servicios; la promoción de contratos cuya finalidad sea la explotación de bienes y servicios, su autorización y aprobación; la construcción de obras públicas municipales, así como plazas, parques etc.

II. EL ALCALDE MUNICIPAL

Funcionario Jefe de la Administración Municipal desde el punto de vista ejecutivo. (cfr. artículo 239 de la Constitución Nacional). Sus atribuciones se pueden agrupar entre aquellas que le corresponden como Jefe de la Administración Municipal, y las de jefe de Policía en el Distrito.

Las primeras, que son la que nos interesan para los fines de este estudio, se encuentra contenidas en el artículo 45 de la Ley 106 de 1973, y pueden subsumirse de manera muy general en: presentar proyectos de Acuerdo al Consejo Municipal sobre el Presupuesto, planes para el desarrollo del distrito, nombrar y remover funcionarios municipales, promover el progreso de la comunidad municipal, dictar decretos e asuntos de su competencia y otros señalados en las Leyes y Acuerdos Municipales.

Esta apretada síntesis reitera y subraya el carácter ejecutivo de la administración del alcalde municipal.

En párrafos anteriores esta Sala ha hecho referencia a que una de las finalidades básicas de la administración municipal es lograr el desarrollo **integral** de la comunidad.

Este punto de vista es sostenido por las doctrinas de administrativistas y sociólogos eminentes como Adolfo Posada, Eduardo Tamayo, Oldegar Franco Vietera y Adriano Carmona Romay, quienes entienden el Municipio como una comunidad o sociedad local a la que el Estado reconoce autonomía jurídico-política, administrativa y fiscal, que actúa bajo un sentido de solidaridad en la búsqueda del interés común y satisfacción de las necesidades de la vecindad.

Conforme se desprende de los estudios sobre el Proyecto Turístico "Mi Pueblito", esta obra del Municipio de Panamá es un complejo cultural, recreativo y turístico que expone y promueve, para beneficio de nacionales y extranjeros las distintas formas y expresiones del folklore nacional.

Pertenecen al complejo un número plural de locales en que operan, además de las atracciones meramente culturales (pequeña iglesia, etc.), distintos establecimientos comerciales que constituyan la fuente del auto-financiamiento del proyecto (a través de su concesión), tales como la tienda de artesanías, abarrotería, venta de jugos y frutas y **un bar restaurante.**

Según consta en autos, específicamente en el cuadernillo de pruebas que se adjunta, el Consejo Municipal profirió en el año 1993 el Acuerdo N° 113 por el cual se otorgaba en concesión la explotación de ciertos bienes municipales, entre ellos el **bar-restaurante de Mi Pueblito**. (F. 1 del cuaderno de pruebas).

Entre las **condiciones especiales** para la contratación de la concesión de dicho local (f. 36ss) queda claramente consignado que la solicitud incluía la explotación de la actividad del bar restaurante como el arrendamiento del mismo. De hecho, quedó pactado que la entrega física del área o local otorgado en la concesión se haría efectiva sólo cuando estuviese firmada y refrendado el contrato de concesión.

De esta manera se aborda el primer punto sugerido por el apoderado legal de la empresa Proveedora del Atlántico Pacífico S. A. en el sentido de que el contrato que nos ocupa **no era un contrato de concesión**, **sino de arrendamiento.**

Disiente la Sala de lo expresado por el letrado, toda vez que un estudio pormenorizado del contrato suscrito y de sus antecedentes inmediatos, revelan que el Consejo Municipal autorizó la concesión de **bienes municipales**, lo que incluía no sólo la explotación de la actividad, sino también el arrendamiento del espacio físico donde ésta se desarrollaría. Pero ello no desvirtúa la existencia de la **concesión** que subyace en el contrato.

En efecto, definido por el destacado administrativista JOSÉ ROBERTO DROMI, la concesión es un contrato por el cual el Estado encomienda a una persona física o jurídica, privada o de derecho público, la organización, funcionamiento de un bien o servicio por un lapso determinado, donde esta persona **concesionario** actúa por su propia costa y riesgo y la responsabilidad que derive de hechos que concreten el "ejercicio" de la concesión corresponde al concesionario. Su labor se retribuye con el precio pagado por los usuarios o beneficiarios.

La concesión implica en favor del concesionario una delegación por parte de la Administración Pública, que sin embargo conserva la dirección y control. El concesionario actúa bajo la severa y constante vigilancia de la autoridad concedente. Al término del contrato, los bienes afectados a la prestación del servicio pasan al dominio del Estado, con o sin indemnización.

Estas características se encuentran presentasen el contrato cuya nulidad se solicita, a saber:

En la cláusula primera se especifica que se suscribe **contrato de concesión** para la explotación de la actividad comercial del Restaurante Bar para que el particular gestione por **su cuenta y riesgo el servicio**; el concesionario **no puede vender ningún artículo fuera de los específicamente señalados en el contrato**; la renovación del contrato se ajustará a las disposiciones del **Reglamento de Concesiones**; el concesionario aceptó realizar el acondicionamiento de infraestructura necesario para brindar el servicio y las mejoras realizadas

pertenecen al Patrimonio Municipio sin costo o pago por el mismo; corren por cuenta y riesgo del concesionario todos los gastos del local y propios de la explotación del servicio; el concesionario debe tolerar que el Municipio inspeccione cuando a bien lo tenga los espacios objeto del contrato; las causas de terminación del contrato están listada en el contrato e incluyen las causales de resolución administrativa del artículo 68 del Código Judicial; el concesionario no puede ceder ni traspasar el contrato sin el consentimiento del Municipio.

De ello se desprende que concurren en el contrato los principales caracteres del contrato de concesión: **a) bilateralidad** (es sinalagmático porque ambas partes se obligan recíprocamente, el concesionario a prestar el servicio, y el concedente permite que el concesionario perciba de los usuarios el importe del mismo); **b) oneroso y conmutativo**: existe equivalencia de prestaciones; **c) intuito-personae**: la concesión debe ser ejercida personalmente y por cuenta y riesgo del concesionario y no puede ser transferido o cedido el contrato sin autorización del concedente.

Se trata pues de la concesión para la explotación comercial del bar restaurante para venta de comidas típicas panameñas de "Mi Pueblito.", para lo cual se le entregaría un local que debería ser acondicionado por el cocontratante.

No escapa de la percepción de esta Colegiatura que efectivamente se pacta, además de la concesión, un canon de arrendamiento de B/.475 mensuales. Pero ello, como indicáramos previamente, no desnaturaliza la existencia del contrato de concesión para la explotación de la venta de comidas y bebidas en el bien municipal. Lo anterior se desprende sin mayor esfuerzo al examinar las causas de terminación del contrato (cláusula séptima), que por una parte en el ordinal **a)** establece como causa de terminación la morosidad en el pago de la renta por dos meses, mientras que en su ordinal **c)** establece como causa de terminación distinta la suspensión de operaciones en los espacios objeto de concesión por más de dos meses sin causa justificada.

De lo expuesto se colige que podía darse la situación de que el concesionario estuviese ocupando el local sin explotar el servicio hasta por dos meses.

En concepto de este Tribunal, el contrato suscrito efectivamente establece la obligación contractual de arrendamiento, pero sustancial y principalmente, el de **concesión** para la explotación del bar restaurante, contrario a lo esbozado por el apoderado de la empresa cocontratante.

El segundo punto controvertido por el representante de la empresa **PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A.** se refiere a que de tratarse el contrato de una concesión comercial, tal calidad no requiere al aprobación del Consejo Municipal, puesto que tal requisito formal de perfeccionamiento sólo alcanza a las concesiones que versen sobre prestación de servicios públicos.

La tesis sobre la distinción esgrimida, aunque jurídicamente posible en muchas legislaciones, no se adecúa a la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal.

En efecto, el texto del artículo 17 en su numeral 11 es claro al señalar que el Consejo Municipal debe autorizar y aprobar la celebración de contratos sobre **concesiones, sin distinguir que se trate o no de concesiones para la prestación de servicios públicos**. El mismo enunciado señala otros tipo de actuaciones que requieren la aprobación del Consejo Municipal, como los contratos que versen sobre prestación de servicios públicos y la construcción y ejecución de obras públicas municipales. Tendría la Sala Tercera que realizar una labor de hermenéutica legal sumamente restringida para considerar que sólo cierta clase de concesiones deben recibir la aprobación del Consejo Municipal, y tal interpretación no sólo contraría un texto claro, sino que también pudiere ser contrario al espíritu normativo del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, puesto que no puede ignorarse la amplitud ya comentada que tiene el Consejo Municipal como órgano **deliberativo** en el control de la gestión ejecutiva de la administración

municipal.

La experiencia de la Sala Tercera como guardiana del control de la legalidad de los Acuerdos Municipales y Decretos Alcaldicios indica que en el manejo de autorización y aprobación de contratos por parte de la Cámara Edilicia, los Alcaldes Municipales someten a tal aprobación nos sólo los contratos de concesiones, sino también otros que revistan importancia para la vida del Municipio.

Por otro lado, este Corporación Judicial no puede soslayar el hecho de que la doctrina administrativista moderna más aceptada, habla de la "**crisis de la noción de servicio público tradicional**" indicando que si bien los servicios públicos administrativos, entendidos aquellos como "los que consisten en el ejercicio de actividades tradicionalmente propias del Estado porque ostentan el máximo grado de interés general, de manera que la prestación se realiza sin ánimo de lucro" son la generalidad, coexisten los llamados "servicios públicos industriales y comerciales" que corresponden a actividades que tradicionalmente han sido consideradas más propias de los particulares que los ejercen con un ánimo lucrativo, y en ellos persiste el elemento de interés general. (Cfr. RODRÍGUEZ, Libardo, Derecho Administrativo, Editoral Temis, pág. 393).

En este orden de ideas el tratadista ANDRE DE LAUBADARE habla de las nuevas categorías de servicios públicos sociales definiéndolos como aquellos que tienen por objeto suministrar a sus beneficiarios prestaciones sociales, entre los cuales incluye la **recreación o esparcimiento cultural**. Esto se debe a que para que haya servicio público se requiere ante todo que la actividad tienda a satisfacer necesidades colectivas y no simplemente de uno o varios individuos. Se advierte pues, que el concepto de interés general ha venido ampliándose en forma indefinida, hasta el punto que en muchos casos resulta difícil precisar que un actividad de la administración de un gobierno local no persiga **per se** un interés general.

Dadas las funciones, poderes y el objetivo central de la administración municipal: **el desarrollo integral de un distrito**, la idea del interés general debe encontrarse presente en todas sus actividades públicas, pues su administración debe actuar con miras a éste. De lo anterior se desprende que no es posible aseverar, como lo hace el apoderado de la empresa contratante, que la concesión otorgada no involucra un servicio para quienes disfrutan del complejo turístico-cultural-recreacional.

Este análisis revela en conclusión, que el contrato de concesión suscrito por la empresa y la Alcaldía de Panamá sí requería, necesariamente, de la aprobación posterior del Consejo Municipal de Panamá.

La Sala Tercera no comparte sin embargo, el punto invocado por el actor en lo referente al perjuicio que se aduce causado a la administración municipal por el canon de arrendamiento que se incluyó en el contrato de concesión, y en cuanto al punto esgrimido por la parte actora en el sentido de que el término de duración del contrato se extendió de dos a cinco años de manera ilegal.

Este Tribunal observa por una parte, que el Ministerio de Hacienda y Tesoro autorizó mediante resolución motivada la extensión del término del contrato, resolución que no fue acusada de ilegal, y que goza de presunción de validez y legitimidad. En lo atinente al canon fijado y los avalúos posteriores realizados al local, cabe indicar que el concesionario, de su pecunio, tenía que realizar mejoras y acondicionar el inmueble para prestar de forma óptima y conforme se lo exigía el contrato de concesión el servicio de venta de comidas típicas y bebidas, por lo que los avalúos posteriores muy probablemente reflejan un incremento en el valor del inmueble que fue causado por las mejoras introducidas por el concesionario.

Reiteramos de igual manera que los perjuicios económicos que se invocaron al momento de solicitar la suspensión de los efectos del acto acusado y como sustento a la pretensión del demandante para requerir la nulidad del contrato N° 232-94 no fueron debidamente comprobados ni en esa etapa previa, ni al momento

de examinar el fondo del litigio. Esta Superioridad ha venido reiterando en este sentido, que no basta con enunciar el supuesto perjuicio ocasionado por el acto que se demanda, sino que éste debe ser debidamente comprobado por quien lo denuncie.

Con lo anterior se advierte que el contrato y sus cláusulas no tienen vicio de validez en cuanto a su formación o contenido, sino en cuanto a su perfeccionamiento, que debió contar con el concepto favorable del Consejo Municipal antes de ejecutarse.

De igual forma debemos indicar que el vicio detectado en la suscripción del contrato N° 232-94 no parece directamente imputable al concesionario, quien aparentemente de buena fe gestionó la adjudicación de la concesión en momentos en que el beneficiario anterior había desistido de la misma.

La rápida intervención y disposición de la empresa **PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO** resultó en la puesta en marcha del funcionamiento del restaurante bar de manera efectiva y pronta, colaboración que evitó mayores dilaciones en el procedimiento de concesión, que había sido declarada desierta dos veces, y desistida por el primer adjudicatario.

NULIDAD DEL CONTRATO N° 232-94

Del amplio análisis adelantado por esta Superioridad pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1. Que el contrato 232-94 no era un simple contrato de arrendamiento, como sostiene el apoderado de la empresa concesionaria, sino en puridad de verdad, una concesión administrativa.

2. que el numeral 11 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973 establece la imperatividad de que los contratos de concesiones sean aprobados por el Consejo Municipal.

3. que en contravención al texto legal citado, dicho contrato no fue sometido a la etapa de aprobación ante el Consejo Municipal.

La Corte advierte que el contrato N° 232-94 fue suscrito y ejecutado por haber presuntamente cumplido las condiciones esenciales de existencia, pero del estudio realizado se concluye que se encuentra ausente una condición o requisito de validez: su aprobación o refrendo posterior.

Esta situación jurídica no podía ser evaluada por el Tribunal al momento de conocer del incidente de suspensión provisional, toda vez que no se contaba con el material probatorio necesario ni con los argumentos jurídicos de todos los interesados en el proceso, lo que habría puesto en estado desventaja procesal a alguna de las partes, dado lo delicado del punto a dirimir. Tampoco correspondía al Tribunal adelantar un examen o juicio valorativo de fondo de la pretensión en aquella etapa, mismo que se satisface en este momento.

Como nuestra legislación no distingue entre las causales de nulidad absoluta y relativa, la falta de perfeccionamiento del contrato acarrea su nulidad, desde el momento de la declaratoria de la misma. La Corte estima sin embargo, que dado que la nulidad deviene de la falta de aprobación posterior, y en atención a que el contratista ha venido cumpliendo la concesión de manera responsable y conforme a lo pactado, nada impide que el contrato sea sometido a la aprobación o no, del Consejo Municipal para cumplir con la formalidad omitida.

Por todo lo expuesto, los cargos de violación denunciadas por el actor en relación al artículo 17 de la Ley 106 de 1973 y el artículo 50 del Código Fiscal prosperan en este caso, por las razones comentadas.

Estas violaciones legales hacen que resulte aplicable el contenido del artículo 75 del Código Fiscal que dispone la nulidad de los contratos en que tenga interés la Nación, que se hayan celebrado contraviniendo las disposiciones

de dicho Código. Cabe subrayar que el término "interés de la Nación" en este caso se encuentra en su sentido o acepción más amplia, siendo por ello sinónimo de los **intereses del Estado**, que lógicamente incluye a los Municipios. La norma resulta también aplicable de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Código Fiscal que establece el carácter supletorio de las normas del Código Fiscal para los Municipios.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO POR ILEGAL, el Contrato N° 232-94 suscrito por la Alcaldesa Municipal Sra. MERCEDES GARCÍA DE VILLALAZ con la empresa PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE EXPRESO VERAGÜENSE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 45 DE 9 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Solís, Endara, Delgado y Guevara, actuando en representación de EXPRESO VERAGÜENSE, S. A., ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, dictada por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, por la cual se regula el uso del Centro Municipal de Trasbordo de Transporte, ubicado en el Corregimiento de El Chorrillo.

En la demanda presentada se solicita que se suspenda los efectos de la resolución impugnada, medida cautelar que procede en las demandas contencioso administrativas de nulidad cuando sea necesario para "evitar un perjuicio notoriamente grave".

Por medio de la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, se resuelve lo siguiente:

> "**ARTÍCULO PRIMERO**: Centralizar en el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo a todas las Organizaciones o Empresas de Transporte Concesionarias de Las Rutas que operan desde la ciudad de Panamá hacia las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa.
>
> **ARTÍCULO SEGUNDO**: Una vez concluido el proceso de privatización las Organizaciones o Empresas de Transporte Concesionarias que operan en las rutas comprendidas en la provincia de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa deberán utilizar como centro de llegada o salida de sus vehículos, el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo, Por tanto no se autorizará el funcionamiento de otras piqueras en el servicio interurbano desde la ciudad de Panamá hacia las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa.
>
> **ARTÍCULO TERCERO**: Se concede un plazo de treinta días (30) hábiles,

> una vez entrado en operación el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo a todas las Organizaciones o Empresas Concesionarias de Las Rutas que operan en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa a fin de hacer uso de las instalaciones de dicho Centro.
>
> **ARTÍCULO CUARTO:** Se permitirá el servicio en el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo a todas las Organizaciones o Empresas de transporte Concesionarias que presten el servicio en otras rutas, siempre que manifiesten su interés de utilizar dicho Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo para lo cual deben dirigirse al dueño del prenombrado Centro previa autorización de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.
>
> **ARTÍCULO QUINTO:** Esta Resolución entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. ..."

El demandante alega que la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado es necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave, ya que el mismo rebasa el marco de legalidad.

A su juicio el perjuicio notoriamente grave se produciría porque desde que entró en vigencia la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, Expreso Veragüense, S. A. tiene derecho a la concesión para prestar el servicio de transporte, razón por la cual celebró con el Banco Hipotecario Nacional un contrato de arrendamiento con primera opción de compra de un lote en el cual construyó su terminal de transporte de la ruta Veraguas a Panamá y viceversa, ubicada en lugar céntrico de la ciudad y con todas las exigencias de la ley, a un costo de B/.72,490.35. Considera la parte actora que esta inversión se perdería lo mismo que su clientela si se traslada la terminal a otro lugar, como pretende hacerlo la resolución impugnada al obligar a las empresas transportistas a centralizarse y utilizar como punto de llegada y salida un Centro Municipal de Trasbordo de Transporte, desconociendo la situación jurídica establecida por ley que concede el derecho de concesión a las personas jurídicas bajo cuya organización se encuentren los transportistas que prestaban el servicio al momento de entrar a regir la ley.

En la "Sección V" de la Ley 14 de 1993, bajo el título "Terminales y Piqueras", el artículo 46 establece literalmente lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 46**. El Ente Regulador, **previa consulta a los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte**, determinará la ubicación de las estaciones terminales, los sitios y paradas intermedias y las piqueras que regirán el transporte terrestre público de pasajeros. Cuando el interés público lo exija, el Ente Regulador podrá modificar el señalamiento de las estaciones terminales, los sitios de paradas y las piqueras, quedando los concesionarios y los transportistas obligados a sujetarse a estos cambios, en un plazo no mayor de seis (6) meses." (El resaltado es de la Sala).

En la parte motiva de la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, se señala que mediante la Resolución N° 11 del 30 de mayo de 1995, el Consejo Técnico Provincial de Transporte de Panamá emitió opinión favorable al proceso de privatización del Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo, pero no consta en la misma que el Ente Regulador haya consultado al Consejo Técnico Provincial para que emitiera su opinión en cuanto a la modificación del señalamiento de las estaciones terminales que ya estaban funcionando antes de que se privatizara el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo; omisión que, a juicio de la Sala, constituye una violación al ordenamiento jurídico que amerita la suspensión de la resolución atacada en la presente demanda de nulidad.

Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, se puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a juicio del pleno de la Sala, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave que en

las acciones contencioso administrativas de nulidad ha sido considerado como una clara violación al ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, la parte actora acreditó la inversión de una considerable suma de dinero para la construcción de una terminal de trasbordo de pasajeros con oficinas ubicadas en el Marañón, Corregimiento de Calidonia, oficinas a las cuales el Municipio de Panamá extendió permiso de ocupación el 14 de marzo de 1995, por lo que la sociedad demandante probó que de implementarse la Resolución impugnada con el presente recurso contencioso de nulidad, se podría producir un perjuicio notoriamente grave de difícil o imposible reparación que debe evitarse hasta tanto se resuelva sobre el fondo del presente negocio luego de tramitarse este proceso.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE A. FÁBREGA Z. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 203 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Dionisio Sánchez, actuando en nombre y representación de la **ALCALDESA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ**, ha solicitado que se decrete la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo N° 203 de 21 de noviembre de 1995, emitido por el Consejo Municipal de Panamá, cuya declaratoria de ilegalidad se pide en la demanda contencioso administrativa de nulidad promovida a nombre de su representada.

El referido Acuerdo Municipal resolvió aprobar un Crédito Suplemental de B/.190,000.00 (Ciento Noventa Mil Balboas) en el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Panamá del período fiscal 1995, para reforzar la partida N° 5.76.0.10.05.01.648 de subsidio de las Juntas Comunales, destinado a las actividades de beneficio social que realizan las Juntas en el mes de Diciembre a fin de fomentar el ambiente de tranquilidad social que se requiere en el país. Además mediante el citado acuerdo se dispuso, que el monto de este crédito suplemental sería deducido del saldo de caja.

De acuerdo con la parte actora los efectos del Acuerdo N° 203, de 21 de noviembre de 1995 (fs. 2), aprobado por el Consejo Municipal de Panamá, deben ser suspendidos provisionalmente porque su vigencia produce un grave y notorio perjuicio al erario municipal y una flagrante violación del ordenamiento jurídico en sus artículos 41 A) literal c) de la Ley 106 de 1973 y 199 de la Ley N° 32 de 30 de diciembre de 1995, "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año de 1995".

Observa la Sala que al 28 de diciembre de 1995, fecha en que se presentó la demanda que nos ocupa, ya había sido acordado el Presupuesto de Rentas y

Gastos del Municipio de Panamá para el período fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 1996, mediante el Acuerdo Municipal N° 216 de 20 de diciembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial N° 22,948 de 10 de enero de 1996, que incluye en su Capítulo I, entre sus ingresos, el saldo en caja del año 1995.

Los presupuestos se aprueban para un período fiscal determinado y las partidas correspondientes deben ejecutarse en dicho período fiscal, porque de no hacerse, éstas pasan a formar parte del saldo de caja que representa un rubro en los ingresos del período fiscal siguiente. En el caso del presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio, al cual nos venido refiriendo, éste fue aprobado para ejecutarse entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1995. La partida suplemental aprobada mediante el Acuerdo Municipal impugnado corresponde a una partida del Presupuesto de Rentas y Gastos del año 1995, cuya vigencia expiró, y cuya finalidad era subsidiar las actividades de las 19 Juntas Comunales correspondientes al mes de diciembre pasado. En atención a estas razones la Sala considera la medida cautelar pedida es improcedente y niega la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo N° 203 de 21 de noviembre de 1995, emitido por el Consejo Municipal de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE GUSTAVO ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE OFICIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 1993, POR MEDIO DE LA CUAL SE ELIGIÓ COMO COMANDANTE PRIMER JEFE, A CHRISTIAN ARNHEITER. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal N° 527 de 5 de diciembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 18 de octubre de 1995, mediante la cual se admite la corrección de la demanda contenciosa administrativa de nulidad, promovida por la firma Infante, Garrido y Garrido en representación de GUSTAVO ORTEGA RÍOS, para que se declare nula, por ilegal, la Sesión Extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, celebrada el 25 de Marzo de 1993, por medio de la cual se eligió como Comandante Primer Jefe, a CHRISTIAN ARNHEITER.

De acuerdo con la señora Procuradora de la Administración en el presente caso la Sala Tercera debe declarar que se ha producido la sustracción de materia porque el señor GUILLERMO LEBLANC JR., "luego del día veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), dejó definitivamente, de ser miembro en calidad de Comandante Primer Jefe, del Cuerpo de Bomberos de Panamá". El señor Leblanc fue separado del Cuerpo de Bomberos, afirma la señora Procuradora, por la presunta perpetración del delito de peculado, y con motivo de estas sospechas se inició una investigación por la Contraloría General de la República. En el desenvolvimiento del proceso penal que siguió a las investigaciones, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de forma definitiva y final, declaró la culpabilidad del imputado, el señor LEBLANC, mediante sentencia fechada el 16 de mayo de 1995. Para concluir la señora Procuradora afirmó "que si bien la

sanción administrativa impuesta al tantas veces mencionado Ex-comandante Leblanc, en su momento fue definida como provisional, esa provisionalidad estuvo cimentada en un proceso que ha tenido su desenlace en mayo de este año, y por lo tanto, hoy en día, según nuestro parecer, no son válidas, por extemporáneas, las acusaciones de ilegalidad contra la Sesión Extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, celebrada el 25 de mayo de 1993". (Fs. 47-48).

A este recurso se opuso oportunamente el apoderado judicial de la parte actora quien alegó que, en el proceso contencioso bajo examen no ha operado el fenómeno jurídico de sustracción de materia porque, la elección del Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, hecha mediante la sesión Extraordinaria que se impugna en este proceso, es ilegal porque se realizó sin que existiera la vacante absoluta y permanente del Primer Jefe; y además, aún cuando en un futuro el Tribunal de Honor del Cuerpo de Bomberos de Panamá sancione separando definitivamente al Coronel Leblanc de sus funciones como Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bombero de Panamá, la elección de Christrian Arnheinter se dio en clara violación de las disposiciones del Reglamento General de los Cuerpos de Bomberos de la República.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada previas las siguientes consideraciones.

La sustracción de materia extingue la pretensión y se resuelve acerca de su existencia al dictar sentencia, de conformidad con el artículo 979, que a la letra dice:

> "Artículo 979: En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de las pretensiones objeto del proceso ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente".

En auto de 30 de junio de 1994, la Sala Tercera manifestó en relación a la sustracción de materia lo siguiente:

> "Sin embargo, la Magistrada Sustanciadora observa que el señor Procurador, mediante su Vista Fiscal N° 164 de 12 de abril de 1994, ha solicitado que se declare que en el presente caso se ha producido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, petición que debe resolverse en la sentencia que ponga fin a esta controversia, después de que la parte actora tenga la oportunidad de conocer de esta solicitud y ejercer los medios de defensa que estime conveniente a sus intereses". (Auto de 30 de junio de 1994 emitido dentro de la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Cochez, Castillo y Asociados, en representación de José Antonio Sossa Dutary, Carlos Lizandro López y Roberto Enrique Fuentes, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 145 de 13 de diciembre de 1993 dictada por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, Registro Judicial de junio de 1994, página 1995).

Por lo tanto, en este momento procesal debe examinarse si la resolución de primera instancia se ajusta a derecho, es decir, si la demanda presentada ha cumplido con los requisitos formales para ser admitida, y un análisis de la demanda nos indica que la misma fue presentada cumpliendo con todos los requisitos formales y por tanto debe admitirse.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, CONFIRMAN la providencia de 18 de octubre de 1995, mediante la cual se admite la corrección de la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Infante, Garrido y Garrido, en representación de GUSTAVO ORTEGA RÍOS, para que se declare nula, por ilegal, la Sesión Extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, celebrada el 25 de marzo de 1993, por medio de la cual se eligió como Comandante Primer Jefe, a CHRISTIAN ARNHEITER.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO N° 232-94 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Alcaldesa del Distrito de Panamá señora **MAULLAN CORREA** a través de apoderado judicial, ha presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, escrito calendado 12 de febrero de 1996 en el cual solicita la ejecución de la resolución emitida por esta Máxima Corporación de Justicia el 1° de febrero de 1996, que declaró **NULO POR ILEGAL** el Contrato N° 232-94 suscrito por la Alcaldesa Municipal Sra. MERCEDES GARCÍA DE VILLALAZ con la empresa **PROVEEDORA ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A.**

Advierte de inmediato el Tribunal que se trata de un negocio cuya sentencia se encuentra ejecutoriada, y que la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte ha dado debido cumplimiento a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 135 de 1943, disposición legal que contiene la previsión de que una vez en firme la sentencia expedida, **ésta debe comunicarse con copia íntegra de su texto a la autoridad o funcionario correspondiente para su ejecución y cumplimiento.**

En efecto, tal como se desprende del informe secretarial que reposa a foja 181 del expediente, el día 12 de febrero del año en curso se expidió el Oficio N° 134 con el que se remitió a la Alcaldía del Distrito de Panamá, copia autenticada de la sentencia de 1° de febrero de 1996 que desató la controversia instaurada en relación al referido contrato N° 232-94.

Debe recalcarse en este contexto, que la Secretaría de la Sala Tercera ya ha cumplido con el trámite previsto en la ley, y que la ejecución de la sentencia expedida no corresponde al Tribunal que desata la controversia, sino a la autoridad administrativa que debe darle cumplimiento y acatar lo resuelto. Sólo en caso de que dicha autoridad rehúse tal mandato, puede el Tribunal o Juzgador conminarlo a cumplir lo decidido, so pena de desacato.

Por ende, una vez en firme la sentencia de 1° de febrero de 1996 y debidamente notificada con copia a la Alcaldía de Panamá, es a dicha instancia a la que corresponde la ejecución del pronunciamiento judicial. Estas circunstancias hacen que lo procedente en este caso, sea negarle curso a la solicitud de ejecución de sentencia presentada por el apoderado legal de la señora Alcaldesa del Distrito de Panamá.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE la solicitud de "ejecución de fallo" propuesta por el lic. DIONISIO SÁNCHEZ en representación de la Alcaldesa del Distrito de Panamá, señora MAYÍN CORREA.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL QUIRÓZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AGUSTÍN R. PÉREZ SILVA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° 108, DE 31 DE MARZO DE 1995, EMITIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal N° 368, fechada el 29 de agosto de 1995, la señora Procuradora de la Administración presentó y sustentó recurso de apelación contra el auto de 1° de agosto de 1991 a través del cual la Sala admite la demanda contencioso administrativa de nulidad incoada por el licenciado Miguel Quiroz, actuando en nombre y representación del señor **AGUSTÍN R. PÉREZ SILVA**, para que se declare nulo, por ilegal, el Permiso de Construcción N° 108, de 31 de marzo de 1995, emitido por el Alcalde Municipal del Distrito de Santiago.

El Magistrado Sustanciador, por medio de auto de 13 de junio de 1995, no admitió la demanda de plena jurisdicción que inicialmente promovió el actor contra el acto administrativo enunciado, y **ordenó** su corrección porque la vía para demandar la resolución recurrida es la acción de **Nulidad**, pues "lo que evidentemente la parte actora pretende es que esta Sala declare su ilegalidad por considerar que la misma es violatoria de normas legales procedimentales, y no porque dicho acto es violatorio de un interés subjetivo o particular, o por estar basado su reclamo en la reparación de perjuicios causados a algún interés personal del demandante, que es el fin de la acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción".

Posteriormente, el apoderado judicial del demandante, licenciado Miguel Quiroz, en escrito que corre a fojas 23, sustituyó el poder especial que se le confirió dentro del presente proceso a favor del licenciado Arsenio García Valdez, quien presentó demanda contencioso administrativa de nulidad, corrigiéndola así, según lo ordenado en el auto de 13 de junio referido. En el libelo de esta demanda se pide en forma accesoria, una medida de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, y dicha petición fue negada por la Sala a través de auto de 24 de julio de 1995 -fojas 36 hasta la 39 inclusive-, entre otras razones, porque el actor no ha demostrado plenamente que los virtuales perjuicios que se alega sean urgentes, reales e irreparables, conforme lo tiene dicho reiterada jurisprudencia de la Sala.

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración en el escrito mediante el cual **apela** del auto admisorio de la demanda (fojas 41 del expediente), fundamenta su recurso en que el apoderado sustituto "carece de poder suficiente para presentar esta Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad", en representación del señor **AGUSTÍN R. PÉREZ SILVA**, y añade que de la lectura del poder otorgado por el demandante, se observa que su objeto es facultar al apoderado Miguel Quiroz para que "interponga formal demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción", y no para presentar una acción de nulidad. De allí que el apoderado sustituto, licenciado Arsenio García Valdez, solo está facultado para interponer una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, según los términos en que fuera otorgado el poder.

La Procuradora de la Administración cita en apoyo de su impugnación precedentes en los que esta Sala ha señalado que es requisito importante, de acuerdo a lo que señala la Ley, que se establezca o determine claramente el pleito para el cual se confiere el poder (fojas 61-64).

El apoderado sustituto, de otro lado, se opone a la impugnación citando el artículo 615 del Código Judicial, el cual señala en qué supuestos se entiende

constituido apoderado especial sin necesidad de otorgar un nuevo poder, y alega que "... no se necesita un nuevo poder para ejercer dentro de este caso" (foja 69).

En efecto, de una atenta lectura del documento por medio del cual se invistió de representación judicial al licenciado Miguel Quiroz, se advierte que dicho **poder especial** tiene como objeto que el mencionado letrado interponga "... formal demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción", para que la Sala declare la nulidad del Permiso de Construcción N° 108, de 31 de marzo de 1995, expedido por el Alcalde del Municipio de Santiago, señor Mario Luis Delgado (foja 9).

A fojas 23 se observa que el aludido poder especial fue sustituido en la persona del licenciado Arsenio García Valdez, con las mismas facultades especiales originarias, pues dicho poder se sustituye, de acuerdo al mencionado documento, para pedir a la Sala la nulidad "enunciada al margen superior de éste (sic) escrito", que precisamente se refiere a un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción.

A juicio de la Sala, la norma invocada por el opositor al recurso no es aplicable, sino el artículo 614 del Código Judicial que establece los requisitos que debe reunir un poder especial, y entre ellos está "la determinación de la pretensión o proceso para el cual se otorga el poder ..."

Conceptúa esta Superioridad que le asiste razón a la Representante del Ministerio Público, ya que, como consta en autos, al apoderado sustituto no le fue conferido expresamente la facultad de promover un proceso contencioso administrativo de nulidad, sino de plena jurisdicción, por lo que es procedente revocar la admisión de la presente demanda.

De consiguiente, la Sala Tercera Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA del auto de 1° de agosto de 1995, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad incoada por el señor AGUSTÍN R. PÉREZ SILVA, para que se declare nulo, por ilegal, el Permiso de Construcción N° 108, de 31 de marzo de 1995, expedido por el Alcalde del Municipio de Santiago, Provincia de Veraguas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARAR QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 14 DE 3 DE MARZO DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Vásquez y Vásquez, actuando en su propia representación, ha solicitado a la Sala Tercera de la Corte Suprema aclaración de la sentencia expedida por esta Sala el 29 de diciembre de 1995 mediante la cual se declara que no es ilegal el Decreto Ejecutivo N° 14 de 3 de marzo de 1994 expedido por el Ministerio de hacienda y Tesoro por conducto del Órgano ejecutivo.

Los aspectos cuya aclaración solicita la firma Vásquez y Vásquez es en

referencia a que, según ésta firma, existen frases obscuras en la parte resolutiva las cuales son: "EN CONSECUENCIA" y "DECLARA QUE NO ES ILEGAL EL DECRETO EJECUTIVO N° 14 DE 3 DE MARZO DE 1994".

Referente a la frase "en consecuencia", la firma Vásquez y Vásquez señala que "no es claro su empleo en la conclusión del silogismo elaborado por la Sala para dar su fallo" y, después de transcribir el ordinal 2 el artículo 977 del código Judicial, concluye: "y es en este aspecto, donde la obscuridad de la frase: "En consecuencia ... etc." sube de punto, ya que por ninguna parte de la resolución se hacen referencias a las pruebas oportunamente aducidas por nosotros, y practicadas dentro del término legal" y menciona algunos ejemplos de las pruebas aducidas las cuales, según la firma no fueron valoradas.

Referente a la segunda frase, señala tres razones por la cual solicita la aclaración de la misma:

> "i. No se sabe, con exactitud, a qué Decreto Ejecutivo N° 14 de 3 de marzo de 1994, se refiere la parte resolutiva de la sentencia, ya que no especifica a través de que Ministerio fue expedido.
>
> ii. También es obscura esa frase, porque si se declara que no es ilegal el Decreto impugnado de nulidad, porque no se ha producido desviación de poder, como se insinúa en la parte motiva de la resolución, se trataría de un fallo relativa (sic) a una demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, cuando la demanda presentada es de nulidad.
>
> iii. Si el Decreto Ejecutivo N° 14 de 3 de marzo de 1994, del Ministerio de Hacienda y Tesoro no es ilegal porque, como afirma la Sala, en los Considerandos, le confiere amplia facultad al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para determinar los sitios más convenientes en los que deban establecerse zonas libres, bien puede entenderse que la limitación que hace de áreas aledañas al Aeropuerto Internacional de Tocumen es solo teórica, habida cuenta de que el Ministro de hacienda Tesoros, per se, puede señalar otras áreas."

Para terminar, la firma Vásquez y Vásquez hace relación de hechos ocurridos inmediatamente después de pronunciada la sentencia y manifiesta "estimamos obscuro este fallo que desconoce la realidad de hechos probados que denotan, objetivamente, que el Decreto Ejecutivo N° 14 de 3 de marzo de 1994, ... está siendo aplicado como una **LEY DEL ENCAJE**"".

Sobre los puntos anteriormente expuestos cabe señalar que ha sido jurisprudencia constante de esta Sala que la aclaración de sentencia sólo es viable en lo relativo a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas. También lo es cuando existan frases oscuras o de doble sentido en la parte resolutiva de la sentencia o en relación a errores aritméticos o de escritura o de cita, que son los aspectos que el artículo 986 del Código Judicial nos permite corregir.

La Sala estima que la sentencia cuya aclaración se solicita no contiene frases oscuras, de doble sentido, ni errores, esto es así por cuanto la firma Vásquez y Vásquez al tildar como obscura la frase "en consecuencia", más que una aclaración a una frase obscura de la sentencia, pide una explicación en detalle por parte de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de la parte motiva de la decisión tomada, para así mejor interpretar la misma y por lo tanto ver el alcance de los efectos de la sentencia, para entonces de esta manera lograr ver si por parte de las autoridades no se ha interpretado correctamente. Por otro lado, pretende también que se explique la valoración que esta sala hiciera a las pruebas o que según ella, la Sala dejare de hacer a las pruebas aducidas y practicadas, tales como las inspecciones judiciales a la zonita libre de Contadora y a un almacén de la Avenida Central con el nombre comercial de Zona Libre y otra desatendida por el Ministro de Hacienda y Tesoro.

Tampoco podemos considerar como obscura la frase "DECLARA que NO ES ILEGAL

el Decreto Ejecutivo N° 14 de 3 de marzo de 1994" por el hecho de que esta Sala no especificó a través de qué ministerio fue expedido el citado decreto, puesto que esta supuesta omisión **no ofrece un verdadero motivo de duda** en cuanto a que decreto ejecutivo se refiere como para influir en la parte resolutiva de la sentencia. Con respecto a los otros puntos cuya aclaración se solicita, el actor hace señalamientos referentes a la parte motiva no a la parte resolutiva, que es el propósito del petitorio de una aclaración de sentencia.

Todo lo anteriormente expuesto son razones suficientes por las cuales la Sala no puede acceder a la petición de aclaración de sentencia formulada por la firma Vásquez y Vásquez, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 986 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la petición de aclaración de sentencia presentada por la firma Vásquez y Vásquez.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME DELGADO ANGUIZOLA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ZONA DE CHIRIQUÍ, A FRUTAS PANAMEÑAS, S. A.(FRUPASA) E INGEMAR LUNDBERG. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, de la Tercería Coadyuvante interpuesta por la Caja de Seguro Social dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, a la sociedad **FRUTAS PANAMEÑAS, S. A.** (FRUPASA) e INGEMAR LUNDBERG.

La apelación que se surte es fundamentada por la Procuradora de la Administración en el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, en el sentido de que los documentos que aparecen el negocio bajo estudio, contentivos de la certificación de la deuda de la empresa **FRUTAS PANAMEÑAS, S. A.** (Frupasa) para con la Caja de Seguro Social, cuya moratoria patronal incluye valores, multas, recargos e intereses, carecen del elemento esencial configurado en la fecha del título ejecutivo anterior al Auto que libra mandamiento de pago (fechado 10 de febrero de 1992), tal como lo exige la norma precitada. Lo anterior lo afirma el recurrente en atención a que el primero de dichos documentos no tiene fecha alguna y el segundo data del 9 de julio de 1993, por lo que en consecuencia pareciera que se tratara de dos deudas diferentes. Concluye el representante del Ministerio Público aseverando que "el crédito a favor de la Caja de Seguro Social no puede ser entendido como de fecha anterior al crédito a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario" y, por lo tanto, "ha faltado el requisito de predecibilidad y de admisibilidad de la tercería"; solicitando en consecuencia que la misma sea inadmitida.

En el caso subjúdice se aprecia seguidamente que no fueron presentadas objeciones al recurso promovido, y antes tales circunstancias, vencido el término

concedido para tales efectos, la Secretaría de esta Superioridad envía la alzada al despacho del Magistrado Sustanciador para que se elabore el correspondiente proyecto que decidirá la apelación instaurada por la Procuraduría de la Administración.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran el resto de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, entran a resolver la controversia planteada.

Sobre el particular cabe destacar que ya la Sala ha determinado con anterioridad, que la deuda certificada mediante el documento que presta mérito ejecutivo, o el período que ésta comprende, son las fechas que se toman en consideración para verificar si el recaudo ejecutivo es ciertamente anterior al Auto Ejecutivo, y no la fecha en que se imprimió o se elaboró el documento en el cual se certifica el mencionado saldo. Ello se puso de manifiesto en el reciente Auto de 11 de septiembre de 1995 tal como se reproduce a continuación para mayor ilustración:

> "Una vez examinado el expediente sometido a la decisión de esta Corporación, se establece claramente que le asiste razón al tercerista, en virtud de que el Título ejecutivo contentivo de la deuda certificada por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social corresponde efectivamente al período comprendido entre diciembre de 1986 a julio de 1987 tal como se aprecia a foja 1 del presente negocio; así como se corrobora a foja 21 de legajo de la ejecución, que el auto que libra mandamiento de pago fue expedido el 28 de enero de 1994, es decir, con posterioridad a la deuda antes mencionada." (La Corte subraya).

Este mismo criterio fue sostenido en el Auto de 24 de mayo de 1995, en la Tercería Coadyuvante propuesta por la Caja de Seguro Social dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Cardomont, S. A. y Jacinto Cárdenas Montenegro.

En el caso que nos ocupa se aprecia a foja 2, que el documento que presta mérito ejecutivo fue elaborado el 9 de julio de 1993, pero la deuda que certifica comprende el período de agosto de 1984 a marzo de 1985, por lo que, evidentemente, la acreencia a favor de la Caja de Seguro Social es efectivamente anterior al Auto Ejecutivo fechado 10 de febrero de 1992, tal como lo exige el artículo 1794 numeral 5 del Código Judicial. Por consiguiente la tercería coadyuvante interpuesta por la entidad de seguridad social es perfectamente admisible.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el Auto de 22 de marzo de 1994 que admite la tercería coadyuvante presentada por el licenciado Jaime Delgado Anguizola en representación de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A SALAS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA GALVÁN Y GALVÁN EN REPRESENTACIÓN DE LA FUENTE DEL CHASE, S. A. CONTRA EL AUTO N° 317-94 DE 11 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDO POR EL JUZGADO EJECUTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO ENTABLADO POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A LA SOCIEDAD LA FUENTE DEL CHASE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Galván y Galván, actuando en representación de LA FUENTE DEL CHASE, S. A. ha presentado recurso extraordinario de revisión contra el Auto N° 317-94 de 11 de agosto de 1994, emitido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, en el cual se adjudica definitivamente el remate de los bienes de dicha sociedad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por la Caja de Seguro Social.

La firma recurrente invoca como causal el numeral 7° del artículo 1189 del Código Judicial y fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 1801 del Código Judicial, se faculta a los directores de entidades Autónomas o semi-autónomas a quienes la ley le atribuye el ejercicio del Cobro Coactivo, a proceder ejecutivamente en contra de sus deudores, de conformidad con las disposiciones aplicables a los procesos ejecutivos y demás normas legales sobre la materia establecidas en el Código de Procedimiento Civil (o sea el Libro II del Código Judicial), de la misma forma se establece que el funcionario que ejerza funciones, ejercerá las funciones de Juez y tendrá como ejecutante a la Institución pública que representa.
>
> SEGUNDO: Que de acuerdo a lo antes expuesto, debemos entender que los Procesos por Cobro Coactivo, realizados por las entidades estatales, deberán regirse por las normas procedimentales establecidas para los proceso ejecutivos, situación por la cual estos procesos son susceptibles de los recursos, incidentes e impugnaciones que establece el Código Judicial para estos procesos.
>
> TERCERO: Que la Jurisdicción Civil ordinaria, establece la posibilidad de que las Sentencias, dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores o Jueces de Circuito, puedan ser revisadas, cuando se traten de procesos de única instancia o cuando exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, pudiéndose impugnar en los procesos ejecutivos los autos que Libren Mandamiento de Pago, decreten embargos o aprueben los remates. Concediéndose, de acuerdo con el artículo 1713 del Código Judicial, el término de un año para impugnar los Autos que resuelvan los procesos ejecutivos o sentencias que decidan excepciones.
>
> CUARTO: Que en virtud de lo expuesto, toda vez que en los procesos por Cobro Coactivo, se aplican las normas procedimentales para los procesos ejecutivos, una vez cocluídos estos, deberán de igual forma ser susceptibles de aplicación de las normas sobre REVISIÓN, toda vez que estas son aplicables a los Proceso Ejecutivos.
>
> QUINTO: Que tal como lo establece el artículo 743 del Código Judicial, podrán promoverse mediante Recurso de Revisión, la nulidad de las Sentencias que pongan fin al Proceso y contra la cual no proceda recurso, en cuyo caso la Corte se limitará a decidir respecto a la nulidad de la actuación y disponer el trámite que corresponda.
>
> SEXTO: Que de conformidad con lo preceptuado en el párrafo 2° del artículo 1804 del Código Judicial, la corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocer de los Recursos, Excepciones e incidentes en los procesos ejecutivos por Cobro Coactivo, correspondiéndole al Pleno de la Sala decidirlos, situación por el cual hemos acudido a ustedes.
>
> SÉPTIMO: Con relación al tema que deseamos someter a su

consideración, el expediente seguido a nuestro cliente LA FUENTE DEL CHASE, S. A., por parte del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, que presentamos a ustedes para su REVISIÓN existen claros vicios de nulidad insubsanables por omisión en las actuaciones procedimentales los cuales ocasionan consiguientemente el vicio del remate y posterior adjudicación de los bienes y valores de propiedad de nuestra representada.

OCTAVO: Que tal como se podrían observar dentro de los folios del expediente del Proceso Coactivo, seguido a nuestro cliente LA FUENTE DEL CHASE, S. A., **"NO SE ENCUENTRA NINGÚN AUTO MEDIANTE EL CUAL EL JUZGADO EJECUTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DECRETE FORMALMENTE EL REMATE DE LA FINCA DE NUESTRO MANDANTE"**, tal como lo preceptúa el artículo 1724 del Código Judicial, por lo cual es nula la convocatoria para la realización del respectivo remate de las Fincas.

NOVENO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 1724 del Código Judicial para los procesos Ejecutivos, cuando ni propongan excepciones dentro del término correspondiente o esté ejecutoriado el auto que las decida contra el ejecutado, "EL JUEZ DEBERÁ DECRETAR EL REMATE" de los bienes embargados.

DÉCIMO: De conformidad con lo expuesto, se puede observar que el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, procedió mediante el Auto N° 249-94 de veintidós (22) de junio de 1994, a señalar para el día nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (19994) la fecha para el remate de la finca de nuestro cliente, SIN HABER DECRETADO PREVIAMENTE SU REMATE en franca violación de los preceptos legales, por lo tanto a la luz del artículo 727 numeral 2° del Código Judicial, EL REMATE QUE SE REALIZO ES NULO EN VIRTUD DE QUE NO SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS ORDENADOS EN LA LEY."

Para resolver, la Sala estima adecuado efectuar una breve síntesis de los hechos acaecidos en relación al proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social a La Fuente del Chase, S. A. En efecto, mediante auto S/N fechado el 4 de septiembre de 1989, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social decretó formal secuestro en contra de la administración, dineros, cuentas bancarias, créditos, valores y demás bienes muebles, conjuntamente con la Finca N° 82021, inscrita en el Folio 192 del Tomo 1189 y la Finca N° 50801, inscrita en el Folio 192 del Tomo 1189, ambas de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, todo perteneciente a la sociedad La Fuente del Chase, S. A., por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS CON 63/100 (B/.2,591,351.63) en concepto de capital e intereses vencidos al 31 de julio de 1989 y los que se venzan hasta el pago de la obligación. Posterior a ello, mediante auto fechado el 8 de septiembre de 1989, expedido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social se decretó mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de la sociedad La Fuente del Chase, S. A., por la suma antes indicada. Una vez efectuada la respectiva notificación de este último auto, la parte actora formalizó excepción de contrato no cumplido y pago ante esta Sala, que declaró mediante resolución de 19 de febrero de 1992, improcedente la excepción de contrato no cumplido y probada la excepción de pago por la suma de B/.1,518,817.24 más los intereses que se devenguen hasta que se verifique el pago. Posterior a ello, en Auto N° 249-94 de 22 de junio de 1994, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social señaló el 9 de agosto de 1994 como la fecha para la realización de las práctica del remate del inmueble embargado a la sociedad La Fuente del Chase, S. A. Finalmente, mediante el Auto N° 317-94 de 11 de agosto de 1994, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social aprueba en todas sus partes el remate celebrado el 9 de agosto de 1994 y adjudica definitivamente a la Caja de Seguro Social la Finca N° 82021 inscrita en el Folio 152 del Tomo 1801 de la sección de la Propiedad, de la Provincia de Panamá por la suma de B/.85,278.00 y la finca N° 50801, inscrita en el Folio 192 del tomo 1189 de la sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá por la suma de B/.57,579.00 y se ordena se levante el secuestro decretado sobre las fincas rematadas y el derecho de hipoteca y anticresis suscrito por la

Fuente del Chase, S. A., a favor de la Caja de Seguro Social y se inscriba a nombre de ésta.

Observa la Sala que la controversia motivo del recurso de revisión que nos ocupa, se centra en que a juicio de la parte actora, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social procedió mediante el Auto N° 249-94 de 22 de junio de 1994 a señalar para el día 9 de agosto del mismo año, fecha para el remate sin que previamente se hubiese decreto según lo previsto en el artículo 1724 del Código Judicial. Afirma la parte demandante que lo anterior trae como consecuencia, la nulidad del remate según lo previsto en el artículo 1724 del Código Judicial.

Una vez efectuado el estudio del expediente contentivo del recurso de revisión que nos ocupa y del expediente contentivo de todo el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social a la sociedad La Fuente del Chase, S. A., la Sala concluye que no es procedente dicho recurso por las razones que a continuación exponemos. En primer lugar, observa la Sala que la parte actora invoca como causal el numeral 7° del artículo 1189 del Código Judicial que hace alusión a la procedencia del recurso de revisión si existe nulidad en la sentencia que puso fin al proceso y no es susceptible de recurso, e igualmente observa, que dentro de los hechos en que fundamenta el recurso de revisión, es enfática al señalar que, "tal como lo establece el artículo 743 del Código Judicial, podrán promoverse mediante Recurso de Revisión, la nulidad de la Sentencias que pongan fin al Proceso y contra la cual no proceda recurso, en cuyo caso la Corte se limitará a decidir respecto a la nulidad de la actuación y disponer el trámite que corresponda." (Subraya la Sala). Con relación a ello, la Sala aclara que la resolución cuya revisión se solicita, no es una Sentencia, pues, en la misma no se decide ninguna pretensión o excepción dentro del proceso, sino que como bien lo dice la parte actora en reiteradas ocasiones dentro de su solicitud, es un auto mediante el cual se adjudica definitivamente el remate de los bienes de la sociedad ejecutada. En otras palabras, se trata de un auto que decide una cuestión accesoria al proceso, tal como prevé el artículo 974 del Código Judicial, que define los diversos tipos de resoluciones judiciales.

En segundo lugar, también se observa que dentro de los hechos expuestos por la parte demandante dentro del libelo contentivo de la demanda, se señala expresamente lo siguiente: "que de conformidad con lo preceptuado por el párrafo 2° del artículo 1804 del Código Judicial, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocer de los Recursos, Excepciones e incidentente en los procesos ejecutivos por Cobro Coactivo, correspondiéndole al Pleno de la Sala decidirlos, situación por la cual acudo a ustedes." Al respecto, la Sala reitera que de fojas 5 a 12 del expediente que la Caja de Seguro Social le sigue a la sociedad La Fuente, S. A., aparece la Escritura Pública N° 6559 de 26 de octubre de 1982, en cuya cláusula décima la deudora renuncia a los trámites del juicio ejecutivo. En este sentido el artículo 1768 del Código Judicial prevé claramente esta situación y señala:

> "ARTÍCULO 1768: Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.
>
> Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681."

De lo anterior, se colige que en caso de renuncia a los trámites del proceso ejecutivo, como sucede en este caso, no se podrán proponer incidentes ni

otras excepciones que la de pago y prescripción. Igual criterio sostuvo la Sala en resolución fechada el 19 de febrero de 1992. La Sala no ve, pues, cómo la parte actora ubica el numeral 2° del artículo 1804 del Código Judicial como fundamento para solicitar el recurso de revisión que nos ocupa.

En virtud de lo antes expuesto, estima la Sala que el recurso de revisión que se ventila en esta oportunidad, es manifiestamente improcedente y como tal, según lo dispuesto en el artículo 697 del Código Judicial, debe ser rechazado de plano.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, RECHAZA DE PLANO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la firma Galván y Galván, en representación de La Fuente del Chase, S. A., contra el Auto N° 317-94 de 11 de agosto de 1994, emitido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo entablado por la Caja de Seguro Social a la Sociedad La Fuente del Chase, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. RODOLFO AGUILERA FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE LIBRERÍA RUBYL, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL-CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Rodolfo Aguilera, actuando en representación de LIBRERÍA RUBYL, S. A., ha presentado incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social.

El Lcdo. Rodolfo Aguilera solicita a esta Sala, que se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que ordena emplazar por edicto a RUBÉN DARÍO CABRERA GONZÁLEZ, Presidente y Representante Legal de Librería Rubyl, S. A., toda vez que para esa fecha y antes el citado señor Cabrera González no era el representante legal de Librería Rubyl, S. A. El incidentista fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "PRIMERO: El día 11 de julio de 1989, el Juez Ejecutor de la Caja del Seguro Social decretó formal secuestro sobre la finca 12801, inscrita al folio 188 del tomo 1183 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, Registro Público, que aparece inscrita a nombre de LIBRERÍA RUBYL, S. A.
>
> SEGUNDO: El día 11 de julio de 1989, el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra LIBRERÍA RUBYL, S. A., hasta la concurrencia de la suma de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 37/100 (B/.25,953.37) en concepto de cuotas obrero patronales, primas de riesgos profesionales, seguro educativo, impuesto sobre la renta, recargos y costas.
>
> TERCERO: Según consta en el proceso por cobro coactivo al cual accede el presente incidente, en reiteradas ocasiones se citó, infructuosamente, a RUBÉN DARÍO CABRERA GONZÁLEZ, en condición de

representante legal de LIBRERÍA RUBRYL, S. A., para que compareciera al proceso por cobro coactivo.

CUARTO: A foja cincuenta y dos (52) del proceso por cobro coactivo a que nos venimos refiriendo, el secretario del Juzgado Ejecutor, LIC. JAIME ANGUIZOLA DELGADO, certificó que no había sido posible notificar a RUBÉN DARÍO CABRERA, Presidente y Representante Legal de Librería Rubyl, S. A.

QUINTO: A foja cincuenta y tres (53) del mismo proceso, mediante resolución de dos (2) de Diciembre de 1993-fecha esta a la que, curiosamente, no hemos llegado aún-, se ordena el emplazamiento de RUBÉN D. CABRERA, como Presidente y Representante legal de Librería Rubyl, S. A., y en las fojas que sigue consta que se llevó a efecto el emplazamiento, el nombramiento del defensor de ausente y la fijación de la fecha de remate del inmueble cautelado.

SEXTO: Según consta en el certificado expedido por el Registro Público, que se acompaña como prueba dentro del presente incidente: la representación legal de la empresa LIBRERÍA RUBYL, S. A., la ejercerán el Presidente, quien será reemplazado por el Vicepresidente, el Secretario o el Tesorero, en su orden; según inscripción registral de fecha veintisiete (27) de noviembre d 1987 figuran como dignatarios MOISÉS CORREA ALBA, en calidad de Presidente y Representante Legal, IVÁN JUAN MORALES APARICIO, en calidad de Vicepresidente y Secretario, y JUAN MANUEL ARAÚZ ARIAS, en calidad de tesorero; y, además, no consta poder inscrito.

SÉPTIMO: Dentro del presente proceso ha faltado la notificación personal del Auto Ejecutivo al deudor o sus representantes y el emplazamiento de las personas que deben ser citados como representantes legales de la parte demandada, a pesar de que así lo ordenan los Artículos 1667 y 1670, respectivamente, del Código Judicial."

Mediante auto de cinco de octubre de 1993 se admitió el incidente y se corrió traslado del mismo al Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social y al Procurador de la Administración.

El Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social contestó el incidente en los siguientes términos:

PRIMERO: Es cierto el hecho y por lo tanto se acepta.

SEGUNDO: Es cierto el hecho y por lo tanto se acepta.

TERCERO: Es cierto el hecho y por lo tanto se acepta.

CUARTO: El hecho en mención no es cierto, ya que el informe secretarial que existe a foja 52, en su contenido, conlleva la expresión de que no se ha podido notificar al demandado, que es LIBRERÍA RUBYL, S. A.

QUINTO: No es cierto el hecho como se presenta, toda vez que a quien se emplaza es al demandado, LIBRERÍA RUBYL, S. A., a quien, en efecto, se le nombró defensor de ausente, al no comparecer su Representante Legal, dentro del término establecido por la Ley.

SEXTO: No nos consta el hecho como se expresa; pero en cambio sí tenemos la certeza procesal de que, conforme a certificación expedida por el Registro Público, tal como consta a foja 6 del expediente, el señor RUBÉN DARÍO CABRERA fungía como Presidente y Representante legal de LIBRERÍA RUBYL, S. A.

SÉPTIMO: Es falso, ya que una vez nombrado el defensor de Ausente es

a quien se debe notificar personalmente, lo cual consta se surtió mediante escrito presentado por el mismo, a fojas 63 y 64."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 320 de 31 de julio de 1995, estima que no debe accederse a la solicitud incoada por el incidentista, toda vez que no se ha acreditado en autos ni las pruebas ni las razones de Derecho que le asiste para que a ello se acceda. Afirma la Procuradora de la Administración, que la Caja de Seguro Social realizó todos lo esfuerzo a fin de notificar personalmente a LIBRERÍA RUBYL, S. A., con resultados infructuosos, razón por la cual se procedió al nombramiento de un defensor de ausente según lo estipulado en los artículos 1667 y 1670 del Código Judicial. A lo anterior añade la Procuradora de la Administración, que el incidente de nulidad que nos ocupa, fue instaurado por medio de un agente oficioso y no a través de un representante legal, razón por la cual, "la falta de precisión y claridad en la interposición del incidente, en lo que a representante legal se refiere, evidencia que al recurrente no le asiste la razón."

Evacuados lo trámites de ley, procede la Sala a resolver la presente controversia.

Después de un análisis exhaustivo del expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social-Chiriquí a LIBRERÍA RUBYL, S. A., concluye la Sala que no le asiste la razón al incidentista por las razones que exponemos a continuación. En primer lugar, observa la Sala que mediante auto de 11 de julio de 1989, la Caja de Seguro Social libró mandamiento por la vía ejecutiva contra LIBRERÍA RUBYL, S. A., hasta la concurrencia de veinticinco mil novecientos cincuenta y tres balboas con 37/100 (B/.25,953.37) en concepto de cuotas obrero patronales, primas de riesgos profesionales, seguro educativo, impuesto sobre la renta, recargos y costas, y en esa misma fecha, la Caja de Seguro Social decreta formal secuestro sobre la Finca 12801, Inscrita al Folio 188 del Tomo 1183, Provincia de Chiriquí, de propiedad de LIBRERÍA RUBYL, S. A. En segundo lugar, observa igualmente la Sala, que la Caja de Seguro Social efectuó ingentes esfuerzos a fin de notificar el auto de mandamiento de pago a la empresa LIBRERÍA RUBYL, S. A., como se evidencia de fojas 24 a 29 y de fojas 32 a 35 del expediente administrativo. No obstante, si bien es cierto que la representación legal no recaía para esa fecha en el señor RUBÉN DARÍO CABRERA según certificación expedida por el Registro Público que reposa a fojas 1 y 2 del expediente principal, no es menos cierto que la empresa demandada LIBRERÍA RUBYL, S. A. tuvo claro conocimiento de la situación, más aún cuando fue debidamente emplazada mediante la publicación de un edicto por tres días consecutivos en un diario de la localidad, como consta de fojas 57 a 59 del expediente administrativo. Una vez efectuada la debida publicación, la cual no fue autenticada, se procedió mediante auto de 31 de mayo de 1993, al nombramiento del licenciado JORGE ROBERTO MATTOS ALVARADO como defensor de ausente, en claro cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1670 del Código Judicial y el cual fue notificado mediante diligencia de notificación el 4 de junio de 1993.

Aunado a lo anterior, observa igualmente la Sala, que el incidente de nulidad que nos ocupa, fue interpuesto por el Lcdo. Rodolfo Aguilera Franceschi mediante poder otorgado por un agente oficioso de la LIBRERÍA RUBYL, S. A., más no por su actual representante legal que recae en la persona de MOISÉS CORREA según certificación del Registro Público que reposa a foja 2 del expediente principal. No obstante lo anterior, en opinión de la Sala, es al Lcdo. JORGE ROBERTO MATOS ALVARADO quien actúa como defensor de ausente de la LIBRERÍA RUBYL, S. A., a quien le correspondía proponer las excepciones que crea le favorezcan a su representada dentro de los ocho días siguientes a la notificación del auto de mandamiento ejecutivo, según lo previsto en el artículo 1706 del Código Judicial. Como resultado de lo anterior, como bien lo señala el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, no puede, pues, un gestor oficioso subrogarse en las funciones que previamente le corresponden en este caso, a un defensor de ausente debidamente nombrado por el tribunal de conocimiento mediante resolución de 31 de mayo de 1993.

En virtud de lo antes expuesto, estima la Sala que el cargo de ilegalidad

mediante el cual se sustenta el incidente que nos ocupa, carece de todo fundamento, por lo que lo procedente es, pues, declararlo no probado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADO el incidente de nulidad presentado por LIBRERÍA RUBYL, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, DEL DOCUMENTO (LETRA DE CAMBIO) Y DE ILEGALIDAD DEL TÍTULO (LETRA DE CAMBIO), INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOAQUÍN ANTONIO GÓMEZ ARANDA, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE ALBERTO AGRAZAL VALDERRAMA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS (I. F. A. R. H. U.). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Joaquín Antonio Gómez Aranda, actuando en representación de ENRIQUE ALBERTO AGRAZAL VALDERRAMA, ha promovido excepción de prescripción de la acción y del documento, e ilegalidad del título, en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (I. F. A. R. H. U.).

La parte actora señala que el 4 de abril de 1973 firmó con el I. F. A. R. H. U. el contrato N° 007761 para realizar estudios de Derecho en 46 meses a partir de mayo de 1973, el cual estaba garantizado con una letra de cambio, y establecía en la cláusula 8ª que el préstamo sería cancelado y cobrado con intereses al prestatario que no demostrara un grado satisfactorio de aprovechamiento con promedio mínimo de "C" o 70 o su equivalente, como sucedió en el caso del señor Agrazal desde el primer semestre de 1975, por lo que la acción para el cobro de este préstamo ha prescrito según el artículo 29 de la Ley 1 de 11 de enero de 1965, Orgánica del I. F. A. R. H. U., el cual señala un término de 15 años para que prescriba la obligación a partir de la fecha en que sea exigible.

La excepcionante manifiesta que según el artículo 908 del Código de Comercio la acción derivada de una letra de cambio prescribe en tres años desde la fecha de vencimiento, por lo que la letra firmada por el señor Agrazal el 4 de abril de 1973 como garantía, prescribió ya que no fue sino hasta el 6 de agosto de 1991, cuando con fundamento en ella se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva y se ordenó descontar el 15% del excedente del salario mínimo del ejecutado, hasta la concurrencia de B/.5,131.06.

Indica además que el documento no tiene fecha de expedición, pero su fecha es la misma que la del contrato, ya que según el artículo 21 de la Ley 1 de 1965, los estudiantes deben firmar un contrato de pagaré para responder por el cumplimiento de la obligación, y la obligación del señor Agrazal de mantener un desempeño satisfactorio fue incumplida desde el primer semestre de 1975, momento en el cual la letra debió llenarse para que fuese de plazo vencido y exigible, contándose desde ese momento su fecha de vencimiento y los intereses. Señala finalmente que según el numeral 2 del artículo 1640 del Código Judicial, para que un documento preste mérito ejecutivo, la obligación tiene que ser clara, de plazo vencido, de suma líquida o liquidable, características que no posee la letra de

cambio que aparece a foja 6 del expediente administrativo, por lo que dicho título o letra de cambio es ilegal y no presta mérito ejecutivo.

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y a la señora Procuradora de la Administración por el término de ley.

El representante judicial del Juzgado Ejecutor del I. F. A. R. H. U. solicitó a esta Sala que rechace la excepción de prescripción propuesta y niegue lo pedido por la parte actora. Manifestó que a foja 12 del expediente contentivo del juicio ejecutivo seguido al señor Enrique Agrazal, aparece que en el mes de julio de 1991 tenía una deuda por la suma de B/.4,652.62, correspondiente a B/.2,530.51 de capital, B/.1,879.11 de intereses y B/.243.00 de seguro de vida y que según informe del Juzgado Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, el último abono recibido del deudor Enrique Agrazal fue en el mes de junio de 1983, comenzando a partir de este momento a computarse el término para la prescripción de las acciones derivadas de las obligaciones contraídas por el ejecutado.

Mediante la Vista Fiscal N° 297 de 17 de julio de 1995, la señora Procuradora de la Administración manifestó que no se ha producido la excepción de prescripción de la acción del documento e ilegalidad del título, porque a foja 12 del expediente contentivo del Proceso Ejecutivo que se le sigue al excepcionante, consta el último abono a la obligación hecho en junio de 1983 y el término para la prescripción debe computarse a partir de este momento.

Consta en autos a fojas 16 la Resolución de 6 de agosto de 1991, mediante la cual el Juzgado Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a su favor y en contra de Enrique Agrazal (2-72-666) por un total de B/.5,131.46 en concepto de capital, intereses, seguro de vida y gastos de cobranza y a foja 17 la Resolución de 7 de agosto de 1991, mediante la cual decretó formal secuestro sobre los bienes muebles e inmuebles, valores, prendas, joyas, bonos de dinero en efectivo, cuentas por cobrar y cualesquiera sumas de dinero del deudor; resoluciones que fueron notificadas al señor Enrique Agrazal el 28 de abril de 1995. Adicionalmente, mediante Auto N° 138 de 22 de marzo de 1995, el Juzgado Ejecutor del I. F. A. R. H. U. decretó secuestro sobre el 15% del excedente del salario mínimo de Enrique Agrazal hasta la concurrencia provisional de B/.5,701.56, más los intereses, seguro de vida y gastos que se produzcan hasta la cancelación total de la deuda.

En el expediente contentivo del proceso ejecutivo consta a foja 12 informe del Juzgado Ejecutor, acerca del saldo del señor Enrique Agrazal, quien a julio de 1991 debía B/.4,652.62 en concepto de capital, intereses y seguro de vida, cuyo caso fue enviado por la Sección de Gestión de Cobros para que fuera tramitado a través de juicio coactivo ya que el saldo sobrepasaba los B/.3,000.00 y el último abono había sido efectuado, tal cual lo confirmó la Nota N° 375-95-165 de 18 de diciembre de 1995, en junio de 1983. Consta además, en certificación expedida el 18 de diciembre de 1995 por la Directora de Recaudación y Gestión de Cobros del I. F. A. R. H. U. que a esta fecha el saldo adeudado era de B/.5,306.64 correspondiente a capital, intereses y seguro de vida.

El artículo 29 de la Ley Orgánica del I. F. A. R. H. U. preceptúa que las obligaciones que surjan de los actos y contratos del Instituto prescribirán a los quince (15) años contados a partir de la fecha en que la obligación sea exigible. Los artículos 1698 y 1711 del Código Civil y el artículo 658 del Código Judicial establecen en relación con la prescripción de las acciones lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 1698:** Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley.
>
> **ARTÍCULO 1711:** La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y **por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.**

> **ARTÍCULO 658**: La presentación de la demanda interrumpirá el término para la prescripción de cualquier pretensión que se intente, siempre que antes de vencerse el término de la prescripción se haya notificado la demanda a la parte demandada, o se haya publicado en un periódico de circulación nacional diaria o en la Gaceta Oficial un edicto emplazatorio o un certificado del Secretario del Juzgado respectivo en el cual se haga constar dicha presentación."

Consta en autos que el último abono que hizo el señor Enrique Agrazal, en reconocimiento de la deuda contraída con el I. F. A. R. H. U. fue en junio de 1983, interrumpiendo de esta forma la prescripción de 15 años que empezó a correr a partir de la fecha en que fue exigible el préstamo que se le otorgó a través de la Resolución N° 11 de 4 de abril de 1973. Desde junio de 1983 hasta el día 22 del mes de marzo de 1995, fecha en que se le notificó la Resolución de 6 de agosto de 1991, mediante la cual se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en su contra, no han transcurrido los 15 años establecidos como término para la prescripción de la acción, por lo que no procede declararla.

La Sala debe desestimar también la petición del excepcionante de que declare la ilegalidad de la letra de cambio que firmó al momento de celebrar el contrato de préstamo con el I. F. A. R. H. U., puesto que este no es el documento que ha servido de recaudo ejecutivo a la institución, sino una certificación del estado de cuenta a cargo del deudor por el crédito a favor del I. F. A. R. H. U., de conformidad con el numeral 2 del artículo 1803 del Código Judicial. (Fs. 13 del expediente del proceso ejecutivo).

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADAS la excepciones propuestas por ENRIQUE ALBERTO AGRAZAL VALDERRAMA, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS (I. F. A. R. H. U.).

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA LOLA BLAISDELL NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA EL FARO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, A INVERSIONES EL FARO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Encontrándose en estado de resolver la tercería excluyente interpuesta por la licenciada **Ana Blaisdell** actuando en representación de Financiera **El Faro, S. A.** dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá a la sociedad **INVERSIONES EL FARO, S. A.**, advierte la Corte que no reposa en el expediente de la ejecución el auto que libra mandamiento de pago debidamente notificado en contra de la deudora, como paso previo para que el secuestro ordenado y reiterado en diversas oportunidades como medida cautelar, sea elevado a la categoría de embargo, en estricta observancia del artículo 1667 del Código Judicial.

Por la importancia que reviste el mencionado auto ejecutivo dentro del presente proceso, esta Superioridad con fundamento en los artículos 782 del Código Judicial y 62 de la Ley 135 de 1943, estima indispensable expedir Auto

para mejor proveer de manera que dicha documentación nos sea remitida a la brevedad posible, para efectos de aclarar puntos obscuros de la contienda que se surte.

En atención a lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOLICITAN al señor Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, que nos suministre a la brevedad posible el Auto que libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo encausado en contra de la sociedad INVERSIONES EL FARO, S. A., con la diligencia de notificación, de rigor.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, INCOADA POR EL LCDO. GONZALO LAGUNA POLO, DENTRO DEL RECURSO LABORAL INTERPUESTO EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS VALDIÉS HAWKINS, CONTRA LA SENTENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO EN EL PROCESO LABORAL: MARCOS VALDIÉZ HAWKINS -VS- OSCAR GRANALD Y/O ROSA DE GRENALD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Lcdo. Gonzalo Laguna Polo, actuando en nombre y representación del señor Marcos Valdiés Hawkins, ha interpuesto recurso de casación laboral con el propósito de que se revoque la Resolución de 11 de diciembre de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda antes mencionada el recurrente solicita que se apliquen medidas cautelares de protección o conservatorias sobre el Vehículo con matrícula 3B-391 de propiedad de los demandados y, además, que la Sala ordenen lo siguiente:

> "1. Decretar que la propietaria del mismo, no podrá vender, donar, ceder, transferir, arrendar, constituir hipotecas o anticresis, ni realizar ningún tipo de actos o contratos que limiten su propiedad sobre el vehículo.
>
> 2. Que dicho vehículo deberá circular única y exclusivamente dentro del área de las provincias de Panamá y Colón, requiriendo para circular en otras áreas, la autorización expresa de la autoridad competente de la jurisdicción de trabajo."

Sobre el particular, la Sala, en primer lugar, observa, que esta petición de medida cautelar no está sustentada en forma correcta al no exponer las circunstancias y hechos que inducen a la Sala decretar la medida cautelar. Ello es así por cuanto, al quedar la medida cautelar a discreción de la Sala, tiene que justificar la medida con razonamientos válidos.

En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia constante y reiterada de la Sala en esta materia, se requiere, para poder apreciar si la ejecución del acto acusado ocasiona un perjuicio notoriamente grave, que se acompañen la prueba de tal perjuicio. En este caso, no ha sucedido así, ya que de las pruebas presentadas no se deduce dicho perjuicio.

Por todo lo anterior, como quiera que en el caso que nos ocupa el recurrente no ha fundamentado su solicitud de medida cautelar, ni ha acompañado las pruebas que sustentan esa solicitud, no procede la medida cautelar solicitada.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la petición de medida cautelar solicitada por el licdo. Gonzalo laguna Polo a favor de Marcos Valdiés Hawkins y en contra de Rosa de Grenald y Oscar Grenald sobre el vehículo con Placa 3B-391, Bus marca Scania, color crema con chocolate, motor 3038791.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ÁLVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE CLEMENTE GUTIÉRREZ Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE ENERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CLEMENTE GUTIÉRREZ Y OTROS -VS- TIPER, S. A., CONSTRUCCIONES ALFA Y CANTERA EL PUENTE S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **ÁLVARO MUÑOZ FUENTES** ha presentado Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 3 de enero de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral **CLEMENTE GUTIÉRREZ Y OTROS -vs- TIPER, S. A., CONSTRUCCIONES ALFA Y CANTERA EL PUENTE S. A.**

El casacionista sustenta su pretensión aduciendo que la sentencia impugnada resulta violatoria de los artículos 740, 732, 773 y 69 del Código de Trabajo.

Acto seguido se le corrió traslado a la contraparte del proceso, para que dentro del término establecido en el artículo 927 del Código de Trabajo hiciera valer su derecho de oposición frente al recurso incoado.

El negocio laboral dentro del cual se origina el recurso que nos ocupa, tiene su génesis en un proceso instaurado en el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, en el cual un grupo de trabajadores solicitaba a las empresas antes enunciadas, el pago de una serie de reclamaciones laborales supuestamente no pagadas, sumas que según los demandantes ascendían a ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro balboas con setenta y nueve centavos (B/.8,644.79).

En efecto, los señores CLEMENTE GUTIÉRREZ, MANUEL MONTENEGRO, ALONSO CASTILLO, VÍCTOR JIMÉNEZ, EVARISTO GUTIÉRREZ, BOLÍVAR ARROCHA, EMIGDIO PÉREZ, DEMETRIO PÉREZ Y MANUEL SALVADOR presentaron demanda laboral contra las empresas TIPER S. A., CONSTRUCTORA ALFA, S. A. y CANTERA EL PUENTE, S. A., a fin de que les condenara al pago de B/.8,644.79, por razón de horas extras dejadas de pagar, domingo y feriados mal pagados y 6%.

Sin embargo, el Tribunal A-quo, tomando en cuenta que las partes arribaron a un acuerdo parcial al inicio de la audiencia oral celebrada el 26 de enero de 1995, que incluía la aceptación de que no existía vínculo de solidaridad entre las empresas TIPER S. A., CONSTRUCTORA ALFA, S. A. y CANTERA EL PUENTE, S. A., ordenó el pago de cierta suma de dinero, en razón de la transacción parcial a la que se había llegado.

Este acuerdo sólo incluyó a siete de los nueve demandantes, dado que **BOLÍVAR ARROCHA** y **EMIGDIO PÉREZ** acordaron sujetarse a lo que se lograra probar en el proceso, quedando fuera del arreglo.

El mismo Tribunal de primera instancia al resolver la controversia en relación a los prenombrados, en sentencia N° 4 de 22 de febrero de 1995 absuelve a las demandadas de las reclamaciones laborales presentadas por **ARROCHA** y **PÉREZ**, al considerar que no existían elementos probatorios para fundar su pretensión y que los pocos documentos presentados por los demandantes para demostrar la existencia la obligación, care-cían de fuerza vinculante.

En vista de lo anotado, fue elevada la alzada ante el Tribunal Superior de Trabajo y éste mediante sentencia de 3 de enero de 1996 confirmó en todas sus partes la resolución apelada, en el sentido de que los demandantes no habían podido probar la veracidad de sus imputaciones contra la parte demandada. En las partes relevantes de dicha sentencia, el Tribunal Superior de Trabajo manifestó:

> "En efecto, este Tribunal Superior ha podido constatar que a solicitud de la parte demandante, el Juez a quo, solicitó copia de planillas o bien el informe acerca de la revisión de planillas efectuada a la empresa TIPERSA, S. A., recibiendo como respuesta el informe suscrito por el Sr. FLORENTINO SAMUDIO, Sub Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí y remitido por el Sr. IBERO QUINTERO, como Coordinador del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en el Área de Barú, que resulta ser precisamente el mismo presentado por la parte demandada durante la audiencia oral, **siendo que en él no aparecen como personas a quienes se les adeude dinero alguno, los dos trabajadores aludidos en la Sentencia recurrida. (a fojas 47, 48 y 49, la de la demandada y a fojas 97, 98 y 99, el informe de la autoridad administrativa de trabajo). No escapa a la atención del Tribunal, que los demandantes presentan una certificación suscrita por el Sr. EUGENIO GONZÁLEZ, conciliador del Ministerio de Trabajo en la que si bien aparece BOLÍVAR ARROCHA y no EMIGDIO PÉREZ, resulta que según especifica en la misma certificación la misma fue preparada "según lo manifestado por los trabajadores y conforme a control de tiempo que presenten" (fojas 84 y 85) que evidentemente no puede ser considerado como documento probatorio, según las reglas de la sana crítica.**

En consecuencia, este Tribunal considera que se encuentra en lo correcto el juzgador de primera instancia que al desatar la controversia, en lo que no fuera objeto de transacción, es decir en cuanto a la reclamación de dos de los nueve trabajadores, no encuentra probado que las mismas se hubieran demostrado en el proceso y menos aún que se adeuden las sumas reclamadas." (El resaltado es de la Sala).

CARGOS PRESENTADOS POR EL CASACIONISTA

El recurrente manifiesta en el libelo de demanda que la sentencia acusada resulta violatoria, en primer término del artículo 740 del Código de Trabajo.

La norma en comento permite al juez laboral, sea al momento de la audiencia o al momento de fallar la controversia, la práctica de todas aquellas pruebas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes, la autenticidad y exactitud de documentos que se aporten, y aclarar los puntos oscuros o dudosos del proceso.

Según el recurrente, la disposición examinada resulta transgredida por el Tribunal Superior de Trabajo, toda vez que no ordenó que se practicaran otras pruebas en adición a las presentadas en el proceso, para verificar las afirmaciones de las partes.

Estrechamente vinculada con la acusada violación del artículo 740, el casacionista conecta el cargo con la supuesta transgresión del artículo 773 del Código de Trabajo, excerta legal que dispone que las partes pueden solicitar al

juzgador que allegue al proceso documentos que se encuentran en poder de su opositor, para evaluarlos en conjunto que el caudal probatorio aportado. Según el actor, el juzgador de primera instancia no ordenó la práctica de ciertas pruebas como la presentación de las planillas de las empresas demandadas, para verificar si **BOLÍVAR ARROCHA y EMIGDIO PÉREZ** eran o no trabajadores de las mismas, y no hacerlo representa una violación a la norma comentada.

De igual forma, se acusa la violación del artículo 732 del Código de Trabajo, norma legal que consagra el principio de la sana crítica en la evaluación del material probatorio por parte del juzgador, sin menoscabo de la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

De la exposición del recurrente se desprende, que su disconformidad en este punto radica en que el juez no le otorgó el debido mérito probatorio a pruebas documentales que se aportaron para fundar la pretensión de los trabajadores **ARROCHA y PÉREZ**, con lo que se vulnera de manera directa el texto legal comentado.

Finalmente, se invoca la transgresión del artículo 69 del Código de Trabajo, que contiene la presunción **iuris tantum** de que ante la ausencia de contrato escrito de trabajo, el juzgador debe tomar como ciertos los hechos y circunstancias alegados por el trabajador que debían constar en el contrato.

En concepto de la parte actora, la presunción a su favor contenida en la norma citada ut supra, no quedó desvirtuada mediante prueba que admitiera duda razonable, lo que vulnera de manear directa el texto legal comentado.

DECISIÓN DE LA SALA

Es importante señalar que todas las normas del libelo que se aducen violadas versan sobre el tema **de pruebas y su valo-ración** dentro del proceso.

Se advierte pues de inmediato, que el recurso presentado no cumple con lo dispuesto en el artículo 928 del Código de Trabajo, al invocarse la violación de normas de carácter **adjetivo o procesal** sin que se conecten o vinculen con normas de carácter **sustantivo** o que consagre derechos específicos del trabajador, pese a que la Sala Tercera en jurisprudencia reiterada ha insistido en que el recurso de casación es un medio extraordinario para corregir errores "**in iudicando**" mas no errores "in procedendo" (v.g. resoluciones de 16 de mayo de 1990; 17 de febrero y 28 de abril de 1995).

Del libelo presentado claramente se desprende que el casacionista fundamenta su disconformidad: 1. en la supuesta actuación deficiente del Juzgador de primera instancia, que no allegó al proceso, fuera oficiosamente o a petición de parte, otras pruebas -necesarias a juicio del demandante- para fundar su pretensión; y 2. en la forma indebida en que se procedió a la valoración de las pruebas presentadas por los demandantes **ARROCHA y PÉREZ.**

Esta circunstancia evidencia que se ha pretendido utili-zar el recurso de casación como una tercera instancia del proceso, lo cual resulta inadmisible.

Cabe acotar que del examen del expediente laboral se desprende que tanto el Tribunal de primera instancia como el de alzada tropezaron con el mismo obstáculo para resolver la favorabilidad de la pretensión de los demandantes: la ausencia de elementos de convicción que sustentaran los cargos, siendo que las mismas pruebas por ellos aducidas, contradecían su posición. El casacionista considera que no se realizó una labor de valoración efectiva de las pruebas aportadas, ni diligenció que se allegasen otras al proceso que le permitieran comprobar que le asistía razón al demandante, pero según consta en autos, sí fueron atendidas las peticiones de pruebas de la parte actora en todo lo que fuera conducente, lo cual arrojó un resultado negativo, en perjuicio de su pretensión.

La jurisprudencia de esta Máxima Corporación Judicial ha sido constante y

uniforme en el sentido de que las violaciones a normas que conciernen a la valoración de pruebas, no deben ser consideradas por el Tribunal de Casación, y que tal como indicáramos previamente sólo frente a la existencia de un **error de hecho** en la valoración, por parte del tribunal de la alzada, es viable que esta Corporación se pronuncie al respecto.

Tal circunstancia no se produce en este caso, siendo que en concepto de esta Superioridad, el Tribunal Ad-quem ha examinado las pruebas de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica, y la experiencia, tomando en cuenta entre otros factores **la fuente** de las pruebas, **los datos que sirven a la prueba** y lo verosímil del contenido. La apreciación probatoria aparece debidamente motivada, con puntos objetivos de referencia, aspectos que evidencian la conexidad de las pruebas y la aplicación de un criterio lógico-jurídico por el Juzgador.

Esta valoración es idónea y no tiene por qué ser cuestionada por esta Sala, pues coincide con las reglas mínimas que establece el Código de Trabajo en el artículo 732: **objetividad**, **sensatez**, **y lógica razonable**, a fin de otorgarle su **justo valor** al material probatorio.

No existe razón alguna para considerar que la apreciación de las pruebas por parte del tribunal de segunda instancia, deviene en **error de hecho**, pues este se produce cuando aparece de manera incontrovertible y evidente que se dio por establecido un hecho sin respaldo probatorio o se omitió la valoración de alguno que se encontraba **debidamente** probado.

Ninguna de estas dos situaciones se produjo en el negocio sub-júdice, por lo que debe negarse curso legal al recurso presentado.

En consecuencia, la Sala Tercera, CASACIÓN LABORAL, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral presentado por el licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES en representación de BOLÍVAR ARROCHA y EMIGDIO PÉREZ, contra la Sentencia de 3 de enero de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo en el proceso laboral CLEMENTE GUTIÉRREZ Y OTROS -vs- TIPER, S. A., CONSTRUCCIONES ALFA Y CANTERA EL PUENTE, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. GASPARINO FUENTES TROESCHT, EN REPRESENTACIÓN DE SANTA ELENA (ANDY ELENA, S. A.) CONTRA LA SENTENCIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BANANERA SANTA ELENA (ANDY ELENA, S. A.) -VS- JOSÉ MARÍA OLMOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Gasparino Fuentes Troetsch, actuando en nombre y representación de Andy Elena, S. A., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 21 de diciembre de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral Bananera Santa Elena (Andy Elena, S. A.) contra José María Olmos.

Se trata de un proceso laboral abreviado en el cual el demandante solicita autorización para despedir al sr. José María Olmos quien goza de fuero sindical.

El juzgador de primera instancia no autorizó el despido y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó la sentencia.

En el recurso se señalan como infringidos los artículos 383, 813 y 213 acápite A numeral 2 del Código de Trabajo.

El recurrente al referirse a las infracciones de los artículos arriba citados señala que las pruebas no fueron estimadas y valoradas en base al criterio de la sana crítica.

Según el recurrente el Tribunal Superior de Trabajo no valoró o estimó las pruebas según lo dispone el artículo 813 del Código de Trabajo por lo siguiente:

> "La norma antes descrita le confiere al juez la facultad de apreciar los testimonios de acuerdo a la sana crítica, lo que quiere decir que debe examinarlos de acuerdo a las normas de la lógica y la experiencia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Trabajo en la sentencia recurrida lo que hace es parcializarse a favor de la parte demandada, puesto que no tomó en cuenta ni analizó los testimonios presentados por mi representada quienes estuvieron presentes y pudieron apreciar los hechos y acciones ejecutados por el Señor Olmos que dieron lugar a la solicitud de despido." ...
>
> El Tribunal Superior le dio valor al testimonio de los testigos del trabajador demandante. Sin embargo, no tomó en consideración que la mayoría de esos testigos son trabajadores que acompañaron al señor Olmos en las acciones de violencia. Según el Tribunal Superior el día 9 de marzo de 1995, en la Finca Santa Elena no ocurrió ningún incidente, a pesar de las múltiples declaraciones que indican claramente las acciones cometidas por el señor Olmos. La sana crítica es un sistema de apreciación de pruebas más no de parcialización como lo hizo erróneamente el Honorable Tribunal Superior de Trabajo al desechar completamente el testimonio de los testigos de mi representado, razón por la cual se violó por aplicación indebida el artículo bajo examen" (fojas 10 y 11).
>
> El Tribunal Superior de Trabajo señaló lo siguiente:
>
> "Se deja bien claro y establecido en el proceso, que era a la parte demandante, la que le correspondía la carga de la prueba, más sin embargo se observa que los testigos propuestos no fueron lo suficientemente convincentes en sus deposiciones (véase declaraciones de testigos en el acta de audiencia, que ya no es necesario citar por cuanto el juez a quo se refiere a cada uno de ellos y hace un análisis del mismo).
>
> En cuanto a los testimonios de los testigos propuestos por la parte demandada, denotan con más claridad los hechos y coinciden con las deposiciones de los funcionarios de la Caja de Ahorro que también fueron propuestos por el trabajador. De manera que las deposiciones de dichos testigos desvirtúan lo expresado por la parte demandante, con lo cual se deja claro que en ningún momento el trabajador cometió las causales que se le endilga en este proceso.
>
> Este tribunal no tiene comentario distinto que "que hacer al análisis de las pruebas documentales y periciales que hiciera el juez a quo, por lo que conceptúa que el Tribunal de primera instancia en su sentencia se ajusta a las constancias procesales y a lo establecido en la ley por lo que resulta mantenerla."

Observa la Sala que para el Tribunal Superior de Trabajo, que corrobora el análisis de las pruebas documentales y periciales del Juzgado Tercero de la Tercera Sección, el trabajador no ha incurrido en la causal señalada pues la empresa demandante no ha presentado pruebas suficientes que demuestren que el trabajador haya ejecutado actos de amenaza o de injuria en contra del empleador

o de miembros del personal directivo de la empresa.

La parte demandante para probar que la conducta del trabajador había incurrido en causal de despido, presentó como pruebas las declaraciones de testigos que laboran en la empresa y funcionarios de la institución bancaria que presenciaron los hechos. Igualmente la parte demandada presentó testigos que no solo presenciaron los hechos, sino que fueron partícipes también de la reunión y son compañeros de trabajo del sr. Olmos.

El Tribunal Superior de Trabajo le dio más valor al testimonio de los testigos presentados por la parte demandada que a los de la parte demandante, pues sus declaraciones coincidían con los funcionarios de la Caja de Ahorros "de manera que las deposiciones de dichos testigos desvirtúan lo expresado por la parte demandante" y por lo tanto, consideró que en ningún momento el trabajador incurrió en las causales de despido.

Corresponde entonces examinar las declaraciones de los testigos presentados por ambas partes.

De los testigos presentados por la parte trabajadora, encontramos que solamente uno, el señor Octavio Sanjur, participó de la reunión en que sucedieron los hechos y los otros no, inclusive uno no asistió a trabajar el 9 de marzo día que sucedieron los hechos. Las declaraciones del testigo que estuvo en la reunión y por lo tanto presenció los hechos, más que corroborar las declaraciones de los funcionarios de la Caja de Ahorros, no solo las contradice sino que las niega y los acusa de mentirosos, pues a pregunta que se le hiciera con respecto a que su versión sobre el estado de ánimo del sr. Olmos contradecía la del funcionario de la Caja de Ahorros, el sr. Sanjur contestó **"LA NIEGO, ESTA MINTIENDO"**. Los otros testigos, quienes se encontraba fuera de la oficina, aunque uno señala que el lugar se encontraba a unos sesenta metros, las declaraciones de los demás, denotan que aunque se encontraban cerca, no estaban suficientemente como para escuchar y percatarse de lo que sucedía en la reunión. Sin embargo,todos dan a entender que la actitud del Sr. Olmos siempre se mantuvo dentro de los parámetros de la decencia.

Por otro lado, las declaraciones de los testigos por parte de la empresa denotan claramente la actitud grosera amenazante y violenta del Sr. Olmos, a la vez que señalaron que las declaraciones del Sr. Olmos daban a entender que eran unos ladrones.

Veamos ahora las declaraciones que hacen los funcionarios de la Caja de Ahorros cuando le preguntan sobre lo sucedido en la reunión en cuestión:

Testimonio de Ricardo Arroyave Sieiro:

"PREGUNTADO: Diga el testigo si al momento del disgusto por parte del señor Olmos si el mismo levantó la voz para presentar su queja?

CONTESTÓ: Si la levantó" ...

PREGUNTADO: Diga el testigo si al momento de la reunión con el administrador de la finca el señor José María Olmos se presentó un poco enfurecido a dicha reunión y si luego de ello alzó la voz manifestando algunas ofensas o improperios al administrador de la finca, en fin relate que pasó al momento de la llegada del señor Olmos?

CONTESTÓ: Comenzando a conversar con el señor Ríos el administrador se presentó así rápidamente abriendo la puerta el señor Olmos pidiéndole respuesta enfurecido y alzó la voz y exigiendo que le explicara pues sobre los arreglos o acuerdo sindical de octubre y noviembre del 94 y además de los atrasos de los trabajadores porque se estaba dando eso ese fue el disgusto de él ahí.

PREGUNTADO: Diga el testigo si cuando llegó el señor Olmos a ese

conversatorio el señor Ríos lo instó a que saliera de la reunión el señor Olmos y si éste se negaba a salir?

CONTESTÓ: Correcto, el señor Ríos le pidió varias veces que desalojara a la oficina y el señor Olmos se negaba., nosotros intercedimos para que él se retirara y nos quedamos hablando con el señor Ríos.

PREGUNTADO: ...

CONTESTÓ: El tocó la puerta alguien se la abrió, entró con un grupo de trabajadores reclamando nuevamente sus derechos con los trabajadores de las fincas.

PREGUNTADO: ...

CONTESTÓ: Correcto, el señor Ríos le pidió varias veces que saliera, el señor Olmos se negaba en ese momento el señor Ríos al ver que no desalojaba la oficina, él procedió a retirarse de la misma.

PREGUNTADO: Diga el testigo si al momento en que el señor Ríos le manifestara al señor Olmos que saliera si el señor Olmos hablaba en voz alta y manifestando expresiones grosera carentes de una buena educación?

CONTESTÓ: Correcto, se manifestaba en voz alta y un poco grosero.

PREGUNTADO: ...

CONTESTÓ: Palabras exactamente no lo recuerdo, pero si estaba ofuscado, estaba bravo.

PREGUNTADO: ...

CONTESTÓ: Es correcto tuvimos que interceder, para calmar tanto a Olmos como a los trabajadores que estaban un poquito disgustados.

Testigo Edgar Eliécer Ríos Castillo: ...

PREGUNTADO: Diga el testigo si luego de estar uds. reunidos con el señor Ríos el señor Olmos se presentó con un grupo de trabajadores, tocó la puerta y entró violentamente a esa reunión y con el ánimo alterado?

CONTESTÓ: Realmente todavía no nos habíamos reunido con el señor Ríos íbamos a reunirnos, cuando llegó, tocó la puerta y entró reclamando, pidiendo una aclaración de porque los descuentos no llegaban a la Caja de Ahorros, el señor Ríos dijo que saliera sino él salía de la oficina porque nos iba a atender a nosotros y que a él no lo podía atender, el señor Ríos dijo que saliera, sino el salía de la oficina y tuvimos que hablar con ellos para calmar la cuestión para que nos dejaran reunirnos con el señor Ríos.

PREGUNTADO ...

CONTESTÓ: Lo que yo escuché y recuerdo como dije enante el pedía una explicación de porque los descuentos no llegaban, a lo mejor en tono alto de voz.

INTERROGADO: Diga el declarante si en lo que ud. presenció el señor José María Olmos se expresó o se manifestó en contra de uds. en ese momento representantes de la Caja de Ahorros o en contra de los que allí representaban a la empresa con amenazas, ofensas o injurias o con otras palabras de tipo ofensivo?

> CONTESTÓ: No, con nosotros no, como representantes de la Caja de Ahorros no, en cuanto a los representantes de la empresa creo que solo fue en tono de voz alto.

De las transcripciones anteriores se desprende claramente que las declaraciones de los funcionarios de la Caja de Ahorros corroboran las de los testigos presentados por la demandante. Por ello, no ve esta Sala cómo el Tribunal Superior de Trabajo, consideró que la conducta del señor Olmos no se enmarca dentro de diversas causales de despido, específicamente dentro de la señalada en el artículo 213, acápite a, numeral 2, en cuanto a incurrir en actos de violencia, amenazas o injurias. De las declaraciones anteriores es claro que el señor Olmos interrumpió una reunión entre los administradores de la finca y funcionarios de la Caja de Ahorros, alzó la voz, fue grosero, se le pidió varias veces que saliera de la reunión e hizo caso omiso, a tal punto que uno de los administradores fue el que abandonó la reunión. Además, los funcionarios de la Caja de Ahorros tuvieron que interceder para calmar los ánimos entre los administradores y el señor Olmos, resultado de la interrupción y la negativa de salir por parte de él. El acto de resistirse sin derecho a abandonar la oficina implica un acto de violencia contra la administración y una provocación para que se le desalojara por medios violentos.

La situación arriba descrita nos lleva a la conclusión que de que es evidente que el Tribunal Superior no evaluó las pruebas de acuerdo a la lógica puesto que no es cierto que las declaraciones de los funcionarios de la Caja de Ahorros coinciden con los de los testigos presentados por la parte demandada, sino todo lo contrario.

Por último, como hemos señalado, no es el propósito del recurso de casación entrar a evaluar el criterio del Tribunal Superior de Trabajo, a menos que estemos ante un error de hecho.

Veamos qué se entiende por error de hecho (de la Corte Suprema de Justicia de Colombia):

> "Ha dicho la jurisprudencia de la Corte que esta clase de error consiste en no dar por probado un hecho, estándolo, o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario." ...
>
> El error de hecho resulta más que todo de un proceso subjetivo del juzgador, de un equivocado razonamiento apreciativo de las probanzas que da por establecido un hecho que no sucedió o que al contrario, da por no establecido un hecho consumado y probado plenamente.
>
> (El recurso Extraordinario de Casación Laboral, Luis Lagos Pantoja, Primera edición 1993, pág. 41-42-44, Santa Fe de Bogotá, Colombia).

Pues bien, consideramos que sí existe violación a las normas citadas por el recurrente puesto que el Tribunal Superior de Trabajo al violar las normas sobre la sana crítica dejó de aplicar el artículo 213, acápite a, numeral 2 del Código de Trabajo a una hipótesis de hecho regulada en esta norma.

En consecuencia, la Sala Tercera (laboral) de la corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 21 de diciembre de 1995 y autoriza a BANANERA SANTA ELENA (ANDY ELENA, S. A.) a despedir al señor JOSÉ MARÍA OLMOS por haber incurrido en actos de violencia, amenaza e injuria en contra del personal directivo de la empresa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ARISTIDES YANIS, CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE ENERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARISTIDES YANIS -VS- SINDICATO DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO (SICOTRAC). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado **Carlos Ayala** en representación de **ARISTIDES YANIS** ha interpuesto recurso de Casación Laboral contra el Auto de 25 de enero de 1996, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: **ARISTIDES YANIS -vs- SINDICATO DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO (SICOTRAC).**

En este estado del proceso, la Sala procede a examinar el recurso para determinar si el mismo cumple con los requisitos mínimos que exige la ley para que pueda ser admitido por esta Superioridad.

La Sala debe señalar que no procede la admisión del referido recurso, ya que la resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo que se pretende casar, fue expedida dentro de un proceso de ejecución de sentencia. Esto es, que en razón de un recurso de apelación interpuesto contra el Auto N° 271 de 27 de septiembre de 1995 dictado por la Juez Segunda de Trabajo de la Primera Sección, que decidió dejar sin efecto el Auto N° 201 de 27 de julio de 1995 (este último decretaba un embargo sobre todos los bienes muebles pertenecientes a SICOTRAC Transístmica) el Tribunal de Segunda instancia al pronunciarse confirmó lo determinado por el juez a-quo.

El artículo 898 del Código de Trabajo preceptúa de manera clara y precisa que contra las resoluciones dictadas dentro los procesos de ejecución de sentencia, sólo puede interponerse el recurso de apelación. Para mejor comprensión veamos que dice la norma textualmente:

> "Artículo 898.- Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo puede interponerse el recurso de apelación, sujeto alas condiciones previstas en este Código."

En reiteradas ocasiones esta Sala ha manifestado lo anterior en relación al tema, mediante Sentencia de 29 de noviembre de 1991, Sentencia de 9 de diciembre de 1981 y Sentencia de 27 de junio de 1977.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por licenciado Carlos Ayala en representación de ARISTIDES YANIS.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE ROBERTO MEDINA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ORDEN DADA 30 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR INSTITUCIONAL DE PANAMÁ ESTE DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor **Rolando Villalaz Guerra**, en representación de **ROBERTO MEDINA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Protección de los Derechos Humanos para que se declare nula, por ilegal, la nota manuscrita de 30 de junio de 1995, por el Director Institucional de Panamá de la Caja de Seguro Social.

El Magistrado Sustanciador del caso, mediante Auto calendado 20 de noviembre de 1995, decidió **NO ADMITIR** la presente acción porque consideró que el acto impugnado, que consiste en el cambio de turnos y horario de trabajo efectuado por el Dr. José Modelo, Director Médico del Hospital Regional de Chepo, no constituye un derecho humano justiciable sino que "... por el contrario, se trata de un acto de carácter administrativo atacable por la vía de los recursos administrativos y no por el proceso especial incoado por la recurrente."

La parte demandante, al notificarse de dicha resolución anunció y sustentó formal recurso de apelación que corre a fs. 32-34 del expediente, en los siguientes términos:

> "Entre los derechos fundamentales de 1era. categoría se encuentran entre otros, **la libertad de asociación**, libertad de expresión y reunión, el derecho de propiedad y **el principio de igualdad**. En la demanda presentada el 18 de julio de 1995 por el **Dr. Roberto Medina** se señala con toda claridad en las páginas 6 y 11 que entre los derechos vulnerados a dicho servidor público se encuentran los relativos al principio de igualdad y al derecho de asociación.
>
> El Dr. **Roberto Medina** mediante la orden manuscrita del 30 de junio de 1995 confeccionada por el Dr. **José Modelo**, se le cambia abruptamente su horario de trabajo, sin mediar ningún tipo de consulta previa, como parte de una abierta y ya continuada política de persecución política y represalia en contra de este profesional de la salud, por haber cometido la **osadía** de haber acudido ante el Órgano Judicial, previamente, ante una abierta vulneración de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional por parte de este mismo funcionario que ahora le ordena cambiar su horario de trabajo
> ...
> ...
> Lamentamos no compartir la opinión del Magistrado Sustanciador, ya que el mismo ubica la demanda, como si se tratara **únicamente** de la vulneración del derecho al trabajo, sin embargo, si se observa en su contexto integral la Demanda, se podrá constatar que **existen derechos humanos justiciables** que también son afectados con la medida impugnada."

El Procurador de la Administración Suplente, presentó sus objeciones al presente recurso de apelación, que radican fundamentalmente en el hecho de que el demandante no impugnó un acto administrativo que desconozca derechos humanos que sean de carácter justiciable, tal como lo exige el artículo 98, numeral 15 del Código Judicial, sino que se adecúa a los derechos humanos de la segunda generación, mismos que están destinados a satisfacer las necesidades materiales y culturales del hombre, y cuyo cumplimiento corre por cuenta del Estado y sus

beneficios a la colectividad o sociedad.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, proceden a externar las siguientes consideraciones finales.

Este Tribunal de segunda instancia coincide con los argumentos vertidos tanto por el Magistrado de primera instancia como por el Procurador de la Administración Suplente, por razón de que el cambio de turnos y horario del cual fuera objeto el recurrente, mediante la nota de 30 de junio de 1995, manuscrita por el **Dr. José Modelo**, Director Institucional de Panamá Este, no constituye un derecho humano justiciable, susceptible de ser atacado por medio de demanda Contencioso Administrativa de protección de los derechos humanos, sino que constituye un acto de naturaleza administrativa que puede ser impugnado mediante una acción Contenciosa de Plena Jurisdicción, previa la utilización de los recursos gubernativos correspondientes.

El objeto de este proceso se limita fundamentalmente, a la protección de los derechos civiles y políticos que pertenecen o son innatos al hombre por su condición y dignidad de ser humano.

En situaciones similares en las que el derecho al trabajo es el que se aduce infringido, esta Sala ha sido enfática al sostener que el mismo no puede imponerse judicialmente, vía contencioso de protección de los derechos humanos, dado que éste depende de las políticas o lineamientos gubernamentales a seguir para satisfacer tales necesidades. Los Autos de 30 de marzo de 1992, 24 de marzo de 1995 y de 5 de julio de 1995, han expresado al respecto:

> "Por otro lado, la parte actora impugna un acto administrativo que declara insubsistente su nombramiento como funcionario de la Autoridad Portuaria Nacional. Este acto debe ubicarse entre los que podrían vulnerar el derecho al trabajo, que, como lo ha indicado la jurisprudencia y la doctrina, es un "derecho no justiciable", y por tanto, no acusable mediante el proceso especial, que incoa el recurrente, establecido en el numeral 15 del artículo 98 del Código Judicial." (Auto de 30 de marzo de 1992).
>
> "De inmediato se percata el Sustanciador que con la presente acción contencioso administrativa de protección de los derechos humanos el recurrente pretende que la acción de personal N° 8170-94 de 18 de octubre de 1994, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se ordenó trasladarle de una ciudad a otra dentro de la entidad pública en la que presta sus servicios, constituye una violación a un derecho humano justiciable.
> ...
> Por tanto, y siendo que en el caso que nos ocupa estamos frente a un derecho social como lo es el derecho al trabajo el cual depende de las políticas económicas gubernamentales, no es esta la vía idónea que el demandante debe utilizar para impugnar el presente acto administrativo ..." (Auto de 24 de marzo de 1995).
>
> "Se percata quien sustancia que con la presente acción contencioso administrativa de protección de los Derechos Humanos el recurrente pretende que el Decreto de personal N° 231 de 24 de abril de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual se deja sin efecto su nombramiento como asesor legal con funciones en la Cancillería, constituye una violación a un derecho humano justiciable.
>
> Sobre el particular conviene indicar al demandante, que el proceso Contencioso de Protección de los Derechos Humanos está dirigido a obtener la protección de derechos humanos **justiciables**, de conformidad con lo establecido en el artículo 98, numeral 15 del Código Judicial ...
> ...

> Con base a lo expuesto, y siendo que en el caso que nos ocupa estamos frente a un derecho social como lo es el derecho al trabajo el cual depende de las políticas económicas gubernamentales, no es esta la vía idónea para impugnar el presente acto administrativo ... "(Auto de 5 de julio de 1995).

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la Providencia de 20 de noviembre de 1995, que NO ADMITE la presente demanda de Protección de los Derechos Humanos, interpuesta por el Dr. Rolando Villalaz Guerra, en representación de ROBERTO MEDINA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RIGOBERTO VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA GISELA MONTENEGRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 104 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rigoberto Vergara, actuando en nombre y representación de MARITZA GISELA MONTENEGRO, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 104 del 30 de octubre de 1995, emitida por el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio y para que se hagan otras declaraciones.

En el mismo escrito en que formuló la demanda, el licenciado Vergara pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, aduciendo que con la adopción de esta medida se evitaría "una lesión a la integridad del ordenamiento jurídico, ya que el acto administrativo impugnado es manifiestamente incompatible con una norma jurídica de superior jerarquía, como lo son los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por la República de Panamá" (f. 12).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado es una facultad discrecional que puede ejercer la Sala si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

El ordinal 3° de la misma Ley establece que no habrá lugar a la suspensión provisional en las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o **retiro del personal administrativo**, salvo los casos de empleados nombrados por períodos fijos. Como en el presente caso se pide la suspensión provisional de los efectos de una acción de personal dictada contra una funcionaria que no fue nombrada por un período fijo, la medida cautelar solicitada no es procedente y debe negarse con fundamento en dicha norma.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de la Resolución N° 104 del 30 de octubre de 1995, expedida por el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE CEMENTO PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° A. C. R. P. 587-92 S/F, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Por medio de escrito de 9 de febrero de 1996, el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola solicitó que se le declare impedido para conocer de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, propuesta por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, en representación de CEMENTO PANAMÁ, S. A., con el fin de que se declare nula por ilegal, la Resolución N° A. C. R. P. 587-92 s/f, emitida por la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

En el escrito de manifestación de impedimento el Magistrado Molino Mola expresó:

"...
Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con los numeral 1 y 5 del artículo 749 del Código Judicial, en virtud de que la demanda en comento fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte por la firma forense de la cual forma parte el licenciado Eduardo Molino Maduro quien es mi sobrino, hijo de mi hermano fallecido Eduardo Molino Mola (q. e. p. d.), y por tanto se encuentra con relación a mi persona dentro del tercer grado de consanguinidad".

Las normas legales en las que fundamenta la manifestación de impedimento textualmente preceptúan:

Artículo 78. Son causas de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso-administrativo las siguientes:
...
3. Estar dentro del cuarto grado de parentesco de consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes o sus apoderados; ...

Código Judicial:

Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:

1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el Juez o su cónyuge, y algunas de las partes. ...

5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron

origen al mismo; ...

El impedimento manifestado por el Magistrado Edgardo Molino Mola configura las causales que señala el numeral 3 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, y el numeral 1 y 5 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que el mismo debe declararse legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, lo separa del conocimiento del negocio y para reemplazarlo designa al Magistrado Rogelio A. Fábrega Z. de la Sala Civil quien le sigue en turno.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

PETICIÓN DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD Y VALOR LEGAL DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (PAGO DE VACACIONES A TODOS LOS LEGISLADORES DEL PERÍODO 1989-1994). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Contralor General de la República ha solicitado a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del refrendo de la Planilla que contiene el pago de vacaciones a todos los Legisladores del período 1989-1994, remitida por insistencia a esta Contraloría General de la República por el Presidente de la Asamblea Legislativa con Nota PRES/N-484 del 11 de julio de 1994.

Cumplidos todos los trámites procesales establecidos en la ley el caso se encuentra en estado de ser fallado.

Posición de la Contraloría General de la República

"La solicitud de pronunciamiento del valor legal del acto administrativo en referencia se fundamenta en la opinión del Procurador de la Administración, Lic. Donatilo Ballesteros en Nota N° C-106 de 1° de junio de 1994, dirigida al Honorable Legislador Arturo Vallarino, Presidente de la Asamblea Legislativa, en la cual sostiene que no debe pagarse por concepto de vacaciones suma alguna distinta del pago que reciben ordinariamente los Legisladores durante los meses de labor y en los meses en que cesan las funciones legislativas; porque ellos disfrutan de cuatro (4) meses remunerados al año, producto de cada período intermedio entre las legislaturas."

"La Contraloría General de la República observa que cuando los Legisladores son llamados a Sesiones Extraordinarias, durante el período de receso de la Asamblea Legislativa, el Estado tiene que pagarle Dieta por cada día de sesiones a todos sus miembros. Estas Dietas son adicionales al Salario y demás remuneraciones que reciben en forma permanente los Legisladores durante los doce meses del año; por lo tanto, constituye razón suficiente para confirmar que, efectivamente, los Legisladores se encuentran de vacaciones durante el período de receso de la Asamblea Legislativa; de lo contrario, si estuvieran en funciones

regulares, no se justificaría el pago adicional en sesiones extraordinarias."

Con fundamento en las anteriores consideraciones, que constituyen un resumen de la solicitud de viabilidad de pago, la Contraloría General de la República negó el REFRENDO DE LA PLANILLA elaborada por la Asamblea Legislativa para el pago de las vacaciones de los Legisladores del período 1989-1994.

Posición del Presidente de la Asamblea Legislativa

En un extenso escrito el Presidente de la Asamblea Legislativa expone la tesis a favor del pago de las vacaciones a los Legisladores. Los aspectos más sobresalientes de su exposición se explican de la siguiente manera:

> "Durante los períodos que transcurren entre las legislaturas, es decir aquéllos que se suscitan entre el 1 de enero al 28 de febrero y del 1 de julio hasta el 31 de agosto, la Asamblea Legislativa no interrumpe sus actividades pues, durante estos denominados "recesos" de las sesiones ordinarias del pleno de dicha corporación, quedan en funciones unas comisiones que la propia Constitución Política y no el Reglamento interno de la Asamblea Legislativa como erróneamente piensa el Procurador de la Administración, les ha atribuido el carácter de permanentes. (Véase los Artículos 159 y 160 de la Constitución Política).
>
> Es durante estos períodos denominados "recesos" que, lejos de constituir un tiempo de descanso remunerado, cuando los Legisladores adelantan, discuten y aprueban en primer debate los proyectos de ley y ejercen sus funciones de control político de la acción del gobierno a través de las veinte comisiones permanentes que actualmente contempla el Reglamento Interno de la Asamblea, el cual obliga a todos los Legisladores a pertenecer, por lo menos a una Comisión Permanente. (Véanse los Artículos 13, 37 y 38 del Reglamento Interno).
>
> También, se aprueban o rechazan, durante estos recesos créditos adicionales ya sean suplementarios o extraordinarios, traslados de partidas y demás modificaciones a la Ley del Presupuesto General de la República, en la Comisión de Presupuesto, la cual por la propia dinámica de la ejecución presupuestaria y la necesidad de una urgente aprobación de dichos instrumentos, exige un funcionamiento ininterrumpido. (Artículo 51 del Reglamento Interno).
>
> Igualmente, funciona de manera sostenida la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales para conocer, en primera instancia, de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y contra los integrantes de la Asamblea Legislativa en cumplimiento del Artículo 154 de la Constitución Política, para lo cual también puede reunirse en cualquier momento y por derecho propio el pleno de la Asamblea, en sesión judicial, de conformidad con el artículo 146 de la Constitución. (Véase Artículo 46 del Reglamento Interno).
>
> Asimismo, en reiteradas ocasiones, durante el actual período constitucional, el Presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere el Artículo 143 de la Constitución Política, ha convocado a la Asamblea Legislativa, a sesiones extraordinarias para aprobar, tal como en este momento se está haciendo, importantes Leyes de interés nacional.
>
> Por otro lado, los legisladores también realizan en forma continua funciones de control político de las actividades de los demás órganos y entidades del Estado, para lo cual son citados al pleno o a las comisiones permanentes, Ministros, Directores Generales, Gerentes de entidades autónomas o semiautónomas, y otros, a fin de

rendir informes verbales y escritos sobre las materias de su competencia, que la Asamblea Legislativa requiere para el desempeño de sus funciones. (Véanse los Artículo (sic) 155 (9) de la Constitución Política y los Artículos 45 y 221 del Reglamento Interno).

En este orden de ideas y en ejercicio de la función de representación de la Nación y de los electores de sus circuitos electorales, los legisladores procuran logros y beneficios para la comunidad, preparan y vigilan la ejecución de proyectos de desarrollo y consultan la opinión de sus electores, atienden los problemas que los aquejan y escuchan grupos de interés a fin de establecer su posición posterior en las sesiones legislativas.

De esta manera, un tanto sintética, me he permitido describir las múltiples, variadas y complejas tareas que debe cumplir un Legislador de la República, las cuales, en contra de la imagen que algunos tienen, son excesivas y consumen gran parte del tiempo disponible de estos funcionarios."

En un nota enviada al Contralor General de la República el 11 de julio de 1994 bajo el número 484, de parte del Presidente de la Asamblea Legislativa, éste expone en forma concentrada los puntos centrales de la argumentación de esta Institución, en relación con la insistencia a que se pague la planilla de vacaciones correspondientes a los Legisladores de la República del período 1989-1994. La mencionada argumentación la expresa así:

"Existe el criterio errado en nuestro medio, en el sentido de señalar que el Artículo 143 de la Constitución Política establece un sistema vacacional especial para los Legisladores, diferente de los demás servidores públicos, durante los recesos entre las legislaturas.

Ningún artículo de la Constitución, incluyendo el 143, hace mención al "período de receso" de la Asamblea Legislativa, así como tampoco equipara con vacaciones estos intermedios entre las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa.

No es cierta la calificación del servicio legislativo como función "intermitente", o lo que es lo mismo que se interrumpe, cesa y prosigue. Si ello fuera así, el Estado no estuviera obligado a prestar la remuneración respectiva, precisamente por el no ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el Estado remunera los servicios de los legisladores anualmente.

La doctrina ha planteado sobre la naturaleza y efectos del derecho a vacaciones como la desvinculación "absoluta de las funciones o atribuciones que diariamente su empleo o cargo demanda, de modo que no exista siquiera de parte del trabajador, salvo en casos excepcionales, la obligación de concurrir al sitio de trabajo", por lo que si las vacaciones deben catalogarse como un descanso ininterrumpido", nos llevaría al extremo de pensar en la oponibilidad que podrían alegar los legisladores frente al llamado del Órgano Ejecutivo a sesiones extraordinarias o la propia convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones judiciales por estar disfrutando en el receso del derecho a vacaciones, consagrado en la Constitución Política, el cual debería ser ininterrumpido para reparar las energías perdidas en la legislatura anterior. Semejante criterio sería una grave irresponsabilidad y el desprecio inaceptable de las funciones para los cuales fueron elegidos.

No cabe duda de que el espacio de tiempo entre cada legislatura no equivale a vacaciones porque ni la constitución ni la ley lo disponen así, ya que los legisladores están en disponibilidad para atender sus llamados propios y los del Ejecutivo, lo cual constituye parte de sus obligaciones como servidores públicos. Las Comisiones

Permanentes y sobre todo la Comisión de Presupuesto son un ejemplo palpable de dicha experiencia, pues sus funciones no se interrumpen en los recesos plenarios.

Dentro de las amplias y variadas funciones de los legisladores, que de conformidad con la Constitución Política pueden ser de carácter administrativo y judicial, además de las propiamente legislativa, se desempeñan en actividades de representación política de los electores de su Circuito Electoral y, en ejercicio de la función constitucional del artículo 144, actúan en su representación y participan en la defensa de sus intereses y necesidades y en la búsqueda de soluciones para éstos.

Durante este período constitucional, los recesos, lejos de constituir un período de descanso, han servido para que los legisladores adelanten y discutan los proyectos de ley, en primer debate, en las comisiones permanentes; para aprobar créditos adicionales; y para conocer en primera instancia en la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, sobre las situaciones previstas en el Artículo 154 de la Constitución Política. En reiteradas ocasiones, el Presidente de la República ha convocado a la Asamblea Legislativa a sesiones para cumplir funciones dentro de sus circuitos electorales, procuran logros para el desarrollo de sus comunidades, preparan proyectos de ley que beneficien a sus electores, consultan la opinión de éstos, a fin de establecer su posición, posterior, en las sesiones legislativas."

Posición del Procurador de la Administración

El señor Procurador de la Administración estima que no es jurídicamente viable el pago adicional de un mes de vacaciones a los Legisladores de la República, con base a los siguientes argumentos:

"Respecto al caso particular de los Legisladores, es de lugar recordar el artículo 143 de la Constitución Política, como norma superior de carácter especial, otorga a estos servidores públicos un sistema de descanso distinto al que rige para el resto de las pesonas (sic) que laboran para el Estado Panameño. El texto del artículo mencionado es el que se copia a renglón seguido:

'Artículo 143. La Asamblea Legislativa se reunirá por derecho propio, sin previa convocatoria, en la capital de la República, en sesiones que durarán ocho meses en el lapso de un año, dividido en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán del primero de septiembre hasta el treinta y uno de diciembre y del primero de marzo al treinta de junio.

También se reunirá la Asamblea Legislativa, en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que éste señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho Órgano someta a su consideración.'

En párrafos anteriores vimos que para tener derecho a los treinta (30) días de descanso con sueldo, a que se refiere el artículo 796 del Código Administrativo, es necesario además de ser servidor público, prestar servicio al Estado durante Once (11) meses continuados. Sin embargo, para los Legisladores, que son servidores públicos de elección popular, no rige este sistema, toda vez que los mismos laboran solamente ocho meses durante el año, divididos en dos legislaturas de cuatro meses cada una; la primera inicia el primero de septiembre y culmina el 31 de diciembre, la segunda inicia el primero de marzo y culmina el 30 de junio, lo que significa que los legisladores descansan cuatro meses en el año, divididos en dos

recesos de dos meses cada uno; el primer receso comprende los meses de enero y febrero, el segundo receso comprende los meses de julio y agosto. Esto último viene a ser realmente el período de descanso de los legisladores, respondiendo a la norma Constitucional que le garantiza a todo trabajador, sea del sector privado o sea del sector público, un período de descanso.

Lo anterior debe bastar para entender que la Constitución Política ha establecido para los Legisladores, un Sistema diferente al resto de los Servidores Públicos, en el cual se les permite descansar más tiempo (4 meses) durante el año, a cambio de la prestación de servicios por menos tiempo (8 meses) durante el año; además de que su tiempo de descanso tiene siempre la misma fecha. Es probable que estos beneficios especiales respondan a la labor especial que desarrolla el Órgano Legislativo del Estado, en concepción de quienes redactaron el artículo 143 de la Constitución.

Sin embargo, pasemos a revisar algunas disposiciones del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, aprobado mediante las Leyes 49 del 4 de diciembre de 1984, y 7 del 27 de mayo de 1992, que no hacen sino confirmar la posición que sostenemos.

Iniciemos esta parte con los artículos 36 y 38 del Reglamento señalado, que disponen cuales (sic) son, cuando (sic) funcionan las Comisiones de la Asamblea Legislativa, y el tiempo que duran en sus cargos los miembros de las Comisiones Permanentes, respectivamente. El contenido de estos artículos es el siguiente:

'Artículo 36. Las Comisiones de la Asamblea Legislativa, durante sus legislaturas ordinarias y extraordinarias, se dividen en;

1. Permanentes;
2. Ad-hoc; y
3. Accidentales.' (El subrayado es nuestro).

'Artículo 38. Los miembros de las Comisiones Permanentes durarán en sus cargos desde el primero de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente.

Sabido es que los Servidores Públicos solo (sic) pueden obrar de acuerdo a lo preceptuado en la Ley, no pudiendo ejercer funciones imprevistas, ni tampoco ejercerlas durante un tiempo no señalado en la Ley. La idea de recordar este principio fundamental del Derecho Público, se basa en que precisamente el artículo 36 recien (sic) copiado, deja claro que las Comisiones de la Asamblea Legislativa funcionan "durante" sus legislaturas ordinarias y extraordinarias, es decir la Ley no ha previsto que deban funcionar en los períodos de receso de la Asamblea, salvo por supuesto, que se trate de sesiones extraordinarias, debidamente convocadas por el Órgano Ejecutivo. Hacemos estos señalamientos, porque quienes defienden la posición de que los Legisladores tienen derecho al pago de un mes de vacaciones, además de los cuatro (4) meses de receso remunerados que disfrutan en el año, sostienen que el nombre de Comisiones Permanentes significa que estas trabajan durante todo el año, en forma ininterrumpida; situación que como se ha visto no está prevista en la Ley.

El nombre de Permanentes que reciben esas Comisiones de la Asamblea, ya lo han dicho reconocidos juristas patrios, responde el carácter ordinario o fijo que tienen las mismas, para así poder distinguirlas de las Comisiones Ad-hoc y de las Comisiones Accidentales, pero ello no significa que las Comisiones Permanentes funcionen durante todo el año en forma continuada, por el contrario, (Ver pruebas adjuntas) para nosotros está en evidencia que según el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa,

todas las Comisiones de la Asamblea funcionan "durante" sus legislaturas ordinarias y extraordinarias. Es decir, que jurídicamente, la única posibilidad de que una Comisión de la Asamblea Legislativa funcione los meses previstos para el receso de ésta, es que se convoque a sesiones extraordinarias durante dicho receso.

Consideramos además, que el artículo 38 del Reglamento en referencia no hace otra cosa que confirmar la regla anterior, en tanto aclara que los miembros de las Comisiones durarán en sus cargos desde el primero de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente. Dicha aclaración se hizo necesaria para distinguir que en un año las Comisiones Permanentes funcionan con ocasión de las dos legislaturas, interrumpiéndo (sic) su labor entre una y otra por un período de dos meses, pero que no obstante ello, los cargos de sus miembros se extienden por todo el año. De haberse querido decir en el artículo 36 que las Comisiones Permanentes funcionan durante todo el año, la aclaración del artículo 38 no habría sido necesaria.

Otro artículo que viene a confirmar nuestro criterio es el número 43 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, que a la letra dice:

'Artículo 43. Los Presidentes de las Comisiones Permanentes rendirán un informe por escrito del trabajo de la Comisión que presiden, cinco (5) días antes de la terminación de una legislatura ordinaria.'

En efecto, como quiera que las Comisiones Permanentes deben funcionar normalmente durante las legislaturas ordinarias de la Asamblea, el Reglamento Interno les exige a los Presidentes de dichas Comisiones que rindan un informe por escrito del trabajo de la Comisiones que presiden, cinco (5) días antes de la terminación de una legislatura ordinaria. Esta norma, que es muy clara, concuerda perfectamente con el artículo 36 de la excerta reglamentaria en estudio, en el sentido de que las Comisiones Permanentes trabajan **"durante"** las respectivas legislaturas de la Asamblea (ordinaria y extraordinaria), pero no se prevee la posibilidad de que trabajen durante el receso de la Asamblea Legislativa, ni a nivel Constitucional, mucho menos en el legal.

Para finalizar con la revisión de las normas del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, veamos lo que dice su artículo 91:

'Artículo 91. Previa información de los fines que las motivan, las sesiones extraordinarias serán convocadas en cualquier tiempo por el Órgano Ejecutivo, de acuerdo con el Artículo 143 de la Constitución Política y serán remuneradas con cargo al Presupuesto de la Nación.'

En conformidad con la norma transcrita, los Legisladores reciben una remuneración adicional cuando son convocados a sesiones extraordinarias, tal como ha sido admitido expresamente por el Señor Presidente de la Asamblea Legislativa en la foja 35, al indicar lo siguiente:

`Las sesiones extraordinarias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. La convocatoria es discrecional del Ejecutivo en los períodos de receso del Plenario de la Asamblea.

Quizás, el único limitante para el Ejecutivo pudiera ser el costo económico de las mismas, así como la única prerrogativa que reciben los Legisladores es la remuneración correspondiente.

En cambio, ni las sesiones judiciales ni las políticas (Artículo 51 de la Constitución Política) son remuneradas de manera

extraordinaria. Estas son propias de la Institución.

En el primer caso, o sea, de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el pago adicional que reciben los Legisladores responde a la independencia funcional de los Órganos del Estado. En este caso, el poder de convocar pertenece al Ejecutivo, correspondiéndole al legislativo una retribución económica adicional, en concepto de esa convocatoria que hace el otro órgano y al cual debe acudir, pero recibiendo una remuneración extraordinaria." (Lo subrayado es nuestro).

Siendo un hecho probado, la remuneración adicional a los Legisladores, por el período de sesiones extraordinarias, queda claro nuevamente que dichos servidores públicos se encuentran disfrutando de un tiempo de descanso en los meses de la Asamblea Legislativa que es cuando se efectúan dichas sesiones (enero, febrero, julio, agosto). Porque si fuera cierto que durante el período de receso legal de la Asamblea, los Legisladores se encuentran trabajando en las Comisiones, cumpliendo con la obligación ordinaria de formar parte de una de ellas, que les impone el artículo 37 del Reglamento Interno, entonces no se justificaría una remuneración adicional a las retribuciones normales que reciben en los recesos legales durante los cuales no trabajó.

La explicación lógica qué (sic) cabe a esa remuneración adicional, es que el Órgano Ejecutivo puede eventualmente convocar a legislatura extraordinaria a la Asamblea Legislativa, para conocerde asuntos determinados, pero tomando en cuenta, que las sesiones extraordinarias tienen lugar durante el receso legal de ese Órgano del Estado, esto es, el período de descanso a que tienen derecho los Legisladores (vacaciones especiales), entonces se hace necesario recompensar la interrupción del ejercicio de su descanso, con el pago adicional cargado al Presupuesto de la Nación.

Por todo lo anterior, concluimos que existe un sistema ordinario de vacaciones para la generalidad de los Servidores Públicos, ajustado a las exigencias del artículo 796 del Código Administrativo. Sin perjuicio de ello, los Legisladores están regidos por un sistema de descanso distinto, ya que así se colige claramente de la norma Constitucional (art. 143), que ha establecido para ellos la prestación de servicios al Estado por un período de tiempo mas corto, para tener derecho a un descanso mas (sic) prolongado. De allí, que los Legisladores pueden descansar, como en efecto lo hacen, durante los meses de receso de la Asamblea Legislativa (enero, febrero, julio, agosto), pero en nuestra opinión no es jurídicamente viable el pago adicional de un (1) mes de vacaciones a esos funcionarios."

Posición Del Pleno De La Sala Tercera De La Corte Suprema De Justicia.

Un examen de la situación legal planteada demuestra que el problema central a resolver es si durante los meses de enero y febrero, julio y agosto de cada año, los miembros de la Asamblea Legislativa se encuentran en receso o están trabajando durante todo ese tiempo en forma ininterrumpida.

Empecemos por analizar las disposiciones constitucionales sobre el Órgano Legislativo y su desarrollo legal mediante la ley N° 7 de 27 de mayo de 1992, que reformó la ley 49 de 1984.

El artículo 143 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa se reunirá en **sesiones** que durarán ocho meses en el lapso de un año, dividido en dos **legislaturas ordinarias** de cuatro meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán del primero de septiembre hasta el treinta y uno de diciembre y del primero de marzo al treinta de junio. También se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que éste señale.

El artículo 36 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que: "Las comisiones de la Asamblea Legislativa, **durante sus legislaturas ordinarias y extraordinarias**, se dividen en: Permanentes, Ad-Hoc y Accidentales. El artículo 43 de la misma ley, que contiene el Reglamento de la Asamblea Legislativa, expresa que "Los Presidentes de las comisiones permanentes rendirán un informe por escrito del trabajo que presiden, cinco días antes de la terminación de una legislatura ordinaria."

De las normas transcritas se entiende claramente que la Asamblea Legislativa tiene un receso en la primera legislatura ordinaria que se da entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre durante los meses de enero y febrero. Que en la segunda legislatura ordinaria del año, que se da entre el 1 de marzo al 30 de junio tienen un receso en los meses de julio y agosto. Las Legislaturas de sesiones extraordinarias se dan en los períodos de receso, es decir en enero y febrero o en julio y agosto, a convocatoria del Órgano Ejecutivo. De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento las comisiones funcionan **durante las legislaturas ordinarias y extraordinarias** y el artículo 43 de ese Reglamento señala que se debe rendir un informe cada cuatro meses, es decir, cinco días antes de la terminación de una legislatura ordinaria. Se entiende entonces que las comisiones operan durante el período de las legislaturas ordinarias o extraordinarias y que no existe legalmente período de reunión de las comisiones fuera del tiempo de las legislaturas. Por ello es que al finalizar una legislatura ordinaria deben rendir un informe de su trabajo, que no incluye el tiempo en que no hay legislatura. Es claro entonces que los legisladores de la República no tienen obligación legal de reunirse en comisión durante los períodos de receso y si lo hacen se le pagan dietas por ese tiempo, como claramente se desprende de notas que reposan en el expediente y que son del tenor siguiente:

"Panamá, 21 de octubre de 1992

Licenciado
Rubén Arosemena
Secretario General
E. S. D.

Respetado Licenciado:

Sirva la presente para extender un cordial saludo.

Me dirijo a usted en relación a un error involuntario en la confección del listado de asistencia a las reuniones de la Comisión de Credenciales durante el mes de **agosto**; las cuales me honré en presidir, en el cual se suprimieron algunos nombres de Honorables Colegas que participaron de las mismas, lo cual ha motivado atrasos en **el pago de las dietas**.

Le solicito respetuosamente se digne usted autorizar el pago de las mismas.

Agradezco la atención que tenga a bien brindarle a esta situación y reiterando a usted, mis saludos, me suscribo

Atentamente,

H.L. RAÚL J. OSSA DLC"

"3 de septiembre de 1993

Licenciado
RUBÉN AROSEMENA VALDÉS
Secretario General
ASAMBLEA LEGISLATIVA
E. S. D.

Distinguido Señor Secretario:

Es grato extenderle un cordial saludo, deseándole que el éxito inicie en todas sus actividades.

El motivo de la presente es de informarle la asistencia de los Honorables Comisionados a la reunión efectuada en el mes de **agosto** del presente año, para que se tome en **cuenta en los trámites de pago**.

Seguro de contar con su amable atención, le reitero mi consideración y respeto.

Atentamente,

H.L. HERMANN GNAEGI URRIOLA
Presidente"

"Panamá, 21 de septiembre de 1993

Licenciado
RUBÉN AROSEMENA VALDÉS
Secretario General
Asamblea Legislativa
Ciudad

Estimado Señor Secretario:

Por este medio hago constar que la Comisión de Relaciones Exteriores, que presidí en el período pasado, durante el mes de **agosto** efectuó diversas reuniones para tratar el asunto sobre el **Tráfico de Armas**, en las mismas participaron los siguientes Legisladores:

H.L. JOSÉ R. HILL M., asistió el 3 de agosto.

H.L. GUILLERMO COCHEZ, asistió los días 3, 23, 24, 25 y 26 de agosto.

H.L. GLORIA MORENO DE LÓPEZ, asistió el 3 de agosto

H.L. ELÍAS CASTILLO, asistió los días 3 y 25 de agosto.

H.L. LUCAS R. ZARAK L., asistió el día 24 de agosto.

H.L. MAURO E. BERGUIDO, asistió el día 25 de agosto.

H.L. ALBERTO CIGARRUISTA, asistió el día 30 de agosto.

H.L. MIGUEL CÁRDENAS, asistió el día 30 de agosto.

H.L. RAÚL OSSA, asistió los días 23 y 24 de agosto.

Continuación Pág. N° 2
Nota CRE-006

Licenciado
RUBÉN AROSEMENA VALDÉS
Secretario General
Asamblea Legislativa
Ciudad

Esta notificación **es con la finalidad de que se les tome en cuenta el pago de la Dieta correspondiente, por su participación en las reuniones de Comisiones**; ya que al momento de presentar el Informe de Asistencia del **mes de agosto** por error involuntario se omitieron sus nombres.

Adjunto encontrará copia de las Listas de Asistencias, para subsanar en la medida de lo posible esta omisión.

Esperando la buena acogida que tenga esta solicitud, Le saluda.

Atentamente,

H.L. OLIMPO A. SÁEZ M.
Ex-Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores."

Otras disposiciones constitucionales que refuerzan lo dicho lo apreciamos en los artículos 149 y 152 N° 4. El artículo 149 de la Constitución establece que cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. Lo anterior significa que durante los recesos de las legislaturas se suspende la inmunidad de los legisladores lo que está demostrando claramente que en ese tiempo no están trabajando, por eso es que se le suspende la inmunidad.

La otra norma constitucional, el artículo 152 numeral 4, cuando establece que el legislador actúa en ejercicio de la profesión de abogado **fuera del período de sesiones** o dentro de éste, **mediante licencia**, está señalando que el legislador abogado durante las legislaturas ordinarias o extraordinarias necesita licencia o permiso de la Asamblea para ejercer la abogacía, en cambio, fuera de las legislaturas no necesita ese permiso o licencia, evidentemente porque no está trabajando.

Los legisladores de la República devengan su salario durante los doce meses consecutivos del año y dietas durante los recesos en que **voluntariamente** se reúnen. Por regla general, ningún empleado público en el país recibe 13 meses de salario, como podría ser el caso de la pretensión de los legisladores del período 1989-1994. Los empleados públicos por once meses de trabajo reciben un mes de vacaciones. Es evidente que constitucional y legalmente los legisladores sólo están obligados a trabajar en las Comisiones de la Asamblea Legislativa durante las legislaturas ordinarias y extraordinarias y éstas últimas, por darse en el período de receso, se pagan aparte de su salario normal, otra prueba más de que durante el receso legislativo no tienen obligación de trabajar.

Merece especial mención y consideración la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa en razón de su necesaria vinculación legal con las necesidades y la ejecución presupuestaria anual del Estado. Un examen de la ley de presupuesto de 1994 nos indica en los artículos 137, 142, 147, 148, 156, 158, 196, 202, 203, 206 y 208, la participación de esta comisión de la Asamblea en una serie de trámites requeridos para la aprobación o rechazo de modificaciones al presupuesto, solicitados por las entidades públicas durante el curso del año. Sin embargo, tal como hemos expresado, el trabajo que realiza esta Comisión en los meses de enero y febrero o julio y agosto de cada año deberán ser pagados a través de dietas a los Legisladores de esta Comisión asistentes a las reuniones.

Por lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el refrendo de la planilla que contiene el pago de vacaciones a todos los legisladores del período 1989-1994 remitida a la Asamblea Legislativa con nota N° PRES/N-484 del 11 de julio de 1994.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE PERJUICIOS, INTERPUESTA POR EL LCDO. SAMUEL E. MARÍN, CONTRA EL

MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, LCDO. NELSON RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Samuel Marín actuando en su propio nombre y representación, ha promovido ante esta Superioridad, Demanda Contencioso Administrativo de indemnización para que se condene al Magistrado del Primer Tribunal Superior, **NELSON RUIZ**, por los supuestos daños y perjuicios que le causara al recurrente como ponente de la Sentencia de 20 de septiembre de 1994.

Es así como el demandante sostiene en el libelo de su pretensión, que el Magistrado **NELSON RUIZ** actuó en forma arbitraria o con inexcusable ignorancia de la ley y por consiguiente, requiere que se condene al prenombrado funcionario: 1. Al pago de la pérdida civil que sufriera producto del fallo de 20 de septiembre de 1994; 2. Al pago de la suma de B/.12,750.00 en costas, intereses y gastos de la ejecución; y por último, 3. Al pago de los restantes perjuicios derivados de la Ejecutoria de la Sentencia de 20 de septiembre de 1994, con fundamento en el artículo 200 del Código Judicial.

La demanda antes descrita se encuentra en el despacho del Magistrado sustanciador pendiente de revisión para determinar la admisibilidad de esta acción de indemnización.

A estos efectos, observa el ponente que la demanda interpuesta adolece de una deficiencia formal que impide que la misma sea acogida por esta Corporación de Justicia. Es así como en el libelo bajo estudio se omite por completo el cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 28 numeral 4 de la Ley 33 de 1946, puesto que, en toda demanda presentada ante la vía contencioso administrativa debe enunciarse la disposición que se considera conculcada y además debe motivarse el concepto de la violación debidamente para que la infracción alegada pueda ser apreciada por este Tribunal; ya que como se ha manifestado en oportunidades anteriores, sin el concepto de la violación no cabe viabilizar demanda ni proceso (cfr. Autos de 22 de marzo de 1995, 28 de abril de 1992 y 12 de enero de 1984).

Por otro lado se observa que los numerales 8, 9 y 10 del artículo 98 del Código Judicial señalan los casos a través de los cuales es viable la reclamación de una indemnización ante esta Sala de la Corte. Estos supuestos son los que se anotan a continuación: **Numeral 8**: de la indemnización de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule; **numeral 9**: de las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado y de las restantes entidades públicas en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurran en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerla cualquier funcionario o entidad que ha proferido el acto administrativo impugnado; **y numeral 10**: de las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos.

Del análisis de los planteamientos vertidos por el actor se deduce claramente que éste pretende la condena de indemnización por daños y perjuicios del Magistrado Nelson Ruiz debido a que este funcionario fue el ponente de la Sentencia de 20 de septiembre de 1994 que de acuerdo a lo que se observa en el expediente de este proceso, condena al demandante al pago de B/.12,750.00 correspondientes a las costas de primera y segunda instancia. Cabe destacar que esta Sentencia firmada unánimemente por los tres Magistrados que conforman Sala con el Magistrado Ruiz (es decir, sin salvamento de voto), revocó la Sentencia de 8 de junio de 1993 que inicialmente había declarado que el recurrente tenía derecho a que las sociedades Asesores Reunidos, S. A. y/o Corporación de Desarrollo Comercial, S. A. y el señor Rigoberto Castillo le pagaran los daños y perjuicios causados por las acciones de perturbación ejecutadas en su contra, más costas y gastos. Contra la Sentencia de 20 de septiembre de 1994 el actor

interpuso recurso de casación, sin embargo el mismo fue declarado inadmisible por la Sala Primera de lo Civil de la Corte a tenor del artículo 1167 del Código Judicial.

De lo expuesto se deduce sin lugar a dudas, que el petente intenta obtener realmente una tercera instancia revisora del proceso, todo lo cual no es viable a tenor de lo establecido en las disposiciones mencionadas. Es indispensable que el petente proporcione con la correspondiente acción indemnizatoria, prueba preconstituida del cual pueda derivarse directamente el derecho que se alega; y que además su pretensión se enmarque dentro de alguno de los supuestos que describen los numerales 8, 9 y 10 del artículo 98 del Código Judicial en comento.

Siendo ello así se patentiza de manera palmaria que la reclamación del actor no procede en atención a lo preceptuado en el numeral 8 de la precitada excerta legal, puesto que el acto en virtud del cual se solicita la presente indemnización, no ha sido anulado o reformado por esta Sala de la Corte. Este último presupuesto es indispensable para que dicha norma ampare su petición.

Tampoco se estima que la pretensión del recurrente se desprenda del numeral 9 del artículo en análisis, puesto que no es al Estado o alguna de sus entidades la figura que se demanda mediante el libelo instaurado, por la actuación de un funcionario en el ejercicio de funciones o so pretexto de ejercerla, o por la actuación de una entidad que haya proferido un acto administrativo declarado previamente ilegal. (Cfr. Auto de 20 de septiembre de 1995).

Para que fuese viable admitir la presente demanda en base a este artículo, aun cuando el demandado fuese el Estado o alguna de sus entidades públicas, sería necesario acompañar tal como lo ha reiterado la jurisprudencia en diversas oportunidades, la declaratoria de responsabilidad disciplinaria ante su superior jerárquico y penal (si esta última cabe) de dicho funcionario en el ejercicio de sus funciones, tal como lo estatuye el artículo 52 del Código Judicial (cfr. Sentencias de 15 de diciembre de 1992, 15 de octubre de 1992, 13 de agosto de 1993 y Auto de 6 de enero de 1995).

La declaratoria de responsabilidad del Magistrado NELSON RUIZ no se ha sido suministrada a esta Superioridad por el recurrente, ya que mas bien el mismo pretende que en ante esta Corporación se ventile la actuación en derecho del demandado y el proceso en el cual dicho funcionario del Estado fue únicamente el ponente. Realizar esta evaluación no es dable a este Tribunal que solo puede fallar con base a una previa declaratoria de la responsabilidad que se le impute a un funcionario determinado.

Finalmente y retomando el mismo criterio, no cabe aplicar a la situación vertida el numeral 10 del artículo 98 del Código Judicial, puesto que no se demanda directamente al Estado o alguna de sus entidades por razón de los servicios públicos que se le adscriban. Se puntualiza que es el Magistrado NELSON RUIZ quien ha sido demandado directamente y de manera personal por el actor; y conforme lo estatuido en el numeral 10 del artículo 98 del Código Judicial no cabe demandar al funcionario sino solamente al Estado o alguna de sus entidades públicas específicamente por el deficiente servicio público que se haya brindado que a su vez origine el daño y perjuicio generador de responsabilidad indemnizable.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador que suscribe de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativo de indemnización para que se condene al Magistrado del Primer Tribunal Superior, NELSON RUIZ, al pago de daños y perjuicios.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

FEBRERO 1996

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

NILKA BERTILDA CASTILLO GONZÁLEZ, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DECRETADA POR LA CORTE SUPERIOR, SECCIÓN DE DIVORCIO, DE LA CIUDAD DE MONTREAL, PROVINCIA DE QUEBEC, CANADÁ, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A NILKA CASTILLO GONZÁLEZ Y EUSTIQUIO BARRIOS ZAMBRANO DE FECHA 22 DE MAYO DE 1980. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

NILKA BERTILDA CASTILLO GONZÁLEZ, solicita se declare ejecutable en Panamá la sentencia proferida por la Corte Superior, Sección de Divorcios, de la ciudad de Montreal, Provincia de Quebec, Canadá, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que la unía con el señor EUSTIQUIO BARRIOS ZAMBRANO.

De acuerdo al numeral 2 del artículo 101 de nuestro Código de procedimiento, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declarar si las resoluciones judiciales pronunciadas por Tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

De acuerdo al trámite para estos negocios, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto, quién a través de la Vista N° 44 de 20 de diciembre de 1995 consideró lo siguiente:

> "Analizada la documentación aportada con la solicitud de declaratoria de ejecutabilidad se sentencia extranjera, observa que la misma ha sido dictada como consecuencia del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, de acuerdo con lo señalado en el artículo 114 del Código Civil.
>
> No obstante, es necesario indicar que el documento denominado "Demanda para Forma Especial de Notificación", a pesar de haber sido autenticado por la autoridad consular panameña en Canadá, no fue, a su vez, autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal cual lo establece el artículo 864 del Código Judicial.
>
> Igualmente, debemos señalar que no consta que el señor Barrios Zambrano haya sido notificado se aportó constancia de que, en efecto, el demandado haya sido notificado personalmente, puesto que la misma Corte Superior ha expresado que se procedió a la notificación a través de carta certificada, ya que el señor Barrios Zambrano reside en Panamá, pero el aviso de recepción jamás regresó en confirmación, por lo que se publicó, además un edicto en el Diario "Le Revoir" en Canadá.
>
> En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Procuraduría es de la opinión que debe concedérsele el término de Ley al petente con el fin de que subsane las deficiencias señaladas."

Devuelto el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador se procede resolver, previas las siguientes consideraciones:

La Sala al ponderar la documentación aportada por la parte interesada con la opinión vertida por el señor Procurador en su vista fiscal, coincide con él en el sentido de que la ejecución de la sentencia proferida por la Corte Superior, Sección de Divorcios, de la Ciudad de Montreal, Provincia de Quebec, Canadá, no debe ser declarada ejecutable en virtud de que la misma no reúne los requisitos formales exigidos por la ley, artículo 1409 del Código Judicial.

La sentencia aportada como prueba por la parte interesada, visible a foja 12 reverso, no aparece autenticada por la autoridades del Ministerio de

Relaciones Exteriores aquí en Panamá.

Por otra parte, la diligencia de notificación a la parte demandada, en forma personal, no se realizó por parte del Tribunal canadiense, que en su lugar procedió a notificar a la parte demandada mediante edicto publicado en un diario canadiense, "Le Devoir".

La Sala de Negocios Generales ha manifestado en reiteradas ocasiones que de acuerdo al requisito formal consagrado en el artículo 1409, ordinal 2, resulta imprescindible para que se declare ejecutable en Panamá una sentencia extranjera que la parte demandada haya sido notificada personalmente, si existe dicha omisión resulta que el proceso se ha llevado a cabo en rebeldía, y esta situación impide la concesión del exequátur.

A foja 10 del cuadernillo se aprecia que el aviso de recepción jamás regresó a la oficina del procurador canadiense, por lo que resulta imposible saber si al demandado efectivamente se le notificó de la demanda.

Sin embargo, la parte demandante puede subsanar la falta de la notificación, al acreditar en el expediente que el señor Eustiquio Barrios fue notificado personalmente o que la notificación enviada a través del correo canadiense le fue entregada personalmente, aún cuando el demandado se negara a comparecer en el proceso.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, EN SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE al peticionario, el término de cuarenta y cinco (45) días para que subsane las omisiones señaladas, al tenor de las disposiciones procesales vigentes sobre esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ZOILA EDILMA TAPIA DE PUTNAM, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE ALASKA, TERCER DISTRITO JUDICIAL EN ANCHORAGE, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA A RAYMOND D: PUTNAM. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

ZOILA EDILMA TAPIA de PUTNAM, mediante apoderada especial, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio proferida por la Corte Superior del Estado de Alaska, Tercer Distrito Judicial en Anchorage el 15 de junio de 1995, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente con RAYMOND D. PUTNAM.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que la señora ZOILA EDILMA TAPIA de PUTNAM y el señor RAYMOND D. PUTNAM., están formalmente divorciados mediante sentencia expedida por la Corte Superior del Estado de Alaska, Tercer Distrito Judicial en Anchorange, el 15 de junio de 1995.

SEGUNDO: Si bien es cierto que la copia de la sentencia final de divorcio que adjuntamos con el presente escrito, debidamente

autenticada, señala que la demandada fue notificada por publicación, y por ende entró en rebeldía, es ella misma, la demandada, quien solicita su ejecución.

TERCERO: Que mi poderdante ZOILA EDILMA TAPIA de PUTNAM, desea inscribir dicha sentencia de divorcio en el Registro Civil, y así cumplir con las leyes panameñas para tales efectos".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 15 de junio de 1995, expedida en la Corte Superior para el Estado de Alaska, Tercer Distrito Judicial en Anchorage, debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 29 de enero de 1996 señala lo siguiente:

"Se observa que el pronunciamiento judicial que decreta el divorcio, expresa que la parte demandada, después de ser notificada "por publicación", quedó incursa en rebeldía; mas, sin embargo, esta circunstancia no descalifica la pretensión de reconocimiento y ejecución de la sentencia expedida por el tribunal con jurisdicción para dirimir la causa, ya que es la esposa demandada la que promueve la ejecución de dicho fallo foráneo (artículo 1409, numeral 2° del Código Judicial)."

"La Sentencia de Divorcio expedida por la Corte Suprema del Estado de Alaska, Tercer Distrito Judicial en Anchorage, Estados Unidos de América, es indudable que es la resultante del ejercicio de una pretensión personal."

"Se observa que la obligación para cuyo cumplimiento se ha procedido es lícita en Panamá, es decir, que la sentencia extranjera no violenta el ordenamiento jurídico nacional."

"La copia de sentencia traída a los autos es auténtica."

"Estructurados, pues, los presupuesto que establece la ley según la relación precedente, es dable concluir que la sentencia extranjera cumple con los requisitos que aquella reclama, razón por la cual conceptuamos que debe accederse a la solicitud que originó este negocio."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal y a pesar de que fue proferida en rebeldía, es la parte demandada la que formula la solicitud de reconocimiento y ejecución de la presente sentencia extranjera, tal como lo establece en su parte final el numeral segundo del citado artículo 1409 del Código Judicial. Se aprecia que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 15 de junio de 1995, expedida en la Corte Superior para el Estado de Alaska, Tercer Distrito Judicial en Anchorage, Estados Unidos de América, mediante la cual se

declara disuelto el vínculo matrimonial entre ZOILA EDILMA TAPIA de PUTNAM y RAYMOND D. PUTNAM.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

REYNALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DE FECHA 24 DE MAYO DE 1993 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, CIUDAD DE LA HABANA CUBA, DONDE SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE EL SEÑOR REYNALDO RODRÍGUEZ Y LA SEÑORA DIGNA ANDREA MONTESINO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Reynaldo Ernesto Rodríguez García, a través de sus apoderados Luis Antonio Gómez Pérez y Ricardo Brin, ha presentado ante esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá la Sentencia de divorcio de fecha 24 de mayo de 1993 la cual quedó ejecutoriada desde el día 2 de junio de 1993, dictada en el Tribunal Popular Plaza de la Revolución, ciudad de la Habana, Cuba, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre Reynaldo Ernesto Rodríguez García y Digna Montesino Montesino.

Los hechos más relevantes en que el peticionario fundamenta su solicitud son los siguientes:

> "PRIMERO: El señor Reynaldo Ernesto Rodríguez García, contrajo matrimonio con la señora Digna Andrea Montesino Montesino el día 23 de julio de 1981.
> SEGUNDO: Dicho matrimonio fue inscrito en la República de Panamá, tal y como lo demuestra la certificación de Registro Civil, tomo 8, asiento 859, expedido en Panamá en el acta PE-8-859.
> TERCERO: Es el caso que el señor Reynaldo Ernesto Rodríguez García y la señora Digna Andrea Montesino Montesino, promovieron ante los tribunales del Municipio Popular de la Plaza de la Revolución de la Ciudad de la Habana, Cuba, juicio de divorcio voluntario donde ambos fueron oídos dada la naturaleza de la causa invocada".

Conforme a los hechos anteriormente expuestos la petente solicita sea reconocida en la República de Panamá la sentencia de divorcio mediante el cual se establece la ruptura del vínculo matrimonial entre Reynaldo Ernesto Rodríguez García y Digna Andrea Montesino Montesino.

De acuerdo con el numera 2 del artículo 101 de nuestro Código de Procedimiento corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declara si las resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1409 se corrió traslado al señor procurador General de la Nación, quien en vista N° 24 de 3 de agosto de 1995 consideró lo siguiente:

"En el presente caso el petente aporta como prueba una certificación de la sentencia de divorcio (visible a foja 6 del expediente de marras), en la que se certifica que, efectivamente, este tribunal profirió una sentencia fechada el 24 de mayo de 1993 y que la misma quedó ejecutoriada el 2 de junio de 1993 y la misma se declaró disuelto el matrimonio existente entre el señor REYNALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA y la señora DIGNA ANDREA MONTESINO MONTESINO. También se hace una relación de lo que el tribunal acordó en materia de guarda y custodia de los hijos, régimen de visita, pensiones alimenticias, etc., **pero no se especifica ni consta en dicha certificación quién es el demandante ni quién es el demandado; si la parte demandada fue debidamente notificada de la demanda y si la misma compareció o si el demandado rebelde es el solicitante. De ahí que no se puede determinar si la sentencia extranjera cumple con este requisito legal**.

Aunado a esto, tampoco está acreditada en la certificación de la sentencia de divorcio, la causal invocada, por lo que no podemos inferir si la sentencia tiene efectos lícitos en nuestro país o si viola el orden público nacional. (El subrayado es de la Sala).

Por todas esta consideraciones, esta Procuraduría es de la opinión que la sentencia proferida por el Tribunal Municipal Popular, Plaza de la Revolución, de la Habana, Cuba, a través de la cual se declaró disuelto el matrimonio ente REYNALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA Y DIGNA ANDREA MONTESINOS MONTESINO, no cumple con los requisitos estipulados en el artículo 1409 del Código Judicial. No obstante, las omisiones de las que adolece la solicitud pueden ser subsanadas, por lo que consideramos se le debe conceder al petente el término que la ley señala para que se subsanen las omisiones que dejamos puntualizadas".

La Sala, de acuerdo con la opinión vertida por el Procurador General de la Nación, concedió al petente en Sala Unitaria de fecha 9 de agosto de 1995, el término de 45 días a partir de la notificación, para que aportara los documentos con los cuales se acreditara a las partes en el proceso de divorcio, así como la causal que motivó el mismo y certificación de la notificación a la parte demandada.

De acuerdo al trámite de estos negocios, y una vez incorporado al expediente el documento solicitado al licenciado Gómez, nuevamente se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quién a través de Vista N° 7 de 31 de enero de 1996 consideró que:

"El apoderado del peticionario, quien aportó el documento que figura a folio 18-20 y que no es más que copia del libelo de la demanda de divorcio que originó el proceso respectivo y del cual se infiere que fue la señora DIGNA ANDREA MONTESINO MONTESINO quien propulsó la pretensión de divorcio contra su esposo contra su esposo, el señor REYNALDO ERNESTO GARCÍA (sic) "por justa causa" y "debido a disgustos surgidos entre ambos que hacen imposible continuar la vida en común, encontrándose de hecho disuelto dicha unión" (foja 19)."

"Se desprende también de la documentación traída al presente proceso de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera que es precisamente el peticionario demandado y no su compareciente en el proceso de divorcio el que solicita la ejecución del pronunciamiento meritado, circunstancia que actualiza el supuesto previsto en el artículo 1409, numeral 2 del Código Judicial.

"Luego pueden reputarse subsanadas las deficiencias endilgadas a la presente petición y como consecuencia **acceder** a la misma."

Devuelto el expediente a esta Superioridad, se observa que con la incorporación al expediente de la copia autenticada de la demanda de divorcio,

de fecha 18 de septiembre de 1992, se han subsanados las omisiones señaladas al petente.

La sentencia en estudio cumple con los requisitos dispuesto en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que fue dictada como consecuencia de una pretensión personal, de igual forma se aprecia diáfanamente como partes involucradas en el proceso de divorcio a Reynaldo Ernesto Rodríguez García y Digna Andrea Montesino Montesino. En el presente proceso de ejecución de sentencia extranjera es el propio demandado quien lo propone; por lo tanto no se produce la figura de la rebeldía.

El petente ha cumplido con los requisitos de autenticación exigidos en el artículo 1409 del Código judicial puesto que todos los documentos aportados por el licenciado Gómez, han sido presentados con las correspondientes autenticaciones del Cónsul General de Cuba en Panamá así como las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE la Sentencia extranjera proferida por el Tribunal Municipal Popular Plaza de la Revolución de fecha 24 de mayo de 1993, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre Digna Andrea Montesino Montesino y Reynaldo Ernesto Rodríguez García.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL COMERCIAL DEL CANTÓN, DE ZURICH, SUIZA DENTRO DE LA DEMANDA CIVIL DE NOTIFICACIÓN CONTRA LA COMPAÑÍA OUT OF ITALY, S. A. C/O QUIJANO Y ASOCIADOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Departamento de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Tribunal Comercial del Cantón de Zurich, Suiza, dentro de la demanda civil de notificación interpuesta por la empresa HUNTING WORLD INC. contra la sociedad OUT OF ITALY SA. La dirección de la sociedad demandada aparece indicada como Edificio Salduba, Urbanización Obarrio, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Entre los antecedentes del exhorto se cuentan que el día 30 de agosto de 1995 el licenciado Filippo Beck de la firma Wenger Mathys Plattner, interpuso demanda ante el Tribunal Comercial del Cantón de Zurich, bajo la pretensión entre otras cosas, que se prohíba a la parte demandada por orden judicial, tanto la importación, como la exportación de Suiza, comercialización y almacenamiento de mercancías de cuero u otras imitaciones bajo la denominación **"Hunting World"**, identificada con la marca presentada como un elefante con la trompa levantada, visible a foja 3 del expediente.

El objetivo del presente exhorto es lograr la notificación de la demanda de 30 de agosto de 1995 (fs. 2-31), la orden del 6 de octubre de 1995 que indica el plazo y el procedimiento a seguir para la contestación (fs. 33-35) y el acuse de recibo en duplicado, visible a foja 32 del expediente.

Luego de la notificación se le concede a la parte demandada un plazo de 20 días, a partir del recibo de esta notificación. Estas consideraciones están expuestas de los puntos 1 a 5, visibles a foja 34 del presente expediente.

La documentación procedente del Tribunal Comercial del Cantón de Zurich, aparece en su versión del idioma alemán y a continuación la traducción correspondiente al idioma español, y se puede apreciar que la documentación aportada contiene el sello de la Apostilla. Se aprecia por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a) Que entre las Repúblicas de Panamá y Suiza no existe Convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Que cuando en el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de tres maneras a saber: Por la autenticación consular, por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización de los actos o documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado, y sólo en el caso de los países que han ratificado la convención americana en materia de exhortos, basta con la tramitación del exhorto por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, la Sala observa que el exhorto que se expide en el Tribunal Comercial de Zurich, cumple con la traducción de los documentos que sustentan lo pedido, así como con la autenticación del referido exhorto al contener el sello de la apostilla. Lo pedido en el exhorto que se examina en esta oportunidad, no vulnera nuestro ordenamiento jurídico interno, por lo que cabe darle la cooperación a las autoridades suizas tendiente a contribuir con el proceso aludido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la comisión rogatoria librada por el Tribunal Comercial del Cantón de Zurich, dentro de demanda promovida por HUNTING WORLD INC. contra OUT OF ITALY SA, a fin que se notifique a la sociedad OUT OF ITALY SA ubicada en la firma forense Quijano & Asociados con oficinas en el edificio Salduba, Obarrio, ciudad de Panamá de la decisión de 30 de agosto de 1995, la orden de 6 de octubre de 1995 y el acuse de recibo de dichos documentos y ORDENA que por Secretaría se hagan las notificaciones de rigor atendiendo a este respecto las normas procesales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

VÍCTOR MC FERNAN Y PEDRO NOLASCO JARAMILLO, INTERPONE DENUNCIA EN CONTRA DEL LICENCIADO MAXIMINO MEJÍA POR FALTA A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SEIS (6) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, los cuadernos contentivos de la denuncias por Falta a la Ética Profesional y Responsabilidad del abogado interpuesta por VÍCTOR MC FERNAN y PEDRO NOLASCO JARAMILLO en contra del licenciado MAXIMINO MEJÍA ORTEGA.

De esa manera, y en virtud que se trataba de dos (2) denuncias con el mismo objeto jurídico y en donde la parte denunciante no era la misma persona, la Sala estimo conveniente y más que todo por razones de economía procesal que ambos procesos se substanciasen en un solo acto jurídico, situación esta que se materializó mediante la expedición de la providencia fechada 8 de agosto de 1994 bajo la ponencia del Magistrado José Manuel Faúndes, la cual está visible a fojas 97 del expediente de marras.

Por lo tanto, y al resolver este primer punto formal del proceso que ahora nos corresponde examinar, procedemos ha efectuar los análisis correspondientes a los elementos de hecho y de derecho que rodean los presentes negocios.

Obviamente, que ante un proceso acumulado es menester entrar a resolver lo pertinente de acuerdo con el orden en que se recibieron los procesos puntualizados, por lo que para el caso concreto, la Sala inicia ese trámite estudiando la denuncia presentada por el VÍICTOR Mc FERNAN en contra del Licenciado MEJÍA ORTEGA; y lo hace con fundamento en los siguientes señalamientos:

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, competente para conocer de los procesos de ética, como Órgano Instructor, procedió mediante Vista de tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), a emitir concepto, en la cual aparece como Sustanciadora la licenciada María Enriqueta González-Revilla. En la misma solicitó a esta Alta Corporación de Justicia el llamamiento a juicio del licenciado Maximino Mejía, por considerar que existen elementos suficientes sobre los cuales fundamentan su pedido. El criterio esbozado por el Tribunal de Honor, se puede resumir de la siguiente manera:

> "Mediante nota del 13 de mayo de 1994 dirigida al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el señor Víctor Mc Fernan, portador de la cédula N° 8-701-61, interpuso denuncia el 13 de mayo de 1994 en contra del licenciado MAXIMINO MEJÍA por supuestas faltas a la ética en el ejercicio de la profesión de abogado."
>
> "Según el denunciante, él contrató los servicios del licenciado Mejía para que representara a su sobrino en las sumarias seguida en su contra y cobró la suma de setecientos balboas (B/.700.00) (fs. 3); comprometiéndose a devolverlo si no lograba sacarlo de la cárcel. Luego de esto y al ver que pasaban los días y no observaba resultados satisfactorios se comunicó con el Licdo. Mejía, señalándole éste que las cosas se habían puesto difíciles y necesitaba la cantidad de B/.500.00 de lo que le entregaron sólo B/.270.00 sin recibir ningún documento alguno por esto.
>
> "RESUELVE: Requerir a la Sala Cuarta Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que decrete la citación a juicio del

denunciado".

Se procedió, mediante providencia de 11 de enero de 1995 visible a fojas 38 del expediente, a darle traslado al denunciado conforme lo establecido en el artículo 28 y 29 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, modificada por Ley 8 de 16 de abril de 1993 a fin, que el licenciado Maximino Mejía O. pudiera aducir excepciones u oponerse al juzgamiento instando el archivo del expediente.

Una vez notificada la parte denunciada el 23 de enero del año en curso, el denunciado procedió a contestar el traslado de la demanda. Se observa de fojas 39 a 42 inclusive, escrito de oposición, presentado dentro de los términos correspondientes, en el cual el licenciado Mejía manifiesta las siguientes consideraciones:

> "Primeramente es falso de toda falsedad que yo le indicara el al señor Mc Fernan o a su "sobrino" ALEX ANEL ROJAS WILLIAMS que mejor no declarara, porque entorpecería el caso y sería dificultoso resolver, ya que el joven Rojas W. me otorgó poder mediante memorial el día 2 de marzo de 1994, a la misma hora en que también es falso que indicara al imputado que se declara confeso o culpable, ya que su declaración rendida bajo mi asesoramiento y asistencia demuestra lo contrario a lo afirmado por mi denunciante y sus testigos.
>
> A mi se me contrató para la representación y defensa legal de ALEX ANEL ROJAS WILLIAMS, OCTAVIO SANTOS PÉREZ, CARLOS VÁSQUEZ RAMOS, MANUEL LESBID SANTOS CASTILLO, RAÚL SANTOS SANTOS, es decir, la defensa de todos los imputados en el delito de posesión ilícita de drogas, lográndole el mismo día 2 de marzo de 1994 la libertad a cuatro de ellos. Y es totalmente falso también que el señor Víctor Mc Fernan me haya entregado la suma de B/.700.00 ese día, ya que la suma entregada de acuerdo al recibo membretado fue de B/.350.00, y el mismo ha sido alterado, obsérvese que en la parte de arriba han sido sobrepuestas las letras, en la suma de dinero, la cual no concuerda con la colocada abajo en números, pues arriba se dice que son SETECIENTOS CINCUENTA y abajo se dice que son B/.700.00.
>
> También es falso que el señor VÍCTOR Mc FERNAN o sus familiares, me entregaran suma adicional y que yo no le extendiese recibo, él no me entregó la suma que afirma me entregara primeramente ni mucho menos me entregó suma de dinero posteriormente.
>
> La inseguridad y la desesperación de los familiares de ALEX ANEL ROJAS WILLIAMS no me dejaron trabajar, no dejaron ver los frutos de mi esfuerzo, dentro de un expediente en el cual ningún otro Abogado argumentó nada por escrito a favor del imputado, sólo vasta (sic) con observar el expediente de ese caso.
>
> Por todo lo expuesto, solicito, muy respetuosamente, que se desestime la petición formulada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, por ser falsas y temerarias las pruebas recabadas en mi contra".

El Magistrado Sustanciador en el presente proceso, solicitó al Juzgado Décimo Tercero de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante oficio SNG-267-95, el expediente contentivo del proceso seguido contra Alex Anel Rojas Williams, sindicado por delito contra la Salud Pública, en el cual el licenciado Maximino Mejía O. se desempeñaba como representante legal del mismo.

Una vez expuesta la Vista del Tribunal de Honor, así como la parte medular del escrito de sustentación del licenciado Mejía, la Sala Cuarta pasa al análisis del contenido de la denuncia en los siguientes términos:

En cuanto al primer hecho del escrito de sustentación, se observa a fojas 18 del expediente remitido por el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal

del Primer Distrito Judicial de Panamá, poder otorgado por Anel Rojas Williams al licenciado Maximino Mejía O., lo que demuestra la existencia de la relación cliente-abogado.

En cuanto al siguiente hecho de la sustentación, se aprecia a foja 3 del presente expediente, dos (2) recibos uno de fecha 6 de abril de 1994 y otro sin fecha, el primero por la suma de B/200.00 y el otro por la cantidad de B/.700.00, el último comprobante de pago en concepto de remuneración de Honorarios Profesionales a nombre de Maximino Mejía O. efectuado por Víctor Mc Fernan y el primero sólo señala que es una constancia de recibido, hecho que confirma que al denunciado se le entregó una suma de dinero para la prestación de un servicio profesional de asistencia legal. Destaca que es falso que el denunciante le dio una suma adicional, pero se aprecia diáfanamente un recibo por la suma de B/.200.00.

Este es el hecho que motiva la interposición de la denuncia por parte del señor Víctor Mc Fernan, quien acusa al Licenciado Mejía de no haber realizado ninguna gestión en favor de su sobrino dentro del proceso penal.

Por su parte, en el hecho cuarto de la sustentación, el licenciado Maximino Mejía Ortega afirma que la inseguridad y la desesperación no le dejaron trabajar dentro de un proceso donde ningún otro abogado argumentó nada por escrito a favor del imputado. El poder, así como la solicitud de medida cautelar, se pueden observar a fojas 18 y 47 del expediente incoado contra de Alex Anel Rojas Williams y otros, por el supuesto delito Contra la Salud Pública.

En relación con el señalamiento del licenciado MEJÍA ORTEGA en cuanto a que ningún abogado argumentó nada por escrito, del negocio bajo examine, se evidencia del mismo, varios escritos presentados por otros profesionales del derecho (fs. 36 y 51).

No obstante los anteriores señalamientos, en torno a su poca gestión a favor de su patrocinado, se desprende del expediente bajo estudio que al licenciado MEJÍA se le revocó el poder que le fue otorgado, por lo que mal se podría acotar que este jurista actuó con falta de honradez y buena fe como se indica el artículo 5 del Capítulo Primero del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, ya que inicia su representación profesional el 2 de marzo de 1994, y el 10 de mayo del mismo año el señor Alex Rojas Williams, le había revocado el poder y se lo había dado al licenciado Edwin H. León Rodríguez; lo que muestra que el denunciado en su corta gestión profesional realizó las diligencias legales pertinentes para la obtención de la libertad de su patrocinado.

Es por este motivo que esta Superioridad no puede presumir que como consecuencia a su escasa gestión el sindicado Rojas Williams le revocó el poder porque en el Derecho Penal los resultados de los recursos interpuestos no se aprecian de manera inmediata por la dinámica misma de esta rama del Derecho.

Por tanto y como corolario de todo lo expuesto y en acatamiento de las normas que regulan la profesión de abogado en nuestro país, esta Alta Magistratura considera con suficiencia que en el caso examinado, se debe proceder al archivo del expediente y por tanto **No Concede** lo pedido por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados en el sentido de llamar a juicio al referido profesional del derecho por no existir mérito alguno para ello, en virtud que no obran en el expediente, pruebas o elementos incriminatorios suficientes contra el denunciado.

En esta oportunidad la Sala procede a realizar el análisis del proceso que guarda relación con la denuncia presentada por el señor Pedro Nolasco Jaramillo Samaniego en contra también del Licenciado Maximino Mejía Ortega, por falta a la ética y la responsabilidad profesional del abogado; por lo que este despacho considera lo siguiente:

Con relación con la segunda causa disciplinaria seguida al licenciado Mejía Ortega, esta Sala recibió de parte del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de

Abogados, Vista sobre los hechos denunciados por el señor Pedro Nolasco Jaramillo Samaniego de fecha de 13 de diciembre de 1994 donde este organismo colegiado, competente para conocer de los procesos de ética, como Órgano Instructor, procedió mediante Vista, a emitir concepto, en el cual aparece como Miembro Sustanciador el licenciado José A. Carrasco, en la misma solicitó a esta Alta Corporación de Justicia la citación a juicio del Licenciado Maximino Mejía Ortega, portador de la cédula de identidad 4-109-549, por considerar que existen elementos suficientes sobre los cuales fundamentan su pedido. El criterio esbozado por el Tribunal de Honor, se puede resumir de la siguiente manera:

> "El 12 de abril de 1994, el señor Pedro Nolasco Jaramillo, interpuso denuncia contra el licenciado Maximino Mejía Ortega por considerar que incumplió con sus deberes de apoderado judicial."
>
> "Según el denunciante, él contrató los servicios del licenciado Mejía para la tramitación de un divorcio (no hay constancia del Contrato de Servicios Profesionales) y le entregó el 2 de abril de 1993, la suma de B/.300.00 (trescientos balboas) en concepto de abono.
>
> "Agrega el denunciante que hasta el mes de marzo de 1994 el abogado Mejía, no había presentado la demanda de divorcio".

El Magistrado Sustanciador en el presente proceso, solicitó al Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal con sede en el Corregimiento de Ancón mediante oficio SNG-268-95, expediente contentivo del proceso seguido contra el Licenciado Maximino Mejía Ortega, sindicado por delito contra el Patrimonio, en el cual el ofendido es Pedro Nolasco Jaramillo Samaniego.

Se procedió, mediante providencia de 7 de febrero de 1995 visible a fojas 97 del expediente, a darle traslado al denunciado conforme lo establecido en el artículo 28 y 29 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, modificada por Ley 8 de 16 de abril de 1993 a fin, que el licenciado Maximino Mejía O. pudiera aducir excepciones u oponerse al juzgamiento instando el archivo del expediente.

Una vez notificada la parte denunciada el 29 de mayo del año en curso, el denunciado procedió a contestar el traslado de la demanda. Se observa de fojas 102 a 112 inclusive, escrito de oposición, presentado dentro de los términos correspondientes, en el cual el licenciado Mejía manifiesta las siguientes consideraciones que se pueden resumir de la siguiente manera:

> "PRIMERO: El señor Pedro Nolasco Jaramillo con mi persona un Contrato Verbal de prestación de Servicios Profesionales, el cual incluía varios propósitos, uno era hablar con su señora esposa para que la persuadiera a no ponerle su apellido a un hijo que ésta había dado a luz de otro hombre, si lo había hecho, hacer los arreglos para que se impugnara la paternidad, y el otro, que la persuadiera a tramitar un divorcio por mutuo consentimiento, para la cual me dió (sic) instrucciones y facultades precisas. No se trataba de la tramitación de un simple divorcio por mutuo consentimiento, sino que habían otras misiones que cumplir, conllevaba la prestación de otros servicios, y en otras palabras, el divorcio estaba sujeto a otros aditamentos, por eso es que este señor esta pagando la suma de B/.300.00 (trescientos balboas), porque eran varios los servicios o misiones a cumplir, y desde luego todas esas gestiones tenían un valor, para ello él me contrató, y yo soy un profesional que cobro por mis servicios, más si ellos conlleva una gestión fuera de mis oficinas, fuera del Tribunal, e incluso fuera del Distrito, ya que debía ir a Cerro Batea, San Miguelito; y cualquier profesional, ya sea Médico, Ingeniero, Arquitecto, Mecánico, etc. cobra por sus servicios particulares".
>
> "SEGUNDO: Ninguna persona de estratos bajos, menos un Policía, paga B/.300.00 por un divorcio por mutuo consentimiento, ni siquiera llegan a pagar B/.200.00, él estaba pagando la suma estipulada, ya

que había otros servicios profesionales que prestar ..."

"TERCERO: ... Luego de haberle narrado el fruto de su gestión el señor Jaramillo que no le interesaba ese divorcio, y que el quería que le regresara el dinero, a lo cual le repliqué que ya eso estaba adelantado, que ya yo había hecho gestiones y había hecho gastos, y que si convenía a que le regresara parte de dinero que regresara para la quincena que faltaban pocos días, y dicho señor quedó de regresar a mi oficina para la quincena y no fué (sic) hasta que me enteré de él fué (sic) a través de las denuncias que me interpuso ante la Personería Tercera Municipal por Estafa y ante el Colegio Nacional de Abogados por falta a la ética profesional, cuando aquí el único que incumplió el contrato verbal de prestación de servicios profesionales fue él, ya que fue él quien unilateralmente decidió que no se le siguiera tramitando nada en el lapso en que esperaba que la señora me llamara ya recuperada de su convalecencia, de todo lo cual él tenía pleno conocimiento".

"CUARTO: El señor Pedro Nolasco Jaramillo me interpuso también una denuncia por estafa en la Personería Tercera Municipal de Panamá, por lo que estoy siendo sometido a dos juzgamientos por la misma causa en instancias distintas, lo cual es inconstitucional e ilegal, pues el Colegio Nacional de Abogados es un ente instructor y hace las veces de Ministerio Público, ya que investiga, procesa pruebas y expide una especie de Vista Fiscal y bajo la fórmula sacramental de "Decretar la citación a juicio del Licenciado ..." fs. 91-93, pide lllamamiento a juicio. lo cual le da las características de Vista Fiscal, y reviste a dicho ente de la categoría de ente instructor, por lo cual estamos ante un hecho insólito de abrir dos procesos por la misma causa".

"Por otro lado, quiero hacer la salvedad que no soy miembro del Colegio Nacional de Abogados, a donde nunca pedí ingresar y de donde hace tiempo presente mi renuncia".

"Por todo lo expuesto solicito, muy respetuosamente a los Honorables Magistrados que desestimen la petición hecha por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados por ser la misma infundada, ya que no ha habido falta a la ética profesional ni incumplimiento de deberes como apoderado judicial, pues fué (sic) el señor Pedro Nolasco Jaramillo quien incumplió lo convenido".

De esta manera, la Sala al observar tanto la denuncia y las pruebas, como lo aducido por el Licenciado Maximino Mejía Ortega en su escrito de excepciones y de oposición, expresa de manera categórica que coincide con lo miembros del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, en el sentido que tales hechos son veraces y que hacen presumir una violación a las normas éticas que rigen la conducta profesional de todo abogado, y ello se comprueba al aceptar de manera clara el jurista en su hecho primero que pactó un Contrato Verbal que incluía un divorcio por mutuo consentimiento, por lo que desestima el primer reparo hecho por el denunciado.

En cuanto al siguiente reparo, se desprende de su propio escrito que a la letra dice: "... y que si convenía a que le regresara parte de dinero que regresara para la quincena que faltaban pocos días ..." que se encontraba anuente a regresarle parte del dinero que recibió a su cliente, ya que a su criterio consideró que los honorarios percibidos no eran cónsonos con las gestiones realizadas, sin embargo no le regresó efectivamente parte alguna del dinero, por lo que se desestima este cargo.

En relación con el último reparo, esta Colegiatura advierte que el artículo 19 del Capítulo V de la Ley 9 de 18 de abril de 1984 por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía señala en su segundo párrafo que la existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a suspensión de la actuación disciplinaria y el artículo 35 manifiesta que: "dado el carácter disciplinario

de estas normas, La Corte Suprema de Justicia está dotada de amplia discrecionalidad para imponer la sanción que corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y modalidad de la falta, los antecedentes personales y profesionales del infractor, **sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar** (las negrillas son nuestras). Resulta palmario entonces, para esta Superioridad, señalar que el ser o no miembro del Colegio Nacional de Abogados, es una consideración irrelevante en virtud que las sanciones éticas que se utilizan contra un profesional del derecho por acciones cometidas, se le aplican a los abogados indistintamente si son o no miembros de este Colegio, ya que somos todos los profesionales de esta rama los que nos encontramos sujetos a ciertas normas de conducta ética y de responsabilidad por el sólo hecho de ser abogados.

También aprecia la Sala que, a fojas 90 del expediente aparece un documento que se interpreta como elemento de mejor proveer, y que guarda relación directa con el tema tratado en esta ocasión, y es lo relativo al informe de las denuncias presentadas en contra del licenciado Maximino Mejía, y en el mismo se hace constar que al mencionado jurista se le han presentado en el Tribunal de Honor hasta el momento nueve (9) procesos que versan sobre esta materia y en los cuales se encuentran incluidos los casos número 289 y 297 respectivamente que son los que en esta oportunidad nos ha correspondido examinar a lo largo de la presente resolución, lo que se convierten en indicios en su contra evidenciando así, que el denunciado mantiene una conducta realmente irresponsable en el manejo de los negocios jurídicos en los que aparece como apoderado legal, siendo dicha actitud lesiva a los intereses de los clientes que se ponen en sus manos; provocando con justa razón que estos se vean obligados a recurrir ante las autoridades correspondientes para que le subsanen en parte el agravio de que son objeto.

Por lo tanto esta Superioridad, y luego del examen de las distintas piezas procesales que obran en el expediente in comento, considera que hay méritos suficiente para considerar que se pueden haber violentado las normas tipificadas en el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, como lo son los artículo 7 y 34 en algunos de sus acápites de dicho estamento legal que a la letra dicen:

> Artículo 7: El abogado debe ser puntual y **llevar a cabo oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional.** (Las negrillas son nuestras).
>
> Artículo 34: Incurre en falta a la ética el abogado que:
>
> b) Demore maliciosamente la iniciación o prosecución de las gestiones que le fueren encomendados.
> ch) Retenga dineros, bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones realizadas.
> d) Utilice para beneficio personal los dineros aportados por su cliente.
> e) No rinda a su cliente la cuentas de la gestión o manejo de bienes.

Observa la Sala que las normas del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado son claras y de obligatorio cumplimiento para todos los profesionales del derecho sin distingo alguno, de allí que reitere este Alta Magistratura su coincidencia en que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados es el ente idóneo para investigar a todos los juristas que ejercen en nuestro país indistintamente se encuentren agremiados en este ente o en cualquier otro, puesto que es obvio que el denunciado violó las normas citadas.

Señalamos una vez más que nos encontramos frente a un proceso, eminentemente disciplinario por lo que el mismo no excluye acciones legales posteriores que pudieran resultar de la decisión presente negocio.

Vistas las etapas procesales evacuadas en el expediente penal contentivo de la denuncia contra el licenciado Maximino Mejía Ortega y la denuncia por faltas a la ética interpuesta por el señor Pedro Nolasco Jaramillo Samaniego; la

Sala observa suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio del licenciado Maximino Mejía Ortega.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE seguido contra el licenciado Maximino Mejía Ortega por la denuncia interpuesta por el señor Víctor Mc Fernan por Faltas a la Ética y la Responsabilidad Profesional del Abogado, por carecer de méritos y demás argumentos probatorios para el juzgamiento del referido profesional del derecho y DECRETA EL LLAMAMIENTO A JUICIO del licenciado Maximino Mejía Ortega, varón, panameño, mayor de edad, soltero, con cédula de identidad personal N° 4-109-549, nacido el 28 de octubre de 1959, hijo de Bertilo Mejía Santamaría y Évila Ortega, con localización posible en San Francisco, Vía Porras, casa No.45, Teléfono N° 227-0428, por la denuncia interpuesta por el señor Pedro Nolasco Jaramillo por Falta a la Ética y la Responsabilidad Profesional del Abogado y por encontrar esta Superioridad que en efecto ha infringido las normas relativas al Código de Ética y la Responsabilidad del Abogado, así como aquellas que aparecen estatuídas en la Ley 9 de 18 de abril de 1984 y la Ley 8 de 16 de abril de 1993.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR CRISTINA CINIGLIO DE VICENTI CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 201-95 DE FECHA DE 5 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO DE LO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, propuesto por la firma forense Cedeño & Méndez en representación de la licenciada Cristina Ciniglio de Vicenti, contra la decisión contenida en la Resolución N° 201-95 de 5 de octubre de 1995, que resuelve el concurso N° 294-95 (interno) posición (688) para el cargo de Secretario Judicial III del Tribunal Marítimo, Panamá.

Los puntos más relevantes en los que se apoya la apoderada judicial del recurrente, se pueden resumir de la siguiente manera:

> "I. LOS ANTECEDENTES Y MÉRITOS DE NUESTRA REPRESENTADA LA SITÚAN COMO ASPIRANTE PERFECTAMENTE ELEGIBLE PARA EL CARGO DE SECRETARIO JUDICIAL DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ".
>
> "II. NUESTRA REPRESENTADA FUE SOMETIDA A UN SISTEMA DE VALORIZACIÓN DESFAVORABLE A SUS INTERESES".
>
> "III. LA TRAYECTORIA DE NUESTRA REPRESENTADA COMPLEMENTADA POR LA PUNTUACIÓN QUE SE LE HA DEBIDO OTORGAR A CADA UNO DE SUS MÉRITOS PROFESIONALES LA HACEN MERECEDORA DEL CARGO A SECRETARIO JUDICIAL DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ".
>
> Consideramos que la Licenciada Ciniglio por ser una funcionaria que labora desde el 2 de diciembre de 1991 dentro de la institución en la cual se somete el puesto de Secretario Judicial a concurso, puesto que inclusive ha ocupado de manera Ad Honorem e interinamente desde hace más de un año, debe ser considerada entre las personas

seleccionables para este nombramiento.

El puesto de Secretario Judicial del Tribunal Marítimo de Panamá se traduce en un cargo con funciones cuya ejecución requiere de conocimientos específicos en la materia, un adecuado manejo del procedimiento y una intachable reputación en el campo, todo ello con la única finalidad de cumplir con los principios procesales, garantizando la imparcialidad, agilidad en el proceso y el no causar perjuicios a las partes que someten sus controversias a la competencia de este tribunal.

Para nuestra representada es de suma importancia que le sean reconocidos los siguientes puntajes:

1. En el renglón de otros estudios, cursos y seminarios, por los trece (13) cursos en Derecho marítimo: 8.50 puntos

2. En el renglón de otros conocimientos, por leer, escribir y hablar los idiomas inglés e italiano: 6 puntos, en lugar de 0.25 puntos otorgados al certificado del idioma inglés y a la alta de puntuación para la certificación del idioma italiano.

3. En el renglón de entrevista, en lo relativo a personalidad del concursante, por dicción, modales, seguridad y control: 4 puntos.

4. En el renglón de pruebas de ortografía, redacción y razonamiento lógico: 2 puntos.

5. Por certificación de trabajo expedida por la Licenciada Judith Gómez donde consta que la Licenciada Ciniglio laboró como su asistente desde junio 1988 a mayo de 1989: 1 punto.

6. Por certificación de trabajo emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en la parte pertinente a su labor como Asistente del Juez: 3 puntos en vez de 1.75 puntos.

Desconocer más de 380 horas de cursos en Derecho Marítimo, desconocer el dominio de otro idiomas, desconocer las publicaciones y ponencias realizadas, y finalmente, evaluar indebidamente elementos probatorios aportados por nuestra representada, implica la infracción de lo dispuesto en los artículo 2, 3, 5, 22 y 25 del Reglamento de Carrera Judicial, además de que viola el Cuadro de Evaluación contenido en este Reglamento.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos se sirvan revocar la Resolución N° 201-95 de 5 de octubre de 1995 a fin de que se cumpla debidamente el Procedimiento de Convocación y Selección de Personal del Departamento de Personal y Planillas del Órgano Judicial fechado noviembre de 1991, o en su defecto, se reforme la misma a fin de habiéndosele reconocido a nuestra representada los puntajes que le fueron desconocidos, ésta sea declarada ELEGIBLE PARA EL CARGO DE SECRETARIO JUDICIAL DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ".

Una vez transcrita la parte esencial del recurso de reconsideración, esta Sala pasa a conocer el recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Con relación a lo argumentado por el recurrente en el hecho primero del escrito, esta Sala es del criterio que sólo pueden ser valorados los antecedentes y méritos objetivos de cada concursante en el momento que los mismos cumplan con los requisitos mínimos exigidos en los Avisos de Convocatoria y además cualesquiera otros documentos que considere necesarios aportar para aumentar su puntuación. Radica en la voluntad de cada cual, tratar de aportar la mayor cantidad de documentos o pruebas que acrediten su capacidad e idoneidad para el

puesto a desempeñar, es por esto que todas las personas que aspiran a dicho cargo, aún el que lo ocupa, por el tiempo y de la manera que fuere, debe ajustarse y cumplir con lo exigido, por lo que desestima este cargo.

Con relación al segundo reparo manifestado por la recurrente y que guarda relación con el sistema de valoración utilizado por la Comisión de Personal, esta Corporación desea señalar que la misma es autónoma en cuanto al sistema de valoración a utilizar dentro de un concurso determinado. Así las cosas, al revisar el sistema utilizado en esta oportunidad se aprecia diáfanamente que, el escogido en esta ocasión y que es el de promedio, ciertamente fue acertado y correcto en vista que estaban participando un número significativo de concursantes que ameritaba la puesta en práctica de un sistema equitativo y justo como el que efectivamente se usó, por lo que tal aseveración contra los funcionarios del Departamento de la Carrera Judicial, resulta temeraria, y ante la falta de pruebas, la Sala desestima este cargo.

Esta Magistratura ha manifestado en reiteradas ocasiones el criterio que, la valoración subjetiva de los hechos recurridos contraviene los principios de la Carrera Judicial y atenta contra el principio de equidad que debe prevalecer al momento de evaluar a todos los concursantes. Por otra parte, esta Superioridad conceptúa que el Reglamento de Carrera Judicial como elemento de apreciación para la selección de personal es claro al señalar que los estudios de maestría deben acreditarse con los títulos obtenidos. Cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle una puntuación adicional e incluir dichos créditos universitarios como seminarios en virtud que las clases impartidas en la Universidad son asignaturas propias de la maestría que esta cursando y no seminarios propiamente tales; criterio éste que en fallos anteriores esta Sala ha establecido como sano y correcto y que está destinado a lograr la integridad procesal y formal de los concursos de Carrera Judicial, de allí que por razones de instrucción didáctica pasemos a transcribir el extracto de algunos de los resueltos jurisprudenciales emitidos por la Sala, sobre el particular:

"En resolución de 17 de febrero de 1995, en caso del Licenciado Daniel Batista contra la Resolución 07-94 de 27 de octubre de 1994, emitida por la Comisión de Personal del Segundo Distrito Judicial, la Sala expresó:

Por otra parte, esta Sala conceptúa que el Reglamento de Carera Judicial como elemento de apreciación para la selección de personal es claro al señalar que los estudios de post-grado deben acreditarse con los títulos obtenidos.

De esa manera, resulta palmario el hecho que el licenciado Batista Vergara no acreditó dichos estudios con el título obtenido ...

Cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle una puntuación adicional e incluir dichos créditos universitarios como seminarios según sugiere el propio licenciado Batista, a efectos de darle puntos adicionales porque incurriría en atribuciones no asignadas a la Comisión".

"En resolución de 12 de julio de 1995, en caso de la Licenciada Nidia Herrera Batista contra la Resolución 17-95 de 9 de marzo de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primero Distrito Judicial, Ramo Penal, la Sala expresó:

De esta manera, resulta palmario el hecho de que la Licenciada Herrera Guardia no acreditó dichos estudios con el título obtenido por encontrarse aún pendiente del requisito de juramentación, requisito exigido por la Universidad de Costa Rica para otorgar a ésta el título de Especialista en Ciencias Penales (fs.11). Cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle puntuación alguna, en virtud que no aportó el título requerido".

A criterio de la Sala, los cursos de idiomas aportados no sobrepasan el término de tres meses, por lo que resulta un término sumamente breve, por intensivos que sean, para señalar que se domina perfectamente la lectura, oralidad y escritura de cualquier lengua diferente a la natal. Además, en vista de que a la fecha no se han elaborado los instrumentos idóneos de prueba para verificar los conocimientos aducidos, resulta lícito asignarle la puntuación correspondiente a la aspirante, cónsona con la documentación aportada.

Aunado a lo anteriormente manifestado, esta Magistratura desea anotar que la valoración de los concursantes se efectúa sobre la base de hechos objetivos efectivamente documentados.

La valoración subjetiva de la calidad de la personalidad de la aspirante, como ya hemos señalado, sólo es posible una vez que el mismo queda dentro de la lista de los elegibles, porque sólo éstos, por razones lógicas, son sometidos a la entrevista de rigor con la autoridad nominadora.

En cuanto a la certificación que aduce la jurista, visible a foja 23 del cuaderno in comento, esta Alta Corporación de Justicia ha manifestado en innumerables ocasiones que coincide con lo esgrimido por la Dirección de Recursos Humanos en su opinión sobre el caso y que está visible a foja 116 del presente cuadernillo que analizamos, cuando manifiesta que: "no fue evaluada la misma por carecer de dirección donde pueda ser localizada la persona que suscribe la misma.

El Acta N° 05-94 de 2 de junio de 1994 de la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal determinó lo siguiente: Acuerdan los Comisionados que las Cartas de Experiencia Laboral que no estén membretadas por su expedicionario no serán objeto de valoración en los Concursos; salvo el caso que sean acompañadas por los respectivos talonarios de cheques de pago o la ficha de la Caja del Seguro Social; o en su defecto el signatario de la misma debe aportar sus generales, domicilio y su numero telefónico"; ya que de lo contrario sería imposible verificar la veracidad de la misma, lo que desvirtuaría la naturaleza jurídica y administrativa que intrínsecamente contiene la carrera judicial en cada una de las normas que la regulan, tanto a nivel sustantivo como adjetivo y, que además permite a todos los concursantes gozar del principio de uniformidad que debe privar en los concursos y que sólo dependerá indefectiblemente, del grado de preparación académica y demás documentos que los aspirantes aporten para acumular la mayor cantidad de puntos a su favor, por lo que se desestima este cargo.

El Acuerdo N° 12 de 13 de agosto de 1992, regula lo que de manera general, esboza el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial, tal y como lo establece el artículo 8 del citado Acuerdo que a la letra dice:

> "Artículo 8: Para los efectos de la Carrera Judicial, se les computará el **tiempo de servicio en un 50%** de la puntuación asignada por el Reglamento a los jefes de despacho de las instancias y categoría en la que se sirve como auxiliar". (Las negrillas son nuestras).

Se desprende de la excerta legal anterior que a la recurrente no le asiste la razón, puesto que el puntaje asignado es el correcto. Se desestima, pues, este cargo.

Del estudio del expediente en cuestión, la Sala observa que la Comisión de Personal, revisó la Hoja de Evaluación de la concursante y consideró que le asistía la razón al apoderado judicial, en torno al aspecto de otros conocimientos, por lo cual le reconoció 3.0 puntos por cada uno de los idiomas, dando un total de 6.0 puntos que fueron agregados al puntaje inicial que había obtenido.

Esta Sala observa que no existen otros elementos pruebas, reparos o argumentos dentro del presente recurso que determinen que el puntaje no fue otorgado correctamente, de acuerdo con los reglamentos vigentes sobre la materia y avala la modificación esgrimida por la Comisión de Personal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 01-96 de 2 de enero de 1996 emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, la cual decidió la lista de los elegibles y no elegibles para el concurso N° 294-95 (interno) posición (688) de SECRETARIO JUDICIAL III DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, PANAMÁ, mediante la cual se modifica la Resolución N° 201-95 de 5 de octubre de 1995 y se le otorga un total de 32.62 puntos, por lo cual se mantiene a la licenciada Cristina Ciniglio en la lista de los no seleccionables y ORDENA, una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se cumplan los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE NEGOCIOS GENERALES

ACUERDO N° 51
DE 14 DE FEBRERO DE 1996

En la ciudad de Panamá, a los catorce (14) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), se reunieron en sala de acuerdo los Honorables Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, con la asistencia del Secretario General.

Abierto el acto, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Arturo Hoyos, hizo uso de la palabra para manifestar que el motivo de la reunión era considerar la necesidad de delegar ciertas funciones administrativas en funcionarios de menor jerarquía a la de su investidura de Representante Legal del Órgano Judicial.

Toda vez que con el crecimiento que la institución ha venido operando en los últimos años, ha traído como consecuencia la saturación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia en labores administrativas de mucho volumen y mero trámite como lo es la de presidir los actos de selección de contratistas de los actos públicos de Solicitud de Precios, Concurso y Licitación Pública que lleve a cabo el Órgano Judicial, para la adquisición de bienes; como la de nombrar los integrantes de las comisiones técnicas de evaluación de propuestas.

Que la delegación que se propone es con el fin de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pueda dedicar sus mejores esfuerzos a objetivos y labores de mayor trascendencia dentro de la Administración de Justicia y de esta manera hacerla más eficiente.

Sometida a consideración y discutida la propuesta presentada, la misma recibió el voto unánime de los Magistrados de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia:

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar formalmente al licenciado ANTONIO OROZCO, para que en su calidad de Secretario Administrativo del Órgano Judicial, presida todas los actos administrativos de Contratación Pública y nombre a los integrantes de las comisiones técnicas de evaluación de propuestas, asignadas por Ley al Representante Legal del Órgano Judicial, cargo que recae en el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

SEGUNDO: Este acuerdo entrará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y el Registro Judicial.

Y no habiendo más nada que tratar, se dio por terminando el presente acto.

(fdo.) DR. ARTURO HOYOS
Presidente de la Corte Suprema de Justicia

(fdo.) MAG. RAFAEL GONZÁLEZ
Presidente de la Sala Primera de lo Civil

(fdo.) MAG. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
Presidente de la Sala Segunda de lo Penal

(fdo.) DR. CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General